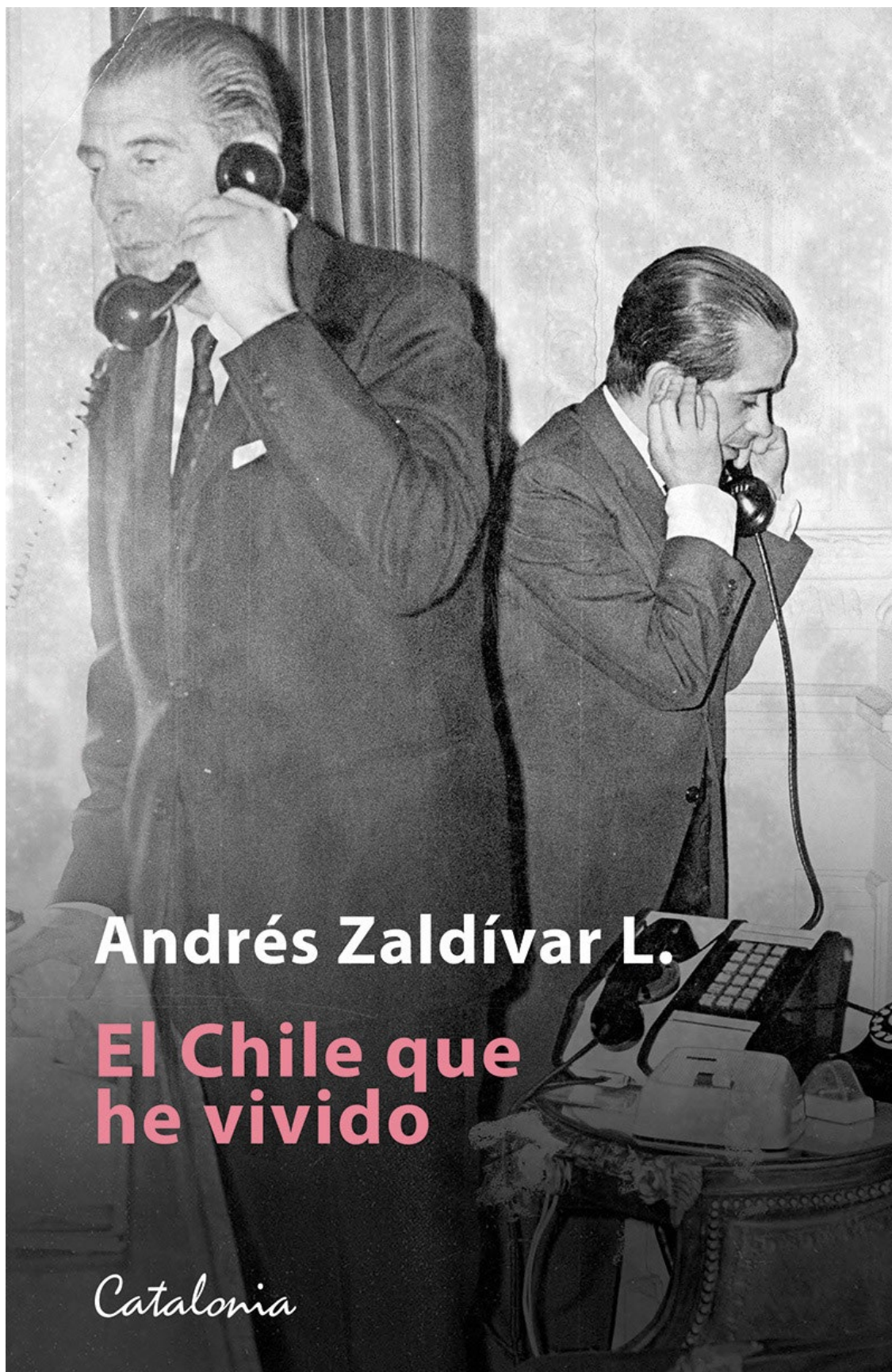


Andrés Zaldívar L.

**El Chile que
he vivido**

Catalonia



Andrés Zaldívar L.

**El Chile que
he vivido**

Catalonia

EL CHILE QUE HE VIVIDO

ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN

EL CHILE QUE HE VIVIDO

Catalonia

Z

ALDÍVAR

L

ARRAÍN

, A

NDRÉS

El Chile que he vivido

Santiago de Chile: Catalonia, 2022

472 pp. 15 x 23 cm

ISBN: 978-956-324-994-1

ISBN digital: 978-956-324-995-8

Autobiografía

CH 920

Diseño de portada: Amalia Ruiz Jeria

Imagen de portada: Gentileza Archivo Histórico / Cedoc Copesa

Corrección de textos: Hugo Rojas Miño

Composición: Salgó Ltda.

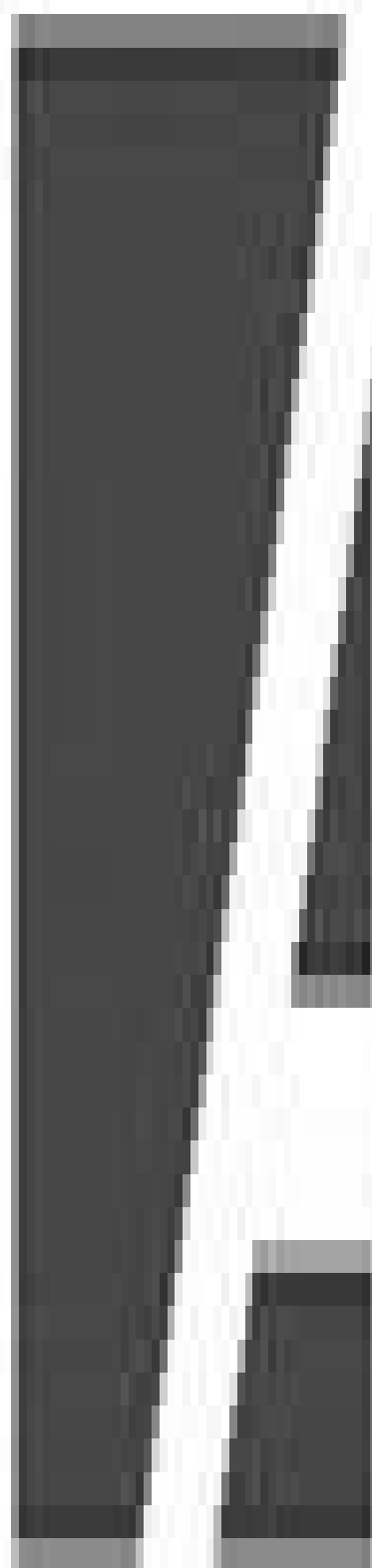
Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com

info@ebookspatagonia.com

Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco

Editorial Catalonia apoya la protección del derecho de autor y el copyright, ya que estimulan la creación y la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, y son una manifestación de la libertad de expresión. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar el derecho de autor y copyright, al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo ayuda a los autores y permite que se continúen publicando los libros de su interés. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información. Si necesita hacerlo, tome contacto con Editorial Catalonia o con SADEL (Sociedad de Derechos de las Letras de Chile, <http://www.sadel.cl>).



KONRAD

ADENAUER

STIFTUNG

ISBN: 978-956-324-994-1

ISBN digital: 978-956-324-995-8

RPI: trámite hpqsm3 (7/11/2022)

© Andrés Zaldívar L., 2022

© Catalonia Ltda., 2022

Santa Isabel 1235, Providencia

Santiago de Chile

www.catalonia.cl - [@catalonialibros](https://twitter.com/catalonialibros)

***A Inés; a mis hijas, Paula, Francisca, Patricia y Claudia; a mi hijo, Andrés,
quien siempre nos acompaña; a mis padres, nietos y bisnietos... Un árbol
frondoso, lleno de frutos, que me ha cobijado con ternura, gratuidad y alegría
a lo largo de la vida.***

Vive como si fueras a morir mañana,
aprende como si fueras a vivir siempre.

Mahatma Gandhi

Índice

PRÓLOGO

I. EL MUNDO EN QUE NACÍ

1. Recuerdos del hogar y la niñez
2. Un futuro ministro de Hacienda
3. Los “hermanos franquistas” y un cierto rebelde
4. El compromiso social, una cosa de familia
5. La casa como sede política
6. Pilares y valores

II. NI COMUNISTAS, NI CAPITALISTAS: LA TERCERA VÍA AL CAMBIO SOCIAL

1. La Guerra Fría y sus tentáculos
2. El fraccionamiento del Partido Conservador
3. La vida universitaria
4. Ni de izquierda ni de derecha
5. Un “bicho raro” a ojos de la élite
6. Amor a segunda vista

7. La tierra: Vivencias y percepciones del mundo rural de los 50

8. Los “curas rojos”

9. Dos dirigentes extravagantes en Estados Unidos

10. De semillas y frutos: El nacimiento de la Democracia Cristiana

11. La propuesta democratacristiana chilena

III. LA REVOLUCIÓN INCONCLUSA

1. Abriendo caminos

2. Manos a la obra: La elaboración de un programa de gobierno reformador

3. La Marcha de la Patria Joven: Un buen pronóstico

4. Un triunfo aplastante y una invitación difícil de rechazar

5. Un joven subsecretario

6. Los tres ejes: El cobre, la tierra y la participación ciudadana

7. Un Presidente con visión de futuro

8. Inflación, la madre de las batallas

9. Un ministro con puño de hierro

10. Un año al límite

11. El Tacnazo, un mal augurio

IV. UNA TRANSICIÓN A CONTRAPELO

1. Otra vez los tres tercios

2. El pánico financiero desatado

3. Una jugada “chueca”

4. Las tres tesis en la Democracia Cristiana

5. Al acecho: Conspiradores, golpistas y otras maquinaciones

6. Una salida en andas

V. UN GOBIERNO ENTRE DOS ALMAS

1. De una promesa democrática a la vía de los hechos

2. “¿Y por qué no Zaldívar?”: La carrera senatorial por Chiloé, Aysén y Magallanes

3. Punto sin retorno: El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic

4. Una inoportuna visita: Fidel Castro en Chile

5. Alianzas impredecibles

6. “Puerta a puerta”, una nueva forma de hacer campaña

7. Chile polarizado: La radicalización de las posturas

8. La política como rehén de la violencia

9. Un informe descarnado pero necesario

10. Aguas tumultuosas al interior del Ejército

11. La soledad del Presidente

VI. EL GOLPE MILITAR: UN SECRETO A VOCES

1. La última salida: Un plebiscito fallido

2. La cuenta regresiva

3. El Día “D”

4. La democracia hasta el final

5. El dictador desatado

VII. LOS AÑOS MÁS NEGROS DE LA DICTADURA

1. Un período de definiciones para la DC

2. Una presidencia semiclandestina

3. Una dictadura desalmada: La represión y la violencia de Estado

4. El rol de la Iglesia Católica en defensa de los perseguidos

5. De sicarios y secuaces: Las redes de la dictadura en el extranjero

6. Cómplices no tan pasivos

7. El concepto de democracia autoritaria

8. La condena internacional al régimen

9. Radiografía del dictador

10. La desobediencia civil

VIII. EL GRAN FRAUDE: EL PLEBISCITO DE 1980

1. Una campaña imposible

2. Desafiando al dictador: Encuentro masivo en el Teatro Caupolicán

3. Sin novedad en el frente: Un resultado previsto

4. “Antipatriotas, mentirosos y codiciosos”

IX. EL EXILIO

1. Una piedra en el zapato de la dictadura

2. Una oferta imposible de aceptar

3. La impotencia ante una guerra sucia

4. La realidad del exilio

5. Una fundación para recuperar la democracia

6. Un nombramiento inesperado: La presidencia de la Internacional DC

7. Una presidencia peregrina

8. La muerte de un padre político

9. Un amigo en el Vaticano

10. Una visita condicionada

11. A punto de perder la esperanza

12. Una nueva estrategia de lucha: Tendiendo puentes entre la DC y la izquierda chilena

X. “Y VA A CAER...”: REFLEXIONES DE UNA LUCHA INCESANTE

1. El desplome

2. Cómo se gestó la contraofensiva sindical

- [3. Regreso a la patria: El fin del exilio](#)
- [4. Homenaje a un gandhiano entrañable](#)
- [5. Corazones valientes](#)
- [6. Viviendo con el enemigo](#)
- [7. Los amigos de Chile](#)
- [8. Como la gota que golpea la piedra](#)

[XI. LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL](#)

- [1. Juntas y revueltas: Elecciones libres y la Campaña por el NO](#)
- [2. Adiós al miedo](#)
- [3. Nervios de último minuto](#)
- [4. El triunfo del NO: La primavera llega a Chile](#)
- [5. El poder de un lápiz y un papel](#)
- [6. El germen de la Concertación](#)

[XII. UN CHILE NUEVO](#)

- [1. Negociando por la unidad](#)
- [2. Mensajes cruzados](#)
- [3. Una candidatura con paso firme](#)
- [4. Una reñida elección: Los reveses del binominal](#)
- [5. Pinochet, la espada de Damocles](#)

6. Nuestras cruzadas: Los derechos humanos y el modelo económico

7. El mérito de la transición

8. La necesaria continuidad

9. El asesinato de Jaime Guzmán

10. Canibalismo político

XIII. GOBERNANDO CON UN DICTADOR EN EL SENADO

1. La hora de los freístas

2. La partida de Rodrigo: Una pérdida irreparable

3. Por primera vez a la cabeza del Senado

4. La derogación del “11” de septiembre: Las artimañas del senador Pinochet

5. Pinochet detenido en Londres y su regreso “triumfal” a Chile

6. La última escaramuza del dictador y su salida del Senado

7. Otras luchas como presidente del Senado

8. Las primarias de la Concertación: La DC, “el pato de la boda”

XIV. UN NUEVO CICLO POLÍTICO: ESCÁNDALOS, SENSACIONALISMO MEDIÁTICO Y UNA IMPUTACIÓN INJUSTA

1. Los políticos en la mira

2. Caso Lavanderos: Un amigo en el ojo del huracán

3. Reformas constitucionales claves y las zancadillas de la derecha

[4. Las leyes más difíciles](#)

[5. Ley de Pesca: Mi verdad y mi compromiso](#)

[6. “Adiós chico de mi barrio”: El fin de un ciclo en Santiago Poniente](#)

[XV. CAE EL TELÓN: LAS ESQUIRLAS DEL ÚLTIMO GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN](#)

[1. Un ministro del Interior maniatado](#)

[2. La Revolución Pingüina](#)

[3. Mi salida de Interior, el golpe más duro de todos](#)

[4. La muerte de Pinochet](#)

[5. El Transantiago: Una política pública necesaria, pero mal diseñada](#)

[6. Una renuncia que afectó a todo el clan Zaldívar](#)

[7. Un supuesto “veterano” conquista el Maule Norte](#)

[8. La derecha al poder y el fin de una era](#)

[XVI. EL FINAL DE UNA ERA: AMANECER Y OCASO DE LA NUEVA MAYORÍA](#)

[1. Un enroque entre la Alianza y la Concertación](#)

[2. 27F: Del remezón a la unidad](#)

[3. Una Nueva Mayoría](#)

[4. Gobierno nuevo, problemas viejos: La crisis del financiamiento de la política](#)

[5. Otro bombazo: El Caso SQM](#)

- [6. Una acusación infundada: La Fiscalía arremete contra el Senado](#)
- [7. Reformas claves y algunas deudas pendientes](#)
- [8. Ley de Aborto, un difícil debate](#)
- [9. Una enfermedad imprevista](#)
- [10. Falta de voluntad común: El fin de la Nueva Mayoría](#)
- [11. La reconfiguración de las fuerzas políticas de la ex Concertación](#)
- [12. Una causa sin causa](#)
- [13. La salida del Senado: “Voy y vuelvo”](#)
- [14. Consejo de Asignaciones Parlamentarias: En vela por la transparencia y la probidad](#)

[XVII. LA TORMENTA PERFECTA: EL GOBIERNO DE PIÑERA, EL ESTALLIDO Y UNA PANDEMIA GLOBAL](#)

- [1. Un gobierno en picada](#)
- [2. Octubre de 2019: El Estallido Social](#)
- [3. El Parlamento escucha: Un acuerdo por la paz](#)
- [4. Coronavirus: La controvertida pero exitosa estrategia del gobierno](#)
- [5. Un balance negativo](#)

[XVIII. ROMPIENDO EL SILENCIO: MI DEFENSA DE LA CONCERTACIÓN](#)

- [1. “No son 30 pesos, son 30 años”](#)

XIX. LOS EXTREMOS EN BÚSQUEDA DEL CENTRO

1. Presidenciales 2021

2. Un desafío para el Presidente, una tarea para todos

EPÍLOGO

1. Los tres desafíos del próximo Chile

2. El respeto a la voluntad ciudadana

3. Una última confesión

AGRADECIMIENTOS

PRÓLOGO

Ochenta y seis años han pasado desde que Dios me regaló esta vida. Y a lo largo de este tiempo, he sido testigo de cambios y avatares; de mundos que ya no existen y de otros que recién comienzan a emerger; de acontecimientos insólitos y de otros que, a veces, preferiría olvidar; de realidades que, al recordarlas, parecen increíbles, y de creaciones que nos maravillan y de las cuales cuesta convencerse que sean reales. Desde que era niño hasta hoy, cuando ya tengo mi cabeza cana, en un tiempo que juzgo breve, casi como un chasquido, han ocurrido tantos avances y transformaciones como no se dieron en muchas generaciones del pasado. A veces, tengo la impresión de que entre el mundo en que nací y el actual hay abismos insondables; sin embargo, uno ha transitado por estos tiempos y se ha hecho parte del todo, recogiendo lo valioso, desechando lo inservible y cargando con lo que se considera imprescindible y fundamental de heredar. Este ha sido mi camino.

En muchas ocasiones, durante el último tiempo, me preguntaba si valdría la pena poner en letras mis vivencias. Numerosas eran las interrogantes que me planteaba: ¿Es necesario hacer públicas mis experiencias personales, mis alegrías y mis penas, mis éxitos y fracasos, mis posibles aciertos y errores conscientes o no forzados? ¿Será positivo relatar los eventos de la historia de mi patria que me ha tocado vivir como testigo, y también como actor, cómplice o simple observador? ¿Podré confesarme y expresar en público, a través de una narración, quiénes fueron y son las personas que siento me ayudaron a forjarme como persona y a dar sustento a mis convicciones? ¿Le interesará a alguien el relato de las vivencias y experiencias políticas que me tocó vivir, voluntaria o impuestamente? ¿Podría aportar con ello un pequeño grano de arena que sirva a las generaciones futuras para hacer realidad ese sueño de vivir en una sociedad de personas libres, en plenitud de dignidad, respetadas por sus derechos fundamentales y no discriminadas, con igualdad de oportunidades, plena justicia social, paz y fraternidad? ¿O será solo una pretensión personal, una manera de satisfacer mi propio ego?

Como estas, me enfrenté también a muchas otras interrogantes. Lo más simple y

cómodo parecía ser dar vuelta la página y guardar silencio; dejarles a otros la labor de compartir su relato.

La verdad es que, pese a que la mayor parte de mi vida la he desarrollado en el ámbito público, siempre he sido pudoroso y cuidadoso de mi intimidad. Además, nunca tampoco le he dado tanta significación a mi vida como para pretender hacer historia de ella.

Pese a todo, finalmente tomé la decisión más compleja: atreverme a escribir. Y lo hice, esencialmente, para dar fe de lo vivido. Este libro no es una autobiografía o un relato centrado en mi persona. Lo que me mueve es contar lo que he visto y vivido en estos 86 años, lo peleado, lo logrado y lo perdido... Es la historia de mi tiempo y de mi generación. Muchos ya no están, pero su memoria se hará vívida en estas páginas. El hilo conductor de este relato está marcado por mi propia percepción de los hechos, por las experiencias vivenciadas y por la interpretación que de ellas realizo. Evidentemente, ello implica, por más que tratara de evitarlo, cierta o bastante carga de subjetividad. No obstante, esta es mi verdad, y he puesto todo mi empeño en expresarme de la forma más veraz y objetiva.

A lo largo de mi vida he estado arriba y abajo, he sido reconocido y marginado, homenajeados y denostados, perseguido y reverenciado, exiliado y retornado. He vivido guerras, revoluciones, dictaduras, opresión y luchas descarnadas por la libertad. He sido testigo del hambre y la opulencia, de la esperanza y el abatimiento, del coraje y la cobardía. Y en medio de todo, siempre se encuentra uno con héroes y canallas, con personas sencillas y de noble alma, así como también con sinvergüenzas y engreídos, con compañeros leales y detractores... La vida es, como bien la describe el tango “Cambalache”, de dulce y agraz. De todo esto he sido testigo y, en ocasiones, también protagonista. Y es lo que ahora comienzo a relatar.

“Recordar” es una palabra que proviene del latín y que significa “volver a pasar por el corazón”. Pues bien, estas páginas son eso: un repaso, un recorrido del camino transitado desde hace ya largos años.

Antes de concluir esta presentación, debo advertir al lector que, con el objetivo de documentar y confrontar algunos hechos, utilicé como fuentes viejos archivos de prensa que guardo entre mis papeles. Muchos de ellos son recortes que omiten algunos datos, tales como fechas o números de páginas. De ahí que estos

no siempre figuren en las notas correspondientes.

Nos encontramos en tiempos decisivos y de profundas transformaciones. Si este relato logra calar e interesar a las futuras generaciones, quiere decir que el afán valió la pena. A ellos está dedicado este libro.

I

EL MUNDO EN QUE NACÍ

1. Recuerdos del hogar y la niñez

Nací el año 1936, en medio de un mundo convulsionado, marcado por aires de guerra y surcado por la emergencia de movimientos nacionalistas que surgían desde una Europa mutilada y desencantada con la democracia y el liberalismo político. Es la década de Gandhi, de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Chiang Kai-Shek y de Mao Tse-Tung. En Alemania, se asentaba el nazismo, y en Italia el fascismo se instalaba como un credo. La Unión Soviética emergía como única experiencia socialista, convirtiéndose en un referente para amplios grupos sociales. El mismo año en que nací estalló la Guerra Civil Española, gestándose posteriormente ese período tan duro para la humanidad como fue la Segunda Guerra Mundial. Sobrevendrían años de “sangre, sudor y lágrimas”, como advertiera Winston Churchill. Un clima de extrema polarización ideológica remecía al planeta.

Chile, en su rincón, no resultaba ajeno a estas tendencias. Diversos movimientos sociales y políticos cuestionaban la conducción oligárquica del país y comenzaba a madurar un nuevo sistema de partidos. Ese año se creó el Frente Popular y la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh). El segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma se encontraba en pleno.

Llegué en medio de toda esa vorágine, un día 18 de marzo, en una casa que mis padres, Alberto Zaldívar Errázuriz y Josefina Larraín Tejada, arrendaban en calle Libertad, en pleno barrio Yungay. Fui el quinto de ocho hermanos, siete hombres (Alberto, Javier, Felipe, yo, Renato, Adolfo y Rodrigo) y una mujer (Josefina, a quien llamábamos cariñosamente “Chepa”). Hoy sobrevivimos solo tres.

Al bullicio de ese hogar numeroso, se sumaban a menudo mis primos maternos, los Achurra Larraín, hijos de mis tíos Julia e Ignacio, doce hermanos que vivían a pocas cuadras de nosotros, y con quien éramos muy amigos. Además, estaban los Larraín Orrego (hijos del tío Pablo Larraín y su mujer, Luz Orrego) y mis tíos Santiago y Manuel Larraín, ambos casados, pero quienes no tuvieron hijos. En ese barrio crecimos y nos criamos, como un verdadero clan, y ahí también nos educamos, pues asistíamos al colegio de los Hermanos Maristas, en Santo Domingo con Maturana.

Mi padre era funcionario de Ferrocarriles del Estado. No tenía un gran puesto; se desempeñaba en temas contables y como pagador. Salía a fines de cada mes, en un tren que recorría la vía hasta Puerto Montt, pagando los sueldos de los trabajadores. Se jubiló temprano, a los 38 años, producto de una grave enfermedad pulmonar que lo aquejaba. En un esfuerzo por aliviar su malestar, y para que “tomara buenos aires”, la familia entera se trasladó una temporada a Río Blanco, un lugar ubicado en Los Andes, hacia la cordillera.

Tras recuperarse, mi padre decidió incursionar en el rubro del corretaje de propiedades de manera independiente. Trabajaba muchísimo, incansablemente. Comenzó como administrador y luego adquirió algunas propiedades, lo que le permitió generar los ingresos necesarios para darnos una vida estable, siempre dentro de mucha austeridad. Fue un padre ejemplar. Y mi madre fue su gran compañera. Nos entregó, en demasía, dedicación a todos. Lo que faltaba en términos materiales, ella lo reemplazaba con cariño e ingenio. Se entregó con ahínco a la casa, muy a tono con lo que predominaba en esos tiempos.

Vivíamos como una familia de clase media, sin grandes gastos. Los hermanos dormíamos de a dos o tres por pieza. En ese tiempo no había calefacción. Nos las arreglábamos con un par de salamandras. Mi padre, que era friolento, a veces dormía la siesta hasta con el abrigo puesto. Allí, en torno al fuego, durante los inviernos nos reuníamos todos a compartir: los niños estudiando o haciendo las tareas, y los adultos, muchas veces, conversando sobre la contingencia del país.

Con ocho hijos, los lujos eran algo impensable. Nunca fuimos a una tienda a comprarnos ropa. Había una costurera, la señora Victoria, que nos fabricaba camisas, chaquetas y pantalones, y las sábanas se hacían con sacos de harina bien lavados. Una vez al año, casi siempre para Fiestas Patrias, nos llevaban a la fábrica Vestex, ubicada al otro lado del río Mapocho, al costado del cerro San Cristóbal, y nos compraban a cada uno un traje, lo que era casi una fiesta. Esa era la única excepción. Todo lo demás, cada prenda, cada pantalón, lo heredábamos de algún hermano o primo. En mi caso, la cosa no era fácil, puesto que por mi estatura la ropa de los demás nunca me quedaba bien. Siempre fui el más bajo de la familia, una cosa extraña, pues, como solía contar mi madre, fui el que más pesó y midió al nacer de entre todos sus hijos. Pese a ello, y por razones que nunca nadie logró dilucidar, me quedé bajo, igual que ella.

Normalmente me preguntan si no tuve problemas a causa de mi estatura. De niño, al menos, esta nunca fue un tema para mí, aunque por supuesto hubiera

preferido tener unos centímetros de más. No pude usar pantalones largos hasta quinto o sexto año de humanidades, ya que entonces existía una tradición en la familia que consistía en que nadie se ponía pantalón largo antes de sobrepasar el metro sesenta. Yo apenas logré llegar a esa medida. Al final me pusieron pantalón largo casi por resignación.

2. Un futuro ministro de Hacienda

Hay cosas de la niñez que a uno se le graban. Son imágenes, aromas, sonidos y sensaciones que la memoria guarda sutilmente y para siempre, de manera entrañable. Mi infancia estuvo plagada de todo eso, del olor al dulce de membrillo que mi madre hacía cada otoño, del ruido del enorme manojito de llaves que mi papá siempre llevaba consigo y que me hacía adivinar su presencia, del olor a leña y la lluvia golpeteando en el techo durante los inviernos, de la calma cuando nos sentábamos a hacer las tareas y de los domingos cuando, después de regresar de misa, nos sentábamos todos juntos a la mesa a disfrutar de una sabrosa cazuela y de los dulces preparados por mi mamá. Nuestro hogar era cálido, sencillo y acogedor. Y eso marcó nuestra infancia.

Cuando tenía siete u ocho años, mi padre compró una casa en la calle Miguel Claro, en Providencia. Así, de un día para otro, dejamos el centro. Fue duro, pues tuvimos que alejarnos de nuestro barrio y de nuestros primos. Por suerte, nuestros padres decidieron no cambiarnos de colegio. Todas las mañanas hacíamos el viaje en tranvía, en el carro 25, desde Providencia a Brasil, lo que nos permitió seguir en contacto con un mundo que amábamos y en el entorno en que nos habíamos criado.

El cambio de casa marcó todo un hito: pasamos a vivir, como se decía entonces, “de Plaza Italia para arriba”. Con ello, mis padres dejaron de ser arrendatarios y se convirtieron, por primera vez, en dueños de su propio hogar.

La casa de Miguel Claro era más cómoda, pero nuestra vida siguió siendo frugal. Mi madre tenía un gallinero que nos abastecía de huevos y carne, y cada cierto tiempo me pedía, al igual que a mis hermanos, que la acompañáramos en triciclo al Parque Japonés —hoy Parque Balmaceda—, a buscar el pasto que allí cortaban para dárselo a las gallinas.

Algo muy característico de nuestro hogar era que siempre nos sentábamos todos juntos a la mesa. Mis padres no eran de salir mucho o de ir a restaurantes, por lo que se daba una íntima y rica convivencia familiar. A esto se sumaban las frecuentes reuniones con primos y tíos. Sagradamente, cada mes,

acostumbrábamos celebrar los santos de nuestras tías, tíos y padres. Eran fiestas sencillas, pero colmadas de alegría.

Una cosa que siempre le agradecí a mi papá fue su esfuerzo para que, durante las vacaciones, pudiésemos ir a veranear todos juntos. Cada año se las arreglaba para arrendar unas enormes casonas en Viña del Mar, donde nos trasladábamos con camas y petacas, sumándose los tíos con sus respectivas familias. Así pasábamos los dos meses de verano, el clan completo reunido. Éramos 30 o 35 personas, incluidos los amigos que nos dejaban invitar. A falta de camas, algunos dormíamos hasta en los pasillos, pero nadie se complicaba. Siempre había espacio para todos.

Otro lugar que marcó nuestra infancia fue La Paloma, un fundo de 60 hectáreas que compró mi tío Pablo, ubicado en la comuna de Barrancas, al fondo de Resbalón, hoy comuna de Cerro Navia. A poco andar, mi tía Julia y el tío Ignacio adquirieron también una pequeña parcela en las cercanías, a unas diez cuabras, en la calle La Estrella, frente a lo que hoy es el policlínico de Cerro Navia. Allí, la tía, que era una mujer de mucho esfuerzo, comenzó a explotar la uva de unos viejos parronales y a hacer mermeladas, y con eso pagaba la educación de sus hijos. A menudo nos invitaban a pasar temporadas con ellos: todos los fines de semana largos y la Semana Santa, las vacaciones de invierno, y hasta el feriado del 18 de septiembre. En ese lugar nos refugiábamos, sumergidos en un divertido entorno que nos hacía sentir protegidos y acompañados. Teníamos hasta un club de fútbol bautizado “La Estrella” y jugábamos a la pelota con los vecinos de la parcela. Era una vida simple y muy especial.

El gran panorama de esos años era ir al cine. En el barrio Brasil, había varios: el Alcázar, el Novedades y el Teatro Brasil, y en Miguel Claro teníamos, a pocas cuabras, el Providencia y el Marconi, hoy conocido como el Nescafé de las Artes. Daban tres películas de corrido, así que uno trataba de meterse y quedarse a ver el ciclo completo. Las favoritas eran las de Chaplin, Cantinflas, los musicales y las infaltables películas de cowboys.

Siempre fui un buen lector. Me apasionaban los libros y, en especial, las novelas de autores nacionales. Me leí todos los clásicos de Blest Gana: Martín Rivas, El loco estero, El ideal de un calavera, Durante la reconquista... También Hijo de ladrón, de Manuel Rojas, y todos los tomos de Adiós al séptimo de línea. La mayoría los sacaba de la biblioteca del colegio, pero también leía libros que encontraba en la casa, como Tesoros de la juventud; Desde lejanas tierras —una

colección relacionada con misioneros de la China— y las obras de Pearl Buck, Emilio Salgari, Julio Verne y Jack London. Ya más grande, me atraía mucho la literatura de autores españoles: El Lazarillo de Tormes; Don Quijote de la Mancha, de Cervantes; Calderón de La Barca; Lope de Vega, y tantos otros. Y, por supuesto, todas las semanas me leía El Peneca, una revista para niños de la Editorial Zig-Zag a la que estábamos suscritos, y por la que nos peleábamos con mis hermanos.

En el colegio, me tocó también leer mucho en francés, porque aquel era un idioma muy importante en esa época, mucho más que el inglés. Leí mucha literatura francesa; autores como Molière, Balzac, Flaubert y Zola. Me deleité con libros como Los miserables, de Víctor Hugo, así como las extraordinarias novelas de Alejandro Dumas, como Los tres mosqueteros, El conde de Montecristo y Veinte años después, que luego releería varias veces durante mi vida.

Además, en nuestra casa se escuchaba bastante radio. Teníamos un par de aparatos, uno en el velador de mi papá y otro en el hall. Ahí, en las tardes, nos sentábamos a escuchar las comedias, que eran como las teleseries de hoy en día.

Era bueno para el fútbol. Formaba parte de un equipo del colegio y jugábamos también con nuestros vecinos del frente, los Lizana, hijos de una familia numerosa y bastante acomodada, mucho más que nosotros. El padre era dueño de una fábrica de bebidas, lo que era una cosa increíble, porque en ese entonces apenas se conocía la Coca-Cola. Los hijos nos invitaban a la casa, y tú entrabas y veías por todas partes estos cajones llenos de botellas. Para nosotros era un espectáculo, porque en nuestra casa no teníamos costumbre ni tampoco dinero para consumirlas con frecuencia; se tomaba agua o, a lo sumo, los sorbetes que preparaba mi propia mamá. Mi amigo Pedro Lizana, quien posteriormente llegaría a ser presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, recordaría con los años cómo intercambiábamos el dulce de membrillo que mi madre cocinaba por un par de bebidas. Esa era la vida de barrio, una en que la amistad y la colaboración con los vecinos eran el pan de cada día.

Así me fui formando con bastante ingenio para el manejo de los recursos, los que por lo general eran escasos. Con mis hermanos nos movilizábamos en bus o trolley. Mi papá normalmente me entregaba el dinero asignado a ese ítem para mí y mis hermanos menores, y yo lo administraba. Un día, me enteré de que la empresa de transportes había implementado un sistema de cupones bastante

conveniente, una especie de paquete que incluía tal cantidad de viajes por tal cantidad de pesos. Me pareció una excelente oportunidad. Iba y compraba los cupones, y ahorraba alrededor del 30% del valor original, y lo que sobraba se lo entregaba a mis hermanos menores. Mi papá nunca se quiso dar por enterado y mi mamá, que sabía, solía decirme medio entre risas: “Usted tiene muchas condiciones para ser ministro de Hacienda”.

Incluso hasta para darnos “algunos gustitos” éramos sobrios. Ya más grande, a los 14 o 15 años, con mis primos Achurra empezamos a ir a la nieve a esquiar, lo que era una cosa extravagante en esos tiempos, porque se trataba de un deporte propio de personas que tenían cierto nivel de recursos. Mi tío Ignacio nos prestaba su auto, un Ford 28 sin capota, y así partíamos a Farellones. Yo no tenía equipo, ni nada parecido. La primera vez que subimos, fui de pantalón corto. ¡Recuerdo el frío y cómo me tiritaban de dolor las rodillas! Al regreso, un poco complicado, le conté a mi mamá. “Puchas, Andrés. Tu papá tiene unos pantalones azules que no usa. ¿Por qué no le pedimos a la señora Victoria que te los arregle?”, me contestó. Dicho y hecho. En una tarde, la costurera agarró el pantalón, lo angostó, le puso elásticos abajo y un cierre éclair, y santo remedio.

El siguiente paso fue conseguirme el equipo para esquiar. Me metí a los avisos económicos y vi que vendían unos esquíes usados de madera. Con mucho esfuerzo había logrado ahorrar mil pesos de la época, así que fui a la calle Vicuña Mackenna, donde los vendían, y me los compré.

Muchas veces también subíamos a la nieve en camión, antes de que amaneciera. Había que caminar por Miguel Claro y luego tomar un tranvía hasta la iglesia de San Ignacio, donde aprovechábamos de asistir a misa antes de ascender. A esa hora, tipo cuatro o cinco de la mañana, se producía un espectáculo increíble, pues ahí, en las bancas de la iglesia, confluíamos dos grupos: los jóvenes esquiadores y la gente mayor que venía de celebraciones y bailes, y que aprovechaba de ir a misa antes de irse a acostar. De ahí partíamos rumbo a la montaña a bordo del camión.

Pese a la modestia de nuestro hogar, nuestro entorno social y familiar pertenecía más bien al estrato alto. Por eso, aunque en mi casa imperaba la austeridad, crecimos sabiendo que en otros hogares las cosas eran distintas. Estas diferencias, sin embargo, nunca nos complicaron. Siempre lo asumí como algo natural, tal vez porque transitábamos con frecuencia entre esos dos mundos. Nunca me sentí marginado o excluido. Por el contrario, tuvimos una infancia

plena, en la que lo que primó fue siempre la ternura y el cariño.

3. Los “hermanos franquistas” y un cierto rebelde

Uno de los primeros recuerdos de mi infancia fue el día en que ingresé al Instituto Alonso de Ercilla, colegio regentado por los Hermanos Maristas, en Santo Domingo con Maturana, a pocas cuadras de la Plaza Brasil. Estudié ahí durante 12 años, hasta terminar mi sexto año de humanidades. Era un colegio privado, de muy buen nivel académico, y cuyos profesores, en su mayoría, eran sacerdotes españoles. Los estudiantes, en general, proveníamos de familias numerosas y, a partir del tercer hermano, el colegio ofrecía una rebaja en el valor del arancel, lo que en nuestro caso nos ayudaba muchísimo.

Si bien todos nuestros primos y parientes iban al Colegio San Ignacio de Alonso de Ovalle, nuestros padres tomaron la decisión de educarnos en los Hermanos Maristas, y nunca quisieron cambiarnos de ahí. Creo que acertaron, pues nos permitieron vivir en un ambiente abierto y de amplia integración social. Asistían alumnos de todos los estratos socioeconómicos, pero la mayoría provenía de familias modestas y de la llamada “clase media emergente”. Mis compañeros eran hijos de empleados públicos y de trabajadores, muchos de la Compañía Chilena de Electricidad y del barrio Matucana; otros de pequeños comerciantes o almaceneros, y varios descendientes de inmigrantes españoles, cuyos padres eran ferreteros, panaderos y sastres. Tal era el caso de mi amigo Alex Carreño. Su papá era dueño de un almacén de barrio. Alex, al parecer, se escabullía y le sacaba sus pesos, que después distribuía generosamente entre los compañeros de curso, y que nos alcanzaban para comprar helados y golosinas a un casero a la salida del colegio.

Durante toda mi etapa escolar, al igual que en mi casa, siempre fui el más bajo del curso. Pero debo confesar que esto pasó a ser casi una ventaja en ese entorno, ya que mi apariencia me ayudaba a ganarme el afecto de todos. Esto era especialmente conveniente en período de exámenes, ya que cuando llegaban los examinadores —profesores externos provenientes del sector público—, la comisión me miraba con mucha simpatía a causa de mi altura, mi pantalón corto y mi cara de niño. Esta situación se mantuvo hasta casi mi ingreso a la universidad. Recuerdo, también, que Lucho Gatica —el famoso cantante— era

compañero de mi hermano Felipe y se preocupaba mucho por mí: me llevaba en el tranvía y me invitaba a todos los partidos de básquetbol que jugaban. Yo era como la mascota en todo este tipo de actividades. En eso, ser bajo jugaba a mi favor, ¿así que por qué me iba a molestar?

Aunque siempre fui buen alumno, también era muy rebelde. En esto intentaba imitar a mis hermanos mayores, Alberto, Javier y Felipe, quienes ya comenzaban a tener sus propias opiniones políticas, a partir de las conversaciones que se oían en la mesa familiar. Mucho de lo que ahí se hablaba, por cierto, no calzaba con el discurso de mis profesores. Los Hermanos Maristas eran franquistas acérrimos. Recuerdo que, en el libro de religión, llamado La Historia Sagrada, figuraban dos imágenes: una de un Sagrado Corazón en la portada y en la contratapa, un retrato de Franco, con una leyenda que decía algo así como “martillo del comunismo y defensor de la fe”. Ante ese tipo de cosas, yo me rebelaba. Había un sacerdote en particular que era muy, muy franquista. En sus clases me paraba y reclamaba, y siempre terminaba expulsándome. Me enfrasqué en numerosas discusiones con los profesores, discutíamos en los patios y cuestionaba muchos de sus principios. Esto me costó varios tirones de oreja, además de ganarme cierta reputación de insurgente.

Coincidía más con los Padres Capuchinos, quienes tenían su iglesia a dos cuadras del colegio, y adonde íbamos siempre a misa los domingos y a confesarnos. Estos sacerdotes eran republicanos y antifranquistas, y se sabía que a menudo discutían con los Hermanos Maristas. Incluso un lunes, al llegar al colegio, observé que un hermano tenía un parche en la frente. Uno de los administrativos, un mozo llamado Segundo, me confidenció lo que había sucedido: el fin de semana, los sacerdotes del colegio habían asistido a una comida con los Padres Capuchinos, y tras entablarse una discusión sobre Franco, habían terminado dándose algunos golpes.

Desde niño fui censor de las figuras autoritarias. Las detestaba. Lo llevaba en la piel. Para el viaje de estudios fuimos con mis compañeros en tren a Buenos Aires, y al hotel llegó una comitiva de funcionarios de gobierno a invitarnos a un encuentro en la Casa Rosada, con el entonces Presidente argentino Juan Domingo Perón. A cada uno nos regalaron un paquete de libros de propaganda peronista, lo que nos impactó mucho. Al llegar al evento, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos; había además unos doscientos jóvenes ahí. Perón bajó del podium a saludar, dándonos la mano a los que estábamos en primera fila y, como a cualquier adolescente de 15 años, me impresionó que un gesto tan

cercano como ese viniera de tamaña autoridad. Al año siguiente, en 1953, el mandatario visitó Chile y causó una gran conmoción. A la gente le gustaba. Yo, en cambio, pese a la impresión que me había causado en nuestro primer encuentro, era muy crítico de su figura. Lo encontraba un populista, además de un dictador.

Las discusiones en el colegio empeoraban en las épocas de elecciones nacionales. Se debatía con los seguidores de un bando y de otro. Para las elecciones de 1952, yo era partidario de Pedro Enrique Alfonso, el candidato presidencial del Partido Radical que le gustaba a mi familia. En el entorno en que nos movíamos esto no era visto con buenos ojos; la mayoría apoyaba al liberal Arturo Matte. De seguro algunos apoderados, sobre todo aquellos más reaccionarios, habrán reparado en nuestra preferencia y comentado “¡Estos señores deben ser medio comunistas!”.

Dejando de lado estos temas políticos, debo reconocer y valorar el hecho de que el colegio siempre se esforzó por motivar a los alumnos a participar en actividades de acción social. A mis 14 años, iba todos los domingos a hacer catecismo a una población en Estación Central. En lugar de dormir hasta tarde, cosa que hubiese preferido cualquier adolescente, nos levantábamos temprano y partíamos a enseñarles a niños que tenían menos oportunidades. Uno lo tomaba como un compromiso serio. Para nosotros, la religión no era solo un tema ritual; siempre fue algo que trascendía, un pacto de vida.

4. El compromiso social, una cosa de familia

Uno de los trabajos de mi padre era administrar la población Pedro Lagos, ubicada en Lord Cochrane con Pedro Lagos. Esta fue construida por la institución Sofía Concha, fundada en honor a una hija de Melchor Concha y Toro, gran benefactor de la época que, en un trabajo conjunto con la Beneficencia Católica, levantó esta y otras poblaciones obreras para dar cabida a personas que, hasta entonces, vivían en condiciones deplorables. Eran viviendas modestas, de una pieza y baños comunes. Mi padre iba todos los domingos a cobrar los arriendos que servían para mantener la misma población, y yo lo acompañé en varias oportunidades. Esas visitas impactaron en mis propias inquietudes, pues comencé a familiarizarme y a dimensionar el desafío que implicaban las reformas sociales que propiciaba la Iglesia Católica de ese entonces, frente a las injusticias que golpeaban a los más pobres.

Mis padres se definían a sí mismos como socialcristianos. Sus valores fueron determinantes en mi propia vocación social y política. Mi papá era un hombre tierno, pero también muy estricto a la hora de exigirnos que cumpliéramos con nuestras responsabilidades. No aceptaba que fuéramos descuidados con nuestros estudios, o que actuáramos de manera incorrecta. Era sobrio y modesto, y con ello nos daba el ejemplo. Fue un hombre bueno, de quien me enorgullezco muchísimo, muy ordenado y sin ningún tipo de dobleces. Su propio oficio como administrador implicaba un permanente contacto con trabajadores, carpinteros, albañiles y gasfiteres. Esa gente se la pasaba en mi casa, donde él tenía su oficina. Fui testigo y soy fruto de todo eso. Estas vivencias me calaron; son cosas que a uno lo van formando, modelando, templando.

Mi madre también tenía mucha sensibilidad y un fuerte compromiso con lo social. Aparte de todos sus quehaceres domésticos, trabajaba en el Ropero San Juan de Dios, reuniendo, junto a vecinas del barrio, vestuario para los recién nacidos y familias de menores ingresos. Ella organizaba y lideraba un poco el asunto. Asimismo, durante muchos años fue activa colaboradora y presidenta de las Conferencias San Vicente de Paul, visitando y asistiendo a ancianos y enfermos. Siempre nos pedía que la acompañáramos para las fiestas de Navidad,

y que la ayudáramos a llevar presentes y golosinas a los enfermos en los hospitales y a un asilo de ancianos que ella apadrinaba. Más tarde, cuando fui ministro de Hacienda, incluso me pidió considerar alguna subvención para apoyar esa actividad. Fue lo único que alguna vez llegó a solicitarme.

Mi madre creía fehacientemente en la necesidad de promover un verdadero cambio social en Chile; tanto que, en 1938, apoyó la candidatura del radical Pedro Aguirre Cerda, lo que constituyó todo un escándalo para la época, pues era como apoyar a los marxistas. Ella, por cierto, nunca fue una militante de izquierda. Su principal compromiso era con la Doctrina Social de la Iglesia. Entendía que las transformaciones eran necesarias para alcanzar la equidad.

Estas actitudes de mis padres eran excepcionales en nuestro entorno. No hay que olvidar que, en los años 30, la gente de derecha renegaba de las últimas encíclicas sociales. El Diario Ilustrado, que en ese tiempo era el más conservador, no publicaba nada al respecto. Era un tema tabú.

Mi formación, fundamentalmente, proviene de esa forma de vida estricta y muy sobria, que nos enseñó a ser cuidadosos con las cosas, a esforzarnos por lograr resultados y a tener sensibilidad respecto a lo que les pasaba a los demás. El hecho de que mi mamá nos llevara a los hospitales y que la acompañáramos a la Vega, y el ser testigos de cómo en la casa se cuidaba y aprovechaba hasta el último recurso, sin malgastar ni un peso de más, todo aquello fue esencial. Pero lo más importante fue haber crecido en una casa que siempre estaba abierta, no solo para la familia, sino que para mucha gente que necesitaba ayuda y apoyo. En nuestro hogar fue que aprendimos a ser solidarios y a que nos debíamos a los demás.

Nos enseñaron que lo más relevante era tratar de ser consecuente con los valores en los que uno cree y predica. Mis padres siempre nos decían que en la vida estamos más para servir que para ser servidos. Las Bienaventuranzas del Evangelio eran, según ellos, la pauta de vida que debía guiarnos.

“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos”, nos recordaba nuestra madre.

5. La casa como sede política

El Partido Conservador Social Cristiano (PCSC), al que pertenecían mis padres, había emergido de la división sufrida, a fines de los años 40, al interior del Partido Conservador. Poco más de una década antes, un grupo de dirigentes de la Juventud Conservadora había empezado a distanciarse, formando, en 1938, la Falange Nacional. Estos dos colectivos (el PCSC y la Falange), sumados a la acción de una parte más contestataria de la Iglesia Católica fueron claves en el proceso que derivaría en el nacimiento de la Democracia Cristiana tiempo después. El transcurso de esos eventos estuvo marcado por un permanente debate y diálogo que, al menos en mi entorno familiar más cercano, se hizo sentir con fuerza.

Además de mis padres y hermanos, hubo otras figuras familiares que marcaron decididamente mis ideales políticos y visión respecto a lo que debía ser la sociedad. Una de ellas fue mi tío Pablo Larraín, el hermano mayor de mi madre, socialcristiano de tomo y lomo, quien fue diputado por el Partido Conservador y terminó marginado de este por votar, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, a favor de la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Su voto fue decisivo, y el hecho de apoyar la creación de una entidad estatal que pudiese intervenir en la actividad económica fue interpretado, en el mundo conservador liberal, como un pecado imperdonable.

Mi tío Pablo fue un hombre de avanzada, lo mismo que mi mamá. Fueron personas audaces, de decidida vocación social, quienes empezaron a abrirse a nuevas formas de hacer y proyectar la política.

También estaba mi tío Santiago Larraín, hermano de mi madre, y mi padrino de bautizo. Era un hombre bohemio, culto, simpático y agradable, de muchos amigos, y también de múltiples oficios: escritor, investigador, constructor y comerciante. Le encantaba el casino y jugar a la ruleta. Solía ir al Club Radical a tomarse unas cañas de vino, y almorzaba en el restaurante “La Bahía”, ubicado al costado de la Plaza de Armas de Santiago, donde se reunía la bohemia capitalina. Siempre le tuve mucho afecto y respeto. Aprendí mucho de él y me marcó por su cariño. Como vivió mucho tiempo en nuestra casa, pude conocerlo

a fondo. Era ibañista, una excepción en la familia, pero al igual que todos era un convencido de la necesidad de introducir profundas reformas sociales en el país.

Desde que tengo uso de razón, en nuestro hogar siempre se habló de política. La vida familiar me enseñó a valorar las dinámicas de clan en que nos veíamos envueltos de manera tan natural. Era un ambiente de mucha convivencia, de colaboración en la vida diaria, de compartir lo que se tenía y de disfrutar de buenas conversaciones. Estas se daban no solo en torno a lo cotidiano, sino que también acerca de lo que era de interés público.

A los más jóvenes nos encantaba escuchar a los mayores. Nos quedábamos por horas pegados en las sobremesas, a las que los adultos siempre procuraron integrarnos. Nunca se nos recluyó al patio trasero de la casa, a la cocina o al repostero, sino que siempre, desde niños, estuvimos al centro, comiendo y compartiendo junto a nuestros padres. Eso fue vital, pues nos permitió sensibilizarnos respecto a la realidad y a lo que ocurría no solo en Chile, sino que también en otras partes del mundo. Ahí, en esa mesa, fue cuando oí hablar por primera vez del padre Hurtado. Mi madre y mis hermanos mayores eran cercanos colaboradores. Su presencia y testimonio eran un faro en nuestras tertulias familiares. Escuchaba atento cuando hablaban de su compromiso con los más pobres, con los trabajadores y los sindicatos. Aunque era menor, me sentía parte de toda esa rica experiencia.

Así, escuchando y viendo todo el trabajo que miembros de mi familia hacían inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, me fui empapando, sensibilizando y aprendiendo. Las encíclicas sociales *Rerum novarum* y *Quadragesimo anno* planteaban los grandes temas que nos convocaban. Nuestro compromiso con la llamada “Cuestión social” implicaba comprometerse, en carne y hueso, con los profundos cambios económicos, sociales y culturales que se nos exigía como sociedad y, con ello, tomar una opción por derrotar la pobreza y la injusticia en que vivía parte importante de la gente que nos rodeaba.

Había figuras señeras en ese tiempo, y que a uno lo inspiraban. En el ámbito religioso, el padre Hurtado, por cierto, fue un referente fundamental, así como también el obispo Manuel Larraín, que era primo de mi madre; monseñor Fernando Vives —cuyas ideas fueron fundamentales para la formación de la Falange Nacional— y monseñor Óscar Larson. Pese a que la Iglesia Católica entonces era muy conservadora, había un núcleo de sacerdotes que se proyectaba ya con fuerza a través de su compromiso con la cosa social. En paralelo,

convergía todo un movimiento laico, proveniente de la juventud del Partido Conservador, de mucha potencia y convicción, que comenzó a organizarse, a plantear nuevas alternativas y a movilizar opinión. De ahí venían Eduardo Cruz-Coke, Eduardo Frei Montalva, Jaime Larraín García Moreno, Manuel Antonio Garretón, Rafael Agustín Gumucio, Bernardo Leighton, Jorge Mardones Restat, Ignacio Palma, Tomás Reyes Vicuña, Radomiro Tomic, Pedro Undurraga, Horacio Walker, mi tío Pablo y Carlos Vial Espantoso. Esto solo por nombrar a algunos. Son, en realidad, muchísimos más.

A estos jóvenes y líderes yo los conocía, pues llegaban a menudo a nuestro hogar. Cuando tenía 12 o 14 años, mi papá compró la casa vecina de Miguel Claro, que era más grande y cómoda, la que más tarde, en los años 50, llegó a ser casi una secretaría política. Ahí se reunían, cada cierto tiempo, dirigentes y gente del mundo conservador socialcristiano. Tuvimos un contacto estrecho con todos ellos. De hecho, uno de mis hermanos, Javier, fue secretario de don Horacio Walker. Mis padres eran muy amigos de Bernardo Leighton. Él siempre se acordaba de que fue mi papá quien lo apoyó y motivó para que postulara y, finalmente, asumiera como presidente de la Juventud Conservadora, la misma que en 1935 dio origen a la Falange Nacional.

El quiebre que sufrió el Partido Conservador, a fines de los años 40, se hizo sentir con fuerza en mi casa. Y se optó. Mis padres y hermanos mayores se definieron por un claro rompimiento con el mundo conservador tradicionalista, comprometiéndose con firmeza con el socialcristianismo, representado por el accionar del Partido Conservador Socialcristiano. Mi hermano Javier, fue el único que optó por militar en la Falange Nacional.

A poco andar, este involucramiento en lo público llevó a los adultos en mi familia a asumir como activos dirigentes políticos en nuestra comuna, Providencia. Para unas elecciones de alcaldes y regidores a fines de los años 40, mi hermano mayor, Alberto, fue candidato. Posteriormente, al fundarse el Partido Demócrata Cristiano, mi tío Pablo asumió como vicepresidente de esa directiva y mi mamá fue la primera mujer consejera nacional de la misma. Por mi parte, en mis últimos años de colegio, me integré a la Juventud Socialcristiana y participé como dirigente estudiantil.

6. Pilares y valores

Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que el curso de mi vida estaba sellado desde un principio: era imposible escapar a la influencia de ese entorno familiar, en el que la política era algo medular. Creo que mi madre lo supo desde siempre. Hace un tiempo, hojeando prensa, encontré una entrevista en la que ella afirma: “De niño cooperaba conmigo y mi marido en el Partido Conservador Social Cristiano. Andrés tenía una gran inquietud por el servicio público desde niño, porque le llegaba mucho esa frase del padre Hurtado que aconseja hacer ‘lo que haría Cristo en mi lugar’”¹.

Como toda mamá, probablemente tuvo una visión bastante virtuosa respecto de mi persona, pero creo que sus palabras rescatan, en efecto, una faceta de mi personalidad. A lo largo de mi vida he intentado regirme por esos principios. Sé que he cometido errores, que no he sido perfecto, pero ciertamente mi vocación de servicio la adquirí desde muy joven. Es como si hubiese estado en mi ADN. Mi compromiso con lo social y el significado de la política los llevo muy adentro, desde que tengo razón.

Hubo mucha gente que se cruzó en mi camino y que me motivó en esto. Todos tenemos en nuestras vidas personas que nos marcan, modelan y señalan ciertos rumbos. En mi caso, ese papel lo cumplieron mi familia, mi entorno y la formación que recibí del colegio y de la propia Iglesia. Buena parte de lo que soy, mi inquietud social, mi vocación política y la manera como he enfrentado la vida provienen de ahí.

Si hoy me preguntaran qué es, a mi juicio, lo más esencial de la vida, ante todo rescataría a la familia como espacio clave de la afectividad, de la formación y del desarrollo integral de toda persona; luego, el asumir los valores humanistas y cristianos en los que uno se ha formado como un compromiso real, y tratar de ser consecuente entre lo que se predica y se practica. En este sentido, la prudencia, la tolerancia y la capacidad de entendimiento me resultan fundamentales. En mi hogar eran valores siempre presentes. También rescato la modestia; no ser tan dependiente del tener, sino que más bien de lo que se es.

Todas estas son normas de vida que aprendí en mi infancia y que, muchas veces, debo confesar, he infringido, pero que son mi formación fundamental. No ha faltado quien me ha dicho que exagero en mi rol de conciliador y en intentar buscar solución a todo. Algunos creen que por eso uno es camaleón, pero están equivocados. Es parte de mi esencia, y no por azar. Fueron esos principios precisamente los que me permitieron asumir y sobrellevar los desafíos que relato en este libro, así como los compromisos en que sigo creyendo.

II

NI COMUNISTAS, NI CAPITALISTAS: LA TERCERA VÍA AL CAMBIO SOCIAL

1. La Guerra Fría y sus tentáculos

Apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, la humanidad fue testigo de la repartición de Alemania y la división de Berlín en cuatro zonas de ocupación. Así, dos bloques comenzaron a enfrentarse. Por una parte, la Unión Soviética intentaría marcar presencia y controlar la Europa del Este, estableciendo regímenes comunistas en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y, más tarde, en la República Democrática Alemana y Albania. En tanto, Estados Unidos, junto con apoyar la recuperación europea, haría lo propio para promover su modelo liberal-capitalista. Un nuevo conflicto mundial de grueso calibre se desataría a partir de esta lucha.

El escenario político mundial de los años 50 y 60 estuvo definido por el conflicto de la Guerra Fría y todo su trasfondo ideológico. Este fue un proceso de larga duración que involucró al mundo entero, polarizándolo progresivamente, a grandes rasgos, en dos facciones: procomunistas y anticomunistas. Mientras los países se alineaban bajo la égida de las superpotencias, nuevos tratados como la OTAN, en 1949, y el Pacto de Varsovia, en 1955, intentaban dar forma a un escenario marcado por la contienda. Se construyó la Cortina de Hierro y el Muro de Berlín —para algunos, el “muro de la vergüenza”; para otros, un “muro de protección antifascista”—, símbolos ignominiosos de la división que se instalaba a nivel global.

El mundo parecía quebrarse en dos, en medio de una fuerte escalada armamentista, la competencia por el dominio de la energía atómica y la amenaza de destrucción mediante armas nucleares. Se inició, además, la carrera espacial, en la que la Unión Soviética y Estados Unidos intentaban demostrar quién tenía más poder conquistando el espacio y llegando a la Luna. El espionaje entre países se instaló como práctica no solo frecuente, sino que además obligada, con dos referentes a la cabeza: la CIA y la KGB.

Las influencias internacionales fueron componente clave de esta competencia: la Unión Soviética empezó a financiar a los partidos comunistas en América Latina, mientras Estados Unidos ofreció su alero a partidos y movimientos nacionalistas antimarxistas, lo que se concretaría, a partir de la década del 60, a

través de la Alianza para el Progreso. En esos años, no era raro que, como dirigente universitario, a uno lo invitaran a congresos y conferencias de ambos lados, con todo pagado.

Este es el cuadro de la Guerra Fría, uno que transformó la vida política de mi generación. En mi caso, definió mis convicciones y hasta el curso que tomaría mi carrera política.

Siempre fui contrario al modelo comunista-marxista, pues consideraba que, al igual que cualquier dictadura, representaba una amenaza a los derechos y a las libertades civiles. De hecho, el socialcristianismo y el humanismo cristiano surgen, en buena medida, como una contrapropuesta a dicho modelo y como alternativa en la búsqueda de cambios sociales fundados en un régimen democrático. De igual forma, a fines de los años 50, desde nuestros orígenes, los democratacristianos chilenos nos declaramos anticapitalistas y, a la vez, contrarios a cualquier modelo de corte marxista.

Pese a estar tan lejos, y a contar con una cordillera de los Andes que parecía protegernos del resto del mundo, Chile no escapó a la polarización y al ardor político propios de la Guerra Fría. La competencia ideológica de las potencias internacionales por conquistar el globo provocó en muchos sectores de la sociedad chilena una actitud crítica y de desconfianza en torno a la propuesta comunista. Existió, casi desde un comienzo, mucho temor al respecto, tanto que algunos afirmaban que los comunistas ¡hasta se comían las guaguas!

Esto quedó en evidencia, por ejemplo, cuando, en 1938, Pedro Aguirre Cerda resultó electo Presidente de la República con respaldo del Frente Popular, una coalición integrada por los partidos Radical, Comunista, Socialista, Democrático y Radical Socialista, alianza similar a la que había ganado el gobierno en Francia a fines de los años 30. Los partidos Conservador y Liberal chilenos vaticinaban, horrorizados, que el país terminaría sumido en un régimen comunista. Pero tras la derrota —por un estrecho margen— del candidato de la derecha, Gustavo Ross, nada de eso sucedió. Se realizaron importantes transformaciones en materia económica, tales como la creación de la Corfo y una expansión notable de la instrucción primaria y la construcción de viviendas populares. De hecho, los gobiernos radicales terminaron dos períodos después, con Gabriel González Videla en una lucha a muerte contra el comunismo y aprobando, en 1948, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, más conocida como la “Ley Maldita”, que proscribía la libre participación política del Partido Comunista (PC), y ahí

nosotros marcamos un punto.

La Falange y los socialcristianos combatieron férreamente esta ley. Personas como Horacio Walker, Eduardo Cruz-Coke, Radomiro Tomic y Eduardo Frei Montalva, entre otros, plantearon la necesidad de derogarla y se opusieron a cualquier forma de persecución de los militantes comunistas. Esta postura se tradujo en una abierta contienda al interior del Partido Conservador. Mientras los tradicionalistas apoyaban la ley y eran partidarios de penalizar el comunismo, los socialcristianos la condenaban a ultranza. Este sería uno de los motivos del quiebre definitivo entre ambas facciones.

Mientras todo esto sucedía, con tan solo 12 años de edad, yo atendía intrigado a las conversaciones en nuestra casa. Por mucho que discreparan con el Partido Comunista, mis padres y hermanos se oponían a la Ley Maldita y a la dura represión ejercida contra los militantes del PC. Otros, en cambio, sí la apoyaban, incluso en nuestro entorno. Eran tiempos extraños, llenos de contradicciones. ¡Si hasta había quienes justificaban a los nazis por el solo hecho de haber sido antisoviéticos!

Como socialcristianos, esa era nuestra gran diferencia con la derecha: mientras esta era partidaria de la represión absoluta del marxismo, incluso a costa de terminar en una dictadura, nosotros creíamos que todos los ciudadanos eran sujetos de los mismos derechos, sea cual fuese su condición política, social o religiosa. No concebíamos la existencia de ciudadanos de primera o segunda categoría.

2. El fraccionamiento del Partido Conservador

Antes de continuar, quisiera detenerme para abordar con mayor profundidad el contexto político en que surge el movimiento socialcristiano y cómo se diferencia este de sus pares al interior del Partido Conservador, pues ello resulta fundamental para entender las fuerzas que lo mueven y que movilizarán, más adelante, también a la Democracia Cristiana.

El Partido Conservador chileno, fundado en 1836, fue una colectividad monolítica hasta mediados del siglo XX, que se identificaba a ultranza con la Iglesia Católica; esta, a su vez, se identificaba con dicho partido. Eran vasos comunicantes, una especie de viceversa. Aquella era, de hecho, la principal diferencia entre el Partido Conservador y el Partido Liberal de la época, el cual también era de derecha, mas no confesional.

En los años 30, un grupo de dirigentes de la Juventud Conservadora comenzó a tomar distancia de la vieja guardia de su propio partido, a la cual veían imbuida en las doctrinas decimonónicas del capitalismo liberal y la defensa de la Iglesia Católica frente a los avances de la secularización del Estado. Los jóvenes se mostraban críticos y cuestionaban este tipo de posturas. Basándose en el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia, hasta ese momento ignorada por los grupos conservadores y por buena parte de la propia Iglesia Católica chilena, empezaron a desarrollar sus propias propuestas. Inspirados en el humanismo cristiano, leían a pensadores como Jacques Maritain, León Bloy, Nicolás Berdiaeff y Emmanuel Mounier. Eran jóvenes audaces, convencidos de la necesidad de promover cambios. Entre ellos figuraban Eduardo Frei Montalva, Manuel Garretón, Bernardo Leighton, Ignacio Palma, Alejandro Silva Bascuñán y Radomiro Tomic. Un nuevo lenguaje comenzaba a abrirse paso en la política chilena, con ideas modernizadoras y conceptos que proponían aires renovados: “bien común”, “justicia social”, “comunitarismo”.

En 1935, este grupo adoptó el nombre de Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora y presentó un programa en el que manifestaban su rechazo a la democracia liberal, al socialismo y al fascismo, proponiendo como alternativa un orden social basado en las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia. Con

esto, las diferencias al interior del conservadurismo se volvieron latentes, profundizándose aún más cuando el partido levantó, en 1938, la candidatura presidencial de Gustavo Ross, entonces ministro de Hacienda del gobierno de Arturo Alessandri. Los jóvenes se resistieron a esta nominación y plantearon alternativas, pero no fueron escuchados y, tras la derrota del partido en las elecciones, resolvieron tomar un camino propio, fundando ese mismo año la Falange Nacional. Creo que ya en ese entonces comenzaban a convencerse de que esta tercera vía, alternativa al comunismo y al capitalismo, era viable y necesaria.

En 1949, se produjo la escisión del Partido Conservador, dividiéndose este en dos facciones: los tradicionalistas —que pasaron a llamarse Partido Conservador Tradicionalista— y los socialcristianos —que se autodenominaron Partido Conservador Socialcristiano—. A este último pertenecía mi familia.

Pero los fraccionamientos no terminarían ahí. Años después, en 1953, los socialcristianos se dividieron entre “rojos” y “azules”. Los últimos se reunificaron con los tradicionalistas para conformar el Partido Conservador Unido, que sobreviviría hasta 1966. Los “rojos” —denominados así por su compromiso con los cambios sociales y por no adherir a un anticomunismo sectario y excluyente— se mantuvieron como Partido Conservador Socialcristiano, aliándose finalmente, en 1957, con la Falange, el Partido Nacional Cristiano y sectores del Partido Agrario Laborista. De esta alianza nacería el Partido Demócrata Cristiano.

Fue así, a grandes rasgos, cómo a fines de la década de los 50 se configuró en Chile un nuevo escenario político: conservadores y liberales ubicados a la derecha; socialistas y comunistas en la izquierda; y, en medio, entre ambos bloques, se ubicaron los socialcristianos, falangistas, agrarios, radicales y otros partidos menores.

3. La vida universitaria

Fui el primero de toda mi familia en entrar a estudiar a la Universidad de Chile. Tenía tan solo 16 años. Salvo mi primo Juan Achurra, todos mis hermanos y parientes asistían —o lo habían hecho en el algún momento— a la Universidad Católica. Esta, obviamente, no fue una decisión al azar. El mundo laico, más abierto y pluralista, siempre me atrajo, y la Universidad Católica me parecía más de lo mismo; casi como volver al colegio y encontrarme con las mismas caras e ideas de siempre.

Antes de salir del colegio, ya me había inscrito como militante en los registros del Partido Conservador Social Cristiano, asistiendo y participando en las asambleas a nivel comunal. Pese a mi corta edad, tenía ya la convicción de que quería no solo impregnarme del debate, sino que también participar. Fue así como, al ingresar a la Facultad de Derecho, junto con incorporarme de lleno a mis estudios, rápidamente comencé a involucrarme en la actividad política. Entre mis compañeros encontré pares y entablé vínculos con dirigentes no solo de la Escuela de Derecho, sino que también de otras facultades, con quienes formamos un grupo socialcristiano universitario. Estos fueron mis inicios como dirigente estudiantil del Partido Conservador Social Cristiano. Poco después, me integré a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y a la Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios de Chile (CNEU), hoy Confech.

En el escenario universitario, los socialcristianos éramos minoría. Este era un contexto en el que predominaba el pensamiento laico. Había gente de derecha con la cual discrepábamos, pero nuestra real competencia era con el mundo radical, el que sin duda era mayoritario. Esa confrontación —mundo católico versus mundo radical— se daba en el plano religioso más que en el ámbito de las reformas sociales a las cuales aspirábamos. Era una competencia que se jugaba, sobre todo, en la nominación a los cargos de poder, no solo en las instancias universitarias, sino que también en instituciones gubernamentales e, incluso, en las Fuerzas Armadas. Indudablemente, había también presencia del mundo socialista y del Partido Comunista, los que por lo general hacían alianza con el

Partido Radical. Quienes representaban el pensamiento humanista cristiano eran estudiantes que militaban en la Falange Nacional, así como nosotros —los socialcristianos— y un mundo independiente que nos acompañaba en las elecciones estudiantiles.

Esta competencia se reflejaba, también, en el proceso de nombramiento de profesores y académicos. Los profesores titulares, por ejemplo, eran votados por sus pares en el consejo de la facultad. Ahí, los miembros apoyaban por lo general a aquellos con los que compartían tendencia política y religiosa.

Por mi parte, a la hora de elegir a mis profesores, siempre opté por aquellos que estimaba óptimos en términos de formación académica, sin considerar aspectos ideológicos. Creo que, en general, así sucedía con la mayoría de los estudiantes. Tuve la suerte de contar con grandes profesores, figuras destacadas del mundo intelectual y político. Entre ellos, recuerdo a Gabriel Amunátegui, en Derecho Constitucional; Máximo Pacheco, en Filosofía del Derecho; Fernando Alessandri, en Derecho Procesal; Alberto Baltra, en Economía; Jaime Eyzaguirre, en Historia del Derecho; Manuel Somarriva, en Derecho Civil; Patricio Aylwin, en Derecho Administrativo; Álvaro Bunster, en Derecho Penal; David Stitchkin, en Derecho Civil Comparado; Raúl Varela, en Derecho Comercial, y muchos otros que omito por razones de extensión. Todos eran grandes académicos y de alto nivel, tanto que a uno le costaba elegir. Con la mayoría continué relacionándome en el tiempo, en términos profesionales y también políticos, pues ejercieron importante influencia y aportes en diversas actividades públicas y privadas del país. Mantuve una relación particularmente estrecha con don Fernando Alessandri, pues formaba parte de su círculo de alumnos cercanos, tanto que prologó mi tesis, recomendándola posteriormente para su publicación en la Editorial Jurídica.

En octubre de 1953, tuvo lugar la toma del Club Fernández Concha, en la que participé. Muchos años antes, el empresario conservador Domingo Fernández Concha había donado el edificio, ubicado en la calle Compañía, frente a las antiguas dependencias del diario El Mercurio, como sede partidaria. En medio de las divisiones que sufría el Partido Conservador, los socialcristianos reclamábamos que la sede nos correspondía, dado que quienes se habían marginado había sido el sector tradicionalista. Además, don Pedro Undurraga, uno de los descendientes directos de Fernández Concha, pertenecía a nuestras filas. El caso terminó en tribunales, pero mientras esto se resolvía judicialmente, un grupo de conservadores tradicionalistas irrumpió y se apoderó del club,

dispuestos a no abandonarlo. Don Horacio Walker y otros dirigentes llegaron hasta la Escuela de Derecho a buscar apoyo. Un grupo de jóvenes decidimos organizarnos para tomarnos el club y recuperar la casona.

Así, envalentonados, nos encaminamos hasta la calle Compañía. Cuando llegamos, era cerca del mediodía. El tráfico se encontraba suspendido, pues estaban pavimentando la calle. Las puertas se encontraban cerradas y, adentro, un grupo de tradicionalistas permanecía atrincherado. Nos hicimos de unos troncos que se estaban utilizando en las obras de pavimentación, mientras don Horacio Walker, parado a nuestro lado, nos arengaba: “¡Adelante, muchachos! ¡Adelante, muchachos!”. Tras varias estocadas, por fin logramos derribar el portón. Entramos y expulsamos a los invasores, tras lo cual nos parapetamos y decidimos permanecer ahí.

Esa noche, el otro bando tenía planeado hacer una comida en el club, para celebrar el ingreso de los conservadores socialcristianos azules que habían decidido reincorporarse al Partido Conservador Tradicionalista. Para ellos era un triunfo, pues nos quitaban parte de nuestros diputados: Sergio Diez y Edmundo Eluchans. Al caer la noche, empezaron a llegar los invitados. Uno de ellos era Fernando Hurtado Ruiz-Tagle, quien años más tarde sería mi cuñado. Entonces se armó la trifulca. Los tradicionalistas lograron abrir las puertas, pero nosotros les hicimos frente, lanzando a varios de ellos a las zanjas en la calle. Fue una batalla campal y la pelea era a ultranza. Por fin logramos cerrar nuevamente los portones y alojamos ahí.

Al amanecer, nos despertamos con los gritos de una tropa de matones y matarifes contratados por el diputado tradicionalista Jaime Egaña Barahona, quien mantenía muchas relaciones con el matadero. Los asaltantes se subieron por los techos, nos sorprendieron durmiendo desprevenidos y nos echaron, casi de un plumazo, a la calle.

El litigio legal fue largo. Aunque al final los tribunales fallaron a nuestro favor, decidimos abandonar la pelea, pues a poco andar se fundó la Democracia Cristiana y nos radicamos en la sede donde operaba el partido falangista, en la Alameda, frente al Cerro Santa Lucía. Hoy, ahí existe una feria, y lo único que queda es una palmera. Pese a haber sido siempre un pacifista, guardo esta anécdota como pequeño pecado.

El paso por la universidad me significó relacionarme con el mundo real, a la vez

que conformó decisivamente mi vocación jurídica. Aprendí a proyectarme profesional y políticamente en el largo plazo. Todo esto fue fundamental dentro de las actividades que desarrollaría a futuro. Y es que mi carrera como político siempre se nutrió mucho de mis conocimientos legales, y mi preparación en materia jurídica me abrió amplios espacios para aportar en el quehacer del país.

Sábados y domingos salía con mis amigos, lo pasaba bien, pero el resto del tiempo me dedicaba a estudiar y a perfeccionarme como dirigente. Buscaba formas de ganarme la vida. En segundo año, me conseguí un trabajo con un tío que era notario, y con eso lograba financiar mis gastos. En tercer año, empecé a ejercer como procurador en el estudio de abogados que tenía mi hermano Alberto junto a Eduardo Silva Pizarro y Sergio Recabarren, ex ministro de Carlos Ibáñez del Campo y diputado del Partido Agrario Laborista, respectivamente. Aprendí muchísimo de esa experiencia. Sentado en un rinconcito, en una oficina de tres por dos metros, que antaño había sido un baño, me especialicé en materia de arrendamientos.

La Facultad de Derecho acostumbraba nominar tres buenos estudiantes al cargo de secretario de ministros de la Corte Suprema. En mi cuarto año, tuve el honor de ser designado para dicha tarea. Me tocó trabajar con los ministros Octavio del Real, Miguel González y Osvaldo Illanes. Fue una experiencia gratificante, que me permitió alternar con los miembros de dicho importante tribunal y apoyar sus labores, además de asistir a alegatos entre los mejores abogados de la época, tales como Arturo Alessandri, Manuel Somarriva, Raúl Varela y Miguel Schweitzer. Ahí se debatían siempre los más importantes casos jurídicos.

Uno que causó bastante revuelo, y que fue tema de portada en los diarios de la época, fue la extradición de seis destacados dirigentes peronistas que, tras la caída de Perón en 1955, fueron apresados en la cárcel transandina de Río Gallegos. Sus nombres eran Jorge Antonio, Héctor Cámpora, John William Cooke, José Espejo, Pedro Gomis y Guillermo Patricio Kelly. En una fuga digna de una película de acción, lograron escapar y llegar a Chile en 1957. Así comenzó el proceso de extradición que el gobierno argentino exigía a gritos, pero la justicia chilena consideró que la detención y juicio habían estado viciados y aceptó su condición de presos políticos, otorgándoles asilo a todos, salvo a Kelly, quien fue considerado un delincuente común. Meses más tarde, en el momento en que la Corte Suprema dictaba sentencia, acogiendo su extradición a Argentina, éste logró fugarse de la Cárcel Pública de Santiago disfrazado de mujer, del brazo de la periodista y poeta uruguaya Blanca Luz Brum. Me tocó

participar en la redacción del fallo propuesto por el ministro Osvaldo Illanes, pues era su secretario. Al imputado nunca más se lo pudo ubicar, pero, por lo que me contó el propio ministro Illanes, este personaje, tras escapar, habría entrado a la fuerza y alojado en su casa de veraneo en Papudo, dejándole “de regalo” un buen mojón en su propia cama. Los comentarios de la época eran que todo ello habría sido posible con la connivencia del gobierno de Ibáñez, lo cual significó posteriormente una acusación constitucional en contra de los ministros de Relaciones Exteriores, Osvaldo Sainte-Marie Soruco, y de Justicia, Arturo Zúñiga Latorre.

El período universitario fue un espacio de gran aprendizaje que me permitió no solo desarrollarme intelectualmente, sino que también abrirme a un mundo diferente al que hasta entonces había conocido y, de paso, reafirmar mis valores, consolidar mi identidad y comenzar a delinear lo que realmente me importaba como proyecto de vida. Fue una etapa que disfruté muchísimo, tanto que, si me preguntaran, diría que esta fue una época a la que me gustaría volver.

4. Ni de izquierda ni de derecha

Una de las cosas que me parecían más atractivas, en ese entonces, era el hecho de poder incidir en hacer cambios reales al interior de nuestra sociedad. Era joven e idealista, y esto me apasionaba decididamente. Sentía que la política era la herramienta precisa y adecuada para ello. Miraba a mi alrededor y no lograba quedarme tranquilo ante muchas cosas que me tocaba presenciar. Había demasiada injusticia, demasiada pobreza y demasiado abuso de parte de quienes tenían el poder, situaciones que, en esa época, para muchos eran “normales”. Otros, en tanto, creían que bastaba simplemente con acciones de caridad de corte paternalista. A mí todo esto me descompensaba.

El padre Hurtado, en aquel tiempo, solía afirmar que la caridad comienza donde termina la justicia: “Hay muchos que están dispuestos a hacer la caridad, pero no se resignan a cumplir con la justicia; están dispuestos a dar limosna, pero no a pagar el salario justo”. Nos animaba a actuar y a no olvidar que el rostro de Cristo estaba entre los pobres y más desvalidos: “No descansen mientras haya un dolor que mitigar, porque el pobre es Cristo, Cristo desnudo, Cristo con hambre, Cristo sucio, Cristo enfermo, Cristo abandonado...”. Nos arengaba a arremangarnos, a arriesgarnos, a trabajar en política con confianza y decisión, sin hacer cálculos. ¡Chile, más que nunca, necesitaba líderes con los pies en el barro! Su mensaje nos calaba hasta los huesos: “Si los políticos no tienen tiempo de ‘estudiar’, de ‘consagrarse a la patria’, que no entren a la política, pues una actuación descuidada significa traicionar a su patria en momentos muy graves”².

Este tipo de mensajes nos comprometía con la necesidad de hacer cambios radicales para sanar esa herida tan profunda que laceraba a nuestra sociedad. La justicia social no podía esperar, era algo urgente. La gente que dormía bajo los puentes del río Mapocho; los niños a pie pelado, sin educación ni oportunidades; las familias en poblaciones callampas, construidas en sitios eriazos, sin urbanización alguna, en viviendas precarias levantadas con desechos, cartones y latas, piso de tierra y techo de fonolitas, que apenas protegían de la lluvia o del sol; el paternalismo y abuso que sufría mucha gente en el campo, en las minas y salitreras. No es que tuviera ínfulas de héroe, pero eran cosas que resonaban

conmigo, que tenían que ver con los valores en que había sido formado, y que me convocaban a asumir, a comprometerme y, en definitiva, a actuar. No podía quedarme de brazos cruzados.

Al mismo tiempo, nos inspiraban líderes de carne y hueso, personas que estaban ahí, en medio de nosotros, a quienes conocíamos y admirábamos. Ahí estaban Eduardo Frei, Horacio Walker, Pedro Undurraga, Bernardo Leighton, Eduardo Cruz-Coke, mi tío Pablo Larraín, y muchos otros. Y, también, Jaime Larraín García Moreno, un hombre que, pese a haber nacido en el seno de la élite, se atrevió a dar los primeros pasos en búsqueda de la justicia social.

Los socialcristianos apostábamos por un proyecto de país encaminado a alcanzar la justicia social, pero que respetara también la libertad y se comprometiera con la democracia sin condiciones. Esta era una alternativa que, a mi juicio, no defendían a cabalidad ni la derecha ni la izquierda chilena, pese a que estas eran los grandes referentes del espectro político.

Eran tiempos en que el mundo era blanco o negro: o estabas con el capitalismo occidental, o estabas con los países al otro lado de la Cortina de Hierro. El Partido Comunista chileno de ese entonces dependía mucho de la Unión Soviética. El Partido Socialista (PS), en cambio, logró mantener su independencia, al menos hasta los años 60. Pese a contar con miembros que adscribían al marxismo, era bastante crítico de los comunistas. Para la revuelta de Hungría en 1956, por ejemplo, cuando los ciudadanos se rebelaron contra las políticas soviéticas que imponía el gobierno, el Partido Comunista chileno apoyó a la Unión Soviética en su represión y aplastamiento a la disidencia húngara. En el mundo socialista, en cambio, emergieron críticas. Lo mismo sucedió con la invasión de Checoslovaquia y Alemania Oriental, o con las purgas y genocidio de Stalin en la propia Unión Soviética.

Pero, después de los 60, el escenario se complicó con las expectativas que trajo el triunfo de Fidel Castro en Cuba. Muchos pensaron que el líder cubano, tras derrocar la dictadura de Batista, instalaría un gobierno democrático. Con su victoria, sus ideas, primero socialistas, y finalmente comunistas, comenzaron a propagarse por el resto de América Latina. El Partido Socialista no tardó en darle su apoyo. Y, entonces, la separación entre socialistas y comunistas se fue desdibujando, haciéndose cada vez más difusa.

No obstante nuestras críticas al marxismo, los socialcristianos éramos también

muy críticos respecto a Estados Unidos. Si bien se trataba de una democracia, mirábamos con malos ojos su intervención en América Latina, particularmente en relación con la explotación de sus riquezas y recursos. Así, nuestra apuesta por la tercera vía nos significaba el desagravio de casi todos los sectores. Nos criticaban y golpeaban duro, sobre todo la izquierda y el Partido Comunista. La derecha tampoco nos aceptaba. En general, nos consideraban “traidores”, “indefinidos”, “amarillos”, “ni chicha ni limonada”, como se dice en jerga popular.

Esta pelea la dábamos en todos los niveles, incluso en la federación de estudiantes en que yo participaba. La derecha atrincherada no quería cambios, la izquierda defendía a ultranza su ideología y justificaba las dictaduras de sus aliados, y nosotros decíamos que no, ni lo uno ni lo otro. Apuntábamos a las reformas sociales y a un modelo que respetara la democracia, los derechos humanos (DD.HH.) y la dignidad de las personas.

5. Un “bicho raro” a ojos de la élite

La polarización del escenario internacional hizo que la derecha chilena se fuera endureciendo progresivamente, incluso adoptando posturas más reaccionarias y crípticas ante quienes defendían un compromiso con el cambio social. Y aunque en la escena local la política vivía avances importantes —tales como una mayor incorporación de la clase media, un incremento de participación en la toma de decisiones, la ampliación del electorado y la obtención del derecho a voto femenino en 1949—, había facciones que continuaban defendiendo estructuras tradicionales, tales como el sistema de latifundios bajo un régimen paternalista, a través del cual creían cumplir también una función social.

Esto se evidenciaba al interior del propio Partido Conservador de la época, el cual se rigidizó en sus posturas, siendo incapaz de adaptarse y hacer lectura de los nuevos tiempos que corrían. Varios no querían cambios. Comenzaron así a producirse fisuras, diferencias, enfoques diversos, incluso al interior de las propias familias. Se establecieron brechas a nivel generacional, y muchos hijos e hijas se atrevieron a defender la necesidad del cambio social, cuestionando la postura de sus padres y abuelos.

Recuerdo un episodio bastante decidor en este sentido. Ocurrió durante un verano en Zapallar. Debo haber tenido unos 16 años. A un médico, cuyo nombre no recuerdo, se le había prohibido entrar al balneario, siendo rechazado básicamente por ser un desconocido y no pertenecer al entorno zapallarino, un ambiente muy cerrado y sectario desde el punto de vista social. El tema terminó en una gran pelea, en la que le cortaron parte de un dedo al doctor.

La noticia llegó a oídos nuestros. Estábamos en la playa Cochoa, en Viña del Mar, donde nos reuníamos habitualmente con nuestros amigos, varios de ellos provenientes de familias de derecha. El hecho nos impactó, lo conversamos, y llegamos al consenso de que este tipo de situaciones eran inaceptables. Decidimos ir a Zapallar a manifestarnos. Dos días después, partimos hombres y mujeres, todos cabros de 16 o 17 años, en unos ocho o diez autos orquestados en caravana. En el camino paramos a comprar una damajuana de vino, una sandía y empanadas.

Al llegar a Zapallar, bajamos a la playa y nos instalamos en medio de toda esa aristocracia zapallarina, gente que por cierto conocíamos bastante bien. Confundidos, nos vieron entrar. Al principio, no deben haber entendido nada, pues sabían quiénes éramos: la hija de fulano por aquí, el hijo de fulanito por allá. Nos observaron llegar con este chuico de vino, partir la sandía y sentarnos a comer las empanadas, en una cosa más bien simbólica y representativa de una apertura a lo popular, y rápidamente se pusieron de pie y empezaron a retirarse. ¡Nos quedamos prácticamente solos! No hubo ninguna agresión, ninguna palabra, pero la actitud de ellos era una muestra de lo que en ese momento se vivía en el país: una total falta de integración social.

La sociedad chilena de ese entonces era brutalmente conservadora y discriminadora, en especial la oligarquía, que no admitía entre sus filas a nadie que se saliera del canon, que no compartiera sus códigos y que no fuese de su mismo círculo social. Había expresiones increíbles. La élite clasificaba a las personas de acuerdo a aquellas “que tenían apellido” y a las que no. A esto se sumaba, además, un racismo recalcitrante.

Al respecto, me viene a la memoria una situación en que esto quedó claramente reflejado. Fue un baile de etiqueta, realizado para la presentación en sociedad de Mónica Comandari. Yo tenía 18 años y, al igual que muchos jóvenes, fui invitado a esa recepción. Era una fiesta muy elegante. En medio del festejo, de pronto, un grupo empezó a provocar destrozos. Fue algo brutal. ¿La razón? En el fondo, era una expresión de rechazo de algunos miembros de la élite frente a lo que Mónica y su familia representaban: la colectividad palestina en Chile. Se sentían superiores a ellos, con derecho a abusar de la hospitalidad que se les había brindado. Todo terminó en un desastre. Fue una experiencia impactante y de la que fui muy crítico.

La élite chilena miraba como algo de mal gusto el hecho de que una persona de ascendencia árabe intentase integrarse en sus espacios. Pero los árabes asentados en Chile, gente trabajadora, capaz y emprendedora, comenzarían a abrirse espacio y a levantar con éxito importantes emprendimientos en el ámbito industrial y empresarial y, posteriormente, también en la banca. Su aporte a la economía del país fue fundamental, y el poder económico que alcanzarían generaría una verdadera contradicción entre aquellos que “tenían apellido” y eran dueños de la tierra y los que eran propietarios de las industrias y el comercio.

En alguna de sus crónicas, el periodista Eugenio Lira Massi describe magistralmente estas absurdas prácticas relatando una situación imaginaria, a fines de los 60, en una mesa del Club de la Unión, donde por cierto no se aceptaba el ingreso de personas de ascendencia árabe. Allí estaba sentado un grupo de ilustres ciudadanos almorzando. Uno de ellos, al llamar al mozo para hacerle el pedido, le dice: “Oye, Errázuriz, tráeme también un vino Yarur 5 estrellas”, comentario que reflejaba con ironía cómo estaban cambiando los tiempos. Este fue un complejo proceso sociológico de asimilación, de tira y afloja e integración, que costó. Así se fueron produciendo los primeros matrimonios entre descendientes de inmigrantes y miembros de la élite tradicional, mas siempre en medio de mucha tensión, objeciones y abierta discriminación.

Yo también vivencí situaciones de esta naturaleza, no porque fuese árabe, sino porque era democratacristiano. En mi entorno, me sabía parte de una minoría. Rodeado de mis parientes, por supuesto, me sentía protegido, pero más allá de esas fronteras la situación era otra. Uno se sentía escaneado como un “bicho raro”; como una persona que no correspondía y con la que había que tener cuidado. En una ocasión, empecé a salir con una niña, que me gustaba bastante. Ella pertenecía a una familia de alcurnia, y, aunque le puse mucho empeño, el padre me cerró la puerta en las narices a causa de mis antecedentes políticos.

En muchas partes me tachaban de procomunista, lo mismo que a todos aquellos que estábamos por el cambio social. Estas cosas fueron cambiando con el tiempo, pero dejaron una huella indeleble y, hasta el día de hoy, hay personas de derecha que guardan cierta reticencia hacia el mundo democratacristiano. No olvidemos que a Eduardo Frei Montalva lo llamaban el “Kérensky chileno”, en un guiño a la figura de Aleksánder Kérensky, revolucionario ruso que lideró el movimiento que derrocó el régimen zarista. Decían que Frei le había abierto las puertas al marxismo al implementar la reforma agraria. Nos miraban como los “traidores” y “tontos útiles” de los comunistas. El padre Hurtado, también, era visto como un “cura rojo”, al igual que el obispo Manuel Larraín, don Pancho Vives, más tarde el cardenal Silva Henríquez, y todos quienes fuesen proclives a las reformas sociales.

6. Amor a segunda vista

En medio de este clima tenso y políticamente turbulento, conocí, en 1955, a Inés. Yo estaba en cuarto año de universidad. La primera vez que la vi fue en el Congreso Nacional, un día que acompañé a su hermano, Carlos Hurtado, y con quien éramos amigos desde niños, a una asamblea del Partido Conservador Tradicionalista. Cuando llegamos, la vi ahí, sentada en la mesa de recepción, recibiendo a los delegados. Ella era presidenta de una rama de la Juventud Conservadora de Santiago. La verdad es que no nos prestamos mucha atención, pues cada uno andaba en lo suyo. Pero el destino tenía otros planes.

Tiempo después, Carlos me invitó a La Esperanza, un fundo que tenía su familia en San Clemente, en la región del Maule. Encantado, acepté. Partí a Talca, con una maletita de cartón piedra, como las que se usaban en esos años, y me bajé del tren en la estación de la ciudad, donde se me acercó un señor a preguntarme si yo era Andrés Zaldívar. “Sí, soy yo. ¿Cómo me reconoció?”, le pregunté. “Es que me dijeron que usted era tan bajito como yo”, respondió. En efecto, después me enteraría de que al caballero le decían “el Chico Sepúlveda”.

Partimos en su camioneta hasta un rodeo en Pelarco, en el que Carlos estaba participando. Yo nunca había estado en un rodeo en mi vida. No tenía idea de qué se trataba. Era una tremenda fiesta, un ambiente totalmente nuevo para mí, la gente tomando mucho, comiendo, bailando cueca, incluso había una ruleta. Imperaba un ánimo muy festivo... Hasta que a las dos de la mañana un tipo, de la nada, sacó una pistola y se puso a disparar, y terminamos metidos debajo de unas mesas.

Era hora de partir. “Nos vamos a alojar al fundo de la familia Correa Montt, aquí, en el Astillero de Huencuecho, en Pelarco”, me dijeron. Sin mucha posibilidad de elegir, yo era material dispuesto. Tomaron mi maleta, la tiraron dentro de un camión, entre las patas de los caballos y, por supuesto, hasta ahí no más llegó.

A la mañana siguiente, como a las nueve, nos avisaron que por fin emprenderíamos rumbo a la casa de la familia Hurtado. Pero la cosa no era tan

fácil, pues teníamos que viajar a caballo varios kilómetros, donde nos esperaba una camioneta que nos llevaría al fundo. Yo tenía poca experiencia —por no decir nula— como jinete, así que tuve que arreglármelas como pude. Aún con restos de resaca, me subieron a un caballo con lo que quedaba de mi maleta, y una olla a presión que alguien se había ganado como premio la noche anterior. En el trayecto, haciendo malabarismos para sostener las riendas y mi destartalado equipaje, se me cayó la olla, la pisaron los caballos... ¡La aventura fue un desastre!

Cuando por fin llegamos a La Esperanza, me encontré con una casa antigua llena de gente. Los Hurtado eran una familia grande, aclanada y muy acogedora, y me recibieron con cariño. Ahí me encontré con Inés. Me pareció buenamoza, simpática y muy divertida. El problema era que también estaba alojando con ellos un amigo de Nano, hermano suyo, que era mayor que yo y medio pretendiente de ella. Yo lo conocía desde la universidad, pues era dirigente estudiantil y siempre peleábamos. Sin duda, estaba en desventaja: era más chico, recién llegado y, además, un “bicho raro” en ese ambiente. La única persona a la que conocía en el lugar era mi amigo Carlos. Pero pronto con Inés empezamos a conversar y, de repente, se armó algo, una sintonía especial.

Fue una estadía que jamás olvidaré. No solo por el hecho de que conocí a quien sería después mi señora, sino porque además estaba en medio de una familia muy parecida a la mía. El clan Hurtado Ruiz-Tagle estaba integrado por nueve hermanos y sus padres, la señora Jesús y don Fernando, o “don Feña”, como le decíamos todos. Este último era diputado por Talca. Se trataba de gente simpática, asequible, cariñosa y muy hospitalaria. La casa de Inés en Santiago, así como el fundo en La Esperanza, eran sedes de encuentro de todos los dirigentes del Partido Conservador Tradicionalista y también del Liberal; al revés de la mía, donde llegaban miembros del Partido Social Cristiano y de la Falange. Sin embargo, desde un principio me sentí acogido, y hasta el día de hoy solo guardo gratitud y un inmenso cariño hacia cada uno de ellos. Puede que tuvieran una situación más acomodada que mi familia, y que en algunas cosas pensáramos diferente, pero eso no era lo más importante. Con ellos me sentía como en mi propio hogar.

Lamentablemente, después de una semana de estadía, llegó la hora de partir, pues mi familia me esperaba en Viña del Mar. “Mi abuela está allá, voy a tratar de llegar”, me dijo Inés cuando le conté que debía irme. Entonces supe que las cosas iban por buen curso. En efecto, llegó a Viña poco después y comenzamos a

salir. Allá se nos sumó mi primo Mañungo Achurra, quien también era muy amigo de ella. La abuela de Inés nos invitaba a pasear en auto, lo pasamos muy bien, y el 12 de febrero de 1955 —que fuimos a ver a la Virgen de Lourdes— nos pusimos a pololear. Inés tenía 16 años, yo tenía 18. Desde ahí, nunca más nos separamos.

Pese a que Inés y su familia eran conservadores, aprendimos a zanjar nuestras diferencias a partir del respeto y la tolerancia. Sin desmedro de esto, en ocasiones, cuando iba a su casa, se armaban intensas discusiones, especialmente con su hermano Nano, quien era muy tradicionalista y pertenecía al Opus Dei. Aunque nos estimábamos mucho, de repente nos dábamos duro. Y pese a que siempre fui respetuoso, no me quedaba callado. Una vez hasta me tiró un jarro de agua en la mesa. Me paré indignado y abandoné la casa, con Inés corriendo detrás de mí. Don Fernando era el que ponía freno a esas peleas.

La política era un tema que entonces lo cruzaba todo. Para la postura de argollas, en plena campaña presidencial de 1958, nos reunimos ambas familias en casa de la novia. Por supuesto, ambos bandos sabían cómo pensaba el otro. Empezó la ceremonia, presidida por el padre José Kull, nos portamos muy caballeritos y compuestos, hasta que alguien comenzó a cantar “Cielito lindo”, la canción de la campaña de Alessandri. Entonces mi mamá y mis hermanos comenzaron a entonar: “¡Frei, Frei, Frei!”. Inés y yo, en medio de este panorama, nos mirábamos nerviosos. Pensamos que la cosa iba a terminar en una batalla campal, pero no, alguien sirvió la champaña y se brindó por los novios, y se olvidó el asunto.

Así mismo funcionarían nuestras relaciones interfamiliares en el futuro. Construiríamos vínculos estrechos, de mutuo respeto y gran cariño, en los que la tolerancia era un ingrediente fundamental, algo muy distinto a lo que sería la tónica del escenario político chileno de la época, marcado por la confrontación y la exclusión, lo que llevaría al país eventualmente a un duro quiebre institucional.

7. La tierra: Vivencias y percepciones del mundo rural de los 50

El mundo rural era, para mí, algo bastante ajeno y desconocido, hasta que empecé a salir con Inés. Conservaba el recuerdo de algunas experiencias que había vivenciado en mi niñez en la localidad de Resbalón, adonde íbamos a pasar temporadas a la parcela de mi tío Pablo y mis primos Achurra, pero esta estaba lejos de ser un latifundio.

Hacia la década del 50, la realidad del campesinado en Chile, el sistema de inquilinaje y las relaciones que allí se establecían eran muy duras. Familias completas habitaban, toda su vida y por varias generaciones, un mismo fundo. Ahí nacían sus hijos, quienes luego continuaban trabajando las mismas tierras que sus padres y abuelos habían labrado para sus patrones hasta el día de su muerte. Por mucho que anhelaran buscar otras oportunidades, la mayoría no tenía adónde más ir. Estaban atados a la tierra, la que trabajaban de sol a sol. Su mundo era acotado, los horizontes que conocían no pasaban más allá de los confines del fundo en que trabajaban o, a lo sumo, de los pueblos aledaños. Muchos nunca conocieron el mar o las grandes ciudades. Se les daba techo y comida y, normalmente, un cerco para sus cultivos y la crianza de algunos animales, pero todo dentro de un sistema latifundista, apatronado y casi feudal. Los sueldos eran inferiores al salario mínimo, y los trabajadores no recibían pago los días de lluvia. A algunos se les pagaba mitad en dinero y mitad en especies.

En buena parte de estas zonas rurales no existían escuelas y un alto porcentaje de inquilinos era analfabeto. Pese a que muchos patrones mantenían buenas relaciones con sus trabajadores y familias, y se preocupaban de su manutención, vivienda y salud, entre ellos operaba un vínculo eminentemente paternalista. Algunos como mis suegros, quienes tenían mucha conciencia social, construyeron viviendas, escuelas y postas de salud para sus inquilinos, preocupándose personalmente de que contaran con abastecimiento y otras comodidades mínimas, como calefacción, ropa y acceso a la escuela. Era una relación estrecha, de respeto, lealtad y mutuo afecto, pero ello no subsanaba el hecho de que los campesinos se sentían amarrados de por vida a esa tierra, sin

autonomía ni posibilidad de optar por otros caminos. Su dependencia y sumisión ante el patrón eran abismantes. Siempre me impresionó observar que, cuando dialogaban con este, rara vez levantaban la mirada del suelo. Habían sido educados así.

Pero las cosas, poco a poco, habían comenzado a cambiar. En los años 50, en la zona de Lontué y Molina surgió un movimiento campesino que exigía mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo. Los huelguistas fueron asesorados, entre otros, por la Acción Sindical Chilena (Asich), institución fundada por el padre Hurtado que promovía la sindicalización campesina. Los campesinos eran capacitados en materias laborales y sindicales, con el objetivo de que pudiesen organizarse y aspirar a una mejor situación. Esto, sin embargo, estaba penalizado por la ley. Varios dirigentes fueron encarcelados durante esta época, bajo la invocación de la Ley Maldita, acusándolos de subversivos y comunistas. Todo ello provocó las primeras huelgas en fundos de la zona.

Recuerdo el caso del agricultor falangista Juan Cifuentes Grez, nieto de Abdón Cifuentes y hermano de la regidora por Santiago María Cifuentes, en la comuna de Sagrada Familia, provincia de Curicó, quien protagonizó un incidente que remeció al país en 1955. Según la versión de ese tiempo, Juan Cifuentes venía saliendo de una reunión con profesores en la escuela de Peteroa; al verlo el dueño del fundo y uno de sus hijos, de apellido Moreira, lo increparon y se armó una violenta riña, en medio de la cual Cifuentes desenfundó su revólver y les disparó a ambos, hiriendo de muerte al padre, quien lamentablemente falleció horas después. Muchos culparon de agitador al padre Hurtado por lo sucedido. Así de compleja era la situación.

La propia jerarquía de la Iglesia Católica fue pionera en materializar las primeras experiencias de reforma agraria en el país con tierras del obispado de Talca. Monseñor Manuel Larraín y el Cardenal Raúl Silva Henríquez, entre otros, encabezaron este proceso.

En 1962, bajo el gobierno del Presidente Jorge Alessandri, se aprobó la primera Ley de Reforma Agraria, conocida como la “Reforma de Macetero”, por su carácter marcadamente limitado y efectos moderados sobre el sistema de latifundios. Fue un intento por contener, en parte, la crisis y tensión que comenzaban a desatarse. En la práctica, la nueva normativa no tuvo grandes efectos, pues con suerte permitía la venta de terrenos que, por quiebras y donaciones, habían quedado en manos del Estado, sin tocar los grandes

latifundios de privados. No obstante, logró establecer buena parte de la institucionalidad a través de la cual se implementaría, más adelante, el proceso de expropiación y distribución territorial, en conjunto a la organización campesina, de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende.

Desde esta perspectiva, la Reforma Agraria en Chile se destacaría dentro del escenario regional por haber implementado políticas destinadas a modificar la gran propiedad, la distribución territorial y la incorporación del campesinado. Este sería un proceso gradual, gatillado por diversos factores asociados a la postergación y el déficit productivo que venía arrastrando la agricultura desde la década de 1930. Resultarían clave las transformaciones en materia de representación política provocadas por las reformas en la normativa electoral, aprobadas en 1958, y entre las que destaca el establecimiento de la “cédula única”, que puso fin al cohecho y al control electoral que ejercía la derecha en las zonas rurales. Esto, en gran medida, permitió el posicionamiento de aquellos partidos que venían promoviendo transformaciones estructurales en el sector rural, especialmente aquellos de izquierda y del ámbito socialcristiano.

En efecto, lo que nos movilizaba durante esa época era la posibilidad de transgredir lo establecido para transformar una realidad que considerábamos injusta e imposible de continuar perpetuando en el tiempo. Era una utopía, una difícil travesía, pero, como socialcristianos, estábamos convencidos de poder llevarla a cabo.

En ese contexto, el nacimiento de la Democracia Cristiana sería una reacción decidida al cambio y un desafío a la coyuntura. Creíamos que la justicia social, el bien común y una sociedad solidaria podían lograrse a través de un proyecto democrático, basado en principios cristianos, el que significaba introducir reformas sociales de punta, tales como la Reforma Agraria, la promoción popular, el fortalecimiento de diversas instancias comunitarias y del movimiento sindical, la educación primaria garantizada para todos los niños del país, un fuerte y eficiente sistema de salud y de vivienda y, por supuesto, un salario mínimo pactado.

8. Los “curas rojos”

Así como las familias y los partidos se fracturaban internamente en este tira y afloja por una sociedad más justa, la Iglesia Católica también se dividía, sobre a todo a nivel jerárquico. Mientras unos intentaban mantener las estructuras, otros trataban de deshacerse de los vestigios del pasado y el boato excesivo. Este quiebre se acentuó con el nombramiento, primero, del Papa Juan XXIII, en 1950 y, luego, de Pablo VI, en 1963.

No hay que olvidar que en Chile hubo incluso obispos que ocultaron los dictados que el propio Vaticano hacía a través de sus Encíclicas Sociales. Tal es el caso, particularmente, de las encíclicas *Rerum novarum*, proclamada en 1891 por León XIII; *Quadragesimo anno*, del Papa Pío XI, en 1931, y *Mater et magistra*, de Juan XXIII, en 1961. Estas abordaban temas relativos a la cuestión social, a transformaciones de la sociedad y del mundo, a la situación y derechos de los trabajadores y campesinos, y se pronunciaban abiertamente respecto a cómo abordar las relaciones laborales desde una perspectiva cristiana, ética y justa.

En la década de los 40 y 50, numerosos prelados, en su mayoría conservadores, criticaban y cuestionaban abiertamente a la Falange Nacional, alertando a los miembros de la comunidad sobre sus tendencias izquierdistas. En tanto, en el otro extremo, había comenzado a conformarse un valioso grupo de obispos y sacerdotes comprometidos con el cambio social. Entre ellos, cabe destacar la labor desarrollada por Óscar Larson —capellán de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, ANEC— y por los jesuitas Fernando Vives —fundador de la Liga Social de Chile—; Jorge Fernández Pradel; Manuel Larraín, obispo de Talca; el padre Hurtado, Álvaro Lavín, y hasta el mismo obispo Emilio Tagle, pese a que este después pasaría a asumir posiciones más conservadoras.

En realidad, este fenómeno no era nuevo. La Iglesia siempre se ha debatido entre el tradicionalismo y posturas más progresistas, algo que incluso observamos hasta nuestros días. No olvidemos lo sucedido en las últimas elecciones papales. El Papa Juan Pablo II, si bien era conservador en lo ideológico, profesaba el progresismo en materia social. Y el propio Papa Francisco, sin ser un revolucionario, ha intentado promover diversos cambios, ganándose el rechazo

de varios.

Todos estos sacerdotes que impulsaban las reformas sociales apegados a la Doctrina Social de la Iglesia eran llamados, con desprecio, “los curas rojos” o “comunistas”. Fernando Vives era un “rojo”, Manuel Larraín era “rojo”, Óscar Larson era “rojo”... ¡Todos eran rojos! Pero el “cura rojo”, por antonomasia, era el padre Hurtado. Todo su trabajo lo desplegó no como un político, sino como un gran reformador social que remeció conciencias e incomodó a muchos con su denuncia de los males que corroían el alma de nuestro país. Su presencia y pensamiento calaron profundo en la sociedad chilena, sobre todo en los jóvenes, ejerciendo un rol carismático como asesor y guía espiritual al interior de la Acción Católica. Esto comenzó a incomodar a algunos sectores del clero y laicado más conservadores, significándole duras críticas. El Partido Conservador Tradicionalista lo acusó de no respetar la jerarquía, de politizar el movimiento y de promover entre los jóvenes la división del partido, así como su apoyo a la Falange Nacional. Lo catalogaban como impulsor del levantamiento campesino y sindical. Su visión era tildada de “peligrosamente amarga”, pues cuestionaba el quehacer de la propia Iglesia.

Las presiones llegaron a tal punto que, en 1944, a instancias de su antiguo amigo de juventud, monseñor Augusto Salinas, entonces obispo auxiliar de Santiago, el padre Hurtado terminó por presentar su renuncia a la Acción Católica. Pese a ello, continuó con mayor ahínco su labor en favor de los pobres y trabajadores. Ese mismo año, fundó el Hogar de Cristo y, más tarde, la Asich y la revista Mensaje, todas instancias desde las que trascendería su visión y apuesta cristiana de la vida.

El padre Hurtado murió cuando yo tenía 16 años, hecho que me impactó muchísimo. Su muerte causó conmoción en todas partes, incluso entre quienes lo criticaban. Recuerdo haber asistido a sus funerales en el Colegio San Ignacio, en la calle Alonso Ovalle, en Santiago. La iglesia estaba repleta, abarrotada, la gente se amontonaba incluso afuera. Era tal la conmoción, que, al finalizar la ceremonia, cuando iba saliendo el ataúd, los asistentes empezaron a apuntar hacia el cielo, pues entre las nubes se había formado la figura de una cruz. En efecto, todos la vimos. Yo fui testigo de eso. Al final, el “cura rojo” criticado por tantos llegaría a ser canonizado, declarándosele, en 2005, santo de la Iglesia Católica. Paradojas más, paradojas menos.

La Acción Católica —así como también la ANEC en su momento—, los

Círculos de Estudios y la Liga Social fueron instancias claves en la formación de muchos jóvenes de la época, tanto en términos intelectuales, como doctrinarios y de liderazgo. De ahí emergieron líderes que, con el correr del tiempo, se transformarían en destacados dirigentes en los más diversos ámbitos del quehacer nacional. Tal es el caso de Bernardo Leighton, Eduardo Frei Montalva, Alejandro Silva Bascuñán, Radomiro Tomic, Ignacio Palma, Manuel Garretón y Tomás Reyes, falangistas y socialcristianos. También hubo adherentes que, más adelante, adoptaron posturas más conservadoras, como Francisco y Gonzalo Bulnes, Julio Philippi, Jaime Eyzaguirre, Mario Góngora y Armando Roa, entre otros. Esta generación, portadora de un nuevo espíritu, participó activamente en la apertura de espacios y renovados enfoques respecto a la necesidad de las reformas sociales.

Otro personaje clave en este trabajo conjunto entre católicos, laicos y clérigos que promovían el cambio social fue Raúl Silva Henríquez. Su figura estuvo muy ligada al trabajo de Eduardo Frei Montalva y a su programa de gobierno llamado “Revolución en Libertad”. De hecho, existía entre ellos una buena amistad.

Silva Henríquez fue nombrado arzobispo de Santiago en 1961, cuando era obispo de Valparaíso. El hecho fue curioso, pues su nominación, en realidad, fue resultado de la búsqueda de un candidato que no tuviera vinculaciones políticas. Los otros dos postulantes, el obispo Manuel Larraín y el obispo Alfredo Silva Santiago, rector de la Universidad Católica, representaban, respectivamente, al sector más progresista y al más conservador de la Iglesia Católica. La contienda había llevado a la evidente politización del proceso de designación, el cual estaba en manos de la Santa Sede. Silva Henríquez apareció como la carta más neutra.

Al año siguiente de su nombramiento, en octubre de 1962, se realizó el Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII para abordar los nuevos tiempos. El episcopado chileno que participó en dicha instancia, entre ellos los obispos Silva Henríquez y Manuel Larraín, se destacó como uno de los más activos y vanguardistas en el diálogo y propuesta de alternativas para abordar la necesidad de aggiornamento y cambios al interior de la Iglesia Católica.

El cardenal Silva Henríquez tuvo mucha importancia, no solo en la transformación de la Iglesia chilena, sino que también en la formación de varios de nosotros, quienes vislumbramos en su figura un verdadero faro que alumbraba el camino de los cambios que había que realizar. En lo personal,

siempre mantuvimos una relación estrecha, de mucha confianza y cariño, con conversaciones profundas que se prolongaron incluso hasta el momento de su muerte. Precisamente ese día, el 9 de abril de 1999, llegué hasta su residencia. Me advirtieron que estaba ya en sus últimas horas, pero que podía entrar y acompañarlo por unos instantes. Fue un momento muy emocionante, que me marcó y que viví como la culminación de nuestra amistad.

Otros obispos claves en este proceso que se desarrolló entre fines de los años 60 y durante los 70 fueron Fernando Ariztía, Carlos Camus, Sergio Contreras, Carlos González, Jorge Hourton, Bernardino Piñera y Manuel Santos, por mencionar algunos. Buena parte de ellos adhirió con absoluta convicción a esta propuesta por el cambio social.

La evolución de cierta facción progresista al interior de la Iglesia fue casi como un espejo del proceso político que terminó quebrando al mundo conservador, dando más tarde origen al Partido Demócrata Cristiano. Algunos llegaron a radicalizarse al extremo. Tal es el caso del movimiento Iglesia Joven que, en agosto de 1968, protagonizó la toma de la Catedral de Santiago, en un acto de protesta por la visita del Papa Pablo VI a la ciudad de Medellín, en Colombia. Varios de sus sacerdotes y laicos provenían de los sectores más pobres de la capital. En dicha oportunidad, colgaron del frontis del edificio un lienzo que decía “Por una Iglesia junto al pueblo y su lucha”, exigiendo la derogación de las estructuras de poder, reivindicando la lucha del pueblo y manifestándose por una sociedad socialista con base ideológica cristiano-marxista.

En mi caso, la presencia de muchas de las figuras mencionadas, impulsoras del rol de la Iglesia en la lucha por los cambios sociales, fue de una importancia medular. Me sentía absolutamente identificado con su postura. Ellos encarnaban la confluencia de los valores de mi propia formación con mis ideales políticos y la acción de mi partido. De hecho, cuando decidimos casarnos con Inés, le pedimos al padre Esteban Pesle de Menil que realizara la ceremonia. Él era un sacerdote obrero, francés, que frecuentaba el sector de La Esperanza, muy comprometido con lo social. Ese era el tipo de cura que a mí me atraía, pues lo consideraba un verdadero testigo. Tiempo después, Pesle colgó la sotana e integró el Movimiento Cristianos por el Socialismo. Siempre siguió comprometido con los valores de la Iglesia. Vivía en Temuco y trabajaba en el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap). A pocos días del golpe militar, fue detenido y brutalmente torturado. Su cuerpo nunca fue encontrado. Hoy es uno de los tantos detenidos desaparecidos víctimas de la dictadura de Pinochet y un

mártir más de la Iglesia chilena.

9. Dos dirigentes extravagantes en Estados Unidos

En 1956, mientras ejercía como secretario general de la Unión de Federaciones Universitarias de Chile (UFUCh), me pidieron que asistiera a un congreso internacional de estudiantes en Chicago, Estados Unidos, junto al dirigente radical Juan Agustín Palazuelos, en representación de los estudiantes chilenos. Era una tremenda oportunidad. La invitación contemplaba, además de la visita, una beca de estudios durante todo el año siguiente. Sin embargo, por muy tentadora que esta fuera, implicaba un sacrificio no menor. Estaba en cuarto año de Derecho y había empezado a pololear con Inés hacía poco.

La cosa es que decidí asistir. Aterrizamos primero en Minnesota, donde asistimos a unos cursos de capacitación en inglés. Poco después, nos trasladamos a Chicago para incorporarnos al congreso. Las primeras impresiones fueron de alto impacto. Estados Unidos era otro mundo: avanzado, moderno y, en general, lleno de comodidades. El nivel de vida estaba muy por sobre el nuestro. Las universidades, los campus universitarios y las propias ciudades eran muy desarrolladas. En los hogares norteamericanos ya se veía televisión, mientras que en Chile recién tuvimos acceso a esta a fines de los años 50, más concretamente para el Mundial de Fútbol de 1962.

La diferencia era tal que con Palazuelos hasta pudimos comprarnos un automóvil: un Ford igual al que tenía mi papá en Santiago. Esto era algo impensable para jóvenes de nuestra edad en Chile. Nos costó 120 dólares. Lo pagamos en cuotas semanales de diez dólares, Juan Agustín ponía cinco y yo otros cinco. Esto nos permitió recorrer bastante y tener independencia para movilizarnos.

Durante nuestra estadía, tuvimos oportunidad de conocer a muchas personas, quienes nos acogieron y abrieron sus puertas. Entre otros, nos hicimos amigos de la hija de uno de los editores del Reader's Digest, entonces una de las revistas más importantes de Estados Unidos. Nos invitó a su casa en Nueva York, pese a que nosotros éramos unos pelafustanes que, con suerte, tenían para invitarla a un hot-dog.

Fueron meses inolvidables y una muy buena experiencia. Pudimos intercambiar con estudiantes de las más diversas nacionalidades, conocer mucho, sopesar realidades y captar realmente lo que era la vida en uno de los países más desarrollados de la época.

Sin embargo, el tema del apartheid nos golpeó duro. Era una realidad brutal, estremecedora, que estaba ya provocando crisis y mucha tensión en el país, principalmente en aquellos estados donde la segregación racial era extrema como en Alabama, Mississippi, Georgia, Luisiana y Tennessee. A la gente de color se la llamaba “nigger”, término despectivo empleado para referirse a personas de raza negra. En Chicago, uno veía letreros que decían: “Aquí no se permiten perros ni negros”. En los buses, los blancos viajaban adelante y los afroamericanos atrás. La discriminación era absoluta.

Uno de los temas que provocaban mayor polémica durante esos años era el ingreso de estudiantes afroamericanos a las universidades estadounidenses. Tanto así que el congreso al que asistimos estuvo fuertemente marcado por la discusión del caso de Autherine Lucy, una estudiante afroamericana que había postulado a la Universidad de Alabama y que, pese a haber quedado seleccionada, terminó siendo expulsada por su condición racial. Era verano y pleno período de vacaciones, pero se produjeron protestas y grandes movilizaciones a favor y en contra de su caso. La noticia tuvo amplia cobertura y generó mucho debate.

Junto a Juan Agustín Palazuelos, decidimos levantar el tema e hicimos una acérrima defensa del caso de Autherine en pleno congreso. Asumimos su causa con fuerza y convicción, e incluso realizamos una declaración en la que exigíamos el fin de la discriminación racial y la apertura de las universidades para todos los estudiantes en Estados Unidos, sin distingos de raza o situación. Recuerdo este gesto como uno de mis primeros actos de rebeldía explícita. Y es que el tema de la inclusión y no segregación siempre me ha resultado trascendental. Es un aspecto que considero sagrado dentro de toda convivencia ciudadana, pues guarda estrecha relación con el respeto, la tolerancia y el resguardo de los derechos básicos de todo ser humano.

Hoy todo esto puede sonar curioso. Éramos unos cabros chicos idealistas, con poca experiencia política, pero lo que nos motivó fue que, así como en Estados Unidos se planteaba la necesidad de reformar las estructuras sociales, en Chile también se daba esta confrontación entre quienes defendían el statu quo y

quienes luchaban por cambiarlo. No había que ser un gran analista para identificar los paralelos entre ambos países: mientras allá algunos se inclinaban por mantener el apartheid, en Chile había quienes decían, como si nada: “No te metái con ese roto o con ese siútico”. El problema, en esencia, era el mismo: ante los ojos de la élite, no todas las personas tenían el mismo valor.

Fue en esa visita que escuché hablar por primera vez a John F. Kennedy, quien en ese momento era senador por Massachusetts. Casualmente, me tocó asistir a la exposición que hizo en un anfiteatro de la Universidad de Chicago. Recuerdo que me impactó mucho. Su discurso estaba muy en la línea de lo que nosotros planteábamos, de la necesidad de hacer cambios, la no discriminación, la defensa de los derechos de los estudiantes. Era un hombre con un tremendo carisma. Siete años después, llegaría a ser Presidente.

Aprovechamos nuestra participación en el congreso estudiantil para plantear, también, un tema que sí estaba explícitamente vinculado a la América Latina de la época: las dictaduras. En esos años, el gobierno norteamericano, a través de su Departamento de Estado, apoyaba varias de las dictaduras instaladas en países latinoamericanos como Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Cuba. A nosotros nos pareció oportuno aprovechar el evento para que estas fueran condenadas públicamente y enviar una señal.

Como dirigentes estudiantiles, considerábamos el tema relevante y no temíamos cuestionar públicamente las políticas norteamericanas. Dos años antes, con ocasión de la invasión de Guatemala por parte de Estados Unidos, en Chile nos habíamos movilizado para protestar. Recuerdo haber ido al antiguo consulado, frente al Parque Forestal, y ahí nos instalamos a gritar hasta que nos sacaron los carabineros por la fuerza.

En cambio, a ojos de los estudiantes estadounidenses de la época, este era un fenómeno que les resultaba ajeno y con el que no tenían mayor sintonía. En general, no se mostraban muy interesados en debatir sobre política. Lo que más los convocaba eran asuntos relacionados con el bienestar estudiantil, el deporte, becas e intercambios. En ese sentido, nosotros, los estudiantes chilenos, un militante radical y un socialcristiano, resultábamos unos especímenes extravagantes.

Aunque no fue fácil, planteamos el tema y conseguimos la atención de los asistentes, quienes terminaron apoyando la idea de condenar la situación

internacional casi por unanimidad. Es posible que ellos ni siquiera estuvieran tan conscientes respecto a qué significaba lo que estábamos aprobando, pero para nosotros fue un gran triunfo, porque la declaración se hizo llegar posteriormente al Departamento de Estado, y hasta en Chile se supo lo ocurrido.

Este hecho es bien decidor de lo que ya era en ese momento mi formación antidictadura. Entonces no se hablaba mucho de “derechos humanos”, pero sí repudiábamos todo aquello que atentara contra la dignidad de las personas, no solo en términos económicos, sino que también en materia de represión, libertad de expresión, encarcelamiento y violencia política.

Finalmente, mi estadía en Estados Unidos se prolongó por tres meses. Decidí renunciar a la beca, pues me significaba quedarme hasta julio del año siguiente y perder un año completo de carrera. Además, echaba de menos a Inés... Regresé a Chile en el mes de septiembre, y creo que hice lo que tenía que hacer. Volví a mi país, terminé mis estudios a tiempo, me recibí de abogado y salí a los 21 años de la universidad. Dos años después, me casé.

La verdad es que no sospechaba lo que aún estaba por vivir.

10. De semillas y frutos: El nacimiento de la Democracia Cristiana

El germen de la fusión definitiva entre socialcristianos y la Falange, que luego daría paso a la fundación del Partido Demócrata Cristiano, surgió a partir de la juventud y, más concretamente, a nivel del mundo universitario. Yo fui parte y testigo de todo ese proceso.

Todo comenzó con una alianza universitaria. Corría 1955, estaba en cuarto año de Derecho y, además de ser dirigente universitario, me desempeñaba como dirigente de la Juventud Social Cristiana. Se acercaban las elecciones de la FECh, y junto a Max Silva, Rolando Castillo, el “Camión” Vergara y otros dirigentes estudiantiles decidimos aliarnos con los falangistas en una lista conjunta. Nuestro candidato era Roberto Bohbendrich.

A nivel universitario, esta alianza tenía mucha lógica. Era una colaboración que nos permitía hacer un frente común en nuestra cruzada por ganar y dirigir las principales federaciones de estudiantes, especialmente las de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción. Ese era nuestro desafío, algo que entendíamos como nuestro primer peldaño. La estrategia funcionó. Bohbendrich salió elegido y, de paso, derrotamos a la derecha y a los radicales.

Al año siguiente, decidimos oficializar la alianza a nivel de juventudes. Junto a otros dirigentes, entre ellos Max Silva y Raúl Troncoso, partimos hasta la oficina de don Eduardo Frei Montalva, en calle Moneda, a plantearle nuestra inquietud. Lo mismo hicimos con Horacio Walker, quien encabezaba el Partido Conservador Social Cristiano. Ambos nos dieron su visto bueno. Ese año, volvimos a ganar las elecciones de la FECh como Falange Nacional Universitaria y salió electo Eduardo Moraga.

Ese fue el primer paso. De alguna manera, fuimos los estudiantes quienes tendimos los puentes iniciales para dar pie a la formación del Partido Demócrata Cristiano. Suscribieron a este hito político dirigentes de gran peso, como mi tío Pablo Larraín, Jorge Mardones Restat y el mismo Horacio Walker por los socialcristianos; así como Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton, Radomiro

Tomic, Rafael Agustín Gumucio y Manuel Antonio Garretón de parte de los falangistas. Ellos fueron, por cierto, los artífices y quienes llevaron la batuta en el proceso. Nosotros, los jóvenes, éramos nada más que los soldados, pero creo que nuestro aporte fue importante.

Debo confesar que, aunque mi compromiso de entonces era con el mundo socialcristiano, siempre observé con cierta simpatía lo que hacía la Falange. Estaba familiarizado con sus posturas, ya que mi hermano Javier era falangista y, para ser honestos, no me parecía que las diferencias entre nosotros fueran demasiado grandes, más allá de los acontecimientos históricos que habían separado a nuestras facciones. De hecho, ya a partir de las elecciones presidenciales de 1952, habían comenzado a producirse alianzas electorales entre falangistas y socialcristianos, lo que se concretó al año siguiente con la formación de la Federación Social Cristiana. Por todo esto es que la fusión me resultaba, en realidad, casi natural; algo que tenía que suceder.

La fundación de la Democracia Cristiana se celebró el 28 de julio de 1957, en el Salón de Honor del Congreso Nacional. El acto simbolizó la unión de fuerzas entre el Partido Conservador Social Cristiano, la Falange Nacional, el Partido Nacional Cristiano —colectivo fundado pocos años antes en torno a la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo— y un grupo que provenía del Agrario Laborismo, además de independientes. Fue un acto solemne que quedó grabado en mi memoria. Ahí, en ese lugar simbólico de la democracia chilena, se dio un paso trascendental para muchos de los que nos habíamos comprometido con un sueño: hacer de Chile una patria buena y justa para todos, tal como décadas más tarde lo proclamarían Jaime Castillo Velasco y Patricio Aylwin Azócar.

Ese día, Horacio Walker, en su discurso, entregó un mensaje que nunca olvidaré. Dijo algo así como: “Nosotros somos la semilla. Tenemos que enterrarnos, volver a la tierra y hacernos polvo para dar lugar al nacimiento de nuevos frutos, las nuevas generaciones”. Lo que nos transmitía era que el verdadero valor de esta unión radicaba en la formación de una nueva generación, la que haría trascender y hacer realidad nuestros ideales. ¡Qué razón tenía! Así, efectivamente, sucedió.

Tras su fundación, y por un largo tiempo, la Democracia Cristiana asumió una labor pionera, enfocada más bien en abrir caminos que en instalar liderazgos o protagonizar hitos políticos. La primera campaña presidencial de Eduardo Frei, en 1958, se enmarcó en ese contexto. Desde un principio sabíamos que no

íbamos a ganar. Lo mismo sucedió con varias candidaturas parlamentarias: Patricio Aylwin, Ignacio Palma, Tomás Reyes, entre otros, perdieron en reiteradas ocasiones. Yo mismo, en 1971, cuando me postulé a senador por Chiloé, Aysén y Magallanes, lo hice a sabiendas de que posiblemente seríamos derrotados, pero esto era necesario para el futuro partidario. Aquel era el espíritu en que nos habíamos formado. La meta no estaba en perseguir el poder por el poder en un afán triunfalista, sino que en ayudar a construir una causa mucho mayor. Reafirmar al partido. Sembrar para cosechar los frutos del mañana.

A mi juicio, el gran valor de la Democracia Cristiana está en este abanico de fuerzas y convicciones que se unieron para crear un proyecto común, logrando atraer a un mundo intelectual emergente que ya no representaba a la élite social, sino que a un nuevo espectro de talentosos profesionales, dirigentes sindicales y personas provenientes de los más diversos ámbitos y organizaciones, que vieron en este nuevo partido un espacio atractivo, propicio para proyectar nuevas ideas y aportar al país. Así fue que se gestaron los grandes núcleos profesionales y un equipo sólido detrás del programa presidencial, lo que llevaría a Frei Montalva a ganar las elecciones en 1964. Pero mucho antes de esto, su figura ya era comparada, al interior del partido, con la de un árbol que crecía en un gran macetero. La maceta representaba al colectivo, y de él emergía este gran liderazgo de frondoso follaje que proveía de sombra y amparo a un grupo que trascendía los límites del núcleo partidario. Frei Montalva tenía una extraordinaria capacidad para convocar y formar equipos. La gente quería trabajar a su alero. Su figura atrajo, incluso, a los personeros más progresistas de la Iglesia Católica. Los obispos Manuel Larraín y Raúl Silva Henríquez, entre otros, vieron en él una vía posible hacia el cambio.

En 1958, cuando Eduardo Frei se postuló por primera vez a las presidenciales, los alcances de su carismático liderazgo ya eran evidentes. Su historial lo precedía. Había ejercido como ministro de Obras Públicas entre 1945 y 1946, durante el gobierno radical de Juan Antonio Ríos, cargo al que renunció tras la Masacre de la Plaza Bulnes ejercida por fuerzas policiales durante una manifestación convocada por la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh), que costó la vida de varias personas, entre ellas, Ramona Parra, joven obrera comunista. Posteriormente, en 1949, Frei resultó electo como el primer senador falangista por Atacama y Coquimbo, triunfando en un territorio electoral complejo por la supremacía radical y socialista.

En 1957, el gobierno de Carlos Ibáñez, enfrentó una profunda crisis social y

política. Una economía por el suelo y la inflación desatada provocaron descontento y una fuerte agitación sindical y gremial en las calles. La continuidad del gobierno estaba en riesgo. En este escenario, Ibáñez llamó a Frei, solicitándole asumir un cargo ministerial con plenas facultades y conformar un equipo que diera salida a la emergencia. El país estaba expectante. Frei presentó su programa y un equipo técnico-político bastante transversal, compuesto incluso por personeros socialistas, entre ellos el propio Carlos Altamirano. La noticia salió en todos lados, generando altas expectativas, pero la iniciativa finalmente fracasó, cuando Frei exigió plenos poderes para organizar el nuevo gabinete y definir un plan de acción global y coherente, a lo que el entorno del Presidente, especialmente de sectores del agrario-laborismo, se opuso. El episodio, sin embargo, no hizo más que contribuir al prestigio político de la Falange y a la consolidación del liderazgo de Eduardo Frei. Sus dotes políticos y extraordinaria oratoria eran ya ampliamente reconocidos. En más de una oportunidad, yo mismo, como dirigente universitario, asistí al Congreso solo para presenciar algunos de sus discursos.

La preponderancia de su personalidad al interior del partido era indiscutible, pero no era el único. La Democracia Cristiana, desde sus inicios, se conformó en torno a sólidos y marcados liderazgos. Ahí estaban Manuel Garretón, Rafael Agustín Gumucio, Bernardo Leighton, Jorge Mardones Restat, Ignacio Palma, Tomás Reyes, Jorge Rogers, Radomiro Tomic, Horacio Walker, entre tantos otros. Eran personalidades fuertes, brillantes, cultas, creativas, de alto compromiso ético y social, pero, ante todo, servidores públicos. El peso y la calidad de sus liderazgos era tal que, en ocasiones, parecían competir inevitablemente entre sí.

Entre Tomic y Frei, por ejemplo, siempre existió cierta rivalidad. Ambos eran excelentes oradores, pero a la vez eran muy diferentes. El primero era más histriónico, incluso apasionado, mientras que el segundo se mostraba más moderado. Ambos eran hombres cultos y preparados, y desde un comienzo se proyectaron como los dos grandes adalides de la Democracia Cristiana.

La derrota de Frei en las presidenciales de 1958 no vino con un sabor amargo. Sirvió de palestra para mostrar y levantar a la Democracia Cristiana. La derecha, con Jorge Alessandri como candidato, ganó con el 31,2% de los votos, seguida por el candidato socialista Salvador Allende, con un 28,5%. La Democracia Cristiana quedó tercera, con el 20,5%, mientras que el Partido Radical sacó 15,4%. Este escenario contribuyó a asentar nuestro liderazgo político. De pronto,

nos proyectábamos como una opción real hacia el futuro. Ganar las elecciones de 1964 ya no parecía un desafío inalcanzable.

Hubo otros buenos presagios. Entre 1960 y 1964, por ejemplo, la Democracia Cristiana ganó las elecciones de casi todas las federaciones estudiantiles de las universidades del país. Este fenómeno venía dándose progresivamente desde 1956, consolidando nuestra influencia en el mundo universitario. Serían, precisamente, esos dirigentes estudiantiles los que después, ya como profesionales, se sumarían a las filas de los equipos de gobierno en 1964.

11. La propuesta democratacristiana chilena

En sus orígenes, el Partido Demócrata Cristiano chileno encontró importantes referentes en la Europa Occidental de posguerra, especialmente en aquel conjunto de naciones que, en los años 50, se habían agrupado bajo el concepto de Mercado Común Europeo. En dicho proyecto, enmarcado en el pensamiento humanista cristiano, hubo tres fuerzas políticas ideológicas fundamentales, vigentes hasta el día de hoy: los partidos democratacristianos italiano, belga y alemán.

Los democratacristianos italianos, en particular, desde un comienzo establecieron estrechos vínculos con América Latina, con el objetivo de conformar una fuerza socialcristiana a nivel internacional. Este esfuerzo levantó diversos liderazgos. En Chile, emergió Eduardo Frei; en Perú, Héctor Cornejo Chávez; en Venezuela, Rafael Caldera; en Brasil, André Franco Montoro, y en Argentina, Horacio Sueldo. Existía también ya presencia democratacristiana en Uruguay y Paraguay. Ya en los 60, sus alcances se proyectarían también a Panamá, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

Los primeros vínculos entre líderes latinoamericanos y dirigentes italianos y alemanes se remontan a los años 30 y 40, abriendo espacios para el diálogo futuro. Tal fue el caso de Eduardo Frei y Manuel Garretón, quienes, en representación de la ANEC, viajaron a Europa en el marco del Congreso Iberoamericano y de América Latina, realizado en Roma en 1933. Posteriormente, también fue Tomás Reyes Vicuña. Esos primeros contactos sirvieron para establecer un intercambio de ideas en torno a la opción de la tercera vía, tanto a nivel regional como global. Así, en 1961, nacería la Unión Mundial Demócrata Cristiana que, posteriormente, en 1982, se denominará Internacional Demócrata Cristiana.

Si bien en un principio nuestra propuesta, como alternativa de proyecto social, no estaba vinculada a un modelo económico determinado, a poco andar esta comenzó a configurarse en estrecha conexión con los postulados planteados por la economía social de mercado, surgiendo como una clara directriz. Esto, mientras la derecha planteaba una economía de mercado en la que oferta y

demanda interactuaban libremente, determinando, por ejemplo, la distribución de las riquezas, con un Estado subsidiario ausente. La izquierda, por su parte, proponía un modelo económico planificado, en el que el mercado no operaba como principal determinante en la distribución de recursos, y en el que no había propiedad privada, sino que se aspiraba a la propiedad colectiva.

En ese contexto, nuestro proyecto apostaba por una economía social de mercado o mixta, con un Estado presente en la búsqueda de la justicia social y el bien común. Desde un comienzo, manifestamos nuestra aspiración a constituirnos en una alternativa al comunismo, al que reclamábamos la instauración de regímenes en los que no se respetaban los derechos humanos, la libertad de expresión y el disenso, y en los que solo había un partido único omnipresente que controlaba todo el accionar de la sociedad, impidiendo la posibilidad de elecciones libres y la alternancia en el poder. Al respecto, conviene aclarar que nuestro proyecto nunca estuvo basado en el anticomunismo per se, en negar su existencia o en combatirlo mediante prácticas represivas. Al igual que el propio marxismo, creíamos en la necesidad de promover la justicia social, pero éramos muy exigentes en materia de respeto a las libertades y a los DD.HH. o garantías individuales.

Como demócratas, valorábamos la diversidad de pensamientos y el aporte de otras ideologías en la construcción de una sociedad en la que primasen el bien común, la equidad y la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, estábamos convencidos de que, ante proyectos integristas de esta naturaleza, debíamos sacar ventaja fundamentalmente con buenas propuestas y acción en terreno.

Nuestro planteamiento fue una especie de híbrido que combinaba dos principios aparentemente opuestos: libertad de mercado y equidad social. A grandes rasgos, su marco referencial se basaba en un doble haz conceptual: el concepto de libertad del hombre, complementado con el de justicia social. Ambos debían ser garantizados y protegidos por el propio Estado; un Estado fuerte, presente, con derecho a intervenir cuando intereses sociales legítimos pudiesen verse afectados. La teoría de la economía social de mercado considera la organización de los mercados como el mejor sistema de asignación de recursos, a la vez que admite la intervención del Estado para compensar o corregir posibles excesos derivados del sistema o aquellas desigualdades que este no puede prevenir, en especial para asegurar a toda persona los derechos sociales básicos como salud, educación, vivienda, seguridad social, empleo e infraestructura. Tal como afirmara Ludwig Erhard, ministro de Economía del gobierno federal de Konrad

Adenauer, considerado artífice del “milagro económico alemán” y propulsor de la economía social de mercado, en esta debe haber todo el mercado que corresponda y que arbitre la economía, así como tanto Estado sea necesario para corregir los excesos, protegiendo la competencia justa, fomentando la estabilidad de precios y evitando los monopolios. En pocas palabras, nuestro proyecto político se reducía a una simple pero compleja trilogía: el nuevo modelo debía ser, ante todo, democrático, y en él debían coexistir libertad, respeto a la dignidad humana y justicia social.

En 1958, la nueva Ley General de Elecciones había puesto fin a las prácticas de cohecho y “acarreo” electoral, fenómeno especialmente recurrente en las zonas rurales, dejando un flanco abierto a eventuales nuevos electores. El campesinado se abrió, entonces, como potencial espacio permeable ante las propuestas postuladas por la Democracia Cristiana. En paralelo, la presión ciudadana por transformaciones en el ámbito social seguía en aumento. Hasta entonces, los gobiernos de turno habían intentado, a duras penas, abordar esta realidad. Al asumir Jorge Alessandri, existían muchas expectativas respecto a la posibilidad de cambios reales y un efectivo crecimiento económico. Sin embargo, pese a implementarse algunos avances, especialmente en materia de vivienda, fue un gobierno que exhibió magros resultados en términos económicos, caracterizándose por una alta inflación, devaluación monetaria y crecimiento de la deuda pública. La ciudadanía esperaba un mejor resultado. Todo esto sirvió para que la Democracia Cristiana penetrara aún con más fuerza en los sectores medios, proclives al Partido Radical, y en sectores populares tradicionalmente asociados a la influencia del Partido Comunista y al socialismo.

Este sería el escenario y las grandes disyuntivas que enfrentaríamos en la década de los años 60. Nuestro principal foco de contienda no era ya solo con el mundo conservador, sino que también con la izquierda, pues nuestros proyectos, pese a ser alternativos, tenían muchos objetivos en común y había mucho terreno en disputa.

III

LA REVOLUCIÓN INCONCLUSA

1. Abriendo caminos

Los años 60 trajeron consigo no solo renovación de las ideas y las luchas, sino que también tensión y alta confrontación a nivel internacional. Fue una década de ideologías, revoluciones y reivindicaciones políticas, y el mundo se vio sacudido por protestas, revueltas e importantes movimientos sociales. Cambios, movilizaciones, grandes rupturas. ¡Parecía que nada quedaría en pie!

En Chile, estas noticias nos llegaban no ya a través de la radio o los periódicos, sino que por medio de imágenes rápidas e instantáneas transmitidas por la televisión. Los hechos noticiosos atravesaban, raudos, el orbe. Así, fuimos testigos de la invasión de Cuba en Bahía de Cochinos, de la Crisis de los Misiles, del Concilio Vaticano II y la Teología de la Liberación, del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, de la Revolución Cultural en China, de la Guerra de Vietnam, de la Primavera de Praga, del Mayo Francés de 1968 y de la Masacre de Tlatelolco en México. Numerosos asesinatos políticos cobraron la vida de destacados líderes internacionales: John F. Kennedy, Malcolm X, el Che Guevara y Martin Luther King, entre otros.

En el ámbito científico, se registraron también hechos increíbles que, hasta hacía poco, la humanidad con suerte lograba imaginar, como la creación de la píldora anticonceptiva, el primer trasplante de corazón y el vuelo del Concorde, el primer avión supersónico. La carrera espacial nos deslumbró, primero en 1961, con el viaje del primer hombre al espacio, el ruso Yuri Gagarin, y años más tarde, en 1969, con la llegada del hombre a la luna.

Mientras Sartre, Herbert Marcuse y Paulo Freire elaboraban sus nuevas teorías, el boom latinoamericano se tomaba el mundo con novelas sorprendentes como Cien años de soledad, Rayuela o La ciudad y los perros.

Fue una década explosiva, de rebeldía, innovación y grandes cambios sociales. Atrás quedaron el conservadurismo y la moderación de los años 50, mientras transitábamos con cierta conciencia a una era de liberación, en la que el concepto de revolución atravesó la cultura y todos los ámbitos de la vida. Por entonces parecía que todo era posible. Todo podía ser cambiado, y aún más: todo “debía”

ser cambiado. De ahí consignas como “La imaginación al poder” o “Prohibido prohibir”.

El terremoto de Valdivia, en 1960, el de mayor magnitud en la historia de la humanidad que se haya registrado, pareció inaugurar estos nuevos tiempos en Chile. Movimientos como el feminismo, el pacifismo y el hippismo se instalaron también en nuestro país, mientras el rock y la “beatlemania” se apropiaban de las radios junto a los hits de la Nueva Ola y la Nueva Canción Chilena. Todo parecía relajarse, encontrar formas de convivir. Pelos largos, patillas y barbas, pantalones pata de elefante, minifaldas y bikinis causaban conmoción. Incluso, hubo prédicas religiosas que condenaban a quienes exhibían su cuerpo más de lo debido. Pero nada importaba, la vida había tomado ya otro rumbo.

Con Inés, recién casados, nos mudamos a un pequeño departamento en Miraflores con Merced, en el centro de la capital. Era un lugar modesto, una especie de garzonier, pero nos sentíamos adultos. Un dicho de la época expresaba bien nuestras aspiraciones: “El casado casa quiere”. Éramos independientes, al fin.

Como había trabajado mientras estudiaba en la universidad, esto me permitió graduarme con un empleo bajo el brazo. Sin embargo, a poco andar, empezamos a notar que mis ingresos apenas nos alcanzaban para llegar hasta mitad de mes, lo que solucionábamos haciéndonos los invitados con regularidad en la casa de mis suegros.

Gracias a los oficios del padrino de Inés, don Enrique Ruiz-Tagle, se me ofreció trabajar en la Municipalidad de Colina como secretario abogado, con una jornada de tres días. La oferta me cayó como anillo al dedo, pues era un ingreso fijo que me permitía ejercer libremente mi profesión de abogado. Poco después, concursé a la plaza de juez de policía local en la Municipalidad de La Cisterna, y gané.

En paralelo, habíamos formado un estudio de abogados con mi hermano Alberto; mi primo Juan Achurra; José Florencio Guzmán, quien sería subsecretario de Hacienda en el gobierno de Eduardo Frei Montalva y, posteriormente, ministro de Defensa durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle; y Guillermo Piedrabuena, que con los años llegaría a ser el primer fiscal nacional de Chile.

Así, comencé a enfocarme casi exclusivamente en mi profesión y, sin quererlo,

fui alejándome de la actividad política. No era que la hubiese abandonado. Mis convicciones estaban profundamente enraizadas, pero por el momento debía concentrarme en lo inmediato, que era construir un hogar y mantenerlo.

Un día de 1963, llegó hasta nuestra oficina un caballero y pidió hablar conmigo. Su nombre era Emilio Madrid, propietario de varios fundos y de casi mil hectáreas en el valle de Curacaví. Me explicó que quería hacer donación de esas tierras a sus nueve hijos con urgencia, pues el gobierno había anunciado una retasación de bienes raíces, lo que significaba que el impuesto de donación pronto se dispararía. Ello obligaba a realizar esa valiosa partición antes de fin de año, y nos encontrábamos en el mes julio. Era un tremendo desafío profesional, pero acepté.

Don Emilio me confidenció que antes había recurrido a Arturo Alessandri Rodríguez, hijo del expresidente Arturo Alessandri, y uno de los más prestigiados abogados de la plaza. Este le había dicho: “Discúlpeme, pero no estoy en condiciones de hacerle la partición, pues viajo en estos días a Nueva York, ya que tengo reservado mis abonos para la temporada de la ópera... Pero, ¿sabe qué? Le voy a recomendar a un joven abogado que, aunque parece un niño, es muy capaz y tiene todos los conocimientos para ayudarlo en lo que usted necesita”. Acto seguido, le pasó mi dirección. ¡Bendita ópera! Yo ni lo sospechaba, pero ese caballero terminaría encomendándome una de las mayores particiones que se hicieron en ese tiempo en el país.

Si bien los alcances de la llamada “Reforma Agraria de Macetero”, implementada durante el gobierno de Jorge Alessandri, habían sido medidos, ya empezaban a provocar temor entre los dueños de fundos las posibles futuras legislaciones sobre expropiaciones de la tierra.

Tuve éxito en este encargo profesional y, antes de fin de año, ya lo había cumplido satisfactoriamente. Así fue que empecé a hacerme un nombre. Llegaron otras particiones; hice varias en San Vicente de Tagua Tagua, Vichuquén, Colchagua, Talca y Colina. A ello se sumó el éxito profesional de nuestra oficina, especializada en materia de arrendamientos, sociedades anónimas y seguros. Aumentaron mis ingresos, y eso me permitió adquirir una casa, un auto para Inés y otro para mí. En tanto, fueron naciendo nuestras primeras hijas: Paula, Francisca y Patricia. Y de la escasez, pasamos a la abundancia.

En eso estaba cuando recibí un llamado inesperado. Era el senador demócratacristiano José Musalem. “Andrés, quiero que me ayudes”, me dijo. El gobierno de Jorge Alessandri había presentado un proyecto de reforma tributaria y el senador Musalem quería elaborar una contrarreforma que contemplaba, además, un código tributario y una modificación profunda a la legislación vigente. Decidí colaborar. Trabajamos en conjunto en dicha propuesta con el destacado economista Carlos Massad, un abogado del Servicio de Impuestos Internos (SII) de apellido Gajardo, cuyo nombre no recuerdo, y otros técnicos en la materia. El proyecto fue presentado por Musalem en el Senado como moción parlamentaria, lo que permitió enriquecer el debate y, de paso, exhibir a una Democracia Cristiana capaz de hacer sólidas propuestas en materias relevantes para el país.

Aquella incursión fue el comienzo de mi retorno al escenario político. Poco después, me contactó el propio Eduardo Frei Montalva para pedirme que me hiciera cargo, como secretario ejecutivo, del programa de gobierno de su candidatura a la Presidencia de la República. La oferta me dejó en una encrucijada. Me estaba yendo bien en mi vida profesional, tenía proyectos que me interesaba desarrollar y muchas perspectivas por delante. Sin embargo, también me resultaba muy atractiva la posibilidad de involucrarme en el servicio público. Le respondí que aceptaba, pero con una condición: “Trabajaré medio día con usted, y medio día lo dedicaré a mi profesión”.

2. Manos a la obra:

La elaboración de un programa de gobierno reformador

A lo largo del siglo XX, y en numerosas ocasiones, Chile se mostró como un verdadero espejo de los procesos políticos ocurridos en el continente europeo. En 1935, en Francia y España, las fuerzas de izquierda y centroizquierda se unieron para formar Frentes Populares que, años más tarde, ganarían las elecciones presidenciales. En nuestro país, este mismo proceso se dio en 1937, culminando con la elección del candidato radical Pedro Aguirre Cerda, al año siguiente, como Presidente de la República.

Otro ejemplo: en 1967, el movimiento reformista estudiantil de la Universidad Católica se tomó la casa central, exigiendo la renuncia del rector, monseñor Alfredo Silva Santiago. “Nuevos hombres para una nueva universidad” era la demanda de los estudiantes. En su reemplazo fue nombrado prorector el arquitecto reformista Fernando Castillo Velasco, quien llevaría adelante importantes transformaciones en esa casa de estudios. De forma similar, en mayo de 1968, estudiantes franceses se volcaron a las calles a protestar bajo consignas tales como “¡La imaginación al poder!” o “Tomemos el cielo por asalto”, terminando por concitar una huelga nacional que obligó al gobierno de Charles de Gaulle a llamar a elecciones anticipadas.

El mismo fenómeno se observa respecto a la emergencia de la Democracia Cristiana en países europeos, tales como Italia, Alemania, Bélgica y Holanda, en los que se consolidaron importantes movimientos políticos con propuestas reformistas en el ámbito social, y un compromiso férreo con el régimen democrático frente al proyecto comunista impuesto por la Unión Soviética en los países de la Europa del Este. En Chile, casi en paralelo, durante los años 50, surgió un movimiento inspirado en similares principios que respondía a la necesidad de llevar adelante un programa democrático con profundas reformas sociales, en contrapropuesta a la oferta planteada por el comunismo y sus aliados, todo ello evidentemente en un contexto diferente al europeo.

Frente a la injusticia social imperante en nuestro país, no había que ser un revolucionario declarado para entender que el cambio era necesario y urgente. Esto significaba introducir transformaciones estructurales en la sociedad chilena en diversos ámbitos. Desde nuestra perspectiva, el desarrollo y la superación de las desigualdades eran desafíos no solo atingentes a las cúpulas políticas, sino que además debían ser asumidos por el pueblo en su conjunto. Para ello, la ciudadanía debía tener voz y cobrar un rol activo en términos de participación, en tanto los partidos políticos debían ponerse al servicio de esta, interpretando y canalizando dichos anhelos y necesidades. Estábamos dispuestos a quebrar y modificar antiguas prácticas, así como todo aquello que implicara inequidad y privilegios desmedidos para algunos, mientras la mayoría de la población vivía en condiciones indignas e inaceptables. El desarrollo del país y la justicia social se proyectaban como un logro compartido, fruto de la participación y la inclusión de todos los sectores, incluida la élite. Quien nos convocaba a este desafío era un gran líder: Eduardo Frei Montalva.

A esas alturas, era evidente que él iba a ser el candidato de la Democracia Cristiana en las elecciones presidenciales de 1964. Su figura, en términos de liderazgo, no tenía competencia al interior del partido. Esto fue clave, pues nos permitió anticiparnos a delinear lo que sería el programa de gobierno. Se decidió que este debía contener no solo las propuestas, sino que también los proyectos de ley y decretos ya elaborados, al menos en su diseño general. De esta forma, en caso de ganar y asumir el nuevo gobierno, buena parte de aquellos estarían listos para ser presentados y promulgados de inmediato, evitando improvisaciones.

Jorge Ahumada, Sergio Molina, Álvaro Marfán, Sergio Ossa, Eduardo Simian, Raúl Sáez, Hugo Trivelli y José Musalem conformaban el equipo coordinador. Eduardo Hamuy estuvo a cargo de las encuestas y mediciones. A nivel nacional, se hizo cargo de la campaña Juan de Dios Carmona y Raúl Troncoso ejerció como secretario. Era una mezcla potente y transversal, que iba más allá del Partido Demócrata Cristiano, existiendo también un fuerte contingente de independientes.

Ya en mayo de 1962, bajo la dirección de Jorge Ahumada, un equipo técnico del Centro Coordinador del Plan (Cecop), comenzó a elaborar la matriz y directrices medulares de lo que sería el programa de gobierno, lo que se tradujo en un documento titulado Informe preliminar elaborado por la Comisión Central de Programas, también conocido como Libro azul. Asimismo, se convocó al Primer Congreso Nacional de Profesionales y Técnicos de la Democracia Cristiana e

Independientes, un hito sin precedentes y de amplia participación, el que permitió conformar un equipo programático integrado por más de mil profesionales y técnicos de diversas disciplinas, representantes del mundo de la cultura, académicos, dirigentes sindicales y gremiales. En él colaboraron los mejores profesionales del país, organizados en 22 comisiones. Se constituyeron equipos programáticos en forma descentralizada en todas las provincias, y se realizó una treintena de congresos a lo largo del territorio nacional, en los que participaron masivamente mujeres, jóvenes, campesinos y pobladores.

Por mi parte, asumí como coordinador y secretario ejecutivo de la comisión de programa de gobierno. Hasta mi escritorio llegaba la retroalimentación de un sinnúmero de profesionales, comisiones y personeros del mundo sindical. Trabajamos durante seis o siete meses, y el resultado quedó impreso en un documento llamado Informe Preliminar para un Programa Nacional de Gobierno. El programa, cuyo gran estrategia fue Jorge Ahumada, se dio a conocer en un masivo acto público en el Teatro Caupolicán, en que el orador principal fue Eduardo Frei Montalva. Desde allí se proclamó nuestro compromiso con Chile: ¡la Revolución en Libertad!

Una profunda reforma tributaria era necesaria para financiar buena parte de las transformaciones sociales que aspirábamos implementar. Entre los proyectos de ley que desarrollamos figuraba la Ley de Renta Presunta, en la que la renta se calculaba acorde a un porcentaje del patrimonio de cada contribuyente. La idea era poner atajo a la evasión tributaria, pues había numerosos contribuyentes con altos patrimonios que no estaban sujetos a tributación por diversas exenciones, en especial debido al bajo avalúo de los predios agrícolas y urbanos. De ahí que se lo denominara “impuesto al patrimonio”. Más tarde, este constituiría un gran punto de desencuentro con los partidos de oposición.

Asimismo, elaboramos el proyecto para la Ley de Promoción Popular, otra iniciativa que vería la luz poco tiempo después. Esta buscaba fomentar la creación de organizaciones de base, sobre todo en los sectores más vulnerables, promoviendo la participación ciudadana en diversas instancias, así como también la capacitación de dirigentes populares. Lo que se quería era incorporar al ciudadano a la comunidad nacional, apuntando con ello a un punto medio entre el paternalismo estatal propio del comunismo y el individualismo privado de la derecha. Planteábamos la descentralización del poder incluso a nivel municipal. Era tal nuestra convicción que, con bastante antelación, ya para las elecciones municipales de 1963, el partido había creado el eslogan “El gobierno

del pueblo comienza en el municipio”. La Ley de Promoción Popular sería uno de los estandartes de nuestro gobierno.

En materia de nacionalización del cobre, planteábamos una propuesta diferente a la de la izquierda, la que denominamos “chilenización”. De acuerdo a este modelo, el Estado pasaba a ser partícipe de la propiedad, más no de la gestión y administración de las empresas mineras, la que quedaba en manos del sector privado. Sin embargo, el ente estatal se reservaba facultades para controlar el comercio del mineral, sobre todo en los mercados internacionales. Establecimos el concepto de “impuesto al sobreprecio”, lo que significaba que cuando el cobre se vendiera a un precio mayor a determinado monto —costo de producción, más un porcentaje de justa utilidad— el 50% de ese excedente correspondería al Estado. Además, elaboramos un plan que tenía por objetivo ampliar las inversiones; la idea era incentivar a las empresas internacionales a no exportar el cobre en bruto, sino que enviarlo a las refinerías locales, ampliando así la capacidad de estas y agregando valor al producto.

En el ámbito educacional, Frei se comprometió a que, cuando asumiera como Presidente, ningún niño chileno quedaría sin ir a la escuela por falta de cobertura. En esa época, alrededor de 300 mil niños, la mayoría provenientes del mundo rural, no tenían acceso a la educación escolar. Esto a causa de la falta de escuelas, escasez de profesores y altas tasas de deserción escolar y repitencia, pero también debido a un tema culturalmente muy arraigado: muchas veces, los padres priorizaban que el niño trabajara a que estudiara, ya que así aportaba al ingreso familiar.

Una vez asumidos como gobierno, esta reforma concitaría un gran apoyo de parte de la ciudadanía. Miles de jóvenes chilenos y funcionarios del Estado apoyarían en la construcción de aulas y nuevas escuelas. Además, crearíamos la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Se contemplaba asimismo reformar el modelo escolar, creándose tres niveles educativos: el parvulario, el primario —con ocho años de educación básica— y el medio —con la impartición de una enseñanza media bajo dos modalidades: científico-humanista y técnico-profesional—. Se daría un trato especial a los profesores, mejorándose sustancialmente sus rentas en un plan quinquenal y creando el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), lo que permitiría, por una parte, renovar las metodologías pedagógicas y, por otra, fortalecer la formación y capacitación de más de cinco mil maestros en forma permanente. Esta reforma —una de las

más ambiciosas en la historia de nuestro país—, encabezada por el ministro Juan Gómez Millas, ex rector de la Universidad de Chile, significaría un gran avance a la hora de asegurar la educación gratuita a los niños chilenos. De igual forma, la matrícula universitaria y la enseñanza profesional y técnica también aumentarían su alcance, llegando a duplicarse.

Por supuesto, uno de los proyectos de gobierno más emblemáticos de Frei Montalva era la legislación para llevar adelante la Reforma Agraria. Esto no solo era complejo desde el punto de vista de la fuerte oposición a la que tendríamos que enfrentarnos, sino que también porque requeriríamos realizar una reforma constitucional que permitiera expropiar a un valor de avalúo fiscal muy inferior al valor comercial de la tierra agrícola, lo que significaba que esta sería pagada en un largo plazo. Era un proyecto extremadamente audaz, que iba en contra del derecho de propiedad y que no admitía excepciones.

En materia de salud, se aspiraba a impulsar una fuerte inversión en la construcción de hospitales, a través de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, entidad anónima gestionada por el Estado y creada durante los gobiernos radicales, que cumplió una importante labor en materia de políticas públicas. La idea era aumentar en más del doble las nuevas camas de atención pública. Se resolvió, también, implementar el famoso Formulario Nacional de Salud, que incluía una lista completa de medicamentos de uso frecuente —los que hoy se denominan “bioequivalentes”—. Este ordenaba al Laboratorio Chile, entonces una sociedad anónima creada y gestionada por la Corporación de Fomento, asumir la responsabilidad de producción de los medicamentos y su distribución en las farmacias a precio de costo, lo que significó una fuerte baja en los precios y un alivio para la gente. De esta manera, esta inteligente y eficiente medida obligaría al resto de los laboratorios a ajustarse a la competencia.

Estos son solo algunos ejemplos de los proyectos de reformas que ideamos durante el proceso de campaña. En realidad, fueron muchos más. Lo fundamental es que este gran esquema de propuestas se sustentó sobre tres cimientos que inspirarían el modelo reformista del nuevo gobierno: compromiso, convicción de hacer cambios y la posibilidad de realizarlos en libertad. De ahí nuestro lema de gobierno.

Así, poco a poco, empecé a entusiasmarme otra vez con mi participación en un tipo de política que buscaba introducir cambios verdaderos. Se trataba de

transformaciones profundas, estructurales, concebidas en verdadero beneficio de Chile y sus habitantes. Eran nuestras ideas como colectivo, y la posibilidad de, por fin, hacerlas realidad. En medio de este atractivo panorama, intentaba, no sin dificultad, mantener un pie en tierra y recordar la condición con que había aceptado este trabajo: no dejar de lado mi labor como profesional en el ámbito privado. ¡Pero cómo no me iba a entusiasmar! La gente trabajaba con ganas, pasión e idealismo. La posibilidad de un mundo nuevo se abría ante nosotros.

3. La Marcha de la Patria Joven: Un buen pronóstico

Pocos meses antes de las elecciones, Germán Becker ideó algo que sería un espectacular cierre de campaña: la Marcha de la Patria Joven. Consistía en una movilización que partiría en ambos extremos del país, desde Arica y Punta Arenas, de manera simultánea, para desde ahí ir avanzando de ciudad en ciudad, hasta confluir en Santiago. Sus protagonistas serían sobre todo jóvenes, quienes mediante un sistema de postas, saliendo desde sus regiones y localidades, se reunirían con otros en las siguientes, entregándoles sus banderas y pancartas para que las llevaran hasta el próximo destino. Así la columna recorrería todo Chile.

Al principio, miramos a Becker con escepticismo. Era una idea fantástica, pero también muy ambiciosa. Jamás imaginamos el enorme entusiasmo que despertaría en la gente. En la práctica, numerosos jóvenes salieron de sus pueblos convocando a muchos más. No fueron pocos los que, a medio camino, decidieron no regresar y continuar marchando, todos juntos, hasta la capital.

Aquella fue una movilización protagonizada por el pueblo. A Frei nunca le gustó decir que la Democracia Cristiana era un partido “de centro”. Él siempre habló de un colectivo nacional y popular que sobrepasaba los límites partidistas, algo en lo que coincidió plenamente: nacional, en el sentido de que sus puertas estaban abiertas a cualquier chilena o chileno que quisiera adherir y popular por su compromiso con el cambio social, y con la única meta de servir al pueblo y al país. Además, era un partido multiclasista: a nuestras filas se integraban tanto empresarios como gente del mundo obrero, sindical y campesino, así como representantes de los colegios profesionales y sectores medios.

La Marcha de la Patria Joven culminó con un magno evento en el Parque Cousiño de Santiago —hoy Parque O’Higgins—, con más de 300 mil asistentes que se congregaron para escuchar el discurso del candidato demócratacristiano. Fueron cuatro columnas las que llegaron por diferentes sectores del parque, provenientes de todas partes del país. Pocas veces en Chile se han dado concentraciones como aquella. Su masividad no tenía precedentes, la imagen me quedó grabada para siempre. Las palabras de Frei nos sacudieron a todos. “Ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido. Son

mucho más que un hecho electoral. Son la verdadera Patria Joven que se ha puesto en marcha”, dijo al público, de pie, sobre una modesta tarima construida con unos tablones de madera. El resultado de aquel día nos entregó un buen pronóstico de lo que se vendría: nuestro mensaje estaba calando hondo.

4. Un triunfo aplastante y una invitación difícil de rechazar

Anticipábamos el triunfo, pero jamás con la brecha con que lo obtuvimos. La victoria fue aplastante. Eduardo Frei Montalva ganó con el 55,7% de los votos; es decir, con mayoría absoluta. En segundo lugar, Salvador Allende, apoyado por el Frente de Acción Popular (FRAP) logró el 38,6%, y tercero quedó el candidato del Partido Radical, Julio Durán Neumann, con el 5%. Fue la primera y única vez que en Chile ha triunfado un proyecto liderado por un solo partido, inaugurándose, además, el primer gobierno de la Democracia Cristiana en América Latina.

El resultado de esta elección presidencial se ha explicado, fundamentalmente, a partir de dos factores claves: la campaña del terror esgrimida por la derecha anticomunista y lo que se denominó “el Naranjazo”. Ante esta interpretación, creo necesario aportar algunos elementos que, a mi juicio, permiten contextualizar, enriquecer y comprender con mayor profundidad dicho acontecimiento.

Es innegable que parte importante del porcentaje de votación obtenida por la Democracia Cristiana en estas elecciones provino de un electorado que tradicionalmente votaba por conservadores y liberales, pero que en esta ocasión decidió sufragar por la candidatura de Frei ante el temor a que resultase elegido Salvador Allende, quien en las elecciones presidenciales de 1958 había estado muy cerca de derrotar a Jorge Alessandri. Este miedo fue acrecentándose, además, por las propias declaraciones de Fidel Castro, quien ya en 1960 había dejado en claro su decisión de encabezar un gobierno de corte marxista leninista, al estilo de los que regían en la Europa Oriental, bajo la égida de la Unión Soviética. Ello en pleno contexto de la Guerra Fría.

Por su parte, el Naranjazo, otro acontecimiento político que contribuyó a los hechos, fue una elección complementaria efectuada en Curicó y Mataquito, en marzo de 1964, seis meses antes de los comicios presidenciales, tras el fallecimiento del diputado socialista Óscar Naranjo. En su reemplazo, se presentó como candidato su hijo, también llamado Óscar Naranjo, militante del Partido Socialista. En nombre del Frente Democrático —la coalición de derecha

— corrió el conservador Rodolfo Ramírez Valenzuela, mientras que por la Democracia Cristiana compitió Mario Fuenzalida Mandriaza. Naranjo ganó por abrumadora mayoría (con el 39,66%), en un sector que era bastión del mundo conservador. Esto llevó a la derecha al convencimiento de que existía una real posibilidad de que Allende triunfara en las presidenciales.

Tras este episodio, que significó el desplome del Frente Democrático, cundió la alarma: ¿podría la izquierda y su proyecto marxista imponerse realmente en Chile? Conservadores y liberales optaron por el “mal menor” y, abandonando la candidatura de Julio Durán, decidieron apoyar a Frei. Frente a este inusitado respaldo, adelantándose a quienes tratarían de condicionar su programa, el candidato de la Democracia Cristiana enfatizó tajante: “No cambiaré una coma de mi programa ni por un millón de votos”.

La campaña del terror desplegada por la derecha en contra de Salvador Allende fue durísima. Rumores, panfletos, publicaciones, portadas y columnas en los diarios auguraban escasez y caos. Incluso se llegó al punto de utilizar declaraciones de la propia hermana de Fidel Castro, Juanita, detractora del régimen cubano, quien, durante una visita en Brasil, alertó: “Chilenos, los comunistas borrarán el nombre de Dios de la Constitución, y después borrarán la Constitución, como lo han hecho en Cuba”³.

Posteriormente, en 1975, un informe elaborado por la Comisión Church del Senado norteamericano, así como documentos desclasificados a partir de 1999 revelaron que Estados Unidos, a través de la CIA, financió buena parte de esta campaña, especialmente a través del diario El Mercurio.

Dicho informe, asimismo, dio a conocer documentos en que se plantea que la Democracia Cristiana habría recibido financiamiento de este organismo durante la época de campaña. Al respecto, puedo asegurar que nunca estuve involucrado ni informado sobre la existencia de este tipo de situaciones, y el propio Eduardo Frei, en varias oportunidades, aclaró que nunca estuvo al tanto ni recibió aportes de esta naturaleza. El propio reporte destaca que hay dos operaciones en Chile que se definen como casos de “recepción de ayuda sin conocimiento, con dineros provenientes de una agencia extranjera”: la campaña de Eduardo Frei Montalva en 1964 y la de Jorge Alessandri en 1970. Las referencias de la Comisión Church son precisas: “Más de la mitad de la campaña del candidato democratacristiano fue financiada por los Estados Unidos, aunque aquel no recibió información sobre la ayuda... Tras una discusión, el grupo especial

decidió no informar al candidato demócratacristiano, Eduardo Frei, del apoyo encubierto norteamericano a su campaña. Por lo tanto, se movilizó una serie de intermediarios para hacer llegar el dinero a los demócratacristianos... El 27 de agosto de 1962, el grupo especial aprobó el empleo de un tercer país como canal para las contribuciones... El dinero de la CIA, presentado como si fuera de origen privado, le fue entregado a los demócratacristianos por intermedio de un empresario privado”⁴.

Es posible que los aportes mencionados hayan sido efectivos, dada la absoluta falta de regulaciones que las campañas tenían en esa época. Todos los procedimientos fueron informales: no existían recibos, los donantes no acreditaban identificación y tampoco hay antecedentes relativos al origen o montos de las mismas donaciones. Estas fueron “operaciones encubiertas” realizadas a nuestras espaldas, y es probable que los aportes hayan sido efectuados, de manera indirecta, a través de empresarios privados que, por cierto, nunca se identificaron como colaboradores de la CIA. Se trató de una verdadera infamia que tuvo altos costos, no solo para nuestro partido, sino que también para la honra de numerosas personas y, de paso, la credibilidad y decencia del quehacer político y la propia democracia en nuestro país.

Dados estos antecedentes, y a la luz de numerosas investigaciones que concluyen que el triunfo de Eduardo Frei Montalva estuvo determinado fundamentalmente por la campaña del terror y el apoyo de la derecha luego del Naranjazo, explicándolo como resultado de la simple suma de dos tercios sobre uno, creo necesario precisar algunas aristas que complejizan dicho análisis y que nos permitirán entender este triunfo con un enfoque más amplio. En primer término, hay que aclarar que, entre 1958 y 1964, a raíz de diversas reformas, el padrón electoral se había duplicado, lo que significa que el 50% de los electores (cinco millones de personas) votaban por primera vez en la elección de 1964. Por lo tanto, el argumento de que el 56% obtenido por Frei proviniera únicamente en base al apoyo de las cúpulas de derecha y a maniobras anticomunistas resulta altamente cuestionable. Es una justificación insuficiente, que no contempla la arista relacionada al tipo de campaña y acciones políticas desarrolladas por los diversos conglomerados para captar la adhesión de ese gran segmento de nuevos electores.

En segundo término, la campaña desplegada por la Democracia Cristiana fue inédita en Chile y perfiló una nueva forma de hacer política en el país. Se trató de una estrategia audaz, creativa y novedosa, sumada a un programa de gobierno

madurado y elaborado con la participación directa de la propia ciudadanía, donde el mundo independiente tuvo gran peso. La Revolución en Libertad se planteó como un desafío transformador de profundas reformas estructurales, así como una alternativa de proyecto político al de la derecha y del marxismo⁵.

Asimismo, por primera vez en Chile, una campaña electoral apelaba a la ciudadanía. Participación e inclusión fueron su lema y lo que posibilitó que el electorado sintiera como propio el programa de gobierno. Ello sumado a la cercanía de Frei, un líder empático que conocía a fondo la realidad de su pueblo y que supo sobrepasar los límites partidistas. Todo esto generó un alto grado de entusiasmo y afección política en la gente, dando origen a un amplio movimiento nacional y popular. Considerar que la mayoría absoluta que obtuvimos en las urnas solo puede ser explicada en base al apoyo norteamericano o de la derecha es obviar esa realidad, así como subestimar la participación del pueblo chileno en el proceso descrito.

Pocos días después de que anunciaran nuestro triunfo, estando en la oficina del comando, Frei me pidió ir a su despacho, a cuatro puertas de distancia del mío. Ya lo había felicitado, y hasta habíamos celebrado juntos, así que no sabía de qué podía tratarse el asunto. Me dirigí a su oficina con curiosidad.

—Andrés, quiero que usted me acompañe en el gobierno. He decidido conformar un equipo de asesores, el que integrarán Jorge Ahumada, Álvaro Marfán, Jorge Cash y usted. Lo he visto trabajar seriamente en el programa, me he fijado. Quiero que usted sea el coordinador... Pero, por supuesto, es su decisión.

La propuesta me pilló por sorpresa:

—Pero don Eduardo, usted sabe cuál es mi condición. Tengo tres hijas, tengo mi oficina, me va bien y no tengo ningún inconveniente en ayudar. Ya le dije, medio tiempo estoy disponible. Eso es lo que puedo ofrecerle —respondí.

En voz calma, pero firme, Frei insistió.

—Mire, le voy a contar mi experiencia personal. Cuando tenía su edad, me estaba yendo muy bien profesionalmente, me consideraban mucho, y me ofrecieron ser gerente del Banco Sudamericano. En paralelo, me propusieron el cargo de director del Diario Tarapacá, en Iquique. Estaba recién casado con la Maruja, pero tomé la decisión. Nos fuimos a Iquique a trabajar por el partido, a

abrir espacios, y le dije que no al banco, pese a las garantías y al dineral que me ofrecían.

Me quedé pensando un momento. Sentía un torbellino de emociones y contradicciones. Claramente quería sumarme a aquel proyecto que nos representaba a todos, pero también me tironeaba el ámbito personal.

—¿Qué quiere que le diga?... Voy a seguir su mismo camino —respondí al fin.

Pese a que me había pasado toda la campaña repitiéndome a mí mismo que volvería a lo privado tras las elecciones, en ese instante todo me hizo sentido. Recordé la formación recibida de mis padres, en ese ambiente de permanente reflexión y conciencia social. Todo ese esfuerzo y convicción emergieron con fuerza y ello me llevó a dar el paso, sin titubear.

Volví a mi oficina pensando en cómo lo iba a hacer, qué le iba a decir a Inés. “Ya veremos, ya veremos. Puedo descansar en mi hermano Alberto”, me dije a mí mismo, recobrando un poco la tranquilidad. Sabía que podía apoyarme en los míos.

5. Un joven subsecretario

Sergio Molina recién había sido designado ministro de Hacienda. Ese día, pasó frente a mi oficina y me hizo un gesto de saludo con la mano, y luego siguió su camino rumbo al despacho de Frei. Al rato después me mandaron a llamar.

A Sergio lo conocía poco. Habíamos estado juntos en un par de reuniones por temas programáticos, pero eso había sido todo. Yo tenía 27 años. Él no debe haber tenido más de 35.

Frei me hizo tomar asiento y luego me explicó el motivo de la reunión. Molina le había pedido que yo fuera su subsecretario en Hacienda. “El ministro necesita a alguien como usted, que conozca mucho de legislación, que se maneje a fondo en temas tributarios y de economía”, agregó.

No titubeé. Si Frei creía que era lo mejor, yo me pondría a su disposición. “Bueno, don Eduardo. Si usted me lo pide, y don Sergio así lo quiere, acepto”.

El 4 de noviembre de 1964 asumió el nuevo gobierno. La transmisión de mando se hizo, como era costumbre, en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Había gran expectación, tanto en el país como en el extranjero. Frei era un líder que trascendía nuestras fronteras. Su programa de Revolución en Libertad era una promesa de reformas estructurales en el ámbito social y económico, bajo el irrestricto respeto a la institucionalidad democrática. En su elección, había recibido un contundente apoyo ciudadano frente a la propuesta de Salvador Allende, quien postulaba un proyecto de reformas radicales inspirado en un modelo marxista.

Allí, ante el Parlamento, Frei juró como primera autoridad de la nación y presentó también a su equipo de gobierno, compuesto por militantes democratacristianos y destacados profesionales: Bernardo Leighton como ministro del Interior; Gabriel Valdés en Relaciones Exteriores; Sergio Molina en Hacienda; Domingo Santa María en Economía; Juan de Dios Carmona en Defensa; Hugo Trivelli en Agricultura, Tierras y Colonización; Pedro Jesús Rodríguez en Justicia; Juan Gómez Millas en Educación; Modesto Collados en

Obras Públicas; Ramón Valdivieso en Salud; William Thayer en Trabajo y Previsión; Eduardo Simian en Minería, y Sergio Ossa Pretot, quien pese a no contar con una cartera fue presentado en los hechos como ministro de Estado, asumiendo la Consejería Nacional de Promoción Popular. Con esto último, Frei daba una clara señal respecto a la importancia que tendría el fortalecimiento y la participación ciudadana en materia de desarrollo económico y social.

Al recordar este gabinete, es imposible omitir el nombre de Jorge Ahumada, inspirador de la Revolución en Libertad y principal redactor del programa de gobierno, quien se excusó de asumir un cargo ministerial por razones personales y de índole laboral; no obstante, fue una persona de absoluta confianza, amigo y consejero del Presidente Frei, cuya presencia en el gobierno siempre fue gravitante, hasta su temprana muerte en 1965. Su ausencia dejó un gran vacío y nos restó a uno de nuestros mejores colaboradores.

El equipo ministerial quedó conformado por profesionales de alto nivel, un grupo humano sólido que venía trabajando junto a Eduardo Frei por muchos años. Entre ellos, había personalidades tales como Juan Gómez Millas, ex rector de la Universidad de Chile; Eduardo Simian, ingeniero que estuvo a cargo de la exploración y descubrimiento del petróleo en Chile y fundador de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), o Raúl Sáez, vicepresidente de la Corfo quien, entre sus numerosas actividades, integró el selecto grupo de asesores de la Alianza para el Progreso, denominado los “Nueve sabios del continente”. Sáez era un hombre también muy querido, pues tras el terremoto de 1960 había encabezado la famosa “Hazaña del Riñihue”, cuando el embalse de este lago estuvo a punto de arrasar con la ciudad de Valdivia y sectores aledaños.

Algo que caracterizó a los equipos de trabajo conformados por Frei en La Moneda fue su mixtura generacional. El nuevo Presidente tuvo la audacia de integrar experiencia y juventud, generando así un efecto potente en términos de eficiencia y resultados. Gran parte de los subsecretarios éramos muy jóvenes. Yo, con mis 27 años, era el menor. Raúl Troncoso, por su parte, asumió como subsecretario general de Gobierno a los 29. Patricio Rojas fue nombrado subsecretario de Educación a los 31, y Enrique Krauss, que era un año mayor, fue designado subsecretario de Interior. Otros eran Emiliano Caballero, Enrique Evans, Carlos Figueroa, Juan Hamilton, Sergio Saldivia, Aquiles Savagnac y Carlos Valenzuela, por mencionar algunos. En general, ninguno sobrepasaba los 45 años.

A nuestra labor se sumaban subsecretarios mayores, de gran experiencia, como Enrique Bernstein en Relaciones Exteriores y Rebeca Oyanedel en Economía. A veces los jóvenes nos complicábamos, sin saber si tratarlos de “don” o “usted”, pero en eso fue el propio Frei el que se adelantó a zanjar el asunto. “A mí díganme Presidente, y entre ustedes llámense ‘ministro’ o ‘subsecretario’. Pero eliminemos esa cosa tan formal”, nos instruyó.

Dentro de esta nueva generación que asumía el gobierno, destaca también el nombramiento de Rafael Moreno Rojas, a sus 28 años, como vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria (Cora), quien llevaría adelante una de las reformas gubernamentales más emblemáticas y complejas. A ello se suma la designación del joven economista Carlos Massad como vicepresidente del Banco Central. Como ellos, numerosos jóvenes asumieron tareas de alta responsabilidad en intendencias, gobernaciones y en diversas instituciones del Estado.

Así, me incorporé de lleno a mi nuevo cargo, mientras en la casa con Inés sacábamos cuentas, nerviosos. En esa época, cuando uno se trasladaba del sector privado al público, el ingreso podía bajar hasta una cuarta o quinta parte. Fue lo que le sucedió, por ejemplo, a Hugo Trivelli, cuyo nuevo salario como biministro de Agricultura y de Tierras y Colonización no le alcanzaba ni siquiera para pagar el impuesto global complementario correspondiente al año anterior, cuando ejercía en el sector privado.

Inés, por su parte, también se sumó al nuevo proyecto de gobierno, incorporándose al equipo de la señora Maruja Ruiz-Tagle en Cema. A la par, empezó a vender huevos y quesos, para aportar un dinero adicional al presupuesto familiar y aliviar así un poco la carga.

La conducción económica del nuevo gobierno fue encabezada por Sergio Molina, en su calidad de ministro de Hacienda, acompañado por mí como subsecretario hasta 1968, y luego sucediéndolo en la etapa final del mandato presidencial. De su gestión dependería, en buena medida, lograr los exigentes objetivos planteados por el programa. En esta misión, contamos con un equipo de colaboradores de excelencia, encabezados por Edgardo Boeninger como director de Presupuesto, Carlos Massad como vicepresidente del Banco Central, Jaime Ross como director de Impuestos Internos y Tomás Aguayo como Tesorero General de la República.

Inmediatamente después de asumir como subsecretario, el tema de mi edad y estatura salieron a colación. Recuerdo que la primera vez que asistí a una recepción en La Moneda, junto a los ministros y demás subsecretarios, me fui manejando mi auto con traje de frac, con Inés a mi lado, ambos muy elegantes. A la altura de Plaza Italia, nos detuvo un carabinero para preguntarnos dónde íbamos. Le expliqué que nos dirigíamos al palacio de gobierno, y que yo era subsecretario. El hombre me quedó mirando por un buen rato, en actitud de duda. “¿Y este cabro chico creerá que me engaña?”, debe haber pensado.

En la prensa empezaron a llamarme “el Chico Zaldívar”. El diario Clarín hasta me bautizó como “Manzanero Zaldívar”, por el cantautor mexicano Armando Manzanero, muy famoso en esa época y tan bajo como yo. En el Parlamento, a veces, me miraban como a un joven que venía recién saliendo de la escuela. Tuve que aprender a imponerme. Sabía que solo así lograría hacer mi trabajo.

Una parte importante de las responsabilidades que el ministro Molina me delegó se relacionaba con el Parlamento. Mi rol era tratar con ambas cámaras y participar en el desarrollo de los proyectos de ley, sobre todo en materias económicas. En esos años, pasábamos mucho tiempo en el Congreso, a veces incluso más que en las oficinas del propio ministerio y, como sus dependencias se encontraban en Santiago, uno se iba caminando y no tardaba más de cinco o diez minutos en llegar.

En 1965, en el mes de abril, enfrentamos el primer gran desafío: lograr aprobar un proyecto de ley para afrontar sismos y catástrofes naturales. En marzo de ese año, un terremoto de magnitud 7,4 había dejado en el suelo las comunidades de La Ligua, Petorca, Salamanca, Guangualí, La Calera y sectores aledaños. Era un proyecto conflictivo, pues estipulaba que, para casos de emergencia, los que eran muy recurrentes en el país, se confiriese al gobierno de turno amplias facultades en materia administrativa, tributaria y presupuestaria, incluyendo la posibilidad de confiscar y enajenar bienes. Esto último fue interpretado como una osadía extrema, ya que atentaba contra el derecho de propiedad.

En la Cámara, donde contábamos con mayoría, el proyecto se aprobó sin problemas, pero en el Senado la situación fue diferente. Un día, nos encontrábamos reunidos en la Comisión de Hacienda, en la que participaban los senadores Francisco Bulnes, del Partido Conservador; el radical Luis Bossay; Ramón Silva Ulloa, del Partido Socialista, y Tomás Pablo, de la Democracia Cristiana (DC). Los parlamentarios de derecha objetaban el proyecto. ¿Cómo

otorgar tan amplias facultades al gobierno ante una declaración de estado de catástrofe? Estando en plena discusión, se produjo, de pronto, un temblor tan fuerte que uno de los muros de la sala se agrietó. Todos salimos corriendo. En cuanto se calmó la situación y retomamos la discusión, el proyecto fue aprobado y despachado de inmediato. La Ley N° 16.282 está aún vigente y, aunque reformada y refundida, se ha aplicado en muchas catástrofes que han azotado al país, incluido el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Mi trabajo como subsecretario incluía colaborar ampliamente, sobre todo en la tramitación de aquellos proyectos de ley que yo mismo había ayudado a configurar en la etapa programática. En relación con la reforma educacional, me correspondió apoyar en la creación del acuerdo magisterial. En materia de vivienda, colaboré activamente en la aprobación de los recursos necesarios para afrontar el déficit habitacional y la creación del nuevo Ministerio de la Vivienda. Lo mismo respecto a la Promoción Popular y a la Reforma Agraria. En materia tributaria, apoyé la tramitación del impuesto patrimonial o renta presunta, las leyes anuales de reajuste de remuneraciones y, por supuesto, numerosas leyes en diferentes materias.

La tarea legislativa era intensa no solo por los diversos e importantes temas a legislar, sino que también porque no teníamos mayoría en el Senado. Contábamos con 14 o 15 votos, de un total de 45 senadores.

6. Los tres ejes: El cobre, la tierra y la participación ciudadana

Una vez instalados, empezamos a ver de dónde obteníamos los recursos y el respaldo político para hacer los cambios. En efecto, habíamos ganado las elecciones, pero eso no significaba que contaríamos con el apoyo de la derecha para tramitar nuestros proyectos. La izquierda, por su parte, no tardó en dejarnos clara su postura: “A la DC, le negaremos la sal y el agua”, nos advirtió el senador socialista Aniceto Rodríguez, al conocerse la derrota de Allende.

En este escenario, entendíamos que la única manera de seguir avanzando con nuestro programa era movilizar a la gente, a las organizaciones sociales, al mundo sindical. La creación y respaldo de organizaciones de base aseguraría la posibilidad de hacer los cambios necesarios, no desde el Estado, sino que desde la propia comunidad.

Sabíamos que la tarea no era fácil. El mundo sindical, representado en la Central Única de Trabajadores (CUT), se identificaba históricamente con la izquierda. Desde esa perspectiva, la nuestra era una apuesta casi imposible. Pero conocíamos nuestras directrices, sabíamos lo que queríamos lograr, y eso fue fundamental.

En 1965, nos benefició un giro en las circunstancias. En marzo se llevaron a cabo elecciones parlamentarias, eligiéndose 147 diputados y 20 senadores —un poco menos de la mitad del total de cupos senatoriales, pues se renovaron cuatro agrupaciones senatoriales—. La Democracia Cristiana, que se presentaba como partido de gobierno, arrasó en las urnas, logrando una amplia mayoría: elegimos 82 diputados, convirtiéndonos en mayoría en la Cámara, y 11 senadores. Estos resultados vinieron a mitigar, en parte, la falta de apoyo político. Ello nos permitiría tramitar los proyectos con mayor facilidad, junto con consolidar nuestra autoridad como gobierno.

Nos pusimos manos a la obra. Sobre todo, al comienzo, primó en nuestro actuar la convicción y el trabajo hecho a pulso. Siempre he creído en esa frase bíblica que dice: “La fe mueve montañas”. En nuestro caso, creo que efectivamente sucedió así.

Durante los primeros meses, Frei convocó a centenares de dirigentes de organizaciones populares y campesinas a adherir al programa de Promoción Popular. Sergio Ossa, en su calidad de ministro de facto, asumió esta tarea. Además de los sindicatos y colegios profesionales, se buscaba fortalecer otros órganos intermedios, tales como juntas de vecinos, cooperativas, centros de madres, clubes deportivos y juveniles, agrupaciones culturales, centros de padres y apoderados. En 1968, se dictaría la Ley N° 16.880 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, más conocida como Ley de Promoción Popular, la que apuntaba a garantizar las condiciones para el desarrollo, fomento y consolidación de las organizaciones sociales, incluyendo su infraestructura comunitaria y la capacitación de sus miembros. Su propósito era, precisamente, canalizar y facilitar la organización comunitaria.

En este escenario, las juntas de vecinos tenían un rol clave. La ley establecía que debían estructurarse por unidades territoriales y que las municipalidades estaban obligadas a asistir en su definición. Cada unidad vecinal podía elegir sus autoridades, teniendo asimismo derecho a presentar a su respectivo municipio los proyectos de infraestructura o mejoramiento a implementar en sus territorios. La ley obligaba a los municipios, además, a reconocer y escuchar a estas autoridades, y a considerarlas antes de aprobar sus presupuestos anuales.

Todo lo que se logró en términos comunitarios fue extraordinario. Por desgracia, la dictadura militar destruyó con saña buena parte de estos logros. Hoy, en medio de la crisis política que vivimos, cuando todos coinciden en que no basta la democracia representativa, sino que lo que se requiere es una democracia participativa, con ciudadanos empoderados, resulta increíble pensar que estas aspiraciones sean las mismas que planteara, hace casi seis décadas, Eduardo Frei Montalva, un líder visionario que se adelantó con creces a su propio tiempo. Basta leer los párrafos finales de su mensaje de despedida ante el Congreso Pleno, el 21 de mayo de 1970, cuando, reflexionando acerca de la importancia de la participación ciudadana para fortalecer nuestra democracia, declaró:

(...) Los cambios en democracia permanecen en el tiempo, porque se perpetúan gracias al apoyo y el convencimiento de las mayorías. No necesitan del látigo, ni de policías políticas, ni del control de los medios de publicidad, ni de racionamientos, ni de emigraciones en masa, porque tienen su fundamento en la razón y en el espíritu del hombre. (...) El desafío planteado y la respuesta

obtenida señalan claramente la capacidad, la inteligencia y la fuerza de nuestro pueblo para luchar contra la miseria, la injusticia, la dependencia y el subdesarrollo. Hemos visto que podemos realizar transformaciones dentro de la libertad. Hemos visto cómo el pueblo es capaz de asumir sus responsabilidades cuando se le abren las oportunidades. Hemos visto, por fin, cómo no existen obstáculos para un pueblo cuando este asume la decisión de superarlos.

En paralelo, empezamos a avanzar con la chilenización del cobre, recurso considerado por nuestro gobierno como la “viga maestra” de la economía chilena. Nuestro programa no apuntaba a nacionalizar la propiedad, sino que a convertir al Estado chileno en socio mayoritario de las empresas norteamericanas, por entonces dueñas de los yacimientos. A la vez, el control de la comercialización del cobre debía quedar en manos estatales, algo que hasta entonces manejaban los privados, dificultando temas como, por ejemplo, la fiscalización.

Sumado a esto, estaba el plan de invertir y doblar la producción de cobre nacional, y luego incrementar la capacidad de refinamiento del material a nivel local, de forma que no fuese necesario exportarlo para su procesamiento. Esto último fomentaba la mano de obra interna y le otorgaba al producto un valor agregado.

Estábamos convencidos de que esta era la mejor estrategia para acceder a esta riqueza básica de Chile, sin ser una política de ruptura con quienes tenían el control de la misma. Por supuesto, los sectores de izquierda no estaban de acuerdo con nuestro plan. Pocos años después, el gobierno de Salvador Allende modificaría esta senda y llevaría adelante un proceso de expropiación, contando para ello con el apoyo unánime del Parlamento. Fueron dos caminos distintos tras un mismo objetivo: consolidar el control de este recurso minero por parte del Estado de Chile.

A objeto de implementar nuestro proyecto, asumió, en noviembre de 1964, Eduardo Simian como ministro de Minería, quien contaba con una amplia experiencia por su trabajo previo en la Corfo. Simian era un personaje muy conocido y querido por los chilenos. En los años 40, bajo su conducción, se había descubierto el primer pozo petrolero en Magallanes, y en su juventud había integrado el plantel de la Universidad de Chile, siendo considerado uno de

los mejores arqueros en la historia del fútbol chileno. El “Pulpo Simian” y el “Sapo Livingstone” nos habían hecho vibrar en los memorables clásicos universitarios, en los que las rivalidades políticas pasaban al olvido. Simian incorporó a su equipo a Alejandro Hales y a Raúl Sáez para apoyar en el diseño del proyecto. Se sumarían, también, Javier Lagarrigue, José Claro y Andrés Zauschkevich, entre otros, quienes ayudarían a abrir espacios y a transar con las compañías internacionales.

Raúl Sáez lideró las negociaciones en la etapa inicial. La primera en acceder al trato fue la Kennecott Corporation, empresa que controlaba la mina El Teniente y que aceptó vender el 50% de sus acciones al Estado chileno, a cambio de un convenio de administración, gestión e inversión conjunta. Con Anaconda Copper Company, que explotaba Chuquicamata y El Salvador, preveíamos que sería más difícil y que se negarían a negociar.

En paralelo, Codelco fue asumiendo el mando en la comercialización. Esto tuvo varios efectos positivos sobre la economía nacional, especialmente una bonanza en los precios que permitió adicionar importantes recursos para financiar las inversiones requeridas.

En 1968, Frei decidió que era hora de apurar las conversaciones con Anaconda. A esas alturas, yo era ministro de Hacienda y Alejandro Hales se había convertido en titular de Minería. Encabezamos la negociación junto a Carlos Massad, entonces presidente del Banco Central; José Claro, vicepresidente de Codelco, y Alberto Pulido, fiscal del Banco Central, respaldados por un equipo de expertos de Codelco. Costó, pero lo logramos. Anaconda Copper Company accedió a la venta del 50% de sus acciones y, además, se comprometió a vender el resto de su propiedad en un plazo, según recuerdo, de 12 años, a un precio pactado de antemano bastante conveniente para el país.

En paralelo, se echó a andar uno de los proyectos más emblemáticos y controvertidos del programa de gobierno: la Reforma Agraria. Sabíamos, desde un principio, que teníamos todos los ojos del país puestos encima, ya que se trataba de un cambio que muchos temían y otros tantos anhelaban. Bajo el lema “La tierra para el que la trabaja”, esta reforma buscaba modernizar el agro y potenciar la productividad, así como impedir la acumulación de tierras en unas pocas manos. Ello implicaba modificar la ley existente para perfeccionar los mecanismos de expropiación, redistribución de la tierra y sindicalización campesina, de manera de poder llevar a la práctica, en forma sistemática y

sostenible, los distintos cambios involucrados. Asumió esta trascendental y difícil misión, como ministro de Agricultura, Hugo Trivelli, quien había trabajado en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y en la FAO, e incluso había sido director general de Agricultura en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Trivelli trajo consigo a su propio equipo, entre ellos a Rafael Moreno, quien asumió como vicepresidente de la Cora, quedando a cargo de su planificación y ejecución, y a Jacques Chonchol, que asumió como vicepresidente del Indap.

En mi calidad de subsecretario de Hacienda, me correspondió participar en el diseño de esta reforma. Tiempo después, cuando asumí como biministro de Hacienda y Economía, tuve que liderar los temas relativos a su financiamiento. Por todo esto es que pude dimensionar muy de cerca la trascendencia de aquel cambio de paradigma al que nos enfrentábamos como país.

A fines de 1965, comenzaron los trámites ante el Congreso. La iniciativa legal fue objeto de una larga y difícil discusión. Finalmente, en julio de 1967, logró promulgarse la Ley N° 16.640 de Reforma Agraria que, conjuntamente a la Ley N° 16.625 de Sindicalización Campesina, daba existencia a un sistema ágil y expedito de expropiación y asignación masiva a organizaciones de campesinos de aquellos predios que tuviesen más de 80 hectáreas de riego básico, y/o que se encontraran mal administrados, subutilizados o abandonados desde el punto de vista productivo. La estructura legal, económica y social creada por la Reforma Agraria para transitar hacia la eliminación del latifundio fue el “asentamiento”, concebido como una propiedad colectiva de carácter transitorio. Esta figura establecía, además, que los campesinos primero trabajarían la tierra en sociedad con la Cora para, después de cinco años, tomar posesión legal y definitiva de ella, pudiendo optar por mantener la modalidad de asentados, o bien la parcelación y asignación individual por cada familia.

La nueva legislación también abarcaba los derechos de agua y consideraba como causal de expropiación el incumplimiento de las leyes sociales. Así, numerosos campesinos, en virtud de la Ley de Sindicalización Campesina, pasaron a tener el estatus de trabajadores, con un salario mínimo equivalente al del sector industrial y una jornada laboral de ocho horas, entre otros derechos de los que habían estado excluidos. Con ello se saldó una deuda histórica con el mundo campesino, la que se arrastraba desde hacía décadas.

Desde esta perspectiva, la Reforma Agraria logró no solo redistribuir la tierra,

sino que además representó una verdadera lucha por la igualdad de derechos, otorgándoles a los campesinos un sentido de dignidad y ciudadanía equivalente al que ostentaba la gente en el mundo urbano.

Al finalizar el gobierno del Presidente Frei, se habían expropiado mil trescientos predios, equivalentes a más de tres millones de hectáreas; el 15% de las tierras productivas del país. Cerca de 40 mil familias campesinas fueron beneficiadas en esta etapa, aunque lo que proyectábamos originalmente era alcanzar 100 mil. No obstante, sobre la marcha, nos dimos cuenta de que estas cifras eran inalcanzables, en parte, debido a la redistribución de recursos fiscales que debió realizarse en 1968, con el objetivo de financiar el presupuesto para el reajuste de sueldos que había salido desfinanciado. Los recortes afectaron no solo a la Reforma Agraria, sino que también a todos los ministerios y sus proyectos. A raíz de esa experiencia, aprendí que es un error fijarse metas numéricas para el mediano o largo plazo. Los objetivos siempre deben ser acordes a la realidad inmediata que a uno le corresponde afrontar.

Pese a los esfuerzos desplegados y a la importante base de apoyo que existía en el propio campesinado, la implementación de la reforma comenzó a tensionarse, en parte, debido a definiciones internas dentro de la propia Democracia Cristiana, y también a causa de la defensa ejercida por los propios agricultores para evitar las expropiaciones. Algunos, incluso, llegaron a realizar subdivisiones y ventas ficticias de sus propiedades para desviar la atención. Todo ello fue progresivamente obstaculizando y ralentizando el proceso, restringiendo la posibilidad de cumplir con las metas y plazos que nos habíamos propuesto.

Casi al término del gobierno, en enero de 1969, el entonces senador Patricio Aylwin propuso una legislación complementaria que permitió agilizar las expropiaciones. La promulgación de la Ley N° 17.280, conocida como “Ley Aylwin”, explica, en buena medida, la aceleración de este proceso tras asumir Salvador Allende la Presidencia en 1970.

Como era de esperarse, buena parte del mundo conservador se opuso tenazmente a la implementación de la Reforma Agraria. Esta representaba una amenaza directa a sus intereses y no estaban dispuestos a enajenar parte de sus posesiones. Muchos llegaron a compararla con la instalación de los sóviets rusos. La resistencia fue durísima. Los más reaccionarios guardaron un ácido rencor que, años más tarde, se desataría con violencia durante la persecución sindical llevada a cabo por la dictadura, denunciando y entregando listas con los nombres de

aquellos campesinos que participaron en el proceso. En numerosas localidades del país, tales como Lonquén y Paine, centenares de campesinos y sus familias fueron detenidos, torturados, asesinados y hechos desaparecer tras estas denuncias. La mayoría eran beneficiarios de la Reforma Agraria. Hasta el día de hoy existe un sector minoritario y recalcitrante al interior de la derecha que no le perdona a la Democracia Cristiana estas transformaciones.

Desde la izquierda, también nos criticaron. Hubo grupos extremos que, con el afán de apurar el proceso, propiciaron tomas ilegales y actos de violencia. De hecho, en nuestro propio partido, algunos consideraban las medidas insuficientes. Tal fue el caso, por ejemplo, de Jacques Chonchol, vicepresidente del Indap, quien apostaba por una reforma más extrema, señalando incluso que el pago de una compensación a los antiguos dueños de la tierra hacía el proceso de expropiaciones más lento y de menor alcance. Al final, y tras evaluarlo largamente, Frei tomó la decisión de pedirle la renuncia, a lo que Chonchol accedió, seguido de su retirada del partido.

Contrario a lo que algunos creían en ese momento, no se trataba de expropiar por expropiar, ni de arrebatarles a los terratenientes lo suyo, así como así. Lo que se buscaba era corregir un obstáculo tremendo para el desarrollo del país: la existencia de grandes latifundios mal explotados, o simplemente abandonados, en los que no había producción alguna. Paralelamente, teníamos más de tres millones de campesinos viviendo al margen del desarrollo, sin acceso a la educación ni a la movilidad laboral, subsistiendo en condiciones paupérrimas bajo un sistema de inquilinaje, en el cual todo dependía del dueño del predio. Redistribuir esas tierras implicaba introducir una cuota de justicia social a la estructura de la propiedad, dignificar al mundo campesino y modernizar la agricultura, optimizando la producción de alimentos para que el país pudiese autoabastecerse y dejara de depender de las importaciones. Paradojalmente, teniendo grandes extensiones cultivables, suelos de calidad, un clima benéfico para los cultivos y mano de obra suficiente, el Chile de entonces aún debía comprar productos agrícolas en el exterior para alimentar a su población⁶. El lema de la reforma, “La tierra para el que la trabaja”, tenía en ese contexto un significado profundo, atravesado por una mirada claramente progresista, en una sociedad que llevaba siglos aplicando un modelo anquilosado que beneficiaba a unos pocos en perjuicio de muchos.

Posteriormente, al asumir Salvador Allende la Presidencia de la República, el proceso de reforma se acelerará e intensificará la transformación de la estructura

de tenencia de la tierra, con la finalidad de terminar con el latifundio y traspasar los terrenos a la administración del Estado, las cooperativas agrícolas o los asentamientos campesinos. Tras el golpe de Estado de 1973, el régimen militar de Augusto Pinochet decidirá traspasar las tierras a nuevos capitalistas, iniciándose así una contrarreforma que significará, prácticamente, la demolición de todo lo avanzado durante los tres gobiernos anteriores.

Con todo, no puede desconocerse el cambio irreversible que esta iniciativa implicó. Por una parte, transformó el rostro completo del mundo rural de nuestro país al crear nuevas relaciones dentro del sistema, así como entre este y el resto de la economía nacional. Su impacto y trascendencia calaron profundo, significando un cambio estructural y de dignificación del mundo campesino. Para corroborar esto, no es necesario recurrir a libros de historia o hurgar en antiguos archivos. Basta con adentrarse hoy en alguna localidad rural donde se gestó la reforma y conversar con los propios campesinos, tanto quienes vivieron en aquella época, como con sus hijos e, incluso, nietos. Sus relatos confirman que, pese a los muchos sacrificios y bastantes sobresaltos, un sinnúmero de “hijos de la Reforma Agraria” pudo acceder, con esfuerzo y tenacidad, a una vida no solo digna, sino que además marcada por la posibilidad de trazar nuevos surcos y amplios horizontes. Hoy muchos de ellos son agricultores independientes, destacados profesionales y exitosos emprendedores.

La agricultura familiar campesina nació de la mano de la Reforma Agraria, posibilitando, de paso, una mayor racionalización en el uso de la tierra y un mayor control del agua por parte del Estado. La reforma, conjuntamente al plan de desarrollo impulsado por la Corfo a partir de 1966, significó un incremento considerable en la producción frutícola y forestal, y en la creación de agroindustrias en todo el país. Ya a fines de esa década, según datos del Banco Central reconocidos por la propia Sociedad de Agricultura, la economía chilena había logrado establecer relaciones comerciales con países asiáticos, parte de Europa y Estados Unidos⁷. Resulta indudable que, de haberse mantenido el antiguo sistema de latifundio, nuestro país difícilmente habría alcanzado el desarrollo agroexportador que exhibe en la actualidad.

Puede que se hayan cometido errores, eso siempre lo reconocimos. Puede que las compensaciones a los expropiados no hayan sido suficientes, y que tampoco pudimos prever que los bonos con que las financiamos terminarían desvalorizándose. Aun así, tengo la convicción de que, si no hubiésemos implementado la Reforma Agraria cuando lo hicimos, la realidad nacional sería

otra. Quizás aún existirían latifundios. No sé si Chile sería el gran productor agropecuario que es en la actualidad. Probablemente la situación chilena hubiese terminado resultando caótica, producto de la inevitable confrontación social que habría emergido de esa presión desatendida durante tanto tiempo, y que algunos grupos de extrema izquierda incluso estaban interesados en provocar. A mi juicio, fue un cambio necesario que el país requería, el cual no podía esperar.

7. Un Presidente con visión de futuro

Desde los años 40, se venían implementando en Chile y América Latina políticas que buscaban potenciar el desarrollo económico “hacia adentro”, encauzándolo por la vía del control de precios y de las exportaciones, y priorizando la industria local. La importación de la gran mayoría de los productos y materias primas estaba prohibida, y, en caso contrario, los aranceles eran altísimos. Todo esto generaba una tendencia al contrabando, práctica habitual hacia la época en que asumimos el gobierno.

En términos económicos, el modelo que nosotros propiciábamos no correspondía a la economía de mercado de la derecha, ni tampoco a una por completo estatizada como propugnaba la izquierda. Nuestro proyecto respetaba la iniciativa privada, apoyada por la Corfo, pero el gran motor del desarrollo industrial se fundamentaba en el Estado. En dicha figura, este aparecía como dueño de muchas empresas estratégicas para el país, tales como la Compañía de Teléfonos, la Compañía de Acero del Pacífico (CAP), la de agua potable, petróleo, electricidad, ferrocarriles, etc.

En este contexto, la integración latinoamericana se convirtió en una preocupación importante para el gobierno, especialmente con nuestros vecinos más directos, como Perú y Argentina. De hecho, fuimos nosotros quienes inauguramos el trabajo de pavimentación del camino hasta el Paso Internacional Cristo Redentor. Frei quería ser artífice de un proceso de integración de América Latina que permitiera ampliar nuestros mercados y capacidad de competencia, pues estaba convencido de que, mediante la colaboración, era factible subsanar falencias de las industrias locales y potenciar la producción en cada país.

En esa época, los automóviles que manejábamos, por ejemplo, se fabricaban en Chile. Su importación estaba prohibida, salvo excepciones, como el transporte público o los vehículos diplomáticos. Las grandes marcas como Peugeot, Ford y Chevrolet importaban las piezas desde el extranjero y armaban los autos en sus plantas de Arica, Los Andes y Rancagua. Para este caso, lo que Frei proponía era que algunas piezas se fabricaran en Chile, otras en Colombia, otras en Brasil y, así, propiciar una integración económica a nivel continental sin precedentes. Era

una reforma a gran escala.

Con este objetivo en la mira, se apoyó la creación del Pacto Andino, hoy llamado Comunidad Andina. Este organismo se fundó a partir de conversaciones que Frei sostuvo en La Moneda con el Presidente electo de Colombia, Carlos Lleras, en 1965. La idea del mandatario chileno era que, bajo este tipo de acuerdos, pudiésemos avanzar hacia el concepto de un mercado común, una especie de Mercado Interior de la Unión Europea, pero en versión latinoamericana.

El Pacto Andino siguió vigente y avanzando en su consolidación hasta fines de nuestro gobierno. En las décadas posteriores, sin embargo, iría perdiendo alcance debido a diversos factores. En el caso de Chile, sería la dictadura de Pinochet. En el caso de otros países, como Argentina, por ejemplo, ganaría mayor protagonismo el proyecto de Mercosur.

Frei contaba con un gran prestigio a nivel internacional, especialmente en América Latina. En Colombia, Brasil y Argentina lo acogían como en casa. Esto se replicaba en el continente europeo, con el que nuestro gobierno también quiso profundizar vínculos, sobre todo con Europa occidental.

En cambio, la relación de Chile, y de nuestro gobierno en particular, con Estados Unidos era más compleja. Por un lado, no queríamos ser vistos como condicionados por la influencia norteamericana, pero tampoco podíamos cortar los lazos que se habían construido a partir de la Alianza para el Progreso, propuesta en 1961 por el Presidente Kennedy a los países de América Latina. Este programa pretendía evitar que se replicara el fenómeno de la revolución cubana en el resto del continente. Kennedy entendía que había reformas estructurales que eran inevitables, y por eso ofrecía ayuda técnica y financiera a cambio de la supervisión por parte de Estados Unidos. De ahí que los norteamericanos miraran con buenos ojos la Reforma Agraria de Frei, llegando a considerarla incluso una alternativa replicable en otros países.

En Chile, había sectores de izquierda que desconfiaban de cualquier tipo de relación que pudiésemos mantener con los norteamericanos. En nuestro primer año de gobierno, el Senado incluso impidió que Frei visitara Estados Unidos, en una época en que el Parlamento aún tenía la facultad de aprobar o rechazar las salidas oficiales del Presidente. La derecha lo hizo como una advertencia a los cambios anunciados, especialmente la Reforma Agraria, y la izquierda, por

motivos ideológicos y como muestra de su dura oposición. Como bien apuntara Nicanor Parra: “La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”.

En 1965, Frei pudo llevar a cabo su primera gira presidencial a Europa, la que se prolongó casi por un mes. El Presidente fue recibido con inusitado entusiasmo. En el Reino Unido, fue acogido con gran protocolo y deferencia por la reina Isabel II, alojando en el palacio de Buckingham y paseando en carroza junto a ella por las calles de Londres, lo que tuvo su contrapartida años más tarde con la visita de los reyes a Chile. En Francia, sostuvo varias reuniones con el Presidente Charles de Gaulle. Lo mismo ocurrió en Alemania, Italia y Bélgica, siendo recibido por las autoridades de más alto rango. Esa gira serviría a Chile para estrechar relaciones con los principales países democráticos europeos, así como también para lograr apoyo en el ámbito financiero y colaboración en materia de comercio exterior.

Para nosotros, las experiencias democráticas europeas de la posguerra simbolizaban un ejemplo a seguir. Allí había nacido la democracia cristiana, la socialdemocracia y los proyectos liberales. Konrad Adenauer, Robert Schumann y Alcide de Gásperi, entre otros, fueron quienes construyeron los cimientos del modelo de sociedad libre y con justicia social al que aspirábamos, apostando a la integración de nuestra región, América Latina, al igual que a una Europa comunitaria.

Además de estos esfuerzos por abrir nuestras fronteras económicas, hubo muchos otros proyectos que sacamos adelante, tantos que resulta imposible mencionarlos aquí. Sin embargo, hay unos cuantos que considero relevante aludir. Tal es el caso del proyecto de ley que concedió carácter institucional y territorial a Isla de Pascua en 1966.

Desde los años 50, la isla había quedado en manos de la Armada. En 1964, a poco de asumir el gobierno, los rapanuís se levantaron en protestas para denunciar abusos cometidos por los gobernadores marítimos, además de reclamar contra la prohibición que tenían de hablar su lengua originaria y la limitación para desplazarse fuera de la isla, entre otras situaciones. La “Ley Pascua” vino a subsanar varios de estos problemas. Primero, le dio a la isla una estructura administrativa y la integró a la organización territorial chilena, creando el departamento de Isla de Pascua, dependiente de la provincia de Valparaíso. Se establecieron funcionarios y organismos para su gobierno interior, a la vez que se les proveyó de servicios públicos como un juzgado de letras y

una oficina de Registro Civil. Asimismo, se resolvió eximir a sus habitantes del pago de IVA. Varias de estas disposiciones siguen aún vigentes y fueron resultado de una visión que tuvo Frei en un contexto histórico en el que en el mundo entero se estaban dando procesos de descolonización y desanexión territorial. Las medidas apuntaban a integrar a los habitantes rapanuís a nuestro país, respetando sus dinámicas culturales. Debo destacar en esta tarea a Juan Hamilton, quien, en su calidad de subsecretario del Interior, encabezó dicho trabajo de gobierno.

En materia de desarrollo tecnológico y comunicaciones, cabe mencionar la creación del Canal de Televisión Nacional, el cual inició sus transmisiones de manera oficial el 24 de octubre de 1969. La televisión había llegado a Chile a fines de los 50, pero no se masificó sino hasta finales de los 60. Hasta entonces, los chilenos se informaban a través de la radio y, en menor medida, mediante la prensa escrita. El periodismo político era esencialmente radial, con voces como las de los periodistas Luis Hernández Parker y María Eugenia Oyarzún.

En 1967, Frei me encomendó integrar una comisión junto a Patricio Rojas, Juan Hamilton —entonces ministro de Vivienda y Urbanismo— y Jorge Navarrete, quien al año siguiente se convertiría en el gerente general del proyecto, con solo 22 años edad. Nuestra misión era levantar los cimientos para la creación de una televisión nacional que tuviera cobertura en todo el país. Ya existían algunos canales, pero el alcance de la señal era muy limitado. TVN llegó para inaugurar una nueva etapa. De ahí en adelante, la televisión pasó a jugar un rol clave en los debates políticos, generando espacios en la programación para abordar estas temáticas frente a los ojos atentos de millones de chilenos.

Gestiones similares se realizaron en materia de computación. La idea inicial surgió de Enrique D’Etigny, entonces decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y de Álvaro Marfán, director de la Oficina de Planificación (Odeplan), entidad creada por encargo del mismo Frei, en 1967, con el objetivo de estructurar un sistema de planificación nacional para el desarrollo económico y social. Ellos nos convencieron de que era fundamental adquirir un computador. El aparato costó cerca de un millón de dólares de la época. Se resolvió instalarlo en la Universidad de Chile, pero era tan grande y complejo que hubo que construir un edificio para que allí operara.

A partir de esta experiencia, Frei decidió crear, en 1968, la Empresa de Servicio de Computación (Emco), que años más tarde se denominaría Empresa Nacional

de Computación e Informática (Ecom). Allí operaban 40 o 50 computadores, cada uno del tamaño de un escritorio y a cargo de un grupo de ingenieros especializados, al servicio de las necesidades de los organismos de servicios públicos. Así, Tesorería, Impuestos Internos, Aduana, Ferrocarriles y CAP, entre otros, empezaron a computarizarse progresivamente.

No puedo dejar de mencionar, calibrando la importancia que el Presidente otorgaba al área científica y tecnológica, el hecho de haber acogido la demanda del mundo académico y científico para crear un Centro Chileno de Estudios Nucleares (CChEN). Uno de los pioneros de esta iniciativa en Chile fue el doctor Ricardo Cruz-Coke. Dicho ámbito no solo era foco de interés para las grandes potencias del mundo, sino que además representaba un tipo de energía clave para el desarrollo productivo, así como también para el ámbito de la medicina y las ciencias. Había un mundo por descubrir. Modestamente, y dentro de las limitaciones con que se podía abordar en ese tiempo, se aprobó la creación del Centro de Estudios Nucleares (CEN) La Reina y, posteriormente, del CEN Lo Aguirre, en la comuna de Pudahuel, con fines de investigación para usos pacíficos de la energía nuclear. A ellos se sumaron el Instituto de Medicina Nuclear (IMN) y el Centro de Estudios Nucleares del Ejército (CENE).

En 1964, la Corfo creó también la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), en parte, como respuesta a las falencias en el sistema de comunicaciones que había quedado en evidencia tras el terremoto de Valdivia, cuatro años antes. A la vez, era imprescindible contar con una instancia que pudiese asumir el desafío de conectar nuestro largo y estrecho territorio desde Arica a Puerto Williams, incluyendo Isla de Pascua y las zonas insulares, a través de nuevos y modernos sistemas de telecomunicaciones, especialmente satelital. Para ello se construyó la Estación Longovilo, primer telepuerto de comunicación satelital en América Latina, ubicado en las proximidades de Melipilla. Gracias a sus antenas, Chile fue el único país de la región que pudo transmitir en directo la llegada del hombre a la Luna. Todo esto era como una premonición de lo que viviríamos 50 años más tarde. Otro símbolo de ese legado es la Torre Entel, que se construyó entre 1969 y 1970, y que por un buen tiempo fue el edificio más alto de Chile. Hoy es propiedad de una empresa privada y lugar que convoca masivamente a los santiaguinos cada Año Nuevo, con un espectáculo de fuegos artificiales.

En materia de conectividad territorial se realizaron importantes inversiones, tales como una moderna dotación de aeronaves a la Línea Aérea Nacional (LAN). En

el ámbito de ferrocarriles, se optimizó su equipamiento, electrificando buena parte de su red y soldando rieles hasta Concepción.

La Corfo, como principal motor de la industrialización del país, con participación público-privada, llevó adelante una gran inversión en materia de desarrollo de la industria petroquímica, la producción de celulosa —con las plantas de Constitución y Arauco, hoy de capital privado—, la industria electrónica, la del acero, nuevas plantas generadoras de energía hidroeléctrica —a cargo de Endesa— y la industria azucarera —con IANSA—. Todo este impulso de desarrollo industrial fue posible gracias a los importantes recursos obtenidos a través de la chilenización del cobre, por los altos precios que el metal alcanzó en el mercado, y al hecho de que Codelco asumió su comercialización.

Indudablemente, no bastaba implementar solo proyectos de industrialización en los diversos rubros productivos del país. Junto al capital económico, era fundamental potenciar también nuestro capital humano, y, para ello, a instancias de la Corfo y del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), en 1966 se creó el Instituto Nacional de Capacitación (Inacap), con participación también de la empresa privada y la cooperación de los gobiernos de Bélgica, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Italia y Suiza. Allí se formarían técnicos profesionales a nivel de educación superior. Hoy dicha institución está presente en diversas regiones del país, conjuntamente al DUOC y otros establecimientos de la misma índole, formando a miles de técnicos profesionales en diferentes áreas esenciales para el crecimiento económico del país.

Asimismo, se dio un gran impulso en materia de inversión de obras públicas, destacándose, entre otras, la construcción del túnel Lo Prado; la doble vía de Santiago a San Fernando; la pavimentación del camino que nos unió con Argentina por el Cristo Redentor, además de varios cientos de kilómetros de caminos transversales. Se construyeron el nuevo aeropuerto de Pudahuel y varios otros, como el de Balmaceda en Aysén y el de Isla de Pascua, así como importantes embalses de riego, entre los que destaca el de La Paloma, ubicado en Monte Patria, Limarí, el más grande de Chile y el segundo más grande de Sudamérica.

En 1965, se consolidó el proyecto de construcción de un metro para la ciudad de Santiago. Pese a que esta era una idea que se venía planificando desde mediados de los años 40, los técnicos no lograban llegar a acuerdo sobre si llevar adelante

esta inversión, pues consideraban que había otras prioridades con mayor rentabilidad social. Sin embargo, Frei estaba decidido a implementarlo. Una vez más predominó su visión de futuro, esforzándose para que se realizaran los estudios necesarios para su ejecución y generando los contactos para abrir líneas de financiamiento a largo plazo. Finalmente, encontró en Francia una respuesta para viabilizarlo, bajo una línea de créditos convenientes para la ejecución de las primeras inversiones y dotación de equipamiento. Incluso tomó la decisión de comenzar por la Línea 1, de poniente a oriente, y dejar para una segunda etapa la Línea 2, de norte a sur, proyectándose una red integrada de cinco trenes subterráneos de una longitud de 80 kilómetros. Al respecto, recuerdo que un día, conversando con el Presidente en su oficina, me planteó el tema y acordamos que, sin más consulta, se procedería a firmar los contratos con los franceses, dándole el “vamos” a este importante proyecto. Creo que, de no haber sido así, habría pasado mucho tiempo antes de afrontarlo. Yo mismo viajé a Francia y firmé los contratos que, con el tiempo, permitieron hacer realidad esta visionaria obra pública. En 1969, comenzaron las obras de construcción de la Línea 1 del Metro, el que se inauguraría seis años más tarde.

El Presidente Frei entendía la vivienda como “un bien de primera necesidad, al que toda familia debe tener acceso”. De ahí que, dado el déficit habitacional de la época, se diera un importante impulso a la inversión en viviendas sociales, entregándose más de 200 mil sitios urbanizados a través de la denominada “Operación Sitio”. Ello significó la construcción de un promedio de 30 mil viviendas anuales aproximadamente, por cierto, un nivel máximo histórico en el país. Para ello se creó, en 1965, junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu), organismo autónomo que, con una colaboración público-privada, llevaría a cabo también proyectos de remodelación urbana para recuperar barrios, especialmente en favor de sectores de ingresos medios. Algunos de los más destacados son las Torres de San Borja, la remodelación del sector Portugal, la Villa Diego Portales, la Villa Frei y la Villa La Reina, entre otros.

8. Inflación, la madre de las batallas

En el ámbito financiero, también se implementaron medidas decisivas e innovadoras. Nuestro país venía arrastrando una inflación crónica por varias décadas, y carecía de una política de ahorro que afrontara este grave problema. No había ningún tipo de incentivo o estrategia al respecto, lo que afectaba especialmente a quienes vivían de un sueldo o salario. El dinero se devaluaba en las arcas de los bancos y solo estaban protegidos aquellos que eran propietarios de inmuebles o de la tierra, o quienes realizaban transacciones especulativas. Por su parte, quienes logaban obtener créditos en el Banco del Estado, o de apoyo a la inversión industrial en la Corfo, terminaban pagando una cantidad inferior a su valor real inicial. Para compensar la inflación, las tasas de interés en la banca privada resultaban altísimas.

Con el objetivo de abordar este problema y subsanar el déficit de viviendas, el gobierno decidió respaldar con fuerza el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (Sinap), mecanismo financiero creado en 1960 para fomentar el ahorro y posibilitar a los ciudadanos, mediante préstamos reajustables otorgados por asociaciones privadas a largo plazo, la adquisición y edificación de viviendas. Este sistema permitió a miles de familias chilenas, especialmente de sectores de ingresos medios, acceder a la vivienda propia. Lamentablemente, tras el golpe militar de 1973, pese a operar en teoría, en la práctica el sistema dejó de funcionar. Bajo oscuras artimañas, cesó el otorgamiento de créditos, y el fisco se apropió de los ahorros de aproximadamente 70 mil personas. Esta es una deuda pendiente que espero se salde con meridiana justicia algún día.

En el mismo ámbito, todos aquellos empresarios que accedían a créditos blandos no reajustables en la Corfo o en el Banco del Estado obtenían un inmenso subsidio, pues dichos créditos se otorgaban en términos nominales o con bajas tasas de interés. Como eran créditos para construcciones industriales, compra de maquinaria o capital de trabajo a varios años plazo, finalmente el pago era muy inferior al valor real de lo prestado. De ahí nace, precisamente, en 1967, una política propuesta por el Banco Central de la época de crear, para los efectos de este tipo de créditos, una unidad de cuenta denominada “unidad de fomento”

(UF), la que se reajustaría día a día de acuerdo a la inflación o al aumento que experimentase el Índice de Precios al Consumidor. A partir del gobierno de Pinochet, esta se extendería a créditos de cualquier naturaleza. Así, la vilipendiada y cuestionada UF, que por muchos años causó largas polémicas, logró cumplir finalmente un importante rol en materia de estabilidad financiera para el país. No hay que olvidar que incluso un candidato a la Presidencia de la República, en los años 90, prometió eliminar la UF en cinco minutos, idea con que simpatizaron muchos de sus electores. No obstante, es probable que él mismo, en su calidad de empresario bancario, se haya beneficiado bastante de ella.

Junto a todo esto, cabe destacar que, en Chile, hasta antes del gobierno de Frei, se acostumbraba establecer el denominado “tipo de cambio fijo”; es decir, que la autoridad fijaba el valor de la moneda nacional asociada al valor del dólar norteamericano. Ello, evidentemente, determinaba no solo el precio de la divisa local, sino que todos los precios de importación y exportación se regulaban por el mismo tipo de cambio. Dado que el país, año a año, y desde la década de los 40 al menos, experimentaba inflaciones superiores a los dos dígitos (30%, 40% y más), todos los gobiernos debían en algún momento afrontar esta realidad. Para ello, se procedía a “caóticas devaluaciones” que provocaban verdaderos terremotos económicos, desembocando incluso en crisis sociales y económicas de devastadoras consecuencias, tales como las ocurridas durante los gobiernos de Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri, Salvador Allende, y culminando con la de 1982, durante la dictadura militar. De ahí que destaque la acertada maniobra de Carlos Massad, quien propuso establecer un sistema de valor de “tipo de cambio flotante”, que reconociera, mes a mes, el efecto inflacionario de acuerdo a cálculos de valorización de una canasta de monedas a nivel internacional. Así, durante nuestro gobierno, el dólar se mantuvo estable, reconociendo gradualmente el efecto inflacionario y sin caer en una brusca devaluación, evitando las graves consecuencias que ello producía en nuestra débil economía.

Hoy, transcurrido más de medio siglo, creo posible relatar una decisión en la que participé y que atañe a la autonomía del Banco Central, la que debiese preservarse en atención al buen desempeño económico de cualquier país. Cuando, en marzo de 1968, el Presidente Frei me pidió asumir como ministro de Hacienda, le solicité algo que parecía insólito: no asumir la presidencia del Banco Central conjuntamente al ministerio, como se acostumbraba en aquella época. Dicha petición tenía sólidos fundamentos, pues, durante todo el período que trabajé como subsecretario junto a Sergio Molina, fui testigo de las

permanentes presiones a las que era sometido el ministro en aras de incrementar el gasto público. De ahí que, para poder salir adelante, este no tuviera más opción que sacarse el sombrero de ministro y ponerse el de presidente del Banco Central, ordenando la emisión de los recursos necesarios para afrontar la demanda. Así, le dije al Presidente Frei: “Prefiero tener un socio en el cual ampararme, y que otra persona ocupe el cargo de presidente. ¿Quién mejor para ello que Carlos Massad, actual vicepresidente del Banco Central?”. No me equivoqué. Era un inicio, pero di un pequeño paso en el sentido correcto. Durante tres años conté con un socio que, al menos, me permitía controlar, en parte, las permanentes demandas de mayor gasto fiscal sin financiamiento.

Nuestro gobierno logró hacer grandes transformaciones, aunque en numerosas ocasiones nos vimos acorralados desde ambos extremos. Derecha e izquierda dificultaban la tramitación de proyectos de ley que eran fundamentales para financiar las gestiones del gobierno, generando varios conflictos que acentuarían la crisis económica de 1968. Este choque de fuerzas se manifestó en diferentes formas, pero una de las más evidentes fueron las discusiones al interior del Senado. Allí, a diferencia de la Cámara Baja, siempre fuimos minoría, incluso en la segunda parte de nuestro gobierno.

Tuvimos que hacernos cargo de la acumulación de demandas no resueltas que, desde hacía varios gobiernos, venían afectando a la ciudadanía, incluidos funcionarios públicos y hasta de las Fuerzas Armadas. La creciente inflación de los últimos gobiernos había impedido que se aprobaran los reajustes salariales necesarios. El problema inflacionario nos pesó hasta el último día de nuestro mandato. Si bien echamos a andar el proceso de reformas, a la vez que ideamos mecanismos para rebajar y contener el avance de la inflación lo más que pudimos, esta fue una avalancha imposible de frenar. Al finalizar nuestro gobierno, la inflación cerró con 28%, habiéndola recibido del gobierno de Jorge Alessandri en 37%. Por supuesto, habíamos sido derrotados en esta materia... A ello se sumaba el hecho de que la normativa constitucional, durante esa época, permitía al Parlamento aprobar leyes populistas que, en realidad, no tenían posibilidad de financiamiento. En ese sentido, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para mantenernos firmes y no ceder a la presión de los partidos, lo que a menudo era interpretado por la oposición, e incluso por la ciudadanía, como una reticencia a transigir. La izquierda y la derecha sabrían usar esto a su favor. La crisis al interior de la Democracia Cristiana, con la inminente separación del sector que daría origen al MAPU, no haría las cosas más fáciles. Finalmente, quedaría en evidencia que lo que nos faltó, además de tiempo, fue cohesión

política.

9. Un ministro con puño de hierro

La pedregosa búsqueda de un acuerdo para la aprobación del proyecto de reajuste salarial de los sectores público y privado venía dándonos dolores de cabeza desde hacía un buen rato. Entre 1966 y 1967, ya habíamos tenido huelgas organizadas por los gremios, buena parte de ellos alineados detrás de la CUT. El gobierno, en su programa, se había comprometido a reajustar los salarios anualmente en el mismo porcentaje de la inflación del año precedente, pero la realidad del país había hecho de nuestra promesa un objetivo difícil de alcanzar.

Hacia fines de 1967, convencidos de que la situación de las arcas fiscales no permitiría aprobar el alza que demandaban los trabajadores, propusimos una alternativa. Se trataba de un sistema de ahorro forzoso al que denominamos Fondo de Capitalización Nacional de los Trabajadores. El proyecto consistía en trasladar la propiedad de varias de las empresas estratégicas que el Estado controlaba en ese entonces —tales como Endesa, CAP, Enap, entre otras— a un fondo administrado por un directorio colegiado, en el que se invertirían los recursos que, año a año, aportarían los trabajadores, equivalente al 25% del reajuste anual del sueldo. Dicho sistema permitiría a los trabajadores, en el transcurso del tiempo, pasar a ser dueños de parte importante del patrimonio productivo que se había acumulado en la Corfo, de propiedad del Estado. Esto era equivalente a lo que hoy se entendería como una suerte de fondo mutuo de los trabajadores. La rentabilidad del fondo se distribuiría entre sus partícipes año a año, y la participación de cada trabajador se expresaría en cuotas que podrían transarse o venderse en determinadas condiciones en el mercado financiero y libremente, una vez acogida la persona a jubilación. El objetivo era fomentar el ahorro interno, mientras la disponibilidad temporal de estos recursos posibilitaría efectuar la inversión social requerida para implementar las reformas. De haberse implementado este proyecto, en el largo plazo, los trabajadores habrían pasado a ser dueños de dichas empresas.

El proyecto, sin embargo, no tuvo buena acogida, siendo bautizado por la prensa de entonces como los “chiribonos”, en alusión al término “chirimoyo”, utilizado para denominar coloquialmente a los cheques sin fondo. La propuesta fue

rechazada por varios sectores, no solo desde los sindicatos y la izquierda, sino que también por los partidos de derecha.

Con el tiempo entendí que el verdadero motivo por el que la izquierda rechazó la iniciativa fue, en realidad, que nuestro proyecto iba en contra de su lógica, ya que ellos postulaban que la propiedad de los medios de producción debía estar en manos colectivas del Estado. En tanto, desde la derecha sentían que estábamos transfiriendo a los trabajadores un patrimonio demasiado valioso.

En un esfuerzo por contener la crisis, el 15 de febrero de 1968 se decidió la salida del gabinete de los ministros de Interior, Bernardo Leighton; de Hacienda, Sergio Molina, y de Economía, Domingo Santa María. En reemplazo de los dos primeros asumieron, respectivamente, Edmundo Pérez Zujovic y Raúl Sáez. En el caso de Santa María, se me designó para relevarlo.

Raúl Sáez tenía una larga trayectoria y amplia experiencia trabajando en empresas estratégicas del Estado. Entre los años 40 y 60, había pasado por Endesa, CAP y el Departamento de Planificación Nacional de la Corfo. Era un hombre respetado por sus conocimientos, pero el escenario era tan complejo que duraría tan solo dos meses en el nuevo cargo.

Además de su gran capacidad profesional, Sáez contaba con una muy buena acogida entre los parlamentarios de oposición radicales, y se esforzó por tratar de negociar una salida para aprobar el proyecto de reajuste de remuneraciones. Me pidió que lo ayudara en esta tarea, pues con el tiempo yo había adquirido experiencia en la materia. En su negociación, el ministro pedía que se mantuviera un artículo del proyecto de ley que establecía que, en caso de que en una empresa se otorgase un reajuste salarial superior al 100%, esta debía absorber con cargo a sus utilidades ese mayor reajuste y no podría traspasarlo al consumidor a través del precio de venta de sus productos. Esa norma era muy importante, precisamente para contener la presión inflacionaria. Por razones que en ese momento desconocíamos —pero que más tarde me relataría el propio Raúl—, el ministro del Interior, Edmundo Pérez, por supuesto sin mala intención, habría negociado con la CUT el retiro de dicha norma del proyecto. Se produjo una situación sumamente tensa, que derivó en la decisión del ministro Sáez de presentar su renuncia en términos indeclinables.

Recuerdo que la situación era tan crítica que, sin el conocimiento del Presidente Frei, decidimos trasladarnos casi todos los ministros hasta la casa de Raúl para

intentar convencerlo de que no dimitiera. Considerábamos su permanencia vital y un gesto necesario para fortalecer al gobierno. A pesar de todos los argumentos planteados, el ministro se mantuvo en su decisión. Se sentía desautorizado y consideraba haber perdido su capacidad negociadora.

Al enterarse, Frei de inmediato solicitó una reunión, a la que fuimos convocados Carlos Massad, entonces vicepresidente del Banco Central; Jorge Cauas, asesor del directorio de dicho banco, y el que habla. Allí, preocupado, nos expuso sobre el grave momento político que vivíamos y la necesidad de resolverlo con urgencia. Debía nombrarse un ministro de Hacienda cuanto antes. Fui el primero en intervenir. Sin pensarlo dos veces, propuse a Massad, economista de alto prestigio, pero este se excusó por considerar que podía ayudar más desde su lugar en el banco. Lo mismo sostuvo Jorge Cauas. Después de escucharnos, el Presidente me pidió que aceptara asumir el cargo en forma interina, mientras debía mantenerme además como titular de Economía. Acepté. La urgencia no dejaba otra opción. Tiempo después me enteré de que había sido el propio Raúl Sáez quien le había propuesto mi nombre al Presidente Frei. Al recordar todo esto, me parece increíble que pudiese entregarse tanta responsabilidad a un joven que recién cumplía 31 años. Esa apuesta del Presidente por mi persona vuelve a confirmarme la tremenda confianza que él tenía en la juventud, esa joven generación que acogió siempre con tanta convicción, y que lo acompañó muy de cerca en el desafío de hacer posible la Revolución en Libertad.

Esa noche volví a mi hogar agobiado por el peso de la responsabilidad que asumía. Esperaba que por alguna parte se asomara algún tipo de solución, pero el panorama era bastante negro. La oposición de la izquierda y la derecha eran férreas. El Partido Nacional estaba encabezado por un hombre duro, el senador Pedro Ibáñez, quien no nos quería para nada.

Ya en mi casa recibí múltiples llamados, así como el incondicional apoyo de mi familia. Inés, como siempre, estuvo a mi lado, animándome. Poco después me dormí.

Al día siguiente, todos los titulares de los diarios hacían mención al nuevo responsable del Ministerio de Hacienda, un joven que probablemente fracasaría en un intento por lograr lo imposible. Muy temprano, ya rumbo al ministerio, se me ocurrió ir a ver a don Fernando Alessandri, senador en ese entonces, quien había sido mi profesor en la Escuela de Derecho. Siempre le tuve gran aprecio por su calidad humana. Hacía tiempo que no lo veía, y estaba al tanto de que no

asistía a las sesiones del Senado, pues tenía problemas a la vista y le afectaba el humo de los cigarrillos que fumaban en abundancia los senadores en la sala durante esa época.

Al llegar a su oficina, la secretaria, a quien conocía por haber estado allí como estudiante para dar mis pruebas, me miró extrañada. Le conté que necesitaba conversar con su jefe. En ese instante, vi aparecer a don Fernando en el dintel de la puerta. Me recibió con una frase que aún recuerdo: “¿Qué hace aquí, ministro? Si necesitaba hablar conmigo, debería haberme citado usted en su oficina”. No llevaba nada preparado, ni siquiera tenía argumentos para justificar mi presencia ahí, pero daba por supuesto que él debía estar informado de lo que sucedía en el país. “Don Fernando, en mi calidad de ex alumno, y, como una persona que lo aprecia por su vida pública, vengo a pedirle que me aconseje y ayude”, le dije. A continuación, le expliqué lo que pasaba y que creía que esta crisis no podía seguir profundizándose, ya que aquello iba a tener pésimas consecuencias para el país. “Vengo a pedirle que me ayude a obtener en su sector los votos necesarios para aprobar la Ley de Reajustes. Creo que usted puede hacerlo como hombre de Estado...”, continué. Le recordé cómo, en abril de 1957, cuando el Presidente Ibáñez había atravesado una situación crítica con gran violencia en las calles, él, siendo presidente del Senado, lo había ayudado entregándole las herramientas para evitar un caos mayor. Esto, incluso, a pesar de que el propio don Fernando, su padre y su familia habían sido condenados al exilio por la dictadura de Ibáñez en 1927.

—¿Qué apoyo necesita para salir con éxito de todo esto? —se limitó a preguntarme.

—Dos votos del Partido Nacional.

—¿Y qué otro senador cree usted que sería posible?

—Francisco Bulnes —respondí.

Sin intervalo, tomó el teléfono y le preguntó al senador Bulnes si podía venir a reunirse con nosotros en su oficina. Llegó al poco rato. Para mi sorpresa, después de los saludos, el propio don Fernando tomó la palabra. Tras explicar su preocupación por lo que estaba sucediendo, procedió a preguntarle al senador si estaba dispuesto a acompañarlo en esta iniciativa. Su respuesta fue afirmativa. Terminada la entrevista, y cuando me despedía agradeciendo su decisión, me

atreví a preguntarle qué pasaría con su partido. Solo me respondió amablemente con una sonrisa: “Donde mandan cardenales, no mandan sacristanes”.

Y así fue como sucedió. Mi compromiso con él se guardó en estricta reserva; solo se lo informé al Presidente Frei. Al día siguiente, se reunió la Sala del Senado para votar el proyecto de Ley de Reajustes, que nos tenía contra las cuerdas. Nadie esperaba poder modificar la cerrada oposición que enfrentábamos. Las tribunas estaban llenas y la expectación era total. Los periodistas iban de un lado a otro, reportando minuto a minuto. Presidía el senador Salvador Allende. Inaugurada la sesión, se abrió una de las puertas de acceso y apareció el senador Fernando Alessandri, quien, como habíamos mencionado anteriormente, hacía meses que no concurría por temas de salud. Por supuesto, se produjo un murmullo en la sala, y miradas sorprendidas se entrecruzaron entre los parlamentarios de derecha. Don Fernando tomó asiento tranquilamente. Acto seguido, Allende dio orden al secretario del Senado de que tomara la votación, la que se hacía en términos nominales, por orden alfabético. Primer llamado: “Senador Fernando Alessandri”. Con voz clara y pausada, afirmó: “Voto a favor del proyecto”. Un alboroto recorrió la sala. Sin duda, el anuncio produjo un efecto de sorpresa, pero fue poco comparado con lo que ocurrió cuando, a continuación, el senador Francisco Bulnes expresó su voto afirmativo... En una fracción, todos los presentes comprendieron lo que había pasado. ¡Habíamos logrado pasar la valla! Aprobábamos un proyecto que parecía imposible, que había tenido en vilo al gobierno, que había hecho caer injustamente a dos grandes ministros de Hacienda, a quienes debo, por cierto, gran parte de mi formación, y quienes dieron tanto a nuestro país. Jamás se borrará de mi mente esa escena: mis padres estaban en la tribuna con rostros angustiados, junto a Inés, quien esperaba a nuestra cuarta hija, Claudia, con siete meses de embarazo. Los periodistas me habían hecho una apuesta, convencidos de que la guagua nacería antes que la Ley de Reajustes. Esa vez les gané yo.

Continué con mis labores en la cartera de Economía y como ministro de Hacienda interino, mientras se resolvía el nuevo nombramiento del titular. Sin embargo, al cumplirse un mes, el Presidente Frei me pidió que asumiera el cargo formalmente. Así, el 15 de marzo de 1968 asumí como biministro de Hacienda y Economía.

Ese año continuó marcado por protestas sociales y reiterados paros nacionales, a tal punto que, el 23 de noviembre de 1968, se declaró estado de emergencia en el país. El gobierno debió autorizar la acción policial por violentos enfrentamientos

que derivaron incluso en víctimas fatales. Tal fue el caso de la dramática situación vivida el 9 de marzo de 1969, en el sector de Pampa Irigoin, Puerto Montt, durante el desalojo de una ocupación ilegal de terrenos a manos de fuerzas policiales que, lamentablemente, costó la vida a diez pobladores. Posteriormente, un grupo de parlamentarios presentó una acusación constitucional en contra del ministro Edmundo Pérez por la forma en que se había manejado esta situación. La medida, sin embargo, no prosperó. Y es que, pese a asumir toda la responsabilidad en los trágicos hechos, el ministro nunca estuvo al tanto del actuar policial ni impartió orden alguna a Carabineros. Meses más tarde, presentaría su renuncia. Hasta el día de hoy estoy convencido de su inocencia. Años después, sería asesinado por un grupo de extrema izquierda en represalia por los sucesos descritos.

Desde mi primer día a la cabeza de Hacienda, asumí la misión de sacar adelante el reajuste salarial en sus últimos trámites. Me la pasaba en negociaciones, tratando de apurar este pago que llevaba varios meses de atraso —y que seguiría prologándose hasta el mes de junio de ese año—, a la vez que hacía lo imposible por controlar el problema de la inflación que continuaba tragándose los recursos. La CUT, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), los funcionarios del Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, Carabineros, los profesores, todos pedían reajustes especiales e intentaban lograr mayores beneficios, pero el país no tenía cómo financiarlo. Era un cuadro realmente dramático. No tenía posibilidad de caja, debido a que las leyes de financiamiento estaban también estancadas... Tampoco estaba en posición de endeudarme, o de pedirle al Banco Central un préstamo, porque con ello se provocaría aún más inflación. Me sentía como un malabarista.

Ante los ojos de la gente y de la prensa, me fui configurando como un personaje de carácter duro, llegándose a pensar que mi reticencia a ceder era casi una cuestión de tozudez. Desde la izquierda más radicalizada me cuestionaban, usando el argumento de que yo no era economista y que no sabía lo que estaba haciendo. Además, mi apariencia joven y hasta mi contextura física —pesaba con suerte 50 kilos— hacían creer a algunos que podían pasarme por encima. Eso me obligaba a mostrarme aún más estricto.

Desde la Democracia Cristiana, también recibía críticas, sobre todo a medida que se acercaban los comicios de 1969. “¡Vamos a perder las elecciones!”, me decían en el partido, y tenían razón. No obstante, mi principal responsabilidad era desempeñar a cabalidad el cargo que se me había confiado.

Mi relación con los dirigentes sindicales era dura y llegó a niveles de tensión insólitos. En diciembre de 1968, mientras me encontraba en una reunión en otro ministerio, Hernán del Canto, secretario general de la CUT, entró a mi oficina con un grupo de personas provocando un gran desorden. Pero hubo también líderes sindicales con quienes forjé valiosas relaciones, pese a nuestras diferencias y profundas discrepancias, las que se sustentaron en el respeto y la altura de miras. Tucapel Jiménez, quien presidía la ANEF en esos años, fue uno de ellos. Con frecuencia nos hablábamos durísimo a través de los diarios y en los debates públicos. En una ocasión, le dijo a la prensa que no volvería a sentarse a dialogar conmigo, pues era imposible llegar a acuerdos. Poco tiempo después, coincidimos en un evento de la ANEF en Punta Arenas en que se inauguraba una nueva sede con recursos aportados por el gobierno. Esa noche terminamos celebrando juntos en el hotel, compitiendo por cuál de los dos resistía más tiempo haciendo el baile cosaco, al son de los aplausos de todos los presentes.

Tucapel Jiménez era un verdadero dirigente sindical, un hombre consagrado a su rol y que siempre se la jugó a fondo por lograr lo mejor para aquellos a quienes representaba. Además, era una muy buena persona. Pese a nuestra relación como adversarios, cuando nació mi hija Claudia fue uno de los primeros en visitar a Inés con un ramo de flores. Eso era algo que distinguía a muchos dirigentes y políticos de la época; uno podía enojarse, pelear, discutir, pero había un respeto irrestricto. Existía capacidad de diálogo, incluso con los parlamentarios de otros sectores. Tal fue mi experiencia, por ejemplo, con Patricio Phillips, diputado del Partido Nacional, o con Carmen Lazo, diputada socialista, con quienes trabajamos, junto al diputado Jorge Lavanderos, en la Comisión de Hacienda. El Parlamento era un lugar para confrontar ideas, pero también para alcanzar consensos.

Otro tema que sacaba ronchas era el sistema previsional, el cual, al igual que hoy, cinco décadas más tarde, vuelve a ser centro del debate. El modelo que regía entonces databa de mediados de los años 20. Era un sistema previsional de reparto que consistía, por un lado, en un Servicio de Seguro Social al que se acogían los obreros, y una serie de 36 cajas previsionales encargadas de administrar los fondos de sus afiliados según sector. Tanto el primero como las segundas se nutrían de las cotizaciones obligatorias de funcionarios, empleadores y el Estado, para asegurar la jubilación de sus beneficiarios. Los montos se distribuían en base a la cantidad de recursos acumulados por sus cotizantes.

Cuando asumí como ministro, me encontré con un sistema previsional que, año a

año, incrementaba su gasto en 10%, mientras la economía con suerte crecía 5%. El resultado era un déficit en el gasto fiscal ante el cual no había capacidad de respuesta, y que agravaba aún más el problema inflacionario. Presenté un par de proyectos para contrarrestar el tema, entre ellos una reforma previsional que consistía en establecer un sistema único previsional que terminara con los privilegios de algunos grupos que se jubilaban a los diez años, como los hípicas, o a los 20, como los bancarios, mientras otros gozaban de las pensiones denominadas “perseguidoras” —el jubilado “perseguido” en su renta al funcionario del mismo grado en actividad—, o el caso de las Fuerzas Armadas que permitía que las hijas mantuvieran su pensión mientras fuesen solteras. Estos son solo algunos ejemplos. En síntesis, el sistema era una verdadera selva y estaba lleno de excepciones, dependiendo de la actividad de cada cual. Esto se producía debido a que los parlamentarios tenían iniciativa de ley, y con ello iban favoreciendo a los grupos de intereses que representaban. Era un sistema que beneficiaba el clientelismo político, y los grupos con mayor influencia terminaban presionando para conseguir mejores ganancias para su sector.

Quienes salían más perjudicados en todo esto eran los obreros imponentes en el Servicio de Seguro Social, órgano de índole semipública que estaba permanentemente desfinanciado, en gran parte, porque los empleadores no pagaban las imposiciones de sus trabajadores o solo lo hacían de manera parcial. Como consecuencia, este grupo terminaba jubilándose con pensiones míseras, mientras los afiliados de las cajas previsionales gozaban de mejores condiciones.

Entre los cambios que propusimos, planteamos que la gente jubilara a los 65 años. Esto, debo reconocer, era complejo. En ese entonces, la expectativa de vida era mucho menor a la de hoy, especialmente en el mundo popular, y pedir que alguien esperara hasta los 65 para jubilarse era cuestionable. Sin embargo, lo que merece ser destacado es que ya entonces estábamos abiertos a discutir la creación de un solo órgano previsional, que fuera administrado por el Estado, y que permitiera eliminar esta gran masa burocrática que muchas veces manejaba los recursos a su favor.

La discusión del sistema previsional y el conflicto por las remuneraciones fueron temas que ocuparon gran parte de mi tiempo y energías durante los tres años en que fui ministro de Hacienda. Las movilizaciones se prolongaron, incesantes, hasta 1969. A los paros se sumaron aduaneros, Impuestos Internos, los funcionarios del área de la salud... Era imposible llegar a acuerdos con todos por separado. Finalmente, terminé entendiéndome con Luis Figueroa, por entonces

presidente de la CUT, de filiación comunista. Le dije: “No va a haber más impuestos. Vamos a pagar de acuerdo con los recursos, y es aquí, en la Ley de Presupuestos, donde tendrán que definirse las prioridades y lo que se quiera privilegiar: o reajuste o inversión social, obras públicas, vivienda o salud... Y si no, si quieren más, díganme qué impuesto quieren poner, estoy dispuesto a escuchar”. Esto significaba que en la Ley de Presupuestos, una ley que tiene vigencia anual, se iba a legislar sobre el aumento de remuneraciones del sector público. Llegamos a un acuerdo y así se hizo. Por primera vez, después de muchos años, en 1969 se pagaron los reajustes en los meses de enero y febrero, y no como sucedía antes, que se empezaba a pagar, con efecto retroactivo, recién en los meses de junio o julio, con una inflación que ya se había comido parte del poder adquisitivo del trabajador. El hecho, incluso, valió un elogioso reconocimiento de parte del periodista Eugenio Lira Massi, famoso por sus mordaces críticas al gobierno desde el diario Clarín.

Hubo momentos en que me sentí verdaderamente complicado, pero sabía que tenía que seguir adelante y mantenerme firme. La prensa permanentemente anunciaba que estaba a punto de renunciar. Pero yo no estaba dispuesto a aflojar. Este era un tremendo desafío, y tenía un compromiso con el Presidente.

Durante todos esos años trabajando en su gabinete, Frei y yo construimos una relación de mucho afecto y humanidad. A veces me llamaba a mi oficina y me preguntaba si ya iba a salir, y nos íbamos caminando juntos por la Alameda hasta la calle Hindenburg, donde él vivía. Otras, lo pasaba a buscar en las mañanas a su casa, a bordo del auto del ministerio, un gran Ford Galaxy negro, que prefería manejar yo mismo. Pasaba a dejar a mis hijas al colegio y, luego, recogía al Presidente. En el trayecto aprovechábamos de revisar los asuntos pendientes.

Frei me regaló una relación basada en la amistad y la confianza, sin la cual jamás habría logrado afrontar toda la tensión que viví como ministro de Hacienda. Él me abrió las puertas, me hizo su compañero político, a pesar de nuestra diferencia de edad. Yo, a la vez, lo admiraba y confiaba plenamente en su liderazgo.

Fue tanta nuestra cercanía que, tras decretarse mi exilio en 1980, mientras estaba en Italia, el propio Frei solía ir todos los domingos a mi casa para visitar a mis hijas, llevándoles una bandeja de empanadas. Pese a lo complejas que eran las comunicaciones entonces, fue uno de los primeros en llamarme. Nunca perdimos el contacto. Nos escribíamos cartas permanentemente y, cada vez que él viajaba

a Europa, pasaba a verme o yo me desplazaba para encontrarnos. Fue una amistad que duró hasta sus últimos días, cuando me llamó a España para contarme sobre los planes de operarse.

10. Un año al límite

El 20 de julio de 1969, el mundo completo se detuvo, incluso Chile que estaba tan lejos del epicentro de la historia en ese momento. Expectantes, 600 millones de personas esparcidas por todo el globo presenciaron, a través de las pantallas televisivas, algo increíble: el hombre llegaba a la Luna. La hazaña fue protagonizada por tres astronautas estadounidenses: Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin.

Por aquellos días, yo estaba en París, tramitando la firma de los contratos para la construcción del Metro en Santiago con una empresa francesa. El embajador chileno, Enrique Bernstein, me invitó a la embajada a ver la transmisión.

La proeza de los norteamericanos vino a revertir lo que parecía, hasta entonces, un resultado zanjado en la carrera espacial protagonizada por las dos potencias —Estados Unidos y la Unión Soviética—, en el marco de la disputa de la Guerra Fría. Hasta ese momento, los soviéticos parecían ir a la cabeza. Habían sido los primeros en poner un satélite en órbita y en enviar un animal —la inolvidable perra Laika— al espacio, ambos en 1957; los primeros en impactar la Luna con un objeto terrestre, en 1959; los primeros en enviar un ser humano al espacio, el astronauta Yuri Gagarin, en 1961; y los primeros en enviar a una mujer al espacio, Valentina Tereshkova, en 1963.

Tras el histórico logro de los estadounidenses, la competencia pareció amainar. Los soviéticos se fueron quedando atrás en la contienda tecnológica y económica, mientras otros grandes competidores, como China e India, comenzaron a tomar la delantera. No obstante, la llegada del hombre a la Luna puso de manifiesto la rauda velocidad con que el mundo estaba cambiando. Como bien lo expresara el propio Neil Armstrong, al pisar la superficie lunar: “Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”.

En Chile, las estructuras también se removían: 1969 fue un año de quiebres para la Democracia Cristiana. La tensión dentro del partido había empezado a acumularse, producto de la crisis en el país, las reformas que se implementaban y los problemas desatados por el proyecto de ley para el reajuste de

remuneraciones, el Fondo Nacional de Capitalización y el derecho a huelga. Estos temas se discutieron por más de dos meses entre el partido y el gobierno, sin llegar a acuerdos. Había quienes respaldaban el actuar del Ejecutivo y otros que querían apurar el proceso, en una línea más cercana a la postura de la propia izquierda. Estas tensiones habían quedado de manifiesto en una dura polémica sostenida entre la directiva y el Presidente Frei. El presidente del partido, Rafael Agustín Gumucio, quien representaba al sector de los rebeldes, incluso llegó a afirmar: “La subordinación del partido al gobierno significaría anular y debilitar por completo al partido”.

De ahí que para resolver estos disensos se convocara a una junta nacional en Peñaflor, la que se realizó entre los días 6 y 7 de enero de 1968. En aquel encuentro, nos aprestábamos a votar una serie de iniciativas, entre ellas la polémica política de reajuste salarial. Gumucio, por su parte, se había mostrado contrario a la idea de crear el Fondo de Capitalización de los Trabajadores y había manifestado su respaldo a Jacques Chonchol. La jornada estuvo marcada por duros intercambios entre oficialistas y rebeldes. La directiva quería imponerse al gobierno por la vía de la votación de los delegados allí presentes. El debate fue acalorado y las intervenciones, numerosas.

En horas de la madrugada, el Presidente Frei subió al estrado y se dirigió al partido. Quería saber si contaba con su respaldo o no. “Si no tiene respaldo del partido, el gobierno se debilitará. Debemos eliminar nuestras discrepancias a todo precio”, afirmó. Su discurso removió a los asistentes, y tras escuchar sus palabras, la junta se inclinó a su favor. En la votación, se aprobó la tesis de un categórico respaldo a la labor del gobierno y al proyecto de reajustes, lo que provocó la renuncia de la mesa directiva. Como nuevo presidente, se eligió a Jaime Castillo, asumiendo como vicepresidente Tomás Reyes. Ante esto, un sector de la juventud del partido, compuesto por rebeldes y chascones, y encabezado por Rodrigo Ambrosio, se retiró del lugar indignado.

Las relaciones siguieron tensándose, hasta llegar a un punto insostenible al ocurrir los hechos ya mencionados del 9 de marzo de 1969, en Pampa Irigoin. La decisión del ministro Pérez de asumir la responsabilidad política por lo ocurrido y defender el actuar de Carabineros causó gran molestia en algunos sectores del partido, sobre todo en la juventud y en miembros de la anterior directiva, quienes emitieron dichos particularmente duros. Fui testigo de cómo a Pérez Zujovic le gritaron, incluso, “¡Asesino!”.

Finalmente, en mayo de 1969, este grupo se retiró del partido, creando un nuevo colectivo denominado Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Entre sus fundadores estuvieron Rodrigo Ambrosio, Rafael Agustín Gumucio, Óscar Guillermo Garretón, Julio Silva Solar, Enrique Correa Ríos, Carlos Montes, Jacques Chonchol, José Miguel Insulza, Jaime Estévez, Tomás Moulian y Jorge Abbott, entre otros. Era un grupo valioso, cuya pérdida el Partido Demócrata Cristiano siempre resintió.

Lo que este sector exigía era acelerar los cambios y reformas que el gobierno estaba implementando. La directiva de Gumucio había sido muy crítica respecto a nuestro trabajo, exigiendo un esfuerzo mayor a nuestra capacidad. Sus planteamientos estaban muy influenciados por el pensamiento de la izquierda de la época. Con los años, el MAPU terminaría convirtiéndose en un movimiento radicalizado que asumiría el marxismo como pauta de acción, estableciendo alianzas con el MIR. La salida de dicha facción sería un factor determinante en los resultados de las elecciones presidenciales de 1970, en que Salvador Allende fue electo por estrecho margen. El MAPU se integró a la campaña de la Unidad Popular (UP), y su adhesión posiblemente ayudó a inclinar la balanza a favor del conglomerado de izquierda.

En lo personal, 1969 también fue un año imborrable, pues sufrí, nada más y nada menos, que mi primer accidente aéreo. Veníamos con Inés viajando de regreso a Santiago, desde Buenos Aires. Recuerdo que estaba anocheciendo, y ya habían avisado por los parlantes que pronto nos disponíamos a aterrizar en Pudahuel. La pista se encontraba aún a unos ocho o diez kilómetros de distancia. En eso, de pronto, el avión comenzó a descender a una altísima velocidad. ¡Estábamos cayendo!

En esa fracción de segundo, se te pasan un millón de cosas por la cabeza. Miré a Inés, que iba sentada a mi lado, y alcancé a preguntarle qué iba a ser de las niñas sin nosotros. Creo que ella pensó lo mismo. Luego sentimos el golpe, un costalazo fuertísimo contra el suelo que casi desarmó la aeronave.

Se apagaron las luces. De fondo, se escuchaban ruidos de máquinas y chirridos. Maletines y distintos objetos caían desde los maleteros. Pensé que, en cualquier momento, el avión iba a explotar. La gente estaba muy angustiada. Salió entonces el piloto desde la cabina a dar instrucciones. Me puse de pie y, entre varios, ayudamos a calmar a los pasajeros. Las azafatas abrieron la compuerta de emergencia y lanzaron un tobogán que, al desplegarse, sonó como una gran

explosión, soltando una enorme polvareda.

Con Inés, ayudamos a las azafatas y al piloto a guiar a los demás pasajeros para que descendieran. Posteriormente, recorrimos asiento por asiento, revisando que no quedara nadie, y entonces encontramos a un niño de unos dos años, aún sentado en su lugar. Inés lo tomó en brazos y bajamos con él. En la pista encontramos a su madre, quien llevaba aferrado contra el pecho un cojín, convencida que se trataba de su hijo.

Nadie resultó herido. Fue algo milagroso e inexplicable, sobre todo cuando, días más tarde, pudimos constatar cómo quedó el avión. Era escalofriante: el cuerpo central de la nave se quebró, el tren de aterrizaje se desprendió al primer contacto. Los estanques donde iba el combustible alcanzaron a rozar el suelo, pero no se incendiaron. Ni siquiera los técnicos de la Boeing Company, con quienes me reuní posteriormente, podían explicarse lo sucedido.

A los pocos días, tomé la decisión de que no podía quedarme con tan terrible experiencia y el temor de volar para toda la vida, así que me obligué a mí mismo a subirme otra vez a un avión. Para ello solicité a la Fuerza Aérea que me agendara un vuelo. ¡Así maté el chuncho!

Aunque parezca increíble, en marzo de 1971, viví un segundo accidente aéreo. Estaba en Chiloé, haciendo campaña como candidato a senador, cuando me avisaron que debíamos ir a una localidad llamada Tenaún. Teníamos dos opciones: o abordábamos una lancha y nos demorábamos ocho horas, o nos subíamos a un avión civil y llegábamos en 40 minutos. Para no perder el día, opté por la segunda.

Ya me habían advertido que la aeronavegación en esa zona era complicada, a causa de los vientos y las lluvias. Cuando el avión tocó el suelo, me percaté de que íbamos a una velocidad fuera de lo normal. Habíamos aterrizado con viento de cola y terminamos estrellándonos contra un montón de piedras. El avión se volcó y los pasajeros quedamos colgando cabeza abajo, aún con los cinturones puestos. Como pude, me desamarré y caí al piso, trastabillé hasta la compuerta y, empujando con las piernas, logré abrir la escotilla que se había trancado con el impacto. Descendimos rápidamente y nos alejamos corriendo, temerosos de que la avioneta pudiera explotar.

Después de este segundo episodio, quedé catalogado como “yeta”. Había gente

que cuando me veía en el aeropuerto, y se enteraba de que íbamos a viajar en el mismo avión, decidía no subirse a la nave. Al final, prefería esperar a que todos los pasajeros se embarcaran, mientras leía un libro o el diario tranquilamente, y abordaba último para no asustar a nadie.

Tras vivir este tipo de experiencias tan al límite, uno cambia ciertas perspectivas y aprende a apreciar y a agradecer la existencia hasta en los más pequeños detalles. A fin de cuentas, tomas conciencia de la fragilidad de la vida. Si de algo quedé convencido tras estos episodios es que a uno le llega la hora cuando le tiene que llegar: ni un día antes, ni un día después.

11. El Tacnazo, un mal augurio

Los últimos meses de nuestro gobierno fueron de dulce y agraz. Las realizaciones y reformas habían sido muchas, y el trabajo, intenso. Nuestro programa reformista de Revolución en Libertad había introducido transformaciones claves para la evolución política y social del país. Habíamos sentado bases importantes en términos de participación ciudadana y de dignificación en la vida de muchos compatriotas, y nos habíamos atrevido a implementar reformas audaces en materia de justicia social, con todos los costos que ello implicaba. El rostro de Chile era otro. Sin embargo, los problemas enfrentados fueron también muchos y diversos. Terminábamos el gobierno con la clara percepción de haber dejado muchos cabos sueltos y un proyecto programático inconcluso.

Un último episodio graficaría esta tensión con claridad, a la vez que nos dejaría un sabor aún más amargo. Poco antes de concluir el gobierno, se produjo el “Tacnazo”, un fallido intento de golpe de Estado a manos de un sector de las Fuerzas Armadas.

Las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas habían venido complejizándose desde nuestro arribo, debido al envío a retiro de varias autoridades militares y a diversos cambios introducidos a nivel institucional, los que se consideraban necesarios y acordes a los nuevos tiempos. Los uniformados se mostraban asimismo disconformes con sus sueldos, los que acusaban de ser bajos en comparación a sus pares a nivel latinoamericano, planteando además problemas en la planta del Ejército y de infraestructura, entre otros. Todos estos eran temas que venían arrastrándose en el tiempo, y que los gobiernos anteriores no habían logrado resolver.

Efectivamente, el porcentaje de los gastos de Defensa estaba por debajo del promedio de la región y las Fuerzas Armadas se sentían no consideradas, aisladas, menospreciadas y sin preeminencia orgánica.

En 1968, el gobierno designó como comandante en jefe del Ejército al general Sergio Castillo, reemplazando también a Juan de Dios Carmona en su cargo de

ministro de Defensa, por el general Tulio Marambio. Esto no hizo más que incrementar el sentimiento de frustración y resentimiento al interior de las instituciones castrenses, lo que se tradujo en abiertas manifestaciones de indisciplina: reuniones deliberativas, presentaciones simultáneas de solicitud de retiro de parte de algunos oficiales, así como el retraso del batallón Yungay, a cargo del mayor Arturo Marshall, para rendir honores al Presidente Frei en el Te Deum de 1969.

El 2 de octubre de ese mismo año, el general de brigada Roberto Viaux, comandante de la Primera División del Ejército en Antofagasta, le envió una carta al Presidente Frei —la que, por cierto, nunca llegó a manos del mandatario—, planteándole la realidad por la que pasaba la institución y solicitándole el retiro del alto mando. Dado que no obtuvo respuesta, el general y quienes lo respaldaban decidieron pasar a la acción.

Tres semanas más tarde, el 21 de octubre de 1969, Viaux lideraba el acuartelamiento de sus tropas en el Regimiento Tacna, a las que se sumaron la Escuela de Suboficiales y el Batallón de Tanques. Nosotros ya habíamos sido informados sobre estos movimientos. Rápidamente se dio la alarma y cundió la alerta, sobre todo en el mundo político que, en medio del temor y la incertidumbre, interpretaba esta movilización como un posible golpe de Estado.

Desde la Moneda, Frei golpeó la mesa con puño implacable. “¡De aquí nadie me moverá! Confío en que la cordura se imponga y quienes han faltado se sometan a la disciplina”, dijo el Presidente, y declaró estado de sitio. Numerosos líderes y dirigentes llegaron a La Moneda a manifestar su respaldo al gobierno y a la constitucionalidad, dejando de lado sus diferencias. Entre ellos, destacó la solidaridad de la Iglesia Católica y del Partido Comunista, que desde el primer momento manifestaron su lealtad con el proyecto democrático, poniéndose a disposición para evitar un eventual golpe. Recuerdo, incluso, que camiones de basura, operados por un gremio cercano al colectivo comunista, se apostaron para resguardar la casa de gobierno.

Finalmente, el episodio se resolvió gracias a diversas instancias de mediación en las que participaron, entre otros, el ex ministro Carmona; el general Alfredo Mahn, comandante general de la guarnición de Santiago, y el subsecretario de Salud, Patricio Silva Garín. Tras la renuncia del ministro de Defensa, Tulio Marambio, y del comandante en jefe, Sergio Castillo, quien sería reemplazado por el general René Schneider, comenzaron a revisarse los problemas que

aquejaban a las Fuerzas Armadas, intentándose construir puentes para revertir el deterioro de las relaciones entre las partes.

Posteriormente, el propio general Viaux declaró que su accionar nunca tuvo un carácter político, reiterando su absoluta lealtad al Presidente de la República y a los poderes establecidos, reivindicándolo como una gesta “profesional-militar” determinada por las deplorables condiciones que afectaban al Ejército y a la defensa en general. Sin embargo, la asonada fue una “campanada fuerte”, como bien señalara José Rodríguez Elizondo, que comenzó a instalar el factor militar dentro de la política chilena, sembrando una semilla que, pocos años más tarde, terminaría por germinar con fuerza y violencia extremas.

Concluimos el gobierno con la reserva del país bastante consolidada y el Banco Central operando con mayor holgura. Seguíamos teniendo un nivel de inflación alto, pero controlado, y Chile crecía a tasas razonables.

Guardo un balance positivo de estos años de gobierno. No obstante, debo reconocer que cometimos un error político fundamental: no fuimos capaces de proyectarnos más allá de Frei y dar los pasos que se precisaban para la continuidad de nuestra Revolución en Libertad. Esta quedó inconclusa. Por desgracia, el ser humano y, por ende, el político, es el único animal que al parecer tropieza con la misma piedra. Los gobiernos que pierden su unidad interna y se dividen, muchas veces por insignificantes rencillas de poder, terminan por perder la credibilidad y el respaldo ciudadano.

No fuimos capaces de proyectarnos hacia un segundo gobierno, lo que era necesario para terminar de consolidar los cambios sociales que habíamos querido implementar. Con la Reforma Agraria, por ejemplo, quedaron varios cabos sueltos. El proyecto original apuntaba a abrir espacios de participación a las cooperativas. Sin embargo, en muchos casos el traspaso de la propiedad a manos de los campesinos no se concretó, quedando en manos de colectivos o como asentamientos sin estructura jurídica alguna.

Asimismo, faltó profundizar la participación popular a través de las organizaciones gremiales, sindicales y vecinales. Tampoco logramos concretar a fondo nuestras aspiraciones para potenciar la integración latinoamericana y la ampliación de nuestros mercados. No pudimos terminar de encauzar las políticas encaminadas a la baja de aranceles y finiquitar la fijación de precios, y así abrir más nuestra economía.

En nuestro programa para el desarrollo industrial, también quedaron deudas pendientes. No alcanzamos a crear el Fondo Nacional de Inversiones, ni logramos la reforma previsional. El proyecto de chilenización del cobre y nuestro objetivo de aumentar la producción y la refinación interna para potenciar el desarrollo terminarían siendo algo muy diferente con el arribo de la Unidad Popular. Todas estas eran reformas demasiado ambiciosas para concretarlas en tan acotado tiempo. Su inconclusión dejaría abierto un campo de batalla sobre el que seguirían enfrentándose, cada vez con mayor ahínco y menos altura de miras, la izquierda y la derecha.

La falta de respaldo parlamentario fue, también, determinante en esta realidad. Creo que, en buena medida, el deterioro del sistema democrático chileno guarda estrecha relación con el fenómeno de los tres tercios en la representación política. La derecha, la izquierda y la Democracia Cristiana terminaron atrincherándose, sin posibilidad de lograr acuerdos, ni colaboración para lograr los avances que Chile requería. En un sistema presidencial, trabajar con una articulación de este tipo es imposible.

Los tres tercios fueron el resultado de un desgaste progresivo que, evidentemente, venía produciéndose desde hacía mucho antes de que Frei llegara al poder, pero durante nuestro gobierno el fenómeno se manifestó con especial fuerza, producto de los cambios en el panorama político. Anteriormente, los radicales pactaban con los conservadores y los liberales, mientras la Falange Nacional seguía siendo un partido muy minoritario. El reflejo de esta ecuación solo se vio cuando Eduardo Frei asumió como Presidente.

Eduardo Frei Montalva fue un estadista por excelencia. Invito a leer sus palabras, en su mensaje final al Parlamento, el 21 de mayo de 1970. En él, además de hacer un balance concreto de los logros en diversas materias económicas, sociales, políticas y culturales, nos llamó, no solo a sus partidarios, sino que a todas y todos los chilenos a defender el medio ambiente, a cuidar de nuestras aguas ante el fenómeno de la sequía que ya avanzaba desde el desierto a la zona central, a cuidar nuestros bosques y evitar que, año a año, millones de toneladas de rica tierra agrícola se arrastraran hacia el mar. Frei supo ver la amenaza del cambio climático, y por ello afirmó:

Esto no solo exige leyes, sino que un acto de voluntad nacional.

Es imprescindible defender nuestro suelo y, sobre todo, el agua, principal recurso que hoy preocupa a todas las naciones del mundo y que se requiere como elemento vital para la salud, la agricultura, la industria y la minería. Y esto no se hace sin el árbol, sin construir grandes embalses, sin regularizar los ríos. ¿Cómo no ver que en extensiones superiores a mil kilómetros longitudinales antes cubiertas por una vegetación autóctona hoy solo queda la roca desnuda? (...) Por eso, si algún título tengo para dirigirme a mis conciudadanos es para señalar este problema e invocar un esfuerzo nacional para resolverlo, ya que todo no se puede hacer en seis años y esto requiere una decisión sostenida por largo tiempo.

Con esas palabras el mandatario demostró una extraordinaria visión a largo plazo y en línea con problemáticas que hoy están instaladas con premura, pero que entonces no parecían más que un vaticinio futurista, casi apocalíptico, al que muy pocos atendían.

IV

UNA TRANSICIÓN A CONTRAPELO

1. Otra vez los tres tercios

Si el tablero a tres tercios había polarizado el escenario político a lo largo de todo nuestro gobierno, en las elecciones presidenciales de 1970 este se transformó en un factor clave para el triunfo del candidato socialista, Salvador Allende, representante de la coalición de la Unidad Popular.

Allende era un político de destacada trayectoria en la izquierda chilena. Cuatro veces senador, y una vez diputado, participó en la fundación del Partido Socialista, y a él se le atribuían incluso los primeros nexos de su colectivo con el Partido Comunista. Durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, se desempeñó como ministro de Salud y en 1956 asumió como primer presidente del FRAP. Esta coalición, de hecho, fue una especie de antesala de lo que más tarde sería la Unidad Popular, alianza de izquierda creada en 1969, de la que también fue uno de sus artífices.

Fue cuatro veces candidato a la Presidencia de la República, gestándose su última nominación en circunstancias complejas. El Partido Socialista había considerado inicialmente como su candidato para las presidenciales de 1970 a su secretario general, el abogado Aniceto Rodríguez; sin embargo, al advertir la división interna que cruzaba al partido en ese momento, este decidió dar un paso al costado. A fines de agosto de 1969, el comité central del Partido Socialista resolvió, entonces, nominar a Salvador Allende. Aunque este corría solo, el resultado de esa votación interna fue curiosa: 12 votos a favor contra 13 abstenciones, lo que significó que Allende fue proclamado, al interior de su propio partido, con más abstenciones que apoyos. Una situación, por cierto, bastante inusual.

En las elecciones presidenciales de 1970, Salvador Allende logró la máxima votación con un 36,2%. Jorge Alessandri, el candidato de la derecha, llegó segundo, pisándole muy de cerca los talones con el 34,9%, y en tercer lugar quedó Radomiro Tomic, nuestro candidato, con el 27,8%.

En la práctica, el triunfo de Allende fue más bien moderado. En las elecciones de 1964, 977.902 personas habían votado por él. Seis años más tarde, cuando se

consagraba como ganador, la suma había ascendido levemente a 1.070.334. En cambio, la derecha pasó de 125.233 votos en las elecciones anteriores, a 1.031.159 en 1970. Esto no significaba que la mitad de los electores, de pronto, se hubieran convertido al Partido Nacional. La causa fue la rearticulación del cuadro de los mismos tres tercios que se habían configurado durante la elección de 1964, fenómeno que continuó reproduciéndose durante nuestro gobierno. De hecho, si a la cifra obtenida por Alessandri le sumamos los 821.801 votos que logró Radomiro Tomic, el resultado se acerca a la cifra obtenida por Frei seis años antes.

En esta reorganización de fuerzas, hubo responsabilidad nuestra. El gobierno logró avanzar, hacer los cambios, pero la opción del camino propio y de representar a una minoría nos pasó la cuenta, impidiéndonos proyectarnos hacia un nuevo mandato. Nuestro partido se tensionó en luchas internas, perdió su cohesión y terminó, en 1969, con la renuncia de un contingente de militantes, especialmente jóvenes, que constituirían el MAPU, integrándose posteriormente a la coalición de partidos de izquierda de la Unidad Popular.

Tras esta escisión, emigraron valiosos y destacados dirigentes de nuestro partido, entre otros, Rodrigo Ambrosio, Rafael Agustín Gumucio, Óscar Guillermo Garretón, Alberto Jerez, Julio Silva Solar, Jacques Chonchol y Jaime Gazmuri. Ellos exigían al gobierno de Frei llevar adelante los cambios con mayor velocidad a lo que el país podía responder, pero además creían en la necesidad de establecer una alianza con los sectores de pensamiento marxista, es decir, con el Partido Socialista y el Partido Comunista.

Pese al duro golpe, la Democracia Cristiana mantuvo su rumbo. Teníamos claro que nuestros ideales se cimentaban en la construcción de una nueva sociedad, distante a la capitalista liberal y a la socialista marxista.

Mirado en retrospectiva, creo que el aporte del MAPU fue decisivo para el triunfo del Presidente Allende; esos 30 mil votos que le dieron la victoria calzan exactamente con el número de ex militantes democratacristianos que se restaron a Tomic. A ello se sumó, además, el hecho de que la candidatura de la Democracia Cristiana viniera coja desde un comienzo. En el partido, la candidatura de Radomiro Tomic había sido aprobada por unanimidad, pese a existir diferencias internas al respecto. Estas tenían que ver, fundamentalmente, con la distancia que existía entre él y la figura de Eduardo Frei. Tomic se había mostrado muy crítico, por ejemplo, respecto a cómo el gobierno había pactado la

chilenización del cobre. Su propuesta, en este sentido, iba más en la línea de la nacionalización postulada por Salvador Allende. Estas diferencias eran conocidas públicamente.

Así y todo, nunca me pareció que los disensos entre Frei y Tomic fueran personales. En general, tenían una buena relación y siempre mantuvieron un objetivo político común. Lo que sí existía era una diferente aproximación acerca de cómo implementar los cambios económicos y sociales que el país requería.

Para su postulación, Tomic renunció a su cargo como embajador en Estados Unidos, y volvió a Chile dispuesto a levantar su campaña. En un comienzo, planteó la posibilidad de que su candidatura se proyectara como una opción en la que confluyeran los proyectos de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, Partido Comunista y la izquierda de inspiración laica, tesis que denominó “Unidad Social y Política del Pueblo”. Con ello buscaba dar a Chile un gobierno de abrumadora mayoría en la base social, que pudiese representar auténticamente la voluntad popular y profundizar el proceso democrático. “El único dueño de Chile son los chilenos”, solía decir. Pero su invitación a la izquierda no contemplaba, bajo ningún concepto, circunscribirnos a un proyecto de corte marxista. Él era una persona absolutamente alineada con la ideología humanista cristiana, y siempre se mostró muy crítico respecto a lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética y en Cuba. Sin embargo, estaba convencido de la necesidad histórica de construir una alianza de centroizquierda, con amplio arraigo en las clases medias y populares, que favoreciera el proceso reformista, afianzando así la democracia y superando cualquier intento por desestabilizar el país. Esto, sustentado en la experiencia acumulada durante los años en que habíamos gobernado prácticamente solos, a las demandas crecientes de parte de la ciudadanía y a la presión internacional.

Tomic no era el único en el partido que pensaba de esta forma. Previo al Tacnazo, en el seno de la propia Juventud de la Democracia Cristiana, presidida entonces por Pedro Felipe Ramírez, había surgido la idea de la Unidad Popular: una amplia y estratégica alianza de centroizquierda, integrada por la DC, el PR, el PC, el PS y el API. Dicha iniciativa fue respaldada por Tomic, Leighton y Renán Fuentealba, entre otros.

Sin embargo, al interior del partido, la mayoría considerábamos no viable esta alianza. Estábamos convencidos de que comunistas y socialistas bajo ninguna circunstancia estarían dispuestos a colaborar con la Democracia Cristiana. La

izquierda quería llevar su propio candidato y, de triunfar, estaba decidida a instaurar el socialismo por la vía democrática.

Ante dicha reticencia, Tomic decidió dejar su candidatura en pausa. En el intertanto, empezaron a emerger otros posibles nombres, como el de Bernardo Leighton, Gabriel Valdés y Edmundo Pérez Zujovic.

Leighton, en particular, tenía mucha llegada con la gente. Había sido ministro del Trabajo de Arturo Alessandri y su desempeño como parlamentario siempre fue destacado. Era, a mi juicio, una buena carta. Por eso, cuando Tomic avisó que dejaba su candidatura en “veremos”, un grupo de militantes cercanos a Frei decidimos reunirnos con Leighton para sondear si estaba dispuesto a tomar la batuta. Pero Bernardo dijo que no. Nos manifestó que por ningún motivo asumiría esa candidatura y que había que insistir para que Radomiro aceptara. Creo que lo dijo con plena convicción, manifestando, una vez más, su gran calidad humana, su modestia y, como siempre, anteponiendo el bien común partidario a sus legítimos intereses personales. Estoy convencido de que, si Bernardo hubiese aceptado nuestra propuesta, habría sido elegido Presidente de la República, pues contaba con el total respaldo de todos los sectores del partido y un gran ascendiente dentro de la opinión pública.

Habiendo fracasado en ese intento de búsqueda, los ministros de gobierno decidimos reunirnos con Gabriel Valdés, entonces titular de Relaciones Exteriores. El encuentro se realizó en el edificio Norambuena, donde le solicitamos a Gabriel que aceptara asumir el desafío. Pero, al igual que Bernardo, declinó la propuesta. La verdad era que todos creíamos que el líder natural para suceder a Frei debía ser Radomiro.

De pronto, mi nombre empezó a aparecer mencionado en la prensa como una alternativa a la candidatura. Esto, aparentemente, entusiasmó a algunos. A mí, en cambio, me parecía un disparate: que yo supiera, hasta entonces no era algo que se considerara al interior del partido.

Pero una noche, después de comer, recibí un llamado de Edmundo Pérez Zujovic, preguntándome si podía ir a su casa de inmediato. Me dijo que quería conversar conmigo un tema importante. Al llegar, me encontré con varios senadores allí reunidos, entre ellos recuerdo a José Musalem, Tomás Pablo y Alfredo Lorca. Nos sentamos y, tras un breve intercambio, Edmundo tomó la palabra.

—Andrés, hemos estado dándole vueltas al asunto de la candidatura. Bernardo no quiere. Gabriel Valdés tampoco. Tú eres el único que no se ha pronunciado... —dijo.

—Pero si yo no soy una carta... —respondí, confundido.

—Nosotros creemos que sí lo eres.

—Oye, pero ustedes están bromeando —dije, aún tratando de entender lo que sucedía. —Yo no tengo suficiente edad. No soy una opción, nunca lo he sido. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza...

—Lo único que estamos diciendo es que hay que estar preparados y tener una carta, en caso de que Radomiro decida no aceptar la candidatura —me respondieron.

Nos despedimos, y regresé a mi casa absolutamente convencido de que lo que se me planteaba no tenía ninguna lógica. Gracias a Dios, todo quedó en ese generoso y gratuito ofrecimiento de personas que, sin duda, me apreciaban. Tomic finalmente aceptó, asumiendo que su propuesta de la “Unidad política y social del pueblo” tendría que sacarla adelante una vez que su campaña tuviera éxito y ganara las elecciones.

Radomiro Tomic era no solo un gran estadista y eximio orador, sino que también un hombre visionario. Recuerdo sus palabras cuando fue proclamado candidato presidencial del partido: “Desde 1970 en adelante el dilema se abrirá quemante y claro. (...) No me tiembla la voz para decirlo: o emprendemos una revolución democrática y popular, dando forma a un inmenso esfuerzo de participación del pueblo para que Chile alcance otro horizonte y un nuevo destino, o el colapso institucional dividirá gravemente a los chilenos contra sí mismos (...)”⁸.

¡Qué razón tenía! Hoy, mirando con más distancia, su planteamiento apuntaba, medio a medio, a lo medular: para llevar a cabo reformas tan contundentes como las que habíamos querido implementar, se requería un apoyo político sólido y transversal, que aunara a la centroizquierda en su conjunto. El modelo de los tres tercios de la política chilena, según él, culminaría en una tragedia. Sin embargo, también estoy convencido de que su estrategia en esos momentos era absolutamente inviable. La izquierda jamás le habría dado su apoyo en esas circunstancias. De hecho, la respuesta llegó muy pronto. Imposible olvidar las escuetas e irónicas frases de Luis Corvalán, entonces secretario general del

Partido Comunista: “Con Tomic ni a misa” o “Señor Tomic, no haga pipí contra el viento”. Así, su propuesta de consolidar la unidad política y social del pueblo fue rechazada categóricamente, un error lamentable de parte de la izquierda tradicional. Si hubieran actuado de otra forma, quizás esto habría cambiado la suerte del devenir político en Chile, evitando de paso la polarización y la violencia extrema a que nos veríamos sometidos.

Radomiro Tomic hizo una campaña intensa, la que fue respaldada por un fuerte núcleo al interior de la Democracia Cristiana. No obstante, nuestros electores y simpatizantes más conservadores terminaron inclinándose por Alessandri, quien parecía una opción más segura para evitar un gobierno de izquierda. En tanto, los más cercanos a la izquierda votaron por Allende, influenciados por la decisión del MAPU de sumarse a la Unidad Popular.

No hay que olvidar que en esos años vivíamos en plena Guerra Fría, y que todos los gobiernos instaurados bajo la égida soviética eran dictaduras en las que la libertad de pensamiento y la disidencia eran reprimidas brutalmente. La derecha basó gran parte de su campaña presidencial en hacer cundir estos temores. Por su parte, Allende insistió en desvirtuar esta campaña del terror, asegurando que “la nuestra será una revolución a la chilena, con vino tinto y empanadas”, y que la “vía chilena al socialismo” se ajustaría a la constitucionalidad y a la democracia. Allende mismo, avalado por su larga trayectoria política, era una garantía en este sentido.

Aunque hoy parezca extraño, el triunfo de Allende fue una sorpresa para muchos, en especial para la derecha. La prensa controlada por esta se había encargado de generar expectativas de triunfo seguro. No sé si por efectos de propaganda, o por un real crecimiento experimentado por la derecha en los últimos años de gobierno, desde que partió la campaña se dio por sentado que Alessandri tenía altas probabilidades de ganar. Además, no faltaron las encuestas que lo dieron por ganador en forma holgada. La encuestadora Gallup, por ejemplo, a dos días de los comicios, le confería al candidato de la derecha 41,5%, seguido por Tomic con 29%. El comando de la candidatura de Alessandri publicó una página completa en el diario El Mercurio, en la que instaban a declarar Presidente de la República al candidato que sacara apenas un voto más que sus contendores. Estaban seguros de ganar; no obstante, temían que, si Alessandri no obtenía la mayoría absoluta, sería el Congreso Pleno el que tendría que dirimir entre los dos candidatos con más alta votación, y en el escenario de que estos fuesen Alessandri y Allende, nuestros parlamentarios votarían por este

último.

Cabe recordar que, pocos meses antes, se había propuesto una reforma constitucional para dirimir situaciones de esta naturaleza, estableciendo que, para dichos casos, debía realizarse un balotaje o segunda vuelta. La derecha se opuso terminantemente a esa reforma y no se pudo aprobar.

El viernes 4 de septiembre de 1970, a eso de las siete de la tarde, mientras se contabilizaban los votos en todo Chile, varios ministros estábamos en La Moneda con el Presidente Frei, entre ellos Gabriel Valdés y Raúl Troncoso. Aún no se conocían los resultados, pero teníamos la percepción de que Alessandri iba a ganar, o al menos eso era lo que yo pensaba. Pronto comenzaron a entregarse los resultados parciales, arrojando un estrecho margen para la primera mayoría entre Alessandri y Allende; Radomiro claramente quedaba en tercer lugar. Pasadas las diez de la noche, el subsecretario de Interior, Juan Achurra, nos informó los cómputos oficiales: ¡Allende ganaba a Alessandri por solo 40 mil votos! Dicha información se dio a conocer oficialmente de inmediato, a través de los medios de comunicación.

A esas alturas, la gente ya estaba en la Alameda celebrando, con sus banderas y pancartas. Entonces, Salvador Allende hizo algo bastante responsable. Tras asomarse al balcón del segundo piso del edificio de la FECh, en su discurso victorioso le pidió a la gente que se retirara y regresara tranquilamente a sus casas. Esto fue muy importante, pues, de lo contrario, podría haberse provocado una situación de mucha tensión, incluso violencia. El ambiente estaba demasiado polarizado.

Concluidas las votaciones, ahora dependía del Congreso Pleno ratificar quién sería el próximo Presidente de la República. Los votos de la Unidad Popular no eran suficientes para confirmar el triunfo de Allende, y los de la derecha tampoco alcanzaban para impedirlo. Ello implicaba que la Democracia Cristiana y sus parlamentarios se transformaban en pieza clave para dirimir dicho resultado. El plazo era breve: 50 días debían transcurrir entre la elección y la sesión del Congreso Pleno. Mientras tanto, la campaña del terror de la derecha, respaldada por la CIA en Estados Unidos, se intensificaría. Su objetivo era hacer todo lo posible por evitar que la Unidad Popular se hiciera del poder. El plan de desestabilización se puso en marcha.

2. El pánico financiero desatado

El día lunes 7 de septiembre, tres días después de la elección, a eso del mediodía, recibí una llamada del Presidente Frei, quien me informó que en esos momentos se encontraba reunido con Salvador Allende y que habían acordado solicitarme que fuese yo quien asumiera la coordinación de todos los acuerdos, medidas y propuestas relativas a temas económicos durante el período de transición. Mi contraparte desde el gobierno de la Unidad Popular sería el futuro ministro de Economía, Pedro Vuskovic. El comando de Jorge Alessandri nombró para los mismos efectos al economista Pablo Barahona, todo esto en el entendido de que debía esperarse la designación por parte del Parlamento del próximo Presidente de la República.

El propio Salvador Allende comunicó ese día a la prensa dicho acuerdo:

Quiero hablar lo suficientemente claro para todos los que trabajan en los medios de difusión. Ha venido la directiva de la Unidad Popular y el excandidato, el hombre que ha tenido mayoría en las urnas, para hablar con el Presidente de la República para expresarle nuestra profunda inquietud ante algunos hechos de tipo político ocurridos y ante el clima que quiere crearse en el orden económico que evidentemente atenta contra Chile. Al Presidente le pareció justa nuestra posición. Manifestó que estimaba legítimo el que nos preocupáramos y garantizó que tomaría absolutamente todas las medidas que fueran necesarias para defender la economía nacional. Él había tenido reuniones con los ministros sobre esta materia, a fin de prever todas las dificultades que se pudieran presentar; destacó que el ministro de Hacienda era el encargado de poner en práctica estas medidas y al mismo tiempo sugirió que si nosotros teníamos algunas otras que proponer lo hiciéramos, para lo cual pidió se designara un hombre en representación nuestra que tuviera el contacto necesario y frecuente con el ministro Zaldívar. (...) Hemos designado a Pedro Vuskovic, director del Instituto de Economía de la Universidad de Chile y un técnico bastante conocido⁹.

El triunfo en las urnas de Salvador Allende provocó de inmediato una reacción de tipo financiera. Nosotros preveíamos una situación como esta, pero nunca imaginamos que sería tan explosiva. El Presidente Frei estaba preocupado. Por ello, meses antes de la elección presidencial, en el mes de julio, me había pedido elaborar un plan de emergencia que contemplara todas las medidas precautorias para enfrentar una eventual crisis.

En el Ministerio de Hacienda se conformó un comité de trabajo integrado por los ministros de Hacienda y de Economía, cartera en la que se desempeñaba Carlos Figueroa; Edgardo Boeninger, director de Presupuestos; Carlos Massad, presidente del Banco Central; Enrique Marshall, superintendente de Bancos; Sergio Molina, vicepresidente de la Corfo; José Florencio Guzmán, subsecretario de Hacienda, y Sergio Bitar, gerente de la Oficina de Planificación Industrial de la Corfo, según recuerdo. Nuestro trabajo consistía en hacer un seguimiento de los efectos financieros y económicos que pudieran presentarse, así como proponer y tomar las medidas necesarias para evitar una crisis en la materia. Este equipo se reunió durante todo el período de transición diariamente en mi oficina. Asimismo, me contacté permanentemente con Pedro Vuskovic y Pablo Barahona, con quienes acordamos que lo fundamental sería generar un clima de confianza en el país y que la ciudadanía no se dejara llevar en sus decisiones por el temor. La estabilidad en esos momentos era clave.

La idea era proceder con cautela y evitar el pánico, especialmente por efecto de una corrida bancaria. Para ello, se decidió dar respaldo a los bancos y al Sistema de Ahorro y Préstamos, de manera de poder responder con agilidad y premura a los retiros de los depósitos de sus clientes, así como establecer un control cambiario para evitar la fuga de divisas mediante una estricta regulación de la venta de dólares, permitiendo solo la cuota normal acordada para viajes reducida a la mitad. Junto a lo anterior, se ordenó a la Casa de Moneda proceder a la impresión de billetes, instalando hasta tres turnos de trabajo si fuese necesario.

El fin de semana de las elecciones, de acuerdo a lo acordado con el Presidente Frei, se dieron instrucciones para que en los días subsiguientes se adoptaran todas las medidas necesarias, de forma que el sistema funcionara con absoluta normalidad, incluida la Bolsa de Comercio de Santiago y los bancos. No obstante, el día lunes 7 de septiembre nos encontramos con una sorpresa: la Bolsa de Comercio había amanecido con sus puertas cerradas. En paralelo, los chilenos copaban las oficinas bancarias para retirar los fondos de sus cuentas, y lo mismo sucedió en las cajas del Sistema de Ahorro y Préstamos de la Vivienda.

Preocupado, llamé al presidente de la Bolsa de Comercio, Eugenio Blanco Ruiz, para preguntar qué había pasado. Me explicó que habían decidido no abrir las operaciones bursátiles por temor a que la gente vendiera masivamente sus acciones, evitando así un descalabro en los precios con consecuencias imposibles de dimensionar. Le repliqué: “Esto tiene que seguir funcionando, a como dé lugar. Hay que darle al público la confianza necesaria para que entienda que esto es coyuntural”.

Al día siguiente, abrió la Bolsa, pero ya era demasiado tarde. El pánico se había desatado. En pocos días, la Bolsa cayó en 60%. El valor de las propiedades descendió sensiblemente. Los pasajes aéreos al extranjero tuvieron una alta demanda. El comercio y la producción manufacturera también se vieron golpeadas, como secuela de la caída en las ventas. En la industria automotriz, por ejemplo, bajó la venta de automóviles.

Para contrarrestar el fenómeno, dimos orden al Banco del Estado de que facilitara la concesión de préstamos a empresarios para mantener la actividad en movimiento. Desde la izquierda, me exigían que cerrara las fronteras para evitar que las personas abandonaran el país, llevándose su dinero con ellas. Por supuesto, me negué. La gente sabía que ese tipo de medidas eran habituales en los países en que se instalaba el comunismo. Cerrar las fronteras solo incrementaría el pánico y empeoraría la crisis.

Como gobierno mantuvimos la decisión de resguardar el cumplimiento irrestricto del proceso constitucional, de manera que fuera el Parlamento el que decidiera quién asumiría el cargo de Presidente de la República dentro de las dos primeras mayorías. Nuestra posición era coincidente con la doctrina de apego al orden constitucional declarado por el general René Schneider y el general Carlos Prats, en la que las Fuerzas Armadas aparecían como entes no deliberantes que se atenían estrictamente a la normativa constitucional, prestando obediencia al poder civil. Este compromiso claramente rechazaba cualquier intento de golpe de Estado. Recuerdo haber sostenido una conversación con los generales Schneider y Prats en La Moneda, alrededor del 10 o 12 de septiembre, pues querían escuchar de boca del propio ministro de Hacienda la real situación económica y financiera que se estaba viviendo, así como las medidas que estábamos tomando. La posición de ambos coincidía plenamente con las decisiones gubernamentales.

Hasta que el Congreso Pleno ratificara a Allende, el país seguía en nuestras

manos. Decidimos involucrar a la administración entrante en las medidas que estábamos tomando. Era importante que estuvieran al tanto de qué se estaba haciendo. Acordamos entonces con Pedro Vuskovic que, mientras durara la transición, mantendríamos una vocería única en materia económica: la mía. Las buenas relaciones, sin embargo, no durarían mucho.

3. Una jugada “chueca”

Yo no conocía a Pedro Vuskovic, ni lo había tratado anteriormente. Tenía un importante currículum; había trabajado como académico en la CEPAL y se había desempeñado como director del Instituto de Economía de la Universidad de Chile. En un principio, la comunicación fue bastante fluida y hablábamos permanentemente para ponernos al día. Pero, a poco andar, nuestras diferencias empezaron a hacerse sentir. Las medidas que Vuskovic quería propiciar para contener la crisis eran bastante más extremas que las nuestras; él, por ejemplo, era partidario de cerrar las fronteras.

Sorpresivamente, el día 16 de septiembre, Vuskovic se adelantó y, tras convocar a una conferencia de prensa, dio a conocer públicamente un documento con lineamientos económicos a seguir que iban en la línea contraria de lo que habíamos acordado. El texto incluía una afirmación final en la que se señalaba que la difícil situación que atravesaba la economía nacional no era producto del resultado electoral, sino que de una mala gestión por parte del gobierno. La movida no solo nos tomaba por sorpresa, sino que además quebraba nuestro acuerdo inicial de dejar la vocería en mis manos. Nadie, por cierto, se acercó posteriormente a dar una explicación.

Todo esto consta en la prensa de esos días. Cuando enfrenté a mi contraparte con motivo del informe, me respondió que ellos únicamente habían tenido la intención de colaborar. No me quedó otra alternativa que hacerle ver que, ante sus dichos, nuestro gobierno tenía la obligación de reaccionar. No íbamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se nos achacaba el deterioro del clima nacional.

Molesto por lo sucedido, el Presidente Frei dio nuevas instrucciones: “Hasta aquí llegamos. Nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar el proceso de transición, pero también tenemos el deber de dejar claro ante el país cuáles son las razones por las que estamos inmersos en esta crisis”, nos dijo. A continuación, encomendó al Comité Económico de Ministros redactar un informe que contuviera dos capítulos: uno con el balance exacto de la gestión económica del gobierno hasta el 4 de septiembre de 1970, es decir, en sus seis

años; y otro para explicar al país la real situación económica producida respecto a los meses siguientes, así como el detalle de las medidas específicas que se estaban tomando para contener la crisis. El equipo que elaboró este documento estuvo integrado por Sergio Molina; Carlos Massad; Jorge Cauas; Edgardo Boeninger; Carlos Figueroa; el director de Planificación, Fernando Aguirre; Sergio Bitar y, por supuesto, el suscrito.

Una vez elaborado, dicho informe fue puesto en conocimiento por el Presidente Frei al gabinete de ministros. Al mismo tiempo, lo entregué personalmente al consejo nacional y a la directiva del Partido Demócrata Cristiano. La idea, como he mencionado anteriormente, era dejar en claro que la crisis que se vivía después de la elección no era responsabilidad del gobierno, sino que del clima de temor e incertidumbre generado por los anuncios de expropiaciones y restricciones económicas a la industria y a la banca, contenidas en el propio programa de la Unidad Popular durante la campaña.

El día 23 de septiembre, mientras la directiva del Partido Demócrata Cristiano, encabezada por Benjamín Prado, iniciaba conversaciones con Salvador Allende, di a conocer, a través de un discurso por cadena nacional de emisoras, nuestro Informe Económico y Financiero, planteando que, si hasta el día previo a la elección nuestra economía funcionaba con normalidad, con posterioridad a esa fecha el proceso económico se había visto alterado, poniendo en serio peligro los resultados esperados y arriesgando los efectos positivos de las políticas económicas que el gobierno había venido aplicando durante los últimos años. Tras exponer que en las últimas semanas se observaban situaciones complejas, tales como la contracción de la demanda, la caída en las ventas, la paralización en las inversiones, el no pago de las empresas a proveedores, el aumento de las deudas impagas, la suspensión de cuotas adicionales para eventuales viajes, así como una baja en los ingresos recaudados por el fisco, concluí afirmando que, de persistir estas tendencias, sería necesario aumentar la emisión monetaria en cifras que desbordarían toda previsión posible.

Algunos consideraron esta exposición como “incendiaria”, “alarmista” y “tendenciosa”, mientras otros la calificaron de “seria”, “rigurosa” y “objetiva”. Es probable que esta no aportara paños fríos al tenso ambiente que se vivía; sin embargo, debíamos decir la verdad sobre lo que estaba ocurriendo y los fenómenos que observábamos. Aún éramos gobierno y lo que ocurriera en el país era nuestra responsabilidad.

Esta situación marcó un punto de quiebre entre el gobierno saliente y el entrante. Acto seguido, se desataron maniobras persistentes de parte de la Unidad Popular, intentando involucrarnos como cómplices de la campaña del terror desplegada por la derecha. El equipo económico de la Unidad Popular, encabezado por Vuskovic, Darío Pavez y Óscar Guillermo Garretón, acusó: “Zaldívar quiso ser aparentemente objetivo, pero insistió en una política fracasada y ya rechazada por el país”¹⁰. De paso, anunciaron que el próximo gobierno entregaría un reajuste superior al 30%: “El reajuste para los trabajadores será equivalente al 100 por ciento del alza del costo de la vida y será entregado el primero de enero del próximo año (1971)”¹¹.

Días más tarde, el 28 de septiembre, en la ciudad de Coronel, el propio Salvador Allende, refiriéndose a mi discurso, denunció nuestra supuesta confabulación con las fuerzas opositoras: “No contribuyó de ningún modo a la tranquilidad de los espíritus. (...) Si hay algunos que pretenden interrumpir el normal proceso jurídico de la nación, que sepan que el pueblo está vigilante y que, si es necesario, los obreros se tomarán las fábricas, los campesinos, la tierra. Chile entero será paralizado desde Arica a Magallanes, desde la cordillera hasta el mar, para decir que el pueblo sabrá defender su victoria por todos los caminos y por todos los cauces”¹².

La declaración de Allende, como era de esperarse, generó aún más temor entre quienes ya estaban nerviosos. En mi opinión, su reacción fue contraproducente. Lo lógico hubiera sido que la Unidad Popular intentara calmar los ánimos y transmitiera tranquilidad al país. El problema, creo, es que ni ellos mismos tenían claro qué querían hacer y cómo proceder. No entendían que lo que a la ciudadanía le preocupaba en esos momentos no era precisamente los porcentajes del reajuste salarial durante el primer año de su mandato, o asuntos de esa naturaleza. Lo que la gente quería saber era si podía confiar o no en el nuevo gobierno, si este procedería ajustado a la legalidad y a la Constitución, y si la inédita vía chilena al socialismo sería un modelo nuevo y verdaderamente democrático, como aseguraba Allende, o se traduciría más bien en uno parecido a los “socialismos reales” tras la Cortina de Hierro, propugnados por dirigentes del mismo conglomerado.

No tardaron en aparecer en la prensa acusaciones injuriosas, incluso engañosas. El diario Puro Chile, que se identificaba con la Unidad Popular, refiriéndose a la fuga de capitales, comentaba: “(...) por un lado, el ministro de Hacienda, el señor Zaldívar, anuncia todo tipo de crisis financieras, mientras que, por el otro,

no se adoptan las medidas adecuadas y conducentes a frenar, a desterrar de raíz esta situación que no debiera permitirse, sobre todo por quienes tienen la misión constitucional de cautelar los intereses nacionales, es decir, los intereses de todos los chilenos”¹³.

El pueblo chileno se polarizaba entre el entusiasmo y las esperanzas de unos, mientras otros, atemorizados y en medio del desconcierto, vendían sus bienes y armaban maletas para irse del país. La incertidumbre era total, la apuesta, inmensa.

4. Las tres tesis en la Democracia Cristiana

A medida que se acercaba la fecha en que se reuniría el Congreso Pleno, en la Democracia Cristiana se debatía cuál sería la postura del partido. Finalmente, acordamos apoyar con nuestros votos el reconocimiento de Salvador Allende como Presidente de la República con una condición: que se firmara un Estatuto de Garantías Constitucionales con los partidos de la Unidad Popular, mediante una reforma constitucional, de manera de resguardar ciertos derechos que, a nuestro juicio, eran fundamentales para garantizar un régimen democrático.

Muchos de los dirigentes de la Unidad Popular —sobre todo del PC, el PS y el MIR— tenían como referente el modelo cubano o el soviético, y eso generaba mucha desconfianza respecto de sus intenciones. Más tarde comprenderíamos que nuestra dubitación no era del todo errada: durante el gobierno de Allende, tuvieron lugar varios episodios en que se usaron resquicios legales para amparar situaciones cuestionables, tales como requisiciones, tomas, expropiación de industrias, compra de acciones y adquisición de bancos que posteriormente serían estatizados.

Este acuerdo fue el resultado de una larga y tendida discusión interna en el partido sobre si debíamos legitimar el triunfo de un proyecto que podía, a nuestro juicio, tornarse riesgoso para la democracia del país. La primera semana de octubre se celebró la junta nacional del Partido Demócrata Cristiano, y se evaluaron tres posibles vías.

Por un lado, estaba la tesis planteada por Edmundo Pérez Zujovic, la que sostenía que la única manera de darle estabilidad al nuevo gobierno era que nuestro partido se incorporara a este. Aquello implicaba ratificar a Salvador Allende, formar una alianza con la Unidad Popular y participar colaborativamente con la nueva administración, aportando, por ejemplo, ministros desde nuestras filas. Algunos lo planteaban a modo táctico, mientras otros consideraban esta alternativa como un compromiso genuino y factible. Más allá de los motivos que cada uno tuviera, no era una opción descabellada. Y es que, efectivamente, existían ciertas similitudes entre los programas de Tomic y Allende.

En lo personal, esta alternativa me parecía lógica, pero prácticamente imposible de llevar a la realidad. La misma Unidad Popular se lo había dicho a Tomic con todas sus letras: no estaban dispuestos a ir a ninguna parte con nosotros, especialmente el Partido Socialista que, a partir del último congreso realizado en Chillán, había optado por una tesis aún más radicalizada que la del Partido Comunista.

La segunda tesis, bastante minoritaria, planteaba la posibilidad de asistir al Congreso Pleno y votar por Alessandri. Esto fue descartado casi de inmediato, ya que significaba un quiebre rotundo al interior de nuestro propio partido.

Finalmente, se propuso una tercera alternativa, que fue la que en definitiva primó. Esta contemplaba atenernos a la normativa constitucional, reconociendo al candidato electo con la mayor cantidad de votos. No obstante, se exigiría al gobierno entrante firmar un estatuto que garantizase el resguardo a la Constitución y al estado de derecho, conteniendo así el temor de aquellos que creían que, al asumir Allende, podría instalarse por la vía de los hechos una dictadura de ideología marxista-leninista.

Dicho estatuto contemplaba modificar y robustecer diversos aspectos de la Constitución de 1925, entre ellos asegurar la libertad ideológica, la libre militancia y la libre organización de los partidos políticos; el pluralismo en los medios de comunicación, la libertad de prensa y la libertad de expresión; la igualdad ante la ley; la libertad de producir y difundir material intelectual; la defensa de una educación democrática, pluralista y sin orientación partidaria; los derechos de las organizaciones sociales, de los trabajadores y sindicatos; el derecho a reunión; la inviolabilidad de la correspondencia; la limitación de las expropiaciones irracionales, así como resguardar la independencia del Poder Judicial y el estricto respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

Fue una discusión que se prolongó por muchas horas, y en la que participaron alrededor de 600 dirigentes de todo el país. Hubo momentos en que creímos no sería posible alcanzar ningún tipo de consenso. En medio de la reunión, recibí el recado de que Inés, quien a esas alturas esperaba nuestro quinto hijo, había sido trasladada de urgencia a la clínica. Estaba de siete meses de embarazo y el parto súbitamente se adelantó. Pese a su delicado estado, ella pidió que no me avisaran, puesto que entendía lo relevante que era aquella discusión para el futuro del partido, e incluso del país. Tras enterarme, tomé la decisión de quedarme hasta que el asunto estuviera zanjado. Una vez que se resolvió optar

por la vía del estatuto, partí de inmediato a la clínica. Nuestro hijo no sobrevivió, murió tres días después. Lo llamamos “Andrés Francisco”, pues nació el 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís.

Fue un momento muy duro. Aunque entendía que nadie había tenido la culpa de lo sucedido, no podía evitar sentirme responsable. Los días previos al parto, la tensión imperante en nuestro hogar, producto de lo que estaba sucediendo en el país, había sido tal que, estoy seguro, resultó dañino en la salud de Inés. Estos son los costos que cobra la vida política en el ámbito personal.

5. Al acecho: Conspiradores, golpistas y otras maquinaciones

Mucho se ha dicho de parte de sectores de izquierda acerca de que el Presidente Frei y personas cercanas a su entorno, entre las que se me incluye, habríamos sido cómplices de actos destinados a impedir el acceso al poder del Presidente Allende, participando en maniobras de tipo golpista y con vinculación a organismos influenciados por la CIA. Al respecto, desmiento terminantemente aquellos cargos. Jamás tuve contacto con sectores civiles o militares tras ese torcido objetivo. Todo nuestro accionar, durante los últimos meses de gobierno, se centró en evitar que la crisis financiera —provocada por la CIA, otros sectores o por quien fuere— no terminara en una ruptura institucional, así como en garantizar el cumplimiento de la Constitución de tal forma que el Parlamento definiese quien sería el próximo Presidente de la República.

Creo que los propios hechos, por sí solos, desmienten esta antojadiza denuncia. Habría bastado que hubiésemos tenido una conducta pasiva frente a la crisis y no adoptar todas las medidas que aplicamos para que quienes tramaban el quiebre institucional tuvieran éxito. Asimismo, da cuenta de ello el hecho de que los sectores de derecha también nos descalificaran. Nos culpaban de entregar el gobierno a los marxistas, e incluso me condenaban por haber dejado en reservas del Banco Central más de 500 millones de dólares a disposición del gobierno entrante.

Al respecto, considero fundamental aclarar que el Presidente Frei jamás me instruyó tomar medidas con miras a profundizar la crisis, pese a que estaba convencido de que el gobierno de Allende nos llevaría, tarde o temprano, al fracaso. Esto último me lo expresó en varias oportunidades, al igual que a muchos de sus colaboradores. Él mismo, según me relató posteriormente, se lo advirtió al propio Salvador Allende en su casa en Hindenburg, cuando lo recibió ya como Presidente electo.

Entre las denuncias infundadas que difundían los medios proclives a la Unidad Popular, se publicitó que la CIA habría destinado 200 mil dólares para que algunos diputados demócratacristianos votaran por Alessandri en el Congreso Pleno. Dicha denuncia la contradicen los propios hechos, pues ese día 24 de

octubre de 1970 la totalidad de los diputados democratacristianos, sin excepción ni ausencia, votaron por Allende —así lo había acordado e instruido nuestro partido a sus parlamentarios—, esto incluso previo a que la Unidad Popular aprobara y promulgara el Estatuto de Garantías Constitucionales exigidas por nosotros para evitar todo riesgo que pudiese derivar en una dictadura marxista en Chile. En el momento, fuimos acusados de ingenuos por la derecha. Sin embargo, creo que este era el único camino posible a seguir en esas circunstancias.

No puedo dejar de relatar mi testimonio sobre lo que significó durante este período la intervención norteamericana que buscaba impedir el ascenso al gobierno por parte del Presidente Allende. Como ya hemos mencionado anteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se había proyectado en dos bloques contrapuestos. Uno estaba representado por la Unión Soviética y los países tributarios a ella, gobernados por dictaduras del proletariado, al cual se sumaría, en los años 60, un país de nuestro continente: Cuba. El otro estaba encabezado por Estados Unidos, los países de la Europa Occidental, Japón y algunos de América Latina. Entre ambos bloques, se mantendrían los países llamados “no alineados”.

En este contexto, cabe destacar que Chile, a lo largo de su historia, siempre fue objeto de este tipo de intervenciones en su política interna, fenómeno que se agudizó a partir de la década del 60, tanto por parte de Estados Unidos y la CIA, como de la Unión Soviética y la KGB, organismo instrumental del bloque marxista. Querámoslo o no, nuestra frágil y débil economía se vio siempre supeditada al accionar de estas potencias. De ahí la presencia de importantes firmas inversionistas norteamericanas en nuestro país, dueñas de las grandes minas de cobre, así como de las telecomunicaciones, electricidad y otros rubros. Asimismo, nos relacionábamos en lo financiero con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alianza para el Progreso. Nuestro presupuesto nacional dependía, año a año, de este tipo de financiamientos para cubrir la inversión pública.

Después de que Fidel Castro declarara a Cuba como país comprometido con la órbita soviética, la intervención de Estados Unidos en los procesos electorarios latinoamericanos durante los años 60 y 70 fue indiscutible. A la par, la influencia de la Revolución Cubana en Chile comenzó a reflejarse con nitidez en las intervenciones, discursos y publicaciones de los sectores de izquierda de la época, los que manifestaban su adhesión a las tesis castristas. La creación de la

Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), en 1967, cuyo primer presidente fue Salvador Allende, ratifica lo anterior, siendo sus objetivos fundamentales el promover una estrategia conjunta de los movimientos revolucionarios latinoamericanos y obtener la solidaridad de los pueblos con la Revolución Cubana.

Investigaciones posteriores, por parte del Senado norteamericano y especialmente la denominada Comisión Church, así como la desclasificación de documentos de la CIA a partir de 1975 comprueban con claridad la intervención de este organismo y sus decididas acciones por impedir la elección de un gobierno al estilo castrista en Chile, así como el ascenso de Salvador Allende al poder. Ello se hizo con descaro y sin ningún miramiento.

Ahora bien, desde el momento en que Allende resultó electo, el 4 de septiembre de 1970, el gobierno norteamericano y la CIA, conjuntamente a sectores civiles de la derecha chilena, hicieron lo imposible por evitar que este llegara a La Moneda. En dichas operaciones participó personalmente Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio, quien se trasladó días más tarde a Estados Unidos, maniobrando desde allí este siniestro complot, en conjunto con las más altas autoridades del gobierno de Estados Unidos. El 15 de septiembre, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, se reunieron el Presidente Richard Nixon; el consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger; el fiscal general, John Mitchell, y el director de la CIA, Richard Helms. La orden de Nixon fue clara y tajante: impedir que Allende asumiera el poder y, en caso de que ello ocurriese, crear todas las condiciones para derrocarlo. Para cumplir la tarea y no tener que lidiar con una segunda Cuba, se ordenaron importantes recursos: “10.000.000 de dólares disponibles; más si es necesario” y “Trabajo a tiempo completo. Los mejores hombres que tenemos”, así como un plan de acción con el objetivo de “hacer gritar a la economía”, según lo instruyó el propio Nixon. A esto, Kissinger agregó: “No dejaremos que Chile se vaya por el desagüe”¹⁴.

Así fue que comenzaron a orquestarse intrincadas estrategias de desestabilización. Pocos días después de la elección, Jorge Alessandri había anunciado públicamente que, de ser electo por el Congreso Pleno en octubre, presentaría su renuncia. Este escenario de inmediato fue aprovechado por la CIA para poner en ejecución dos maniobras, canalizadas por dos vías paralelas, pero independientes una de otra: las denominadas “Track One” y “Track Two”. La primera, conocida también como “Gambito Frei”, consistía en conseguir que los parlamentarios demócratacristianos votaran por Alessandri, quien tras ser electo

renunciaría inmediatamente, se llamaría a una nueva elección y la derecha apoyaría a Frei. Me consta que este último reaccionó duramente ante este tipo de planteamientos. Jamás pensó en prestarse para semejantes maniobras; las consideraba una afrenta no solo a su persona, sino que también al país y a la institucionalidad democrática. “¿Cómo se atreven a plantearme algo así?”, decía molesto. El plan, en el que tuvo una activa participación el embajador estadounidense de entonces en Chile, Edward Korry, no tuvo asidero alguno y fracasó.

Se activó entonces la Operación Fubelt, o “Track Two”, que consistía en una serie de maniobras destinadas a provocar una inestabilidad política tal que obligara a la intervención de las Fuerzas Armadas a través de un golpe militar, impidiendo así la llegada de Allende a La Moneda. La idea era sembrar el caos y un clima golpista. El gobierno norteamericano aprobó, como primera medida, el corte de todos los créditos concedidos a Chile, presionando a diversas compañías para restringir sus inversiones en nuestro país. Esto gatilló un pánico financiero de proporciones, agravando aún más la crisis.

En paralelo, se desató una campaña del terror con recurrentes actos de violencia. En el transcurso de los últimos meses de 1969, grupos de extrema derecha comenzaron a ejecutar atentados terroristas de diversa índole para atemorizar a la población y proyectar la idea de un caos anticipado. Se detonaron bombas y explosivos en distintos puntos de la capital: las Torres de Tajamar, el aeropuerto de Pudahuel, las dependencias del Canal 9, el Instituto Geográfico Militar, la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y la Bolsa de Comercio de Santiago, por mencionar algunos. Las portadas de los diarios, en especial aquellos de propiedad de Agustín Edwards —El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias—, destacaban, en grandes titulares y con espectaculares fotos los episodios de violencia, generando la sensación ambiente de desorden público. La prensa culpaba al MIR y a la Brigada Obrera Campesina, un supuesto colectivo de izquierda que se atribuía la autoría de los hechos. Más tarde se revelaría que esta brigada nunca existió, sino que fue una fachada utilizada por grupos de ultraderecha que buscaban sembrar el miedo y el desorden.

Hay que señalar que la capacidad de organización de los colectivos radicalizados en general venía incrementándose desde nuestro gobierno. Mientras desde la izquierda había emergido, en 1965, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desde la derecha habían surgido grupos dispuestos a tomar las armas para

combatir las reformas sociales que Frei estaba implementado, en especial la Reforma Agraria.

Los elementos para la conjura fueron múltiples y, al parecer, nada se escatimó. En esos complejos tiempos, no alcanzábamos a imaginar las oscuras tramas que se urdían. Dado que las maniobras políticas no habían servido, el objetivo pasaba ahora por una “solución militar”. Pero el gran obstáculo para ello lo constituía el comandante en jefe del Ejército, el general René Schneider, de reconocida postura constitucionalista, quien siempre declaró que las Fuerzas Armadas no interferirían en las elecciones de 1970 y respetarían su resultado. Dicha posición se denominó la “Doctrina Schneider”.

Ante esto, la CIA no tardó en advertir que sacar al general del camino iba a ser una necesidad. Un cable enviado por el embajador Edward Corry a la Casa Blanca, el 21 de septiembre de 1970, sugería: “El general Schneider tendría que ser neutralizado, mediante desplazamiento si fuera necesario”¹⁵.

Acto seguido, se le encargó al general en retiro Roberto Viaux, el mismo que el año anterior había liderado el Tacnazo, activar un plan para sacar a Schneider del camino, sobornando a generales y almirantes, entre ellos, al general Camilo Valenzuela. Este último había sido nombrado jefe de plaza en Santiago, con motivo de la situación de agravamiento del orden público.

El plan, en el que participaron militares y civiles, se urdió con sigilo: secuestrar al comandante en jefe del Ejército, ocultarlo y provocar tal inestabilidad que obligara la intervención de las Fuerzas Armadas, evitando así la asunción de Allende al poder. Por valija diplomática, la CIA envió tres subametralladoras, abundante munición y granadas lacrimógenas para el atentado.

El 22 de octubre de 1970, dos días antes de que se reuniera el Congreso Pleno, y mientras en el Parlamento se votaban las nuevas garantías constitucionales, culminó esta desvergonzada intervención con el asesinato del general Schneider. Aunque el objetivo era secuestrarlo, cuando este advirtió lo que sucedía y desenfundó su pistola para defenderse de los agresores, los conjurados perdieron el control y le dispararon mortalmente. Fue un hecho brutal que remeció al país, un crimen de “señoritos” que nadie pagó. Las armas y el financiamiento corrieron por cuenta de la CIA; la ejecución, por cuenta de civiles y traidores uniformados. Este era tan solo uno de los varios grupos que conspiraban para evitar la llegada de Allende a la Presidencia.

Años después, el agregado militar de la embajada de Estados Unidos, coronel Paul Wimert, confesaría ante una comisión del Senado norteamericano que, tras el asesinato, lanzó personalmente las armas al fondo marino de la rada de Valparaíso, acompañado del jefe local de la CIA, Henry Hecksher. En la oportunidad, reconoció que el crimen “fue un asunto sucio, inmundado. Me avergoncé de mí mismo y hasta odiaba mirarme al espejo para afeitarme”¹⁶.

El régimen democrático pareció sufrir un golpe de muerte. Pero el tiro les salió por la culata. El crimen, lejos de cumplir los objetivos trazados por la CIA y sus complots, terminó por revertirse, generando una inmediata y férrea reagrupación de las instituciones armadas en torno al nuevo comandante en jefe, el general Carlos Prats. La Doctrina Schneider cobró entonces más fuerza que nunca, mientras el atentado evidenció en la ciudadanía lo urgente que era respetar la tradición democrática en tamaña situación de crisis.

Días más tarde, mientras el general Schneider aún agonizaba, el 24 de octubre y según lo estipulado, el Congreso Pleno proclamó a Salvador Allende como Presidente de la República, aprobándose también las reformas constitucionales contenidas en el Estatuto de Garantías Constitucionales exigidas por la Democracia Cristiana, y aceptadas por el Presidente Allende, quien concurrió, aún en su calidad de senador, a apoyarlas personalmente. Al menos por un breve momento, sentimos que podíamos respirar un poco más tranquilos.

6. Una salida en andas

Debo reconocer que cerrar este período de nuestra historia tan rudo y complejo, aún ocupando el cargo de ministro de Hacienda que se me había asignado, fue todo un logro. Otros, probablemente, habrían dejado la cartera antes, ya fuese por decisión propia o del mismo Presidente. Esos sesenta días de transición tuvieron un alto costo personal, incluso la pérdida de un hijo. Sin embargo, hasta el día de hoy, tengo la convicción y tranquilidad de haber hecho todo lo que estuvo en nuestras manos para evitar una crisis aún mayor.

Ese 4 de noviembre en que dejamos La Moneda, tras concluir la ceremonia del cambio de mando en el Congreso Nacional de Santiago, me preparé para salir por la puerta trasera del Salón de Honor, que era lo que se acostumbraba en esas instancias. Al salir a la calle, me encontré con la sorpresa de que afuera se estaba empezando a juntar una amigable multitud. “¡Viva el Chico Zaldívar!” gritaban, con grandes sonrisas en los rostros. Varios eran militantes de nuestro partido y agitaban nuestras banderas en el aire. Traté de abrirme paso entre la gente para dirigirme al auto. Algunos se abalanzaron sobre mí, mientras los carabineros en el lugar hacían lo posible por mantenerlos a distancia. En eso, alguien me levantó en vilo. Se le sumaron otros y, de pronto, me sentí flotar sobre un mar de hombros y cabezas. Me llevaron en andas durante tres cuerdas, hasta llegar a las puertas del Ministerio de Hacienda, en la Plaza de la Constitución. Ahí, en ese punto tan simbólico, me pusieron otra vez en el suelo, como queriendo decir: “Usted tiene que volver a ser ministro”. Aún un poco nervioso, me encaminé a mi vehículo y luego manejé hasta la casa de Eduardo Frei, donde habíamos acordado reunirnos. Por supuesto, al llegar, comenté lo que me había sucedido. Yo estaba muy impresionado, y es que el clima nacional de los últimos meses había opacado este cariño y aceptación por parte de la gente. Durante los últimos dos meses de transición había recibido duros e infundados ataques, especialmente a través de los medios controlados por la Unidad Popular, así como también de parte de los grupos de extrema derecha.

Dejamos el gobierno sintiéndonos orgullosos de lo que habíamos logrado. Si bien el nuestro no fue un período exitoso en su totalidad —y, en realidad,

ninguno lo es—, y pese a no haber alcanzado a implementar nuestro programa a cabalidad, conseguimos entregar un país en el que no solo se habían iniciado reformas importantes y necesarias, sino que además se había logrado controlar la inflación. Entregamos el gobierno ordenado, con sus finanzas públicas bastante saneadas. Hasta se me criticó porque dejamos vastas reservas de dinero sin gastar. A mi juicio, aquel era un colchón necesario, con el que todo gobierno entrante merecía contar. Y el que se avecinaba, yo lo sabía, lo iba a necesitar. La propuesta de Allende de la vía chilena al socialismo, “con sabor a vino tinto y empanada”, una revolución sin armas y apegada a la constitucionalidad, no la tendría fácil. Personalmente, lo consideraba algo casi imposible, más aún en un país fracturado en dos. Pero esta era la convicción de aquellos que asumían el mando. La suerte estaba echada y el camino, abierto.

V

UN GOBIERNO ENTRE DOS ALMAS

1. De una promesa democrática a la vía de los hechos

El triunfo de Salvador Allende y la llegada de la Unidad Popular al poder despertaron de inmediato un amplio interés internacional. Los ojos del mundo estaban puestos en Chile. Nuestro país se proyectaba como un interesante e inédito laboratorio político. El hecho de que un liberal republicano, masón y socialista como Allende llegara al poder a través de las urnas y, además, con una coalición que incluía a socialistas, radicales, comunistas y católicos provenientes de la Democracia Cristiana, como el MAPU, resultaba algo insólito, sin precedentes. Hasta entonces, el comunismo había tenido otro tipo de semblante, y Cuba, la otra gran experiencia latinoamericana, se había logrado a través de la lucha armada. El mundo estaba expectante: ¿Sería posible para el nuevo gobierno chileno transitar al socialismo por la vía democrática?

La ratificación de Allende en el Congreso Pleno sirvió para despejar un poco la incertidumbre respecto al curso que tomaría el país. En las manos de la Unidad Popular quedaba, así, el futuro de Chile.

El cambio de mando se realizó de acuerdo a lo estipulado. En la ceremonia, cada ministro entregó su cartera. Yo dejé la mía en manos de Américo Zorrilla, quien asumió en mi lugar. Era gracioso, pues ambos medíamos más o menos lo mismo, y daba la casualidad de que las iniciales de los dos eran “A. Z.”. Le ofrecí mi total colaboración para lo que se venía, ya que pronto tendría que redactar, entre otros proyectos, la Ley de Presupuestos de ese año. Zorrilla me agradeció el gesto.

La Unidad Popular entró entonces en la que sería su etapa de mayor auge. Habían triunfado en las urnas, y mucha gente tenía esperanzas y altas expectativas respecto al nuevo gobierno. Este rápidamente empezó a aplicar sus medidas. En materia económica, de inmediato se inició la proyectada estatización de la banca, adquiriendo acciones a gran escala a través de la Corfo. Asimismo, se incrementaron los salarios y las pensiones de manera sustancial, tal como habían prometido en su campaña, y se intensificó el control de precios, reforzándose la emisión en 25%. Con ello, creció el poder adquisitivo de los chilenos. La inflación, en tanto, parecía controlada, y una temporal sensación de

prosperidad y éxito se instaló en el país. Los partidos de oposición quedamos como alarmistas; habíamos vaticinado el desastre económico y, en la práctica, los hechos parecían decir lo contrario. Los primeros seis meses de gobierno fueron de una bonanza sorprendente. La inflación apenas se empujó al 5% a mediados de 1971, y la economía creció el primer año en 9%, cifra récord en nuestra historia económica. La última vez que se había registrado un crecimiento similar había sido en 1966. No obstante, para lograr todo esto se incrementó fuertemente el gasto contemplado en el presupuesto, más del 50%, lo que en el corto tiempo pasaría la cuenta.

Pese a los buenos augurios, desde la Democracia Cristiana no nos dejamos encandilar. Nuestro discurso se mantuvo en la misma línea. Personalmente, en reiteradas ocasiones advertí que, dado estas medidas, no solo sobrevendría un importante deterioro en la economía, sino que además esto sucedería rápido.

En paralelo, el gobierno impulsó con fuerza su agenda política. A fines de 1970, Allende indultó a 43 extremistas de izquierda, varios de ellos militantes del MIR, quienes habían participado en actos terroristas, calificándolos de “jóvenes idealistas”. La decisión fue muy cuestionada. Casi en paralelo, Carlos Altamirano fue elegido secretario general del Partido Socialista. Al asumir, el dirigente envió un mensaje fuerte y claro: muy pronto, el Presidente debía romper con la “legalidad burguesa”.

Uno de los primeros proyectos de ley que presentó el gobierno fue el que creaba los llamados “Tribunales Vecinales”, en 1971. Estos tenían como objetivo impartir justicia en los territorios de su jurisdicción, y estaban integrados por los propios pobladores. La medida fue polémica, ya que recordaba a los famosos tribunales populares de países como China o Cuba. Para muchos, fue una señal del curso que comenzaban a tomar las políticas de gobierno.

Otro proyecto que sacó ronchas fue la reforma al sistema educacional de la Unidad Popular, la que pretendía crear la Escuela Nacional Unificada (ENU). Esta apuntaba, entre otras cosas, a integrar los distintos niveles de educación en un solo sistema, eliminando las diferencias entre enseñanza técnica y humanista, y estableciendo una educación común obligatoria de 12 años, supervisada por el Estado, enfocada en potenciar una formación vocacional que aportara a la realidad industrial o fabril de la época. Si bien dicho proyecto dejaba en libertad a la educación privada de integrarse o no al nuevo sistema, condicionaba el reconocimiento oficial del Estado solo a las instituciones que lo adoptasen.

Como era de esperarse, esto último desató una reñida contienda. Las relaciones ya estaban muy tirantes, y creo que el gobierno se precipitó. Quizás debieron esperar un poco más. El debate, incluso, provocó la intervención del cardenal Raúl Silva Henríquez, quien señaló que la Iglesia venía propiciando desde hacía ya varios años una reforma educacional profunda, pero que era fundamental que la educación fuese pluralista, requisito que el proyecto de la ENU no garantizaba. Su posición contó con el respaldo de la Conferencia Episcopal, la que declaró: “Nos oponemos al fondo del proyecto por su contenido, que no respeta valores humanos y cristianos fundamentales, sin perjuicio de sus méritos pedagógicos en discusión”¹⁷. La Iglesia Católica de la época estaba a cargo de muchos colegios en el país, y la idea de integrarlos a este sistema regentado por un Estado docente de orden laico era interpretada como una amenaza al tipo de formación que entregaban. El rechazo generalizado que recibió el proyecto fue tal que Allende decidió pausar su tramitación, y finalmente la normativa nunca vio la luz.

A poco andar, no tardaron en emerger desde el gobierno figuras que exigían implementar los cambios por la vía de los hechos, saltándose las normas y los procesos parlamentarios. Muy pronto comenzamos a ser testigos de cómo la sensatez fue cediendo frente al apuro y el entusiasmo desbordados. Así, el gobierno comenzó a recurrir a resquicios legales.

Si bien la Ley de Nacionalización del Cobre —uno de los ejes programáticos de la campaña de la UP— fue aprobada en forma unánime por el Congreso en julio de 1971, este no fue el caso para el resto de las expropiaciones. El programa de gobierno contemplaba desarrollar tres áreas en la economía: una privada, una mixta y un Área de Propiedad Social (APS), esta última concebida mediante la estatización de un vasto sector de actividades económicas como la gran minería, el sistema financiero, el latifundio, el comercio exterior, las grandes empresas y los monopolios industriales y de distribución estratégicos. El listado original incluía 91 empresas. Este era uno de los grandes objetivos del gobierno, uno de los elementos más novedosos y cruciales de su programa, y lo que le permitiría captar considerables excedentes para financiar las transformaciones estructurales proyectadas. El mecanismo empleado para construir el APS se realizó a través de cuatro modalidades: compra de acciones por parte de la Corfo a empresas privadas, intervención, expropiación y requisición de empresas. Sin embargo, el gobierno no contaba con mayoría en el Parlamento y, ante la imposibilidad de generar una nueva legislación —como lo habíamos hecho nosotros para sacar adelante la Reforma Agraria—, recurrieron a un mecanismo alternativo, echando

mano al antiguo y aún vigente Decreto Ley N° 520, promulgado durante la República Socialista en 1932. La norma permitía al Estado requisar cualquier industria considerada estratégica, siempre y cuando esto se realizara bajo alguna de las siguientes tres causales: receso productivo, acaparamiento de bienes o capacidad productiva no utilizada en períodos de escasez. Dicha definición era tan ambigua que, en la práctica, dejaba abierta la posibilidad de expropiar la mayoría de las empresas del país. Fue el abogado Eduardo Novoa, asesor jurídico de Allende, quien tuvo la idea de usar dicho resquicio para ejecutar el programa de expropiaciones.

El gobierno utilizó también otro tipo de mecanismos legales para llevar adelante su política de intervención o requisiciones, parapetándose en simples decretos basados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, el Código del Trabajo o la propia Ley de Reforma Agraria. Tal fue el caso de un Decreto de Reanudación de Faenas, aprobado en los años 40, que permitía la intervención o requisición de aquellas empresas consideradas clave para la economía nacional que hubiesen paralizado sus faenas por disputas laborales. Estas se desataban de forma espontánea, o definitivamente eran instigadas por simpatizantes o militantes de la UP, con el fin de provocar la intervención. Puesto que la normativa avalaba la toma de fábricas, los trabajadores paralizaban y ocupaban las empresas, mientras el Estado hacía de agente interventor y dejaba la administración de estas en manos de los primeros. Era tanto el desgaste y debilitamiento de las empresas intervenidas que, con frecuencia, muchos de sus propietarios terminaban por venderlas al gobierno.

La verdad es que era bastante difícil distinguir entre aquellas tomas genuinamente organizadas por los trabajadores y aquellas en que participaban agentes externos u operadores políticos influyendo en los propios sindicatos. Es probable que ambos se complementaran, en su afán por acelerar el proceso de traspaso de empresas al APS, aun a costa de la legalidad vigente. Tal fue el emblemático caso de la empresa Yarur. Ubicada en la comuna de San Miguel, constituía una de las principales industrias textiles del país, y aunque hasta entonces había funcionado con absoluta normalidad, tras el rechazo de algunas demandas planteadas por el sindicato, fue tomada por trabajadores partidarios de la UP. Tras paralizar sus faenas, los obreros exigieron la estatización de la empresa. A los pocos días, sin más preámbulos, el gobierno decretó su requisición. Este hecho, ocurrido a comienzos de 1971, marcaría un precedente que se extendería raudamente y sin distinción a otros ámbitos de la actividad económica.

Muy pronto, la intervención comenzó a salirse de todo control. Ya no se limitaba a las grandes empresas, sino que empezó a afectar a las medianas y pequeñas. Esto provocó protestas y acciones incluso de parte del pequeño comercio. Los paros se fueron haciendo cada vez más habituales. A mediados de 1971, argumentando su carácter monopólico, el gobierno anunció la nacionalización de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, conocida como “La Papelera”, una de las mayores empresas privadas del país y la más grande en su rubro en Latinoamérica. Dicha compañía se resistió con garras y dientes. Mientras sus dueños y accionistas se alinearon para no dar su brazo a torcer, se produjo una gran movilización nacional detrás del eslogan “¡La Papelera NO!”, que buscaba defender un bien considerado determinante para la libertad de prensa. Y es que la Papelera era el principal abastecedor de papel para los medios de comunicación impresos de la época. Dado que aquel no podía importarse desde el exterior, la medida convertía al gobierno en dueño de esta estratégica empresa, permitiéndole controlar la prensa y poner candado a la libertad de expresión. El asunto mutó en una larga contienda que implicó un gran desgaste financiero para la empresa; sin embargo, el proceso de nacionalización sería interrumpido por el golpe de Estado de 1973, poniéndose con ello freno definitivo al cuestionado proyecto del gobierno.

Pese a la resistencia y al clima de conflicto generado por este tipo de medidas, el ritmo estatizador fue bastante acelerado. Se calcula que, a fines de octubre de 1971, se habían requisado o intervenido 106 empresas y, transcurrido un año y medio de gobierno, el 50% de las empresas industriales consideradas monopólicas se encontraban ya en manos del Estado¹⁸.

En el caso del sistema financiero y bancario, dado que el gobierno no contaba con una base legal para su expropiación, se buscó un camino más sofisticado. La Corfo abrió un poder comprador a través del Banco del Estado para acciones de bancos privados a precios muy convenientes, mientras el Banco Central, por su parte, generó una línea especial de crédito para financiar dicha operación. La presión fue soslayada, pero brutal. Ante la disyuntiva de vender sus acciones a buen precio o el temor a perderlo todo, terminar con acciones de dudoso valor o enfrentar una expropiación que pagara mucho menos, los accionistas procedieron a vender masivamente. Este procedimiento, que en apariencia era formal y no expropiatorio, hacía parecer que los tenedores habían “voluntariamente” vendido sus acciones. Así, al concluir 1971, el Estado tenía bajo su control el 80% del sistema bancario.

Pronto, las tomas se extendieron también hacia el mundo rural, expropiándose no solo aquellas tierras que calificaban para entrar en dicho proceso, sino que también pequeñas o medianas propiedades que no estaban contempladas ni cumplían con los requisitos para ello. El programa de gobierno planteaba acelerar el proceso de su reforma agraria y, a poco andar, propusieron la reducción del límite máximo de los predios de 80 a 40 hectáreas. Dado que no contaban con mayoría parlamentaria, debieron ajustarse a la legalidad vigente, pero en los hechos el proceso se desbandó y la situación se les fue de las manos. La efervescencia era absoluta y el apremio desencadenó una escalada incontrolable: muchos fundos fueron ocupados o tomados ilegalmente. Dichas acciones, impulsadas principalmente por el MIR, ocasionaron malestar y oposición no solo entre los propietarios, sino que también entre los propios campesinos. De hecho, estos presionaron firmemente al gobierno para que definiera quién representaba las políticas gubernamentales a nivel de comandos comunales y provinciales, muchos de ellos influenciados por el MIR.

Al respecto, el testimonio de Raúl Aravena, dirigente campesino de la Confederación Triunfo Campesino, resulta bastante esclarecedor:

¿Por qué teníamos la discusión con el MIR? Porque tenía que ver con el carácter de los fundos que debían ser expropiados. Porque había tomas de fundos que tenían dos trabajadores, tres trabajadores, y eso era un gran problema porque nos ponía en una situación de discusión nacional de que estábamos expropiando a gente que no correspondía. Tuvimos en María Pinto, en El Monte, en Melipilla, en Linares, en Temuco también, serios problemas con ellos. La discusión tuvimos que hacerla directamente a nivel comunal, cómo se resolvía esto. Al final nunca se resolvió, porque ellos operaban por cuenta propia no más y su organización después no pasaba ni por los consejos campesinos ni por el movimiento sindical, sino que operaban de facto. Ese fue un gran problema porque nos creaba desprestigio a nivel nacional, lo que era muy complicado¹⁹.

Estas contradicciones y ambigüedades afectaron progresivamente en la caída de la productividad agropecuaria, aumentando también el descontento en el campesinado. Aires de enfrentamiento y violencia comenzaron a desatarse en el mundo rural.

A esas alturas, no solo era la oposición la que denunciaba transgresiones a la legalidad. Dentro del propio conglomerado gobiernista empezaron a avistarse las primeras fisuras, con el MIR y el PC enfrentándose en duras polémicas a través de la prensa. Destacados dirigentes comunistas trataban a los militantes del MIR como “matones” y “aventureros”. La improvisación, resultado del “entusiasmo” por llevar adelante los cambios, y el no contar con políticas claras respecto a cómo afrontarlos estaban pasándoles la cuenta.

Ya en enero de 1971, el senador demócratacristiano y presidente del partido, Narciso Irureta, denunciaba al respecto: “La situación se está aproximando al caos. No sacamos nada con declaraciones de las autoridades, si mientras tanto militantes y grupos de sectores gobiernistas, atropellan, asaltan, toman predios, cortan caminos con bandas armadas y perjudican, en primer término, a los trabajadores campesinos (...). En Liquiñe, funciona un centro guerrillero que está extendiendo sus actividades hasta la frontera con Argentina. Hay caminos cortados por grupos armados”. Para luego agregar: “Mientras el Presidente de la República asiste aquí en el Norte a ceremonias de todos los colores y pronuncia discursos, que tienen muy poco que ver con la realidad que vive el país, el ministro de Agricultura está entregado en el sur a un doble juego. Por una parte, expresa públicamente que está contra las tomas ilegales de predios, pero, adonde él llega, aumentan las tomas ilegales y las situaciones conflictivas”. Y finaliza: “Reiteramos nuestro apoyo al proceso de Reforma Agraria. Pero si no se realiza dentro de la ley y con garantías para todos los comprometidos en el proceso, no tendremos Reforma Agraria, sino caos, hambre y cesantía...”²⁰.

El proceso de Reforma Agraria llevado adelante por la Unidad Popular alcanzó a expropiar aproximadamente 4.400 predios, cifra equivalente a más de 6,4 millones de hectáreas. Un cuarto de dichas expropiaciones tenía menos de las 80 hectáreas de riego básico requeridas por la ley. Para dimensionar la velocidad con que se propició este proceso, basta señalar que, durante el primer año de gobierno, se expropió casi el mismo número de predios que durante todo el mandato de Eduardo Frei²¹.

Todas estas acciones fueron claras vulneraciones al Estatuto de Garantías que la Unidad Popular firmó con la Democracia Cristiana. A la par, comenzó a materializarse aquello que muchos temíamos desde un principio: la radicalización de las relaciones políticas. La oposición se sintió amenazada, mientras el oficialismo adoptaba, cada vez con mayor fuerza, aquella postura que encarnaba la famosa frase acuñada por el senador y dirigente socialista

Carlos Altamirano: “Avanzar sin transar”.

El gobierno recurrió a los medios de comunicación que controlaba para desacreditar a la oposición, a través de campañas que denigraban e injuriaban a sus dirigentes. En mi caso, a modo de ejemplo, se publicaron todo tipo de difamaciones, tales como “Frankenstein Zaldívar, en su afán de meterle cuco al país, inventó jugoso crédito con banco ruso”²²; “Andrés Zaldívar Larraín, un multimillonario que saltó desde el cargo de Juez de Policía Local al Ministerio de Hacienda”²³, “Zaldívar, arrienda hampones”²⁴, “Fabulosa estafa del enano Zaldívar”²⁵ o “Lo que Zaldívar dice es lo que Zaldívar inventa. Pero lo que Zaldívar inventa, no tiene nada que ver con la realidad”²⁶. Dicho fenómeno, por supuesto, cobraba aún más fuerza durante los períodos electorales.

Este tipo de acciones era similar a la estrategia implementada por las “democracias populares” impuestas en otros países. Lo que se buscaba era desacreditar al opositor, a tal punto de conculcarle sus derechos y sacarlo del mapa. Fueron campañas odiosas, plagadas de calumnias y falsedades. Obviamente no fui el único que sufrió este tipo de ataques; todos aquellos que osaban levantar la voz para denunciar las arbitrariedades cometidas sufrieron un destino similar, y todos, sin distinguos, éramos metidos en el mismo saco, etiquetados con los mismos epítetos: “traidores”, “fascistas”, “reaccionarios”, “sediciosos”.

Aunque durante los primeros meses nuestro partido se mostró comprometido a colaborar con el gobierno y abierto a llegar a acuerdos para lograr objetivos determinados en materia de transformaciones claves para el país, este tipo de situaciones fueron minando las confianzas y deteriorando nuestras relaciones con la UP.

Pronto quedó de manifiesto que la Unidad Popular era un gobierno fracturado entre dos almas. Por un lado, estaba la propuesta de la vía chilena al socialismo “con empanada y vino tinto” de Allende, un hombre de probada tradición democrática, quien incluso se había mostrado crítico respecto a la invasión soviética en Checoslovaquia el año 1968, prometiendo durante su campaña presidencial que el programa de gobierno se ejecutaría apegado al marco de la legalidad y las garantías constitucionales. Desde el otro extremo, iba asomando la otra faz de la izquierda, un sector más rupturista y radicalizado que estaba dentro y también fuera del gobierno, dispuesto a acelerar el proceso aun a costa de la legalidad: el llamado “Poder Popular”. Este, que incluía al MIR y al PS, fue

cobrando cada vez más fuerza. Frente a ellos, el Partido Comunista aparecía incluso como moderado y conciliador, intentando mantener la sensatez y evitar la crisis política.

Hoy, mirando en retrospectiva, creo que, entre estas dos propuestas, la que mejor comprendía la realidad nacional era la del Poder Popular. Y es que en dicho contexto era imposible pretender instalar un régimen socialista, de corte marxista, sin arrasar con la democracia. La revolución, tarde o temprano, tendría que dirimirse a través de un “enfrentamiento inevitable”, como afirmaba Carlos Altamirano, mediante la fuerza, la lucha armada y por la vía de los hechos, y no precisamente a través del “cauce legal”. Esta última estrategia era en realidad una ilusión, así como una tremenda ingenuidad; después de todo, los partidarios del Presidente Allende representaban apenas un tercio de la población — recordemos que había sido electo con el 36% de los votos—, y el gobierno nunca logró contar tampoco con mayoría en el Parlamento. Si esto no fue obvio desde un principio, se tornaría más y más evidente con el paso de los meses.

2. “¿Y por qué no Zaldívar?”: La carrera senatorial por Chiloé, Aysén y Magallanes

A poco de asumir el nuevo gobierno, se convocó a una elección complementaria para llenar el cupo senatorial por Chiloé, Aysén y Magallanes que había dejado vacante Salvador Allende, al postularse como candidato a la Presidencia de la República. En la Democracia Cristiana, una vez más, los nombres de Bernardo Leighton y Gabriel Valdés salieron a la palestra, pero ninguno aceptó. Valdés asumiría como subsecretario general del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por lo que no estaba en condiciones de competir. Bernardo también declinó. Entonces, alguien planteó, en la sesión del consejo nacional presidida por el senador Renán Fuentealba: “¿Y por qué no Andrés Zaldívar?”.

La ley, sin embargo, exigía una edad mínima de 35 años para postular al cargo, y en ese momento yo solo tenía 34. Las elecciones estaban convocadas para enero, y mi cumpleaños era en marzo, por lo que no alcanzaba a cumplir la edad estipulada.

“¿Y si modificamos la ley y proponemos que la elección complementaria se haga junto con la elección municipal programada para abril?”, sugirió alguien. El resto apoyó la iniciativa. Ya no me quedó ninguna excusa para decir que no.

La elección quedó programada para el 4 de abril de 1971. Acepté la candidatura porque me sentía comprometido con el partido. No era que tuviera aspiraciones personales, pero entendía que se trataba de una elección emblemática, pues era el cupo de Allende. A esto se sumaba que, desde la DC, necesitábamos recuperar terreno. Sabíamos que ganar era casi imposible, pero no podíamos dejar de dar la pelea.

La izquierda presentó como candidato al socialista Adonis Sepúlveda, quien representaba una línea particularmente dura dentro de su partido, de corte trotskista. Por su parte, el partido de centroderecha Democracia Radical —colectivo anticomunista, formado en 1969, a partir de la expulsión de un grupo de militantes del Partido Radical— llevó al abogado Jorge Ovalle, quien recibió,

además, el apoyo del Partido Nacional y del senador por esa zona, Fernando Ochagavía.

La campaña duró 60 días. Fue dura y estuvo marcada por un grado de violencia inusitado. Dirigentes democratacristianos en la ciudad de Castro fueron amenazados de muerte, y sus domicilios resultaron atacados. Yo, evidentemente, estaba en el ojo del huracán. La situación escaló a tal punto que, una noche, alrededor de las tres o cuatro de la madrugada, mi casa fue baleada. Ni yo ni Inés nos encontrábamos presentes. Yo andaba en una gira en Chiloé e Inés estaba en Aysén, pero mis padres y nuestras hijas sí estaban ahí.

En Punta Arenas, miembros de nuestro comando fueron víctimas de un tiroteo, mientras realizaban labores de propaganda callejera. Y en Puerto Aysén, el mismo día de la elección, Juan Millalonco, un joven de 16 años, militante de la Juventud Demócrata Cristiana (JDC), quien participaba en mi campaña, fue asesinado justo frente a la sede de nuestro partido, a manos de una brigada del Partido Socialista. De ahí que el equipo de trabajo poblacional de la JDC lleve hasta hoy su nombre.

Como candidato, fui blanco de permanentes insultos y descalificaciones, sobre todo desde el sector más implacable de la izquierda, representada por Adonis Sepúlveda. En los diarios controlados por la Unidad Popular se dijeron cosas brutales, de un odio visceral. No importaba si estas eran veraces o no. ¡Daba lo mismo! El objetivo era destruir y aniquilar al adversario, a como diera lugar.

La revista Punto Final hasta llegó a publicar un inserto, el 16 de febrero de 1971, titulado “Candidatura senatorial Andrés Zaldívar”, cuyo texto ironizaba sobre un supuesto llamado realizado por nuestro comando a quienes quisieran colaborar con la campaña: “Ante los innumerables ofrecimientos para colaborar en los trabajos electorales de la candidatura, se ruega a las personas que hayan ofrecido su cooperación y a las que deseen hacerlo en el futuro, se sirvan tomar contacto con el comando de Santiago, en la Penitenciaría, celdas de Roberto Viaux, Raúl Igualt y otras”²⁷.

Incluso se dijo que la Democracia Cristiana estaba pactando en secreto con la derecha para ganarle a Adonis Sepúlveda, y me acusaron de confabular con Jorge Ovalle. Los hechos demostraron la verdad: no hubo ningún intento de pactar con la derecha, y mantuvimos con toda fuerza nuestra campaña hasta el final.

El gobierno, por su parte, no escatimó en esfuerzos para inclinar la balanza a favor de su candidato. Adonis Sepúlveda se trasladaba, haciendo campaña, en un avión de la Corfo, y el mismísimo Presidente Allende viajó a la región para apoyarlo públicamente.

Tal como previmos, no ganamos esas elecciones, pero, a diferencia de lo que había sucedido siete meses antes en las presidenciales, la Democracia Cristiana no llegó última. Adonis Sepúlveda salió electo con el 52,51% de los votos, seguido por nosotros con el 33,75% y la derecha con el 13,73%. Aunque siempre supimos que estábamos muy lejos de derrotar al gobierno, nuestra misión era demostrar que nuestro partido seguía activo y vigente. Dado todo el despliegue y apoyo de la Unidad Popular hacia su candidato, nuestros resultados fueron vistos como un triunfo.

De igual forma, pese a que los resultados de las elecciones municipales, realizadas a nivel nacional en paralelo, dieron cerca del 50% a favor del gobierno, los partidos de oposición logramos elegir más regidores que la Unidad Popular. Esto no era un hecho menor.

3. Punto sin retorno: El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic

La mañana del 8 de junio de 1971, el exministro Edmundo Pérez Zujovic, quien viajaba acompañado por una de sus hijas, fue asesinado en un atentado perpetrado por un grupo de extrema izquierda denominado Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP). La acción se llevó a cabo en represalia por lo sucedido dos años antes en Pampa Irigoin.

Me encontraba en mi casa cuando me avisaron. Tenía una relación muy cercana con Edmundo, por lo que su pérdida me dolió muchísimo. A la vez, no pude evitar pensar que podría haber estado en su lugar, pues había sido tanto o más vilipendiado que él durante los últimos años de gobierno. Recuerdo, incluso, que antes del atentado conversamos con Edmundo y con don Eduardo Frei acerca de la necesidad de tomar precauciones. Su muerte fue la confirmación de que nos adentrábamos en tiempos de absoluta inseguridad. Los límites de la ética y la cordura se desdibujaban y, de pronto, todo parecía justificable en nombre de las ideologías. En cualquier momento podía aparecer uno de estos grupos armados y ejecutarte. Ya no existían ni siquiera garantías mínimas.

Este tipo de hechos nunca se habían registrado antes en Chile y, a menos de un año de asumida la UP, ya contábamos con dos asesinatos: el del general Schneider y el de Edmundo. Uno había ocurrido a manos de la extrema derecha, y el otro fue protagonizado por la extrema izquierda. Bien lo expresó el cardenal Silva Henríquez en la Catedral de Santiago, el día del funeral: “Dos veces, dos hombres: ¡Ya es demasiado! Tenemos que matar el odio, antes de que el odio envenene y mate el alma de Chile”²⁸.

El gobierno, en un primer momento, responsabilizó a la ultraderecha, desplegando un operativo a cargo de la Policía de Investigaciones para dar con los responsables, el que duró varios días. Incluso se decretó toque de queda. Desde la oposición, no faltaron quienes apuntaron al gobierno como autores intelectuales del hecho, en tanto desde la izquierda se planteó la tesis de que el atentado formaba parte de una estrategia de desprestigio y una escalada sediciosa contra la Unidad Popular. El propio Presidente Allende lo denunció como “una deliberada provocación destinada a alterar la marcha institucional” y un

desesperado esfuerzo por provocar una sensación de caos.

Los autores del atentado, Heriberto Salazar y los hermanos Ronald y Arturo Rivera Calderón —este último había figurado en la nómina de indultados por Allende meses antes—, murieron acribillados por la policía. Su muerte hizo imposible llevar a cabo un proceso judicial como correspondía.

Para la Democracia Cristiana, este episodio fue interpretado como una clara señal de que había grupos dispuestos a todo para silenciarnos. No lo lograrían. Por el contrario, si algo hizo la muerte de Edmundo Pérez Zujovic fue reafirmarnos en la no aceptación de la violencia, viniese de donde viniese, y levantar nuestra voz aún con más fuerza y convicción. No hay que olvidar que el propio Edmundo, en medio de las discusiones internas partidarias previas a la definición del Congreso Pleno, sostuvo que la única solución para despejar las dudas acerca del comportamiento democrático de la Unidad Popular era incorporarnos a dicho gobierno y compartir conjuntamente la responsabilidad.

Incluso, el 13 de junio, a días del atentado, Patricio Aylwin reafirmó nuestro compromiso al declarar:

Los plumarios despluman de la nada a los que sembraron el odio contra Edmundo Pérez, los que sembraron el odio contra Andrés Zaldívar, los que siembran el odio contra Patricio Rojas, los que siembran el odio contra la Democracia Cristiana, los periodistas que controlan la prensa y la TV oficial, aquellos que son escogidos para manejar los canales de TV y para escribir en los diarios de la UP injurias, mentiras, veneno contra quien discrepa, los que hacen creer que todo el que no está de acuerdo incondicional con el gobierno de la UP está al servicio de intereses mesquinos [sic], está al servicio de intereses foráneos, es un egoísta, es un retrógrado, es un sedicioso, es un miserable o es un asesino. Los que predicán eso (...) tienen una responsabilidad muy grande, porque ellos crean el clima y las condiciones que conducen al asesinato con la mira de llegar al enfrentamiento armado. Yo le creo al Presidente Allende cuando afirma que quiere construir el socialismo por una vía democrática, pluralista y humanista. Yo quiero que él pueda hacerlo. A los democratacristianos no nos tiembla la mano a colaborar en la construcción de una sociedad socialista, pero al mismo tiempo democrática, pluralista, al servicio de los trabajadores dentro de la libertad²⁹.

Estos eran los últimos momentos en que aún estaban tendidos los puentes con el gobierno. No obstante, la fractura era ya irreparable. Las confianzas se diluían. A partir del asesinato de Edmundo, nuestro partido comenzó a perfilarse como un claro referente de oposición al gobierno, mientras las relaciones con la UP continuarían en un franco deterioro.

En paralelo, se fue produciendo un consecuente acercamiento con la derecha, lo que generó nuevas bajas en el PDC. El 24 de octubre de 1971, el ala de izquierda, denominada sector “tercerista”, renunció al partido para crear la Izquierda Cristiana (IC), argumentando que en nuestras filas ya no había lugar para posturas como la suya. Ideológicamente hablando, se definieron como un partido de izquierda, inspirado en los valores cristianos y humanistas cristianos compatibles con el marxismo. No tardarían en integrarse a la Unidad Popular. Entre los militantes que renunciaron figuraban el exdiputado Bosco Parra, los diputados Luis Maira y Pedro Felipe Ramírez y el presidente de la JDC, Luis Badilla, todos dirigentes muy valiosos. Más tarde se les sumarían militantes del MAPU, tales como los senadores Rafael Agustín Gumucio y Alberto Jerez, el diputado Julio Silva Solar y el ministro Jacques Chonchol.

En tanto, el acercamiento de la Democracia Cristiana con otros grupos de la oposición comenzó a materializarse en alianzas con una verdadera capacidad de elaborar proyectos comunes. El 18 de julio de 1971, se llevó a cabo una nueva elección parlamentaria complementaria, esta vez por la agrupación departamental de Valparaíso, Quillota, Casablanca y Limache, para llenar la vacancia de la diputada democratacristiana Graciela Lacoste, fallecida en marzo de ese año. Con motivo de esta convocatoria, por primera vez, los partidos de oposición se presentaron unidos en una elección. La Democracia Cristiana, el Partido Nacional y la Democracia Radical apoyaron como candidato al médico cirujano y ex militante del Partido Radical, el democratacristiano Óscar Marín. El candidato de la Unidad Popular fue el socialista Hernán del Canto, secretario general de la CUT.

Previamente, alarmado y preocupado ante el evidente y creciente distanciamiento entre la DC y la UP, el Presidente Allende había planteado la posibilidad de que el conglomerado gobiernista apoyase la candidatura de Marín. Pero el PS se opuso. Así, tal como señala Luis Corvalán, “el giro de la DC hacia la derecha y su paso definitivo a la oposición fue objetivamente facilitado por las

conductas sectarias y prepotentes que tomaron cuerpo en una parte de la Unidad Popular”³⁰.

Meses antes, desde el partido me habían preguntado si estaba dispuesto a incorporarme al comando de la campaña de la candidatura de Marín. Por supuesto, acepté. Fue una contienda dura y compleja, la que se complicó aún más en su recta final con el terremoto del 8 de julio, cuyo epicentro fue en La Ligua. Bien se decía entonces: “A cada Presidente, su terremoto” —a Alessandri le correspondió el de 1960; a Frei, el de 1965, y a Allende, el del 71—. Ese día, todos los equipos de campaña y los dirigentes de ambos bandos estábamos en el Hotel O’Higgins. La gran sacudida nos sorprendió en el comedor, que estaba en una especie de subterráneo. El piano, ubicado arriba del escenario, se desplazó tanto que estuvo a punto de caer, mientras la gente entraba en verdadero pánico. El senador comunista Luis Valente exclamaba: “¡Dios mío, Dios mío!”, mientras el diputado DC Luis Pareto, sentado a mi mesa, soltaba, nervioso, una sarta de garabatos.

El terremoto añadió un nuevo elemento a la campaña: presionados por la urgencia, elaboramos una estrategia para salir en apoyo de la gente afectada por la catástrofe, evitando de paso la intervención del gobierno con toda su maquinaria y recursos. Para ello, organizamos grupos voluntarios por barrio que removieron escombros, reunieron aportes y asistieron de diversas maneras a los damnificados.

El gobierno anunció que otorgaría un subsidio por medio del Banco del Estado. Para cobrarlo, la gente solo debía presentar la libreta de ahorros de la misma entidad bancaria. Era una manera de ganarse a la gente y una intervención difícil de combatir, dadas las circunstancias. Sin embargo, fue tanta la aglomeración de personas para recibir el aporte que, al final, la medida se volvió en contra del gobierno. La gente terminó reclamando por las largas colas y el cobro tan engorroso.

Finalmente, tras una lucha muy reñida, logramos ganar la elección. Marín se impuso por poco menos de dos puntos de diferencia sobre el candidato de la UP. El trabajo duro y el esfuerzo desplegado por colaborar con los demás partidos de la oposición rindieron frutos. No sería la última vez.

4. Una inoportuna visita: Fidel Castro en Chile

En el mes de noviembre, Chile recibió la visita de Fidel Castro, el primer ministro y líder de la Revolución Cubana. El año anterior, el gobierno chileno había retomado las relaciones diplomáticas con ese país, y la visita de la controvertida figura era, por así decirlo, la guinda de la torta. Pese a que Castro venía, en teoría, solo por unos pocos días, terminó quedándose casi un mes en Chile, un hecho inédito en la historia de nuestra diplomacia.

El dirigente cubano recorrió el país de norte a sur, visitando fábricas, campos, minas y universidades, siendo recibido en masivas concentraciones populares. Se entrevistó con el cardenal Silva Henríquez, con la CUT, la CEPAL y con estudiantes y trabajadores. Viajó, acompañado por el Presidente Allende, desde Puerto Montt hasta Punta Arenas, y hasta compartió animadamente con el entonces jefe de la guarnición militar de Santiago, el general Augusto Pinochet Ugarte, mientras se encaminaban al monumento de O'Higgins. ¡Ironías de la vida! Su presencia congregó concentraciones a lo largo del país, culminando con un acto masivo, aunque no tan concurrido como se esperaba, en el Estadio Nacional. Por supuesto, la cobertura mediática, nacional e internacional, fue total.

Castro venía a apoyar el proceso chileno y a solidarizar con el gobierno de la Unidad Popular. Le interesaba observar y constatar de cerca lo que estaba ocurriendo en Chile; sin embargo, nunca se transparentaron los entretelones de lo que habría tratado con el Presidente Allende ni con los principales dirigentes políticos del oficialismo. Hubo muchos rumores acerca de que el líder cubano habría manifestado su pesimismo y dudas respecto a cómo se estaba desarrollando la vía chilena al socialismo. Las ambigüedades eran muchas y las contradicciones, excesivas, y aunque reconocía que la experiencia chilena era inédita y original en términos históricos, se mostraba escéptico: ninguna revolución podría hacerse efectiva bajo el “cauce legal”, con instituciones y oposición activas y reaccionarias. Las transformaciones debían hacerse a sangre y fuego, a través de las armas y la lucha de clases, hasta socavar el sistema de manera terminal y resolver la disputa por el poder. Al menos hasta ese momento,

Chile no cumplía con ninguna de estas premisas. Estoy convencido de que Fidel Castro se fue del país en medio de estas cavilaciones.

Su prolongada visita tampoco ayudó a calmar los ánimos. Por el contrario, despertó malestar en muchos ciudadanos. Días antes de la partida de Castro, el 1 de diciembre de 1971, la oposición organizó la primera gran marcha contra el gobierno de la Unidad Popular: la “Marcha de las Cacerolas Vacías”. Miles de mujeres salieron a las calles, congregándose en el centro de Santiago, para protestar contra los abusos, violencia y escasez de alimentos. La represión policial fue durísima, motivando posteriormente una acusación constitucional contra el ministro del Interior, José Tohá, uno de los hombres más cercanos al Presidente y parte del ala más moderada del PS, lo que significó posteriormente su salida del gabinete. El gobierno decretó estado de emergencia y Allende nombró al general Augusto Pinochet como jefe de la Zona de Emergencia. Al ser consultado sobre el manejo del orden público, el militar comentaría escuetamente: “Siempre debe cumplirlo Carabineros, que tiene medios persuasivos, porque si el Ejército sale a la calle, sale a matar”³¹.

Curiosa relación la de Allende y Pinochet. El Presidente confiaba en él plenamente. Tanto es así que, días más tarde, en respuesta a una publicación del diario derechista Tribuna, que insultaba a las Fuerzas Armadas, declararían: “La tradición histórica de nuestras Fuerzas Armadas no será manchada por insultos (...), pero es indispensable que el país sepa que el Gobierno llevará ante la Justicia a los responsables de esta indignidad, que es además una provocación, ya que fue hecha deliberadamente después que el jefe de la Zona de Emergencia, general de la República, señor Augusto Pinochet, dio a conocer sus bandos a los medios de comunicación. Llamar mercenarios a nuestros soldados, marinos, aviadores y carabineros es insultar a Chile y a los chilenos”³².

Con todo, la experiencia de la Marcha de las Cacerolas Vacías comenzó a replicarse también en otras ciudades, en varias oportunidades. A medida que las manifestaciones se multiplicaban, quedaba en evidencia que el período de bonanza del que había gozado la UP en su primera etapa llegaba a su fin.

5. Alianzas impredecibles

En enero de 1972, se llamó a nuevas elecciones complementarias: una para llenar el cupo senatorial en O'Higgins y Colchagua, y otra para elegir un diputado por el distrito de Linares. La Democracia Cristiana proclamó como candidato a senador a Rafael Moreno. Por su parte, el Partido Nacional proclamó a Sergio Diez como su candidato por Linares. La UP, en tanto, nominó como carta a senador a Héctor Olivares, y para diputada por Linares postuló a María Eliana Mery, hermana de Hernán Mery, militante democratacristiano y jefe zonal de la Cora, quien fuera vilmente asesinado en abril de 1970 por orden de un terrateniente del sector.

Si bien para dichas elecciones no existió un pacto formal entre la DC y el Partido Nacional, sí hubo un acuerdo tácito de proceder por omisión. Resultaba casi impensable que en O'Higgins y Colchagua, región fuertemente representada por la derecha y en la cual muchos agricultores habían sido afectados por la Reforma Agraria, estos se mostraran proclives a votar por Rafael Moreno. Nuestro partido se volcó a esta campaña con fuerza. Yo mismo me trasladé a vivir a la zona para colaborar con Rafael, a quien reconocía grandes méritos por su decidida labor en pro de la Reforma Agraria. El apoyo del Partido Nacional a su candidatura fue abierto y decidido, siendo encabezado por su histórico dirigente Sergio Onofre Jarpa. Asimismo, en Linares, a falta de un candidato DC, nuestra gente claramente votó por Sergio Diez. Ambos resultaron electos.

Esta implícita alianza electoral se había ido gestando gradualmente. Ambos sectores se sentían amenazados por un gobierno que, por la vía de los hechos, intentaba imponer su programa. El país vivía una crisis política, económica y social con resultados impredecibles, y quienes conformábamos la oposición temíamos que la política del "avanzar sin transar" de los sectores más extremos de la UP terminara por implantar un gobierno de corte marxista en Chile. Nuestra apreciación, en esos momentos, era que el Presidente Allende era sobrepasado permanentemente por el Poder Popular.

Un año antes, Radomiro Tomic había intentado convencer a Allende para que la UP y la DC compitieran en una lista conjunta en las elecciones municipales de

1971. “Conformemos una alianza. Con esto podemos ganar todos los municipios”, le propuso Tomic. Soy testigo de la gran convicción que Radomiro tenía respecto a la posibilidad de un trabajo electoral conjunto con la izquierda. Confiaba en que ese era el camino. Pero Allende le dijo que lo sentía, que no estaba en condiciones de llegar a un acuerdo de ese tipo. “Si tú decides esto, no va a haber un 1976”, le advirtió Tomic. Él nunca olvidó esa conversación.

Se avecinaban las elecciones parlamentarias fijadas para marzo de 1973. De acuerdo a la ley electoral vigente desde los años 50 —la llamada Ley Rogers, cuyo autor había sido Jorge Rogers, diputado demócratacristiano—, los partidos tenían prohibido formar pactos entre ellos y debían presentar sus propias listas. La lógica detrás de dicha ley era que cada partido resultare con una representación real de lo que correspondía a su potencial electoral. Podría discutirse su conveniencia o no, pero ya se habían realizado cuatro elecciones generales parlamentarias desde su vigencia y todos convenían que era un sistema equitativo.

Pero, una vez más, la Unidad Popular buscó un resquicio para sobrepasar dicha ley. Para ello, recurrió al Tribunal Constitucional, sosteniendo la tesis de que, si bien los partidos no estaban facultados para hacer pactos, sí podían conformar federaciones o confederaciones y presentar así una sola lista de candidatos. La UP utilizó esta figura para reunir a sus partidos y presentar una lista única. El Tribunal Calificador de Elecciones aprobó la medida, y la izquierda se organizó en una federación llamada “Partidos de la Unidad Popular”. El cálculo era claro: a los partidos de la Unidad Popular, con una lista única de candidatos, frente a una oposición dividida en dos o más listas, le bastarían solo el 40% de los votos para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y, de esa forma, aprobar las leyes que no habían logrado promulgar hasta la fecha. Estaban convencidos de que sería imposible que la Democracia Cristiana y la derecha se pusieran de acuerdo y logaran crear una federación propia.

Frente a esta maniobra, era imperativo generar alguna fórmula para competir. Si nos presentábamos por separado, no tendríamos ninguna posibilidad. Debíamos encontrar una solución. Así, el 8 de julio de 1972, se anunció la creación de la Confederación de la Democracia (Code), una alianza conformada por federaciones de partidos opositores al gobierno. En este proyecto aunaron fuerzas la Federación de Oposición Democrática —integrada por la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Partido Democrático Nacional— y la Federación Nacional Democracia Radical —en la que participaban el Partido

Nacional y el Partido Democracia Radical—.

Esta alianza nos permitiría enfrentar de mejor manera las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Entendíamos lo determinantes de sus resultados: si el oficialismo obtenía mayoría en el Parlamento —con una votación del orden del 42 al 45%— podría hacer lo que quisiera en materia legislativa, incluso aprobar medidas que ya habían sido rechazadas, tales como la Reforma Educacional.

En la Democracia Cristiana, después de una larga discusión, la opción de pactar con la derecha fue aprobada por unanimidad en el consejo nacional. La decisión fue difícil. Buena parte de los militantes del partido resentía las permanentes descalificaciones de los sectores derechistas hacia nuestro actuar en los últimos años, así como el hecho de aliarnos con un sector con el que no nos identificábamos, el que además se mostraba cada vez más reaccionario y agresivo, apoyando a grupos violentistas, tales como Patria y Libertad.

No obstante, en esa oportunidad nuestros técnicos electorales hicieron ver que, si la oposición se presentaba dividida en dos listas, pese a que en conjunto obtuvieran más del 50% de los votos, no lograría mayoría en la Cámara de Diputados, todo ello a causa del sistema electoral vigente que la Unidad Popular pretendía burlar mediante el resquicio legal mencionado anteriormente.

En aquel consejo en que se discutió la medida, y del que fui partícipe, Bernardo Leighton pronunció la frase que terminó convenciendo incluso a los más reacios: “Si lo que pretenden es pasarnos por encima o destruirnos, la obligación de la Democracia Cristiana es aliarse con Dios o con el Diablo”.

6. “Puerta a puerta”, una nueva forma de hacer campaña

En el contexto de esta alianza oficial con la derecha, se gestó mi campaña senatorial por Atacama y Coquimbo en 1973. En un comienzo, se suponía que yo iba a ser candidato a senador por Curicó, Talca, Maule y Linares. Me había llamado José Foncea, senador de la DC por esa zona, para pedirme que aceptara ser candidato, pues él no iría a la reelección. Me pareció una propuesta interesante, ya que además conocía bien la zona, pues la familia de Inés era de esa región. El mismo Patricio Aylwin, quien en el período anterior había resultado electo senador por esa agrupación provincial, me había propuesto que fuéramos en la misma lista de candidatos.

Sin embargo, a poco andar, recibí también el llamado de Ignacio Palma, senador por Atacama y Coquimbo, para contarme que había declinado su reelección y que creía que yo reunía todas las condiciones para reemplazarlo. La idea era que corriéramos con dos candidatos, ya que había cinco cupos disponibles. La otra carta sería Alejandro Noemi, quien ya era senador por esa región. Por cierto, no era una empresa fácil. La zona era bastante proclive a la izquierda, pero desde el partido insistieron en que postulara por esta circunscripción y no por Talca, y acaté.

Fue una experiencia compleja, ya que desde un principio dio la sensación de que yo, en realidad, estaba compitiendo y poniendo en riesgo a Alejandro Noemi, quien era un gran senador. Este adverso panorama se alimentaba por la información que entregaba la prensa, la que sostenía que íbamos a tener que competir por un único cupo. Por otro lado, si bien yo era una figura conocida, como candidato era nuevo en la zona. En ese sentido, Noemi tenía más probabilidades a su favor. Pese a todo, desde un comienzo, tuve el convencimiento de que podíamos salir ambos electos.

No tardó en aparecer cierto recelo entre nuestros adherentes, pese a que Noemi y yo pertenecíamos al mismo proyecto. Fue por esta razón que decidí no usar el aparato partidario para mi campaña. No quería que pareciese que estaba restándole recursos a mi contraparte.

El diputado DC por Copiapó, Raúl Barrionuevo, quien iba por su reelección, fue de gran ayuda en mi campaña, sobre todo recorriendo la provincia de Atacama. Él era local, de origen modesto, y con mucho esfuerzo e inteligencia había logrado surgir. Entre nosotros se armó una dinámica muy compartida y leal. Él ponía su camioneta y yo pagaba la bencina, y nos turnábamos para manejar largos tramos recorriendo la región. Con frecuencia terminábamos la jornada a las doce de la noche, y nos alojábamos en su casa en Caldera, donde Olguita, su mujer, nos esperaba con algo para comer.

Raúl tenía una llegada impresionante con el mundo popular, sobre todo con los pescadores. Uno lo veía hablando con la gente e impactaba el cariño con que lo trataban. Él mismo había sido pescador, también comerciante. Aquella amistad me marcó mucho. Años después, durante el gobierno de Patricio Aylwin, fue nombrado intendente de Atacama, cargo que desempeñó en forma brillante. Hasta el día de hoy se recuerda todo lo que hizo por esa tierra que tanto amaba.

Fue él quien me enseñó la lógica de campaña “puerta a puerta”, algo que no era común en esa época. Fue una campaña de una exigencia física enorme. Recorrimos cada pueblo hablando con la gente, tomándonos el tiempo para realmente abordar sus inquietudes. Inés, también, fue un gran apoyo. Resultó ser la más “campanera” de todos. Organizó grupos potentes de mujeres, tenía iniciativa, no me pedía ni preguntaba nada.

En realidad, mi familia completa fue fundamental. Como mi hermano Alberto, en paralelo, se había presentado como candidato a diputado DC por el tercer distrito de Santiago y Puente Alto, tuvieron que repartirse. Varios de mis hermanos se quedaron en la capital, mientras mi padre, mi madre y mis suegros se trasladaron al norte para ayudar. Nos instalamos en dos casas: una en La Serena y otra en el sector de Peñuelas. En esta última, fuimos vecinos del expresidente Gabriel González Videla, quien terminó apoyándome también. Incluso, desde La Esperanza, el fundo de mi suegro en San Clemente, se incorporó “Panchito” Lorca, quien manejaba el camión en el que acarreábamos nuestras cosas.

Traté de hacer mi campaña evitando cualquier roce con la de Alejandro Noemi, manteniendo siempre una buena relación con él, y en conjunto con los candidatos y diputados Marino Penna, Eduardo Sepúlveda y Mario Torres, así como también con nuestros alcaldes y regidores (hoy denominados concejales).

Asimismo, recibí el apoyo de muchos dirigentes sindicales, especialmente de los minerales de cobre de El Salvador y Potrerillos. Así como me había acompañado en el año 1971 en la campaña a senador por Chiloé, Aysén y Magallanes, Julio Lagos, entonces dirigente transportista en la zona norte, esta vez se hizo cargo del trabajo de propaganda y calle. Se trataba de una labor compleja, pues en muchas ocasiones se producían violentos enfrentamientos entre los equipos de los candidatos en disputa.

Años después, a mediados de los 80, Julio Lagos, que había sido opositor a la dictadura, cambió de bando y llegaría a apoyar a la dictadura militar. En los 90, pasó a militar en Renovación Nacional y fue elegido senador por la Región de Tarapacá. Pese a ello, siempre mantuvimos una relación leal. De hecho, en 1997, fue el suyo uno de los dos votos claves con que salí electo como presidente del Senado.

Aquella fue una campaña de mucha mística y compromiso. Recorrimos, palmo a palmo, todas las localidades, llegando casi a la frontera con Argentina. Contraté a un taxista, Carlitos Villalobos, quien me acarreó por toda la provincia de Coquimbo en el asiento trasero de su Chevy. Llevaba mi almohada y mi frazada, y por las noches él manejaba mientras yo dormía.

Pese a todo este apoyo y amistad, la campaña no estuvo exenta de la violencia que, a esas alturas, ya era característica en períodos de elecciones. Un día, estábamos con Raúl Barrionuevo en el Hotel Real en Vallenar, cuando repentinamente explotó un balón de gas en uno de los patios, provocando un incendio. Yo estaba descansando en mi habitación, cuando me despertó el griterío. Me asomé por la puerta y vi las llamas que cruzaban el pasillo. Al otro lado, Raúl, que venía de su pieza, me llamaba: “¡Andrés! ¡Andrés!”. Agarré vuelo, y logré saltar y cruzar las llamas. Conseguimos salir a la calle. Después nos enteramos de que el balón había explotado producto de la instalación de un explosivo y que los autores habían sido miembros de un comando violentista partidario del gobierno, integrado por extremistas del MIR.

En lugares como el asentamiento minero El Salvador, el ambiente era muy hostil. Allí predominaban la izquierda y el Partido Comunista. La preferida era la senadora comunista Julieta Campusano, quien iba por su reelección. Era una mujer inteligente, de gran liderazgo y arrastre popular. Cuando llegué a hacer campaña, me dieron la bienvenida con un cartel en la entrada que decía “Zaldívar: Entrarás vivo, saldrás muerto”.

El domingo 4 de marzo de 1973, salieron electos senadores por Atacama y Coquimbo tres candidatos de la Unidad Popular y dos de la Democracia Cristiana: Noemi y yo. Logré el 20% de los votos, y Alejandro Noemi sacó el 12%. Incluso en el mineral El Salvador logramos una buena votación, superándonos la candidata de la UP por apenas unos pocos votos. Fue algo que nadie pensó, ni siquiera yo mismo.

La noche de la elección, como los resultados eran tan estrechos, confieso que estaba muy inquieto. Las encuestas me asignaban una alta votación y una segura elección, pero me preocupaba la posibilidad de que se perdiese Alejandro, tanto así que no salí a celebrar mi propio triunfo, el cual a esas alturas era probable. A sabiendas de lo delicada que era la situación, le pedí a mi hermano Javier y a José Luis del Río que llamaran a Noemi por teléfono para ponerlo al tanto. El senador estaba dolido, pues creía que iba a perder. Ambos le explicaron: “No, Alejandro. Sacamos los cálculos, y tú ganas. Los resultados hasta ahora son estrechos. Lo que hay que hacer es nombrar abogados en todos los colegios electorales y defender tu votación y la de Andrés, porque entre ambos suman. Hay que dedicarse a esto por entero, hasta el final”.

Finalmente, en las elecciones parlamentarias de 1973, la Code ganó con el 56% de los votos. Un total de 117 parlamentarios fueron elegidos de entre las filas de nuestra alianza, una victoria no menor. Por su parte, aunque la Unidad Popular estuvo lejos de alcanzar la mayoría, logró obtener el 43% (un total de 63 parlamentarios), incrementando de manera significativa su votación respecto a las elecciones de 1970.

La aspiración de la derecha, especialmente del Partido Nacional, era obtener en estas elecciones los dos tercios de los parlamentarios, y así poder poner término al gobierno de Salvador Allende mediante una acusación constitucional. Sin embargo, ni la oposición ni el gobierno lograron la mayoría. Creo que este casi empate definió finalmente un escenario de abierta radicalización entre las posturas más extremas de ambos conglomerados: la ultraderecha, por una parte, visualizó que solo a través de actos violentos y terroristas generaría un clima de inestabilidad e ingobernabilidad tal que les permitiría presionar a las Fuerzas Armadas a asumir el poder mediante un golpe militar; en tanto, los sectores de extrema izquierda autodenominados “Poder Popular”, procederían por los mismos métodos de violencia y terrorismo, con el objetivo de doblegar a la oposición.

Tras estas elecciones, y ya sin motivo para mantener la alianza, la Code se disolvió. De esta experiencia aprendí que, en los pactos electorales, siempre debe primar el pragmatismo. Los partidos deben ser prácticos a la hora de conseguir los votos que les corresponden y no ser saboteados por el sistema electoral, incluso si ello implica aliarse con sectores con los que no se comparte un programa común o una identidad ideológica.

7. Chile polarizado: La radicalización de las posturas

A medida que el proyecto de Salvador Allende avanzaba, iba también progresivamente exhibiendo sus grietas y vulnerabilidades. Similar proceso comenzó a vivir la sociedad chilena. Las divisiones ideológicas, naturales en todo régimen democrático, mutaron en una polarización extrema. El gobierno, por su parte, comenzó a enfrentar serias contradicciones al interior de su propia coalición, y el dilema de elegir entre la “vía armada” o la “vía político-institucional” entrampaba el camino. La Unidad Popular no hace ni una cosa ni otra, no opta, y en este proceso vacilante entre “avanzar sin transar” o “avanzar consolidando” se desgastará hasta quebrarse. Esta dualidad estratégica, sumada a una inadecuada dirección política contribuyeron a mantener el conflicto sin resolución³³. El predominio de los rupturismos sobre los gradualismos y la inexistencia de pragmatismo y voluntad para llegar a acuerdos estabilizadores terminarían siendo decisivos.

Ya a comienzos de 1972, el PS se autodenominó “Vanguardia Revolucionaria”, planteando derechamente la posibilidad de dar un paso al costado respecto al programa gubernamental, de manera de poder avanzar más velozmente por la vía de los hechos. El Presidente y el resto de los partidos de la coalición se mostraron críticos ante este gesto. No obstante, más allá de cualquier postura, lo que esta alternativa deslizaba era una situación más que crítica para el gobierno: el planteamiento de sobrepasar la autoridad del Presidente de la República y desligarse de su opción y compromisos legalistas, apegados a la Constitución y la democracia.

Asimismo, las medidas implementadas durante los primeros meses de gobierno, tales como el incremento desorbitado del gasto público, empezaron a mellar nuestra frágil economía nacional, desatándose ya a mediados de 1972 una crisis profunda. Desde el segundo semestre de 1971, la inflación retomó su ascenso, y ya para el año siguiente lo que se había instalado era una hiperinflación, sobrepasando el 200% y elevándose a cerca del 500% a fines de 1973. El desabastecimiento generalizado de bienes esenciales y el mercado negro pasaron a ser cotidianos. Una ola de huelgas comenzó a azotar al país. Las reservas que

nuestro gobierno había dejado se consumieron. El presupuesto del fisco se agotó. El gobierno se vio entonces en la obligación de renegociar nuestra deuda externa, mientras el Banco Central se desangró emitiendo, y casi duplicando, el dinero circulante para intentar contener la crisis interna.

En este cuadro casi terminal, indudablemente intervinieron actores económicos, tanto internos como externos, interesados en profundizar la crisis. El boicot norteamericano y los tentáculos de la CIA jugaron su rol de manera decidida. Sin embargo, creo que lo verdaderamente decisivo fue el irresponsable manejo de las finanzas públicas y del mal llamado “déficit presupuestario programado”. No hay economía que resista duplicar el gasto fiscal en un ejercicio, o un Banco Central que emite duplicando el circulante en un año, agregándose a ello la expropiación de un amplio sector productivo —más de 300 empresas, cuando el programa gubernamental contemplaba solo 91— que, a su vez, no responde en mantener o crecer en productividad. Durante esa época, el ministro de Economía justificaba la situación explicando que cada vez que se expropiaba o requisaba una importante empresa, sus bodegas se encontraban vacías de materia prima, de repuestos y de insumos para funcionar. Ante esto, uno se preguntaba: ¿serán tan ingenuos para llegar a pensar que el empresario amenazado de expropiación les dejaría las bodegas llenas de stock, materias primas, repuestos y, además, dinero en abundancia en las propias cuentas corrientes? Había que estar preparado para afrontar esas emergencias, y es lógico que las empresas incorporadas al Área de Propiedad Social no pudieran mantener la producción para satisfacer el abastecimiento de la población, más aún cuando se había creado una excesiva demanda por el dinero circulante.

En marzo de 1972, salió a la luz una denuncia hecha por el periodista Jack Anderson, quien reveló documentos secretos de la compañía estadounidense International Telephone and Telegraph Corporation (ITT), dueña del 70% de la Compañía Chilena de Teléfonos en aquel entonces. Los antecedentes daban a conocer la preocupación e interés de dicha empresa por apoyar el complot contra Allende.

De acuerdo al documento filtrado por Anderson, Frei y la Democracia Cristiana aparecían mencionados en reiteradas ocasiones. Incluso se citaba un discurso hecho por mí, a modo de referencia, de lo que estaba sucediendo en el país. En aquellas líneas, una y otra vez, se sacaba a colación lo preocupado que estaba el otrora mandatario respecto del curso que estaban tomando los acontecimientos, a la vez que se especulaba sobre la factibilidad de su eventual colaboración con la

campana para derrocar al Presidente Allende. El gobierno aprovechó de agarrarse de esto para denunciar una supuesta traición de nuestra parte.

Todo esto, por supuesto, acentuó la desconfianza de aquellos que ya creían que la DC confabulaba con la derecha, poniéndonos en una difícil posición. En respuesta, Frei salió al paso y habló por cadena nacional radial:

Chile entero ha podido comprobar que, olvidando los hechos, tergiversando el propio documento, más que repudiar la intervención extranjera, a lo cual se hubiese sumado el país entero —perdiendo así, una vez más, la oportunidad de unir y no de sembrar odio—, solo han intentado lanzar una campana de intrigas y calumnias contra partidos y personas de la oposición democrática, usando, curiosamente, un documento escrito sin ninguna base y sin una prueba de la más remota consistencia. Hoy parece que bastara que cualquier corresponsal transmita el rumor que ha oído de un tercero para que eso sirva de base para montar acusaciones³⁴.

Evidentemente, estas denuncias eran absolutamente falsas y únicamente pretendían involucrarnos en tan torpe accionar. Era cierto que la ITT, coludida con el gobierno norteamericano y la CIA en particular, había conspirado contra el gobierno de Salvador Allende desde el momento mismo de su elección, primero para intentar impedir que asumiera la primera magistratura y, posteriormente, para derrocarlo de la misma. Todo esto se supo y fue noticia en el mundo entero. No obstante, puedo dar fe, si en algo vale, que la Democracia Cristiana no estuvo jamás tras ello.

8. La política como rehén de la violencia

A esas alturas, en el Congreso imperaba un ambiente de desconfianza brutal entre los parlamentarios de gobierno y de oposición. La convivencia se había deteriorado y la polarización fue haciéndose cada vez más extrema. Se instaló en el país una sensación de violencia generalizada. La prensa de los primeros meses de 1973 da cuenta de ello. El 8 de enero, un militante comunista murió baleado a manos de miembros de Patria y Libertad. Semanas después, el senador DC José Musalem salió ileso de un atentado perpetrado en su contra. El 8 de febrero, un niño de 13 años fue asesinado por extremistas de izquierda en la sede del Partido Nacional en Valdivia. Tres días más tarde, el diputado Arturo Frei, también de la Democracia Cristiana, sufrió una balacera en Chiguayante, en la provincia donde era parlamentario. El 19 de febrero, Jaime Contreras, militante DC de 18 años, fue asesinado mientras pintaba propaganda en Quilicura. El abogado Eugenio Velasco, del Partido de Izquierda Radical (PIR), fue herido por simpatizantes del oficialismo. Esto solo por citar algunos casos.

Yo mismo, durante esta época, llegué a enterarme de supuestos atentados en mi contra. En 1972, se convocó a una elección complementaria en la provincia de Coquimbo, para llenar el cupo del diputado comunista Cipriano Pontigo, quien había fallecido recientemente. Las elecciones se fijaron para el 16 de julio de ese año. Solo se presentaron dos candidatos: por la Unidad Popular fue la gobernadora Amanda Altamirano, militante comunista, y, por el conjunto de los partidos de la oposición, Orlando Poblete, militante del PIR.

El día en que estaba programado un gran acto público en Coquimbo, en el que yo iba a hacer de orador junto a nuestro candidato, en la tarde, antes de la concentración, llegó el jefe de plaza, el general Pedro Ewing, al Hotel Francisco de Aguirre en La Serena. Venía a advertirme: “Usted está bajo amenaza. Hemos recibido información de que hay un comando que tiene la orden de eliminarlo esta noche. Por lo tanto, le pedimos que tome todas las precauciones posibles y evite su exposición”. Poco después, me enteré de que quien había filtrado la información había sido un importante dirigente de la Unidad Popular que había escuchado el rumor sobre el posible atentado. También cabía la posibilidad de

que quienes estaban detrás de ese intento del atentado fuese gente de ultraderecha, cuyo objetivo era adjudicárselo a la extrema izquierda. Todo era posible en medio del clima de confrontación y de violencia que se vivía en el país.

A comienzos de octubre de 1972, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones llamó a un paro nacional que complicó al gobierno, dificultando la distribución de productos. Ante las medidas tomadas por el Ejecutivo, en respuesta, los camioneros endurecieron aún más sus exigencias, llegando a bloquear las carreteras del país y provocando el desabastecimiento de combustibles y mercaderías. Allende se vio obligado a declarar estado de emergencia en 18 provincias. Otros gremios, como los transportistas urbanos y el comercio detallista, se sumaron a la movilización, a la que adhirieron también numerosos colegios profesionales, trabajadores portuarios y de la banca, la FEUC, la Federación de Estudiantes Secundarios (Feses) y hasta pilotos de LAN Chile.

Como consecuencia de la paralización, se formaron los primeros Cordones Industriales en Cerrillos y Maipú, los que agrupaban a los trabajadores de una misma zona y coordinaban sus respectivas labores de producción. Se constituyeron al menos 31 a lo largo del país. Asimismo, para tratar de contener la situación, el gobierno anunció la implementación de una “economía de guerra”, que incluía el racionamiento de alimentos y el control de la producción del trigo. Con el objetivo de supervisar este proceso, se creó la Secretaría General de Distribución y Comercialización.

Para entonces, la escasez y las colas ya eran habituales, al igual que la proliferación del mercado negro. Se decía que el desabastecimiento era producto del acaparamiento de los sectores más pudientes y una estrategia para sembrar el caos. El gobierno procedió a crear las famosas Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP), comités de racionamiento vecinales que buscaban aliviar la escasez de alimentos y suministrar, al menos, los bienes más necesarios a la población. Fue una iniciativa que sirvió de paliativo, pero que también funcionó con cierta irregularidad y sectarismo, ya que, según denunciaban muchos dirigentes poblacionales, dichas canastas de alimentos se entregaban, por lo general, a quienes manifestaban su adhesión al gobierno, negándoseles a aquellos que eran identificados como opositores.

Este tipo de soluciones implementadas por la UP eran mecanismos típicos de los

regímenes comunistas. Además de sus fines prácticos, contenían un simbolismo ideológico muy potente que apelaba a la idea del Poder Popular. Es decir que, mientras más el gobierno avanzaba en esa línea, más proyectaba la sensación de estar llevando al país en la dirección que tantos temían.

En esas difíciles circunstancias, el Presidente Allende decidió conformar un gabinete cívico-militar para intentar paliar la crisis. Tras varios días de conversaciones, el 2 de noviembre, el Presidente nombró un nuevo “Gabinete de paz social”, presidido por el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, como ministro del Interior, acompañado del contralmirante Ismael Huerta, como ministro de Obras Públicas y Transportes, y el general de Aviación Claudio Sepúlveda, como ministro de Minería. Entre los nuevos miembros había también representantes de la CUT. La decisión tuvo efectos casi inmediatos, tal como un armisticio político: el 6 de noviembre finalizó el paro y el país pareció volver a la normalidad. Sin embargo, al interior de la coalición gubernamental no todo era miel sobre hojuelas. La medida fue respaldada por el Partido Comunista, no así por el ala revolucionaria, que la cuestionó abiertamente, interpretándola como una claudicación del gobierno ante las Fuerzas Armadas.

El general Prats era una persona de trayectoria ejemplar, un militar “constitucionalista”, al igual que el general René Schneider. Ambos fueron asesinados —Prats fallecería en un atentado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974—, en último término, por su irrestricto compromiso y lealtad a la Constitución. En diversas ocasiones tuve la oportunidad de escucharlos y de conversar abiertamente, y siempre expresaron su apego irrestricto a la doctrina de que el poder militar debía estar subordinado al poder civil, a la Constitución, a los gobiernos elegidos democráticamente y a la no deliberación.

Estoy convencido de que el general Prats aceptó su nominación como ministro del Interior porque creyó posible poder aportar, con su esfuerzo, a tender puentes de entendimiento y encuentro entre el gobierno del Presidente Allende y los sectores de oposición democrática. En sus memorias, explica con bastante claridad las razones por las que acepta participar en el gobierno de Allende: “Queda en claro que nuestra incorporación al gabinete no implica compromiso político para las FF.AA. y que su fundamento radica en la situación de emergencia que vive el país y en la necesidad urgente de restablecer la normalidad pública”. El objetivo del ingreso de los militares al poder Ejecutivo es preciso: “Mantener la paz social, neutralizando el enfrentamiento inminente dentro de la comunidad nacional. También indico que hay que asegurar la

libertad y pureza de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 y garantizar la continuidad del Gobierno Constitucional”³⁵.

Prats tenía una lúcida percepción no solo respecto de lo que estaba sucediendo en el país, sino que también de lo que ocurría al interior del Ejército, de la deliberación y de los dos bandos que se confrontaban ante la realidad imperante. Durante el paro de octubre, fui invitado por el general Prats, junto a otros parlamentarios del partido, y tuvimos la oportunidad de conversar ampliamente acerca de lo que sucedía en el país. En un momento dado, nos pidió colaboración para restablecer la paz y poner término a la violencia.

9. Un informe descarnado pero necesario

Los primeros meses de 1973 estuvieron marcados por la huelga de los trabajadores de la mina El Teniente, el mayor conflicto laboral que tuvo que enfrentar la Unidad Popular. Las movilizaciones duraron setenta días, con consecuencias críticas para la economía nacional. En medio del conflicto, se llegó, incluso, a acusar constitucionalmente a los ministros de Minería y del Trabajo. La cercanía de estos grupos sindicales con la Democracia Cristiana y el hecho de refugiarse en el partido despertaron aún más la desconfianza desde la izquierda hacia nosotros.

Durante los tres años que gobernó la Unidad Popular, en numerosas oportunidades, denuncié las malas prácticas del oficialismo. A mediados de 1973, por ejemplo, di cuenta de que el gobierno estaba tratando de sacar al exterior las reservas de oro del Banco Central, algo que no era ilegal, pero sí significaba una medida inquietante. La información me había llegado a través de un grupo de funcionarios de Aduanas. En respuesta, el gobierno anunció que presentaría una querrela en mi contra, invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado. En el juicio, se llamó a declarar a los funcionarios, quienes testificaron que, efectivamente, habían sido instruidos para coordinar el despacho de dichas reservas. El caso se dilató y de la querrela no se supo más; ni siquiera fui citado a declarar como posible responsable del delito que se me pretendía imputar.

Asimismo, di a conocer el envío de más de un millón de dólares en billetes que el Estado había hecho llegar a un banco en Miami, al interior de maletas de equipaje. Por cierto, no se trataba de un acto ilícito, pero el hecho despertaba cuestionamientos y dudas, sobre todo en circunstancias en que mineras estadounidenses estaban embargando nuestros recursos en Chile. Este rol de denunciante me fue convirtiendo en una especie de “cabeza de turco”, una figura a la que la extrema izquierda atacaba como si representase a toda la oposición.

En mayo de 1973, a solicitud del partido, expuse frente al Senado un análisis — realizado junto a un equipo técnico— respecto al mensaje que el 21 de mayo previo había entregado el Presidente Allende al país. En dicha oportunidad, el mandatario había achacado buena parte de la responsabilidad de la crisis

económica a problemas heredados del gobierno de Eduardo Frei Montalva, así como al boicot y a las medidas impuestas por el gobierno norteamericano que había bloqueado créditos y el comercio internacional. Además, destacó los alcances del proceso de expropiación en su primer año, ensalzando la lucha ideológica contra el enemigo “capitalista”. “Aunque con menos dólares que antes, sin nuevos préstamos privados externos, bajo el hostigamiento permanente del poder imperialista, estamos dando un ejemplo de cómo un pueblo, movilizado y consciente, puede aumentar la producción”, afirmó en cadena nacional.

La elaboración del análisis que expuse ante el Senado nos significó revisar meticulosamente, punto por punto, cada una de las aseveraciones realizadas por el Presidente en su mensaje. Basándonos en las mismas cifras oficiales entregadas por el gobierno durante lo que iba de su mandato, verificamos todos aquellos datos relativos a su desempeño en materia económica, exportaciones y comercio internacional, inversión social, inflación, industrias nacionales, gasto de las reservas, entre otros. Nuestro informe terminó concluyendo que no solo se había perdido el control de la economía del país, sino que también que la Democracia Cristiana había advertido al oficialismo sobre este devenir en reiteradas ocasiones.

10. Aguas tumultuosas al interior del Ejército

A mediados de junio, se detectó un plan conspirador dentro del Ejército para derrocar al gobierno. El Presidente ordenó la detención y destitución inmediata de los confabuladores. En respuesta, el 29 de junio de 1973, el teniente coronel Roberto Souper, del Regimiento Blindado N°2, lideró una columna de vehículos armados que salió desde la base en calle Santa Rosa, y llegó hasta las puertas de La Moneda para cercar y abrir fuego contra la casa de gobierno y el Ministerio de Defensa, en cuyo interior se encontraban detenidos algunos de los militares expuestos. El subsecretario del Interior, Daniel Vergara, llamó de inmediato al Presidente para ponerlo al tanto de la situación: “Compañero Presidente, tenemos tanques aquí, frente a La Moneda, en la Plaza de la Constitución. Están disparando y se me informa que hay otros tanques rodeando La Moneda”³⁶.

La sublevación, conocida como el “Tancazo” o “Tanquetazo”, fue rápidamente controlada por las tropas leales al gobierno, encabezadas por el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats. Entre los uniformados que lo acompañaban, en primera línea, había estado el general Augusto Pinochet. El levantamiento fue tan improvisado que, según se dice anecdóticamente, uno de los tanques incluso habría pasado a echar bencina a una gasolinera en el camino.

Durante la asonada murieron 22 personas —civiles y militares—, entre ellos el camarógrafo argentino Leonardo Henrichsen, quien, mientras filmaba los hechos, fue ultimado por los disparos de uno de los militares golpistas. Si bien este intento de golpe fue sofocado, evidenció la gravedad de la crisis institucional. Investigaciones posteriores comprobarían que miembros de Patria y Libertad estuvieron entre los conjurados.

Esa misma noche, ante la multitud congregada en la Plaza de la Constitución, desde un balcón de La Moneda, y acompañado por los jefes de la FF.AA., el Presidente Allende reafirmaría su convicción por la vía pacífica al socialismo, proponiendo convocar a un referéndum: “El proceso chileno tiene que marchar por los cauces propios de nuestra historia, nuestra institucionalidad, nuestras características, y por lo tanto el pueblo debe comprender que yo tengo que mantenerme leal a lo que he dicho, haremos los cambios revolucionarios en

pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa ni significará tolerancia con los antidemócratas, tolerancia con los subversivos y tolerancia con los fascistas (...). Yo sé que lo que voy a decir es posible que no les guste a muchos de ustedes, pero tienen que entender cuál es la real posición de este Gobierno: no voy —óiganlo bien y con respeto—, no voy a cerrar el Congreso, porque sería absurdo. No lo voy a hacer. Pero si es necesario, enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo se pronuncie”³⁷.

No pasó ni un mes del intento golpista hasta que un nuevo asesinato conmocionó otra vez al país y, en especial, al Presidente. En la medianoche del 26 de julio, tras regresar de una recepción en la Embajada de Cuba, el edecán naval del Presidente Allende, Arturo Araya, un hombre apolítico y leal a la Constitución, fue asesinado por un francotirador en su propio domicilio. El crimen, una vez más, fue ejecutado por conspiradores ultraderechistas, con apoyo de oficiales golpistas y financiamiento de la CIA. Tras las pesquisas, 23 miembros del movimiento Patria y Libertad y del Comando Rolando Matus fueron detenidos y procesados por la Fiscalía Naval. Sin embargo, todos quedaron libres, salvo uno, el autor material del crimen, Guillermo Claverie, quien, pese a ser condenado, no pagó ni un solo día de prisión, pues fue indultado por la dictadura militar “por servicios prestados a la Patria”.

En medio de este crudo escenario, el 9 de agosto de 1973, el gobierno nombró al general Prats ministro de Defensa, lo que irritó aún más a los grupos militares disconformes. Este gesto, a la vez, dio cuenta de los extremos esfuerzos desplegados por el Presidente Allende, quien intentaba buscar respaldo en las Fuerzas Armadas para evitar el colapso de su gobierno.

Aunque Prats sabía que las tensiones al interior de la institución castrense se agudizaban cada día más, aún confiaba en su liderazgo para evitar la crisis y resguardar la constitucionalidad. Esta certeza, sin embargo, pronto se diluiría. Trece días después de que asumiera como ministro, un grupo de esposas de generales del Ejército llegó hasta su casa para entregarle una carta, en la que le solicitaban renunciar a su cargo. Eso lo devastó. Aquel día, Prats se encontraba enfermo, descansando en su hogar. En medio de la situación, debe haberse preguntado si acaso se acercaba un quiebre definitivo al interior del Ejército, su mayor temor.

Horas más tarde, llegaron hasta su hogar numerosas autoridades para manifestarle su apoyo: el propio Presidente Allende, varios ministros y

generales, entre ellos, el jefe del Estado Mayor, Augusto Pinochet, a quien Prats consideraba, a esas alturas, como su “segundo”.

En un intento por mediar la gravedad de la crisis, Prats solicitó a los generales del Ejército firmar una carta de respaldo público, a lo que varios se negaron. Ante esto, el día 23 de agosto presentó su renuncia, acompañada de una recomendación a Allende de nombrar, en su reemplazo, al general Augusto Pinochet. Prats confiaba en que este ayudaría a mantener la unidad al interior del Ejército y que sería, sobre todo, leal a Allende y a la constitucionalidad.

Pese a este lamentable desenlace, creo que Carlos Prats cumplió un rol esencial en impedir, o al menos dilatar, el quiebre rotundo al interior del Ejército. Sin su mediación y liderazgo, podría haberse desencadenado una verdadera guerra civil en Chile.

11. La soledad del Presidente

El 14 octubre de 1971, en un intento por contener el caótico proceso de tomas ilegales, expropiaciones y estatizaciones, los senadores Renán Fuentealba y Juan Hamilton presentaron un proyecto de reforma constitucional conocido como “Las tres áreas de la economía”. Este proponía modificar el artículo de la Constitución que definía el derecho de propiedad, configurando y delimitando las tres áreas de la economía (social, privada y mixta), agregando como materias de ley el autorizar la transferencia de empresas de un área a otra, permitiendo que los trabajadores las autogestionaran. La ley debía disponer qué tipo de empresas corresponderían a cada una, a la vez que modificaba los reglamentos que determinaban cómo proceder a la hora de estatizarlas. Se establecían disposiciones que limitaban la capacidad de expropiación, intervención y adquisición estatal hasta que no se creara una ley reguladora de este proceso, y se declaraba nulo todo acto estatizador previo al 14 de octubre de 1971.

La lucha en el Parlamento, entonces, se tornó brutal. La oposición insistía en la promulgación del proyecto, mientras el gobierno dilataba la iniciativa. El Partido Nacional, por su parte, lo apoyó con cierta reticencia, considerándolo un mal menor. Finalmente, el proyecto fue aprobado en la Cámara, en el Senado, y luego en el Congreso Pleno, el 27 de febrero de 1972. Esto, sin embargo, no significaría el fin de la contienda.

Tras su aprobación, la reforma se envió al Presidente para su promulgación o, en caso contrario, para que se sometiera a plebiscito, ya que al tratarse de una reforma constitucional su poder de veto era limitado. Pero el jefe de Estado, comprendiendo que de aprobarse un proyecto de tal naturaleza no podría cumplir su programa de traspaso al Estado de todas las grandes y medianas empresas, no procedió a su promulgación, aduciendo razones que, a nuestro juicio, no tenían fundamento alguno. Entre ellas, el mandatario argumentaba que la medida desnaturalizaría completamente el régimen político vigente en Chile, alterando del todo el proceso de formación de la ley.

Desde el partido, nos pidieron a Juan Hamilton y a mí liderar las negociaciones con el gobierno para que la iniciativa viera la luz. El ministro de Justicia, Manuel

Sanhueza, fue designado por Allende para tratar con nosotros. En julio de ese año, nos reunimos, junto a nuestro equipo técnico, en el Hotel Crillón.

Manuel Sanhueza era un hombre de actitud ponderada, quien representaba una línea dentro del Partido de Izquierda Radical que había empezado a tornarse más bien crítica respecto a cómo el gobierno estaba manejando las tomas y la situación de violencia en los campos e industrias. Era, sin duda, una de las pocas figuras oficialistas con las que uno podía sentarse a conversar.

Finalmente, logramos llegar a un acuerdo y redactamos un texto que firmamos los tres. “Ahora voy a ir a hablar con el Presidente”, dijo el ministro. Nos quedamos tranquilos, pensando que habíamos dado un paso positivo.

Al día siguiente, recibí un llamado de Sanhueza. Me dijo que quería conversar con nosotros, y que necesitaba que nos reuniéramos. En la cita, nos contó lo que había sucedido. Había llegado hasta El Cañaveral, la casa de descanso y reunión de Allende en El Arrayán, con el texto bajo el brazo. “Veámoslo mañana en el consejo de gabinete”, le habría dicho el mandatario. Al día siguiente, se había encontrado con una sorpresa: no solo estaban allí reunidos los miembros del gabinete, sino que también los presidentes de los partidos, incluido Carlos Altamirano. Tras presentar Sanhueza el documento, el secretario general del PS había advertido: “Si se aprueba este acuerdo, por esa misma puerta me retiro”. Desconcertado, el ministro había buscado la mirada de Allende, pero el Presidente se había limitado a encogerse de hombros.

“Les vengo a informar que he sido desautorizado en mi cargo negociador, por lo que el Partido Independiente Radical ha resuelto renunciar al gobierno”, nos reveló. Tras aquel incidente, el PIR se retiró de la Unidad Popular. En tanto, el proyecto de reforma constitucional nunca fue promulgado. El gobierno se valió de todo tipo de resquicios legales para evitarlo.

A esas alturas, la incredulidad se había ya apoderado de muchos de nosotros. La confianza en la capacidad de avanzar en un entendimiento con Allende se iba disipando. Estaba claro cuál era la línea de la izquierda que se había terminado por imponer al interior del gobierno.

Este episodio con Manuel Sanhueza es revelador respecto al peso e influencia que el Partido Socialista ejercía sobre el gobierno de Allende, al punto que terminó apropiándose de su capacidad resolutive, descartando cualquier

posibilidad negociadora con la oposición. Allende tenía una lealtad muy grande hacia su partido y, creo, temía que este lo abandonara o retirara su apoyo. Fue esto lo que terminó provocando este tipo de fricciones, las que derivaban en serias contradicciones. Prometía, por ejemplo, que iba a tomar medidas para frenar las tomas, y luego la situación se complicaba aún más. Decía que no era partidario de la violencia, pero el país entero sabía que dentro de su coalición existían grupos armados que operaban de hecho, permanentemente.

Creo que Allende se equivocó, desde el principio, al pensar que su compromiso republicano y democrático era compatible con el proyecto marxista que aspiraba implementar. Estimo que fue un error de su parte respaldar de manera irrestricta la revolución en Cuba y la instalación de Castro en el poder, así como apoyar el proyecto OLAS, iniciativa del líder cubano que buscaba unir a los países de Latinoamérica para la revolución antiimperialista, y que él mismo presidió. También considero que se equivocó, al inicio de su gobierno, en apoyar la nominación de Carlos Altamirano en lugar de Aniceto Rodríguez como secretario general del Partido Socialista. Este se caracterizaba por su moderación y capacidad de diálogo, a diferencia de Altamirano, quien era un convencido de que la revolución socialista debía imponerse, si era necesario, por la fuerza.

Por otro lado, mirado en retrospectiva, Allende y la Unidad Popular tenían absoluta razón cuando denunciaban las prácticas intervencionistas del gobierno de Nixon para impedir su acceso al poder y, posteriormente, también para derrocarlo, así como el permanente boicot desplegado en materia financiera y de comercio exterior en contra de su gobierno. Fueron actos deleznable, que afectaron no solo el proceso gubernamental, sino que al país en su conjunto. Por desgracia, aquello se preveía; no podía esperarse del gobierno norteamericano otra conducta, pues estaban convencidos de que Chile podía transformarse en una nueva Cuba, con la amenaza de que ese mismo proceso se irradiara a otros países de América Latina. Eso no era tolerable desde su óptica imperialista y hegemónica. La suya fue una conducta francamente condenable, fuera de toda ética.

Pero también es necesario reconocer que parte importante de la crisis estuvo enraizada en los propios actos y decisiones del gobierno de la Unidad Popular, en su intransigencia, en sus contradicciones, en su cerrazón e incapacidad de tomar acuerdos. Varios episodios en este relato dan cuenta de ello. Tal como afirma Luis Corvalán: “El sectarismo hizo mucho daño. En la administración pública y en las industrias y servicios estatizados, intervenidos o requisados se

observó, apenas se instaló el nuevo gobierno, que no poca gente de centro y hasta de derecha demostraba su disposición y a menudo su interés en colaborar con la nueva administración del país. Algunos se pasaban, incluso, a la Unidad Popular. A estos se les solía calificar despectivamente como “los UP 5” porque llegaban a las filas después de la victoria del 4 de septiembre. Necesitábamos muchos UP 5. Pero ¿quién iba a hacer entender esto a aquellos para los cuales llegar al gobierno significaba usufructuar de ventajas y sinecuras que los llevaba a rechazar a cuantos se acercaban a la UP, por el temor de que vinieran a compartir las prebendas del poder? Así se esfumó la posibilidad de un gran entendimiento entre la UP y la DC, de forjar una vasta alianza popular que podía haber llevado adelante la revolución chilena. Si, en definitiva, esta no prosperó, no fue porque de por sí fuese inviable, toda vez que la inmensa mayoría nacional estaba por los cambios revolucionarios, ni se debió al poder de sus enemigos, el imperialismo norteamericano en primer término, pues la revolución cubana ya había demostrado —y después lo demostró Vietnam— que un pueblo unido puede imponerse a los dictados del coloso yanqui. Fue derrotada, principalmente, porque la Unidad Popular careció de una política amplia y acertada y en ella terminaron por gravitar más las posiciones sectarias y extremistas que no contribuyeron a atraer más y más fuerzas y, en cambio, llevaron agua al molino de los contrarios”³⁸.

No obstante lo anterior, también estoy convencido de que Allende no pudo llevar adelante su programa de gobierno, fundamentalmente, debido a que la Unión Soviética y los países bajo su órbita, si bien le dieron apoyo político internacional y comunicacional, le negaron el respaldo que más necesitaba: el apoyo económico para, precisamente, contrarrestar la política de boicot del gobierno norteamericano, tal como lo habían hecho con Fidel Castro en Cuba.

Desde este punto de vista, sostengo que el Presidente Allende fue traicionado por el mundo marxista, el cual no le tendió la mano cuando más lo requería. Cuando viajó a la Unión Soviética, a fines de 1972, a pedir ayuda económica, se devolvió tan solo con unas migajas. En dicha visita solicitó un préstamo por 500 millones de dólares y regresó con un financiamiento con crédito atado por 50 millones. Esto sucedía en el momento más álgido de la crisis, segundo semestre de 1972, cuando declaró que el país únicamente contaba con abastecimiento de trigo por unos pocos días. Y es que tanto los soviéticos como los cubanos creían en un proyecto marxista leninista al que se llegaba por la vía armada, no a través de promesas democráticas. La revolución a la chilena “con empanadas y vino tinto” nunca los convenció ni les pareció factible.

En los últimos meses de su gobierno, Allende se quedó solo. El 5 de septiembre de 1973, seis días antes del golpe, los trabajadores de los Cordones Industriales le escribieron una carta: “Han pasado tres años, compañero Allende, y Ud. no se ha apoyado en las masas y ahora nosotros, los trabajadores, tenemos desconfianza”³⁹. Hasta el propio MIR se dio el lujo de criticarlo, afirmando que no era un verdadero revolucionario y que era incapaz de responder con suficiente dureza a la oposición. La gran simpatía y admiración que hoy despierta su figura en todo el mundo es un fenómeno que comenzaría a gestarse solo después de su muerte.

En mayo de 1973, cuatro meses antes del golpe militar, el Presidente, quien ya preveía la posibilidad de un levantamiento civil o militar en su contra, llamó al cardenal Raúl Silva Henríquez para solicitarle que hiciera de mediador entre él y la oposición. El mandatario necesitaba encontrar un punto de diálogo con la Democracia Cristiana que sirviera para calmar la tensión que se vivía a nivel país.

Allende y el cardenal tenían una buena relación. Durante su candidatura, había visitado al prelado y le había asegurado: “Le puedo prometer, don Raúl, que no tocaré a la Iglesia ni con el pétalo de una rosa”⁴⁰. Este aprecio mutuo se mantuvo, una vez que Allende asumió la primera magistratura. El cardenal Raúl Silva Henríquez, por su parte, quien presidía la Conferencia Episcopal, siempre había sido partidario de las reformas sociales. Durante nuestro gobierno, había entablado una cercana relación con la Democracia Cristiana y sus dirigentes. Instalada la Unidad Popular en el poder, siempre intentó tender puentes para evitar el conflicto. A algunos, esta postura les parecía riesgosa, tanto así que la Conferencia Episcopal se dividió entre quienes apoyaban su liderazgo y quienes no.

En paralelo, los socialistas siguieron poniendo trabas. En junio, el Presidente Allende resolvió nombrar como ministro del Interior a Carlos Briones, uno de los hombres más moderados del PS, encomendándole la misión de llevar a buen puerto el diálogo con la DC. Cuando la directiva del PS se enteró de esto, intentó negarle a Briones la autorización para asumir, pero ni el Presidente ni el nominado ministro cedieron. Entendían que la situación era urgente. No eran los únicos.

El 16 de julio, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, a instancias del cardenal Silva Henríquez, emitió una declaración titulada “La paz de Chile

tiene un precio”, instando a una tregua política y a alcanzar un gran consenso nacional: “Les imploramos que den los pasos necesarios para crear las condiciones para un diálogo que haga posible un entendimiento”⁴¹. El PC fue el primero en plegarse a la propuesta de la Iglesia, a fin de evitar una guerra fratricida.

Ante la solicitud hecha por el Presidente Allende de mediar las conversaciones con la DC, el cardenal trató de convencer a Eduardo Frei Montalva de que accediera a un diálogo privado, pero el exmandatario se mostró dudoso y pesimista. Además, en los últimos meses, se había visto inmerso en un mar de cuestionamientos levantados por la prensa oficialista, al punto de aseverar que su triunfo, en 1964, había sido posible gracias al financiamiento de la CIA. Para evocar estos momentos, me remito a las propias memorias del cardenal Silva Henríquez⁴², quien fue testigo y protagonista de dichos encuentros:

—Don Raúl, si usted me lo pide como católico, yo debo decir que sí, porque es mi pastor. Si me lo pide como político, debo decir que no —respondió Frei.

Pero el cardenal insistió:

—Se lo pido como católico.

Frei se quedó pensativo. A los pocos días, Allende volvió a contactar al cardenal y a pedirle que insistiera. Esta vez, Silva Henríquez intentó por otro lado. Se comunicó con Patricio Aylwin, quien, con el beneplácito de Frei, finalmente accedió a reunirse con el Presidente.

El 8 de agosto, Allende, Aylwin y el cardenal Silva Henríquez se juntaron en la casa de este último a cenar. Pocos días antes, el 30 de julio, representantes de la Democracia Cristiana y del gobierno se habían reunido para buscar una salida. La instancia, sin embargo, no había dado frutos.

En la casa del cardenal, Aylwin le manifestó a Allende, una vez más, su preocupación por el caos imperante. Le hizo ver cómo siempre predominaban los sectores más extremistas del gobierno y no se veía que se cumpliera con lo comprometido en el Estatuto de Garantías: “Hoy en Chile nadie trabaja, Presidente; los partidarios del gobierno tiran cada uno para su lado y mantienen un clima de constante agitación. ¡Usted tiene que escoger, tiene que elegir!”. Luego agregó: “No se puede estar al mismo tiempo bien con Dios y con el diablo. Usted no puede estar bien con Altamirano y con la Marina. No puede

estar bien con el MIR y pretender estarlo con nosotros. Hasta ahora, usted parece querer conciliar lo inconciliable y, con su capacidad de persuasión, cree ir superando los obstáculos; pero eso es solo transitorio. Para lograr soluciones reales, tiene que definirse”⁴³.

A esto, el mandatario respondió: “Estoy de acuerdo que es imperioso institucionalizar el proceso de cambios. He insistido en que la gente debe trabajar para sacar adelante y no esperar todo del gobierno o del Presidente (...) Pero qué pasa: que uno se encuentra con un aparato estatal lento, muchas veces ineficiente, que entorpece en vez de ayudar”⁴⁴.

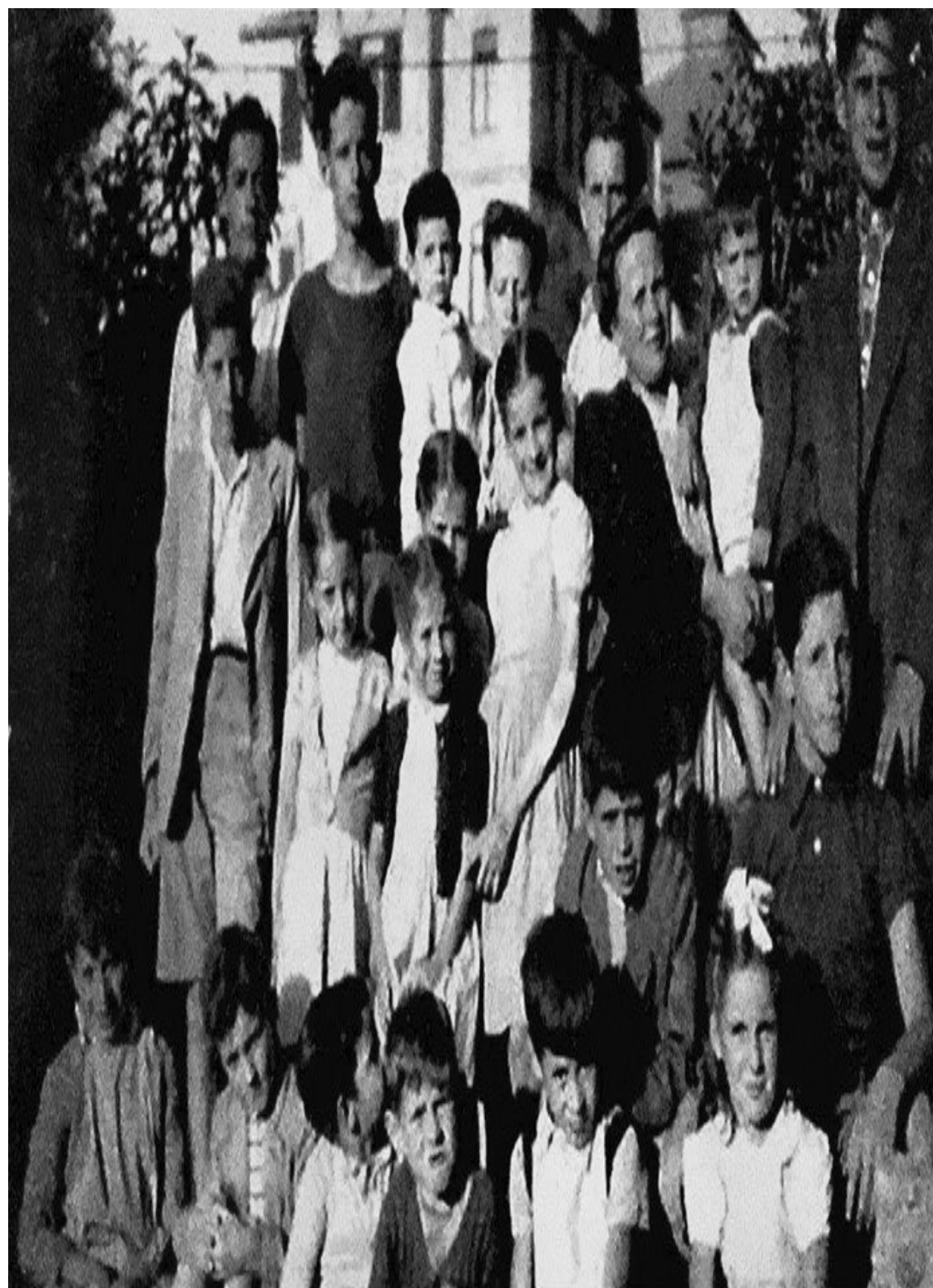
Aylwin contraargumentó: “(...) A mí, a nosotros, a mi partido, y yo creo que también a la mayoría del país, le parece que sus buenos propósitos y palabras no se concilian con los hechos”⁴⁵.

La cena continuó su curso. Al terminar, Allende declaró: “Esto es Chile: el Presidente de la República, masón y marxista, se reúne con el jefe de la oposición en la casa del cardenal. ¡Esto no ocurre en ningún otro país!”⁴⁶.

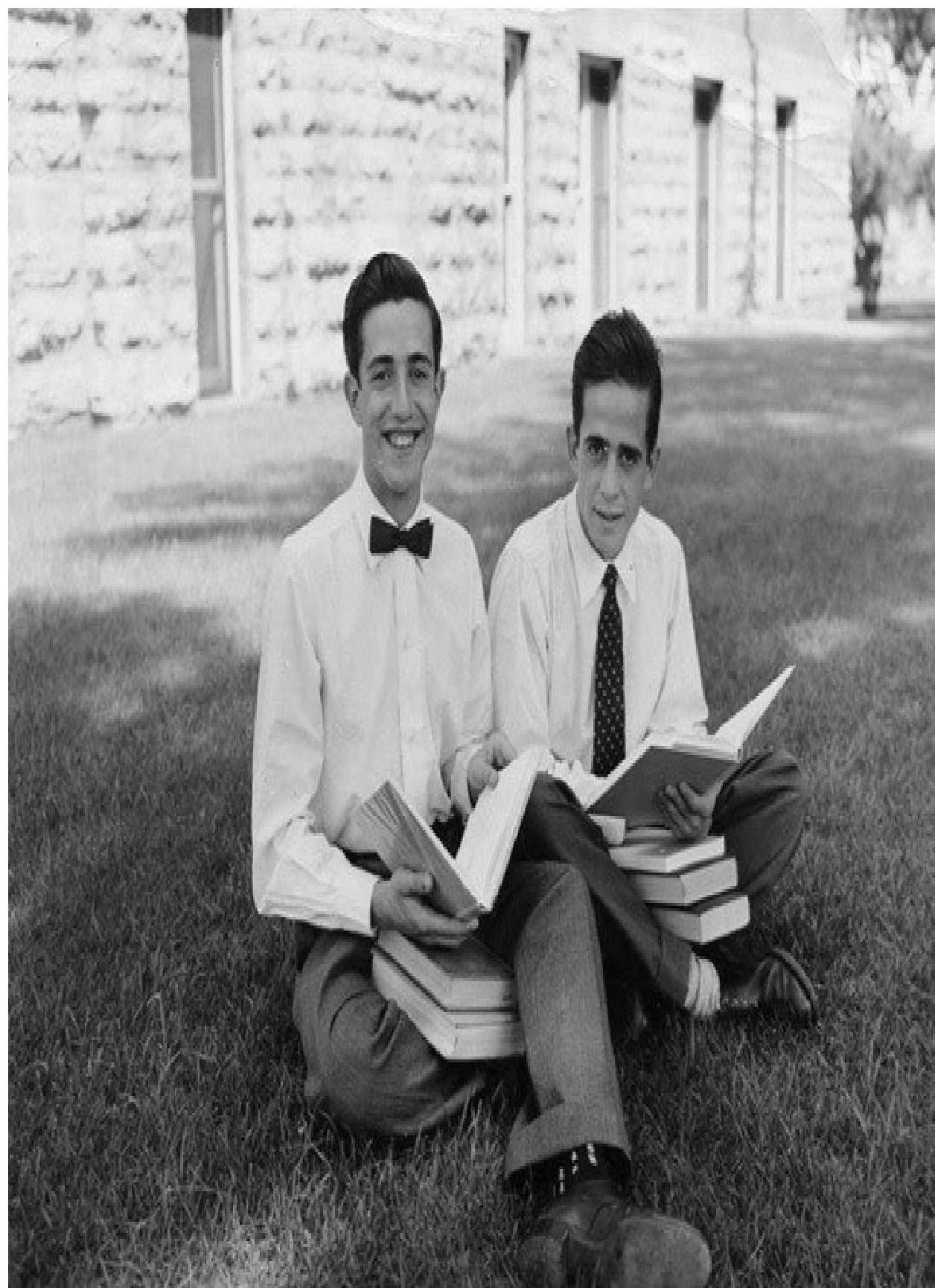
El cardenal Silva Henríquez diría, años después, que aquella noche creyó sentir disiparse parte de la tensión y que abrigó la esperanza de un posible acercamiento. Por desgracia, lo suyo sería solo una impresión.

No obstante, este encuentro da fe de la permanente disposición que tuvo la Democracia Cristiana para evitar la crisis, incluso a pesar de que nos sentíamos molestos ante las reiteradas descalificaciones, cerrazón y sectarismo de la izquierda. Este sentimiento era compartido por dirigentes como Leighton, Tomic y por el propio presidente de la DC de ese entonces, Renán Fuentealba, quienes siempre se mostraron más optimistas respecto a poder alcanzar un entendimiento con la Unidad Popular.

Aunque en nuestro partido existían evidentes discrepancias respecto a si debíamos o no seguir disponibles a negociar con el gobierno, hubo algo que siempre nos mantuvo cohesionados: buscar una salida política a la crisis e intentar evitar un eventual golpe de Estado. Entre nosotros, primaba el compromiso y la convicción de que salvaguardar la democracia era lo más importante. Y eso sería lo que haríamos hasta el final.



Josefina Larraín de Zaldívar y Julia Larraín de Achurra junto a sus hijas e hijos. Andrés Zaldívar es el primero en segunda fila a la izquierda.



Con Juan Agustín Palazuelos en la Universidad de Saint Paul

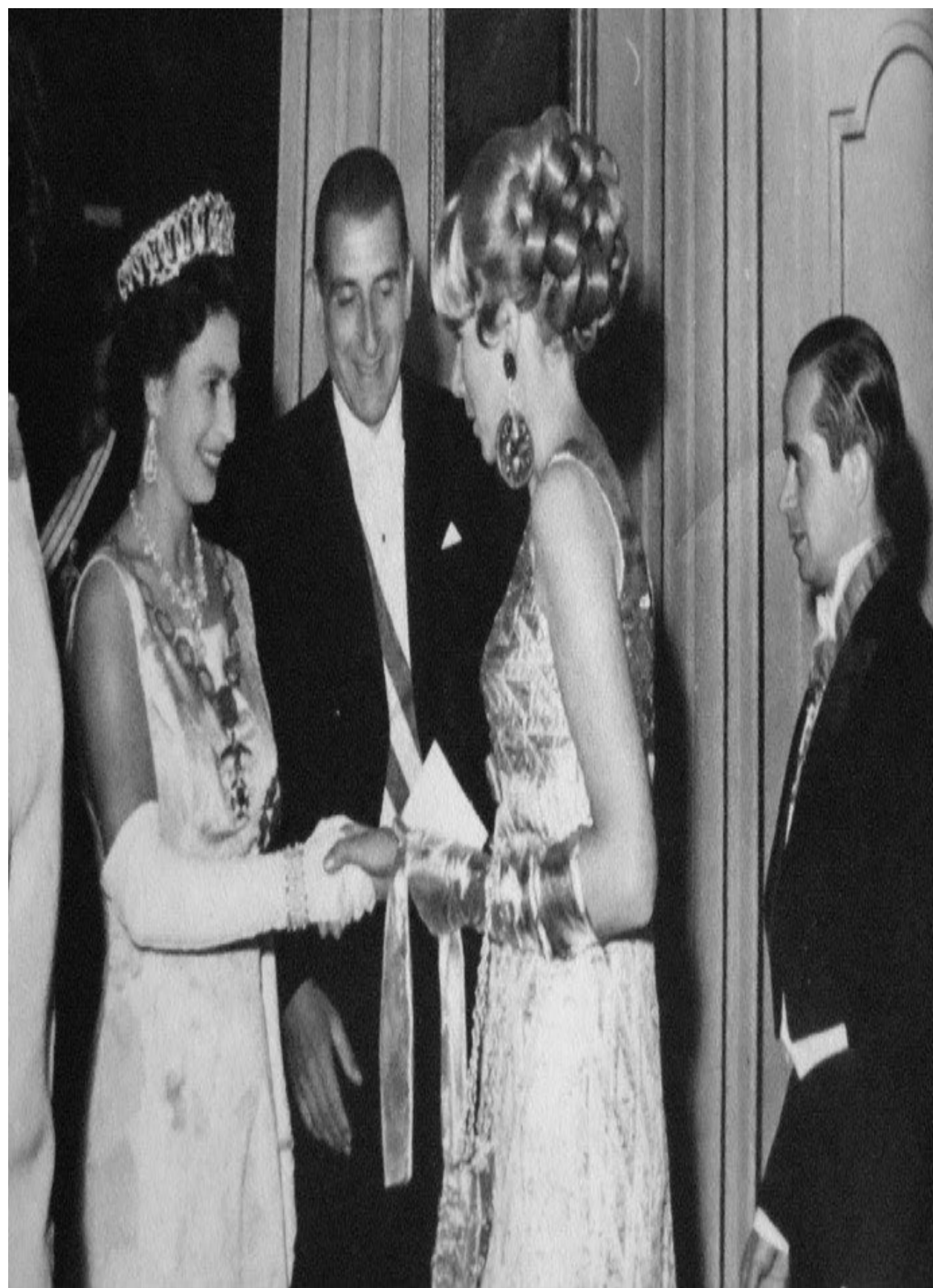
(Minesotta, Estados Unidos, 1956)



Fundación del Partido Demócrata Cristiano chileno (Salón de Honor Congreso Nacional, Santiago, 1957). Entre otros, de izquierda a derecha: Senador Ricardo Valenzuela, Eduardo Frei M., Pablo Larraín, Rafael Agustín Gumucio, Horacio Walker y Carlos Vial Espantoso.



Esta foto fue portada del diario La Tercera en febrero de 1968 y venía con la siguiente lectura, “Esta sorprendente foto de Hernán Oróstica, muestra un enlace telefónico momentos después del juramento. El más grande es muy conocido de todos los chilenos: el Presidente Frei. El más bajo es el nuevo Ministro de Economía, Andrés Zaldívar. El Presidente dice: Zaldívar es un contrasentido, el chico más grande que he conocido. Según el Primer mandatario, él mide a Zaldívar como lo hacía Napoleón: desde las cejas arriba”



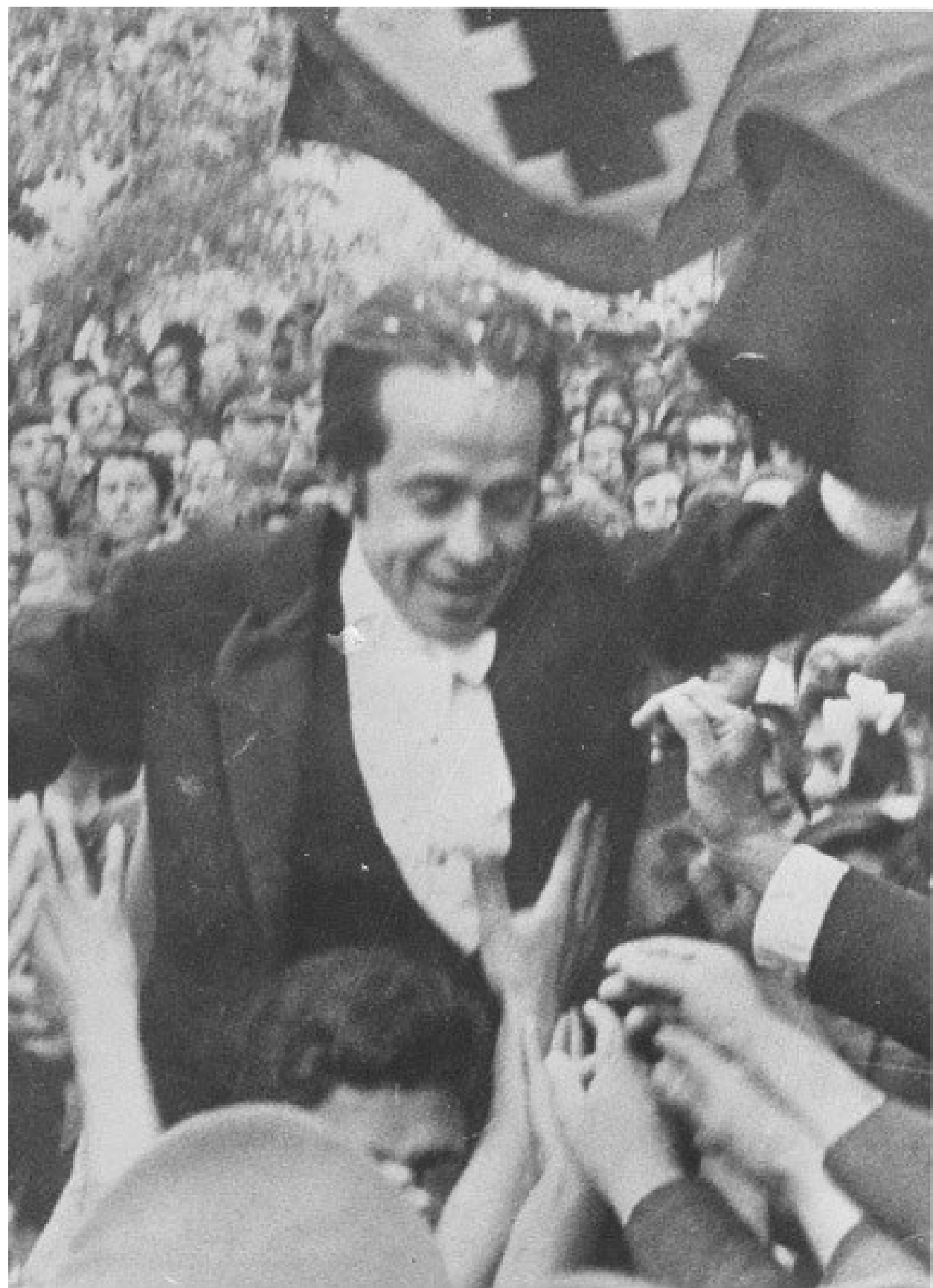
**Recepción a los reyes del Reino Unido en La Moneda. Reina Isabel II,
Presidente Eduardo Frei M., Inés Hurtado y Andrés Zaldívar,**

(Santiago, 11 de noviembre 1968).



**Inés junto a mis padres en el Senado durante la discusión de la Ley de
Reajuste**

(Santiago, 4 de abril 1968).



Salida de La Moneda

(Santiago, 4 de noviembre 1970).



**Junto a Eduardo Frei M., Juan Hamilton y Patricio Aylwin en homenaje de
solidaridad del Parlamento Español a Chile (Madrid, 1976).**

VI

EL GOLPE MILITAR: UN SECRETO A VOCES

1. La última salida: Un plebiscito fallido

“El golpe”, “la conjura”, “el pronunciamiento militar”, “la traición”, “el día decisivo”... Con el paso de los años, la gente fue poniéndole diversos nombres. Muchos han sido los títulos, las interpretaciones, y también diversas las maneras de entender y de vivenciar este momento que golpeó a Chile brutalmente, marcando una línea indeleble en nuestra historia y en la memoria colectiva de los chilenos. El golpe significó un mazazo, una experiencia que nos marcaría a fuego, quedando en nuestra retina y memoria para siempre. Nadie ha olvidado aquel día, pues, querámoslo o no, ese momento señala un antes y un después en la historia de nuestro país. La fractura fue irreparable. Y el daño, inconmensurable. Pero hay algo que no podemos negar: todos intuíamos que podía ocurrir, incluido el propio Presidente Allende. Parafraseando el título de la novela de Gabriel García Márquez, esta era la “crónica de una muerte anunciada”.

El país se encaminaba de manera irreductible hacia una salida por la fuerza, ya fuese por el enfrentamiento armado entre los bandos en pugna, incluida la división de las Fuerzas Armadas, o a través de un golpe militar. El rumor de lo que pasaba en las Fuerzas Armadas y la preparación de un posible golpe fue recurrente, sobre todo después del Tancazo.

En tanto, a esas alturas, el propio Allende llamaba públicamente a un diálogo con la DC, a fin de buscar acuerdos: “Es necesario que todos los sectores recapaciten y se busque un diálogo. Para el gobierno el diálogo, no significa claudicaciones ni entreguismos”⁴⁷. Pero su partido no le daría la pasada, más aún si ello involucraba a la DC, “lugarteniente del golpismo”, al decir de su secretario general, Carlos Altamirano, quien señalaría, en julio de 1973: “El Partido Socialista no aceptará jamás conciliar con los enemigos de Chile, del gobierno popular, de los trabajadores (...). El Presidente de la República, compañero Salvador Allende, está desarrollando dicho diálogo con la aprobación de la mayoría de los partidos de la Unidad Popular, y con la franca discrepancia del Partido Socialista”⁴⁸.

Se habían agotado todos los esfuerzos. Habían fracasado las negociaciones

mediadas por el cardenal Silva Henríquez. La estrategia de integrar un gabinete cívico-militar —presidido por el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, para intentar garantizar la paz y estabilidad y, de paso, asegurar la cohesión y el respaldo de la Fuerzas Armadas al gobierno— tampoco había servido. Y los propios resultados de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 hacían imposible romper ya el impasse. La coalición de gobierno parecía estar a punto de un quiebre irreparable. Los dos partidos pilares del bloque (el PS y el PC) se encontraban en posiciones profundamente antagónicas.

Se llegaba así a un punto donde la paz parecía no tener cabida. El conflicto se percibía como inevitable. Habiéndose cerrado todos los caminos para evitar la crisis final —el diálogo, las elecciones, e incluso las tentativas de algunos de nuestros dirigentes para que la Democracia Cristiana se incorporara al gobierno— solo quedaba un camino posible: convocar a un plebiscito ratificatorio nacional para medir el apoyo de los chilenos al gobierno de Salvador Allende. En el caso de que la gente se mostrara contraria, se plantearía la alternativa de llamar a nuevas elecciones o que el Presidente conformara un nuevo equipo. La opción permitiría apaciguar la crisis y otorgar legitimidad a su mandato.

Sin embargo, para esto era preciso un acuerdo con el gobierno, ya que la medida implicaba una reforma constitucional y, consecuentemente, contar tanto con los votos de la Unidad Popular en la votación, así como con los nuestros. Era tal nuestra convicción respecto a esta propuesta que, incluso, estábamos dispuestos a afrontar un resultado adverso.

En un último intento, a comienzos del mes de septiembre, el partido acordó, en una reunión del consejo nacional, instruir a todos nuestros parlamentarios para que presentasen su renuncia masiva al Congreso, de manera de forzar el plebiscito propuesto.

No estoy cierto si dentro del gobierno y de la propia coalición de la Unidad Popular se exploró realmente dicha fórmula, encaminada a superar la crisis casi terminal que enfrentábamos. Sí sé que, dadas las circunstancias y calibrando la inestabilidad y gravedad de la situación, Allende se había convencido de que el plebiscito era la única opción de salida. El Presidente era un hombre inteligente, sagaz y de mucha capacidad política, y a esas alturas estaba dispuesto a imponer su voluntad y lo que consideraba era más conveniente para el país, aun a costa de tener que enfrentarse o romper con la propia dirección de su partido. En los hechos, sin embargo, el gobierno nunca se pronunció públicamente sobre nuestra

propuesta, la que sí se hizo pública.

El sábado 8 de septiembre, Allende almorzó con el general Carlos Prats y le comentó de sus planes. Asimismo, al día siguiente, según se supo tiempo después, se reunió con Augusto Pinochet para comunicarle que, en las próximas horas, llamaría a un plebiscito y daría a conocer la noticia, ante lo cual el militar le habría preguntado si la decisión era definitiva. Allende respondió afirmativamente.

Al mediodía del 9 de septiembre, en el marco del tercer aniversario del gobierno de la Unidad Popular, se llevó a cabo un masivo acto en el Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara. El ambiente estaba enrarecido. Días antes, las fuerzas militares habían allanado varias empresas, entre ellas Mademsa y Madeco, intervenidas por los Cordones Industriales de trabajadores.

En esa ocasión, en un encendido discurso, Carlos Altamirano aseguró haber sido informado por un grupo de marinos de que al interior de la Armada se estaría gestando una conspiración contra la Unidad Popular. “Se me acusa de haber asistido a reuniones con marineros y suboficiales: la verdad es que concurrí a una reunión a la cual fui invitado para escuchar las denuncias de los suboficiales y algunos marineros en contra de actos subversivos perpetrados presuntamente por oficiales de esa institución armada”⁴⁹, dijo a la audiencia. Más adelante añadió: “Chile se transformará en un nuevo Vietnam heroico si la sedición pretende enseñorearse de nuestro país. (...) A nuestro juicio, compañeros, el golpe reaccionario se ataja golpeando al golpe. No se ataja conciliando con los sediciosos”⁵⁰. En medio de los gritos coreados por los asistentes —“¡Crear, crear, poder popular!”—, Altamirano concluyó sus palabras exclamando: “El compañero Allende no traicionará, compañeros, dará su vida si es necesario en la defensa de este proceso”⁵¹. Sin saberlo, 48 horas antes del golpe que derrocaría al Presidente, Altamirano estaba invocando un cercano final. Aunque el golpe ya estaba en marcha, el discurso apresuró la decisión de los uniformados detrás de la conjura. Según Gustavo Leigh, este disipó toda duda y los conspiradores, unánimemente, decidieron pasar a la acción, sin tardanza.

Después de la intervención, la noche del 10 de septiembre, el Presidente Allende decidió redactar una minuta para un discurso en el que anunciaría el plebiscito. Así se lo comunicó al ministro Briones, quien me relató estos hechos años después.

Las Fuerzas Armadas, por supuesto, ya sabían sobre el anuncio. Orlando Letelier, ministro de Defensa nombrado tras la renuncia de Prats, les había informado. Se suponía que Allende anunciaría el plebiscito al lunes siguiente por cadena nacional. Eso fue lo que nosotros supimos por trascendidos. Pero algo sucedió. El Presidente no pronunció su discurso.

Al respecto, hay versiones que sostienen que el periodista Augusto Olivares, socialista y hombre de confianza de Allende, no tuvo el tiempo suficiente para concluir la redacción de dicho texto. Hay otros que afirman que el propio Pinochet le habría pedido al Presidente esperar un par de días antes de hacer el anuncio.

Sea cual fuese el motivo, lo cierto es que, al día siguiente, ocurrió el golpe. Estoy convencido de que, si Allende hubiese alcanzado a dar su discurso, el golpe no se habría dado, y la dictadura, muy probablemente, se hubiera evitado. De haberse realizado la convocatoria, y dadas las condiciones en que se encontraba el país, lo más factible es que la Unidad Popular hubiera perdido su mandato. Y aunque no alcanzo a imaginar cómo se habría recuperado la gobernabilidad, al menos la democracia habría sobrevivido.

Si bien todas estas son meras conjeturas, existía una garantía. El propio Allende había dicho que, si su gente se lo exigía, él entregaría el poder: “No dudaría un momento en renunciar si los trabajadores, los campesinos, los técnicos y profesionales de Chile así me lo demandaran”⁵². La petición no alcanzó a llegar.

2. La cuenta regresiva

Para ese entonces, las Fuerzas Armadas venían ocupando un lugar complejo en la sociedad chilena desde hacía décadas. Su participación en la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, en los años 20, les había significado un distanciamiento respecto de la ciudadanía y, previo a esto, ya habían participado en algunos episodios en los que habían hecho saber su postura respecto a coyunturas políticas nacionales. Cabe recordar el denominado “Ruido de sables” en 1924, durante el primer gobierno de Arturo Alessandri, cuando un grupo de oficiales adherente al coronel Ibáñez del Campo irrumpió en una sesión del Senado en que se discutía la dieta parlamentaria —mientras se postergaba la tramitación de leyes sociales— e hizo sonar sus sables contra el suelo en señal de desafío a los parlamentarios.

A comienzos de los años 30, tras la caída del gobierno militar, y al asumir una vez más Arturo Alessandri como Presidente, empezó a gestarse en la sociedad civil chilena un claro distanciamiento respecto de las Fuerzas Armadas y sus integrantes. En esos años, por ejemplo, emergió la Milicia Republicana, un cuerpo civil paramilitar creado con el objetivo de evitar que los militares otra vez se involucraran en política. Por mucho tiempo, los militares y sus familias vivieron en una especie de esfera aparte, un mundo propio que la sociedad civil y política miraban con cierto recelo. Estos, a su vez, se sentían poco considerados, incluso despreciados.

Desde el momento en que la Unidad Popular salió electa, las Fuerzas Armadas fueron, progresivamente, fracturándose en dos bandos: uno que compartía la doctrina constitucionalista representada por los generales René Schneider y Carlos Prats, y otro en el que destacaban generales tales como Óscar Bonilla, Sergio Arellano, Gustavo Leigh y el contralmirante José Toribio Merino, quienes, si bien reconocían el liderazgo de los primeros, estaban convencidos de que la Unidad Popular llevaría al país a un gobierno marxista, con las consecuencias que ello significaba.

Este abanico de posturas al interior de las Fuerzas Armadas, de menos a más radicalizadas, era fiel reflejo respecto de lo que ocurría en la propia sociedad

chilena. No es que fueran antiallendistas per se, sino que había quienes guardaban ciertas aprensiones y dudas acerca de qué tan lejos podía llegar el gobierno de la Unidad Popular, así como de la real gravitación que tenía Salvador Allende al interior de su propia coalición. Estas dudas fueron profundizándose ante la ambigüedad y contradicciones del propio gobierno, el que, a poco andar, comenzó a debatirse y a fracturarse entre estas dos almas antagónicas: “avanzar gradualmente” y “avanzar sin transar”. Ello siguió acentuando las suspicacias y desconfianzas, por decir lo menos, entre las fuerzas castrenses. Y si bien el general Prats era un hombre con mucha ascendencia, que mantuvo la unidad del Ejército por mucho más tiempo de lo que en circunstancias normales hubiera podido preverse, la inconformidad que imperaba entre los miembros de las Fuerzas Armadas era un secreto a voces. No estaban contentas y temían ser infiltradas, con el riesgo de terminar siendo subordinadas a un gobierno de corte marxista, tal como había sucedido en otros países del mundo denominado “socialista”.

Ya en enero de 1973, en un acto de proclamación de los candidatos del Partido Socialista realizado en el Teatro Caupolicán, el secretario general del PS, Carlos Altamirano, denunció los intentos de intervención y manipulación de las Fuerzas Armadas por parte de la derecha: “Esa constante es el intento sistemático y deliberado de utilizar a las Fuerzas Armadas para sus fines extraconstitucionales, para desatar la guerra civil que la reacción busca con tanta ansiedad una y otra vez. No importa quién apareciera dirigiendo los planes sediciosos, las Fuerzas Armadas han sido permanentemente blanco de la provocación, el halago o el insulto de los conspiradores. Los ataques están dirigidos a la institución armada o a determinados altos oficiales”⁵³.

Allende, por su parte, tuvo varios gestos hacia las Fuerzas Armadas. Estaba consciente de la importancia de contar con su lealtad y apoyo irrestricto, sabía que esto era esencial dentro del proceso que intentaba implementar. Tras incorporarlos, en 1972, a su “Gabinete de paz social” —en el que Prats asumió como ministro del Interior—, volvió a hacer lo mismo al año siguiente, cuando configuró un nuevo gabinete denominado de “Salvación Nacional”. Esta decisión, a mi juicio, fue desacertada, pues con ello lo que hizo el Presidente Allende fue más bien acentuar las fracturas dentro de la institución, al hacerla parte de un gobierno del que muchos de sus miembros ya desconfiaban. Hay quienes, incluso, se sintieron hasta utilizados.

Lo cierto es que Salvador Allende siempre tuvo una actitud de acercamiento

hacia los militares y nunca trató de interferirlos, pese a que algunos sectores de la UP, entre ellos el PS más duro y el propio MIR, se mostraran críticos al respecto.

A la par, crecía el nerviosismo de las Fuerzas Armadas ante la creciente militarización de grupos violentistas de la extrema izquierda, tales como el MIR, la Brigada Elmo Catalán y la Ramona Parra. En 1972, tuvo lugar el escándalo conocido como los “bultos cubanos”, cuando ingresó al país una serie de cargamentos que el Presidente aseguró se trataba de regalos enviados por Fidel Castro. Más tarde se supo que la encomienda contenía, en realidad, armas y municiones. Fue a partir de ese incidente que se impulsó en el Parlamento la Ley de Control de Armas, encaminada a intentar controlar el ingreso de armamento al país. La aplicación de esta norma fue asumida con mucha decisión por parte de las Fuerzas Armadas, probablemente temiendo que la militarización de los grupos violentistas derivara en el futuro en una eventual confrontación.

En esa línea, el Tancazo fue una clara señal de alerta respecto a la realidad que se vivía al interior de las Fuerzas Armadas. Ese día comenzó la cuenta regresiva. El comentario generalizado era que el asunto no daba para más. La renuncia del general Prats al Ministerio de Defensa, en el mes de agosto, fue lo que finalmente desequilibró la balanza. Hasta entonces, era su figura la que mantenía la disciplina y cohesión interna de la institución, y en su ausencia ya no hubo vuelta atrás.

Pero el golpe militar no se fraguó de un día para otro, eso está claro. A la reticencia en las Fuerzas Armadas se venían sumando, incluso desde antes que asumiera el mando la Unidad Popular, las acciones del propio gobierno norteamericano y de la CIA, así como de numerosos civiles que generaron todo tipo de maniobras y estrategias para, primero, torpedear la llegada de Allende al poder y, posteriormente, intentar su derrocamiento. No hay que olvidar la existencia de la Cofradía Náutica del Pacífico Austral, una sociedad secreta que empezó a operar en 1968, y que más tarde sirvió como fachada para la preparación del golpe. Sus fundadores fueron el entonces jefe de la Armada en Valparaíso, José Toribio Merino; los vicealmirantes Patricio Carvajal y Arturo Troncoso; los ex oficiales navales Roberto Kelly y Hernán Cubillos. Entre los civiles que la integraron figuran Agustín Edwards, quien fue su primer comodoro, así como René Silva Espejo, Arturo Fontaine y Sergio de Castro, entre otros. Otros uniformados que frecuentaban sus reuniones fueron Sergio Arellano, Washington Carrasco, Javier Palacios, Herman Brady, Gustavo Leigh,

Arturo Yovane y César Mendoza. Augusto Pinochet, en cambio, nunca participó en estas instancias.

La Cofradía fue, tal como señalaría Carlos Prats en sus memorias, “el ente primigenio del golpe” y el núcleo clave en la conspiración para derrocar a Salvador Allende. Todos sus miembros, tanto civiles como militares, tuvieron una activa participación en la sedición contra el gobierno de la Unidad Popular y en desatar el golpe, y, posteriormente, ocuparon cargos claves y relevantes durante el período de la dictadura militar.

Para agosto de 1973, el golpe era una alternativa que se barajaba y de la que todos hablaban. Parecía un hecho inminente. Lo que no estaba claro era de qué lado iba a venir, ni quiénes integrarían qué bandos. Incluso, existía la posibilidad de que se produjera una confrontación al interior de las propias Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército.

Todo esto Allende lo sabía. El 5 de septiembre, seis días antes del golpe, la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales le hizo llegar una carta en la que le expresaba haber “considerado de urgencia dirigirse a Ud., alarmados por el desencadenamiento de una serie de acontecimientos que creemos nos llevará no solo a la liquidación del proceso revolucionario chileno, sino, a corto plazo, a un régimen fascista del corte más implacable y criminal”⁵⁴.

En la mañana del 9 de septiembre, en su casa de Tomás Moro, el Presidente se reunió con una delegación del PC, integrada por Luis Corvalán, Orlando Millas y Víctor Díaz. “El golpe es inminente”, les dijo de entrada el mandatario. Les comentó, además, que estaba analizando la posibilidad de refugiarse en algún regimiento leal; no obstante, a esas alturas, la situación estaba tan deteriorada que ni siquiera los oficiales leales tenían control sobre sus tropas. En eso, Allende recibió una llamada telefónica de la periodista Frida Modak, informándole del discurso del secretario general del PS, Carlos Altamirano, en el Estadio Chile. “Esto no tiene remedio”, comentaría escuetamente el Presidente⁵⁵. A continuación, comunicó que había tomado la decisión de llamar a un plebiscito y, en caso de que esto no se pudiera hacer, dejaría la primera magistratura. Ya había instruido al respecto al ministro Letelier para intentar conseguir la aprobación del Partido Socialista y, asimismo, al ministro Carlos Briones para concretar un acuerdo con la DC. La soledad del Presidente era abismante. A esas alturas, solo contaba con el apoyo incondicional de los comunistas como fuerza principal dentro de su coalición.

Los dirigentes del PC le informaron que al día siguiente se realizaría una reunión de la comisión política del partido, y le aseguraron que contaba con su apoyo, pese a estar claro que el PS no transaría y que ello, incluso, podía significar el quiebre de la propia coalición de gobierno. Efectivamente, el día 10, el PC le enviaría una carta al mandatario reiterándole su total respaldo, instándolo a actuar con premura.

A la salida de esa reunión, la delegación comunista se encontró con los generales Augusto Pinochet y Orlando Urbina, quienes habían sido citados por Allende. La conversación con ambos militares giró en torno al plebiscito y el golpe. Pinochet aseguró que el Ejército estaba bajo control, y que la posibilidad de una asonada no sería viable sin este, la Armada y la FACH. Allende podía estar tranquilo y confiar en que las Fuerzas Armadas ejecutarían la defensa del gobierno, en caso de que ello fuese necesario. O eso, al menos, le hizo creer.

3. El Día “D”

La tarde del 10 de septiembre de 1973, yo estaba en el Senado, en un receso entre sesiones, cuando me avisaron que alguien me estaba esperando en mi oficina. No había citado a nadie, y en mi agenda no figuraba ninguna reunión. Extrañado, me dirigí a ver de quién se trataba. Era un desconocido, a quien nunca había visto antes. “Mañana va a haber un golpe”, me dijo, y luego se marchó. Quedé desconcertado, pero, la verdad, no le di mayor importancia, tanto así que regresé a la sesión y comenté el hecho con algunos parlamentarios.

A esas alturas, ya todos anticipábamos lo que se venía. Si bien creo que nadie se imaginó la brutalidad con que se daría el golpe, la gente estaba cansada de tanta polarización, arbitrariedades y violencia. Ya no se trataba de ser allendistas o no.

Esa misma noche, cuando llegué a mi casa, me encontré con dirigentes del mineral El Salvador, quienes estaban esperándome. “Queremos que nos informe qué es lo que está pasando y qué podemos hacer”, me dijeron de entrada. Entonces me acordé de la visita que había recibido aquella tarde. ¿Y si ese hombre tenía razón y el golpe realmente estaba a punto de suceder?

—Miren... Ustedes tienen que regresar a El Salvador, allá está su tarea —les respondí, pensando en que, si la hecatombe estaba cerca, lo peor que les podía pasar a los trabajadores era que los sorprendiera lejos de sus familias.

—¿Devolvernos? ¿Pero por qué? —preguntaron.

Si bien no tenía cómo darles una respuesta certera a su inquietud, sí podía hacerles ver la situación conflictiva que estábamos atravesando. Así que eso hice, y les sugerí regresar.

En la Democracia Cristiana, habíamos empezado a prepararnos para la crisis y elaborado un plan en caso de que necesitáramos ponernos a resguardo. Corría el rumor de que los socialistas habían infiltrado las Fuerzas Armadas, en un intento por provocar una reacción. Por otro lado, sabíamos que existía un grupo de generales —al que pertenecían Arellano, Bonilla, Brady y Benavides, entre otros

— que planeaba dar término al gobierno. No contábamos con mayores antecedentes ni información, pero sí teníamos claro que la Democracia Cristiana no se involucraría en ningún intento de golpe.

Esa noche fue larga y de escaso sueño para muchos. Allende estuvo trabajando hasta tarde con su círculo más cercano, intentando concentrarse en lo que sería su discurso de convocatoria al plebiscito. Por su parte, los conjurados se amanecieron entre llamadas telefónicas y mensajes en clave, articulando los últimos detalles de la asonada. Lo primero que hicieron fue poner a salvo a sus familias. Pinochet envió a su mujer e hijos a la casa de su amigo, el coronel Renato Cantuarias Grandón, director de la Escuela de Alta Montaña del Ejército, ubicada en Los Andes. Cantuarias —primo del ex ministro de Minería de Allende, Orlando Cantuarias— era un militar reconocido por sus posturas progresistas y por ser proclive al gobierno de la Unidad Popular. Extraña decisión la de Pinochet... Sobre todo, porque al día siguiente del golpe, el coronel fue detenido, muriendo en extrañas circunstancias en la Escuela Militar tres semanas más tarde.

El día 11 de septiembre, a las siete de la mañana, me desperté con el sonido del teléfono. Abrí los ojos y, antes de contestar, le murmuré a Inés: “Estoy seguro de que hay un golpe”.

Al otro lado del auricular, alguien del partido me instruyó: “Senador, hay golpe. Siga las instrucciones acordadas”. El protocolo se había diseñado de modo que los dirigentes pudiéramos ponernos a salvo, sobre todo en el caso de que el golpe viniera desde la izquierda. Nos levantamos con Inés, despertamos a nuestras hijas y, ya en el auto, nos dirigimos a la casa de unos amigos que vivían cerca nuestro. Ahí nos quedamos durante tres o cuatro días, mientras la situación se aclaraba.

Al comienzo, di por sentado que Pinochet y Allende estarían juntos. El primero se había manifestado siempre como un hombre de absoluta confianza del Presidente. Era cercano a Carlos Prats y nunca dejó de declarar su apego irrestricto a la doctrina Schneider. Era un general constitucionalista, al menos así lo aseguraba, tanto que el propio Allende, al enterarse del golpe, y tras intentar ubicarlo infructuosamente, habría preguntado: “¿Dónde estará el pobre Augusto?”.

Efectivamente, hasta un par de días antes de que se produjera el golpe, Pinochet

había aparecido siempre, ante la opinión pública, como un general cercano y leal al gobierno. Era tal el compromiso manifestado que los demás generales golpistas, según se ha aclarado después por versiones del propio Leigh y Merino, dudaban de si podían realmente confiar en él, pues hasta se molestaba cuando se criticaba al general Prats.

Lo cierto es que Pinochet no participó en la planificación del golpe, ni tuvo incidencia alguna en la sedición, pese a que posteriormente intentó tergiversar los hechos, presentándose como su gran artífice. Se sumó a los planes a última hora, el día 10, dubitativo y temeroso. Hasta hacía poco, ni siquiera había estado al tanto de lo que sucedía. Es más, cuando el 8 de septiembre el general Arellano le informó que el golpe se realizaría tres días más tarde, con o sin su participación, reaccionó con sorpresa y molestia. La decisión estaba tomada y él debía definirse. Al día siguiente, Leigh lo visitó en su casa y, al preguntarle qué había resuelto, Pinochet respondió en tono vacilante: “¿Tú has pensado que esto nos puede costar la vida a nosotros y a muchos más?”⁵⁶. Horas más tarde, cuando el almirante Sergio Huidobro les entregó una carta redactada por Merino, solicitando que él y Leigh la firmasen para sellar su participación, Pinochet manifestó: “Yo no tengo planes, no puedo traer tropas, no puedo hacer ninguna cosa”⁵⁷, aludiendo con ello a la situación del Ejército tras el Tanquetazo. A ello, agregó con preocupación: “Si esto se filtra, puede sernos de graves consecuencias”⁵⁸.

La versión de Merino es coincidente con la de Leigh: “Yo firmé de inmediato. Pinochet vaciló un poco buscando un timbre que quería colocar al lado de su firma y que no encontraba nunca”⁵⁹. Esto se habría prolongado hasta que el comandante de la FACH, impaciente, exclamó: “¡Decídase mi general, firme!”⁶⁰. En estas circunstancias fue que Augusto Pinochet, finalmente, adhirió a la conjura.

Así, hasta el último día, jugó a dos bandas. El militar no quería perder arte ni parte. Era un verdadero camaleón y, lamentablemente para el país, resultó ser también un muy buen comediante y estratega, lo que se confirmaría a poco andar. Su astucia, sagacidad y socarronería no tenían límites, lo que paliaba en parte su rudimentaria personalidad y bajo vuelo intelectual.

Antes del amanecer de aquel 11 de septiembre de 1973, los conjurados comenzaron a tomar sus posiciones. Un equipo de ingenieros y radioperadores se ocuparon de acallar todas las radios afines a la Unidad Popular, así como de

dejar todo preparado para iniciar las transmisiones a través de la radio Agricultura. En Concepción, cuatro aviones Hawker Hunter se preparaban, mientras se registraban movimientos sigilosos de tropas y de la Marina. El Presidente fue alertado y decidió partir rápidamente a La Moneda, acompañado por el jefe de la escolta de Carabineros y miembros del Grupo de Amigos del Presidente (GAP). A las 7:30 de la mañana, el ministro de Defensa, Orlando Letelier, intentó intervenir para controlar la situación, pero al llegar al ministerio fue detenido.

Una hora más tarde el conflicto ya se había desatado. El teniente coronel Roberto Guillard transmitía la primera proclama, explicando los motivos del golpe: “Teniendo presente: primero, la gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país; segundo, la incapacidad del gobierno para controlar el caos; tercero, el constante incremento de grupos paramilitares entrenados por los partidos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil...”. A renglón seguido, anunció, con voz firme e impertérrita, las exigencias de la Junta Militar de Gobierno: “Primero; el Presidente de la República debe proceder de inmediato a la entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo; las FF.AA. y Carabineros están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria y evitar que nuestro país siga bajo el yugo marxista, y la restauración del orden y la institucionalidad. Tercero; los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad de que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto; la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos [sic] a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto; el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes”⁶¹. Firmaban la proclama Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército; José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y César Mendoza, general director de Carabineros.

Después de esto, ya no habría tregua y los hechos se desencadenarían vertiginosamente. Los golpistas informaron disponer de un avión para que el Presidente y su familia abandonaran el país, pero Allende anunció que no renunciaría. “¡Allende no se rinde!”, habría exclamado según testigos. Los bandos militares se sucedieron, uno tras otro, en un tono cada vez más perentorio. En el intertanto, no nos separábamos de la radio. Hasta que Guillard irrumpió en un ultimátum: “Si no hay rendición, La Moneda será bombardeada a

las once de la mañana”.

A eso de las diez de la mañana, Allende logró pronunciar su último discurso por radio Magallanes. “Aquí habla el Presidente...”, anunció. Fue impactante escucharlo. Su voz era tranquila, decidida, muy firme. Dicen que no tenía ni un solo papel entre sus manos. Fue un discurso sólido, impresionante, dirigido al pueblo de Chile, a los trabajadores, a las mujeres, a los profesionales, a la juventud. “Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron...”, fue la frase con que abrió. A continuación, apuntó sus dardos contra “quienes han traicionado su juramento”, mencionando explícitamente al almirante Merino y al general Mendoza. “Siempre estaré junto a ustedes, por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria”, dijo. Y luego concluyó afirmando: “Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”. El coraje y la determinación en estos, sus últimos momentos, son admirables. Ni un instante dudó en claudicar en la defensa del cargo que ejercía por elección democrática. Y hasta el último minuto fue el Presidente de Chile.

Al mediodía, el Palacio de la Moneda fue bombardeado. Seguí todos los acontecimientos, minuto a minuto, por televisión y por la radio. Era una cosa impresionante, no podíamos creer lo que estaba sucediendo. Ver La Moneda incendiada, cayéndose a pedazos, fue para mí como asistir a la destrucción de un símbolo entrañable y valorado, que encarnaba no solo buena parte de nuestra historia, sino que además la esencia de la democracia y de la propia República. Sabíamos que el Presidente estaba ahí adentro, mientras todo era arrasado. Por mucho que fuera crítico del gobierno, esto era algo inaceptable y que no compartía.

Mientras todo esto sucedía, Pinochet, quien se había parapetado en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en Peñalolén, seguía paso a paso las operaciones. Su brutal y repentina metamorfosis impacta incluso hoy. En solo tres días, el bonachón y leal general del Presidente Allende, quien dudaba y temía las posibles represalias de una fallida acción golpista, se transformaba en un agresivo e intransigente militar, el más duro quizás de toda esta conjura. De un momento a otro, los vínculos de respeto, cordialidad y lealtad que lo unían al mandatario y a su entorno se hacían humo, dando paso a una ira visceral que lo caracterizaría en adelante. Mientras los hechos se desarrollaban, los nervios

empezaron a traicionarlo y pronto figuraba comunicándose a gritos con sus interlocutores, emitiendo comentarios soeces y fuera de control. Refiriéndose al Presidente, afirmó: “Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Y el avión se cae, viejo, cuando vaya volando...”. (...) “Hay que impedirle la salida. Si sale, hay que tomarlo preso. Hay que estar listos para actuar sobre él. Más vale matar la perra y se acaba la leva...”. (...) “Todo ese montón de jetones que hay ahí, el señor Tohá, el señor Almeyda, a todos esos mugrientos que estaban por arruinar el país deben pescarlos presos y el avión que tienen dispuesto ¡arriba!, y sin ropa, con lo que tienen, para afuera”⁶².

En un primer momento, la gente de la Unidad Popular creyó que podrían resistir. Siempre pensaron que al interior de las Fuerzas Armadas existiría al menos algún grado de resistencia frente a un eventual golpe. Confiaban que los Cordones Industriales funcionarían, que la gente saldría a la calle a defender al gobierno, que se levantarían con armas... Pero nada de eso pasó. Tomás Moulian describe con profundo acierto estos momentos, al decir: “Los militantes de izquierda, una importante parte de ellos sumidos en el romanticismo político, soñaban que estaban dando a luz algo parecido a una luna llena, la plenitud sin los dolores del parto: ‘la vía chilena al socialismo’, la liberación igualitaria, conseguida sin matanzas ni dictaduras. Pero presenciaron con espanto el alumbramiento del leviatán”⁶³.

Pero la escasa resistencia fue aplastada con brutalidad. Los Cordones Industriales apenas funcionaron un día o dos. En la práctica, no hubo capacidad de oponerse a las Fuerzas Armadas en acción. Allende lo supo desde un principio, y así lo manifestó en su último discurso, solicitándole a la ciudadanía actuar con precaución: “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”.

Creo que, a diferencia de otros, Allende dimensionó casi de inmediato la gravedad y consecuencias del golpe, especialmente cuando llegó a La Moneda y se encontró con el edificio rodeado, los aviones de guerra acercándose, las comunicaciones cortadas. Él siempre había dicho que no se iba a rendir, incluso se lo comentó a su mujer, Hortensia Bussi: “Lo dijo más de una vez: ‘¡A mí me van a sacar en pijama de madera de La Moneda, pero no voy a claudicar ni voy a salir arrancando del país en un avión!’”⁶⁴. Y así sucedió. Hasta el último momento se lo vio asomado desde una ventana del palacio de gobierno, con un casco y sosteniendo un rifle, en la actitud de un hombre dispuesto a todo, menos a doblegarse. Luchó hasta el final, codo a codo, con un puñado de personas que

le fueron leales, ante un contingente brutal y desmedido, y defendió a los suyos hasta ponerlos a salvo. Las versiones de quienes lo acompañaron ese día confirman todos estos antecedentes. Tuvo la coherencia y el coraje de no rendirse; antes de eso tomó la decisión de morir en su cargo. Ver salir su cadáver de La Moneda, cubierto con un paño indígena, en una frágil parihuela sostenida por bomberos y militares, es una imagen que nos caló a todos, partidarios y detractores. El Presidente había muerto, y algo en Chile se rompió para siempre.

Acto seguido, rápidamente, a través de bandos militares emitidos por cadena de radios, se empezó a citar a las autoridades y dirigentes de la Unidad Popular para que se presentaran en regimientos y recintos de las Fuerzas Armadas.

Numerosos parlamentarios y dirigentes de izquierda se dispersaron e intentaron buscar refugio. Los de más alto rango figuraban detenidos en la Escuela Militar, otros en recintos como el Estadio Nacional y el Estadio Chile. La represión se había desatado.

El Congreso fue clausurado. Sus puertas no volverían a abrirse por largos años. Días más tarde, se instalaron en sus dependencias las oficinas a cargo de los detenidos políticos. Una situación aberrante y vergonzosa. Hasta ahí llegaba la gente preguntando por sus familiares detenidos y desaparecidos.

El mundo entero tenía sus ojos puestos sobre Chile. Cito textual el testimonio del historiador inglés Alan Angell, pues considero que grafica con sorprendente nitidez lo que posiblemente vimos y vivimos no solo los chilenos, sino que también la mayoría del orbe, durante esos días de septiembre de 1973:

El profundo impacto del golpe fue que, en cierto modo, fue el primer golpe televisado. Las imágenes de los días posteriores inundaron las pantallas y diarios del mundo, y cuatro de ellas en particular: los jets Hawker Hunter bombardeando La Moneda; los soldados quemando libros en la calle; aquella fotografía de un Pinochet de rostro sombrío con anteojos oscuros, sentado frente a los restantes miembros de la junta militar de pie, y los prisioneros esperando atemorizados en el Estadio Nacional. Incluso en los países más remotos, geográfica, social y culturalmente de Chile, aquellas imágenes demostraron de una manera directa lo que había sucedido en Chile...⁶⁵.

4. La democracia hasta el final

Durante varios días, la confusión se mantuvo. No sabíamos qué implicaría el golpe ni por cuánto tiempo se extendería el gobierno militar. El día 13 de septiembre, nos juntamos con los dirigentes del partido en la iglesia San Pedro, en la comuna de Las Condes, para conversar sobre qué íbamos a hacer. Acto seguido, nos dirigimos a la casa del diputado Héctor Valenzuela, hasta donde llegaron también Patricio Aylwin y Eduardo Frei. Juntos elaboramos la declaración oficial de la Democracia Cristiana, en la que, tras reconocer los hechos, postulábamos que el derrumbe de la democracia se había producido por el vacío de poder generado por el gobierno de la Unidad Popular y su falta de capacidad para abrir espacios de entendimiento, creando con ello todas las condiciones para que el golpe se hiciera efectivo. Si bien no condenábamos abiertamente el golpe, tampoco ofrecíamos ningún tipo de apoyo a la junta militar y hacíamos un llamado para que los militares devolvieran el poder a la brevedad. En el fondo, dábamos por entendido que el golpe había sido inevitable.

En paralelo, un grupo de destacados dirigentes nuestros, denominado con el tiempo “Grupo de los 13”, emitió ese mismo día otra declaración en la que condenaban explícitamente el derrocamiento del gobierno constitucional.

Ambos textos reconocían la inevitabilidad de lo sucedido. La gran diferencia estuvo en que nosotros manifestamos nuestra voluntad de cooperar con un retorno a la democracia a la brevedad, creyendo que el golpe se trataba de algo más bien transitorio. Los “Trece”, en cambio, mucho más realistas, previeron desde un primer momento que el quiebre institucional no tendría pausa ni retorno.

Entre estos figuraban Andrés Aylwin, Jorge Cash, Renán Fuentealba, Bernardo Leighton, Mariano Ruiz-Esquide y Belisario Velasco. Pese a que todos ellos tenían una visión claramente divergente a la de la directiva, esto no significó, bajo ningún punto de vista, una ruptura al interior del partido. La tensión fue grande durante esos primeros meses, pero la Democracia Cristiana se mantuvo unida, pese a nuestras diferencias.

Todos estábamos conscientes de que lo que se venía era una situación difícil y crucial para el país. La democracia estaba en el suelo y nuestra República, amenazada. En esta disyuntiva, el partido debatió con fuerza sus posiciones. Muchas cartas se escribieron durante estos meses, dando cuenta de las diversas visiones y opciones de la propia militancia. La polémica, en ocasiones, fue dura, pero todos estábamos abocados a lo mismo: encontrar una salida a la encrucijada en que nos encontrábamos como país. En octubre de 1973, Gabriel Valdés le escribió a Patricio Aylwin:

Para salvar el cuerpo o el poder, o la posibilidad del poder, hemos ido perdiendo el alma (...). DC y dictadura son esencialmente opuestos. La imagen nuestra afuera es atroz y no solo por obra de los marxistas. Leer las declaraciones de Eduardo Frei, comentadas en todas partes negativamente —por decir lo menos— quita toda esperanza en la posibilidad de recuperación. Seguir denigrando a Allende lo considero deshonesto. Estamos en presencia de un fascismo que no podemos negar y que nos aplastará. Seguir justificándolo —y algunos aplaudiendo— con el argumento de que la UP había producido el caos y que quería una dictadura no tiene justificación. En fin, tú conoces mejor los hechos, pero desde fuera se ve el porqué. El clamor que el golpe ha levantado en todo el mundo es atroz. Que la Junta dé sus explicaciones es natural, pero que la DC avale lo que sucede y nos convirtamos en abogados me resulta intolerable⁶⁶.

Por su parte, el 8 de noviembre, Eduardo Frei le escribió a Mariano Rumor, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana: “A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación —y lo decimos sin eufemismo alguno— corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país. (...) la Democracia Cristiana chilena puede decir ante el mundo que una vez más dio un ejemplo de honradez democrática y de lealtad con sus principios”. Y agrega: “Nosotros no somos parte del actual gobierno. No defenderemos los errores que se cometan, inevitables algunos, en una situación tan terriblemente difícil (...). Las Fuerzas Armadas —estamos convencidos— no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de toda consideración partidista, quieren ayudar, porque creen que esta es la condición para que se restablezca la paz y la libertad en Chile”⁶⁷.

Cabe recordar que Frei Montalva estuvo entre quienes redactaron y firmaron la declaración oficial de la DC tras ocurrido el golpe. Como el resto de nosotros, estaba convencido de que los militares devolverían el poder y de que la democracia se restauraría.

Ese mismo mes, Renán Fuentealba, uno de los firmantes de “Los 13”, le expresó al mismo Mariano Rumor: “Tengo conocimiento de que altos personeros demócratacristianos chilenos se han dirigido a Ud. tratando de justificar la vacilante y débil actitud que nuestro partido tuvo con ocasión de los últimos acontecimientos. Esas personas, que siempre me han combatido, hasta el extremo de jugarse enteros para sacarme de la dirección del partido, a fin de que esta adoptara una actitud política de absoluta intransigencia frente al gobierno de la UP”. Luego continúa: “Pero lo que esas personas olvidan o callan intencionalmente es que la directiva que presidí, y personalmente, fuimos siempre absolutamente contrarios a una solución de fuerza, a un golpe o a un pronunciamiento militar que otros, en cambio, veían siempre con buenos ojos y estimulaban directa o indirectamente (...)”⁶⁸.

Hoy admito que la postura oficial que planteamos como partido fue ingenua, pero también, hay que reconocerlo, mal interpretada. Nosotros realmente estábamos convencidos de que el retorno a la democracia se daría en un tiempo prudente y de que las Fuerzas Armadas, en las que confiábamos, llamarían a elecciones en el menor plazo posible. Nuestra credulidad incluso se prolongaría unos cuantos meses, en que seguiríamos dándoles crédito a algunas de las figuras detrás del golpe, como el general Bonilla, por ejemplo. De hecho, la autorización del partido a aquellos militantes que quisieran colaborar con el gobierno militar para intentar canalizar una salida al golpe fue una decisión que se tomó en esa línea. Pero estábamos equivocados, profundamente equivocados. A poco andar, entenderíamos que, una vez instalados los militares en el poder, su salida sería muy difícil y de un altísimo costo.

5. El dictador desatado

Durante los días que siguieron al derrocamiento del Presidente Allende, continuó reinando el desconcierto y la desinformación. Nos llegaban datos del hallazgo de cadáveres en el río Mapocho, pero no sabíamos quiénes eran, ni quién los había matado. Aparte de lo que escuchábamos por la radio, la información que recibíamos era poco clara y, más bien, sonaba a rumores. No podíamos salir de nuestras casas después de las cinco o seis de la tarde, pues se había declarado estado de sitio. Pronto empezamos a dimensionar la brutalidad con que actuaba el nuevo régimen.

Bastaron solo algunos días para que el partido comenzara a sacar conclusiones, mientras la Junta se instalaba y tomaba el control. El 19 de septiembre, se realizó el tradicional Te Deum Ecuménico en la iglesia de la Gratitude Nacional. Eduardo Frei, quien al momento del golpe era presidente del Senado, solo accedió a asistir porque el cardenal Silva Henríquez se lo pidió. “No me deje solo”, le había dicho el prelado.

El cardenal, al parecer, intentó jugar un rol de mediador con esta iniciativa. Sin embargo, lo que se encontró fue a un Pinochet exacerbado en su rol de dictador. Basta ver la imagen capturada por el fotógrafo holandés Chas Gerretsen en dicha ceremonia, en la que Pinochet aparece sentado, con anteojos oscuros y los brazos cruzados, con el resto de los miembros de la Junta a sus espaldas.

Esa jornada marcó un distanciamiento clave entre la Junta Militar y la Democracia Cristiana. Además de Frei, asistieron otros dos expresidentes: Gabriel González Videla y Jorge Alessandri, quienes no ocultaron su complacencia ante el nuevo gobierno. Frei, en cambio, señaló en dicha oportunidad que él solo estaba ahí para “orar por la paz y la estabilidad del país”. Cuando, al término de la ceremonia, Alessandri le propuso que fueran juntos a saludar a los comandantes en jefe, este se negó: “No nos corresponde ir a nosotros, somos expresidentes. Ellos tienen que venir a saludarnos”. Fue el único que permaneció sin moverse, mientras el resto de los exmandatarios y autoridades presentaban sus respetos a los nuevos gobernantes. Este gesto, probablemente, no le cayó nada de bien a la Junta, y lo consideró una verdadera

afrenta.

Transcurrido ya un mes del golpe, la Democracia Cristiana comenzó a endurecer su postura, adoptando una actitud cada vez más crítica respecto al nuevo gobierno, sobre todo en relación con el tema de los derechos humanos. Todo seguía sabiéndose de oídas, no había información oficial sobre los detenidos y muertos, pero el cardenal Silva Henríquez nos mantenía informados. Entendíamos lo dramático de la situación.

En el intertanto, Augusto Pinochet iba camino a convertirse en la autoridad indiscutida y en el tirano que gobernaría a Chile durante casi dos décadas. Sus dichos y comentarios el día del golpe, referidos a personas a las que él había jurado lealtad, y que conoceríamos años más tarde, son de un sarcasmo, irreverencia y frialdad impresionantes.

Hay numerosos testimonios, así como cartas escritas por el militar tiempo antes, a autoridades y miembros del gabinete de la Unidad Popular, en las que les manifiesta su aprecio e irrenunciable amistad. Tal es el caso de los ministros de Defensa Orlando Letelier y José Tohá⁶⁹. No obstante, una vez ocurrido el golpe, cuando la esposa de Tohá, Moy, le solicitó una audiencia para interceder por su marido, quien tras su detención en isla Dawson fue trasladado al Hospital Militar de Santiago en grave estado de salud, Pinochet la recibió de manera fría y distante, como si nunca antes la hubiese conocido. Le prometió hablar con el fiscal e intentar apurar el proceso⁷⁰. Por supuesto, posteriormente, no hizo nada ni tuvo gesto alguno para resolver dicha situación.

¿Cómo explicarse tan repentina metamorfosis? Ante todo, lo que dejó entrever en estos primeros momentos no fue solo su absoluta falta de lealtad, sino que también rasgos asociados a una profunda ambición y capacidad de traición. Desde los primeros momentos del golpe, y mientras La Moneda era bombardeada, los mismos conjurados, aquellos que habían planificado la asonada, quedaron de una pieza al escuchar sus comentarios: "...las Fuerzas Armadas no están contra el pueblo, sino que están contra la hambruna que estaba sembrando el gobierno marxista del señor Allende, contra las colas que rodean a todas las calles de Santiago. (...) contra el hambre, contra la pobreza, contra la miseria, contra el sectarismo a que nos estaba llevando el señor Allende, mientras él satisfacía con fiestas y parrandas en la casa"⁷¹.

Muy pronto, los propios conjurados experimentarían en carne propia los

coletazos de esta irrefrenable ambición. En junio de 1974, la Junta Militar firmó un decreto que designaba a Augusto Pinochet como Jefe Supremo de la Nación. Seis meses después, un segundo decreto lo convertiría en Presidente de la República, ostentando así facultades absolutas dentro del Poder Ejecutivo, mientras el resto de los miembros de la Junta asumían labores legislativas, pasando a un subordinado segundo plano. Me imagino que esto no les habrá gustado mucho a Merino y a Leigh, quienes con tanta antelación y acuciosidad habían fraguado el plan subversivo. ¡El que se había subido al carro al final, dudoso y atemorizado, ahora se las arreglaba para quedar arriba, por encima de todos! El acuerdo inicial era que la presidencia de la Junta Militar iba a ser rotativa; sin embargo, Pinochet decidió no ceder el cargo, ante lo cual Leigh manifestó su desacuerdo. Años más tarde, este recordaría ese momento: “A Pinochet le vino un ataque de furia, dio un golpetazo a la mesa, quebró el cristal, se rompió un poco la mano y sangró. Ahí, Merino y Mendoza me dijeron que yo debía firmar, porque si no la Junta se iba a dividir. Firmé”⁷². Posteriormente, en 1978, Leigh sería destituido y, años más tarde, sufriría un atentado que casi le costó la vida.

Pinochet fue un traidor de tomo y lomo, y no trepidó en eliminar a todos aquellos que pudiesen hacerle sombra. Su astucia no tuvo límites. Estos rasgos fueron acentuándose, en la medida en que fue concentrando el poder en sus manos. Traicionó la confianza del Presidente Allende. Traicionó a su socio en el golpe, el general Leigh. Traicionó a su amigo, el general Carlos Prats, a quien muchas veces aludió como un “hermano”. Traicionó a su camarada, el coronel Cantuarias, quien protegió a su familia mientras ocurría el golpe. Y, llegado el momento, hizo lo propio con los ministros José Tohá y Orlando Letelier. A todos ellos, su deslealtad les costó la vida, a excepción de Gustavo Leigh, quien se salvó fortuitamente. En sus últimos años, incluso terminó por traicionar y abandonar a su fiel compañero, el general Manuel Contreras, cómplice con el que compartió tantos secretos e intrigas.

Bien lo diría Carlos Prats, en una carta que le escribió a Moy Morales, esposa de José Tohá, el 29 de agosto de 1974: “En cuanto a la conducta de Pinochet, puedo decirte que su traición no tiene parangón en la historia de Chile. ¿Cómo puede entenderse su trayectoria bonachona y dúctil entre marzo y septiembre de 1973, si él mismo ha reconocido su compromiso, bajo firma, para derrocar a Allende desde aquel mes? La explicación está en que en su personalidad —como en el caso de un Duvalier— se conjugan admirablemente una gran pequeñez mental con una gran dosis de perversidad espiritual, como lo ha estado demostrando con

sus inauditas declaraciones recientes”⁷³. Un mes más tarde, Carlos Prats y su esposa serían asesinados en un atentado perpetrado en pleno Buenos Aires.

El golpe y sus posteriores consecuencias fueron una verdadera contrarrevolución: la destrucción y una negación casi atávica de todo lo que simbolizó la Unidad Popular. Pero la violencia también se desataría virulentamente contra todos aquellos que no pensábamos igual, contra los “traidores”, contra los que oponían resistencia o se atrevieron a cuestionar al nuevo régimen.

Nuestra democracia había sucumbido. El golpe militar de 1973 representó un momento culmine, no solo en la historia de Chile, sino que también en la historia del mundo y, especialmente, en el ámbito del marxismo y de las experiencias socialistas. Una experiencia inédita había fracasado, la que había despertado expectativas, esperanzas y también muchas reacciones. “El drama ocurrió en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo y que se quedó en nuestras vidas para siempre”, escribiría semanas después del golpe Gabriel García Márquez.

VII

LOS AÑOS MÁS NEGROS DE LA DICTADURA

1. Un período de definiciones para la DC

En medio de la dura represión, de detenciones arbitrarias y de una persecución despiadada, una de las primeras medidas que decretó la dictadura fue la de disolver y prohibir los partidos políticos que conformaban el gobierno de la Unidad Popular, así como también confiscar sus bienes y declarar, de paso, el receso para el resto de los partidos políticos. La infracción de estas prohibiciones significaba altas penas para los dirigentes, los que incluso se exponían a sanciones pecuniarias que podían afectar su patrimonio. Ante esta situación, y con el objetivo de evitar eventuales riesgos, muchos procedimos a traspasar nuestros bienes a nuestras esposas, suscribiendo para ello contratos de separación de bienes a su favor.

Una vez declarado el receso de los partidos, desde la Democracia Cristiana resolvimos seguir trabajando de forma clandestina. La base de operaciones sería la oficina de abogados que mantenía con mis hermanos Alberto y Adolfo, junto a José Florencio Guzmán y Juan Achurra, en el piso 11 del edificio Carlos V, esquina de Huérfanos con el Paseo Ahumada. A esta se sumaría, además, la oficina de Eduardo Frei Montalva y de Raúl Troncoso, ubicada en el piso 12 del mismo edificio. Posteriormente, arrendamos otra oficina más, ubicada en el mismo piso que la nuestra, donde comenzó a funcionar la directiva del partido, presidida en ese entonces por Patricio Aylwin. Hasta el año 1982, este edificio fue nuestro cuartel general. En la práctica, para nosotros no hubo pausas ni descanso. Nunca bajamos la cortina. El compromiso de la DC con la lucha por la democracia fue profundo y permanente, y sin tregua.

En un principio, uno de los temas que se debatieron ampliamente en la Democracia Cristiana fue si debíamos o no participar en el nuevo gobierno. Algunos creían que esto podría permitirnos influir en las Fuerzas Armadas para lograr un pronto retorno a la normalidad democrática. A poco andar, algunos miembros de la directiva solicitaron una reunión con la Junta Militar para discutir esta posibilidad, pero la cita terminó en un rotundo fracaso. El almirante José Toribio Merino llegó con Gustavo Leigh y César Mendoza, y lo primero que hizo, tras tomar asiento, fue sacar su pistola y ponerla sobre la mesa,

sentando así el tono del resto del encuentro. Fue una conversación estéril y amenazante. Un Patricio Aylwin aún bastante impactado nos daría los detalles al respecto más tarde.

Durante los primeros meses de la dictadura, el partido optó por dejar en libertad de acción a sus militantes, de manera que estos decidieran lo que estimaran más conveniente. En ese contexto fue que Enrique Evans y Alejandro Silva se incorporaron, en 1973, a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, también denominada “Comisión Ortúzar”, organismo creado por la Junta Militar con el objetivo de elaborar el anteproyecto de un nuevo texto constitucional. Fue una decisión que ellos tomaron por su cuenta, pero nadie en el partido la objetó. Creo que esta postura inicial, más que un error, fue resultado de nuestra falta de información y de la nula conciencia respecto a cómo se estaban comenzando a fraguar los hechos. Aún estábamos convencidos de que estos gestos de colaboración tendrían cierta incidencia en acortar los plazos para restablecer el tránsito a la recuperación de la democracia. Sin embargo, muy pronto los propios acontecimientos nos demostrarían que estábamos muy lejos de aquello.

En esta misma línea, algunos militantes asumieron, durante ese primer año, cargos públicos y alcaldías. El primer ministro de Justicia del gobierno militar fue, de hecho, Gonzalo Prieto Gándara, quien renunció a su militancia. “Esta determinación la tomo con el propósito de no inmiscuir ni responsabilizar al partido de los actos del actual Gobierno...”⁷⁴, le escribió, el 25 de septiembre, al entonces presidente de la DC, Patricio Aylwin. Pero los casos más polémicos fueron los de Juan de Dios Carmona y William Thayer. El primero renunció al partido en 1976, para luego integrarse al Consejo de Estado de Pinochet. Thayer, por su parte, fue expulsado en 1975 por ejercer como asesor en el sector público de la dictadura.

Durante esta época, asumí como tercer vicepresidente del partido. Ya a esas alturas estaba claro que incorporarnos al gobierno era una medida imprudente. Hoy, mirándolo en retrospectiva, creo que nuestra postura debió haber sido más dura desde un principio, pero admito que el cuadro era extremadamente confuso. Existían ciertas cercanías con algunos personeros de gobierno, como el general Bonilla, quien se desempeñaba como ministro del Interior, y con quien manteníamos buenas relaciones desde que fuese edecán del Presidente Frei durante su mandato.

Pero una vez asentada la dictadura y, especialmente, cuando empezamos a

comprobar los graves delitos y atropellos en materia de derechos humanos, el partido comenzó a cohesionarse nuevamente, aunándose en torno a una postura común, sin desmedro de que continuaron coexistiendo visiones diferentes, sobre todo en relación con cómo debíamos enfrentar al gobierno. Los sectores más próximos a Tomic, Renán Fuentealba y Gabriel Valdés postulaban la idea de un acercamiento y un trabajo conjunto con la dirigencia de los partidos de la Unidad Popular, mientras que aquellos que nos sentíamos más representados por la figura de Frei creíamos que esta alianza podía ser usada por el régimen como una excusa para cerrar filas y justificar un incremento en la represión.

En el marco de esta discusión, Patricio Aylwin resolvió instruir como política del partido en el extranjero que no nos involucráramos institucionalmente con el mundo marxista. Uno podía participar, reunirse y sostener diálogos, pero siempre a título personal y no partidario. No obstante, en julio de 1975, se realizó el primer encuentro entre dirigentes de la Democracia Cristiana y de la Unidad Popular en Colonia Tovar, Venezuela, con el objetivo de explorar alternativas viables para enfrentar la dictadura y restaurar un futuro gobierno democrático en Chile. En dicha reunión participaron, entre otros, Bernardo Leighton, Renán Fuentealba, Gabriel Valdés, Clodomiro Almeyda, Aniceto Rodríguez, Anselmo Sule, Sergio Bitar y Rafael Agustín Gumucio. Este fue, en cierto sentido, uno de los primeros antecedentes de lo que sería la Concertación de Partidos por la Democracia años más tarde.

La dirigencia del partido, que no había dado su consentimiento, ni tampoco había sido informada de la participación de militantes en dicho encuentro, hizo saber su malestar. Patricio Aylwin les escribió a los involucrados una carta, planteándoles la inconveniencia de este tipo de reuniones públicas para los objetivos estratégicos de la DC, ratificando la necesidad de contar con un solo eje de conducción.

El impasse no tuvo mayores consecuencias, pero sí transparentaba nuestras diferencias internas, las que por cierto no eran de orden ideológico, sino que más bien estratégicas. Todos estábamos por el entendimiento y por avanzar; solo que algunos pedían hacerlo con mayor precaución que otros. Coincidíamos en que la violencia no nos ayudaba y que la lucha debía hacerse por la vía pacífica.

No obstante, muy pronto, los hechos nos llevarían a adoptar una postura única, y a lograr acuerdos en torno a nuestro quehacer y opciones partidarias. Ya a fines de 1973, estábamos claros respecto al panorama que enfrentábamos: una

represión despiadada y un control absoluto de parte de las Fuerzas Armadas y de todo el aparato estatal, a causa de lo cual no se respetaba ninguna de las libertades fundamentales. Los dirigentes de izquierda habían sido diezmados en una razia brutal, y la persecución se extendía no solo al mundo político y sindical, sino que también sobre la actividad privada. Sabíamos ya de los campos de detención —cuya ubicación era secreta— y de las torturas que allí se cometían, así como de las desapariciones, pero desconocíamos el paradero de las víctimas.

Todo esto ocurría frente a un Poder Judicial que no ejercía su función de protección a los derechos ciudadanos y que era cómplice de la dictadura. Esto lo sufrimos en carne propia, apenas comenzamos a presentar los primeros recursos de amparo. Los juicios de guerra eran verdaderos montajes, shows vergonzosos. Muchos de los nuestros, cual verdaderos quijotes, se presentaron para intentar defender a los acusados, pero todo era informal, sin ninguna garantía ni sentido real de la justicia. El aparataje completo estaba en manos de Pinochet, tal como él mismo se encargaría de aclarar: “No se mueve ninguna hoja en este país si yo no la estoy moviendo. ¡Quiero que quede claro!”⁷⁵. En esta tarea lo acompañaba, por supuesto, el director de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), Manuel Contreras. La estructura de este organismo estaba compuesta no solo por uniformados, sino que también por una cantidad inmensa de civiles, encargados del soplaje y de las venganzas, que muchas se daban también en términos personales.

Ya en febrero de 1974, el partido acusó a la Junta Militar de violaciones reiteradas en materia de derechos humanos. En junio, el gobierno clausuró la radio Balmaceda, y el 4 de octubre de ese mismo año se impidió la entrada al país de Bernardo Leighton, una figura emblemática del partido y de la política chilena. Ante estos acontecimientos, la DC cerró filas, asumiendo una postura no solo unitaria, sino que también de abierto rechazo y oposición al gobierno militar. Desde ahí en adelante, nos articulamos en una lucha permanente contra la represión y los abusos. Fueron tiempos de denuncia y de acción, durante los cuales muchos arriesgaron la vida. Personas como Jaime Castillo y Andrés Aylwin, y dirigentes sindicales como Manuel Bustos y Eduardo Ríos, por nombrar únicamente a algunos, se la jugaron el todo por el todo. Mucha gente nuestra se involucró en la lucha por la defensa de los DD.HH. Fue una actitud casi universal del mundo democratacristiano. Era algo que llevábamos adentro, una profunda convicción.

2. Una presidencia semiclandestina

En 1976, el presidente del partido, Patricio Aylwin, aquejado por el estrés y la desgastadora tensión, decidió dar un paso al costado y dimitir de su cargo. En su reemplazo, nos presentamos como candidatos Tomás Reyes y yo. Ambos elaboramos nuestros programas, dando cuenta de nuestras posiciones y estrategias, las que hicimos llegar a la militancia a lo largo de todo el país a través de dos documentos.

Fue una elección bastante engorrosa, pues dadas las restricciones, los electores debían trasladarse a Santiago y votar en un domicilio determinado. La votación duró diez días y en ella participaron más de 150 militantes. Fui electo con una votación superior al 60%. Tal como lo establecía el estatuto de emergencia, Tomás Reyes fue designado como primer vicepresidente, siguiendo la tradición de la anterior directiva, cuando Patricio Aylwin eligió al senador Ricardo Valenzuela —representante de la lista perdedora— como su segundo. Era una muestra de unidad necesaria para enfrentar la dictadura.

Mi rol como presidente del partido vino de la mano de una gran responsabilidad. Y es que, previo al golpe, y anticipándonos a lo que podía suceder, habíamos redactado un estatuto de emergencia que regiría durante una eventual crisis, y que otorgaba amplios poderes y autoridad a quien fuese designado para ocupar dicha posición.

Inmediatamente, pasé a asumir un rol de líder opositor. La situación en el país era tensa y difícil. La persecución de la dictadura hacia los disidentes era brutal. Gran parte de los partidos de izquierda habían sido diezmados y la censura era a ultranza. No obstante, la Democracia Cristiana aún tenía algunos espacios para denunciar, los que aprovechábamos con sagacidad e ingenio. Nuestra voz, en esos momentos, era clave. Si no hablábamos nosotros, ¿quién entonces? Así, comenzamos a expresar nuestra disconformidad con el régimen a través de permanentes declaraciones, correspondiéndome liderar actos e intervenciones. Como parte del mismo proceso, comencé a ganarme enemigos, el propio Pinochet entre ellos.

A mi alrededor, se configuró un equipo cercano, de gente capaz y decidida, que trabajó con mucho ahínco durante esos años, pese al sinnúmero de limitaciones que teníamos para reunirnos y los riesgos a los que nos exponíamos. Muchas veces nos encontrábamos en mi casa. Entre estos actores, uno muy relevante fue Claudio Orrego Vicuña, con quien siempre habíamos tenido una relación estrecha y cercana, el cual pasó a ser mi mano derecha.

Claudio era una persona de gran calidad humana, de mucha alegría y jovialidad. Culto, intelectual, ingenioso y dicharachero, su presencia siempre constituía un aporte. Incluso en los peores momentos que enfrentamos, su humor lograba mantener los ánimos en alto. Juntos construimos un circuito con gente joven del partido, cercanos a las figuras de Frei, Patricio Aylwin, Jaime Castillo y Renán Fuentealba. En este espacio participaban Eduardo Palma, Marco Antonio Rocca, Patricio Rojas, Enrique Krauss, Genaro Arriagada, Juan Hamilton y Rafael Moreno, entre otros. Era un círculo extenso, pero Orrego destacaba con su figura bohemia y, a la vez, moralista en su forma de vivir. Era un hombre que hacía la oración de la tarde, y que era abstemio en cuaresma. Jamás lo vi empinar una copa antes de que se pusiera el sol. Lo recuerdo llegando a mi casa en su citroneta, en las mañanas de lluvia, con un enorme impermeable amarillo que había comprado en un viaje a Estados Unidos, de esos que usaba la gente en el campo. Yo lo molestaba: “No te pongas ese impermeable, mira que la CNI [(Central Nacional de Informaciones)] te va a identificar de inmediato”. En 1976, fundó la Editorial Aconcagua, único proyecto editorial democrático que funcionó ininterrumpidamente durante la dictadura militar y que logró sortear, no sin dificultades, la censura. Con Claudio aprovechamos esta instancia para difundir temas y escritos que dejaban entrever soslayadamente nuestra crítica profunda al régimen militar. La línea de publicaciones era realmente la única a la que podían recurrir el pensamiento y la intelectualidad no oficialistas. Allí se imprimieron numerosos libros, tales como *El caso Letelier*, *Lonquén*, *Detenidos desaparecidos*: Una herida abierta, *El general disidente*, *Trayectoria de una crítica*, *La tiranía en Chile*, *Bienaventurados los pobres*, *Tres noches de un sábado* y *El mensaje humanista*, último opúsculo escrito por Eduardo Frei, antes de ser asesinado. Muchos de estos libros estuvieron años sin poder circular, pese a estar impresos. Realmente era una labor titánica, pero fue determinante para denunciar lo que estaba sucediendo en el país y abrir nuevos espacios de debate y pensamiento. Francamente, hasta hoy me pregunto cómo hizo Claudio para lograr mantener vigente la editorial con tan pocos recursos y bajo tanta amenaza.

A los pocos días de asumir la presidencia, nos enteramos de que el gobierno

había interceptado unos documentos que habíamos enviado a nuestra gente exiliada en Venezuela. Entre estos, había dos textos: uno escrito por Tomás Reyes y el otro por mí. En ellos analizábamos lo que estaba sucediendo en Chile, así como posibles estrategias a seguir para derrotar a la dictadura y recuperar nuestro sistema democrático.

El gobierno esperó un par de meses antes de reaccionar. Estaban en una situación complicada, ya que, tras la expulsión de Jaime Castillo y Eugenio Velasco en agosto de 1976 —quienes habían presentado una solicitud de condena a Chile ante la Asamblea General de la OEA por violaciones a los derechos humanos—, la mirada internacional estaba puesta sobre ellos. En marzo, emitieron un comunicado oficial en el que relataban cómo habían descubierto un plan subversivo de parte de dirigentes democratacristianos para derrocar al gobierno. En el informe, aparecíamos involucrados Tomás Reyes y yo, acusados de “conspiradores” y “antipatriotas”.

Se anunció que evaluarían drásticas medidas en contra de los traidores. Me llegó el rumor de que Pinochet tenía listo sobre su escritorio el decreto que ordenaba nuestra expulsión del país. No había mucho qué hacer. Partí a mi casa a preparar las maletas. El exilio parecía ser algo inminente. Llegó mucha gente a darme su apoyo, entre ellos Aylwin y Frei, Raúl Troncoso, Claudio Orrego, Genaro Arriagada y un grupo de dirigentes de la juventud del partido dispuestos a hacer guardia afuera de mi domicilio hasta que tuviéramos claridad sobre lo que iba a pasar.

Al caer la noche, y por encargo de la Junta Militar, el conductor Javier Miranda leyó por televisión el documento incautado que yo había escrito. Miranda, un buen locutor, se largó a leer, respetando con cuidado cada pausa, cada entonación, mientras transmitían en vivo. Quienes lo escuchamos no pudimos evitar reparar en lo bien articulado que estaba aquel texto y sus argumentos. No tardamos en darnos cuenta de que aquella exposición era, en realidad, la mejor publicidad que pudiéramos haber logrado jamás, en una época en que no estábamos en condiciones de pagar ni un segundo al aire. En mi casa, la gente aplaudía, conmovida. Al día siguiente, El Mercurio publicó el texto completo, en primera página. Sin darse cuenta, nos hicieron el mejor de los favores.

Años más tarde, Javier Miranda me contó cómo habían sucedido las cosas. Mientras estaba leyendo al aire, llegó hasta el estudio un contingente militar con

el objetivo de detener la transmisión. Se habían dado cuenta del error garrafal cometido, pero ya era demasiado tarde. Miranda completó su lectura, y todo Chile se enteró, desde la comodidad de sus hogares, de cómo estábamos convencidos de que el régimen podía ser derrotado por la vía pacífica. La difusión del texto nos puso en la mira. La gente empezó a convencerse de que había, efectivamente, una forma de luchar. El propio Pinochet se dio cuenta de que había provocado una situación tal que, si nos expulsaban, el escándalo internacional sería tremendo.

No puedo desconocer que pasamos un buen susto, pero el episodio nos ayudó muchísimo, poniéndonos no solo en el horario prime televisivo. Varios periódicos de la época publicaron también los textos completos. El alcance fue tal que, incluso, trascendió al extranjero, poniendo de manifiesto ante la opinión pública, nacional e internacional, la exacerbada reacción del régimen ante cualquier manifestación de disenso en su contra. Era tanta su paranoia que siempre estuvimos infiltrados. Sabíamos que estábamos bajo la mira constante de la Dina y, posteriormente, de la CNI. Nuestros teléfonos estaban intervenidos y, en muchas ocasiones, se detectaron micrófonos en la oficina del expresidente Frei. El control era absoluto. Desde el gobierno sabían perfectamente quién nos visitaba, los mensajes que recibíamos y las llamadas que realizábamos. En muchas oportunidades, de noche, nuestras oficinas fueron registradas. En una de esas visitas, destruyeron todo mi despacho, el mobiliario, los cuadros, documentos y todo tipo de objetos. Muchas veces poníamos gruesas cintas de scotch en la parte superior de las puertas, para estar al tanto de cuándo ingresaban estos indeseados visitantes. Recuerdo que para despistarlos, normalmente dejaba anotadas en mi agenda, sobre mi escritorio, citas falsas como “Llamar a Sergio Diez” o “Reunión con Francisco Bulnes”, pues sabía que las leerían y les generaría desconcierto y confusión.

Para evadir a los agentes, recurriamos a todo tipo de estrategias, algunas, por cierto, bastante rudimentarias. Hasta nos metíamos a hablar al baño y dábamos el agua de la ducha para evitar que interceptaran nuestras conversaciones. Con frecuencia, iba un experto a mi oficina, y también a la de Eduardo Frei, a revisar y buscar micrófonos escondidos.

¡Cuántas veces nos amenazaron! A mi madre la llamaron en numerosas ocasiones para decirle que me iban a matar. La persecución era permanente. Sin embargo, pese a todas estas dificultades que complicaban bastante la operatoria del partido, logramos estructurarnos de manera que nuestra dirigencia, a nivel

país, pudiese mantenerse informada y en contacto. Si bien los militantes habían dejado de reunirse, teníamos una red con los dirigentes regionales que operaba con mucha eficacia. Nos llamaban o, en caso necesario, hasta viajaban a Santiago para obtener información. Aunque la directiva del partido aún podía reunirse, siempre tomábamos precauciones. Asimismo, manteníamos conexiones con el extranjero, en especial, a través de la Internacionales Demócrata Cristiana, Socialista y Liberal, las que estuvieron comprometidas con nuestra causa desde un principio.

Al menos en mi entorno más cercano, nunca nos dejamos arrinconar o atemorizar. Cada vez que veíamos una oportunidad para actuar, denunciar o manifestarnos la aprovechábamos. Especialmente la gente más joven y también los dirigentes sindicales y sociales arriesgaron todo, incluida su integridad física. Puede que haya sido la adrenalina, pero no recuerdo haber sentido miedo. Hoy, mirando hacia atrás, y al tanto del horror vivido por numerosos compatriotas, me impresiona que haya sido así, ya que estábamos en el ojo del huracán. El riesgo que corríamos era inmenso y la posibilidad de que mi familia, mis hijas o mis padres fuesen agredidos era real y permanente.

En 1977, el gobierno decretó la disolución de todos los partidos políticos que no habían sido prohibidos en 1973. Con ello, la Democracia Cristiana pasó a la ilegalidad absoluta, ordenándose la confiscación de todos nuestros bienes. Rápidamente se apoderaron de nuestros locales a lo largo del país.

Pero nuestra sede central, ubicada en el edificio de Alameda 1460, corrió mejor suerte. Hasta poco antes del golpe, había figurado a nombre de una sociedad inmobiliaria conformada con aportes de todos los socios: la Sociedad Inmobiliaria “4 de septiembre”. De los 11 pisos que tenía el edificio, nosotros solo ocupábamos tres, y únicamente el quinto estaba a nombre del partido. Un piso lo había comprado el Indap, y el resto se arrendaba a diversas empresas, entre ellas la Compañía Chilena de Teléfonos, que tenía sus oficinas en los dos primeros niveles.

Quizás vaticinando lo que se venía, se me había ocurrido traspasar la mayoría de las acciones de la sociedad a nombre de cien militantes, a quienes les pedí que firmaran letras para ejecutar la transacción. Así, la propiedad había quedado en manos de personas naturales, abriéndonos la posibilidad de sortear la medida del gobierno. Y es que la dictadura era muy respetuosa de la propiedad privada, algo típico de la visión ideológica de sus autores intelectuales.

Lo único que no se pudo transferir a los militantes fue el quinto piso, que finalmente fue incautado. Allí se instalaron oficinas de la Fuerza Aérea, las que operaron durante toda la dictadura.

Se produjo entonces una situación bastante insólita, pues a través del arriendo que pagaba todos los meses la Compañía Chilena de Teléfonos, empresa estatal, financiábamos buena parte de las actividades del partido. Gracias a ello, podíamos pagar los gastos de secretaría, algunos materiales para impresión y el sueldo del encargado de prensa. Así, la dictadura, sin saberlo, casi nos estaba subvencionando.

Años después, cuando partí al exilio, el Consejo de Defensa del Estado entabló una demanda en mi contra por simulación de contrato, a partir de esta transacción que había realizado con los militantes del partido. Desde el extranjero, le solicité a un amigo abogado, Álvaro Puelma, que me defendiera. Por supuesto, la demanda fue acogida en primera instancia por la Corte de Apelaciones. Pasó el tiempo, y tras el retorno a la democracia, cuando Patricio Aylwin asumió como Presidente, fui a conversar con él y a plantearle la situación. “Lo lógico es que el Estado desista de esto y que no me sancione. ¡Sería ridículo que me condenaran hoy, por simulación de contrato, en plena democracia!”, argumenté. Pero Aylwin optó por la precaución. “Creo que no es bueno que yo intervenga. Mejor esperemos a ver qué resuelve la Corte Suprema. Si lo hacen en tu contra, ahí veremos qué se puede hacer”, respondió.

En buena hora, la Corte Suprema falló a mi favor. Sin embargo, la situación descrita da cuenta de la arbitrariedad a la que puede llegarse mediante una dictadura que acostumbra actuar por la vía de los hechos.

Tras el retorno a la democracia, logramos recuperar algunas sedes, aunque otras jamás volvieron a ser del partido. Varias habían quedado a nombre de personas naturales y hubo quienes, aprovechándose del receso, terminaron apropiándose de ellas. Algo similar ocurrió con el diario El Sur, en Concepción, el cual habíamos adquirido como partido y pagado a sus propietarios, la familia Lamas. Pero dado el decreto del gobierno, el traspaso no se pudo concretar, y ellos siguieron administrando el medio. Tiempo después, ya en democracia, intentamos recuperarlo, e incluso le pedimos al abogado Alberto Pulido que iniciara las acciones correspondientes. Finalmente, perdimos la batalla, puesto que, durante el período en que los antiguos dueños siguieron administrándolo, el capital fue ampliándose y, para cuando quisimos retomar el traspaso, nuestra

propiedad se había diluido.

La confiscación de las sedes dificultó la posibilidad de seguir sosteniendo encuentros presenciales. En adelante, las reuniones comenzaron a realizarse de manera semiclandestina. Inventábamos bautizos o cumpleaños para encontrarnos, tal como si se tratase de veladas entre amigos. En Talca, por ejemplo, nos reuníamos en la parcela del dirigente Renato Guerra. Debajo de unos árboles, en una zona apartada, nos encontrábamos con los dirigentes y militantes del sector. Así ocurría en todas las regiones. A veces invitaba a algunos dirigentes al campo de la familia de Inés, en San Clemente. Recuerdo que en una de esas ocasiones nos acompañó el obispo de Talca, monseñor Carlos González, y también Patricio Aylwin. Nos interesaba pulsar y saber realmente qué estaba pasando en el mundo campesino, en la costa y en las zonas mineras.

En otra oportunidad, me pidieron que asistiera a una junta provincial en Concepción, en la que se iba a votar la elección de la directiva regional. Con José Miguel Ortiz, quien ocupaba el cargo de presidente provincial en ese momento, nos preguntamos: “¿Cómo lo hacemos?”. Ortiz había sido papá hacía poco, su hijo tenía con suerte un año. “¡Hagamos un bautizo!”, le propuse. Sabíamos que había un sacerdote en la zona, el padre Azócar, con quien podíamos contar. “José Miguel, habla con el cura para que nos preste la iglesia, tú pones la guagua y yo soy el padrino”, le dije.

Armamos toda una puesta en escena. Incluso organizamos un cóctel en un local que facilitó otro militante. El plan era que ahí nos encontraríamos toda la dirigencia y los miembros de la junta provincial para llevar a cabo las elecciones. Sin embargo, después nos enteramos de que todo el encuentro fue grabado por agentes de la Dina. Lamentablemente, el camarada que había ofrecido el local fue detenido, interrogado y torturado. Hoy, mi supuesto ahijado, Álvaro Ortiz, es alcalde de Concepción. Creo que como segundo nombre lleva el mío, en testimonio de aquel encuentro partidario.

Este tipo de cosas sucedían a menudo. En otra ocasión, me reuní una noche en San Miguel con un grupo de militantes y, a los pocos días, me enteré de que a esa casa, posteriormente, habían llegado agentes de la Dina y se los habían llevado a todos detenidos. Preocupado ante este tipo de situaciones que provocaban tanto daño a nuestros camaradas, partí a hablar con Eduardo Frei. ¿Cómo íbamos a seguir luchando así, poniendo a los nuestros en peligro?

“Don Eduardo, no sé qué hacer. Me reúno con gente y pasan estas cosas”, le dije. Me miró muy serio, guardando silencio por unos segundos. Finalmente, respondió: “Mira, Andrés. Esto va a continuar siendo así. Nos van a seguir golpeando, nos van a dar duro, pero hay algo muy importante...”. Y agregó: “Tenemos que mantener viva el alma del partido. Van a tratar de destruir el cuerpo, pero lo fundamental es que no nos destruyan el alma. Acuérdate de esto que te digo. Cuando volvamos a abrir espacios de libertad, va a ser esa alma la que nos ayudará a recomponer el cuerpo, y lo hará incluso con más fuerza que antes. Nuestro deber es mantenernos vivos”. Ese fue su mensaje, que quedó grabado en mí para siempre. La noche en que ganamos el plebiscito de 1988, mi mente viajó de vuelta a esa conversación.

Ahora bien, de todos los logros que nos anotamos como partido, el mayor mérito fue, sin duda, la valentía de nuestros militantes. Si hoy tuviera que hacer un listado con los nombres de esa enorme cantidad de personas que participó y ayudó a luchar desde el anonimato, podría llenar una guía de teléfonos. Éramos un partido quizás no muy numeroso, pero vital, activo y decidido. Nuestra red funcionaba casi automáticamente, sin necesidad de instrucciones, y esa estructura nos permitía mantener una comunicación fluida con la gente del mundo profesional, con los pobladores y con los dirigentes sindicales. Esa misma red fue la que respondió cuando llegó el momento de hacer caer al dictador en 1988. Los militantes, sin dudarlo, salieron a las calles a hacer campaña y a motivar a los chilenos para que asistieran a las urnas a decir “¡NO!”. En ese momento, tal como lo había predicho Eduardo Frei, lo que emergió fue el cuerpo del Partido Demócrata Cristiano, motivado por su alma viva, aún con más fortaleza y coraje que antes.

3. Una dictadura desalmada: La represión y la violencia de Estado

La brutalidad de las dictaduras militares tiene que ver, en buena parte, con la formación de sus perpetradores, quienes han sido preparados para la guerra. No hay que olvidar la frase que Pinochet pronunciara en plena crisis de la UP: "... cuando el Ejército sale a la calle, sale a matar", o años más tarde, cuando afirmó: "(...) yo vengo diciendo hace mucho rato que estamos en una guerra. Eso no lo capta la gente. La gente vive en otro mundo. Estamos en una guerra entre los demócratas y los comunistas totalitarios. Es una guerra a muerte"⁷⁶. Efectivamente, se trataba de una guerra contra el marxismo, contra el comunismo y contra todo aquel que osara identificarse o defender dicha ideología. Ahí estaba el enemigo.

Los Convenios de Ginebra y sus protocolos establecen claras directrices, con el objetivo de limitar la barbarie de la guerra y proteger a aquellos que no participan de la misma, o a quienes no están en condiciones de proseguir en los combates (heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra). Y es que el militar, cuando entra en el escenario de la guerra, es capaz de cometer cualquier barbaridad con tal de derrotar al enemigo. La fuerza y la irracionalidad predominan, y es un terreno donde todo se justifica, incluso la tortura, la desaparición, la represión y la persecución de personas.

No obstante, este fenómeno no solo se observa en escenarios bélicos o en regímenes dictatoriales. Al respecto, cabe destacar cómo, a comienzos de los años 2000, el gobierno del Presidente estadounidense George Bush aprobó memorándums que señalaban que los Convenios de Ginebra no aplicaban a los detenidos talibanes o a miembros de Al Qaeda en la cárcel de Guantánamo Bay. Con ello, se excusaba el uso de la tortura como herramienta de interrogatorio.

En el caso de Chile, la dictadura tuvo, primero, un enemigo en la mira: el militante marxista-leninista. Luego, pasaron a clasificar también sus colaboradores. Poco a poco, la noción de enemigo empezó a expandirse. Pronto podía ser cualquiera que no apoyara la dictadura a cabalidad, un sospechoso, un delatado y, por supuesto, los demócratacristianos.

Al asumir los militares el mando en 1973, numerosos bandos llamaron a los colaboradores del gobierno de la Unidad Popular a entregarse. Mucha gente, ingenuamente, obedeció, presentándose en las comisarías o recintos militares. Quizás pensaron que se trataría de un control de identidad o de una detención regularizada. A otros, en cambio, los sacaron directamente de La Moneda, de sus lugares de trabajo o de sus propias casas, para enviarlos a lugares como el Regimiento Tacna, Tejas Verdes, Ritoque, Pisagua, el Estadio Nacional, incluso isla Quiriquina e isla Dawson, con el fin de ser interrogados o enviados a supuestos “tribunales de guerra” exentos de todo protocolo. La violencia contra todos ellos fue despiadada. A varios de estos detenidos no se les volvió a ver. Hay numerosos testimonios y declaraciones al respecto, todos sobrecogedores, difíciles de creer, pero así ocurrió. La realidad y el espanto sobrepasaron todo límite imaginable. Únicamente el tiempo develaría los detalles de este leviatán.

El asesinato de Víctor Jara simboliza la suerte que corrieron muchos detenidos durante esta época. Detenido en el Estadio Chile y, posteriormente, trasladado al Estadio Nacional, fue brutalmente torturado. Lo golpearon con ensañamiento, le quebraron las manos y le dispararon 44 balazos, tras lo cual arrojaron su cuerpo en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, en el acceso sur de Santiago. Poco antes de morir, en una pequeña libreta, alcanzó a escribir sus últimos versos: “Canto que mal sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto”⁷⁷.

Otro caso emblemático fue el del intendente de Talca Germán Castro Rojas, militante socialista de tan solo 33 años. Fue detenido el 11 de septiembre, mientras buscaba refugio con otros camaradas, y acusado de matar a un carabinero, lo que justificó su fusilamiento sin un fallo y al margen de todo proceso legal. Años más tarde, la Comisión Rettig clarificó que los verdugos no habían tenido ninguna certeza de su autoría en el crimen.

Por su parte, La Caravana de la Muerte, a cargo del general Sergio Arellano Stark —en su calidad de oficial delegado del comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet—, a solo semanas del golpe, recorrió Chile con la misión de “agilizar y revisar” los procesos de prisioneros políticos, dejando a su paso 97 personas asesinadas, torturadas y desaparecidas. Esta macabra operación sería, años más tarde, denunciada por el exgeneral Joaquín Lagos, quien comandaba por entonces la Primera División del Ejército en Antofagasta. Su relato respecto al estado de los cadáveres de las personas ejecutadas, al momento de ser entregados a sus familiares, resulta escalofriante: “Me daba vergüenza verlos. Si

estaban hechos pedazos. De manera que yo quería armarlos, por lo menos dejarlos en una forma humana. Sí, les sacaban los ojos con cuchillos, les quebraban las mandíbulas, les quebraban las piernas... Al final les daban el golpe de gracia. Se ensañaron. (...) Se los mataba de modo que murieran lentamente. O sea, a veces los fusilaban por partes. Primero, las piernas; después, los órganos sexuales; después, el corazón. En ese orden disparaban las ametralladoras”⁷⁸.

Recuerdo que, en noviembre de 1973, un amigo me invitó a Villarrica. Me impactó muchísimo ver manchas de sangre en las barandas del puente que une esa ciudad con Pucón. Después me contaron que ahí habían asesinado, acribilladas por los militares, a varias personas, en especial dirigentes campesinos. Ya a fines de ese año teníamos la certeza de que las violaciones a los derechos humanos eran sistemáticas y se ejecutaban sin prórroga. Esto también nos llevó a concluir que la Junta Militar estaba muy lejos de plantearse entregar el poder.

Las universidades también fueron intervenidas y se llenaron de “soplones” o “sapos”, informantes vinculados a organizaciones de seguridad del gobierno que denunciaban a profesores y alumnos “sospechosos”. Muchos fueron despedidos, mientras numerosos estudiantes comenzaron a caer presos, tal como lo describe la canción de Fernando Ubierno “Un café para Platón”. El propio artista, a quien conocí durante el exilio, me contó que la compuso inspirándose en la historia de un compañero de facultad. Como él, hubo muchos casos, los que llegaban a oídos nuestros a través de familiares o amigos que buscaban ayuda. Era muy dramático escuchar estos relatos, especialmente de gente asesinada en las poblaciones o en sectores rurales. Nos avisaban de desapariciones y torturas desde las bases del partido, pues muchos de nuestros dirigentes pertenecían a sindicatos o juntas de vecinos.

En octubre de 1973, bajo el liderazgo del cardenal Raúl Silva Henríquez, se creó el Comité de Cooperación para la Paz (“Comité Pro Paz”) para combatir las violaciones a los DD.HH. y proveer de asistencia jurídica, económica y espiritual a los afectados y sus familias. En este participaban representantes de la Iglesia Católica, pero también de las iglesias evangélicas, la comunidad israelita y el Consejo Mundial de Iglesias. Fue presidido por monseñor Fernando Ariztía Ruiz y el obispo luterano Helmut Frenz, asumiendo como director el sacerdote jesuita Fernando Salas. Entre esta institución y la Democracia Cristiana no tardó en entablarse un fluido canal de colaboración.

Uno de los primeros casos en que me tocó involucrarme de forma directa fue el del diputado DC por Antofagasta Pedro Araya, de amplia presencia en el mundo popular. Según me informaron, había sido detenido y torturado, y lo mantenían preso. En un acto de cierta audacia, tomé el teléfono y llamé a Enrique Montero, subsecretario del Interior de la dictadura. Recuerdo que era un día sábado en la mañana. Sin preámbulos, y arrebatado por la rabia y la impotencia, le advertí: “Si no ponen en libertad a Pedro Araya de inmediato, procederemos a hacer una conferencia de prensa denunciándolos públicamente”. A las pocas horas nos avisaron que lo habían ido a botar en una zanja, detrás del Estadio Nacional. Lo llevamos a un centro asistencial, pues estaba muy malherido.

Tiempo después, llegaron a mi oficina unos dirigentes sindicales de Antofagasta, quienes también habían sido detenidos y torturados por su vinculación con Araya. Me contaron que en los interrogatorios lo único que les preguntaban, una y otra vez, era qué pensaba Radomiro Tomic y cuáles eran sus planes. Uno de ellos era un sastre, quien traía una herida en la parte posterior de la cabeza. Él no tenía nada que ver con el asunto, ni sabía de qué le estaban hablando; no era militante del partido ni conocía a Radomiro. Su única mala suerte había sido conocer a Pedro Araya, pues era uno de sus tantos clientes. Su negativa a responder cosas que no sabía lo hizo acreedor de una atroz paliza.

Ya a comienzos de 1974, teníamos total claridad de la existencia y funcionamiento de los aparatos de inteligencia desplegados por el gobierno, así como de los campos de prisioneros en el norte y en Santiago, y de algunos centros de detención y tortura como José Domingo Cañas, Londres 38, Cuartel Borgoño y Cuatro Álamos. Las Fuerzas Armadas ejercían un control absoluto sobre todo el aparato estatal, pero también en lo privado. El Poder Judicial no cumplía ninguna función de resguardo de los derechos de la gente, convirtiéndose en una instancia absolutamente cómplice de la dictadura. Lo vivimos en carne propia, con todos los recursos de amparo que presentamos, los que eran rechazados una y otra vez. Los juicios eran una real farsa. Jaime Castillo parecía un Quijote tratando de defender a los acusados, quienes normalmente terminaban siendo procesados sin ningún sentido real de justicia. Lo mismo hacían Andrés Aylwin, Alejandro González, Roberto Garretón, José Zalaquett, mi hermano Adolfo y tantos otros abogados que se jugaban, día a día, por defender a los detenidos por la dictadura, aun a riesgo de su integridad física. En nuestra propia oficina, un joven abogado Luis Toro era el encargado de reunir los antecedentes de los casos. Hubo mucha gente nuestra que lo dio todo, en una actitud de entrega y solidaridad admirables.

Una agrupación en particular que emergió en este contexto de lucha, y que merece ser mencionada, fue el Grupo de Estudios Constitucionales, también conocido como “Grupo de los 24”. Creado el 21 de julio 1978, e integrado por 24 profesionales y abogados, tenía como objetivo elaborar un proyecto alternativo de Constitución democrática para el país. Entre sus miembros figuraron algunos de los constitucionalistas más destacados del país.

Patricio Aylwin asumió como cabeza del grupo. Si bien buena parte de sus fundadores provenía de nuestras filas, a ellas se integraron desde liberales hasta comunistas. Era un grupo transversal. Entre sus miembros figuraban personas tales como René Abeliuk, Edgardo Boeninger, Carlos Briones, Héctor Correa Letelier, Armando Jaramillo, Raúl Rettig, Manuel Sanhueza, Alejandro Silva Bascuñán, Julio Subercaseaux y Hugo Zepeda. Con el tiempo, el colectivo terminó adquiriendo autonomía propia, demostrando que la oposición tenía la capacidad de proponer una alternativa en materia constitucional que, a la vez, abarcara propuestas en materia económica y social. Es decir, lo que se quería era que la opinión pública comprendiera que había otras opciones con capacidad de gobernabilidad.

Hoy me atrevo afirmar que la conformación del Grupo de los 24 fue una suerte de antesala de lo que más tarde sería la Alianza Democrática y el Acuerdo Nacional de los años ochenta. Todas aquellas instancias transversales dieron paso, posteriormente, al entendimiento de las fuerzas opositoras a la dictadura y que lograron comprometerse para derrotarla por la vía pacífica, rechazando la violencia o la vía armada, como algunos pretendían. De hecho, son los movimientos precursores de la fuerza que derrotó a Pinochet en el plebiscito de 1988 y de la alianza que, más tarde, se conocería como “Concertación de Partidos por la Democracia”.

4. El rol de la Iglesia Católica en defensa de los perseguidos

El papel que cumplió la Iglesia Católica como defensora de los derechos humanos durante la dictadura fue clave, hecho que aún algunos sectores reniegan o, incluso, pretenden ocultar. Personas como la religiosa Karoline Mayer o los sacerdotes Enrique Alvear, Fernando Ariztía, Alfonso Baeza, Carlos González, Sergio Contreras, Tomás González, Cristián Precht, José Manuel Santos y, por supuesto, Raúl Silva Henríquez, entre muchos otros, nunca claudicaron en esta lucha.

Así también muchos sacerdotes anónimos, en sus parroquias, barrios y lugares de trabajo, tendieron la mano a los perseguidos y fueron una luz de esperanza en esos oscuros años: André Jarlan, Pierre Dubois, Joan Alsina, Mariano Puga, José Aldunate, Esteban Gumucio, Alfonso Baeza, Pablo Fontaine... Y tantos más que, en silencio y con humildad, hicieron carne y su consigna la opción por los pobres y la defensa por la dignidad, la vida y los DD.HH. Jamás cedieron y arriesgaron su vida por salvar otras. Héroes de los que no se habla mucho, pero cuyo legado es imposible olvidar. Algunos provenían de sectores progresistas, marcados por movimientos tales como la Teología de la Liberación, y que defendían, fundamentalmente, el cambio social y la reivindicación de los pobres. Ello significó la represión y detención de numerosos sacerdotes, muchos de los cuales terminaron asesinados por la dictadura, entre ellos Joan Alsina, André Jarlan y Etienne Pesle, quien me casó con Inés.

En enero de 1976, el cardenal Silva Henríquez creó la Vicaría de la Solidaridad, en reemplazo del Comité Pro Paz, que debió disolverse ante las presiones del régimen militar. La valentía y solidaridad de todos sus colaboradores, los riesgos que asumieron, la represión y amenazas en su contra fueron constantes. Se necesitarían páginas y páginas para dejar constancia en estas líneas respecto a su valiosa labor. Sus archivos testimonian la tarea realizada en defensa de los derechos humanos de miles y miles de chilenas y chilenos indefensos, que sufrieron todo tipo de atropellos, muertes, desaparecimientos, torturas, encarcelamiento y exilio. A lo largo del país, los obispos de diversas diócesis asumieron con coraje esta misión. Es imposible nombrarlos a todos, a algunos ya

los hemos mencionado en el párrafo anterior, pero no quisiera dejar de aludir a otros que se cuelan ahora, repentinamente, en mi memoria: Carlos Camus, Jorge Hourton, Carlos Oviedo, Bernardino Piñera, Juan Luis Ysern, entre tantos otros.

La creación de la Vicaría de la Solidaridad fue un paso decisivo en términos de conferir a la Iglesia Católica un órgano defensor para responder a los abusos. A la vez, sirvió como espacio de encuentro para abogados democratacristianos con sus pares de izquierda, algo que a la dictadura exasperaba, por supuesto. De ahí la represión y el acoso permanente que sufrieron muchos de sus colaboradores.

El heroico trabajo desplegado por este organismo merece un reconocimiento permanente en la memoria histórica de nuestro país. Resultó determinante en la labor de llevar hasta los tribunales casos de torturas y ejecuciones. En 1978, por mencionar solo un ejemplo, la Vicaría recibió una denuncia del hallazgo de osamentas en los Hornos de Lonquén, tras lo cual se integró una comisión a cargo del caso. Fueron seminaristas los que, con la ayuda de chuzos y palas, encontraron los primeros restos óseos. El 1 de diciembre de ese mismo año, acompañados del abogado Máximo Pacheco, denunciaron los hallazgos y exigieron investigar a la Corte Suprema, la que finalmente ordenó la apertura de la causa. Los restos de 15 detenidos, todos provenientes de Isla de Maipo, fueron encontrados en las excavaciones, desmintiendo al fin con ello el calificativo de “presuntos” detenidos desaparecidos que, hasta entonces, las autoridades del régimen y la prensa oficialista se empeñaban en utilizar.

Por último, no puedo dejar de mencionar a monseñor Sergio Valech, quien, tras encabezar la Vicaría en 1987, supo oponer una tenaz resistencia a los numerosos intentos de Pinochet por apoderarse de los archivos de la institución. El militar, indudablemente, quería borrar las huellas de las brutalidades cometidas por sus secuaces. El padre Valech no le haría el trabajo tan fácil.

5. De sicarios y secuaces: Las redes de la dictadura en el extranjero

Pese a que aún no es posible determinar el número de chilenos que fueron exiliados durante el período de la dictadura militar, se estima que la cifra bordeó entre más de 200 mil y 400 mil personas. A partir del momento mismo del golpe y, dada la dura represión, muchos fueron desterrados, mientras otros lograron amparo en diversas embajadas que, en una muestra de solidaridad internacional, acogieron a cientos de chilenos que buscaban asilo ante el peligro de ser detenidos por parte de los organismos represores del régimen militar. Embajadas como las de Italia, Suecia, México y Venezuela, y la propia Nunciatura Apostólica abrieron sus puertas como símbolo de refugio a los perseguidos, transformándose en verdaderos cuarteles de sobrevivencia.

Hay hitos imposibles de olvidar y que ocurrieron en medio de estos duros días, como el caso de la joven Lumi Videla, militante del MIR, cuyo cadáver fue lanzado por agentes de la Dina a los jardines de la Embajada de Italia en noviembre de 1974. La prensa oficialista dijo que el homicidio había ocurrido en el curso de “orgías entre asilados”, versión que más tarde fue absolutamente descartada por la justicia. Este caso da cuenta de la violencia y perversión que se habían instalado en Chile. El concepto de “enemigo interno”, propuesto por la Doctrina de Seguridad Nacional de la dictadura, constituyó la esencia de la represión y la premeditada violación sistemática de los derechos humanos. En este turbulento escenario, la vida parecía haber perdido todo valor.

Muy pronto, el exilio comenzó a golpear también a algunos de los nuestros. En 1974, fue Renán Fuentealba. El partido reaccionó, adoptando una actitud de respuesta en bloque. El propio Patricio Aylwin fue quien defendió a Renán. Por supuesto, nuestros reclamos no fueron atendidos.

En 1976, le tocó a Jaime Castillo, quien se exilió en Venezuela. Dos años después, logró regresar, siendo expulsado nuevamente en 1981. Esta vez, el motivo fue la presentación, conjuntamente con Eugenio Velasco, de una solicitud de condena al gobierno de Chile ante la Asamblea General de la OEA que, por esos días, sesionaba en nuestro país. El texto, bien fundamentado, daba cuenta detallada del atropello a los DD.HH. en los últimos años. Había sido redactado

en el marco de la labor de la Comisión Chilena de Derechos Humanos creada por Jaime, la que trabajaba, mano a mano, con la Vicaría de la Solidaridad. Fue una dura bofetada para Pinochet. A las pocas horas de conocerse el documento, el gobierno decretó la expulsión de Castillo y Velasco por constituir “un peligro para la seguridad interior del Estado”, acusándolos de “antipatriotas”. A ambos los golpearon con rudeza y, tras ser secuestrados, los subieron a un avión rumbo a Argentina. Temíamos que les pasara algo, pues llegaban a un país bajo una dictadura que colaboraba con la Junta Militar. Finalmente, logramos que los recibieran en Buenos Aires, radicándose después Jaime en Venezuela y Eugenio en Estados Unidos.

Ya estaba más que claro hasta dónde podían llegar los militares a la hora de elaborar operaciones de represión y violencia, incluso a través de sus redes de colaboración internacional. A mediados de 1975, nos enteramos por la prensa de la “Operación Colombo”, cuando La Segunda publicó en su portada el infame titular “Exterminados como ratones”. Años más tarde, se confirmaría que este fue un elaborado montaje periodístico, ideado y ejecutado por la Dina, con apoyo de servicios de inteligencia del Cono Sur, para ocultar la desaparición de 119 personas detenidas en Chile entre 1974 y 1975. La mayoría eran jóvenes militantes del MIR, PC, PS y MAPU, quienes bordeaban entre los 18 y 25 años. El periódico aseguró que las víctimas habían sido ajusticiadas por “ley de fugas” y/o exterminadas por sus propios compañeros en el extranjero, en una verdadera vendetta. El primer caso, según recuerdo, fue el de David Silberman, militante comunista, quien había sido gerente general de la minera Chuquicamata hasta el día del golpe. Tras ser detenido y procesado por un consejo de guerra, fue secuestrado desde la Penitenciaría de Santiago, apareciendo su cuerpo mutilado, en abril de 1975, en una calle de Buenos Aires. Asimismo, en julio de 1975, el diario La Tercera publicó un despacho de la UPI, bajo el título: “Entre ellos se eliminan los extremistas chilenos”, dando cuenta de que en París se había encontrado el cuerpo sin vida del reconocido periodista Eugenio Lira Massi, quien “sería una de las víctimas” de vendettas de la izquierda chilena.

La Operación Colombo fue una de las acciones más infames de la dictadura. En ella colaboraron fuerzas de inteligencia tanto chilenas como argentinas y brasileras, vinculadas estrechamente, las que se cubrían las espaldas, maquinando todo tipo de artimañas para justificar sus actos criminales.

La antesala fue un acuerdo que contó con la participación de la CIA y fue encabezado por Manuel Contreras, director de la Dina, así como por los líderes

de servicios de inteligencia de las dictaduras militares del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) para perseguir y eliminar a dirigentes disidentes. Dicho acuerdo de colaboración en red fue firmado en Santiago, en noviembre de 1975, concertándose su operación en diversos países de América Latina, Estados Unidos y Europa. El asesinato de Carlos Prats y su mujer, Sofía Cuthbert, en pleno Buenos Aires, en 1974; el del ex ministro Orlando Letelier y su secretaria, Ronni Moffitt, en Washington, en 1976, y el atentado a Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno, en Roma, en 1975, fueron parte de esta operación. Asimismo, otro flanco del plan contemplaba los denominados “vuelos de la muerte”, en los que numerosos detenidos fueron arrojados vivos al mar desde aeronaves. Una tenebrosa red que atravesó fronteras sin obstáculos, dejando un saldo de miles de personas asesinadas, desaparecidas y torturadas. Hoy, conocidos todos los antecedentes, nadie pone en duda que tras estos y otros crímenes estuvo la mano de Augusto Pinochet.

6. Cómplices no tan pasivos

No es ningún misterio para los chilenos el hecho de que el mundo civil de derecha —y en especial el de extrema derecha— colaboró con la dictadura. La misma Dina estaba integrada por gran cantidad de civiles. Estos actuaron no solo “por omisión”, sino que de manera activa y directa en numerosos y alevosos crímenes. En los campos, la represión fue particularmente virulenta. Cuando los militares salían a rastrear a los dirigentes campesinos algunos dueños de fundos que habían sido afectados por la Reforma Agraria los ayudaban, entregando nombres y paraderos. Muchos de esos campesinos terminaron muertos o desaparecidos. Sus restos fueron encontrados, años después, en sitios como los hornos de Lonquén, Paine, Laja y San Rosendo.

Esta odiosidad, motivada por la experiencia de la Reforma Agraria, fue tal que la dictadura promulgó, en diciembre de 1973, el Decreto Ley 208. Este estableció lo siguiente: “No podrán postular a la destinación de tierras expropiadas por la Corporación de la Reforma Agraria los que hubieren ocupado con violencia el predio objeto de la destinación”. Con ello, muchos de los dirigentes de sindicatos campesinos que habían participado en tomas durante la UP —y a los que además se les perseguía producto de su actividad sindical, la cual era sistemáticamente censurada por el gobierno— se vieron forzados a abandonar los campos y esconderse.

A ojos del régimen, todo aquel que había participado en movimientos sindicales campesinos era comunista. Para ellos no existían matices. Esta forma de pensar se extendía también a los civiles, convirtiéndose en una fórmula para justificar todo lo que hacía la dictadura. No era raro escuchar a gente de derecha argumentar: “¡Pero si era un comunista!” o “¡Algo habrá hecho!”, cuando se sabía de alguien a quien habían fusilado o torturado. Así, entre el mundo civil anticomunista y el mundo militar, que asumió el mando del país, se fue entablando una colaboración permanente que incluía el soplónaje. Los militares tomaban las decisiones, pero en numerosas ocasiones estas eran facilitadas por los propios civiles.

Efectivamente, muchos de aquellos fueron pieza clave en la estructuración e

institucionalización de los abusos del propio régimen. Jaime Guzmán fue uno de ellos. Su rol fue el de ideólogo del modelo que le dio consistencia a la dictadura. Era un hombre integrista, que defendió a ultranza el actuar del gobierno. Por lo mismo, aunque se definía como católico y guardaba los preceptos de misa y comunión diaria, era muy crítico respecto a la actuación de la Iglesia Católica, de la Vicaría de la Solidaridad, de la Conferencia Episcopal y del propio cardenal Raúl Silva Henríquez. Asimismo, profesaba gran simpatía por el régimen franquista. Su noción de democracia guardaba estrecha relación con la aspiración a un sistema más bien corporativista. En la derecha, hay quienes lo recuerdan como su gran mentor y, si bien es cierto que era una persona extremadamente inteligente y preparada, también hay que reconocer su alto grado de ascendencia en la Junta Militar, permitiendo que se consolidaran espacios para que se cometieran, de manera impune, grandes abusos en materia de derechos humanos.

Con Guzmán nos enfrentamos en muchas polémicas, pues nuestras posturas discrepaban diametralmente. Tengo la certeza de que fue uno de los más altos responsables de la dictadura militar. Si bien nunca ocupó ningún cargo en el gobierno, fue el cerebro detrás de toda la estructuración del poder del régimen, tanto a nivel ejecutivo como legislativo. Siempre operó tras bambalinas, con una gran capacidad ideológica, predominio e influencia sobre el gobierno y el propio Pinochet.

Fue un elemento clave en el proceso de redacción de la Constitución de 1980, lo que incluso le provocó conflictos con Jorge Alessandri, a quien Guzmán admiraba. De hecho, producto de estas diferencias, el expresidente terminó renunciando al Consejo de Estado que presidía desde 1976, y que tenía por objetivo trazar las líneas preliminares para la redacción del nuevo texto constitucional.

Jaime Guzmán fue el ideólogo del hoy derogado artículo 8° de la Constitución de 1980, que proscribía la existencia de movimientos políticos y partidos marxistas. En su primer párrafo, dicho texto señalaba: “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundado en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República”. En la práctica, se trataba de una cláusula anticomunista. Cuando ya en democracia se propuso su modificación, quien defendió con mayor tenacidad su no derogación en el Congreso Pleno fue,

por supuesto, el propio Guzmán.

Si bien hay quienes sostienen que, en alguna oportunidad, Jaime Guzmán intervino a favor de opositores detenidos por la Dina o la CNI, creo que lo hizo con una mirada muy selectiva, tal vez con gente que conocía o era cercana a él. En términos generales, sin embargo, nunca levantó la voz. Nunca defendió de forma frontal los derechos humanos. Nunca lo vi patrocinar un recurso de amparo, ni criticar los fallos que dictaba la Corte Suprema y que avalaban los abusos. Guzmán, incluso, justificaba el exilio. De hecho, una vez recuperada la democracia, jamás le escuché hacer un verdadero mea culpa. Existe un sinnúmero de columnas de opinión de su autoría que acreditan cómo defendió los actos arbitrarios y abusivos de la dictadura, así como su permanencia en el poder. Siempre encontró explicaciones para justificar lo sucedido.

Su legado está aún vigente, sobre todo en la derecha más radicalizada. En 1967, fundó el Movimiento Gremial en la Universidad Católica, consolidándose como líder de una corriente de pensamiento que se distanciaba de la política tradicional y sus representantes. En ese sentido, fue un innovador. Posteriormente, en 1983, al fundar la UDI, procuró conferirle al partido algo que lo diferenciaba de la derecha más conservadora: su compromiso con el mundo popular. Comprendió que podían encontrar apoyo y acogida en sectores no propicios a la izquierda, precisamente aquellos que se mostraban conformes con algunas de las medidas adoptadas por la dictadura y que valoraban el orden y la tranquilidad impuestas.

A la vez, si bien era intransigente en su apoyo a la dictadura, era de un pragmatismo político que, en ocasiones, podía trascender la retórica de sus posturas. Recuerdo un episodio, ocurrido ya retornada la democracia, cuando ambos éramos senadores. Patricio Aylwin recién había sido electo, yo era presidente del partido y estaba convencido de que el próximo presidente del Senado debía ser un democratacristiano, por lo que estaba tratando de reunir los votos necesarios para que se eligiera a uno de nuestros parlamentarios. Mis conversaciones con el senador RN Sergio Onofre Jarpa para nombrar a Gabriel Valdés habían fracasado, ya que algunos lo consideraban demasiado proclive a la Unidad Popular. Finalmente, terminamos negociando con Jaime Guzmán en mi casa. Cuando le planteé la candidatura de Valdés, me preguntó: “¿Qué es lo que me das a cambio?”.

Pese a nuestras grandes diferencias, jamás justifiqué su muerte en aquel atentado terrorista perpetrado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez

(FPMR), a las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica, el 1 de abril de 1991. Incluso asistí a su funeral, en un gesto de solidaridad y presencia democrática. Sus partidarios me abuchearon muchísimo, no obstante, consideré necesario hacernos presente en un acto de respaldo y rechazo ante un hecho que estimábamos absolutamente repudiable.

Ahora bien, la derecha chilena no solo adhirió al gobierno militar, sino que siempre se sintió parte de su proyecto y, por lo tanto, de la dictadura. Políticos, tecnócratas, jueces, periodistas y empresarios, entre otros, justificaron sus actos, ya fuese activamente, por omisión o a través de su silencio, tal como afirmara el propio Sebastián Piñera:

(...) si buscamos responsables de lo ocurrido durante el gobierno militar y, particularmente, de los atropellos a los derechos humanos y la dignidad de las personas, por supuesto que hay muchos. Por de pronto, las máximas autoridades del gobierno militar, que sabían o debían saber lo que estaba ocurriendo. Pero no solamente ellos. Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada. También hubo jueces que se dejaron someter y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas. También periodistas, que titularon sabiendo que lo publicado no correspondía a la verdad⁷⁹.

Hoy, esos mismos únicamente se limitan a reconocer los hechos, pues son irrefutables. Colonia Dignidad grafica muy bien este tema. Dicha entidad era un enclave que la gente de derecha apoyaba y protegía, y que, además, recibía subvenciones. Por mucho tiempo operó al margen de la institucionalidad chilena, no estando supeditado a ningún control. Había una aceptación tácita de todo lo que ocurría en Villa Baviera. Muchos personeros de derecha y del gobierno eran asiduos visitantes del lugar, incluido el propio Pinochet y Manuel Contreras, amigo personal de Paul Schäfer, fundador del asentamiento. Jaime Guzmán hasta hizo conferencias allí. Desconozco si los parlamentarios de derecha sabían realmente lo que sucedía en ese lugar, pero la mayoría siempre apoyó a la secta, oponiéndose, por ejemplo, a la cancelación de su personalidad jurídica en 1991, al cierre de la escuela y del hospital, e incluso protestaron cuando, en 1996, se ordenó allanar el predio para intentar capturar a Schäfer, acusado de diversos

delitos, entre ellos homicidio y pedofilia. Cuando el Informe Rettig —nombre del informe entregado por una comisión que investigó la violación de los DD.HH. durante la dictadura— expuso lo sustancial que había sido la presencia de agentes de la Dina en Colonia Dignidad, varios dijeron que era una exageración. Solo con los años asumieron la verdad, justificándola con un “no me di cuenta”.

No olvidemos que, en octubre de 1975, en su calidad de embajador de Chile ante las Naciones Unidas, Sergio Diez negó la existencia de detenidos desaparecidos en nuestro país. Esto, incluso, pese a los centenares de recursos de amparo presentados y a los antecedentes que ya circulaban en la prensa internacional. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Sergio Fernández, ex ministro del Interior, cuando en el marco de diversas querellas presentadas en su contra por violación a los derechos humanos, entre ellas la “Operación Cóndor”, declaró ante la justicia no estar al tanto de los hechos: “No sé”, “no recuerdo”, “nunca fui informado”, se limitaba a decir. Sin embargo, existen miles de decretos supremos firmados de su puño y letra, mediante los cuales se autorizó la detención, el exilio, la relegación y el envío de personas a centros de tortura. Dichos documentos desmienten categóricamente sus negativas.

Con todo esto no estoy diciendo que la derecha formara parte de la Dina, o que participaran en sesiones de tortura, pero de que sabían, lo sabían. Conocían los recursos de amparo, las detenciones, el destierro de tantos compatriotas, así como el despido de miles de personas que perdían sus trabajos por el solo hecho de pertenecer a un determinado sector político. Hay una responsabilidad compartida, y ellos tienen que asumir esa parte de la historia.

7. El concepto de democracia autoritaria

En medio de todos estos acontecimientos, el nuevo gobierno fue implementando en el país su modelo de democracia autoritaria, también denominada “democracia protegida”. En 1977, se entregó a la Comisión Ortúzar una serie de normas a las que debía ajustarse la nueva Constitución, y que definían los lineamientos de esta nueva forma de entender la democracia.

La “democracia protegida” describía el contexto chileno como una “guerra no convencional, que el enemigo libra en una estrategia sin tiempo”, en la que la influencia soviética en expansión aparecía como el principal adversario. Se definía como antisocialista, antitotalitaria y defensora de una libertad entendida, básicamente, como libertad del mercado. A la vez, estaba amarrada a una concepción “impregnada de sentido nacional y cristiano”, sujeta a la presencia permanente de las Fuerzas Armadas, de modo que estas operaban como un nuevo poder del Estado.

Con esta nueva realidad como telón de fondo, la violación a los derechos humanos se volvió no solo sistemática, sino que además se institucionalizó como una verdadera práctica de Estado. Numerosos dirigentes de izquierda y de la Democracia Cristiana fueron relegados a localidades aisladas e inhóspitas, muchas en el altiplano, peladeros a miles de metros de altura, donde casi no vivía gente, y en condiciones extremadamente difíciles. Estos extrañamientos eran tanto o más duros que el exilio. Tal suerte corrieron Andrés Aylwin, Belisario Velasco, Guillermo Yungue y el dirigente sindical metalúrgico Juan Manuel Sepúlveda, todos enviados a diferentes localidades de Putre. Tomás Reyes fue relegado a Codpa, en el desierto de Atacama. A Manuel Bustos lo mandaron a Parral. El exgobernador Cesáreo Castillo Michea fue relegado a un poblado al interior de Quillagua llamado Ascotán, casi en el límite con Bolivia. Allí fue mantenido en un corral de animales, sin techo ni donde guarecerse. Yo mismo denuncié este caso, a través de una carta, al ministro Sergio Fernández.

La dictadura era despiadada, al punto de que Pinochet se atrevía a burlarse de los detenidos y relegados, usándolos como ejemplo de lo que podía ocurrirles a los rebeldes. El 23 de noviembre de 1977, mientras participaba en un acto en el ex

Edificio Diego Portales, dio a conocer a un grupo de detenidos que, en ese mismo momento, era trasladado al norte. Calificó el castigo como aleccionador.

Al amparo de este nuevo marco normativo, continuó perpetrándose la desaparición de personas y el uso de la tortura como mecanismo interrogatorio contra los supuestos enemigos del régimen. Las directivas del Partido Comunista y del Partido Socialista fueron prácticamente eliminadas.

Yo también sufrí amedrentamientos, siendo objeto de recurrentes de amenazas. Una de las situaciones más dramáticas que viví sucedió en 1976. Un día, llegó a mi oficina una dirigente democratacristiana de la provincia de Coquimbo, a quien conocía bastante, pues había participado en la campaña senatorial de 1973. Venía con su marido y querían conversar conmigo. Estaban preocupados, pues su hija, que debe haber tenido unos veinte años, había entrado a trabajar como secretaria a la Dina. De inmediato les advertí que esto no era bueno y que, además, era muy peligroso que estuvieran en mi oficina. “A su hija le puede pasar cualquier cosa”, les dije y se retiraron.

Pasaron un par de meses. Una tarde, la dirigente regresó a verme, esta vez junto su hija. Apenas las vi entrar, me preocupé y encendí la radio. Sabía que nuestras dependencias estaban intervenidas.

—Ustedes no pueden estar aquí. A nosotros nos tienen vigilados —traté de explicarles.

—No se preocupe, don Andrés. Si nosotros no tenemos nada que ver. No hay problema —respondió la mujer.

—Solo queríamos pasar a saludarlo —agregó su hija—. Venimos llegando de nuestras vacaciones. Donde trabajo nos facilitaron un hotel en Cartagena y allá pasamos dos semanas con mis padres.

Insistí en que se estaban exponiendo y que lo que estaban haciendo era un error. Al poco rato, se fueron.

Precisamente durante esos días, había tenido lugar una serie de amedrentamientos en contra de dirigentes del partido. A Patricio Aylwin le habían puesto una bomba en el sur, en la casa donde se encontraba veraneando durante sus vacaciones. Jaime Castillo y yo habíamos recibido amenazas anónimas. Incluso habían hecho detonar una bomba de ruido en mi oficina.

Poco después de esa segunda visita, un miércoles por la noche, recibí una llamada. Era nuestra dirigente. Estaba muy angustiada, pues su hija llevaba dos días desaparecida. Se había marchado una mañana a la oficina y no había regresado desde entonces. “Esta gente es capaz de cualquier brutalidad, y deben haberse enterado de que ustedes estuvieron en mi oficina. Es posible que la tengan detenida o amenazada. Pero tenemos que esperar 48 horas antes de poder presentar un recurso de amparo. Es la única forma”, le expliqué. Entonces recordé que al día siguiente tenía una reunión con el presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, la que habíamos solicitado con Patricio Aylwin y Jaime Castillo para denunciar las amenazas de las que habíamos sido víctimas. “Se lo plantearé y veremos qué me dice”, le prometí a la mujer.

A la mañana siguiente, Eyzaguirre nos recibió en su oficina y le contamos sobre los amedrentamientos. Con total relajación, tomó el teléfono y llamó directamente a Manuel Contreras. Me chocó muchísimo que el presidente de la Corte Suprema tuviera acceso directo a la persona que dirigía el aparato represor más despiadado del gobierno. A la salida, antes de abandonar el lugar, me detuve en la puerta. “Mire, José María. Tengo un tema que no he querido planteárselo en la reunión, pues no está relacionado con el motivo de nuestra visita”, le expliqué. Eyzaguirre me pidió que continuara. “Tengo información acerca del caso de una joven que lleva dos días desaparecida. Aún no puedo hacer mucho, pero quería comentárselo al menos para dejar constancia, por si pasa cualquier cosa”. Él asintió y nos despedimos.

Dos días más tarde, al revisar la correspondencia en mi casa, me encontré, extrañado, con un sobre manuscrito. Lo abrí, y al empezar a leer, quedé anonadado. Comenzaba diciendo lo siguiente: “El objetivo de estas líneas es manifestarte lo que no pude decirte en nuestra última cita, ya que tu actitud de tan poco hombre al rechazar el derecho de nacer de nuestro hijo me indignó de tal manera, al comprobar que tus promesas de amor eran nada más que una vulgar farsa...”.

La carta aparecía firmada por la joven secuestrada y sus afirmaciones eran absolutamente falsas. No tardé demasiado en comprender que se trataba de una amenaza encubierta, un directo amedrentamiento de parte de la Dina, y un claro intento por chantajearme. Me ponían en una situación muy complicada. Por un lado, no podía hacer una denuncia judicial, pues ante el testimonio de una mujer joven nadie me iba a creer. Todos iban a pensar que había abusado de esta joven...

Aún impactado, me fui a la pieza donde estaba Inés y le leí la carta. Me preguntó si algo de aquello era verdad. Le respondí que no. “Esto es muy delicado. Estos tipos pueden matar a esta joven y hacerme parecer como el responsable. No sé qué hacer”, añadí. Reflexioné un buen rato. Finalmente, decidí llamar a Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Narciso Irureta y Genaro Arriagada, que era mi asesor en temas políticos. “Necesito hablar con ustedes”, les dije por teléfono.

Nos reunimos, les mostré la carta y les conté todo lo sucedido. Juntos llegamos a la conclusión de que era una posible estrategia de la Dina para amedrentarme. Lo primero que se decidió fue redactar una minuta con el detalle de los sucesos. Luego se harían varias copias de la misma, dejando una en poder del notario Arturo Carvajal, otras se les entregarían a Eduardo Frei y a Patricio Aylwin y también al cardenal Silva Henríquez. A mí se me ocurrió agregar un destinatario más: Manuel Contreras. Conocíamos a alguien que podía hacer de emisario: Orlando Jorquera, un coronel en retiro del Ejército que sabíamos tenía relación directa con Contreras. Este hombre había trabajado en la Democracia Cristiana hasta el golpe, a cargo de la confección de los padrones de militantes, tarea que se le había encomendado al senador Osvaldo Olguín como vicepresidente del partido. No teníamos cómo sospechar; sin querer habíamos dejado “al gato cuidando la carnicería”.

Hice todo tal cual acordamos. Creo que este plan, finalmente, me salvó la vida. Estoy seguro de que Manuel Contreras, al enterarse de la minuta y sus demás depositarios, se encontró cazado e imposibilitado de atentar en mi contra, tal como estaba acostumbrado.

El calvario para la pobre familia, sin embargo, aún estaba lejos de terminar. A los cinco días de recibida aquella carta, me llamó nuevamente la madre, muy angustiada. La Dina había llegado hasta su casa, incluso habían traído a su hija, quien lloraba y rogaba que la ayudaran. Tomaron algo de ropa y luego se la llevaron otra vez. A esas alturas, ya habíamos presentado la denuncia. Traté de tranquilizarla, pero no era mucho más lo que podíamos hacer.

No volví a saber de ellos durante muchos años. El 2007, recibí otra carta de la joven, en la que me relató la terrible experiencia vivida en manos de la Dina; cómo la violaron, torturaron y abusaron de ella persistentemente, atentando de manera brutal contra su dignidad y salud física y psicológica. También me pedía perdón por haberme involucrado e inculcado tan injustamente, explicándome que todo ello lo había hecho bajo una presión imposible de resistir. Esa carta me

dejó muy afectado. No solo eso, sino que también me llevó a replantearme una pregunta dolorosa: ¿Había hecho realmente todo lo que estaba en mis manos por ayudarla? Uno siempre puede hacer más. Pero también el contexto era muy complejo, e intentábamos atender y ayudar a mucha gente en situaciones similares, dentro y fuera del país.

8. La condena internacional al régimen

La década del 70 estuvo marcada por la emergencia y consolidación de dictaduras y golpes de Estado en gran parte de América Latina. En 1964, se instauró en Brasil una dictadura que se extendió hasta 1985. En Paraguay, lo propio venía arrastrándose desde 1954 y continuaría hasta 1989. En Nicaragua, el dictador Anastasio Somoza y su familia mantuvieron el poder hasta 1979. En Perú, un golpe de Estado, en 1968, mantendría a ese país bajo un régimen dictatorial hasta 1975. En Argentina, la dictadura fue encabezada por Jorge Rafael Videla entre 1976 y 1981, y esta se prolongó hasta 1983. En Bolivia, se inició un régimen similar en 1971, prolongándose por ocho años. Desde el punto de vista de la democracia, aquel fue un periodo muy negro para nuestro continente.

En el intertanto, en Estados Unidos y Europa se daban, por cierto, procesos muy diferentes. En 1974, caía Richard Nixon, acusado de participar en la conspiración para obstruir la justicia en el caso Watergate. Tres años después, fue electo Jimmy Carter, lo que nos trajo un poco de esperanza y nuevos aires. Tal vez nos encontraríamos con un Estados Unidos un poco más abierto y solidario con América Latina.

En Europa, el primer ministro francés Jacques Chirac, elegido en 1974, representaba el proyecto democrático de un continente que prosperaba. Habían dejado atrás la posguerra y el país crecía con efervescencia, logrando buenos índices de desarrollo. Solo España y Portugal, inmersos en sus propias dictaduras, aparecían como países relegados. En el caso español, recién en 1977, y con la elección de Adolfo Suárez, el cuadro empezaría a cambiar.

Apenas ocurrido el golpe en Chile, la condena internacional fue consistente y persistente, trascendiendo en el tiempo, hasta la recuperación de la democracia en el país. El mundo reaccionó rápidamente y la solidaridad internacional hacia los perseguidos del régimen se dio con fuerza. Los gestos y expresiones de respaldo fueron innumerables, materializándose en acogida, apoyo y actos masivos que quedaron cristalizados en la memoria de quienes fueron sus testigos. Basta mencionar, a modo de ejemplo, que la Bienal de Venecia de 1974,

el evento más importante de arte contemporáneo del mundo, fue dedicado a nuestro país bajo el lema “Libertad para Chile”, convirtiéndose así en la mayor protesta cultural contra la dictadura de Pinochet. Todo ello a través de exhibiciones, performances, conciertos, cine y hasta numerosos muros de la ciudad fueron pintados por brigadas dirigidas por el pintor Roberto Matta.

Italia, Alemania, Suecia, Bélgica, Francia, entre muchos otros, fueron puntos de acogida y contención en esos oscuros años. Uno de los países de mayor refugio para el mundo democratacristiano fue Venezuela. Dentro del cuadro de las dictaduras esparcidas por el continente latinoamericano, esta aparecía como una tierra libre y democrática, donde muchos de los opositores al régimen de Pinochet encontraron asilo. Fue ahí, de hecho, donde se radicaron Renán Fuentealba, Claudio Huepe y Jaime Castillo tras ser exiliados.

En Venezuela existía un instituto de formación (Ifedec) conducido por Arístides Calvani, ex ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Rafael Caldera. Calvani fue líder e ideólogo de la Democracia Cristiana en su país. El instituto impartía cursos de capacitación doctrinaria democratacristiana y recibió a muchos de los nuestros.

La Democracia Cristiana venezolana influyó determinadamente en la penetración de nuestras ideas en los países del Caribe y Centroamérica. Tuvieron gran presencia en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Todo esto se sabía de oídas en Chile, pues la prensa local, amparada o fuertemente controlada por el régimen, hacía lo posible por ocultar estos hechos. A nivel interno, los chilenos nos veíamos sumidos en un hermetismo informático tal, que nos hacía difícil enterarnos de cualquier reacción o condena que viniera desde el extranjero. Solo a fines de los setenta esto empezaría a cambiar, con la publicación de las primeras revistas disidentes, tales como Hoy, Apsi y Cauce, que recibían respaldo internacional del mundo socialista y del democratacristiano. El apoyo llegó desde Italia, Holanda y Bélgica.

9. Radiografía del dictador

En julio de 1978, Augusto Pinochet anunció la destitución del general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, artífice del golpe de Estado de 1973 y miembro fundador de la Junta Militar. Con ello, dejó fuera a uno de los integrantes nucleares, considerado como uno de los más duros en la lucha contra “el cáncer marxista” —frase utilizada recurrentemente por el propio Leigh tras el golpe—. El militar fue una de las piezas claves de la conjura y quien dio la orden, el día 11 de septiembre de 1973, de bombardear La Moneda. Asimismo, propició el depuramiento de influencias de izquierda al interior de la Fuerza Aérea, resultando víctima de este proceso, entre otros, el general Alberto Bachelet, el que, tras ser detenido y torturado, murió de un infarto en 1974, mientras se encontraba encarcelado.

La salida de Leigh fue gatillada por las declaraciones que este había realizado en una entrevista con el diario italiano *Corriere della Sera*. Entre sus dichos, afirmó que el gobierno no había definido un calendario político, pero que, según sus cálculos, el mando del país retornaría a los civiles en un plazo de cinco años. “Los chilenos que tenemos una dilatada tradición de libertades democráticas no podemos permanecer hasta el infinito en la negación de la libertad”, aseguró.

Tras su destitución, Pinochet declaró: “El general Leigh Guzmán venía demostrando desde hace tiempo, con diversos hechos, un progresivo alejamiento de los postulados del gobierno militar”⁸⁰. Pero su remoción no fue una sorpresa. Teníamos cierto conocimiento de que, al interior de la Junta, se habían producido diferencias entre Leigh y Pinochet, en parte debido a que el segundo había comenzado a asumir un rol de liderazgo cada vez más autoritario y personalista. Esto se había acentuado tras la consulta nacional del 4 de enero de 1978, en cuya cédula se leía el planteamiento: “Frente a la agresión internacional desatada en contra del Gobierno de nuestra Patria, respaldo al Presidente Pinochet en su defensa de la dignidad de Chile, y reafirmo la legitimidad del Gobierno de la República para encabezar soberanamente el proceso de institucionalización del país”. La ciudadanía debía responder “SÍ” o “NO”; el “SÍ” bajo una bandera chilena y el “NO” bajo una bandera negra. En otras palabras, la consulta se

traducía en respaldar a Pinochet como Presidente de la República y legitimar o no a su gobierno. Por supuesto, el “Sí” arrasó con el 75% de los sufragios, en una votación fraudulenta en la que ni siquiera existieron registros electorales y plagada de militares armados en todos los recintos del país.

Desde la Democracia Cristiana, interpretamos la salida de Leigh como un signo de posible quiebre en la cohesión que sustentaba el mandato de las Fuerzas Armadas. Se creyó que hasta podía producirse una confrontación entre la Fuerza Aérea y el resto de las ramas. Tal vez esto podía derivar en algún tipo de apertura hacia el retorno de la democracia. Pero, muy pronto, pudimos constatar que todo seguía bajo control, solo que ahora bajo un solo puño.

Leigh fue destituido en pleno conflicto con Argentina, cuando se disputaba, incluso con mediación internacional, la boca oriental del canal Beagle, incluyendo la soberanía de ciertas islas y parte del Cabo de Hornos. En ese contexto, la decisión de Pinochet fue una movida riesgosa e imprudente, dejando entrever hasta qué punto estaba dispuesto a llegar con tal de imponer su autoridad. La salida de Leigh generó una grave inestabilidad al interior de la Fuerza Aérea, en un momento en que la institución era clave para la defensa del país. No me cabe duda de que los argentinos, al constatar dicha crisis y fisuras, sacaron rápidos cálculos respecto a las ventajas que tendrían frente a un eventual conflicto bélico con Chile.

A la destitución del general Leigh siguió la solicitud de renuncia de gran parte del mando mayor de la Fuerza Aérea. El único que quedó disponible fue el general Fernando Matthei, a quien Pinochet nombró en su reemplazo. En 1979, Matthei le revelaría a Ángela Jeria (viuda del general Alberto Bachelet y madre de la expresidenta Michelle Bachelet) algunos detalles al respecto. “Matthei me dijo que no había tenido otra opción más que asumir como comandante en jefe de la FACH porque Pinochet lo había puesto contra la espada y la pared: si no lo hacía, dividiría a la FACH en dos partes, una la asignaría a la Marina y la otra al Ejército; o nombraría a un general de Ejército como comandante en jefe”⁸¹, relataría tiempo después. Por su parte, Matthei siempre dijo que había aceptado dicha nominación como una forma de evitar una crisis aún peor.

El episodio puso de manifiesto, una vez más, la astucia y sagacidad de Pinochet para imponerse por la fuerza, deshaciéndose de quien pudiera interponerse en su camino, adueñándose del poder absoluto y controlando, de paso, a las Fuerzas Armadas en su totalidad. Así, en lugar de salir debilitado con la salida de Leigh,

apareció aún más fortalecido, sacando de escena además a alguien que, desde hacía un tiempo, lo venía incomodando por sus críticas y cuestionamientos frente a la línea de mando que estaba tomando su mandato.

El hecho no solo fue simbólico, sino que además corroboró una vez más, tal como señaláramos anteriormente, ciertas facetas del dictador. Estamos hablando de un oportunista, de un hombre que careció de compromisos éticos y que supo utilizar en el momento preciso a todo aquel que le servía, para luego desecharlo o dejarlo caer cuando ya no era necesario.

Su espíritu maquinador y desfachatado quedó de manifiesto en varias de las célebres frases que quedaron registradas por la prensa oficialista de la época. “Este es un gobierno honorable. Por eso es que el pueblo chileno nos apoya. Y cuando yo tenga que irme llegaré hasta la notaría y retiraré mi sobre con mis haberes, nada más. Incluso, a lo mejor me voy con menos de lo que tenía cuando asumí este cargo”, lo citó el diario Las Últimas Noticias el 13 de septiembre de 1975. “Este es un gobierno revolucionario y democrático”, dijo a La Tercera el 21 de junio de 1978. “Esto no ha sido nunca dictadura. Nunca. Le digo que esto es una dictablanda. Y así ha sido. El país ha vivido bajo el imperio del derecho: hay libertad, hay participación”, declaró en la revista Cosas el 10 de septiembre de 1985. “¿Es esta una dictadura?... Pero si nosotros mismos marcamos la cancha, dijimos que íbamos a hacer una Constitución, comenzamos a estudiarla en octubre del 73, nos fijamos las políticas. ¿Ustedes creen que un gobierno dictatorial va a desprenderse por amor al arte de su poder?”, publicó la revista Qué Pasa el 24 de abril de 1986⁸².

Finalmente, a Pinochet le ocurrió lo mismo que a muchos dictadores, cuando van cayendo presos en las redes de sus propios actos. Esto es un clásico. Para justificar sus acciones, se ven en la necesidad de ser cada vez más duros, infames y brutales en su accionar. Se trata de personajes normalmente burdos, mediocres, acomplejados y de poca envergadura. Hitler, por ejemplo, fue minimizado por muchos, incluso lo tildaban de payaso. Pero una vez que acceden al poder absoluto son capaces de lo que sea con tal de mantenerlo.

A Augusto Pinochet le preocupaba mucho que lo miraran en menos. Era un hombre lleno de complejos y pequeño en ese sentido. Quería que la gente lo respetara y le temiera. Así lo corroboré yo mismo, cuando ya en democracia, en 1990, Gabriel Valdés, en su calidad de presidente del Senado, nos pidió a un grupo de parlamentarios que lo acompañáramos a un almuerzo que iba a ofrecer

Pinochet como comandante en jefe del Ejército. Desde el partido acordamos sumarnos, ya que consideramos importante que Valdés apareciera públicamente respaldado. Cuando llegué al Club Militar en Lo Curro, nos esperaban en la entrada varios generales, todo con mucho bombo y platillo. Y ahí, en la puerta, me encontré con Pinochet. No nos habíamos visto desde antes de mi exilio.

—¿Cómo está? —me saludó.

—Bien, bien... —titubeé—. Pero usted entenderá que no me siento muy cómodo aquí.

—Así veo —respondió, conservando la diplomacia—. Pero usted no se acuerda de lo que pasó en Arica...

Dudé un momento, tratando de dilucidar a qué se refería. Entonces me acordé. Muchos años antes, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, habíamos acompañado al Presidente, como parte de su comitiva, el ministro de Minería, Alejandro Hales, y yo en mi calidad de ministro de Hacienda. Durante la estadía, se había programado una comida en el Hotel Valle Azapa, en Arica, a la que Augusto Pinochet asistió como intendente subrogante y general de Ejército a cargo de la Zona Norte.

—Sí, pues. Y ustedes no llegaron —me recordó muy serio.

Con el ministro Hales no sabíamos que estábamos invitados a dicha cena. Por lo mismo, nos habíamos comprometido a asistir a otro evento. Cuando regresamos al hotel, el Presidente Frei ya estaba con los invitados en el comedor, por lo que nos sentamos en una mesa separada, asumiendo que no éramos parte del asunto. Al parecer, Pinochet había pensado lo contrario. Nuestra falta de participación probablemente le pareció un desprecio. Después de tantos años, él no había olvidado el hecho y era lo que me estaba representando con su recordatorio. Por supuesto, el diálogo terminó ahí, tras pasar a sentarnos a la mesa del almuerzo programado.

Un elemento clave que le permitió a Pinochet conservar el poder durante tanto tiempo fue el haber sabido utilizar a los demás con astucia, en especial a su entorno y a aquellos que estaban involucrados en su gobierno. Hizo que metieran las manos en la masa, de manera de involucrarlos y comprometerlos en la responsabilidad de cada uno de los actos que él había cometido. Recuerdo que, en una ocasión, me contactó indirectamente un general de la Fuerza Aérea, José

Berdichevsky, quien me solicitó que nos reuniéramos a conversar en la casa de un tercero en Lo Curro. Informé del hecho a algunas personas y partí a su encuentro. Al llegar, me hicieron pasar a un subterráneo, donde me estaba esperando el mencionado general. Se veía preocupado. Me contó que el día anterior había sido convocado por Pinochet, junto a todos los generales de la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército y Carabineros, a una reunión en el edificio Diego Portales. “Entró Pinochet, seguido de Manuel Contreras, y luego hicieron pasar a unos funcionarios que traían unos expedientes que depositaron sobre una mesa. A continuación, tomó la palabra Pinochet. ‘Aquí necesitamos ser todos solidarios y cerrar filas, porque cada uno de ustedes tiene un expediente’, dijo apuntando las carpetas. Luego, miró a Contreras y agregó: ‘Este caballero aquí presente está preocupado de que esto se mantenga así’. Me sentí muy vulnerado. Quería contárselo a usted, por si nos pasa algo”, me explicó. Según trascendidos, esta reunión de Pinochet con todos los generales tuvo lugar con motivo de la condena a que Chile había sido objeto por parte de Naciones Unidas.

Esta forma de actuar del dictador se prolongó, incluso, durante la transición a la democracia. Pinochet procuró mantener a las Fuerzas Armadas comprometidas y bajo su control, muchas veces incluso involucrándolos en negocios corruptos. El arte de los gobiernos que usan la coerción consiste en saber combinar el poder civil y el militar, y sujetarlos en una sola mano. Así se cierra el candado.

Estoy convencido de que Augusto Pinochet sabía todo lo que ocurría en Chile. Vuelvo a recordar su frase: “No se mueve ninguna hoja en este país si yo no la estoy moviendo”. Sabía del atentado de Carlos Prats. Sabía de antemano sobre el caso Degollados y quiénes serían las víctimas. Sabía que Álvaro Corbalán asesinó a Tucapel Jiménez. Y estoy seguro de que, a través de sus aparatos de inteligencia, mandó a asesinar a Eduardo Frei. Era imposible que no supiera nada de esto; acostumbraba a desayunar con Manuel Contreras, quien le llevaba informes periódicos de sus actividades. Tal vez nunca estuvo presente en las sesiones de tortura o en los lugares de detención, pero de que estaba al tanto, lo estaba, y no tuvo ningún pudor en mentir. Negó saber sobre las violaciones a los derechos humanos. Mintió sobre su relación con Manuel Contreras. Incluso engañó al Papa Juan Pablo II durante su visita a Chile en 1987, cuando lo embaucó para que saliera al balcón junto con él a saludar a la gente. Les mintió a los norteamericanos cuando negó haber estado involucrado en el atentado que le quitó la vida, en 1976, a Orlando Letelier... Al final, Augusto Pinochet le mintió a todo el mundo.

10. La desobediencia civil

Para fines de los setenta, la Democracia Cristiana era casi lo único que quedaba en pie de los partidos políticos; la razia de la dictadura contra los dirigentes de izquierda había mermado buena parte de sus liderazgos. En febrero de 1977, el diario francés Le Monde titulaba: “Chile, los dirigentes de la Democracia Cristiana se plantean alternativas para retomar el poder”. Lo que se estaba gestando, en ese momento, era una forma de resistencia que nos representaría en nuestros principios más esenciales: la desobediencia civil.

Varios años después, en septiembre de 1984, lo manifesté con claridad en una entrevista con la periodista Patricia Verdugo:

El camino es la desobediencia civil. Las Fuerzas Armadas deben entender que tenemos derecho a desobedecer como el mejor camino para recuperar otro derecho: la democracia. Creo que ya llegó la hora de que formemos un gran comando nacional por la recuperación democrática, integrado por personas representativas de todos los sectores de la civilidad. Es en ese instante donde lograremos una unidad de acción, manteniendo cada sector su identidad y su adhesión a distintos referentes partidarios. Todos debemos trabajar unidos para que Chile recupere su democracia y para ello nada mejor que elaborar un programa de desobediencia, porque no hay salida sin ejercer expresión⁸³.

Esta fue la postura que adoptó la Democracia Cristiana durante buena parte de la dictadura en Chile. Fuimos obstinados en nuestra defensa de los derechos humanos. Levantamos la voz. Fuimos a tribunales. Nos incorporamos a la Vicaría de la Solidaridad. Aprovechamos cada oportunidad que tuvimos para denunciar. Seguramente cometimos muchos errores, pero al menos hay que reconocer que fuimos leales a nuestros principios y valores. Uno de nuestros fundamentos como partido es, precisamente, el irrestricto respeto a los derechos humanos, la libertad y la justicia, especialmente desde la no violencia. Ese es el

rol que siempre hemos jugado, y que debemos procurar seguir jugando, no solo a nivel nacional, sino que en la comunidad internacional también. En materia de derechos humanos, las fronteras no existen.

Fuimos nosotros quienes propiciamos la vía no violenta hacia la recuperación de la democracia, al contrario de lo que planteaban la extrema izquierda y otros sectores que seguían apostando por tomar las armas para derrocar a la dictadura. A nuestro juicio, esta era una postura contraproducente, que incluso fortalecía aún más a la dictadura, pues los militares tenían la fuerza y las armas y podían usarlas de forma arbitraria e ilimitada si lo consideraban necesario.

Mahatma Gandhi, a quien siempre he admirado, era un rebelde. No era un pacifista que meditaba en medio del desierto. No, era un tremendo líder que, con su carisma y convicción, logró movilizar a un pueblo entero tras lo que consideraba una causa justa. Creo que cuando uno quiere hacer cambios tiene que tener convicción y valor, pero ese espíritu de rebeldía debe estar inserto, también, en un marco de realismo.

Nuestra desobediencia civil se valía de nuestros actos de denuncia y de nuestra forma de protestar. Con el tiempo, nuestro trabajo fue ganándole terreno a la tesis de la lucha armada. Sería esta forma de pensar la que nos llevaría a triunfar en el plebiscito en 1988 y a derrotar a Pinochet en su propia cancha, acorde a sus propias reglas. Muchos nos creyeron ingenuos. Y es verdad, no siempre fue fácil luchar así. Cada vez que convocábamos a protestas pacíficas y la gente salía a participar, se nos dejaba caer la dictadura con toda su violencia y aplastaba el movimiento. Los chilenos sentían miedo, y con razón, pues la represión no tenía límites. Pero, finalmente, triunfamos.

Esta idea de la desobediencia civil era, de hecho, el motivo por el que nos habíamos sentido atraídos a participar en política, desde nuestros orígenes. Siempre fuimos desobedientes. Si nos hubiéramos conformado con cómo eran las cosas, nos habríamos dedicado a nuestras ocupaciones personales y habríamos tenido una vida tranquila, pero nos rebelamos porque estábamos convencidos de la necesidad del cambio social. En mi caso, fue gracias a mis padres y a la educación que nos dieron, así como a mi formación personal, al apoyo de Inés y de mi familia, que mi compromiso político pudo adoptar esa mirada. Y fue ese compromiso, tan profundo y esencial, lo que finalmente nos llevó a persistir. De lo contrario, el resultado de la historia bien podría haber sido otro.

VIII

EL GRAN FRAUDE: EL PLEBISCITO DE 1980

1. Una campaña imposible

El domingo 10 de agosto de 1980, alrededor de las 9 de la noche, las transmisiones televisivas fueron interrumpidas, repentinamente, por una cadena nacional. De un momento a otro, los chilenos vimos aparecer en pantalla la adusta imagen de Augusto Pinochet, vestido con su tradicional uniforme y con capa militar, al más puro estilo del führer Adolfo Hitler, acompañado por los miembros de la Junta de Gobierno y de su gabinete en pleno. La parafernalia era increíble.

“Ha llegado el instante de decidir nuestro futuro”, afirmó Pinochet. Lo que siguió fue el anuncio de un plebiscito nacional, a realizarse el 11 de septiembre —un mes más tarde—, convocando a la ciudadanía a las urnas para votar una nueva Constitución compuesta por un cuerpo de artículos permanentes y otros de disposición transitoria con vigencia hasta 1989, diseñada exclusivamente por sus partidarios. El llamado se traducía en un único dilema: Pinochet, o el “oscuro” pasado. “Ha llegado el instante de decidir nuestro futuro, encontrándonos ante dos alternativas: volver paulatinamente, pero inexorablemente a la noche de los mil días negros de Chile, o tomar la ruta que patrióticamente estamos señalando”⁸⁴, exclamó el dictador frente a las cámaras.

Votar SÍ o NO, en síntesis, significaba decidir acerca de tres temas concretos: aprobar un nuevo texto constitucional, ratificar la permanencia de Pinochet en el poder por ocho años más y, por último, finalizado ese plazo, convocar a un nuevo plebiscito para resolver su continuidad por otros ocho años; es decir, hasta 1997. El discurso vino acompañado de una clara advertencia: “Declaro enfáticamente a la ciudadanía que el hipotético rechazo del proyecto aprobado por la Junta de Gobierno significaría el retorno a la situación existente en 1973”.

El anuncio nos pilló de improviso, algo que a menudo hacía Pinochet. Para el gobierno militar, el momento de hacer esta convocatoria era el más indicado, pues la economía nacional atravesaba por un “veranito de San Juan”. En el horizonte aún no se veía venir la dura crisis económica que estallaría dos años más tarde en el país, consecuencia de un proceso de recesión mundial iniciado a partir de 1980. En Chile, algunos aún disfrutaban de cierta holgura y bienestar,

especialmente en el entorno del gobierno, donde muchos se habían enriquecido con facilidad. La expansión económica era un hecho y se inauguraban modernas construcciones, tales como el edificio Santiago Centro y el mall Parque Arauco, a la vez que comenzaba a estrenarse la importación de los primeros automóviles japoneses a bajo costo, accesibles a la clase media.

La nueva Constitución, de corte fuertemente presidencialista, había sido el resultado de varios años de trabajo del Consejo de Estado y de la Comisión Ortúzar. Su normativa fundamental, evidentemente, había sido elaborada sin la más mínima participación del pueblo. Según lo que sabíamos, se trataba de un texto que tenía por objetivo resguardar el régimen y consolidar el poder de Augusto Pinochet por un largo tiempo, ni más ni menos que 17 años como mínimo. Jaime Guzmán, ideólogo y motor de la Carta Fundamental, justificaría dicha extensión, asegurando: “Para mí resulta perfectamente lógico, si se trata de un gobierno cuyo autoritarismo justo y eficiente es necesario e idóneo para crear las condiciones para esa democracia contemporánea estable”⁸⁵.

Si bien el texto declaraba el resguardo de los derechos humanos, su artículo 24° transitorio prácticamente anulaba esta protección al entregar al dictador el poder absoluto para tomar las medidas que considerase necesarias. Así, el Presidente de la República recibía la facultad para actuar frente a “actos de violencia destinados a alterar el orden público” o “peligro de perturbación de la paz interior” de las siguientes formas:

- a) Arrestar a personas hasta por el plazo de cinco días en sus propias casas o en lugares que no sean cárceles. Si se produjeran actos terroristas de graves consecuencias, dicho plazo podrá extenderse hasta por quince días más; b) Restringir el derecho de reunión y libertad de información, esta última solo en cuanto a la fundación, edición y circulación de nuevas publicaciones; c) Prohibir el ingreso al territorio nacional o expulsar de él a los que propaguen las doctrinas a que aluden el artículo 8° de la Constitución, a los que estén sindicados o tengan reputación de ser activistas de tales doctrinas y a los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para la paz interior, y d) Disponer la permanencia obligada de determinadas personas en una localidad urbana del territorio nacional hasta por un plazo no superior a los tres meses.

Esto, en el fondo, permitía justificar todo tipo de arbitrariedades, tales como detenciones, relegación, exilio, mordaza a los medios de comunicación disidentes y supresión expresa ante el reclamo del derecho de amparo ante los Tribunales.

Además, aunque consignaba la existencia de un Parlamento, en realidad se trataba de una figura totalmente amañada, al igual que lo establecido para sus procesos electorarios, bajo un sistema binominal. Gran parte de los representantes del Senado serían designados por el propio gobierno, situación que se replicaría en el nombramiento de los eventuales alcaldes.

Toda esta farsa se pretendía realizar en poco más de un mes. Se trataba, nada más y nada menos, que de un plebiscito bajo estado de emergencia y con severas restricciones a la libertad de expresión, información y reunión, con censura previa, sin acceso a los medios de comunicación y sin padrón electoral, con miles de chilenos desaparecidos y cientos de miles en el exilio. En cada provincia, la campaña oficialista sería dirigida por el general jefe de plaza correspondiente, y en cada comuna, por los alcaldes designados por el propio Pinochet. ¡Parecía una broma semejante descaro!

El gobierno desplegó todos los recursos que estaban bajo su control, prometiendo lo indecible y manejando a su antojo los medios de comunicación durante la campaña. Literalmente, “tiró la casa por la ventana”, con el objetivo de alcanzar un triunfo arrollador. Para nosotros, como oposición, esto fue como pelear contra molinos de viento, con las manos atadas y amordazados. Fue una lucha desigual, ilegal y llena de trabas y entrampamientos.

De inmediato, tras el anuncio del plebiscito, como presidente del partido, decidí convocar esa misma noche a la comisión política del PDC. Estaban presentes Genaro Arriagada, Jaime Castillo, Juan Hamilton, Claudio Orrego, Eugenio Ortega, Eduardo Palma, Jorge Pizarro, Tomás Reyes, Raúl Troncoso y también Eduardo Frei y Patricio Aylwin. Lo que siguió fue un largo debate. Algunos eran partidarios de no participar en el plebiscito, pues ello significaba validar el juego de la dictadura. Otros iban aún más lejos, exigiendo que planeáramos algo para impedir su realización. Yo mismo planteé la necesidad de dialogar con la Iglesia Católica y la Gran Logia de Chile, con los dirigentes sindicales y los colegios profesionales. Además, propuse que conversáramos con algunos representantes destacados del mundo de la derecha, como Hugo Zepeda, Francisco Bulnes y Jorge Alessandri y, por supuesto, con los radicales, presididos por Luis Bossay,

así como con algunos dirigentes del mundo socialista y comunista, de manera de poder manifestar, colectivamente, nuestro repudio e impedir que el plebiscito se llevara a efecto.

La idea era hacer todo lo posible para que la gente votara en contra de la nueva Constitución. Así, cuando ocurriera el fraude y perdiéramos —porque sabíamos que así iba a ocurrir—, saldríamos a denunciarlo públicamente, tanto a nivel nacional como internacional.

Sabíamos que estábamos contra el tiempo. Pedimos refuerzos al Partido Social Demócrata y a los radicales. Contactamos a la izquierda, e incluso nos comunicamos con los pocos fragmentos que aún quedaban del Partido Comunista para ver qué planeaban hacer. Asimismo, conversamos con algunos personeros del mundo conservador de derecha, quienes considerábamos podían sentirse interpretados por nuestra propuesta. Ante todo, había que evitar que la oposición al régimen se dividiera en bloques y actuara desde frentes dispersos.

Partí por contactar a Francisco Bulnes Sanfuentes, del Partido Nacional. Lo fui a ver a su oficina en calle Agustinas, y le planteé nuestra inquietud. Después de escucharme muy atento, me dijo: “Mira, Andrés. Te encuentro toda la razón. Creo que lo que está sucediendo es grave, pero la verdad es que no puedo hacer mucho. Soy parte de ese mundo que hoy está en el poder. Y si bien soy crítico y guardo diferencias respecto a este, terminar con la dictadura podría generar un caos y un vacío en la gobernabilidad del país. ¿Quién lo va a llenar?”.

A continuación, decidí probar contactando a Jorge Alessandri, quien en ese momento presidía el Consejo de Estado designado por Pinochet, mismo que había introducido, entre 1978 y 1980, y una vez entregado el informe de la Comisión Ortúzar, diversas modificaciones al anteproyecto de la nueva Constitución, el que finalmente pasó a la Junta de Gobierno para su redacción final. Pese a ello, y precisamente porque días más tarde, el 12 de agosto, Alessandri presentó su renuncia al Consejo por diferencias con el régimen, consideré que tal vez él podría estar interesado en ayudarnos. Yo no tenía suficiente confianza con él, así que primero me contacté con Carlos Martínez Sotomayor, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores durante su gobierno. Al terminar nuestra conversación, este me manifestó: “Ustedes tienen toda la razón, hay que tratar de evitar este plebiscito. Voy a hablar con don Jorge”.

Al día siguiente, Carlos Martínez volvió a contactarse conmigo. “Andrés, he conversado con el expresidente y le he transmitido tus planteamientos. Sin embargo, me ha dado una respuesta lapidaria: ‘He sido totalmente desautorizado por Pinochet, pero no puedo decirlo. Tampoco puedo mostrarme contrario al plebiscito, pues lo que se puede provocar es una división terrible al interior de las Fuerzas Armadas y terminar en una guerra civil. Por lo tanto, dígame a Andrés Zaldívar que he decidido guardar silencio. He sido sobrepasado’”, me explicó Carlos Martínez.

En efecto, Jorge Alessandri había solicitado introducir una serie de modificaciones al texto constitucional propuesto por la Comisión Ortúzar, en especial respecto a la composición y elección de los senadores y diputados, quienes debían ser electos popularmente en su totalidad y no parte votados y parte designados. Además, había solicitado acortar los plazos de la transición, junto con otras materias de relevancia que tenían por objetivo concretar una Constitución más democrática.

Descartados Bulnes y Alessandri, resolvimos hablar con el cardenal Raúl Silva Henríquez y con los miembros de la Conferencia Episcopal, los que obviamente nos apoyaron. La Conferencia Episcopal emitió una declaración muy dura, a través de la cual instaba al gobierno a no forzar esta situación sin bases. Lo propio hicieron los masones, quienes se sentían muy interpelados, puesto que habían entregado desde un comienzo su apoyo tácito al golpe. Publicaron en la prensa, mediante un inserto, una carta firmada por centenares de sus miembros, manifestándose en contra del plebiscito⁸⁶.

Desde la izquierda, con los pocos dirigentes que logramos comunicarnos, dadas las complejas circunstancias que atravesaban ante la permanente persecución en su contra, coincidimos en que había que tratar de impedir que se llevara a cabo el plebiscito. Sin embargo, ellos se mostraban contrarios a participar en la contienda, pues consideraban que, con ello, legitimaban al régimen.

La última semana de agosto, nos reunimos un grupo de dirigentes en la casa de Guillermo Atria Ramírez, ubicada en la avenida Santa María. Estaba presente la directiva nacional del partido, además de Eduardo Frei y Patricio Aylwin. Se tomó entonces la decisión de participar en el plebiscito, aprovechando los escasos espacios de prensa y de difusión que este abriría para levantar la voz y llegar a la opinión pública, y denunciar todo aquello que constituyera un fraude. Sabíamos que las mesas de votación, así como el conteo estarían controlados por

el gobierno, pero consideramos que era importante que la ciudadanía se atreviese a votar NO en un acto de repudio. Posteriormente, emitimos una declaración oficial, dando a conocer nuestra postura e instruyendo a que la gente fuese a votar rechazando la nueva Constitución, aunque advertíamos lo fraudulento que sería el proceso.

2. Desafiando al dictador: Encuentro masivo en el Teatro Caupolicán

Pese a que las posibilidades para hacer campaña eran muy limitadas, nuestros militantes se organizaron de Arica a Magallanes. Repartimos panfletos, muchas veces impresos a mimeógrafo e incluso escritos a mano. Como guinda de la torta, decidimos convocar a un acto en el Teatro Caupolicán de Santiago. Muchos pensaron que estábamos locos, pero decidimos continuar.

En la organización del evento participaron Carlos Figueroa, el actor José Manuel Salcedo, Eduardo Palma, Marco Antonio Rocca, Genaro Arriagada, Claudio Orrego, Raúl Troncoso, Jorge Pizarro, Gonzalo Duarte y José de Gregorio, entre otros. Fui, personalmente, a hablar con el dueño del teatro, Enrique Venturino Soto. Él me respondió: “Estoy de acuerdo, no tengo problema en pasarles el recinto, pero tengo que aparecer como que se los estoy arrendando”. “Perfecto”, le dije, y terminamos pagando una cantidad más bien simbólica, que servía para asegurar el aspecto legal.

Elegimos como fecha para el acto el miércoles 27 de agosto. Solicitamos que el evento fuese transmitido por cadena nacional de radio y televisión, pero obviamente el gobierno se negó. Se resolvió que los oradores serían Manuel Sanhueza, abogado constitucionalista, ex ministro de Justicia del gobierno de Salvador Allende y presidente del “Grupo de los 24”; Jorge Millas, filósofo y académico de gran prestigio, quien representaba al mundo laico, y Eduardo Frei Montalva. La idea era realizar una convocatoria amplia, abierta e inclusiva, que identificara a todo el arco opositor. Incluso el Partido Comunista se sumó. Este trabajo de organización me permitió construir y retomar vínculos con dirigentes de todos los sectores, lo que sería muy útil a la larga.

Un par de días antes, le pedí a Carlos Figueroa que se acercara a la Iglesia Católica a preguntar si nos podían facilitar la señal de Canal 13 para difundir el acto. Nos respondieron que sí, que no había problema, pero que a cambio debíamos pagar US\$ 200 mil dólares. Esto era, en realidad, su forma de decirnos que no. De manera sibilina, así nos daban un portazo en las narices.

La negativa nos hizo replantearnos la posibilidad de cancelar el evento. La

respuesta del canal nos confirmaba que nuestra campaña recibiría trabas desde todos los frentes. ¿Acaso estábamos siendo demasiado ingenuos para levantar un proyecto de esta naturaleza? Pese a nuestras dudas, primó la idea de seguir adelante.

Cuando llegó el día del evento, nos encontramos con la gran sorpresa de que el teatro estaba repleto, tanto así que no cabían todos los asistentes. Había gente de todos los sectores y de todos los bandos. Sobre la muchedumbre, flotaba una que otra bandera de la Democracia Cristiana —por supuesto no había ninguna del PS o del PC—, pero el resto era gente anónima, sin consignas. Lo que los había llevado hasta ahí era su aspiración a combatir la violencia y los abusos del régimen.

El acto se inició, aproximadamente, a las ocho de la noche, y logramos que fuese emitido por las radioemisoras Cooperativa, Chilena y Santiago, las que crearon una cadena propia que se denominó “Cadena radial de los hombres libres”, a la que se sumaron otras radios fuera de la capital. La transmisión partió con el “Himno de la alegría” como fondo. Fue una jornada emotiva e inspiradora que pasó a la historia como “el Caupolicanazo”. El discurso de Frei fue alentador, cargado de propuestas y denuncias acerca de las torcidas artimañas implementadas por la dictadura. A continuación, rescato algunos extractos⁸⁷:

Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad. No es válido porque no se puede llamar a un plebiscito cuando el país vive bajo estado de emergencia. No es válido porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica expresión del pueblo que se confronta. No es válido porque no existen registros electorales y han transcurrido prácticamente siete años desde su destrucción, lo que revela la voluntad deliberada de no rehacerlos. No es válido porque las mesas que recibirán los sufragios y harán su recuento están formadas por personas designadas por los alcaldes que, a su vez, son nombrados por el jefe de Estado.

(...) el dilema que el general Pinochet presenta es: “Yo o el caos”. La democracia no es el caos. Este país no vivió en el caos. Los que verdaderamente conducen al caos son los que, con un acto de coerción moral y física, plantean una disyuntiva inoperante que resultaría fatal.

(...) Ninguna amarra concebida entre cuatro paredes e impuesta para resistir la legítima expresión de un pueblo puede tener vida estable. Ningún esquema funcionará si no existe un consenso básico sobre valores fundamentales que permitan una forma racional de convivencia.

El teatro entero lo aplaudió, enardecido. Lo mismo sucedió con los discursos de Jorge Millas y Manuel Sanhueza. El acto completo fue un éxito, tanto así que el gobierno pensó que teníamos posibilidades de ganar el plebiscito. Nos apretaron con fuerza los días previos a las votaciones. Mucha gente fue detenida arbitrariamente, mientras se las ingeniaban para hacer campaña o entregar impresos o volantes que llamaban a votar por el NO.

3. Sin novedad en el frente: Un resultado previsto

El día del plebiscito, hicimos todo lo posible por organizarnos y hacer presencia en las diferentes mesas de votación, pero pronto nos dimos cuenta de que estas estaban prácticamente controladas en su totalidad por funcionarios o gente proclive a la dictadura. En algunas, figuraban empleados del Banco de Chile; en otras, del Banco Sudamericano; en otras, los de Codelco, y así sucesivamente. En comunas como La Cisterna, Pudahuel y Cerro Navia, los vocales de mesa eran personas de Vitacura y Las Condes. Había mesas integradas únicamente por familiares, así como familias completas que controlaban más de una mesa. En todos los recintos, y en cada una de las mesas a las que logramos llegar, se detectaron irregularidades.

Numerosos opositores y muchos de los nuestros se presentaron en los locales de votación como apoderados, pero ni siquiera los dejaron acercarse a las urnas. Buena parte de ellos fueron expulsados de los recintos por el solo hecho de protestar o manifestar observaciones ante el fraudulento proceso. La presencia militar y de uniformados era amedrentadora.

A mí me tocó ir a sufragar a Renca. Se había estipulado que, tras votar, debían cortar la punta del carnet de cada elector, pero cuando llegó mi turno nadie le cortó nada a mi cédula de identidad. Además, me sorprendió percatarme de que, pese a que era de mañana y muy temprano, la urna ya estaba repleta de votos. Me paseé por varios otros locales y noté el mismo fenómeno.

En el conteo, hubo mesas en las que aparecieron 500 o 600 votos, pese a que la norma legal limitaba los votantes a 300 por mesa. En algunas comunas, figuraba más gente yendo a votar que sus propios habitantes. La abstención a nivel país decía ser muy baja, algo que no se constataba en terreno. Años más tarde, el ex agente de la Dina Jorgelino Vergara, ayudante personal de Manuel Contreras, revelaría al periodista Javier Rebolledo que numerosos agentes de seguridad y funcionarios de esa institución votaron varias veces por el SÍ: “En el casino les dieron la orden: desde muy temprano debían acudir a las municipalidades de Santiago y votar SÍ (...) Todos fueron en esa ocasión con su documentación verdadera, nada de chapas. Al llegar al primer lugar ingresaron inmediatamente,

nadie les pidió que se pusieran en la fila, nada. Los vocales debían haber estado al tanto porque nadie, pero nadie se les interpuso en ese momento. Todos votaron y volvieron a partir. En la siguiente comuna repitieron lo mismo...”⁸⁸.

4. “Antipatriotas, mentirosos y codiciosos”

Todo estaba atado. El resultado, sabíamos, sería el que quisiera dar el dictador. Incluso el propio general Gustavo Leigh, quien ya había sido expulsado de la Junta de Gobierno, comentó privadamente que, antes de la consulta, le habrían informado por cuánto ganaría la aprobación a la nueva Constitución: “Al SÍ le van a poner entre 60 y 65 y al NO, entre 30 y 40”⁸⁹. Efectivamente, esta fue aprobada con el 67% de los votos a favor y 30,2% en contra.

Tras conocer los resultados y recabar todos los antecedentes, decidimos emitir un documento firmado por numerosos camaradas y personalidades, en el que se consignaban todas estas irregularidades. Dicho informe dejaba muy en claro y al trasluz, con datos concretos, la puesta en escena y modalidad con que la dictadura había llevado a cabo este gran fraude. Además de difundirlo, lo presentamos ante la Contraloría General de la República⁹⁰. El gobierno, por supuesto, al enterarse, tomó las represalias correspondientes.

Evidentemente, todo se dio tal como habíamos previsto. Sin embargo, tras estos sucesos, logramos potenciar notablemente nuestra organización y comenzar a estrechar vínculos con otras fuerzas políticas opositoras, denunciando la arbitrariedad del régimen, tanto a nivel interno como internacionalmente. El temor había comenzado a ceder en la ciudadanía y en los propios partidos políticos. Recuerdo que, apenas concluido el proceso, emití una dura declaración en la que desconocía los resultados y manifestaba que este había sido un tremendo fraude, de pies a cabeza.

Pocos días después, en un almuerzo en el Club de la Unión con motivo de las Fiestas Patrias, como acostumbraba todos los años, Augusto Pinochet dio un discurso en el que nos criticó con extremada dureza. Nos trató de “antipatriotas”, “mentirosos” y “codiciosos”, personificando sus ataques especialmente en tres personas, con nombre y apellido: Tucapel Jiménez, Eduardo Frei y yo. No sería ninguna coincidencia que, tiempo después, los primeros dos terminaran muertos y, en mi caso, se decretara el exilio, impidiéndome regresar al país el día 16 de octubre de ese mismo año.

IX

EL EXILIO

1. Una piedra en el zapato de la dictadura

Casi un mes después del plebiscito de 1980, el gobierno decretó mi exilio, acusándome de sedición y de constituir “un peligro para la seguridad del Estado”. Esta experiencia —que, por supuesto, no solo me afectó a mí, sino que a miles de chilenos y chilenas— fue devastadora y tuvo un impacto transformador en mi vida, marcándome a fuego y fortaleciendo mis opciones, templando de paso mi propia identidad y coraje para continuar luchando por todo aquello en lo que creía y en lo que creo hasta hoy.

El anuncio no fue una sorpresa. Previamente, en diversas oportunidades, me había visto expuesto a situaciones similares y el gobierno ya había amenazado varias veces con invocar esta medida en mi contra. La primera fue en 1976, como relatara anteriormente, con ocasión de la denuncia realizada por la dictadura, con bombos y platillos, sobre mi supuesta confabulación junto a Tomás Reyes para derribar al gobierno. Esto se repitió dos años después, en 1978, cuando nos encontrábamos reunidos en un convento en la calle Portugal con una serie de dirigentes sindicales, entre ellos Manuel Bustos, Ernesto Vogel y el exdiputado José Monares, analizando la situación de represión que afectaba al mundo sindical y posibles estrategias a seguir. De pronto, intempestivamente en medio de la reunión, fuimos allanados por un gran contingente de agentes de la CNI, quienes apuntándonos con sus armas comenzaron a revisar el recinto, arrebatándonos los documentos que portábamos. Fue una acción violentísima. De seguro algún soplón nos había delatado. Gracias a la presencia de un oficial de Carabineros que participaba en la operación, quien quizás se dio cuenta de lo desmedido del procedimiento, nos permitieron abandonar el recinto sin ser detenidos. Al regresar a mi oficina, informé del hecho al cardenal Raúl Silva Henríquez. Pronto la noticia estaba en las radios oficiales, las que aseguraban que se había tratado de una reunión sediciosa que pretendía desestabilizar al gobierno, y que infringía todas las normativas impuestas por la dictadura. Se decía que el gobierno aplicaría el máximo rigor a sus responsables. Sin embargo, inexplicablemente, dichas medidas quedaron en nada.

La dictadura solía actuar de esta forma, mediante acciones que buscaban

amedrentar a los involucrados y doblegar a la disidencia. Pero, en lugar de atemorizarnos, fue fortaleciéndonos cada vez más. Mirado en retrospectiva, me cuesta hoy entender cómo fuimos capaces de resistir tanta presión. Nunca lograron silenciarnos. Por mi parte, aprovechaba cada instancia que tenía para levantar la voz y denunciar, sobre todo cuando estaba en el extranjero y contábamos con amplios medios de difusión. En Europa fui recibido por figuras connotadas, como Adolfo Suárez, en España; Ruud Lubbers, Primer Ministro de Holanda; Leo Tindemans, Primer Ministro de Bélgica, y en Italia por Giulio Andreotti, Amintore Fanfani, Flaminio Piccoli y Mariano Rumor, todos otrora o vigentes primeros ministros. La verdad es que a esas alturas me había convertido en una piedra en el zapato para el gobierno.

El anuncio definitivo ocurrió en octubre de 1980. Había recibido una invitación de la Democracia Cristiana italiana para asistir a un acto masivo de solidaridad con Chile y Polonia —este último atravesaba una oleada de levantamientos sociales en contra del régimen comunista que lo ocupaba—. Frei también había sido invitado, pero no podía asistir, por lo que insistió en que yo debía hacerlo. Decidí aceptar, pese a que tenía un mal presentimiento. Estaba convencido de que algo me podía pasar. Tal era mi preocupación que, antes de partir, dejé una carta redactada acorde a mis facultades como presidente del partido, nominando a mi sucesor en transición, Raúl Troncoso.

Estando ya en Italia, me contactaron desde el partido en Chile para informarme de un nuevo escándalo promovido por el gobierno. El obispo José Manuel Santos había denunciado lo ocurrido con Canal 13 semanas antes del plebiscito, cuando la estación de televisión nos había pedido 200 mil dólares a cambio de difundir nuestro acto en el Teatro Caupolicán. Ahora, al obispo le llovían las críticas y cuestionamientos por la prensa controlada por la dictadura. Me pidieron que me refiriera al tema, así que emití una declaración, a través de nuestra jefa de prensa, Marta Caro, respaldándolo y ratificando el hecho.

Ese mismo día asistí al acto al que habíamos sido invitados en la localidad de Salerno, sur de Italia. Era un evento masivo, con miles de asistentes, en el que participé como orador junto al dirigente polaco Lech Walesa. Además de agradecer el apoyo y la solidaridad hacia nuestra lucha contra la dictadura de Pinochet, hice una fuerte denuncia contra la dura represión que sufría nuestra gente y que incluía torturas, desapariciones, la persecución de los opositores del gobierno y la falta absoluta de libertad. Seguramente algún infiltrado de la Dina informó en Chile sobre esta intervención.

Al día siguiente, nos trasladamos con Inés hasta Israel, ya que el Parlamento de ese país me había cursado una invitación. Esa noche nos alojamos en un hotel en Jerusalén. En horas de la madrugada, me despertó el llamado de Genaro Arriagada, informándome que el gobierno había emitido un decreto que prohibía mi regreso a Chile. El ministro del Interior, Sergio Fernández, había dado a conocer la medida a través de una declaración, argumentando que yo había pretendido propiciar “la tesis de que en Chile podría implantarse un gobierno con participación militar distinta de la actual. Ello implica sostener la eventualidad de una división de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden”⁹¹.

Genaro me dijo que se encontraba en mi casa en Santiago, junto a varios dirigentes que se habían reunido ahí tras conocerse el anuncio. Me invadió la impotencia. No entendía cómo la dictadura podía atentar contra mis derechos de esa manera. De inmediato, me puse a hacer llamados, intentando verificar la información y averiguar sus alcances, mientras trataba de dilucidar qué justificación habría usado el gobierno para levantar este decreto. No podía tratarse solamente de mis dichos en defensa del obispo Santos... Debía de haber algo más. Recordé entonces las declaraciones que había hecho algunos días antes, cuando aún estaba en Chile, al periodista Jorge Andrés Richards, quien trabajaba para una agencia de noticias extranjera. Estas habían sido publicadas por el diario mexicano Unomásuno, acompañadas de una historia falsa, en la que se decía que yo formaba parte de una conspiración para derrocar al gobierno y que, para ello, habría tratado de contactar a efectivos de las Fuerzas Armadas. Al día siguiente, el diario desmintió el artículo, responsabilizando al editor de haber alterado la entrevista, lo que además le costó su despido. Pero ya era demasiado tarde. Estoy convencido de que todo fue parte de una maniobra de la Dina, utilizada posteriormente para justificar mi exilio.

Poco después, una nueva declaración del ministro del Interior explicitó que la medida tenía carácter preventivo y no sancionatorio, que se basaba en mis conductas anteriores y que las declaraciones al diario mexicano eran “solo la culminación de una conducta sistemática mantenida dentro y fuera del país...”. A ello agregó: “La medida solo será reconsiderada si el afectado suscribe —ante el cónsul chileno al cual presente la solicitud de reingreso pertinente, en conformidad al Decreto Ley 604— una declaración que el gobierno le hará llegar a este, y en la cual se requerirá el compromiso del señor Zaldívar de acatar la autoridad constituida, el orden jurídico vigente y la nueva Constitución plebiscitada el 11 de septiembre último. El Gobierno no le impide a ningún chileno discrepar de su orientación o de sus actos, pero sí les exige a todos los

habitantes de la República que acaten su autoridad y las leyes vigentes”⁹². A continuación, la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos) difundió un documento en que aparecían varias declaraciones mías del último tiempo, en las que cuestionaba la legitimidad de la dictadura, desmentía su supuesto éxito económico y calificaba de fraude el plebiscito. Con esto quedaba claro que el verdadero motivo de mi exilio era que me había convertido en una persona non grata para el gobierno militar.

Cerca de las ocho de la mañana llegó hasta mi habitación del hotel un funcionario de la Cancillería israelí para acompañarme a nuestra primera actividad protocolar, a realizarse en el Parlamento. Allí sostendría un encuentro con el Presidente y los diputados de la comisión de relaciones exteriores para dar a conocer lo que estaba sucediendo en Chile. El funcionario debe haberse extrañado, pues lo recibí sin estar listo aún para partir. Tras explicarle lo que sucedía, le dije que no quería provocar ningún problema a su gobierno y le solicité consultar al canciller cómo proceder. Este me contactó pocos minutos después vía telefónica y, junto con agradecer mi consulta, aseguró comprender la gravedad de la situación y que, por supuesto, su gobierno se ponía a mi disposición para reprogramar las actividades que estimare convenientes, así como también para facilitar todos los trámites en el caso de que decidiera regresar. Con Inés decidimos dejar Israel en el vuelo más próximo y dirigirnos a Roma. Allí nos esperaba Rafael Moreno, quien se había radicado en dicha ciudad y trabajaba en la FAO, y nos había ofrecido recibarnos en su casa. El plan era avisar cuanto antes a nuestros amigos del gobierno de Italia sobre lo sucedido.

Como el vuelo estaba programado para la tarde, solicitamos a quien había sido designado nuestro edecán hacer un recorrido por los lugares santos: la ciudad antigua de Jerusalén, la Vía Dolorosa que atravesó Cristo en su pasión, el Santo Sepulcro, el Huerto de Getsemaní, el Muro de los Lamentos y la Explanada de la Mezquita. Esto fue realmente reconfortante y nos permitió, al menos por unas horas, no pensar en los duros tiempos que ya sabíamos se avecinaban para nosotros y nuestra familia. Cuando regresamos al hotel a buscar las maletas, recibimos numerosas llamadas desde Chile, entre ellas la de nuestras cuatro hijas, dándonos aliento y comunicándonos que habían tomado la decisión de que, sin importar lo que pasara, permaneceríamos todos juntos en el país que escogiéramos. Pero hubo una llamada que nos emocionó particularmente, la de una chilena radicada en Jerusalén quien, tras enterarse de lo ocurrido, había resuelto ofrecernos su casa, poniéndose a nuestra disposición. Fue una muestra

de solidaridad gratuita que nos conmovió y, que hasta el día de hoy, guardo con profundo agradecimiento. Por desgracia, no recuerdo su nombre, el que hubiese deseado incorporar en este relato.

Regresamos a Italia. Ahí nos esperaban Angelo Bernassola, secretario de la Internacional Demócrata Cristiana, así como numerosos dirigentes, entre ellos, Mariano Rumor, Flaminio Piccoli, Amintore Fanfani y Giulio Andreotti. Italia era un país donde me sentía cómodo y, en las condiciones anímicas en que me encontraba, esto era de gran valor.

A los pocos días, empezó a llegar hasta la casa de Rafael Moreno mucha gente. Mi hermano Felipe, quien estaba en Nueva York, viajó a verme. Desde Chile, llegaron José Luis del Río y su mujer, Carmen Goudie; el cardenal Raúl Silva Henríquez y Bernardino Piñera. Este vaivén se mantuvo durante varias semanas. Aún no sé cómo Rafael Moreno y su familia me aguantaron tanto. Su casa no era demasiado grande, pero desarmaron el comedor y allí instalaron un dormitorio para Inés y para mí. Adecuaron todo para acogernos y que nos sintiéramos cómodos. Fueron gestos que, sobre todo en esas circunstancias, no tienen precio. La reciprocidad y el cariño unieron para siempre a la familia de Rafael con la nuestra.

2. Una oferta imposible de aceptar

A fines de octubre, Juan de Dios Carmona, quien estaba de embajador en España, me pidió que nos reuniéramos. El gobierno me ofrecía la posibilidad de regresar, siempre y cuando me comprometiera a firmar un documento en el que aceptaba el receso político y reconocía la autoridad constituida, el orden jurídico vigente y la legalidad de la nueva Constitución. En el fondo, debía prometer que mantendría en adelante una “buena conducta”.

Lo descarté tajantemente. “No estoy dispuesto a hacer algo así. Si vuelvo a Chile, volveré sin condiciones”, le respondí a Carmona. No iba a regresar como un paria, arrastrándome de rodillas. Por lo demás, no tenía ninguna certeza de que, en el futuro, la dictadura no usaría aquel documento con mi firma para otros fines. Ya habían falsificado mis declaraciones en el diario e inventado otro tipo de falacias. ¿Qué tipo de garantías podían darme? Mi decisión era definitiva. Se lo comuniqué a mi familia y todos estuvieron de acuerdo.

A partir de ese momento, cortamos relaciones con Juan de Dios Carmona. Fue duro, pues habíamos sido bastante cercanos. Él había sido una persona de mucha confianza del Presidente Frei durante su gobierno. Negociar mi propio exilio con él fue doloroso, y me imagino que para él, al menos, fue algo incómodo. Años después, tras el retorno de la democracia en Chile, nos encontraríamos de nuevo, esta vez en el Senado. William Thayer, quien asumía como senador designado, lo nombró su asesor. Después de todo lo acontecido, fue duro volver a vernos las caras.

En Chile, las reacciones ante la petición del gobierno no se hicieron esperar. Numerosas fueron las declaraciones emitidas, haciendo una defensa cerrada de mi caso: entre otras, las del Grupo de Estudios Constitucionales o “Grupo de los 24”, del partido y de la Juventud de la Democracia Cristiana. En paralelo, 150 abogados se organizaron para protestar y se creó un Comité Pro Retorno Andrés Zaldívar, integrado por destacadas personalidades, como Leopoldo Castedo, Fernando Castillo, Marta Cruz-Coke, Enrique D’Etigny, Jorge Edwards, Cristián Gazmuri, Alejandro Hales, Jorge Millas, Raúl Sáez, Sergio Villalobos, Beltrán Villegas y mi propia madre.

En medio de la polémica desatada, Pedro Felipe Ramírez, dirigente de la Izquierda Cristiana, escribiría una columna que reflejaba fielmente mi propio sentir en esos momentos: “Lo sucedido a Andrés Zaldívar no es solo un asunto de él o de los demócratacristianos. Es un asunto que afecta a toda la comunidad nacional, especialmente a las fuerzas democráticas. (...) Pero hay algo aún más grave que nos afecta a todos. Se refiere a la pretensión del gobierno de obligar a Zaldívar a ‘acatar la autoridad constituida, el orden jurídico vigente y la nueva Constitución plebiscitada el 11 de septiembre pasado’. Como muchos chilenos, Zaldívar denunció, antes y después del plebiscito, lo que creía en conciencia: que tal acto no tenía valor mientras la ciudadanía no pudiera expresar libremente su voluntad”. Luego agrega: “Lo que el gobierno persigue ahora es que Zaldívar traicione su propia conciencia. En el fondo, lo que pretende es que todos los que nos hemos opuesto a sus designios perdamos la fe en nosotros mismos, en nuestra capacidad interior de sostener nuestras propias ideas. Nada mejor para ello que obligarnos a cometer un acto de claudicación, un acto de suicidio moral. El día que esto suceda, no solo la democracia estará enterrada por mucho tiempo, sino nuestro propio ser nacional”⁹³.

Efectivamente, lo que pretendía el gobierno era ponerme entre la espada y la pared. Es como cuando a una persona, luego de ser torturada, le piden que firme una declaración en la que reconoce su culpa a cambio de la libertad. En mi caso, por cierto, no se trataba de una tortura física, pero, desde el punto de vista psicológico y emocional, era una situación bastante complicada.

Muchos argumentaban que la medida era absolutamente ilegal. El Decreto Ley N° 604 invocado por el gobierno castigaba a todo aquel que “desde el exterior deshonre, difame o desprestigie vilmente al país”. Varios abogados defendían la idea de que mi caso no correspondía a tal figura, ya que, en primer término, las declaraciones al diario se habían realizado en Chile, y, segundo, los párrafos que atentaban contra la aludida seguridad nacional habían sido desmentidos por el diario, por el periodista que firmaba el artículo y también por mí. La Comisión Chilena de Derechos Humanos, por su parte, sostenía que el decreto era “inaplicable” y que sus disposiciones no eran pertinentes. Asimismo, el Círculo de Estudios Constitucionales, encabezado por Hugo Zepeda, declaró “que siendo desde todo punto arbitraria la medida... (ella) debería ser reconsiderada como una manera de reparar el mal causado, de restablecer el imperio del derecho y de contribuir a la paz y a la reconciliación de los chilenos”⁹⁴. Incluso la revista *Qué Pasa* —cuyo comité editorial encabezaba entonces el historiador Gonzalo Vial, exministro de Pinochet— manifestó su categórico desacuerdo, señalando que “la

prohibición de reingreso a Zaldívar no aparece fundada en hechos de tal gravedad que justifiquen una medida tan extrema. (...) Ningún texto legal autoriza al Ministerio del Interior para pedir la mencionada declaración”⁹⁵.

Otros medios, sin embargo, optaron por la desacreditación y las mentiras. El diario La Segunda, cuyo director era Hermógenes Pérez de Arce, afirmó que me encontraba en el exilio por voluntad propia, y que había decidido no volver porque quería figurar como héroe. Con Hermógenes habíamos sido compañeros de curso en la Escuela de Derecho. Él siempre había sido un extremista de derecha, intransigente y, por supuesto, como lo sigue siendo hasta hoy, un fanático incapaz de reconocer las brutalidades cometidas por la dictadura. Por ello, no me extrañó su proceder. En numerosas ocasiones, por defender al gobierno de Pinochet y justificar las aberraciones cometidas por este, ha llegado a falsear la verdad. Además de decir esto, no quisiera gastar más tinta en referencia a su persona.

Algunos intentaron convencerme para que aceptara la forzada retractación. De hecho, diversos dirigentes italianos lo estimaban conveniente. “Andrés, en los tiempos del fascismo este tipo de situaciones eran muy usuales y la gente aceptaba, entendiendo que era una imposición inmoral que no te obligaba a nada. Es preferible que vuelvas, aunque tengas que firmar”, me decían. En Chile, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal incluso propuso realizar una declaración en la que afirmaba que la exigencia del gobierno no tenía ningún sustento; con ello, la idea era facilitarme la decisión de aceptar las condiciones que me imponían. Pero yo ya estaba resuelto: no claudicaría.

3. La impotencia ante una guerra sucia

En la primera carta que escribí a mis hijas desde el exilio, les describí de la siguiente manera los sentimientos que compartíamos con Inés:

(...) El destierro es la peor pena que se puede imponer a una persona, aún mayor que una pena física, ya que con ello se pretende privarla de uno de los derechos fundamentales del ser humano. Con esta sanción, se trata de separarlo de sus seres queridos, de su trabajo, de desarraigarlo de la tierra donde tiene construido su mundo. Es una manera de amedrentar no solo al afectado, sino a todos los que disienten. (...) Ustedes me conocen; hemos construido juntos nuestra familia. Nos han visto como padres preocupados no solo por nuestras propias alegrías o sufrimientos, como es legítimo, sino que también hemos intentado, bien o mal, dedicarnos al mundo que nos rodea. De esta decisión de vida, con seguridad se han derivado muchas molestias o perjuicios; pero, nuestra calidad de cristianos nos obliga a todos a cumplir con esta responsabilidad que voluntariamente aceptamos. (...) Escogí el sendero de hacer realidad los valores humanistas y cristianos, a través de la acción pública. Esto es lo que ha iluminado mi trabajo y mi acción, y por ello he luchado todos estos años. No puedo acallar mi conciencia, aun a riesgo de que suceda lo que hoy se me impone. Solo quiero para mi patria que se viva en libertad, que haya justicia y que nuestras relaciones se rijan por el amor. (...) Lucharé por la vuelta a mi patria, sin descanso, porque es un derecho que me corresponde como persona; no puedo renunciar ni renunciaré a él por ningún motivo. Volveré sí, como lo merece todo hombre digno; no pueden humillarme ni traicionar mis convicciones. No puedo darme gustos personales. De mi decisión dependen muchas cosas, no por mi persona, individualmente considerada, sino por el hecho de representar a varios cientos de miles de chilenos en esta lucha. Prefiero vivir la pena atroz del destierro a vivir como un paria en mi país; no sería digno padre de ustedes, sería indigno para los que me rodean, para mis padres, hermanos, parientes, amigos e, incluso, para mis enemigos. (...) Quiero pedirles, mientras esté ausente, cualquiera que sea el tiempo de la separación, que se mantengan muy unidas. Si se les presenta algún

problema, recurran a la familia.

Me quedé en Italia hasta noviembre. Luego decidí trasladarme a España, donde me esperaban mis amigos dirigentes de la Unión Centro Democrática (UCD), entre ellos, el Presidente Adolfo Suárez; Fernando Álvarez de Miranda, quien presidía las Cortes españolas; el ministro Iñigo Caverio, y los diputados Óscar Alzaga y Luis Vega Escandón.

Si bien me sentía cómodo y acompañado en España, aún no había decidido radicarme ahí definitivamente. En realidad, no sabía qué sería de mí. La incertidumbre sobre mi destino era muy grande. Creo que todos nos sentíamos un poco incrédulos ante lo que estaba ocurriendo. A esas alturas, mi caso se había transformado en algo emblemático. La gente y los medios se referían al “Caso Zaldívar”. Muchos me comentaban: “Esto es una aberración. ¿Te tienen que dejar volver!”. Me llegaban recados de amistades de derecha en Chile, quienes aseguraban que estaban haciendo gestiones. De todos, los más realistas siempre fueron mis hermanos, quienes me decían: “Andrés, Pinochet no te va a dejar entrar”. Y tenían razón. No obstante, al igual que Jaime Castillo, estaba decidido a luchar hasta el final por el derecho a vivir en mi patria, aunque ello significase golpear todas las puertas existentes y recurrir a todos los tribunales, aun cuando dijeran cien veces “no”. Denunciaría internacionalmente al dictador y aprovecharía cualquier audiencia dispuesta a escuchar mi reclamo. ¿Por cuánto tiempo? Por el que fuere necesario.

En noviembre de 1980, se realizó en Chile el XI Congreso Eucarístico Nacional, una instancia que buscaba reunir a la comunidad cristiana y crear un espacio para la expresión de su fe en medio de la difícil situación que vivía el país. En el intertanto, desde el Vaticano habían solicitado al cardenal Silva Henríquez y al nuncio Angelo Sodano que intercedieran por mí ante Pinochet. Por aquellos días, ambos tenían agendada una visita al dictador para invitarlo al evento, y consideraron que era una instancia propicia para plantearle el tema. Pero Pinochet era muy vivo. En la cita, sentados en su oficina en La Moneda, el cardenal apenas si alcanzó a plantear el caso.

—Para lograr un verdadero ambiente de reconciliación, de encuentro eucarístico, sería bueno que se hicieran ciertos gestos de humanidad... —dijo Silva Henríquez.

Sin embargo, Pinochet lo frenó en seco.

—Usted me quiere hablar de Andrés Zaldívar, ¿no es cierto? Pues le informo desde ya que él va a ser el último en volver —respondió el dictador, tajante.

Toda esta escena me la relató tiempo después el propio cardenal, y también el nuncio Sodano.

Por supuesto, hubo momentos en que me cuestioné mi decisión de no acatar. Estar tan lejos de mi familia lo hacía todo muy difícil y doloroso. La incertidumbre era brutal. Sabía que mi padre estaba muy afectado, incluso había empezado a mostrar signos de arteriosclerosis, y me sentía responsable de lo que pudiera pasarle.

—Mamá, usted es muy fuerte, y yo también estoy dispuesto a serlo. Pero estoy preocupado por mi papá. No quiero volver en estas condiciones, pero necesito saber qué es lo que opina usted —le dije un día, preocupado, a mi madre.

—Hijo, tienes todo mi respaldo. Prefiero no volver a verte, que verte volver sin dignidad —respondió ella.

Efectivamente, en muchas ocasiones mi madre solía afirmar: “Mi hijo no puede claudicar ni firmar de rodillas ningún documento que condicione su regreso a la patria como un paria. Si lo hace, será con la frente en alto y con plena dignidad”. Su entereza y convicción eran extraordinarias, aunque imagino el inmenso dolor que debe haber experimentado en esos momentos.

Pese a que siempre tuvimos una gran relación, el exilio nos acercó de una manera especial. Mi madre era muy buena para escribir cartas. Con regularidad le escribía a Eduardo Frei, a Bernardo Leighton, a Radomiro Tomic y a mucha otra gente, sobre todo cuando quería hacerles algún reconocimiento por un gesto o un acto valioso. También lo hacía cuando daba algunas batallas en causas solidarias o cuando se requería ayuda para algunas personas necesitadas. Aquella era su forma de comunicarse. Le salía natural. Mientras estuve exiliado, me mandó cartas de su puño y letra cada día, a las que yo respondía con igual dedicación. Tengo archivadores repletos. Era un intercambio muy cotidiano, conversaciones que podríamos haber tenido perfectamente estando en la casa. Me contaba que había hecho dulce de membrillo, que había nacido un nieto, que había ido fulanita a verla, que había almorzado con tal persona. Me hablaba de mi papá, de qué estaba pasando en la casa y en la familia, y siempre cerraba con

uno o dos comentarios sobre contingencia política. Fue algo muy bonito, que me hizo sentir cerca de ella y del resto de la familia, pese a la distancia.

Aunque sé que mi exilio fue un duro golpe para ella, no se quedó tranquila en su casa esperando que otros dieran la batalla; al contrario, no perdió ocasión para reclamar en contra de la injusticia que me afectaba no solo a mí, sino que a miles de chilenas y chilenos. Nunca dejó de llevar en su solapa un broche que decía “Zaldívar debe volver”, y siempre pegaba en los postes, micros y lugares visibles unas pegatinas con el mismo mensaje. ¡Mandó a imprimir cientos de ellas! Participó en actos, suscribió declaraciones, trabajó con la Vicaría de la Solidaridad e integró el Comité Pro Retorno de Exiliados. En una ocasión, se llamó a una movilización en Plaza Italia, con familiares de detenidos desaparecidos y exiliados, dirigentes políticos y gente que participaba en la defensa de los derechos humanos. Ahí, en el medio, estaba mi madre, junto a Clotario Blest, Fernando Castillo Velasco, Ana González, Alejandro Hales, Roberto Parada, mi hermano Adolfo, José Joaquín Bruner y muchas otras personas. Pese a que tenía 80 años, cuando llegaron las fuerzas de seguridad y trataron de llevársela detenida, se mantuvo firme. Ni siquiera se movió de su lugar. Era tal su determinación que a los uniformados no les quedó otra que dejarla ir. Mi mamá era una activista de alma, siempre lo fue. Valiente, corajuda, nada ni nadie la amedrentaba. A cualquier lugar que fuese, si presenciaba algo que le parecía injusto, no dudaba en levantar la voz. Sé que siempre estuvo muy orgullosa de sus hijos. Así lo manifestó en más de una oportunidad: “Estoy orgullosa de la hombría de Andrés, y también puedo decir, como la madre de los Gracos: ‘Mis hijos son mis mejores joyas’”⁹⁶.

Mi hermano Adolfo, al igual que el resto de mis hermanos, también entendió mis razones para no volver al país en la forma que se me imponía. “A Andrés le asiste el derecho ineludible e irrenunciable de entrar a Chile y vivir en su patria. Entrará por la puerta, con la frente en alto. Y si se la cierran, será por la fuerza, no con el argumento de la ley o la razón”⁹⁷, declaró a la prensa en diciembre de 1980.

Mis padres presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rechazado por unanimidad. Desde la corte argumentaron que yo constituía “un peligro para el Estado”⁹⁸. En el dictamen, el presidente de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, Hernán Cereceda, concluyó: “Andrés Zaldívar se mofa públicamente del receso político, no acepta la ley sobre disolución de colectividades partidistas y reitera una injuriosa imputación acerca

de una ‘maquinación fraguada por el gobierno’ para ganar un plebiscito ya refrendado”⁹⁹.

Posteriormente, apelé a la Corte Suprema, patrocinado por el prestigioso abogado Luis Ortiz Quiroga, con el objetivo de revocar la decisión del gobierno, pero mi apelación nuevamente fue rechazada por unanimidad, “por haber desarrollado actos que constituyen un peligro para el Estado”. No era de extrañarse. El Poder Judicial en dictadura fue obsecuente con el gobierno militar y, por ende, cómplice pasivo y activo de los peores atropellos que se hayan conocido en la historia de nuestro país. La polémica frase del juez Israel Bórquez, presidente de la Corte Suprema en ese entonces, refleja esta tónica institucional. “Los desaparecidos me tienen curco”¹⁰⁰ afirmó, ante las reiteradas consultas por los casos de detenidos desaparecidos y las negativas de la propia Corte de aceptar los recursos de amparo.

Se trataba de un Poder Judicial corrompido, desde el punto de vista ético. Y cómo no, si los ministros de la Corte Suprema eran nombrados por el propio Hugo Rosende, titular del Ministerio de Justicia de Pinochet. Hubo excepciones, como Hernán González; José Cánovas, quien investigó el Caso Degollados y resolvió culpar a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros de asociación ilícita en la causa; Adolfo Bañados, que abrió la investigación en el Caso Lonquén, y Carlos Cerda, quien citó a declarar a Manuel Contreras por el secuestro y detención de un grupo de militantes comunistas, además de ordenar procesar a 40 miembros de Carabineros, Investigaciones y la Fuerza Aérea. Estas excepciones, sin embargo, fueron contadas, y el gobierno se cercioró de que así se mantuviera. Todo aquel que se mostrara partidario de investigar causas de este tipo era removido de su cargo o, al menos, se le denegaba cualquier tipo de ascenso o beneficio. Y es que combatir a una dictadura puede sentirse, a ratos, como darse cabezazos contra un muro. Para esta, lo único que define la legalidad es su propia fuerza e intereses. Puedes utilizar los mejores argumentos, pero las dictaduras son dictaduras, y con ellas el diálogo no existe.

Nosotros denunciábamos esta situación al interior del Poder Judicial en reiteradas ocasiones. En 1976, Eugenio Velasco, Jaime Castillo, Héctor Valenzuela, Andrés Aylwin y Fernando Guzmán lo relataron en un documento que entregaron a la OEA: “La Corte Suprema abandonó voluntariamente, y contra su propia historia y las normas legales pertinentes, su derecho a tramitar los recursos de quejas contra abominables sentencias de los Tribunales Militares, en particular, durante los dos primeros años del actual Gobierno. Los tribunales de Primera Instancia, a

veces por su desinterés o temor, otras veces por las circunstancias extrajudiciales creadas por el Servicio Secreto de Seguridad, no han ido más allá que la tramitación renuente de sumarios por homicidios, secuestro, violación, etc.". Y continúan: "Con frecuencia, la única actitud posible para los jueces y demás funcionarios judiciales, es pura y simplemente declararse incompetentes... Nada ni nadie los detiene. Solo muy pocos jueces han conservado su honor como tales, y por ello han sufrido la hostilidad de los incondicionales"¹⁰¹. Como consecuencia de este acto, Castillo y Velasco fueron enviados al exilio.

Décadas más tarde, con el retorno de la democracia, se hizo bastante por compensar y redimir la deuda del Poder Judicial para con el pueblo chileno, incluso más que en otros países que atravesaron circunstancias similares. Pero este no es el punto. Lo verdaderamente fundamental es que la justicia chilena debe ser capaz de mirar hacia atrás y reconocer la responsabilidad que tuvo durante los años de dictadura. Únicamente así entenderemos que, cuando una institución no ejerce el deber que le corresponde, puede provocar un daño inmenso que tardará mucho tiempo en ser reparado.

4. La realidad del exilio

El exilio es, quizás, el peor castigo que un hombre puede recibir, después de la pena de muerte. Quien va a la cárcel, al menos sabe que seguirá ahí, en el mismo lugar. En el exilio, en cambio, pierdes el norte, tus arraigos y muchos códigos que forman parte de tu identidad más profunda. No sabes hacia dónde avanzar, cómo hacerlo, ni cuánto tiempo durará o si serás capaz de resistirlo. Es un verdadero naufragio, en el que la incertidumbre y la nostalgia cobran un enorme peso. Como bien lo expresa el cantautor argentino León Gieco: “Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente...”. El exilio es como lo que le ocurre a un árbol que es arrancado de la tierra y pierde sus raíces. Ese árbol sufre y, si no encuentra un terreno fértil, terminará muriendo. De ahí que una de las penas más duras impuestas por el Imperio Romano era el ostracismo. A los enemigos se les exiliaba, alejándolos de su familia y amigos, de sus afectos, de su terruño...

Cuando eres un exiliado, nunca consigues olvidar u obviar tu condición como tal. Esta sensación la experimentaban muchos exiliados. Siempre estás preguntándote: “¿Qué estará pasando con los míos?”, “¿regresaré algún día?”, “¿cuánto durará esto?”. Conocí a algunos que nunca desarmaron su maleta, que jamás colgaron cortinas ni pusieron siquiera una flor en su nueva casa, permaneciendo siempre listos para partir de regreso, apenas les dieran las buenas nuevas. A mí también me pasó esto al principio. Estaba convencido de que pronto volvería, de que algo cambiaría y me dejarían entrar. Era tanto así, que cuando nos despedimos con Inés en el aeropuerto de Madrid, previo a su retorno a Chile, le di un beso casual y le pedí que tuviera todo listo para mi regreso.

Alguna vez le escuché a José Antonio Viera-Gallo una anécdota que creo refleja fielmente este sentir. Él contaba que, a días de estar exiliado en Roma, fue invitado al primer acto de solidaridad con Chile. Allí estaba el poeta español Rafael Alberti, quien le preguntó: “Y usted joven, ¿cuántos años lleva exiliado?”. “Diez días”, le respondió Viera-Gallo. “Pues yo, 35 años, y no soporto más, no hablo más. En los actos solo me levanto para decir: ‘No se olviden de España’, y me vuelvo a sentar. No puedo decir ni una palabra más”,

añadió el poeta.

Cuando por fin comencé a asumir que mi exilio no tenía vuelta, me pregunté si acaso debía tomar una decisión respecto a mi rol como presidente del partido. No creía prudente dejar mi cargo a la deriva, y no sabía si ejercer desde el extranjero era lo más indicado, en circunstancias de que en Chile estaban sucediendo tantas cosas y los militantes requerían un liderazgo fuerte y presente. En diciembre de 1980, aproveché una visita que debía hacer a Venezuela para trasladarme desde ese país a Lima y reunirme allí con un grupo de dirigentes y la directiva. Mi plan era plantearles la interrogante y ver qué posturas surgían al respecto.

Cuando en Santiago se filtró la información sobre mi visita, obviamente sonaron las alarmas. Pensaron que planeaba escabullirme clandestinamente al país. El gobierno desplegó todo un operativo en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, y hasta dio instrucciones en distintos puntos de la frontera por si intentaba cruzar. A mí, la verdad, esta reacción me causó bastante risa, pues hasta ahí nunca había considerado la alternativa de ingresar ilegalmente al país.

En el encuentro con los dirigentes en Lima, se confirmó mi permanencia en el cargo de presidente. Uno de los más insistentes en que así sucediera fue Eduardo Frei. Para él, era muy importante que no diéramos nuestro brazo a torcer y, desde esta perspectiva, mi renuncia a la presidencia podía interpretarse como una derrota ante la dictadura. “Tú te mantienes en el cargo, sin perjuicio de que la directiva en Chile responderá por ti. Pero esa directiva tiene que estar en permanente contacto contigo, de manera que puedan actuar y reaccionar alineados”, enfatizó.

Aproveché también mi estadía en Lima para reunirme con mis padres, hermanos y con algunos amigos. Fueron seis o siete días reconfortantes; no sabía cuándo volvería a verlos otra vez. Posteriormente, junto a Inés y mis cuatro hijas (Paula, Francisca, Patricia y Claudia) partimos rumbo a Roma a pasar la Navidad. Ya habíamos decidido establecernos en Madrid. En estas circunstancias, Inés fue muy firme. Me ayudó a aceptar el hecho de que lo mejor era asumir la realidad inmediata: en adelante, nuestras vidas se desenvolverían en España, al menos hasta que se dictaminara lo contrario. Mis hermanos también me lo advirtieron: “Andrés, no vas a volver pronto”. Aunque sonara cruel, necesitaba escucharlo de alguien.

En Roma, nuevamente, nos alojamos durante un tiempo en casa de Rafael Moreno y Gloria Orb. Éramos un verdadero ejército, pero se las arreglaron, como siempre, para acogernos con una calidez extraordinaria. Sus hijos, Rafael y Pablo, se trasladaron a una buhardilla para dejarles espacio a nuestras hijas y de nuevo sacaron el comedor para darnos cabida a Inés y a mí.

Antes de Navidad, Felipe, mi hermano, me comunicó que un amigo suyo, de apellido Alessandro, lo había llamado para decirle que había reservado un albergue en Roma, en el que podíamos quedarnos. Otro gesto de generosidad y cariño. Por supuesto, acepté su ofrecimiento y nos trasladamos allí en vísperas de Navidad. Asistimos a la misa de medianoche en la Basílica de San Pedro. Rafael había conseguido una invitación en lugar preferencial, muy cercana al Papa Juan Pablo II, quien ofició la ceremonia. Esa Navidad fue algo imborrable, no solo por el ritual religioso, sino que también porque, al regresar al albergue, celebramos y nos entregamos los regalos en una estrecha habitación del hotel, alrededor de nuestra cama, con un pequeño pesebre que pusimos sobre un velador. Fue una noche íntima, de mucha sencillez, durante la cual probablemente sentimos lo mismo que experimentan tantos y tantos inmigrantes que deben abandonar su tierra, dejando atrás lo que más quieren.

Después de Navidad y Año Nuevo, decidimos viajar por tierra desde Roma a Madrid, nuestro destino final. Queríamos que nuestras hijas se distrajeran un poco del terrible golpe que todo esto nos estaba acarreando. Había comprado, en mil dólares, un antiguo automóvil Mercedes Benz, lo suficientemente amplio para dar cabida a los seis pasajeros que éramos. Su dueño era Hernán Santa Cruz, diplomático chileno, con quien habíamos trabajado cuando era ministro de Hacienda en materias internacionales; ahora era un alto funcionario de la FAO. Así, partimos rumbo al norte de Italia, visitando cada día algún pueblo o ciudad: Asís, la tierra de San Francisco; Bérgamo; Sotto Il Monte, la tierra del Papa Juan XXIII; Siena, Florencia, Pisa, Verona, Venecia y muchas más... Los seis a bordo, y el maletero repleto con nuestras pertenencias. ¡Parecíamos unos verdaderos gitanos! Pasamos por los Alpes nevados, atravesamos Suiza y llegamos hasta Alemania, donde se desató un gran temporal de nieve. Era de noche y no encontrábamos alojamiento. Estaba todo repleto. Nuestro auto era de los pocos que circulaban por la carretera. Llegó un minuto en que pensé: “¡Pagamos lo que sea!”. Terminamos alojando en Manheim “obligadamente”, en un hotel cinco estrellas muy agradable. Los alemanes se mostraban sorprendidos ante una familia tan numerosa en un lugar así. A la mañana siguiente, aprovechamos de aprovisionarnos con las cosas que servían para el desayuno y

emprendimos de nuevo la ruta.

Tras visitar cada pueblo que nos llamaba la atención, alojando en pensiones u hoteles baratos, llegamos a París, justo para el cumpleaños de Inés. Lo celebramos en las afueras del Palacio de Versalles, apiñados como sardinas dentro del auto, mientras afuera nevaba. Improvisamos una torta y, mientras cantábamos feliz cumpleaños, Inés sopló su vela. No sé si en esos instantes ella efectivamente era feliz. Imagino que se debe haber sentido muy tironeada, pero nunca demostró pesar ni tristeza. Nos animábamos unos a otros. Fueron momentos bonitos, que disfrutamos plenamente, pese a la amargura de tener que rehacer nuestras vidas tan lejos de casa.

Después de esta larga travesía, a comienzos de febrero de 1981, llegamos a Madrid. El viejo Mercedes Benz no nos falló y siguió por varios años cumpliendo su cometido. Nos hospedamos en un apart hotel, a un costado de la Biblioteca Nacional, en la calle Villanueva. Las habitaciones eran pequeñas y oscuras. Era pleno invierno y el clima no acompañaba. Fueron semanas difíciles. Vivíamos con bastante estrechez, sin mayores comodidades, pero había que adaptarse y buscar un lugar para establecerse definitivamente. Mi amigo Fernando Álvarez de Miranda, presidente de las Cortes, quien nos visitó más de alguna vez, debe haberse impresionado con nuestra situación, porque pronto me comunicó que tenía instrucciones del gobierno de ayudarnos a instalarnos en algo definitivo.

Para aliviar los ánimos, decidimos con Inés repetir la experiencia del viaje. Partimos rumbo a Granada, al sur de España. Pasamos por Córdoba, Sevilla y otros pueblos. Al llegar al hotel en Granada, el día 23 de febrero, nos extrañó que no hubiese nadie en la recepción ni en las inmediaciones. Había un silencio sepulcral. Transcurrido algún tiempo, de pronto y desde detrás del mesón, apareció el recepcionista. Se lo veía nervioso y muy atemorizado. El hombre nos informó que, al parecer, se había producido una intentona de golpe en Madrid. No supo darnos mayores antecedentes. Tras registrarnos, decidimos salir a dar una vuelta y asistimos a un espectáculo de baile flamenco. Al regresar, muy tarde y cansados, tipo una de la mañana, la televisión estaba transmitiendo la intervención del rey de España, Juan Carlos I, quien informaba al país de un intento de golpe de Estado. En Madrid, a eso de las seis de la tarde, un grupo de la Guardia Civil, al mando del teniente coronel Antonio Tejero, había asaltado el Palacio de las Cortes, que alberga la Cámara de Diputados. En el lugar, se votaba la investidura del nuevo Presidente Leopoldo Calvo-Sotelo, de la Unión de

Centro Democrático (UCD), el conglomerado de Adolfo Suárez, quien había dimitido poco antes. Los militares habían secuestrado a los diputados y miembros del gobierno presentes al interior del edificio parlamentario. En paralelo, en Valencia, el teniente general Jaime Milans del Bosch había liderado a las tropas que se habían tomado la ciudad.

Con Inés, nos miramos nerviosos, preguntándonos: “¿Y ahora qué vamos a hacer?”. Era una situación complicada; si se instalaba en España una dictadura de corte franquista, no teníamos ninguna certeza de que pudiéramos quedarnos, mucho menos de que estaríamos a salvo. Evaluamos la posibilidad de encaminarnos lo antes posible rumbo a Barcelona, atravesar hacia Francia y luego volver a Roma. Por suerte, al día siguiente las cosas se calmaron un poco. Cerca del mediodía, los asaltantes del Congreso se entregaron y liberaron a los parlamentarios retenidos. La gente salió a las calles en masa a protestar y a exigir libertad y democracia para el país.

Ya de regreso en Madrid, arrendamos un departamento amoblado en calle Sor Ángela de la Cruz, aledaña a la Plaza Cuzco, y allí nos instalamos. Era un departamento céntrico, luminoso, en el que estábamos más cómodos. Compramos cortinas y un televisor. En definitiva, decidimos intentar hacernos los tontos con el exilio; jugar a ser como cualquier pareja adulta joven, con sus hijas, viviendo en una bonita ciudad en Europa. Era tanto el dolor de estar lejos que, creo, esto nos ayudó, en parte, a afrontar la situación sin venimos abajo. Ese departamento fue nuestro primer hogar en el exilio, y nos esmeramos en transformarlo en un espacio cálido y acogedor para todos. Nuestra casa en Santiago, en la que vivimos tantos años, debimos desarmarla, prestar nuestros muebles a amigos y parientes, y ponerla en arriendo. Fue una aleccionadora experiencia de desapego.

Vivir en ese departamento madrileño, pese a todas las pérdidas sufridas, fue una buena experiencia. Allí alojaríamos a muchos amigos que estaban de paso por Madrid, otros vendrían a pasar Navidades y otras fechas especiales; entre ellos, el cantautor Fernando Ubierno. Todo el tiempo recibíamos visitas y nuestro hogar parecía una verdadera pensión, siempre llena de gente. Fueron contados los días en que no acogimos a algún viajero. Entre las numerosas personas que conocimos en esa época y con quienes hicimos amistad estuvo Mercedes Sosa, la reconocida cantante de música folclórica argentina, quien vivía en nuestro mismo edificio. También el escultor Sergio Castillo.

Pronto, decidí que era hora de buscarme una actividad en Madrid. Primero, empecé a trabajar en la Fundación Humanismo y Democracia, un organismo creado en 1977 para apoyar la transición a la democracia en España, tras el fin de la dictadura de Franco. Muchos democratacristianos españoles participaban en esta fundación. Su presidente, entonces, era Fernando Álvarez de Miranda, quien me prestó mucho apoyo durante esa época, transformándose también en un amigo con el que siempre pude contar. En el intertanto, hice todo lo posible por mantenerme muy conectado con lo que sucedía en Chile. Las llamadas telefónicas en esa época eran caras y complejas, por lo que me aboqué a escribir cartas. ¡Escribí muchísimas!

5. Una fundación para recuperar la democracia

En abril de 1981, resolví crear una fundación, con el objetivo de tender puentes de solidaridad y cooperación entre Iberoamérica y España para la recuperación de nuestras democracias, y luchar contra las dictaduras que campeaban en nuestro continente. Así nació el Centro de Investigación, Promoción y Cooperación Internacional (CIPIE).

En un principio, el proyecto apuntaba a encontrar aliados en España, pero, a medida que fui entablando nuevas redes con el resto de Europa, este pasó a tener un enfoque de colaboración con todo el continente europeo. El objetivo era apoyar proyectos concretos focalizados en el desarrollo social y fortalecimiento de los movimientos democráticos de América Latina. Con el tiempo, no solo entablaríamos vínculos verdaderos y tangibles: nuestro alcance y acción serían contundentes y de gran valor.

CIPIE significó, para mí, no solo un lugar donde trabajar, sino que también me permitió generar un espacio de encuentro con muchos otros exiliados, tanto del mundo demócratacristiano como también de otras esferas políticas, como los socialistas Ricardo Núñez, José Miguel Insulza, José Antonio Viera-Gallo y Jorge Arrate. También me permitió trabajar muy de cerca con personas como Alberto Jerez, quien se había alejado de la DC años antes para integrar, primero, el MAPU y, luego, la Izquierda Cristiana. Él, al igual que yo, vivía en ese entonces en Madrid.

El apoyo de la Fundación Humanismo y Democracia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del propio ex Presidente español Adolfo Suárez y de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, nos permitió organizar numerosas actividades, eventos y seminarios, en los que participaron destacadas personalidades como Rafael Caldera, ex Presidente de Venezuela; Napoleón Duarte, entonces Presidente de El Salvador; Ricardo Arias Calderón, en aquel tiempo presidente de la ODCa; Mariano Rumor; Eduardo Frei Montalva, así como diversos dirigentes chilenos y latinoamericanos, tales como Patricio Aylwin, Jaime Castillo, Luis Alfonso Resk, de Paraguay, y Juan Pablo Terra, de Uruguay. Empezamos a trabajar con la Comunidad Económica Europea, presentando

proyectos por países. Yo viajaba mucho a Roma a participar en todo tipo de actividades a las que me invitaban los italianos. Rápidamente, iniciamos colaboraciones con uruguayos, argentinos, brasileños, ecuatorianos, colombianos y peruanos. Incluso sostuvimos una relación semiclandestina con Cuba, a través de la suscripción de un convenio de asistencia en materia de cooperativas campesinas con la Universidad de La Habana. Esto nos permitió mantener sigilosas relaciones con el mundo cubano disidente, en un país bajo una dictadura con la que no estábamos de acuerdo. Viajé especialmente a La Habana a suscribir ese convenio.

En el caso chileno, la fundación sería de gran relevancia en nuestra lucha contra la dictadura y, muy especialmente, para el plebiscito de 1988, en el sentido de recaudar los recursos necesarios para solventar la preparación y el desarrollo de la campaña contra la dictadura. CIPIE me sirvió como plataforma de comunicación y coordinación con dirigentes de todo el mundo durante el tiempo que se prolongó mi exilio.

Tras la recuperación de la democracia en Chile y en el resto de los países latinoamericanos, en 1993 hice entrega de la fundación a José María Aznar, futuro Presidente del Gobierno de España, con el objetivo de que se hiciera cargo de ella el Partido Popular español. Con el tiempo, esta sería galardonada con diversas distinciones y reconocimientos; entre ellos, el Premio Mensajero de la Paz de Naciones Unidas, concedido en 1987, por sus destacadas acciones y proyectos de desarrollo social en América Latina y África; el Premio al Emprendedor Solidario Argentina, en 2014, y Tutor Awards, en 2017.

6. Un nombramiento inesperado: La presidencia de la Internacional DC

En 1982, me correspondió asumir otro importante desafío: la presidencia de la Internacional Demócrata Cristiana (IDC) que, hasta ese momento, se llamaba Unión Mundial Democratacristiana (UMDC). En un principio, desde la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), estructura en la que confluían todos los partidos democratacristianos de la región, se había propuesto el nombre de Eduardo Frei Montalva para dicho cargo, el que en ese momento ejercía el ex Presidente italiano Mariano Rumor. Yo, por supuesto, había apoyado la idea. La Internacional tenía entonces un especial compromiso con los países de Latinoamérica, debido a la grave situación producto de las dictaduras extendidas por toda la región. En ese contexto, me parecía lógico y más que necesario que Frei pudiera presidir la organización, de manera de poder continuar con nuestra lucha. Pero la moción jamás llegaría concretarse. Sería asesinado en enero de 1982.

La muerte de Frei dejó un gran vacío en la Internacional Demócrata Cristiana. Durante varios meses la entidad quedó sin un liderazgo, hasta que el dirigente panameño Ricardo Arias Calderón, presidente del partido democratacristiano de ese país —quien posteriormente ocuparía importantes cargos en el gobierno, y con el cual tuve ocasión de asistir a diversos encuentros en Italia, España y Venezuela—, en representación de la ODCA, decidió proponer mi nombre. Los partidos democratacristianos de América Latina, el Caribe y Centroamérica respaldaban su decisión, confiados en mi experiencia como presidente nacional del partido en Chile.

Los europeos apoyaron la propuesta. La verdad, para mí fue algo inesperado. Lo lógico hubiera sido que ellos nominasen a uno de los suyos. No obstante, en esos momentos Chile se alzaba como un foco de absoluta relevancia desde el punto de vista político a nivel internacional, representando el símbolo de la lucha contra una oprobiosa dictadura. Algo similar ocurría con Polonia. En este sentido, el apoyo y la solidaridad de los partidos europeos con Chile eran unánimes, tanto a nivel de la Internacional Socialista (IS) como de la Internacional Liberal (IL) y Demócrata Cristiana.

Por supuesto, me sentí honrado. Era el primer no europeo en ocupar dicho cargo. El desafío era enorme, pero entendía, además, que representaba una gran oportunidad: podía aprovecharlo como una ventaja para seguir combatiendo a Pinochet. Fue así como, a fines de noviembre de 1982, en la ciudad de Quito, Ecuador, asumí la presidencia de la Unión Mundial Demócrata Cristiana (UMDC), reemplazando a Mariano Rumor. Desde entonces esta pasó a denominarse Internacional Demócrata Cristiana (IDC), una organización que agrupaba a 58 países del mundo y cuyo mandato ejercí hasta el año 1986. El cargo de secretario general lo ocupó el italiano Angelo Bernassola, quien sucedió al guatemalteco René de León.

Teníamos bastante claras las bases y principios que guiarían nuestra gestión, los que sintetice en el discurso inaugural: “Un compromiso con el humanismo, la lucha por una comunidad libre y justa; el respeto de todos los derechos del hombre; el pluralismo en la sociedad; la igualdad de oportunidades; la solidaridad activa y el espíritu universalista”. Mi intención era transformarme en un presidente itinerante, capaz de recorrer el mundo para tomar contactos, estrechar lazos, recoger experiencias e ir tomando el pulso para determinar dónde era necesario prestar apoyo y solidaridad, especialmente en aquellos movimientos que tuviesen un contenido humanista cristiano. Todo esto estaría centrado en el fortalecimiento de tres elementos medulares: humanismo, democracia y justicia internacional.

A fines de ese mes, organicé un viaje a Mendoza para reunirme con mi familia y amigos. El motivo oficial era la celebración de San Andrés, el día 30 de noviembre, fecha que siempre festejábamos todos juntos. Los demás se entusiasmaron, no solo mis padres y hermanos, sino que también otros parientes, como mis primos Achurra y Larraín Orrego, amigos e, incluso, un número importante de dirigentes del partido. A medida que se fue corriendo la voz, el asunto fue agarrando vuelo. Finalmente, cerca de 300 personas terminaron cruzando la frontera, algunos por tierra y otros en avión. Jorge Lavanderos, Luis Pareto, Carlos Demarchi, José Monares y otros camaradas emprendieron rumbo a Argentina en un bus que salió desde San Antonio. En Chile, el encuentro fue cubierto por la prensa durante tres o cuatro días seguidos, y hasta viajó una periodista del diario Las Últimas Noticias, Celeste Ruiz de Gamboa, a reportear. Fueron días intensos y emocionantes, llenos de abrazos, buenas sorpresas y largas tertulias. Después de dos largos años de separación, estar con tanta gente querida, poder mirarnos a los ojos, estrechar manos, constatar cómo habían crecido los sobrinos y conocer a algunos que habían nacido en el intertanto,

conversar directamente acerca de lo que estaba ocurriendo en Chile fue una alegría inmensa. Hasta ahí, no dimensionaba lo mucho que extrañaba el mundo de los afectos. Había resistido estoicamente esos años de separación, pero entonces tomé conciencia del enorme costo que significaba estar lejos del terruño y de los míos. Aproveché cada momento, como si fuese el último. Me imagino que Augusto Pinochet no debe haber estado muy contento con la noticia. Entre los eventos celebrados, recuerdo un acto organizado por los dirigentes argentinos de San Juan y Mendoza, consistente en una cena masiva de chilenos y argentinos para expresar su solidaridad con la lucha contra la dictadura chilena.

No podía dejar de aprovechar aquel dichoso paso por Mendoza para reunirme, también, con mi amiga Mercedes Sosa, quien había dejado Madrid para retornar a Argentina. “Mire, Andrés... No pisaré Chile hasta que usted no regrese a su país. El día que lo haga, volveré a Chile y le cantaré en un nuevo recital”, me expresó en esa oportunidad.

7. Una presidencia peregrina

Mi presidencia en la Internacional Demócrata Cristiana se prolongó hasta 1986. La bauticé como “la presidencia peregrina”, pues dado que no éramos una organización que contara con muchos recursos —a diferencia de otras que eran financiadas por gobiernos poderosos, tales como la Unión Soviética y Estados Unidos—, debía trasladarme permanentemente por el mundo para entablar nexos y futuras colaboraciones, así como también para generar cobertura de prensa que nos posicionara en el mapa. Muchas veces me sentí como un verdadero Quijote. Fueron cuatro años de llevar, incesante, el mensaje de la Democracia Cristiana a todo el mundo, así como la urgente necesidad de derrotar a Pinochet en Chile y a otros dictadores.

Pronto, la IDC comenzó a proyectarse como una de las internacionales políticas más vanguardistas de la época, particularmente frente a los problemas de los países centroamericanos y del Cono Sur. Nuestro trabajo político estaba definido en torno a una trilogía fundamental: democracia, derechos humanos y justicia social. Desde esta perspectiva, el rol que podía jugar Europa frente al Tercer Mundo era un factor clave y vital en términos de estabilidad y equilibrio, evitando, de paso, la polarización en el solo juego de los intereses de las superpotencias. América Latina atravesaba por un proceso de transición a la democracia, y los europeos podían aportar decididamente en la construcción de una relación triangular equilibrada entre Estados Unidos, Europa y nuestro continente.

Nuestro compromiso como Democracia Cristiana fue siempre universal. Trabajamos arduamente por garantizar la libertad y el pluralismo, el resguardo a los derechos humanos y la estabilidad y gobernabilidad en el mundo. Establecimos alianzas de colaboración con todas aquellas fuerzas políticas internacionales dispuestas a apoyar, bajo un compromiso común, la democracia, el humanismo y la justicia, entre ellas, la Internacional Socialista y la Internacional Liberal. Junto a estas, representábamos las tres grandes expresiones de la confrontación Este-Oeste.

En abril de 1984, en un encuentro que se materializó en una cumbre realizada en

Roma, nos reunimos el ex canciller alemán y presidente entonces de la Internacional Socialista, Willy Brandt; el senador italiano y presidente a la fecha de la Internacional Liberal, Giovanni Malagodi, y yo para firmar un compromiso de consenso en representación de las tres internacionales. Mediante este acuerdo, se estableció como objetivo prioritario el trabajar conjuntamente en favor de la paz, la libertad, los derechos humanos, la democratización y la justicia social en América Latina, tanto en aquellos países donde las dictaduras estaban ya instaladas, como en aquellos donde estas estaban emergiendo. Creo que este fue un hito clave en materia de convergencia, representando un importante punto de partida por aunar esfuerzos y entablar entendimientos entre el mundo socialista y el mundo democratacristiano, lo que, por cierto, dio muchos frutos, pese a que en un principio algunos se mostraron escépticos y lo consideraron una verdadera utopía. Ello, por ejemplo, nos permitió superar las diferencias respecto a la crisis centroamericana y respaldar los esfuerzos de paz del Grupo Contadora. Todo ello, evidentemente, estaba en la línea de lo que yo quería para Chile.

Fueron años intensos y de un trabajo arduo. Trabajé con los italianos, alemanes, ingleses, belgas, franceses y holandeses, con dirigentes latinoamericanos, africanos y también de Asia. Visité dos o tres veces los países nórdicos. Hicimos varias giras por Latinoamérica. Otra, en 1984, por África, en la cual visité Mali, Costa de Marfil y Kenia, culminando con un encuentro en Kampala, Uganda, luego de un lustro desde que fuese derrocado el dictador Idi Amin. Allí respaldamos al dirigente Paul Ssemogerere, líder del Partido Democrático de Uganda.

A fines de 1985, la Internacional Demócrata Cristiana recibió una importante invitación de parte del gobierno de la República Popular China. Mao Tse-Tung había muerto en 1976, y la Revolución Cultural —que había causado estragos, represión y dolorosas implicancias para el pueblo chino— ya había sido enterrada. Gobernaba en ese entonces el Presidente Li Xiannian, pero quien indiscutiblemente era el hombre fuerte y artífice del programa de modernización de la nueva China era el carismático e influyente dirigente Deng Xiaoping, perseguido por sus ideas durante el régimen anterior.

Nuestro viaje a Pekín lo hicimos con una delegación integrada por un ministro alemán cuyo nombre no recuerdo; Angelo Bernassola, secretario general de la Internacional, y el filipino Raúl Manglapus, vicepresidente para Asia, quien tras la caída de Marcos llegaría a ser senador y canciller de su país. Era la primera delegación de una internacional política que visitaba China tras la muerte de

Mao. La gira duró diez días, bajo un intenso programa de actividades. En el aeropuerto de Pekín nos esperaban numerosas autoridades y fuimos recibidos con especial protocolo. Nos asignaron una limusina que nos acompañó durante toda la gira y un minibús para el resto de la delegación. Dentro de las primeras impresiones, me impactó ver las avenidas repletas de bicicletas, muy pocos vehículos motorizados circulando y, por cierto, ninguna autopista; muchas calles ni siquiera estaban pavimentadas. El hotel en que nos alojaron estaba recién construido, era moderno y confortable, pero se notaba un déficit en el servicio, no precisamente por falta de personal, sino porque este aún no estaba entrenado para la atención de pasajeros. Saltaba a la vista, para una persona occidental que recién los visitaba, que China era un país muy atrasado. Por supuesto, los edificios y construcciones patrimoniales, como la Ciudad Sagrada, el Palacio de Invierno, la Plaza de Tiananmén o la impresionante Muralla China eran imponentes. No obstante, cuando recorrimos otras localidades, llamaba la atención la falta de modernización, los caminos construidos casi en forma manual y sin maquinaria. En el mundo rural, las viviendas eran sumamente precarias, y todo era de uso colectivo.

Tras nuestra visita a Pekín, la gira comprendió tres provincias chinas: una en el centro meridional Sichuan, cuya capital es Cheng Du; otra al sureste que limita con Vietnam, Yunnan, cuya capital es Kunming, y una última al sur, Guangdong (o Cantón), a cuya capital, Guangzhou, nos trasladamos por vía aérea. Desde ahí pudimos recorrer otros lugares, extendiéndose la visita a fábricas, universidades y sectores rurales. Se veía que era un país que venía saliendo de un largo período de letargo. La Revolución Cultural había remecido al país y a su gente, pero se esmeraron en darnos una delicada atención.

En las reuniones sostenidas con el Centro de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino se informó de la labor de la Internacional Demócrata Cristiana en el mundo, de su posición política y, como contrapartida, obtuvimos una información detallada de la China actual. Evidentemente, lo más importante para nuestra delegación era la conversación que sostendríamos con las autoridades de gobierno. En primer lugar, nos recibió el Presidente Li Xiannian; luego nos reunimos con Gao Shang Quan, viceministro encargado de la Comisión Estatal de la Reforma de la Estructura Económica, y con otras autoridades regionales y nacionales. Por último, sostuvimos una interesante entrevista con Deng Xiaoping.

Durante la conversación con el Presidente, que fue más bien protocolar, él nos

relató lo que estaba sucediendo en el país, los graves problemas y efectos negativos provocados por la denominada Revolución Cultural, la anarquía y el desgobierno. Los integrantes de la “Banda de los Cuatro” —un grupo de influyentes dirigentes del Partido Comunista Chino, entre los que figuraba la viuda de Mao, Jiang Qing— estaban en prisión, procesados por traición y otros delitos cometidos contra el Estado chino; entre ellos, la muerte de aproximadamente 35 mil personas en el transcurso de la Revolución Cultural, así como la persecución de tres cuartos de millón de ciudadanos inocentes. La franqueza y apertura de su relato nos impresionó. Al terminar la entrevista, el Presidente me comentó: “He sido informado por quien está a cargo de su visita que usted habría preguntado por qué no se ha incluido dentro del programa de actividades una visita al Mausoleo de Mao. La verdad, nosotros no deseamos imponer a nadie esa visita; no obstante, es factible que usted la realice si esa es su voluntad”. Tras hacer un movimiento elevando los brazos al cielo, el Presidente añadió: “Mao no fue un Dios, pero China sí debe reconocer que fue un gran líder y artífice de nuestra consolidación como nación, un país donde existen decenas de nacionalidades y, por cierto, grandes problemas sociales”.

Nuestra conversación posterior con Deng Xiaoping fue de sumo interés y, quizás, lo más relevante dentro de la gira. Él se explayó en una larga y detallada explicación respecto al diseño y alcances del programa de desarrollo de la China del futuro, afirmando que para ello se requería un gobierno fuerte y centralizado. Según lo que nos dio a entender, el modelo de gestión no estaba en discusión; sin embargo, en materia económica, se recogerían todos los aspectos positivos del mercado, proyectando desarrollar la actividad privada bajo un proceso gradual y, por supuesto, con toda la presencia del Estado que fuese necesaria al interior del aparato productivo. Claramente, manifestó ser un decidido partidario de liberalizar la actividad productiva, pero, con igual énfasis, planteó que en materia de gestión gubernamental estaba convencido de que en China jamás habría apertura a un modelo de democracia liberal, tal como la conocíamos en Occidente. Al respecto, señaló: “China tiene una historia y tradición cultural que no pueden asimilarse al mundo occidental”. Ante mi insistencia sobre la contradicción que podría producirse entre libertad económica y régimen autoritario, expresó que consideraba que aquello no constituía un riesgo real para China y que apostaba a que era el camino a seguir. En forma muy amable y con una sonrisa, me expresó: “Presidente, le apuesto que si nos volvemos a encontrar en diez años más, usted corroborará quién tenía la razón. No se olvide de que los chinos descubrimos la pólvora”. Han transcurrido más de 30 años desde aquel día, y Deng Xiaoping, sin duda, ganó la apuesta. Sin embargo, aún sigo creyendo

que, en el largo plazo, terminará imponiéndose en China un modelo democrático, evidentemente acorde con la compleja idiosincrasia y realidad cultural de esa importantísima nación.

Tras nuestro regreso a Roma, redacté un informe detallado para la IDC, resumiendo la importancia política de la visita y las perspectivas futuras de la relación: “Aconsejo a los partidos demócratacristianos y, en especial, a los gobiernos en que tenemos presencia, que adopten las medidas tendientes a estrechar los canales de contacto e intercambio con China, país en el cual se está experimentando un cambio profundo, con consecuencias inevitables para todo el mundo, no solo en materias económicas y sociales, sino que también en lo que se refiere a su importante influencia en la disposición del equilibrio en las relaciones internacionales”¹⁰². Era diciembre de 1985.

Meses más tarde, en febrero de 1986, visitamos Estados Unidos con una delegación de dirigentes demócratacristianos europeos, latinoamericanos y africanos, reuniéndonos con los partidos Demócrata y Republicano, así como también con representantes de la Cámara y del Senado. En la Casa Blanca sostuvimos un encuentro protocolar con el Presidente Ronald Reagan y, posteriormente, con el entonces vicepresidente, George Bush padre, así como también con el secretario de Estado, George Schultz. Fue una agenda intensísima, de numerosas entrevistas y reuniones con las principales organizaciones sindicales y empresariales del país. En estos encuentros participaron, por ejemplo, el secretario general de la OEA, Joao Baena Soares, y el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Nuestro mensaje fue siempre el mismo: solicitar respaldo y solidaridad para con todos los países sometidos a dictaduras, fuesen estas de derecha o de izquierda, del bloque occidental o del dominado por la Unión Soviética, ya fuera la Cuba de Fidel Castro, Nicaragua de Somoza, Filipinas de Marcos y, por supuesto, la de Pinochet en Chile. El norte de nuestro mensaje era la democracia y el irrestricto respeto a los derechos humanos.

En toda esta labor que ejercí, quiero destacar el apoyo de todos los partidos demócratacristianos europeos, así como también del entonces Presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, para llevar adelante nuestra presencia política en el ámbito internacional. Notable, en este sentido, fue el trabajo desplegado por nuestro secretario general, el italiano Angelo Bernassola, y por el subsecretario André Louis, de Bélgica. Las principales actividades eran respaldadas por los partidos europeos, especialmente por la Democracia

Cristiana italiana y alemana, así como también por fundaciones belgas y holandesas. Asimismo, no puedo dejar de mencionar el apoyo y amistad que me brindaron dos grandes líderes europeos socialistas: Felipe González y Mario Soares. El primero me dio su respaldo una vez que asumió, en 1982, como Presidente del Gobierno de España. Con el Presidente de Portugal Mario Soares participamos en numerosos encuentros realizados para promover la solidaridad y el respaldo a la democratización en América Latina.

En junio de 1986, entregué el mando de la Internacional en una asamblea general realizada en Lisboa, Portugal. Para entonces, muchas cosas habían sucedido. El mapa político había cambiado. Buena parte de los países latinoamericanos y del Caribe que habían estado bajo dictaduras al momento de asumir mi presidencia, ahora ostentaban gobiernos libres o al menos se encontraban en procesos de transición. Argentina había recuperado su democracia, al igual que Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y Honduras. Me sentí satisfecho, pues dejaba mi cargo en circunstancias en que se podía al fin decir que la democracia estaba retomando terreno en nuestro continente. Chile aún estaba bajo una dictadura, pero no sería por mucho tiempo más. La recuperación de nuestros derechos y libertades estaba en vías de conquistarse. Teníamos la certeza de que íbamos por buen camino.

En dicha asamblea participaron los delegados de los 56 países que formaban parte de la IDC. Nos reuníamos después de cuatro años de nuestro encuentro en Quito, el año 1982, pero esta vez no lo hacíamos como Unión Mundial Demócrata Cristiana, sino que como Internacional Demócrata Cristiana, una organización estructurada y con un peso específico en todo el mundo, equivalente al de las otras internacionales políticas, con presencia en América, África, Asia y Europa. A la fecha, existían seis gobiernos democratacristianos en Europa, cuatro en América Latina y la presencia de la DC era una realidad viva y naciente en la nueva democracia de Filipinas, en Corea del Sur, en Uganda. Esta había sido la meta que nos habíamos propuesto en nuestra gestión. Habíamos crecido mucho y nuestra presencia calaba cada vez con mayor intensidad en la opinión pública mundial. Nuestro mensaje había atravesado los cinco continentes. Éramos escuchados y respetados en el mundo entero. La presidencia itinerante, el diálogo de las tres internacionales, un nuevo proyecto de democracia basado en la relación triangular Europa-América Latina-Estados Unidos, las ideas capitales de democracia, justicia y libertad instaladas con fuerza... Nuestras tesis parecían comenzar a hacerse realidad.

Tras rendir la cuenta final, recibimos el reconocimiento unánime de parte de todos los delegados que integraban la Internacional, bajo un cálido y aplaudido homenaje. Fue elegido presidente por un nuevo período de cuatro años el destacado dirigente y parlamentario italiano Flaminio Piccoli, quien había sido Presidente de Gobierno y ministro de Estado. Piccoli me pidió integrarme a la directiva en calidad de presidente honorario, tras lo cual me desempeñé como consejero asesor entre 1986 y 1989, y, posteriormente, como miembro de su bureau político desde 1989 hasta 2000. Para ese entonces, en el mundo entero se hablaba de lo que éramos capaces.

8. La muerte de un padre político

Uno de los hechos que más marcaron mi exilio, así como mi vida política en general, fue la muerte de Eduardo Frei Montalva, el 22 de enero de 1982. Desde el anuncio de mi expulsión del país, habíamos mantenido un permanente contacto. A menudo, nos encontrábamos en diferentes ciudades, puesto que él también estaba involucrado en labores internacionales de la Democracia Cristiana. De hecho, desde 1977, integraba la Comisión Brandt “Diálogo Norte-Sur”, una iniciativa dirigida por Willy Brandt, ex canciller de la República Federal Alemana, presidente de la Internacional Socialista y Premio Nobel de la Paz en 1971. Dicha comisión, respaldada por las Naciones Unidas, tenía por objetivo reunir a un grupo de expertos internacionales, representativos de todo el mundo, para aportar en la resolución de problemáticas económicas y sociales entre países desarrollados y en vías de desarrollo. La comisión estaba conformada por 17 miembros, entre ellos, Olaf Palme, ex Primer Ministro de Suecia; Edgard Pisani, político y ex ministro francés; Layachi Yaker, diplomático argelino y ex secretario ejecutivo de la Comisión Económica de África; Rodrigo Botero, ex ministro de Hacienda de Colombia, y Shridath Ramphal, ex ministro de Relaciones Exteriores de Guyana. Estos dos últimos, junto con Frei, eran los tres latinoamericanos convocados.

Frei siempre mantuvo una gran presencia y prestigio en todo el mundo. Aunque el golpe de Estado de 1973 y su postura frente al mismo le significaron, en un comienzo, duras críticas respecto a su liderazgo y al rol de la DC dentro del escenario político chileno, no tardó en recuperar el reconocimiento internacional que siempre caracterizó su figura. Adonde iba, era recibido por los más destacados líderes y autoridades. Su inteligencia, genialidad política y estatura de gran estadista le abrían todas las puertas. Fue una persona que nunca dejó de luchar por la recuperación democrática y, rápidamente, se instaló como líder reconocido de la oposición a la dictadura en Chile.

En noviembre de 1981, don Eduardo me llamó a Madrid para contarme que se operaría en la Clínica Santa María. Sufría de una hernia al hiato que le provocaba graves molestias. Le dije que no se operara en Chile, pues me parecía

muy riesgoso. A esas alturas, no me cabía duda de que Pinochet era capaz de cualquier cosa. Recordaba con claridad aquel discurso que el dictador había pronunciado años antes, en el Club de la Unión, cuando, irritado ante nuestra denuncia por las irregularidades cometidas durante el plebiscito de 1980, nos había apuntado con el dedo a Frei, a Tucapel Jiménez y a mí. Si Pinochet había sido capaz de mandar a torturar y asesinar a tantas personas, de lanzarlos al mar, de hacerlos desaparecer... ¿Qué le costaría conseguir que alguien se infiltrara en una clínica y colocara un apósito infectado durante la cirugía? Ninguna norma de seguridad sería suficiente para prevenir algo así.

“Andrés, ya tomé la decisión. Me voy a operar acá”, me dijo Frei, convencido. Le insistí que lo hiciera en el extranjero. Yo podía hablar con mis amigos italianos y contactaríamos a los mejores especialistas. “No te preocupes. Confío en los médicos chilenos. Además, me voy a operar con un primo tuyo, Augusto Larraín, quien es experto en este tema”, me contestó. No hubo forma de convencerlo de lo contrario.

Se operó en noviembre de 1981. Volvimos a hablar poco después de la cirugía, y me dijo que se sentía bien. A comienzos de diciembre, sin embargo, tuvieron que llevarlo de vuelta a la clínica. Después de eso, perdimos el contacto. Me comuniqué con su familia, y ellos me mantuvieron informado. Me contaron que los médicos decían que se había agravado, producto de un supuesto shock séptico postoperatorio. Quería viajar a Chile, pero me resultaba imposible.

Lo volvieron a operar el día 6 de diciembre, intervención de la que no se recuperaría. Murió el 22 de enero de 1982. La noticia la recibí en España, de boca de Fernando Álvarez de Miranda. Fue un golpe durísimo. Para mí, Eduardo Frei era un verdadero padre político. La prensa, incluso, nos identificaba a Juan Hamilton, a Rafael Moreno y a mí como “los cachorros de Frei”; en la portada de la revista *Qué Pasa* se publicaron alguna vez nuestros retratos junto a un titular con este apodo¹⁰³. Nuestra estrecha relación trascendía la diferencia de edad. No éramos de andar palmoteándonos en la espalda o haciendo bromas, pero teníamos una química muy especial. Era un líder al que siempre admiré y con quien me identificaba, una persona que me daba fuerzas y cuyo testimonio de vida fue inspirador en mis propias opciones políticas. Él me abrió los espacios que permitieron convertirme en quien soy hoy.

Tras el anuncio de su muerte, la Unión Centro Democrático española resolvió enviar a Chile una comitiva presidida por Fernando Álvarez de Miranda y el

diputado Luis Vega Escandón. Me pidieron que los acompañara. Yo, por supuesto, me había planteado esta posibilidad, pero no estaba seguro de que la dictadura me permitiría ingresar a Chile. Le envié un telegrama al gobierno, informando sobre mis intenciones de viajar para despedir a Eduardo Frei, pero no recibí respuesta. “Andrés, no te pueden prohibir que entres. En plena dictadura de Franco, estando en el exilio, mi padre tuvo un problema de salud. Yo pedí permiso y me dejaron ingresar. ¿Cómo no te lo van a permitir a ti?”, insistió Álvarez de Miranda. Convencido, decidí hacer el esfuerzo y sumarme a la comitiva. Nos subimos al avión y partimos a Chile.

Durante el vuelo, me invadió un presentimiento. “Fernando, no me van a dejar entrar. Así que voy a redactar una declaración ahora mismo y te la voy a entregar a ti”, le dije. En el texto, escrito de mi puño y letra, dejé consignado que mi intención era despedir a Frei, con quien me sentía enormemente comprometido. Cuando ya estábamos a punto de aterrizar, se la entregué a Álvarez de Miranda. “Guárdala ahora, porque si me la pillan, me la van a quitar. Cuando estés afuera, se la entregas a algún dirigente del partido. De seguro van a estar esperándote en el aeropuerto”, le dije.

Apenas el avión tocó tierra en Santiago, quedó claro lo que sucedería. Nos obligaron a avanzar hasta un extremo de la pista de aterrizaje, lejos de la gente que esperaba con pancartas en las terrazas del aeropuerto. Vimos por la ventanilla acercarse un minibús de color gris, con un cartel que decía “Protocolo”. “¿Ves, Andrés? Nos vienen a buscar. ¿Qué te dije?”, exclamó Fernando. Entonces, se abrieron las puertas del avión e ingresaron unos hombres cargando metralletas. “¿¿Dónde está Zaldívar?! ¿¿Dónde está Zaldívar?!”, gritaban, avanzando por el pasillo. La gente, asustada, se escondía en sus asientos, mientras mis dos acompañantes discutían qué hacer, si descender o quedarse a bordo conmigo. “Lo mejor que pueden hacer es bajar del avión. Fernando, no te olvides de entregar la declaración”, les dije con la mirada puesta adelante, observando a los hombres armados acercándose cada vez más.

Los soldados me escoltaron hasta la cabina de primera clase. Ahí me arrinconaron con sus metralletas. En el intertanto, hicieron descender a todos los pasajeros. Pronto, ya no quedó nadie más en el avión. A los pocos minutos, subió otro grupo de funcionarios. “¿Usted tiene que bajar!”, me gritaron. Entre empujones, me obligaron a descender. En la pista nos esperaba una camioneta pick-up. Me metieron adentro a la fuerza y me trasladaron hasta el otro extremo del aeropuerto, donde esperaba un avión LAN Chile con los motores encendidos,

listo para despegar. Acompañado de cuatro hombres, me hicieron subir las escaleras y sentarme en la primera fila. Acto seguido, mis escoltas se acomodaron también en asientos contiguos. En ese momento, un millón de cosas se me pasaron por la mente. No sabía siquiera adónde planeaban llevarme.

Iniciado el vuelo, en algún momento, un pasajero se me acercó y, con disimulo, dejó caer sobre mi regazo un montón de papelitos. Apenas pude contener las lágrimas cuando los abrí. Eran mensajes de Claudio Orrego, José Florencio Guzmán y muchas otras personas que habían estado en el aeropuerto esperándome y que, al darse cuenta de lo que sucedía, les habían entregado pequeñas notas manuscritas a los pasajeros que esperaban para abordar el avión.

A continuación, la azafata habló por el altoparlante, anunciando que nos dirigiáramos a Nueva York. Allí estaba de paso, por razones de trabajo, mi hermano Rodrigo; así que empecé a pensar en cómo ubicarlo. No tenía dinero, pasaporte, ni siquiera mi maleta. Todo había quedado en el otro vuelo. El avión despegó y, al par de horas, avisaron que haríamos una escala en Lima. Era casi medianoche cuando aterrizamos. Por los parlantes avisaron que debíamos descender. Mis escoltas se pusieron de pie y bajaron conmigo. En tierra firme, me dejé arrastrar por el tumulto, confiado en que pronto nos harían regresar para continuar el viaje, pero cuando miré a mi alrededor, me percaté de que había quedado solo.

Se me acercaron unos policías peruanos, que deben haber advertido mi cara de confusión. Les expliqué lo sucedido y llamaron a un supervisor. Le conté al hombre quién era y le pedí que se contactara con el Ministerio del Interior — Fernando Belaunde era entonces Presidente de Perú—. En el intertanto, me condujeron a unos camarotes donde descansaban los guardias del aeropuerto. Me ofrecieron una de las camas, mientras se resolvía qué hacer. Temprano, a la mañana siguiente, conseguí un teléfono para llamar a Chile y logré comunicarme con la señora Maruja, la esposa de Eduardo Frei. Tras darle mis condolencias, le conté lo que había sucedido. Poco después, los funcionarios del aeropuerto me avisaron que pronto aterrizaría un avión Iberia con destino a Madrid, y que tenía un asiento reservado a bordo. Eran alrededor de las nueve de la mañana cuando me embarqué.

Más tarde me enteraría de que no había sido el único que había vivido algo así. Jaime Castillo, Renán Fuentealba y Claudio Huepe habían viajado también a Chile desde Venezuela, con la intención de asistir al funeral de don Eduardo,

pero a los tres los habían subido a otro avión y enviado a Argentina.

Por esos días, se había desatado una gran polémica a raíz de los funerales de Frei, y es que Augusto Pinochet había manifestado su intención de asistir para rendir “su homenaje” al expresidente. En un intento por asegurar nuestro ingreso a Chile, la señora Maruja puso como condición al respecto que nos permitieran ingresar al país. Pero ni siquiera esto hizo ceder al dictador.

Para las exequias, la familia de Frei había dicho que prefería algo sobrio, en parte, porque no querían que Pinochet participara en el funeral. Presionados por la dictadura, aceptaron, muy a regañadientes, que el gobierno declarara duelo oficial y honores de Estado para el exmandatario. Gracias a la mediación del cardenal Silva Henríquez, se llegó al acuerdo de que se realizarían dos ceremonias en la Catedral Metropolitana: la primera, a la que asistiría Pinochet y su gabinete, y la otra, en la tarde, en la que participaría la familia de Frei y la dirigencia de la Democracia Cristiana. En el intertanto, la gente se aglomeraba en las afueras de la Plaza de Armas. Durante dos días las personas hicieron largas filas en la Catedral para despedir los restos de quien fuera el Presidente de la Revolución en Libertad.

Los funerales tuvieron lugar el 25 de enero de 1982. A la cita en la Catedral, para la ceremonia oficial, llegó Pinochet vestido de gala, entre abucheos y gente que le tiraba monedas. En esta ceremonia solo estuvo presente Eduardo Frei hijo, el único representante de la familia. Se produjo una situación muy tensa cuando Pinochet, al percatarse de que sobre la urna había una bandera de la Democracia Cristiana, pidió a los guardias militares que la retiraran. De inmediato, saltaron integrantes de la JDC ahí presentes para detenerlos. Molesto, el dictador ordenó a un militar pararse frente al féretro, de modo que tapara el símbolo de la DC ante las cámaras presentes.

En la tarde, a primera hora, tuvo lugar la misa de despedida. La familia llegó al templo repleto de público en medio de una enorme ovación. Estaban presentes las delegaciones oficiales de numerosos países, quienes habían viajado desde todas partes del mundo para rendir su homenaje. Entre ellos figuraban Rafael Caldera y Mariano Rumor, así como el grupo español que me había acompañado en mi frustrado viaje. Incluso Ronald Reagan envió al que hasta hacía poco había sido embajador de Estados Unidos en Chile, George W. Landau. En la primera fila, había cuatro sillas vacías, con los nombres de los cuatro dirigentes que no habíamos podido asistir: Jaime Castillo, Renán Fuentealba, Claudio

Huepe y yo.

Al paso del cortejo fúnebre, rumbo al Cementerio Nacional, en medio de una impresionante romería, miles y miles de personas salieron a las calles para despedir al exmandatario, tanto así que, cuando la carroza ya llegaba a su destino, muchos seguían sumándose al cortejo que provenía de la Plaza de Armas. Nunca antes se había visto algo parecido en Chile. Dicen que fueron más de cien mil los asistentes. A la salida del cementerio, en la plazoleta ubicada en avenida La Paz, se hicieron los discursos de despedida. Ese día, tomaron la palabra Tomás Reyes, vicepresidente del partido; Mariano Rumor, presidente de la Unión Mundial Demócrata Cristiana; Rafael Caldera, ex Presidente de Venezuela, y Ernesto Vogel, dirigente sindical.

Este masivo homenaje y expresión de la ciudadanía para despedir a Eduardo Frei sirvió, a la vez, para darnos fuerza a todos aquellos que estábamos combatiendo, desde diferentes frentes, a la dictadura. Su figura trascendía su propia vida. Tal como lo expresara ese día el propio Mariano Rumor, en sus palabras de despedida: “Usted es un patrimonio que no muere”. O como afirmara Rafael Caldera, al concluir su discurso con una sentencia premonitoria: “Frei es y será como el Cid Campeador, ganará muchas batallas después de su muerte”. Efectivamente, su figura y testimonio inspirarían buena parte de las batallas que daría el pueblo de Chile para derrocar a Pinochet, hasta terminar con la dictadura.

Años más tarde, tuve la oportunidad de conversar con mi primo Augusto Larraín, quien había operado a don Eduardo en esa primera ocasión. Estaba convencido de que la cirugía había sido impecable, y creía que había existido intervención de terceros. “Me destruyeron la vida”, me dijo.

Durante todo el proceso, antes, durante y después de la operación, Frei estuvo siempre rodeado de médicos que lo asesoraban y que estaban al tanto de los detalles de su enfermedad. Entre ellos, figuraban los exministros Ramón Valdivieso y Patricio Rojas, Alejandro Goic, Juan Luis González, Patricio Silva Garín y Augusto Larraín, quien lo operó. Es posible que tantas opiniones médicas simultáneas hayan terminado por retardar la decisión acertada, una vez que la primera cirugía se complicó. Tal vez, si se hubiera intervenido con mayor rapidez, el desenlace hubiera sido otro. En realidad, es imposible saberlo. Hasta la fecha, sigue existiendo una gran nebulosa en torno al caso. Lo relevante es que las circunstancias de su muerte son testimonio del tipo de país en que vivíamos

durante esos años, uno en el que podían suceder las peores cosas en materia de transgresión a los derechos humanos. Más allá de cómo realmente sucedieron los hechos —quién depositó el apósito infectado, quiénes fueron cómplices de la operación o qué responsabilidad tuvo el doctor Patricio Silva Garín, a quien se le atribuyó la autoría de su muerte—, lo relevante es que Frei fue asesinado. De eso estoy absolutamente convencido. Fue asesinado, de la misma forma en que fueron asesinados el general Bachelet, el general Prats, José Tohá, Orlando Letelier, Tucapel Jiménez y tantos más. Lo eliminaron porque era un hombre capaz de aglutinar y de articular a la oposición, y esto ponía en riesgo los cálculos de Pinochet, quien ambicionaba mantenerse en el poder de por vida, sin sombras ni desestabilización alguna. Si yo era una piedra en el zapato para la dictadura, Eduardo Frei era un mazazo permanente que le recordaba que, tarde o temprano, iba a caer.

9. Un amigo en el Vaticano

Exactamente dos años antes de mi arribo a Europa como exiliado, el 16 de octubre de 1978, fue nombrado Sumo Pontífice Karol Jozef Wojtyla, convirtiéndose en el primer polaco en ocupar este cargo, así como el primer Papa no italiano desde 1523. Su nombramiento estuvo alineado con las profundas transformaciones que venía viviendo la Iglesia Católica en las últimas dos décadas. Se trataba de una Iglesia más avanzada, comprometida con la cuestión social, incluso un poco crítica de la curia del Vaticano y de cómo está había abordado los cambios.

El Papa Juan Pablo II venía de un país dominado por el comunismo; de ahí su gran compromiso con el movimiento de resistencia polaca. Como autoridad religiosa, fue símbolo de la lucha contra la expansión del marxismo en Europa. Era una figura tradicionalista en lo litúrgico, pero de avanzada en lo social. Su encíclica *Laborem exercens*, publicada en 1981 y enfocada en el tema del trabajo, fue muy progresista. A la vez, debido a su propia experiencia con el régimen comunista, era muy conservador respecto a la forma en que debían implementarse los cambios. De esta singular combinación nacía la particularidad de su liderazgo, que trascendió al mundo entero con inusitada fuerza.

A los pocos días de mi exilio, el sacerdote chileno Luis Antonio Díaz, quien tenía relaciones con el Vaticano, me invitó a una audiencia pública en la Plaza San Pedro. Al llegar a la ceremonia, me percaté de que el asiento que se me había asignado se encontraba en la primera fila, donde se ubicaban normalmente a los invitados especiales. Sé que al Papa le habían hablado de mi caso, pues el cardenal Silva Henríquez había cursado, a través del cardenal Agostino Casaroli, una petición para que interviniera en mi favor ante la dictadura. Cuando Juan Pablo II bajó a saludar y pasó frente a mí, uno de sus asesores le explicó que yo era un exiliado chileno, presidente de la Democracia Cristiana de Chile. Entonces, se detuvo y me preguntó: “¿Usted tuvo que salir antes o después del plebiscito?”. “Después, su Santidad”, le respondí. Entonces, en un gesto que nunca olvidaré, puso su mano derecha sobre mi frente, me bendijo, y luego dijo: “Para ayudarlo a llevar su carga. Fuerza, Chile”. Aquella fue su forma de

expresarme que no claudicáramos y que siguiéramos luchando. Era un hombre con un tremendo carisma y con una personalidad que convocaba a la gente. Recuerdo que me impresionó mucho. Para mí, ese fue un gesto que confirmaba que contábamos con su apoyo y el de la Iglesia.

Posteriormente, cuando asumí como presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, tuve la oportunidad de sostener varias reuniones en privado con él. La primera tuvo lugar para el aniversario de los cien años del nacimiento de Alcide de Gasperi, político italiano fundador de la Democracia Cristiana, determinante en la configuración de las Comunidades Europeas. El Papa Juan Pablo II encabezó un acto en uno de los salones del Vaticano, al que asistieron unas 70 personas. En dicha ocasión, se acercó a saludarme con mucha amabilidad, expresando notable interés por lo que estaba sucediendo en nuestro país.

En septiembre de 1985, volvimos a encontrarnos. Yo estaba en París, en una reunión con el director de la Unesco. El domingo planeaba viajar a Roma para reunirme con dirigentes de la Internacional y, medio en serio, medio en broma, le dije a Ángelo Bernassola: “¿Por qué no me consigues una audiencia con el Papa?”. Jamás pensé que se lo tomaría en serio. Al lunes siguiente, me llamó de vuelta. “No sabes lo que me pasó, Andrés. Como me dijiste que querías hablar con el Papa, llamé a mis amigos en el Vaticano y les conté. Poco después, me devolvieron la llamada para decirme que, si bien el Papa estaba terminando sus vacaciones en Castelgandolfo, y regresaría el día miércoles a Roma, podía recibirme ese mismo día en su despacho”, explicó.

Llegado el día acordado, el Papa me recibió en su oficina, donde pudimos conversar a solas, sin intermediarios. A poco de comenzar nuestra entrevista, de pronto me dijo:

—Mire, presidente. Estoy invitado a Chile... Y, antes de tomar una decisión, quería consultar con algunas personas. Me han dicho que mi presencia podría ser positiva. Pero quería preguntarle, como chileno, qué opina.

—Honestamente, creo que sería algo bueno que fuera a Chile, su Santidad —respondí.

En ese momento entró a la habitación el cardenal Carlo Martini. Venía a avisarle al Papa que era hora de empezar a cerrar, porque llevábamos más de diez minutos conversando, lo que me imagino debe haber sido bastante para una

audiencia papal. Pero Juan Pablo II le hizo un gesto como pidiendo más tiempo.

—Usted sabe que yo tengo una postura. Los he apoyado en su lucha. ¿Pero cuál podría ser el verdadero beneficio de mi visita? —continuó.

—Usted va a abrir espacios. La gente se va a atrever a salir a las calles, lo que hoy es algo muy importante, pues el propio Pinochet se ha puesto dos o tres años de plazo para llamar a nuevas elecciones. Sin embargo, hay una cosa que me parece importante... No le vaya a pasar a usted lo que le sucedió a Jimmy Carter con Pinochet.

—¿Qué cosa? —preguntó, curioso.

—Usted habrá notado que el Presidente Carter siempre parece estar sonriendo... Es un gesto que lo caracteriza. Resulta que, en 1977, durante la reunión de las Américas en Washington, les sacaron una foto juntos. En la imagen, Carter sale dándole la mano a Pinochet, con una amplia sonrisa. Esa foto dio la vuelta al mundo. Hay que tener cuidado, para impedir que lo utilicen con este tipo de artimañas.

—Me voy a cuidar —afirmó, pensativo—. Quería consultarle también sobre otro tema... —agregó entonces.

Le pregunté de qué se trataba.

—Me imagino que usted, como presidente de la Internacional, está al tanto de lo que es la Teología de la Liberación...

—Sí, por supuesto. Es una corriente teológica cristiana que, en el caso de América Latina, ha derivado en posiciones que yo, personalmente, no comparto. De hecho, plantean la posibilidad de entenderse con el marxismo para llevar a cabo las reformas sociales. Y creo que usted esto lo sabe mejor que yo: donde hay gobiernos marxistas, la democracia no es posible.

—Por supuesto, cómo no lo voy a saber.

—Sin embargo, la Teología de la Liberación representa también un movimiento que recoge buena parte de las demandas sociales... Eso es verdad. Ahora, pienso que el error está, como cristianos, en pensar que podemos llevar a cabo esas transformaciones aplicando teorías marxistas. Creo que eso es algo que no calza.

Pero, evidentemente, existe una efervescencia social que se refleja en la Iglesia, y esa es una realidad. A partir de los años 70, en nuestro país ha existido un importante movimiento de cristianos por el socialismo, impulsado por valiosos sacerdotes y feligreses comprometidos con los cambios sociales... —agregué.

—Lo que pasa es que el cristianismo, de por sí, es liberador. Tiene que serlo. En el fondo, el Evangelio apuesta por los cambios. El Evangelio es más para los pobres que para los ricos. Pero la Teología de la Liberación, lo que quiere es liberarse de la teología, y eso, desde mi punto de vista, no es aceptable —replicó el Papa.

Estuvimos conversando cerca de media hora más, y me hizo presente su irrestricto respaldo a la Iglesia Católica chilena. Asimismo, se mostró particularmente interesado en la realidad y problemáticas de América Latina y África. Después de aquella oportunidad, tuvimos tres encuentros más en el Vaticano. Con Eduardo Frei hijo, nos invitaron a la ceremonia de beatificación del padre Hurtado en 1994. Poco después, el 2003, viajé a Roma con Ricardo Lagos, quien me pidió que lo acompañara. El Papa ya estaba más anciano. Volví a visitarlo, por última vez, en un viaje que hicimos con Inés.

Hay quienes critican a Juan Pablo II y lo califican de conservador. Desde mi perspectiva, fue un hombre que consiguió muchos cambios, sobre todo respecto a cómo se enfrentaron los dos bloques de la Guerra Fría. Jugó un rol fundamental en la caída de la Unión Soviética y su proyecto comunista. En Polonia, fue clave en la recuperación de la democracia, dando un claro respaldo a Lech Walesa y al Movimiento Solidaridad. Entre los grandes logros de su pontificado, está su acercamiento con la iglesia judía y el diálogo con otras religiones. Convocó a jornadas mundiales dedicadas especialmente a los jóvenes, y fue una voz potente contra la violencia en conflictos como los de Ruanda, Kosovo, Irak y la Guerra de los Balcanes. Hizo un mea culpa en nombre de las faltas cometidas por la Iglesia Católica. Me impactó mucho su compromiso político y social con los gobiernos democráticos. Puede que haya cometido errores, como todo ser humano, pero su legado es indudable. Juan Pablo II fue, a su propia manera, un Papa que se la jugó decididamente por los derechos humanos y los cambios sociales.

10. Una visita condicionada

En junio de 1981, recibí un llamado telefónico de mi hermano Felipe, a quien había dejado a cargo de todos mis temas personales en Chile. “Andrés, tengo un interesado en comprar ese sitio que tienes en Lo Curro...”, me dijo al teléfono.

Varios años antes, gracias a un juicio ganado junto a Alejandro Hales, había logrado comprar unas acciones que, después de venderlas, me permitieron adquirir un terreno a bastante buen precio en el sector de Lo Curro, en Santiago. Debo haber pagado unos US\$ 70 mil de ese entonces, pese a que tenía una extensión de cinco mil metros cuadrados, ubicado justo frente a la casa que tenía Agustín Edwards en la calle El Canal. Al lado vivía mi gran amigo Manuel Lira, verdadero motivo por el que había comprado aquel terreno, con la ilusión de que en el futuro pudiésemos ser vecinos.

—Ah, pero qué buena noticia —respondí. Aquel ingreso extra podía servirnos de gran ayuda para solventar nuestros gastos mientras estuviésemos en el extranjero —. ¿Y en cuánto lo quieres vender?

—¡Andrés, te ofrecen 500 mil dólares!

—¡Cómo! Pero están locos...

—Sí, pero hay un único problema —dijo entonces mi hermano.

—¿Cuál?

—Que el comprador, indirectamente, es Pinochet.

—¿Cómo? ¡Todo esto es una locura, Felipe!

—Lo sé, Andrés. Lo sé. Pero es la información que me ha entregado la persona que está haciendo la gestión. Quieren construir la residencia presidencial en Lo Curro y, para ello, requieren ocupar un sitio de propiedad de una señora de apellido Canziani, ubicado justo en el vértice de la Gran Vía. Ella ha señalado tu

terreno para que le repongan el suyo —explicó Felipe.

—Discúlpame, pero no me atrevo a responderte nada ahora... —titubeé—. ¡Además, me parece que lo que quieren pagar es una brutalidad!

—Lo paga el Ministerio de Vivienda. Los recursos ya están destinados.

—Déjame pensarlo. Te llamo mañana —le dije.

Esa misma noche, se lo conté a Inés. “¿Y el castaño tan bonito que hay ahí?”, replicó ella, con su sensibilidad tan propia. Tenía razón. El terreno nos gustaba y esa era una razón para no venderlo. Pero, sobre todo, no quería hacer ningún tipo de negocios con el gobierno, mucho menos con Pinochet.

Al día siguiente, me comuniqué con mi hermano a primera hora.

—Felipe, tengo una idea. Quiero que hagas lo siguiente... Diles que no tengo inconveniente en venderle el sitio al Ministerio de Vivienda, siempre y cuando me permitan ir en persona a firmar la escritura.

—¿Esa es tu condición entonces?

—Así es —respondí, entre risas. Por supuesto, nunca me devolvieron el llamado.

A mediados de marzo de 1983, logré, por fin, concretar mi visita a Chile. Pero la razón de mi viaje no era precisamente la que hubiese querido: mi padre estaba enfermo, había sufrido una trombosis y se encontraba en un delicado estado de salud. En mi desesperación, les pedí a mis hermanos que hablaran con el abogado Luis Ortiz para que hiciera una presentación de carácter humanitario en mi nombre al Ministerio del Interior, a ver si lográbamos conseguir un permiso que me permitiera ingresar al país, aunque fuese por unos pocos días. Mis expectativas eran casi nulas. Había escuchado de otros exiliados, como Alberto Jerez, que habían solicitado beneficios de ese tipo para venir a visitar familiares muy enfermos, y se los habían denegado. De todas formas, no podía dejar de intentarlo, especialmente porque creía que mi presencia podía ayudar a mejorar la salud de mi padre.

Para mi sorpresa, la solicitud fue aceptada, autorizándose mi ingreso temporal a Chile por una semana. Pero me impusieron una condición: no podía involucrarme en ninguna actividad de carácter político durante mi estadía. No

fue una decisión fácil. De todas formas, asumí que era el precio que tenía que pagar. Sabía que mi visita de por sí tenía una implicancia política, y haría todo lo posible por aprovechar aquel efecto.

Con el partido, diseñamos una agenda de actividades que convocaba a la gente a reunirse y, sobre todo, a dialogar. El primero fue un acto simbólico, consistente en visitar las tumbas de tres figuras fundamentales, con quienes había tenido una estrecha relación: Eduardo Frei, Tucapel Jiménez y Claudio Orrego, quien había fallecido recientemente. Las visitas, por supuesto, aparecieron en la prensa, otorgándonos réditos en la siempre buscada difusión de nuestras actividades.

Los dirigentes de la JDC me habían pedido también que hiciera algo con ellos, de manera de entregar a los jóvenes democratacristianos algún mensaje. Como en ese tiempo se estaba proyectando la película biográfica Gandhi, se me ocurrió que compráramos todas las entradas de una función en el Teatro Pedro de Valdivia, ubicado en la comuna de Providencia, e invitáramos a nuestros militantes. Era una buena idea, puesto que no existía nada más representativo que el mensaje de Mahatma Gandhi respecto a nuestro ideal de la no violencia y la desobediencia civil. Si bien la convocatoria no fue publicada en la prensa, el impacto que causó en la juventud fue valioso. Cerca de 400 jóvenes concurrieron a dicha función. Una vez terminada la película, subí al escenario y me dirigí a ellos hablándoles de la desobediencia civil como una vía de lucha posible y legítima. Fue un momento emotivo, que creo caló bastante. Posteriormente, continuaron realizándose diversas acciones en esa línea.

Durante esa visita, me entrevisté con el cardenal Raúl Silva Henríquez y con Enrique Iglesias, por entonces secretario ejecutivo de la CEPAL. También sostuve algunos encuentros privados con Gabriel Valdés y la directiva del partido, así como con dirigentes del mundo socialdemócrata, quienes ya se encontraban configurando el arco de la oposición. Me percaté de que varios de quienes antes se habían mostrado entusiasmados por el modelo económico de la dictadura ahora tenían dudas.

La crisis económica desatada en 1982 había provocado un profundo deterioro en la estabilidad y el supuesto éxito del gobierno militar. Para mi visita a Chile, la situación se había agravado y la tensión era palpable. Muchas industrias habían quebrado, siendo el desplome de la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar uno de los casos más dramáticos. El sistema bancario estaba en el suelo. La desocupación alcanzaba el 22,2%. Las políticas económicas

gubernamentales, hasta entonces presentadas como verdaderos dogmas, empezaron a ser cuestionadas por la ciudadanía, tornándose discutibles, relativas, dudosas. Se respiraba una clara sensación de desánimo y la crisis que azotaba al país era insoslayable. Todo ello creó las condiciones propicias para que el movimiento de trabajadores se rearticulara en torno a una serie de demandas que darían paso a las primeras protestas contra el gobierno militar.

Me reuní con dirigentes sindicales y gremiales, dirigentes del cobre y también de la ANEF, quienes me contaron cómo se estaban organizando para salir a las calles a protestar. Recién comenzaba a hablarse de esta posibilidad, la que tomaría fuerza y terminaría concretándose más adelante, en mayo de 1983, con la Primera Jornada de Protesta Nacional convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC). Los efectos de la convocatoria serían sorprendentes, y a esta se sumarían amplios sectores de la sociedad civil. Las protestas contra la dictadura se harían cada vez más masivas y recurrentes, prendiéndose así una mecha que correría como reguero de pólvora por todo el país. Las movilizaciones se prolongarían hasta 1986, evidenciando el descontento popular respecto al modelo económico y al sistema político vigente.

El tiempo jugaba en contra de una salida pacífica, y la permanencia de Pinochet en el poder solo parecía radicalizar a los chilenos. A esas alturas, si el dictador se empecinaba en hacer realidad su sueño de eternizarse en el poder por tiempo indefinido, lo más probable era que las posturas se extremaran.

11. A punto de perder la esperanza

En un esfuerzo por mejorar su imagen, a mediados de 1983, la dictadura comenzó a abrirse a la posibilidad de autorizar el retorno de los exiliados, publicando posteriormente listados con los nombres de quienes podrían regresar al país. La gente esperaba estas listas con mucha ansiedad, lo que generaba situaciones dolorosas cuando alguno no figuraba entre los beneficiados. Era como jugar a la lotería; no tenías cómo saber si saldrías premiado o no, pero era difícil no tener expectativas o guardar algo de esperanza.

En las semanas previas a la Navidad de 1983, se difundió la información de que pronto se daría a conocer una primera lista con nombres de exiliados a los que se les permitiría regresar. Recuerdo que, por esos días, me encontré en una tienda de Madrid con dos familias chilenas que me reconocieron y se acercaron a saludarme. Estaban emocionados con la noticia de la lista.

—¡Qué bueno que vamos a volver! —me dijeron con una gran sonrisa en el rostro.

—¿A ustedes ya se los comunicaron? —pregunté, confundido.

—No, no nos han dicho nada. Pero viajamos desde Suecia a España para estar listos y partir apenas nos avisen.

Al igual que ellos, yo también abrigaba la esperanza de que mi nombre aparecería en ese listado. Obviamente esto no sucedió. Los de aquellas dos familias tampoco.

La comisión constituida por el gobierno para analizar y elaborar estos listados estaba integrada por diversas personalidades del régimen; uno de ellos era Ricardo Rivadeneira, casado con una prima hermana de Inés. A través suyo, recibimos noticias muy alentadoras, que sugerían que se nos estaba considerando en las nóminas que se darían a conocer próximamente. Mis hijas e Inés confiaban en que podríamos recibir el anuncio en vísperas de Navidad; yo, en cambio, era más bien pesimista, aunque no dejaba de guardar una secreta ilusión.

Recuerdo que durante ese mes recibimos numerosas tarjetas de Navidad de amigos y parientes, las que colgamos en los vidrios y en cada rincón de nuestra casa, quienes nos saludaban asegurándonos que pronto estaríamos de regreso. Ese día de Navidad esperamos, hasta entrada la noche, alguna noticia. ¡Pero nada! Recién a medianoche recibimos la información de que no figurábamos en la dichosa lista.

Tiempo después, el propio Ricardo Rivadeneira me contó que, efectivamente, mi nombre aparecía en ese primer listado, pero que Pinochet en persona se encargó de tacharme, al igual que a Jaime Castillo y a otros. “Estos van a ser los últimos en volver”, habría dicho.

La desilusión que se sufre en un momento así es arrolladora. Esto se repetía cada vez que había noticias de que una nueva lista iba a ser divulgada. Al final, recuerdo haberle dicho a mi familia: “Ya no creo en nada. No debemos tener ninguna expectativa”.

12. Una nueva estrategia de lucha: Tendiendo puentes entre la DC y la izquierda chilena

A comienzo de 1982, después del fallecimiento de don Eduardo Frei, planteé la necesidad y conveniencia de elegir una nueva directiva que asumiera la conducción del partido desde el interior, en mi reemplazo. La muerte de Frei había dejado un claro vacío, sobre todo en términos de vocería, pues en mi ausencia había sido él quien había ayudado a ejercer ese rol. Por otro lado, me parecía necesario un recambio, y consideraba que existían liderazgos potentes que debíamos proyectar, entre ellos, Claudio Orrego, Gabriel Valdés —quien había regresado recientemente a Chile— y Radomiro Tomic. El panorama era, sin duda, diferente al de dos años atrás.

Se decidió, de manera unánime, que mi sucesor sería Gabriel Valdés. Con ello, di un paso al costado como presidente de la Democracia Cristiana y cerré un importante ciclo. Habían sido seis años de intenso trabajo; los primeros en una gestión semiclandestina al interior del país, y los últimos tres desde el exilio.

Durante todo ese período, hice lo posible por cumplir con la misión que Eduardo Frei me había manifestado, en 1976, cuando asumí la presidencia: “Andrés, lo importante es salvar el alma del partido, que son nuestros valores. La dictadura podrá destruir nuestro cuerpo mediante la represión, pero si logramos resguardar nuestra alma, el día en que recuperemos la democracia, esa alma recreará un partido más grande y aún más fuerte”.

Pese a sus sinsabores, la experiencia del desarraigo, sin duda, fue también constructiva y reveladora. Y esto no solo me ocurrió a mí. Creo que todos los demócratacristianos en el exilio experimentamos algo parecido. Viviendo en el extranjero, y sobre todo en Europa, presenciamos, no sin cierto asombro, la profunda transformación que estaba atravesando la izquierda por esos años. En paralelo, esto nos permitió entablar relaciones con su dirigencia, algo que en Chile, sobre todo a comienzos de la dictadura, era complejo, dada la dura represión ejercida en su contra. Gran parte de la dirigencia de los partidos Socialista y Comunista que aún permanecía en el país durante esa época fue detenida, diezmada y fuertemente reprimida, mediante un proceso devastador y

sistemático. Contactar a sus dirigentes se había tornado muy difícil, y ello debía realizarse con extrema cautela. En este sentido, el exilio posibilitó un fenómeno que tendría efectos claves para el posterior desarrollo político en Chile: la apertura, el diálogo, la renovación ideológica y el encuentro del mundo democratacristiano con el mundo de izquierda. El propio proceso de renovación de este último permitiría, además, una relación mucho más fluida entre ambos sectores, tanto en Europa como en Venezuela. En estos espacios se fraguarían importantes y, quizás, las primeras estrategias de oposición al régimen militar, dado los aires de libertad que se respiraban, la percepción de sistemas políticos sólidos y el clima de amplios consensos al interior del escenario político europeo. Por otra parte, ello nos permitió ensanchar nuestras fronteras ideológicas, así como ampliar el abanico de opciones y de alianzas.

La idea de colaborar con fuerzas de la izquierda para la recuperación democrática no era una tesis descabellada; por el contrario, era una necesidad que se había planteado varias veces en la Democracia Cristiana. Un antecedente, en este sentido, fue el encuentro anteriormente mencionado en Colonia Tovar, Venezuela, donde se reunieron por primera vez, tras el golpe, dirigentes de la Democracia Cristiana y de la Unidad Popular, con el objetivo de explorar una alternativa política viable para un futuro gobierno democrático en Chile. Tomic y Renán Fuentealba, entre otros, siempre apostaron por esta tesis. Asimismo, en 1976, en los textos redactados por Tomás Reyes y por mí, interceptados por el gobierno, se hablaba de este tema. Ambos postulábamos que, para derrotar a la dictadura, era necesario abrirnos a generar alianzas con fuerzas de la izquierda. La pregunta era dónde estaba el límite. Para mí, el espectro plausible llegaba hasta el mundo socialista y socialdemócrata, radicales y sectores liberales no comprometidos con la dictadura. Me parecía contraproducente negociar con el Partido Comunista. Tomás Reyes y el sector que representaba, en cambio, planteaban una mayor apertura en ese sentido: su propuesta contemplaba un entendimiento superestructural, que incluía a todo el espectro de partidos que conformaban la Unidad Popular.

Respecto al Partido Comunista chileno, la idea de alinearnos en un proyecto conjunto resultaba particularmente compleja, debido a que este todavía se debatía en una ambigua y desdibujada línea trazada entre la resistencia pacífica y/o la lucha armada, si fuese necesario. Si bien la tesis de construir un frente antifascista por la vía armada ya existía antes de los 80, durante esta década pareció recrudecer aún más el alineamiento del PC chileno con todo aquello que se instruía desde Moscú, vía su secretario general, Luis Corvalán. Era un partido

que, en ese sentido, no vivió el proceso de sus pares europeos, y que parecía anquilosado en el tiempo. Por un largo período continuó defendiendo a ultranza a aquellas dictaduras dominadas bajo la égida de la Unión Soviética, en las que la persecución a los disidentes era implacable y el atropello a los derechos humanos, una práctica habitual.

Durante mi estadía en Madrid, a fines de 1981, me reuní con Volodia Teitelboim, quien, en su condición de exiliado, residía en Moscú. Él solicitó el encuentro. Venía a plantearme la legitimidad de la lucha armada, justificándola incluso al amparo de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que defendía esta opción en el marco del levantamiento contra el tirano. Supongo que pensó que, como católico, este argumento me calaría. Yo, que estaba en pleno ejercicio de la presidencia del partido, le dije que no había ninguna posibilidad de que nos entendiéramos en esos términos. Nuestras posiciones políticas eran absolutamente divergentes en cuanto al compromiso que tenía el Partido Comunista con el proyecto marxista-leninista, en tanto nosotros, como humanistas-cristianos, estábamos en la otra orilla y éramos profundamente críticos de este.

No obstante, la necesidad de entendernos con la socialdemocracia no solo me parecía una posibilidad, sino que algo urgente. La idea era establecer un trabajo mancomunado, similar al que se daba entre el socialismo europeo, la democracia cristiana y los liberales. En Europa occidental, la colaboración entre estas tres fuerzas había sido fundamental para el desarrollo de los países durante la posguerra. Gracias a esa alianza, la recuperación se había alcanzado con enorme equidad y justicia. Fue algo que presencié de cerca durante mi exilio y, por lo tanto, estaba convencido de ello. Me parecía que era un deber para la Democracia Cristiana abrirse a este entendimiento.

Siempre he creído que los espacios de diálogo sirven no solo para conversar, sino que además representan, ante todo, instancias para plantear ideas y buscar soluciones de fondo que permitan movilizarnos hacia terrenos intermedios, en particular, cuando no existe posibilidad de resolver los conflictos totalmente. Hay quienes difieren de esta visión y optan por resoluciones más pragmáticas, en términos de blanco o negro. A nosotros, los demócratacristianos, muchas veces nos han tildado de “amarillos”, argumentando que rehuimos asumir posturas rígidas o que jugamos a dos bandas. No se trata de eso. Tampoco es que no nos definamos. El tema de fondo es que no somos partidarios de imponer al otro nuestra forma de pensar. Desde esta perspectiva, creo que esto está lejos de ser

una debilidad. Muy por el contrario, lo considero una tremenda virtud, especialmente cuando se trata de encontrar entendimiento, conciliación y comprensión entre dos partes.

Los socialistas chilenos en el extranjero, a diferencia de los comunistas, entendieron pronto la necesidad de este trabajo conjunto. Ellos mismos se dieron cuenta de que el proyecto socialista democrático europeo distaba mucho de alinearse con el proyecto de la Unión Soviética, llevando a cabo un proceso de revisión que implicó no solo el análisis de los errores cometidos por la Unidad Popular, sino que también de su propio rol en esta. La exposición al verdadero cariz del proyecto marxista en Europa occidental contribuyó a este proceso. Muchos vivieron en carne propia los “socialismos reales” y fueron testigos de la represión gubernamental de esos regímenes. Un día llegó hasta mi oficina en Madrid la esposa de Daniel Vergara, quien había sido subsecretario del Interior durante el gobierno de Salvador Allende. Venía a contarme que su hijo estaba en la República Democrática Alemana y no podía salir. “Quiero pedirle que por favor me ayude. Usted tiene influencias, a lo mejor puede hablar con alguien del gobierno español”, me solicitó. Hoy, este caso no sorprende tanto, porque con los años, y tras la caída del Muro de Berlín, nos fuimos enterando realmente de cómo eran las cosas allá. Pero entonces nada de esto se sabía.

El propio Carlos Altamirano, en el exilio, iniciaría su proceso de revisión del socialismo. El duro contraste entre la Europa comunista del Este y la Europa democrática occidental vivido por los exiliados chilenos; el desarrollo del socialismo democrático en Francia, España, Portugal y Grecia; la adopción del “Compromiso Histórico”, liderado en Italia por Enrico Berlinguer y el Partido Comunista italiano —a raíz, precisamente, del golpe de Estado que derrocara a Salvador Allende— y el auge del eurocomunismo, así como la crisis de los “socialismos reales” influyeron determinadamente en la postura de la izquierda chilena. La crisis polaca, entre 1979 y 1981, y la persecución al Movimiento Solidaridad, por otra parte, gatillaron un proceso de crítica e incluso de denuncia al interior de la izquierda renovada, en relación con los regímenes comunistas europeos, reafirmando su compromiso con la democracia política y sus instituciones. La actitud frente a dicha crisis fue un elemento claramente diferenciador entre el PS-Altamirano y el PS-Almeyda, tras la división socialista de 1979.

Por otra parte, tras el plebiscito de 1980, el PC chileno optó por la tesis de la “legitimidad de todas las formas de lucha”, incluida la lucha armada en contra

del régimen militar, lo que provocó un claro distanciamiento entre los socialistas en proceso de renovación y los comunistas. Posteriormente, la apuesta de Mijaíl Gorbachov remeció con fuerza a la izquierda chilena. Para los socialistas, la Perestroika —impulso de una política reformadora— significaba la ratificación de sus planteamientos críticos frente a los “socialismos reales”. Para los comunistas, el impacto fue mayor, ya que ello ponía en evidencia lo que nunca habían querido ver. No obstante, durante este período, nadie preveía la magnitud de la crisis que se estaba desarrollando, la que produciría a los pocos años la desaparición de los “socialismos reales” del escenario europeo oriental.

Así, en medio de este escenario, comenzaron a tenderse los primeros puentes con dirigentes socialistas chilenos en el extranjero, tales como Jorge Arrate, José Miguel Insulza, Ricardo Núñez, José Antonio Viera-Gallo, y otros líderes del socialismo en Chile.

“Nos proponemos establecer alianzas con otras fuerzas políticas que proponen soluciones democráticas. El movimiento socialista, o socialdemócrata europeo, por ejemplo, es un aliado perfecto”¹⁰⁴, declaré, en octubre de 1981, en una entrevista a la agencia de noticias ANSA, que fue publicada por varios medios en Chile. En ese mismo artículo, me atreví incluso a asegurar: “Estoy convencido de que, cuando Chile vuelva a la democracia, la Democracia Cristiana, aun con el 51% de los votos, no podrá y no deberá ir al gobierno sin haber realizado antes una gran alianza democrática, en particular con los socialistas”¹⁰⁵. Posteriormente, estando en Washington, tras dar una conferencia, la agencia UPI distribuyó el siguiente titular: “El presidente de la Unión Mundial Demócrata Cristiana, el chileno Andrés Zaldívar, ha propuesto hoy la concertación de una ‘gran alianza’ democrática, para oponerse al Presidente Augusto Pinochet”¹⁰⁶.

Estaba seguro de que no había posibilidad alguna de transitar a la democracia sin este entendimiento previo. Dicha postura era compartida por muchos dirigentes de la oposición, y es que comprendíamos que era vital que la ciudadanía pudiese confiar en una nueva alternativa y en nuestra capacidad para dar gobernabilidad al país. Esto último era, justamente, el argumento en que se amparaba la dictadura para seguir justificando su permanencia en el poder, y el que fue empleado de forma recurrente por Pinochet hasta el plebiscito de 1988, e incluso después, hasta la elección presidencial.

La Democracia Cristiana chilena empezó a trabajar por la construcción de una

alianza formal en que los participantes unieran esfuerzos, buscando profundizar un acuerdo con otras fuerzas políticas democráticas, de manera de generar una estrategia común que obligara al régimen militar a dialogar y a negociar con la oposición el retorno a la democracia. A este llamado respondieron, incluso, algunos sectores de la derecha que no se sentían representados por el gobierno militar. Ello daría paso, en marzo de 1983, al primer intento significativo de oposición a la dictadura: el Manifiesto Democrático, declaración suscrita por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Social Democracia, el Partido Radical, la Unión Socialista Popular y el Partido Republicano. Cinco meses después, se integrarían a dicha alianza el sector renovado del Partido Socialista y el Partido Liberal. En nuestras bases, se definieron tres objetivos medulares: conseguir la renuncia de Pinochet a la Presidencia de la República; derogar el articulado transitorio de la Constitución de 1980, que buscaba resguardar la “democracia protegida” de la dictadura, incluso después del término de esta, y restituir la democracia en el país. Gabriel Valdés encabezó con fuerza e inteligencia esta tarea partidaria. Y lo hizo con contundente éxito.

Si bien el Partido Comunista no tuvo cabida dentro de este cuadro, dado que su compromiso con la lucha armada era incompatible con nuestra visión de democracia, desde un principio se estableció que era relevante que participara de alguna forma en el trabajo de la alianza. Era importante que se sintieran, al menos, reconocidos por esta. Esta distancia que se mantuvo tenía también un fin estratégico; sabíamos que si integrábamos abiertamente a los comunistas, los militares y la derecha dura se encargarían de hacer la transición imposible. Pese a esto, siempre insistimos en que, dentro del contexto de un sistema democrático, nadie debía ser excluido por sus ideas. En eso fuimos tajantes. De hecho, la primera reforma que exigimos a la Constitución, en 1989, fue la de eliminar el artículo 8°, el cual declaraba ilícito al Partido Comunista por su defensa de la lucha de clases.

Gracias al vínculo y afinidad que se generó producto de esta alianza, comenzaron a acercarse al Grupo de los 24 miembros de la derecha más moderada, entre otros, Armando Jaramillo, Julio Subercaseaux, Hugo Zepeda y Fernando Léniz, quien había sido ministro de Economía de Pinochet. El propio Andrés Allamand, aún dirigente juvenil, se incorporaría también en este contexto. En paralelo, desde la izquierda, empezaron a emerger nuevos liderazgos que, hasta entonces, no habían encontrado espacio para intervenir. Ricardo Lagos fue uno de ellos. Entre 1983 y 1984, varios de los que volvían del exilio se fueron sumando también, mientras la Democracia Cristiana jugó un rol

mediador de primus inter pares.

Por su parte, en septiembre de 1983, se formó el Movimiento Democrático Popular (MDP), integrado por el PS-Almeyda, el Partido Comunista y el MIR. En septiembre siguiente, se fundó la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de gobierno, cuya creación respondía a la lucha de poder al interior del bloque gubernamental y a la necesidad de incidir en el proceso de apertura impulsado por el ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa. La creación de la UDI precipitó, a su vez, la creación del Movimiento de Unidad Nacional (MUN), en noviembre del mismo año, partido de derecha proclive a la apertura y a establecer un consenso de reforma constitucional, cuyo objetivo político consistía en hacer confluir a una parte de la oposición hacia el centro, ofreciendo una interlocución dentro del sistema.

En 1985, un amplio espectro de partidos, que abarcaba desde la Izquierda Cristiana hasta el MUN y el Partido Nacional, así como al Comando Nacional de Trabajadores y la Unión Democrática Trabajadora, las federaciones estudiantiles de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, diversos colegios profesionales, organismos empresariales y organizaciones gremiales, poblacionales y culturales adhirieron al Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, documento convocado por el cardenal Francisco Fresno. Este declaraba: “(...) la estabilidad del sistema democrático que se establezca exige el compromiso solemne que contraen todos los que firmen o adhieran a este documento, de realizar la acción política del futuro dentro de un espíritu de lealtad democrática, aplicación efectiva de la ley y respeto mutuo, compatibilizándola con los principios institucionales, económicos y sociales aquí señalados. Solo de esta manera se garantizará la gobernabilidad del país y la efectiva transición hacia una democracia plena”. El texto comprendía tres áreas —“acuerdo constitucional”, “orden económico social” y “medidas inmediatas”—, con disposiciones y compromisos concretos orientados a asegurar y resguardar la transición democrática.

La propuesta fue rechazada de plano por el gobierno, argumentando el carácter inmodificable de la Constitución de 1980 y, por consiguiente, la inviabilidad como base de negociación del texto consensuado. Por su parte, la UDI, Avanzada Nacional —partido que apoyó a la dictadura— y el MDP tampoco suscribieron al Acuerdo. A partir de ese momento, se potenciará de lleno una estrecha alianza entre el sector sindical y el mundo político para derrotar a la dictadura. Aunque muy a la distancia, ya se vislumbraba en el horizonte el

plebiscito de 1988. Ello reimpulsaría en la oposición la movilización social pacífica.

El Partido Comunista, aún aferrado a su tesis del levantamiento armado, empezaría a quedar al margen de este proceso social y político que buscaba derrotar a la dictadura en su propia cancha. No obstante, el descubrimiento, en agosto de 1986, de los arsenales que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez mantenía en Carrizal Bajo y, posteriormente, en septiembre de ese mismo año, el atentado a Augusto Pinochet en el Cajón del Maipo alterarían profundamente el escenario político chileno, desencadenando un replanteamiento respecto a la estrategia de los partidos políticos. La dirección del PC resolvería, finalmente, dismantelar las estructuras de su aparato militar, llevando al FPMR a optar por seguir adelante, de manera independiente, con su lucha armada contra la dictadura. En mi opinión, estos dos hitos fueron los que llevaron al Partido Comunista a reflexionar sobre la complejidad y real factibilidad de su tesis. La apertura a nuevas formas de resistencia no necesariamente les significó abandonar la tesis de la lucha armada, pero sí los impulsó a involucrarse en la eventual recuperación de la democracia por la vía del voto y la movilización social.

Por su parte, el gobierno, fortalecido y confiado tras estos acontecimientos, comenzaría a proyectarse hacia 1988 —año que la Constitución del 80 establecía como plazo para realizar un plebiscito— para prolongar la administración del general Pinochet por ocho años más. En este nuevo contexto, la movilización social de la oposición empezaría a perder fuerza y surgiría la idea de levantar una campaña por las elecciones libres, en reemplazo del plebiscito, lo que sería obstaculizado por el gobierno.

Pese a estos embates, el entendimiento al interior de la oposición continuaría fortaleciéndose. Será esta capacidad de diálogo y la voluntad de deponer las diferencias del pasado lo que conllevará no solo al triunfo en las urnas, sino que también a la proyección de esta alianza tras la recuperación de la democracia.

Esta apertura no fue un proceso aislado. En aquel momento, el movimiento demócratacristiano europeo también vivía transformaciones similares que apostaban a la integración y a la colaboración. En la Democracia Cristiana italiana existían, al igual que en el partido en Chile, diversas tendencias y posturas sobre cómo abordar la cuestión de las alianzas con otros sectores políticos. Desde principios de los 70, el líder de la DC en ese país, Aldo Moro,

había tenido una actitud abierta de colaboración con partidos como el Comunista y el Socialista, y junto a Enrico Berlinguer, dirigente del PC italiano, propusieron establecer un pacto entre ambos bloques parlamentarios, denominado “Compromiso Histórico”. En 1978, Moro fue secuestrado y asesinado por las Brigadas Rojas, una organización revolucionaria de extrema izquierda que actuó en represalia por el avance de los acuerdos entre la DC y el PC. No obstante, de esa apuesta colaborativa nacería, posteriormente, el Pentapartido italiano: una coalición formada por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Socialista Democrático, el Partido Liberal y el Partido Republicano.

Eran este tipo de experiencias y modelos las que nos inspiraban en ese entonces. Creíamos en la inclusión y la colaboración entre todas las fuerzas con un fin mayor: derrocar a la dictadura chilena. Sin sospecharlo, comenzábamos a sembrar las primeras semillas de la Concertación de Partidos por la Democracia.

X

“Y VA A CAER...”:

REFLEXIONES DE UNA LUCHA INCESANTE

1. El desplome

Para 1983, el castillo especulativo de las políticas económicas del gobierno se venía abajo, en medio de una crisis que lo colapsó todo. El modelo comenzó a desplomarse inexorablemente, mientras los chilenos ponían en duda la verdadera capacidad de gobernar del dictador. La fuerte desregulación de la banca comercial, tras su privatización a manos del régimen —en un proceso desbandado que constituyó, por cierto, un desvergonzado saqueo al Estado en los más diversos ámbitos, por parte de grupos económicos afectos al régimen—, provocó una crisis profunda que llegó hasta la médula del sistema. El PIB bajó en 14,3%. El peso chileno se devaluó en 18%. La industria y la construcción sufrieron un crecimiento negativo de -21,1% y -23,4%, respectivamente.

En un intento desesperado por sobrevivir a la hecatombe, muchas empresas insolventes recurrieron a préstamos bancarios. Esto terminó agravando aún más la burbuja y el gobierno se vio obligado a irrumpir, liquidando o interviniendo varios bancos comerciales. El endeudamiento se desbordó, el desempleo alcanzó el 30%. La deuda externa se disparó. La inflación creció en más de 20%. El proyecto económico de los Chicago boys se caía a pedazos, mientras la figura de Pinochet perdía más y más fuerza.

Mientras disidencias internas al interior del régimen cuestionaban el propio cronograma de la transición fijado por la Constitución para aminorar la tensión, en la línea de la imagen de apertura que venía intentando proyectar la dictadura durante el último tiempo, en agosto de 1983, el gobierno decidió incorporar a Sergio Onofre Jarpa como ministro del Interior

Jarpa tenía reputación de ser un buen negociador. En 1974, había sido nombrado delegado de Chile ante las Naciones Unidas y, posteriormente, entre 1976 y 1978, se desempeñó como embajador en Colombia, participando en el retiro de Chile del Pacto Andino. Entre 1978 y 1983, fue embajador en Argentina y desplegó una asertiva gestión como mediador durante el tenso conflicto limítrofe por el Canal de Beagle entre ambos países. Su arribo al gobierno vino, en efecto, acompañado de ciertos gestos de apertura política, como el diálogo con los sectores gremiales y la oposición, el retorno de algunos exiliados, la vuelta a

circulación de ciertos medios de prensa escrita —etapa que se conoció como la “Primavera de Jarpa”—, pero también se caracterizó por un nuevo endurecimiento de la represión a las movilizaciones en contra de la dictadura.

Tras asumir su cargo, Jarpa visualizó en la Democracia Cristiana un interlocutor válido dentro del espectro de la oposición, con el objetivo de lograr algunos entendimientos básicos. De ahí que nos propusiera trabajar conjuntamente en la modificación de la Constitución de 1980, bajo un marco institucional más democrático que resguardara la transición.

El enfoque era algo similar a lo planteado por el Acuerdo Nacional del cardenal Fresno: la consolidación de un pacto para conformar un gobierno de transición. Pero no fue la única iniciativa. Yo mismo, durante esa época, elaboré una propuesta denominada “Por la razón y no por la fuerza”¹⁰⁷, la cual planteaba que el nuevo mandato debía estar a cargo de un representante de las Fuerzas Armadas que garantizara la realización de elecciones libres, la instauración de un Parlamento democráticamente electo y la modificación de la Constitución, derogando, de paso, el polémico artículo 24 transitorio, que otorgaba facultades omnímodas al dictador. Dicha propuesta representaba a la gran mayoría de la gente que estaba por terminar con la dictadura por la vía pacífica; un acuerdo no con Pinochet, sino de la civilidad con las propias Fuerzas Armadas.

Cuando Gabriel Valdés, entonces presidente del partido, nos informó acerca de sus primeras conversaciones con el ministro Jarpa, nos sentimos optimistas. Sin embargo, muy pronto caeríamos en la cuenta de que entre las reales posturas del ministro y Pinochet había un verdadero abismo. Cuando el primero empezó a aparecer desmentido públicamente por el dictador, se nos hizo evidente que el diálogo sería infructuoso. A eso de los cinco meses de su nominación, las conversaciones se acabaron.

A comienzos de octubre de 1983, Pinochet descartó, en un discurso público, cualquier eventual cambio a la Constitución, dando con ello un portazo a los acercamientos que habían empezado a gestarse con la Alianza Democrática, nacida en marzo de ese año de la colaboración de los partidos que habían firmado el Manifiesto Democrático. Así, la oposición se volcó nuevamente a las calles para continuar su lucha.

Desde la derecha, numerosos adherentes al gobierno también comenzaban a caer en la cuenta de que Pinochet no tenía la más mínima intención de entregar el

poder, que su actuar era cada vez más errático y abusivo, y que era necesario encontrar una fórmula para poner fin a la dictadura. Una clara señal de que en la derecha se acrecentaban los quiebres fue la creación, en septiembre de 1983, de la UDI, liderada por Jaime Guzmán —quien empezaba a distanciarse del gobierno, a raíz de la crisis interna producto del modelo económico— y, un mes más tarde, del Movimiento de Unión Nacional (MUN), encabezado por Andrés Allamand.

En el mes de abril de 1983, la Confederación de Trabajadores del Cobre, encabezada por Rodolfo Seguel, llamó a los trabajadores a adherir a un paro y protesta contra la dictadura, convocada para el 11 de mayo.

La magnitud y fuerza de dicha movilización fueron extraordinarias, y sorprendió no solo al gobierno, sino que hasta a sus propios organizadores. A ella se sumaron numerosas organizaciones y los partidos opositores, marcando un hito en la lucha contra la dictadura. Seguel, quien hasta entonces era prácticamente una figura desconocida, terminaría convirtiéndose en un actor clave dentro de la organización sindical y del país. Mi primer encuentro con él se dio después de esa primera jornada de protesta, en Madrid, hasta donde llegó invitado por las organizaciones sindicales españolas. En dicha oportunidad, conversamos largo y tendido acerca de lo que representaría el próximo ciclo de movilizaciones sociales, bajo la vía pacífica, para enfrentar al dictador, así como de la importancia de incrementar el apoyo desde el ámbito sindical internacional.

2. Cómo se gestó la contraofensiva sindical

La dictadura se enfrentó, por primera vez desde sus inicios, a una huelga en el sector del cobre. Los primeros en movilizarse fueron los trabajadores de El Salvador. Pese a las represalias tomadas en su contra, el fenómeno siguió extendiéndose a Andina, El Teniente y Chuquicamata. Esto puso nervioso al gobierno. Pinochet les temía mucho más a los dirigentes sindicales que a nosotros, los líderes políticos, puesto que entendía que aquellos tenían el poder para complejizar aún más la crisis económica por la que atravesaba el país.

A diferencia de los sindicatos campesinos, los trabajadores del cobre tenían más capacidad de enfrentar al gobierno y repeler la represión, en parte, por su estructurada organización, pero también porque no habían sido tan permeados por la Unidad Popular. Este, de hecho, representaba un sector que le había provocado grandes dificultades al gobierno de Salvador Allende.

Los trabajadores del cobre fueron los primeros en marchar contra Pinochet, pero no fueron los únicos. En general, los dirigentes sindicales representaban un pensamiento político que se oponía a la dictadura, al igual que el mundo popular. Su rol fue muy importante, sobre todo a medida que se fueron sumando a la labor de la dirigencia política, desde mediados de los 70. Ya en 1975 se había creado el llamado “Grupo de los Diez”, una coordinadora sindical que demandaba cambios y que denunció, ante importantes organizaciones estadounidenses, la situación de abuso y atropellos laborales que enfrentaban los trabajadores chilenos. Dicha entidad había sido fundada por Tucapel Jiménez, Eduardo Ríos, Ernesto Vogel y Manuel Bustos, entre otros. Al año siguiente, se conformaría la Coordinadora Nacional Sindical, la que tendría un rol clave en la convocatoria de las protestas durante los años 80.

A fines de 1978, el “Grupo de los Diez” organizó un boicot a las exportaciones chilenas, exponiendo la situación ante la poderosa sindical estadounidense anticomunista AFL-CIO: en Chile no existía libertad y no se respetaban los derechos laborales más elementales. El entonces ministro del Trabajo, José Piñera, desplegó todo tipo de gestiones y echó mano a sus contactos internacionales, logrando finalmente evitar cualquier sanción contra Chile. No

obstante, la incondicionalidad de Estados Unidos, tras el crimen de Orlando Letelier, había comenzado a debilitarse. Luego de este impasse, el gobierno se apuró en anunciar la creación de un nuevo Plan Laboral que, en apariencia, parecía promover la organización sindical. Sin embargo, pronto se comprobó que buena parte de sus disposiciones restringían la capacidad negociadora de los trabajadores, eliminando de paso derechos laborales históricos.

La llegada de Miguel Kast al Ministerio del Trabajo, en reemplazo de José Piñera, en diciembre de 1980, significó el endurecimiento de las políticas laborales y un conjunto de nuevas modificaciones, tales como la eliminación de la indemnización de un mes por año de servicio. Ello tensionó aún más las relaciones entre el gobierno y los grandes sindicatos del país. Tucapel Jiménez fue removido intempestivamente de su cargo como jefe de presupuestos de la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco), en una evidente jugada de Pinochet por sacarlo del camino. En tanto, la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), liderada por Manuel Bustos y Alamiro Guzmán —con fuerte presencia DC y también de dirigentes socialistas, radicales, comunistas y del MAPU—, comenzó a alzar la voz y a expresar su descontento, lo que derivó en la posterior detención de ambos dirigentes, a mediados de 1981.

Finalmente, la gota que rebasó el vaso vino de la mano del propio Tucapel, quien, en febrero de 1982, llamó a todas las agrupaciones sindicales a unirse en un solo frente para denunciar y luchar contra el modelo económico vigente, asegurando que el movimiento sindical se reunificaría ese mismo año. Esta fue su sentencia a muerte. El día 25 de ese mes sería asesinado vilmente por un comando de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).

Pese al recrudecimiento de la represión, a las detenciones y al amedrentamiento, los trabajadores no bajarían sus brazos. Su lucha persistiría bajo un progresivo descontento y la convicción de la necesidad de cambios urgentes. Al llamado de Seguel, en 1983, lo seguirían nuevas movilizaciones, con la incorporación de nuevos gremios y sindicatos, así como de organizaciones estudiantiles, poblacionales, de derechos humanos y de mujeres. El régimen respondió con la detención y relegación de numerosos dirigentes sindicales, pero la lucha no mermó. El 30 de octubre de 1984, se llevó a cabo un paro nacional.

En el exilio, y al igual que sus pares políticos, los dirigentes sindicales chilenos encontraron apoyo entre los gremios europeos. Entre muchos otros, uno de ellos fue Manuel Bustos, quien, tras ser exiliado en 1982, se radicó en Roma. Allí fue

recibido por el mundo sindical italiano, organizado en tres grandes centrales: la Confederación General Italiana del Trabajo, la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores y la Unión Italiana del Trabajo. Estas tres entidades, que habitualmente trabajaban por separado, se unirían para apoyar al movimiento sindical chileno en su lucha contra la dictadura, empoderándolo y potenciándolo también en el logro de una mayor autonomía. En este sentido, la presencia de Italia fue clave, no solo en términos de apoyo económico y político, sino que también en facilitar la propia inserción del mundo sindical chileno en instancias internacionales. Dicha solidaridad, entre muchas otras acciones, se materializó en el financiamiento de una imprenta, algo que sería de gran ayuda para el movimiento opositor. Allí se imprimiría, por ejemplo, el Fortín Mapocho, así como afiches y propaganda para el plebiscito de 1988.

Otros diarios y revistas que emergieron en esos años, gracias al apoyo internacional, fueron Cauce, Análisis, Puro Chile y La Época, los que nos ayudarían a difundir lo que estaba ocurriendo, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo.

En efecto, la solidaridad internacional con el proceso de recuperación democrática se materializó y canalizó mediante proyectos específicos, a través de ONGs que dieron paso a la creación de diversas iniciativas orientadas a fortalecer la difusión, la discusión y el encuentro de la ciudadanía, así como a rearticular el tejido social.

3. Regreso a la patria: El fin del exilio

“El exilio de los chilenos debe terminar. Llegó el tiempo del retorno. Pedimos un pronunciamiento de todas las instituciones a las cuales interese el sentido humanista de la vida”¹⁰⁸, decía, el 12 de enero de 1982, la declaración pública suscrita por dirigentes chilenos desde el extranjero. El documento lo firmábamos Jaime Castillo, Renán Fuentealba, Rafael Agustín Gumucio, Alberto Jerez, Claudio Huepe, Manuel Muñoz, José Manuel Sepúlveda, Luis Soto y yo.

Este tipo de declaraciones era una manera de mantener viva nuestra voz. Entendíamos que la lucha por el retorno a la patria debía ser incesante. Aun cuando algunos comenzaran a regresar e, incluso, aunque se tratara de dirigentes destacados, no podíamos bajar la guardia. El objetivo era que todos los chilenos tuvieran la posibilidad de volver a Chile. La diáspora era inmensa y, pese a que muchas familias estaban desintegradas, la alternativa de elegir la tierra donde querían vivir era esencial.

Por fin, en junio de 1983, el gobierno anunció que había decidido autorizar el retorno de 128 exiliados, entre los que figuraban mi familia y yo. En aquel momento, me encontraba haciendo una gira por Centroamérica y, camino de vuelta a Europa, había pasado a Nueva York a reunirme con el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Estando ahí, me avisaron que se había publicado una nómina con mi nombre. Mi primera reacción fue de desconcierto. “¿Por qué yo?”, me pregunté, sabiendo que aún quedaban miles de chilenos exiliados en el mundo, a los que no se les permitía volver.

Las especulaciones y el comidillo de la prensa oficialista no tardaron en esparcirse. Incluso se dijo que venía a Chile a competir con Gabriel Valdés por el liderazgo de la DC, lo que desmentí tajantemente. Afirmé que regresaría a mi país porque era mi derecho, ratificando mi absoluto compromiso con la presidencia de Valdés, y juré que seguiría luchando hasta que todos mis compatriotas pudieran hacer lo mismo algún día.

Antes de partir, me reuní con el Presidente Felipe González en Madrid, viajé a Roma a dejar todo preparado en la secretaría general de la Internacional

Demócrata Cristiana y, posteriormente, hice lo mismo con la Fundación CIPIE, la que aún presidía. Durante esos días, concedí numerosas entrevistas a diversos medios internacionales, expresando que la única salida para Chile era la democracia, la que debía alcanzarse a través de medios pacíficos. Mis últimas palabras en Madrid fueron para “agradecer a todos los españoles, a las autoridades y a los medios de comunicación el respaldo, cariño y apoyo que se me ha brindado durante mi exilio”.

El 3 de septiembre de 1983, tras casi tres años de exilio, por fin pude regresar a Chile, libremente y sin condiciones. El recibimiento fue multitudinario. Fue un día que nunca olvidaré. En el aeropuerto de Pudahuel se había congregado muchísima gente, familiares, amigos y dirigentes políticos de todos los sectores. Los abrazos, saludos y el cariño de la acogida me dejaron desarmado y altamente impactado. El acontecimiento ocupó las portadas de los diarios chilenos y fue recogido también por importantes medios internacionales, tales como El País, The New York Times y Newsweek.

A la salida del aeropuerto, en un escenario improvisado en el pick up de una camioneta, habló Gabriel Valdés dándome la bienvenida. A continuación, conmovido, dije algunas palabras. Afirmé que regresaba a mi patria no para guardar silencio, sino que para sumarme a la lucha pacífica y activa hasta que Chile recuperara su libertad y se terminara con la represión. Al concluir mi mensaje, se organizó una larga caravana de vehículos que iniciaron el ingreso a Santiago. Por supuesto, la dictadura no podía evitar dejar su huella; en el camino habían puesto numerosos “miguelitos”, lo que nos obligó a cambiarnos de automóvil para continuar en nuestra procesión. En las calles se encontraban apostadas numerosas personas que observaban y saludaban, algunos con cara de temor, pero la mayoría aplaudiendo y sonriendo. Nos detuvimos en Estación Central, donde se había instalado un escenario, en torno al cual se había congregado mucha gente que venía a darme la bienvenida. Me pidieron que subiera a bailar una cueca, algo que pocas veces había hecho en mi vida, pero estaba tan feliz que no pude resistirme. Terminado el baile, saludé y agradecí a los presentes por su lucha por recuperar la democracia. Posteriormente, la JDC hizo continuar la caravana de vehículos por la Alameda hasta la Plaza Baquedano, donde me recibieron con gran presencia de banderas del partido. Fue algo emocionante, que quedó grabado para siempre en mi memoria. Ese gran apoyo me llenaba de nuevas fuerzas para seguir luchando.

Durante ese primer mes, tras mi llegada, sostuve numerosos encuentros con

dirigentes, agrupaciones y diversas personalidades, a la vez que instalé las oficinas de la presidencia de la IDC en Chile. Me reuní con Rodolfo Seguel, con el cardenal Juan Francisco Fresno y con dirigentes del Partido Demócrata Cristiano. El reencuentro con la patria, la familia, los amigos y camaradas fueron instantes preciosos, que anhelaba profundamente. Ello me permitió también pulsar y calibrar lo que realmente estaba sucediendo en el país.

Ya instalado, empecé a constatar la limitada capacidad de reacción que tenía la dictadura en ese momento, algo que me sorprendió muchísimo. En épocas anteriores, el gobierno siempre había respondido con dureza y extremada brutalidad. Ahora, en cambio, parecía abrirse una ventana para que la disidencia pudiera actuar y comunicar.

La Alianza Democrática se había configurado con bastante solidez, no porque tuviera una estructura orgánica, sino porque había un compromiso muy grande de parte de sus integrantes, sin perjuicio de que algunos pudieran estar o no de acuerdo con la estrategia a seguir. Por supuesto, me sumé a esta labor y me comprometí de lleno. Gabriel Valdés me planteó la posibilidad de incorporarme a la directiva del partido. Como yo aún seguía ejerciendo mi cargo como presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, lo que me obligaba a viajar bastante, no podía asumir como dirigente en Chile a tiempo completo. Sin embargo, acepté incorporarme a la directiva en calidad de vicepresidente. Desde esa posición, hice todo lo que pude por aportar. Sabía, también, que debía aprovechar mi lugar en la IDC para llevar a cabo acciones de apoyo mundial a Chile.

4. Homenaje a un gandhiano entrañable

Otro que regresó ese mismo año fue Jaime Castillo. Durante nuestro tiempo en el exilio, mantuvimos permanente contacto. Yo solía ir a visitarlo en Caracas, y él llegó a verme varias veces a Madrid. En 1982, hicimos juntos una gira por España, dando charlas y conferencias en diversas universidades, empezando por la de Salamanca, sobre el valor de la democracia y la realidad que se vivía en Chile.

Jaime y yo coincidíamos plenamente en nuestra postura respecto del mundo comunista, y en que este proyecto no era la solución para sociedades como la chilena. Sin embargo, él era un hombre de mucha apertura y diálogo, razón por la cual era muy respetado, incluso por la gente de izquierda. Jaime era un gran pensador, un filósofo y, tal vez por lo mismo, una persona muy distraída. Un día que estábamos en su departamento en Caracas, me preguntó si quería un café. “Claro”, le respondí. Al rato volvió y se sentó a conversar, y de pronto sentimos un horrible olor a quemado. ¡Jaime había puesto el jarro de plástico en el quemador de la cocina! Era el tipo de persona que llegaba a mi casa en Madrid, y cuando Inés abría la maleta para ayudarlo a guardar la ropa nos percatábamos de que había llevado chaquetas, pero no pantalones.

Era, además, dueño de una gran calidad humana. En mi hogar, lo sentíamos como uno más de la familia. Mis hijas lo adoraban y se quedaban conversando con él hasta altas horas de la noche, aunque al día siguiente tuvieran que madrugar para llegar a la universidad. Según ellas, no había nadie más fascinante que Jaime. Era muy modesto y, para él, lo material no contaba. Gozaba la vida, sin importar en qué condiciones se le diera. Le gustaba la hípica y era un bohemio; por él conocimos buena parte del barrio bohemio de Madrid, Malasaña, Lavapiés y La Latina, y nos hicimos adictos, como él, a Sarita Montiel y a los antiguos cuplés. En algún momento descubrió un walkman en nuestro departamento, se puso los audífonos y nunca más se los sacó, mientras escuchaba música romántica. Tenía una fuerza de voluntad enorme, incluso trató de convencerme de que regresáramos clandestinamente a Chile. Era persistente. Sus huelgas de hambre eran cosa seria, nada de escaramuzas. Jaime era un

gandhiano absoluto. Lo quise mucho, en parte porque fue clave en mi formación y convicción política. Él encarnaba mejor que nadie el pensamiento humanista cristiano, la defensa de los derechos humanos y otros valores como la modestia y la sencillez. Juntos hicimos muchas cosas y aprendí muchísimo de él. Creo que su figura representa un testimonio de lo que debiéramos ser los democratacristianos.

5. Corazones valientes

Las movilizaciones y protestas continuaron convocándose, mientras la Alianza Democrática fue asumiendo un rol cada vez más protagónico, con el objetivo de resguardar al golpeado movimiento sindical contra el que el gobierno se ensañó. Fui testigo de esta represión en carne propia. En septiembre de 1984, ya de regreso en Chile, convocamos a una manifestación pacífica en el frontis de la Catedral Metropolitana. Era un lugar altamente simbólico, pues ahí mismo, en el edificio contiguo, funcionaba la Vicaría de la Solidaridad. Alrededor de 300 personas habíamos llegado allí para hacer un acto de presencia. Las fuerzas policiales no tardaron en hacerse presentes. Nos mojaron, nos zamarrearón y golpearon. En un arrebato de indignación, fui a reclamar ante el que aparecía como jefe a cargo. Mientras le hablaba, más y más gente comenzó a reunirse a nuestro alrededor. Entonces me detuvieron entre varios policías, arrastrándome camino al bus de Carabineros. A punta de golpes, lumazos y tirones de pelo, me lanzaron adentro. En el interior, desde mi lugar en un rincón, escuché cómo el ministro Jarpa, encolerizado, le daba instrucciones por radio al capitán para que me llevaran de inmediato a la Tercera Comisaría, en calle Agustinas con Manuel Rodríguez. “¡Cómo han hecho esta brutalidad!”, gritaba.

En el cuartel, me recibió el coronel encargado. Yo venía con mi traje roto, mojado de pies a cabeza. Me llevaron hasta una oficina y me pidieron disculpas, mientras trataban de que firmara una declaración que señalaba que no había sufrido malos tratos. Por supuesto, me negué. Por el hecho de ser el presidente de la Internacional Demócrata Cristiana —cargo que aún ejercía en ese momento—, la noticia tuvo connotación internacional y fue difundida por la prensa en Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, España y en toda Latinoamérica. Incluso hubo reacciones de personeros del propio gobierno militar, cuestionando tan violento y torpe proceder de parte de Carabineros.

Nuestra lucha, fundada en la denominada “desobediencia civil”, se realizaba convocando a la ciudadanía a participar en manifestaciones pacíficas, con bocinazos, silbidos o pitazos, o yendo a los espacios públicos, al mediodía, a cantar la canción nacional. Les pedíamos a las familias que no llevaran a los

niños al colegio y a las dueñas de casa que no salieran a comprar, que tocaran cacerolas al anochecer, cosas de ese estilo. En los lugares de trabajo, algunos se manifestaban llegando tarde, trabajando con lentitud o realizando asambleas en los horarios de almuerzo. Cada gremio y grupo aportaba lo propio. El Colegio Médico llamaba a sus consultas privadas a no cumplir funciones. Era un movimiento realmente gandhiano.

Cada noche, en medio de los cacerolazos, en todos los barrios y en los lugares más recónditos del país, se escuchaba cada vez con mayor fuerza: “Y va a caer, y va a caer...”. Este era el sentir de millones de chilenos, exigiendo la caída de la dictadura. A esas alturas, el ministro Jarpa tuvo que haberse dado cuenta de que su intención de abrir el diálogo no tenía, en realidad, asidero alguno. Había quedado a la cabeza de un gobierno opresor. Por nuestra parte, entendimos que la supuesta apertura había sido un engaño, probablemente un nuevo ardid del gobierno para ganar tiempo en medio de la crisis. La incorporación de Jarpa no había sido más que una jugada política de Pinochet para apaciguar el bullente reclamo político y social que se estaba provocando.

En 1984, el ministro intentó presentar su renuncia, en medio de una polémica desatada por atentados extremistas, argumentando lo siguiente: “En esta encrucijada me resulta completamente imposible seguir adelante en la apertura política que estábamos desarrollando”. Desde la oposición, y también desde algunos sectores partidarios del gobierno, atribuimos su decisión a la intransigencia de Pinochet de aceptar el diálogo y la apertura democrática. Pero el dictador no solo rechazaría su intento de dimisión. Por el contrario, lo dotaría de nuevos poderes para enfrentar “la guerra con el extremismo marxista”. Así, Jarpa se vio obligado a mantenerse en su cargo hasta febrero de 1985. En el intertanto, se convertiría en un títere de Pinochet, quien había vuelto a ser el dictador brutal del día del golpe; una versión arrogante, intransigente, mañosa, llena de vericuetos, que imponía que las cosas se hicieran a su amaño.

La represión volvió a instalarse con la crudeza de los primeros años, especialmente en los sectores más vulnerables. Los tanques entraban libremente a las poblaciones. Los hombres mayores de 14 años eran sacados por centenares de sus casas en horas de la madrugada, y conducidos hasta las plazas o sitios eriazos, donde se los mantenía en paños menores. Ahí, agentes de la CNI los fotografiaban y empadronaban, en tanto carabineros allanaban las viviendas, ante la impotencia de mujeres, ancianos y niños. Incluso los cacerolazos empezaron a ser reprimidos a balazos. Fue en esas circunstancias que murió, el 4

de septiembre de 1984, el sacerdote André Jarlan en la población La Victoria, uno de los bastiones más famosos de resistencia contra la dictadura. Los carabineros habían ingresado a reprimir a la gente, en el marco de una jornada de protesta popular convocada ese día. El padre Jarlan se encontraba en su dormitorio, leyendo la Biblia, cuando una bala atravesó el muro y lo impactó. Más tarde, se comprobaría que el autor de este asesinato fue un carabinero. Con Inés, asistimos a su funeral. Fue algo muy impresionante. Una vez más éramos testigos de la lucha del mundo popular, la que, en definitiva, le dio sustento a lo que aspirábamos como chilenos: derrotar a Pinochet.

El valor y el coraje que tuvo la gente más sencilla de nuestro pueblo fueron fundamentales. Las mujeres y vecinos de poblaciones tales como La Victoria, Yungay, Joao Goulart sacaron la voz y nunca se amedrentaron. Salían a tocar sus cacerolas en medio de los disparos, exponiendo su vida y la de los suyos. Sin ese sustento, es probable que los chilenos nos hubiésemos empantanado por un largo tiempo más.

Se intensificó también la represión selectiva: secuestros, degollamientos, esfuerzos por identificar focos determinados de la oposición y centrarse en eliminarlos. En 1984, asesinaron bajo tortura al transportista Mario Fernández López, de la comuna de Ovalle, gran camarada y a quien fui a despedir en sus funerales, denunciando ahí a la CNI como autora de su muerte.

En marzo de 1985, tendría lugar el Caso Degollados, siendo asesinados José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, a quien conocía y con el que fuimos amigos, puesto que, muchos años antes, cuando trabajaba como procurador con mi hermano Alberto, habíamos sido compañeros de oficina. Nattino no tenía nada que ver con el trabajo que hacíamos nosotros como abogados; era publicista, pintor y diseñador gráfico, y en ese tiempo se dedicaba a los diseños publicitarios, pero convivíamos diariamente y era uno más del grupo. Era una persona buena y amable. Nunca dijo participar en política ni hablaba del tema. Jamás le escuché decir que perteneciera a un bando u otro; de ahí que las circunstancias de su muerte me sorprendieran tanto. Fue algo que me impactó profundamente. Lo que se cometió con él, con Parada y Guerrero fue de una crueldad inhumana.

Posteriormente, en julio de 1986, los estudiantes Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana serían quemados vivos por una patrulla militar, la que abandonó los cuerpos en la comuna de Quilicura. En agosto, aparecería el cuerpo del dirigente

estudiantil democratacristiano Mario Martínez en una playa en Santo Domingo. En junio de 1987, se llevaría a cabo la Operación Albania, también conocida como la “matanza de Corpus Christi”, uno de los montajes más emblemáticos de la dictadura militar, masacre que terminó con la vida de 12 frentistas a manos de agentes de la CNI.

Al recordar cada uno de estos terribles hechos, lo que quiero expresar es que la aproximación de la fecha del plebiscito no significó, por cierto, que el régimen amainara en materia de represión. Pinochet, tal vez motivado por el miedo a lo que se venía, inseguro y acorralado, prosiguió golpeando con fuerza al pueblo chileno, incluso hasta el final. Cito parte de una columna escrita por el periodista Juan Pablo Cárdenas el año 1986, pues creo que da cuenta fielmente de la percepción que teníamos en esos momentos:

Pinochet tiene miedo de todo. Sabemos que su vida y la de sus allegados se ha transformado en una pesadilla de sospechas, dudas y maquinaciones. Que el fantasma de la traición lo persigue día y noche. Que no hay en quien confíe plenamente. Que su principal ocupación es la de protegerse, pasar camuflado y requerir de su círculo de incondicionales majaderas expresiones de confianza. Pinochet y su grupo comprenden perfectamente que ya no tienen más remedio que defenderse brutalmente. Que no cuentan con apoyo civil, que sus sostenedores extranjeros empiezan a darles las espaldas y que el desastre económico que provocaron está ahuyentando hasta a sus propios mercenarios¹⁰⁹.

El rol de la mujer fue crucial en estos oscuros años. Desde el comienzo, desde los primeros días, con valentía y decisión, salieron a buscar a los suyos cuando no regresaron. Muchas veces a pie, con paciencia y persistencia, recorrieron cárceles, comisarías y recintos donde decían poder estar sus padres, maridos, hijas e hijos. Algunas tuvieron suerte y dieron con su paradero, y pudieron retomar el hilo de la vida... Pero muchas nunca más supieron dónde estaban ni qué pasó con ellos. Armándose de valor y conviviendo para siempre con la incertidumbre y la persecución, sacaron adelante a sus familias, arrastrando el enorme dolor de no saber el destino de sus seres queridos. Con firmeza y decisión, a fines de 1974, bajo el amparo del Comité Pro Paz, fundaron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), con el objetivo

de conocer el paradero de numerosos detenidos, así como de denunciar la irregularidad e ilegalidad de cada uno de estos arrestos. Brillaron en esta batalla figuras como Ana González, Sola Sierra, Mireya García, Viviana Díaz, Lorena Pizarro o Elena Muñoz, solo por nombrar a algunas. Ellas se atrevieron a levantar la voz en nombre de miles de familias chilenas afectadas por estas siniestras prácticas, en un período triste y sombrío, durante el cual el miedo acalló a muchos.

Si bien en un comienzo existieron ciertas suspicacias entre los dirigentes sindicales y sus pares políticos, en términos de definir quién lideraría el movimiento social, finalmente lograron cohesionar sus esfuerzos y el ímpetu ante el desafío compartido. Las organizaciones sindicales se agruparon en torno a la Asamblea de la Civilidad, ente multigremial liderado por el médico Juan Luis González. La labor de este colectivo tuvo su máxima expresión el 2 y 3 de julio de 1986, con un paro nacional que marcó un punto álgido de la lucha. Desde la arista política, Gabriel Valdés encabezó a la oposición. Muy cerca, y compartiendo dicho liderazgo, estuvo Jorge Lavandero, dueño de un espíritu incansable.

Durante toda la dictadura, Lavandero se caracterizó por su temple y coraje. Producto de su impetuosidad, muchas veces chocaba con Gabriel Valdés, a quien consideraba mesurado en sus posturas. Si bien Jorge era un militante leal al partido, no siempre se sentía cómodo al interior de la estructura partidaria. Era de esos líderes inagotables que se las ingeniaban para encontrar los recursos y formas de lucha más increíbles. En noviembre de 1982, en colaboración con los exdiputados Carlos Dupré y Sergio Páez, suscribieron bajo escritura pública la creación de una sociedad anónima cerrada de carácter comercial, sin fines de lucro y dedicada a estudiar la realidad social, la que se denominó Proyecto de Desarrollo Nacional (Proden). Se buscó esta fórmula, ya que la dictadura no permitía la existencia de ninguna entidad que oliese a organización gremial, sindical o de carácter político.

Según recuerdo, y tal como lo mencionaran Patricio Aylwin¹¹⁰ y el propio Lavandero¹¹¹, todo esto fue realizado con conocimiento de la directiva del partido, y como una forma de dar cabida en la lucha democrática a otros sectores políticos. Es así como se incorporaron al directorio de Proden Joaquín Morales y Marcial Mora, dirigentes del Partido Radical; Ramón Silva Ulloa, ex senador socialista; Julio Subercaseaux, Armando Jaramillo y Engelberto Frías, del Partido Nacional, y Raimundo Valenzuela, de la Izquierda Cristiana. Su comité

ejecutivo estaba integrado por 40 miembros. En la entidad confluyeron dirigentes sindicales y políticos provenientes de gran parte del espectro de la oposición, e incluso de la izquierda más radicalizada, resultando de aquí algunos de los primeros nexos que, al año siguiente, darían forma al movimiento de protestas iniciado por los trabajadores del cobre.

Fue también Jorge Lavandero quien resolvió adquirir, en febrero de 1984, el Fortín Mapocho. Hasta entonces, el diario había sido, por muchos años, el medio de comunicación oficial de la Vega Central. La dictadura intentó impedir su circulación, argumentando que se trataba de un medio nuevo, lo que requería de la autorización del gobierno para operar. Pese a los intentos de clausura y a la detención reiterada de sus reporteros, el diario siguió circulando y operando como plataforma de difusión de la oposición y del movimiento social. Bajo la dirección del periodista Jorge Donoso, fue, junto a las revistas Cauce, APSI y Hoy, y las radios Cooperativa, Chilena y Santiago, uno de los medios que mantuvieron una clara línea de apoyo a la oposición democrática.

Una de las campañas periodísticas más riesgosas de aquellos años fue la investigación y denuncia de la fraudulenta operación que habría llevado adelante Pinochet para hacerse dueño de varias propiedades fiscales y algunas particulares, a través de palos blancos del mando militar, en la localidad de El Melocotón, Cajón del Maipo. Allí el dictador se construyó, además, una lujosa casa de descanso.

Desde la directiva del partido, estábamos al tanto de los antecedentes, puesto que el abogado Ramón Briones nos había presentado el caso. Un grupo de abogados nuestros se organizó para llevar adelante dicha investigación, entre ellos, Jorge Lavandero, mi hermano Adolfo y Hernán Bosselin.

Lavandero asumió altos riesgos durante este proceso. Como parte de las indagaciones, fue al Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, lo que probablemente despertó sospechas entre los funcionarios públicos. Cuando logró reunir todos los antecedentes y escrituras que acreditaban que Pinochet había comprado los terrenos a través de testaferros, Lavandero le pidió al periodista Jorge Donoso, director del Fortín Mapocho, que se reunieran para entregarle una copia de los documentos para su posterior difusión. Camino a esa reunión, fue interceptado por agentes de la CNI, a bordo de varios vehículos. Lo golpearon hasta dejarlo casi muerto, y agonizó durante varios días, causándole numerosas secuelas.

El viernes 4 de mayo de 1984, presentamos una denuncia ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando que se designara a un ministro en visita para investigar la procedencia de los recursos para la compra de los terrenos. Algunos nos creyeron locos y pensaron que nos exiliarían. Efectivamente, fue una acción sumamente riesgosa, pero procuramos ser cautelosos y coordinamos todo de manera que, ese mismo día, radio Cooperativa transmitiera la noticia de la denuncia para que el caso llegara a la opinión pública, dificultando la capacidad de respuesta de parte de Pinochet

Se presentó una querella en contra del dictador por fraude al Fisco, la que fue encabezada valientemente por mi hermano Adolfo, quien incluso comprometió su patrimonio para otorgar la fianza de resultados, exigida para este tipo de querellas. Sin embargo, tanto esta como la denuncia ante la Corte de Apelaciones fueron desestimadas por el magistrado designado, quien argumentó que no tenía los atributos para juzgar al Presidente de la República.

Pinochet, por supuesto, refutó las acusaciones, argumentando que había comprado los terrenos con los ahorros de toda su vida y por medio de hipotecas. “La residencia en El Melocotón la adquirí con mis ahorros. El sitio según escritura costó 240 mil pesos, plata que ahorré durante muchos años; con respecto a la casa mensualmente pago dividendo (...). Quiero decir que siempre he sido austero y sobrio y pedí un préstamo para tener casa propia”, declaró a la prensa, en marzo de 1984.

El gobierno, incluso, amenazó con demandarnos por injuriar al Presidente. En ese tiempo, se calculaba que entre los terrenos adquiridos y las construcciones realizadas se habían invertido al menos unos tres millones de dólares, y no los 240 mil pesos que, como Pinochet afirmara, eran los “ahorros de su vida”. Realmente, como se dice en jerga popular, el militar fue un “cara dura”, que mintió con descaro para justificar un robo flagrante.

En mayo de 1984, la periodista Mónica González por fin expuso todos los antecedentes del caso, en un reportaje titulado “La casa del Melocotón”, en la revista Cauce. Ello le valió constantes amenazas y amedrentamientos, al punto de que desconocidos ingresaron a su domicilio en su ausencia, matando a su mascota.

Muchos años después, en 2007, el ministro Carlos Cerda determinó que la compra de los terrenos en el Cajón del Maipo se había financiado con dinero

proveniente de cuentas ocultas en el Banco Riggs, en Estados Unidos —razón por la que el caso se conoció como “Caso Riggs”—, así como con fondos de Cema Chile.

Con todo esto, Pinochet pasó a la historia como un hombre que nunca tuvo límites, no solo en materia de derechos humanos, sino que también en la mínima moral y ética que debe mantener toda persona, más aún si ejerce un cargo público. Ello da cuenta de las desvergonzadas artimañas a las que puede recurrir alguien que detenta el poder absoluto.

6. Viviendo con el enemigo

Apenas llegué a Chile, desde el partido me pidieron que iniciara una serie de giras. Fui a Concepción, Talca, Puerto Montt, entre muchos otros lugares. En Concepción, llamamos a una concentración en la plaza principal, a la que llegaron más de mil personas. En Talca, ingresamos a la ciudad por la avenida que pasa frente a una universidad, y de ahí salieron a recibirnos los estudiantes a la calle para luego desfilan todos juntos. Organizamos una reunión con el ingeniero Renato Guerra, presidente provincial del partido, en su parcela en Maule. Allí, debajo de un árbol, nos reunimos entre 30 y 40 dirigentes de la zona. Con el obispo Carlos González, llevamos a cabo un evento al que invitamos a Patricio Aylwin y a otros dirigentes, para ver cómo motivar a la gente a seguir luchando. ¡Hicimos tantas cosas! Recorrí el país reuniendo gente, a riesgo de que Pinochet, quien comenzaba a retomar sus viejas prácticas represivas, se enseñara de nuevo conmigo. No dimensioné realmente el peligro que esto significaba. Sin embargo, sabía que las cosas habían cambiado: ahora el dictador al menos me tenía algo más de respeto, puesto que contaba con la IDC de mi lado.

Así y todo, seguí recibiendo amenazas por escrito y vía telefónica. En general, prefería no hacerlo público, puesto que no quería que la gente se sintiera atemorizada. Todo el tiempo me seguían vehículos de la CNI, asegurándose siempre de no pasar desapercibidos. A veces, en la calle, me encontraba con gente extraña y sospechosa, sobre todo cerca de mi casa y oficina. En una ocasión, íbamos en el auto llegando a Pedro Valdivia con Providencia, y un vehículo con agentes nos venía siguiendo. Cuando cambió el semáforo a luz roja, abrí la puerta y me bajé a encararlos. “¡Qué se han creído ustedes!”, les dije. Los hombres pusieron cara de asombro. Nunca se esperaron que bajaría a enfrentarlos de esa manera.

En otra oportunidad, acompañado por Inés, saliendo de la casa de nuestro amigo José Luis del Río, me topé de frente con Manuel Contreras, sentado tranquilamente en su auto, esperándome. No me dijo nada. Era tan solo una forma de hacerme saber que estaba atento a mis movimientos. A veces me

desesperaba. Era como estar preso en libertad. Con el tiempo, sin embargo, me enteraría de cómo lo hacían para seguirme tan de cerca e identificar mis paraderos.

En ese entonces, tenía un chofer cuyo nombre era Luis Becerra. Era un dirigente poblacional de la Democracia Cristiana en Pudahuel, en una zona antiguamente conocida como Las Barrancas. Había sido chofer de Eduardo Frei cuando era Presidente y, tras el fin de su mandato, había seguido trabajando para él y su familia. Cuando regresé del exilio, la señora Maruja me preguntó si necesitaba a una persona que condujera mi vehículo, algo que me recomendaban por motivos de seguridad. “¿Por qué no contratas a Luis?”, me preguntó. Pensé que era una buena idea. Mal que mal, era una persona de absoluta confianza. No tenía ningún motivo para dudar de él.

En esos años, la CNI tenía informantes pagados en todas partes: en los partidos políticos, en la Iglesia, en las universidades, en las organizaciones sociales y sindicales. Aún vivíamos en dictadura, sin importar qué tan “blanda” pareciera entonces.

Luis Becerra trabajó conmigo más de 20 años, durante los cuales nunca dudé de su lealtad. Pero, en 2005, un encuentro con la periodista Mónica González lo cambió todo. En ese entonces, ya habían pasado más de 15 años del retorno de la democracia y yo era senador. Becerra seguía siendo mi conductor. “Andrés, tu chofer es un informante de la CNI... Es un espía”, me dijo Mónica, quien, por esos días, se encontraba reportando la investigación de la muerte de Eduardo Frei y trabajando con el ministro Madrid. Yo la conocía desde hacía años y teníamos una relación cercana. En 1987, me había entrevistado para la revista *Análisis* y publicado un artículo en que aparecía criticando a Pinochet, calificándolo de “burdo, de bajo nivel intelectual y brutalmente audaz”. Esta publicación le significó a ella ser detenida y encarcelada por atentar contra la Ley de Seguridad Interior del Estado.

—Pero cómo... No lo puedo creer —respondí, descolocado.

—Te lo cuento, porque en la entrevista que voy a publicar en la Revista 7+7 viene toda la información, y creo que es mejor que te enteres por mí. En el artículo, Luis Becerra confiesa que le entregaba información a la gente de la Dina, de la CNI y también del Batallón de Inteligencia del Ejército. Es mejor que estés preparado.

—Pucha, Mónica. Te agradezco lo que me dices... Voy a hablar con él —fue lo único que atiné a decir.

¡Estábamos hablando de un hombre que prácticamente vivía en mi casa! ¡Que almorzaba con nosotros! Lo había ayudado a comprarse un terreno cerca del lugar donde nosotros veraneábamos en San Clemente, Talca. Era alguien que había sido parte de la familia por dos décadas. No lo podía creer. ¿Cómo lo había pasado por alto? Intenté recordar algún episodio sospechoso, algo que demostrara que Becerra había estado mintiendo. A veces tenía conductas un poco extrañas, era cierto. El capitán de Carabineros Rodrigo Muñoz, quien estaba a cargo de la guardia de seguridad de la presidencia del Senado, me había comunicado ciertas dudas respecto a él. En ocasiones se mostraba bastante autoritario, pero en su minuto pensé que se trataba de celos profesionales y nada más.

Decidí esperar unos días antes de proceder. El miércoles siguiente, me fui a La Esperanza, aun tratando de decidir cómo abordar el tema. El jueves desperté un poco más tranquilo y le pedí que nos juntáramos a la salida de la casa, debajo de un castaño.

—Luis, me han dicho que usted es informante de la CNI... Pero nunca me advirtió nada.

En cuestión de segundos, se puso pálido.

—Don Andrés, yo le conté que había sido detenido y torturado, que tenía una hija amenazada que se había tenido que ir al extranjero...

En efecto, Luis me lo había notificado al momento de empezar a trabajar conmigo. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, incluso, había ido a testificar para la Comisión Valech. Pero esto estaba lejos de ser la verdad completa.

—Sí, pero Luis...

—Efectivamente, durante toda la dictadura fui presionado a entregar información. Pero se lo juro, nunca informé nada tan importante. Eran todas cosas que ya se conocían. No sabía qué más hacer. Me habían detenido, me torturaron, amenazaron a mi hija. Ella se tuvo que ir fuera de Chile... Eso usted lo sabía... —trató de explicar, visiblemente angustiado.

—Luis, lo entiendo, pero usted comprenderá que no puede seguir trabajando conmigo. Tiene que darse cuenta de que volvimos a la democracia en 1990. Es decir, ha pasado 15 años mintiéndome, ocultándome la verdad... Usted sabe que todos esos riesgos de los que me habla ya no existen. Podría haberme informado antes, yo lo habría entendido. Pero en 15 años no me dijo nada. Entiendo que hasta recibió dinero de la CNI...

—Sí, es verdad —reconoció. Y luego agregó—: Pero usted comprenderá que no podía negarme a recibirlo. Si lo hacía, me delataba como un agente que no estaba cumpliendo su función.

—Lo comprendo, pero esto es muy grave. ¿Cómo no me dijo nada? ¿Cómo no me lo advirtió?

Eso era lo que más me dolía, que, habiendo tenido la oportunidad, no se hubiera acercado a mí.

—No tuve la valentía para decírselo. Creí que ya era algo del pasado —agregó.

—Lo lamento, Luis. Pero ya no puede seguir trabajando para mí. Además, ya corresponde que se jubile. Haga lo que tenga que hacer. Yo daré instrucciones para que lo ayuden a sacar su jubilación, si así lo desea —contesté.

Y hasta ahí llegó la conversación. Después de eso, se marchó y nunca más lo vi.

En 2009, el ministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Madrid dictó sentencia, condenando a varios imputados por el asesinato de Eduardo Frei Montalva, y entre ellos figuraba Luis Becerra, en calidad de coautor. Otro de los acusados era Raúl Lillo, el ex agente de la Dina a quien Becerra, al parecer, debía rendir como informante. Cuando esto salió a la luz, ya habían pasado muchos años desde que no sabía nada de él.

Este descubrimiento me hizo darme cuenta de muchas cosas. En primer término, comprendí por qué la CNI siempre sabía dónde iba o estaba. Becerra se los comunicaba, o tal vez hacía de señuelo para que lo siguieran. Recordé aquel día en que venía saliendo de mi oficina en Ahumada con Huérfanos y, aunque nadie tenía por qué saber que yo iba a pasar a esa hora por ahí, de repente se me acercaron dos individuos por la espalda. Acto seguido, uno me tiró un tarro de excremento en la cabeza, mientras el otro me puso una pistola contra el pecho y me dijo: “Si sigues hueviando, te vamos a matar”. Luego, desaparecieron. Luis

venía conmigo.

Me quedé paralizado. La gente a mí alrededor tampoco sabía cómo reaccionar. Seguí caminando hasta la esquina de Estado y paré un taxi. Becerra se subió también, mientras el abrigo me chorreaba con excremento. Dimos vuelta a la cuadra, y de ahí volví caminando a la oficina a bañarme. Al poco rato, llegaron Alejandro Hales y otros dirigentes, pues la voz sobre el incidente se había corrido rápidamente. Mientras tanto, Luis tomó mi abrigo y se lo llevó. Me lo devolvió poco después limpiquito, en perfecto estado. No sé si se habrá sentido culpable. Hasta el día de hoy lo guardo como trofeo.

7. Los amigos de Chile

Pocos meses después de mi regreso a Chile, a fines de 1983, se me ocurrió una idea. ¿Y si convocábamos, en tierra chilena, un acto al que invitáramos a dirigentes demócratacristianos de todo el mundo? Era una excelente manera de atraer la atención y el respaldo internacional para poner a la dictadura contra las cuerdas.

Lo planteé en el partido y todos estuvieron de acuerdo. Decidimos que haríamos la convocatoria como un acto de homenaje a Eduardo Frei, quien había fallecido el año anterior.

Así, entre los días 11 y 13 de diciembre, se desarrolló en Santiago la primera reunión mundial de la Internacional Demócrata Cristiana en Chile, quizás la reunión democrática más importante realizada en 13 años de dictadura militar. El encuentro tenía como objetivo prioritario analizar posibles estrategias de democratización en América Latina, así como rendir un homenaje a la memoria del expresidente Frei. A él asistieron connotados líderes internacionales, como Mariano Rumor, ex Primer Ministro italiano; Angelo Bernassola, secretario general de la IDC; Ricardo Arias Calderón y Arístides Calvani, presidente y secretario de la ODCA, respectivamente; el ministro alemán Heiner Geissler; el secretario general de la DC italiana, Ciriaco de Mita; el asesor de la presidencia de la IDC, André Louis; Wim Polman, presidente de la Unión Internacional Juvenil; Paul Ssemogere, de Uganda, así como representantes de 50 naciones del mundo, tales como Alemania, Bélgica, Holanda, Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.

En esa ocasión, se elaboró la “Declaración de Santiago”, documento mediante el cual la IDC estableció como objetivo prioritario de su quehacer el restablecimiento de la democracia y resguardo de los derechos humanos, solicitando para ello el más amplio entendimiento entre todas las fuerzas democráticas. En dicha declaración se recordó la figura de Frei, destacando “su lucha permanente por la reconquista de la libertad y la democracia. Fieles a su mensaje y seguidores de su ejemplo, alentamos decididamente la más pronta instauración de la democracia en Chile y aplaudimos la decisiva participación de

la Democracia Cristiana chilena en esta tarea”.

El encuentro culminó con un homenaje a Eduardo Frei en el Teatro Caupolicán, a esas alturas un lugar muy simbólico para nosotros. Las intervenciones fueron numerosas, todas aplaudidas intensamente, en especial la del panameño Ricardo Arias Calderón, famoso por sus encendidos discursos. Fue todo un éxito. De pie entre los presentes, mirando el escenario maravillado, sentí una gran emoción: volvíamos a llenar el Teatro Caupolicán en plena dictadura. Pinochet había hecho todo lo que estaba en sus manos por impedir que siguiéramos involucrados en política, y aquí estábamos, una vez más.

Años más tarde, repetiríamos una escena similar, pero en esta ocasión a una escala mayor. El 19 y 21 de mayo de 1986, se llevó a cabo la Asamblea Interparlamentaria Mundial, con la intención de congregar en un mismo lugar a exparlamentarios del antiguo Chile democrático y representantes de todo el mundo, en señal de simpatía con el movimiento opositor. Un hito no menor, considerando que nos encontrábamos en el corazón de una dictadura.

La organización de este encuentro internacional fue obra de ex parlamentarios chilenos, entre ellos Sergio Páez, Carlos Dupré, Luis Pareto y Jorge Lavandero, así como del denominado “Círculo de exparlamentarios”, en el que participaban exdiputados y exsenadores de los diversos partidos opositores al régimen. Adherían, también, algunos de derecha que habían asumido un compromiso democrático y conformado el Partido Republicano, entonces presidido por el ex presidente del Senado Hugo Zepeda. La convocatoria contó con el patrocinio de la Internacional Demócrata Cristiana y la Internacional Socialista, en conjunto con las fundaciones Konrad Adenauer y Friedrich Ebert. Asistieron 119 ex parlamentarios chilenos y 65 extranjeros, provenientes de Europa y América Latina.

Pinochet, por supuesto, no se quedó tranquilo y salió al paso, declarando: “No acepto que vengan a inmiscuirse en asuntos nuestros. Considero traidores a estos caballeros que invitaron a esos otros. Son unos traidores vendepatrias vulgares y corrientes, salvo honrosas excepciones (...) Salieron a la luz pública aquellos vendepatrias que son capaces de vender a su madre con el fin de llegar al poder. Díganlo no más”¹¹².

Pero los reclamos del dictador no pasaron de las pataletas. Eran dichos desesperados que reflejaban cómo el temor y el nerviosísimo empezaban a

apoderarse del gobierno militar. Hubo un par de intentos menores de represión, entre ellos la detención de un diputado uruguayo. No obstante, fueron incidentes aislados, que ocurrieron en espacios públicos y a plena luz del día, siendo ampliamente cubiertos por la prensa local e internacional, lo que, a fin de cuentas, nos protegía y favorecía.

Asimismo, sabía cuánto le irritaba al dictador el hecho de que yo viajara por lo menos una vez al mes a Europa, y que allá me recibieran todos aquellos gobernantes que a él no lo querían ver ni en pintura. Iba a Portugal, y me reunía con Soares; en España, me recibía Felipe González; en Alemania, Kohl. Lo mismo en Venezuela, con Herrera Campins, o en Argentina con Raúl Alfonsín... Me paseaba por un montón de países llamando a derrotar a Pinochet.

Pero no era el único. Muchos dirigentes nuestros hacían lo mismo: Jaime Castillo, Renán Fuentealba, Patricio Aylwin, Gabriel Valdés, entre otros. Por supuesto, este trabajo lo hacían también dirigentes de izquierda, corriendo aún mayor riesgo que nosotros. La verdad, esta fue una unión de fuerzas muy importante que obligó al dictador a guardarse sus palabras respecto a que estábamos en receso político, a que no éramos dirigentes legitimados, o a que los partidos en Chile no existían.

Pinochet, en cambio, no era bien recibido en ninguna parte del mundo. Especialmente ya entrados los años 80, se vio a sí mismo aislado de la comunidad internacional, al igual que sus diplomáticos. Incluso los países vecinos le hacían el vacío. Aquellas relaciones que un día el gobierno había entablado con las dictaduras de otros países habían comenzado a cortarse con el retorno de la democracia al continente. Uno de los pocos aliados que le quedaban era el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, quien sería derrocado en 1989.

Difícil olvidar el embarazoso incidente ocurrido en 1980, cuando Pinochet fue invitado por el dictador Ferdinand Marcos, de Filipinas. Su avión tuvo que devolverse sin desembarcar, luego de que las autoridades locales cambiaran de idea ante presiones estadounidenses. Jamás se ha conocido un fiasco internacional como ese. Puedo contar hoy que aún guardo el servilletero que usó Pinochet en ese viaje en el avión LAN. Graciosamente, una de las azafatas que lo atendía me la obsequió como un trofeo que aún conservo.

En diciembre de 1983, asumió la Presidencia en Argentina el socialista Raúl

Alfonsín, poniendo con ello término a la dictadura cívico-militar que venía arrastrándose desde 1976. Este hito fue de mucha trascendencia, puesto que se trataba de un país vecino que había sufrido una dictadura con un nivel de represión y dureza muy similar al de la nuestra. Argentina era uno de los primeros países de la región en recuperar la democracia. En 1985, en mi calidad de presidente de la IDC, tuve la oportunidad de visitar a Alfonsín, ocasión en la que sostuvimos conversaciones muy relevantes respecto a cómo seguir avanzando en el proceso de democratización y, a la vez, asumir la experiencia argentina como un claro referente para el resto de los países latinoamericanos. Me interesaba, asimismo, confirmar qué tipo de respaldo teníamos de su parte, ya que Chile y Argentina venían saliendo de un conflicto muy tenso que casi terminó en una guerra. En ese momento, el mandatario comprometió su apoyo a la Alianza Democrática y se mostró muy abierto a ayudar.

En el continente europeo, en general, no había ningún país que manifestara cierta adhesión o simpatía por Pinochet. Por el contrario, su figura concitaba rechazo y la condena al régimen era generalizada. Algunos lo manifestaban con mayor fuerza, otros eran más prudentes... Esto, para nosotros, representaba una gran ventaja, pues nos permitía llegar a cualquier país europeo con la certeza de que seríamos recibidos con los brazos abiertos, y de que contábamos con todo su apoyo en nuestro trabajo por la recuperación democrática en Chile.

De forma similar, en Estados Unidos, si bien al comienzo, durante los mandatos de Richard Nixon y de Gerald Ford, había existido un respaldo abierto a la dictadura, las cosas comenzaron a cambiar luego de que Carter subiera al poder. Después del atentado a Orlando Letelier, la crítica se hizo explícita.

De esta manera, las relaciones con el mundo internacional nos permitieron seguir actuando durante aquel largo periodo, desde fines de los 70 hasta 1987, la antesala del plebiscito. A ratos, se sentía como una especie de invierno eterno, a la espera de que se cumplieran las fechas fijadas para la consulta nacional. Una pequeña luz titilaba en el horizonte, pero demasiado a lo lejos.

La solidaridad y la presencia internacionales fueron factores determinantes que nos permitieron triunfar en 1988. Ello, en gran medida, garantizó que el gobierno se atuviera a las reglas establecidas y que no llevara a cabo, por ejemplo, un autogolpe que echara el proceso por la borda. Para el plebiscito, contamos con cientos de observadores y representantes extranjeros, entre ellos los embajadores de Alemania, Bélgica, España y hasta de Estados Unidos,

supervisando la evolución de los acontecimientos. Esa presencia, en mi opinión, fue fundamental para que nuestro triunfo fuese reconocido finalmente por el gobierno.

Asimismo, pesó el proceso iniciado en 1973, que terminó configurando como aliados de nuestra lucha a casi todos los partidos de los países donde la democracia cristiana y la socialdemocracia tenían presencia. Hubo líderes internacionales cuyo apoyo fue esencial. Uno de ellos fue Adolfo Suárez. El presidente español nos abrió las puertas desde un comienzo. En 1978, Eduardo Frei, Juan Hamilton y yo fuimos invitados a un acto en Las Cortes, en el que todos los partidos ahí representados rindieron un homenaje a Chile, encabezados por el propio Suárez. Ese acto fue de un simbolismo enorme, puesto que los presentes habían sido, nada más y nada menos, que los mismos que habían dictado la Constitución que había permitido la transición a la democracia española. De ahí en adelante, contamos con el respaldo permanente de Suárez y de todo el mundo político español. No olvidemos que este también viajó a Chile en 1988, con motivo del plebiscito. Él siempre apoyó la lucha democrática en nuestro país, y creo que esto se debió, en buena parte, a la incorporación y apoyo irrestricto de numerosos dirigentes democratacristianos españoles al movimiento de Suárez durante la transición democrática en ese país. En su propio gobierno, participaron destacados personeros nuestros, tales como Fernando Álvarez de Miranda, Íñigo Cavero, Luis Vega Escandón, Óscar Alzaga, el catalán Josep Durán y Xabier Arzalluz, del Partido Nacionalista Vasco.

En este contexto, indiscutiblemente, Adolfo Suárez, representó una figura de peso a la hora de transmitir y hacernos entender lo que significaba vivir un proceso de transición pactada, un tema que, dada la cercanía del plebiscito, era importante discutir. La de los españoles fue una transición por la vía pacífica, sustentada en los famosos Pactos de La Moncloa, instancia en la que se comprometieron a trabajar conjuntamente el gobierno, el Parlamento, los principales partidos políticos y las asociaciones empresariales y sindicales obreras. Aquel pacto, que permitió a España dejar atrás una larga y dramática dictadura, con bandos que hasta entonces parecían irreconciliables, fue aleccionador. Suárez tuvo la habilidad —bajo la autoridad que le daba su reconocido liderazgo político— de saber establecer los puntos de equilibrio precisos para reubicar a ese mundo franquista y, al mismo tiempo, abrir espacios de integración a las ideas democráticas, tanto así que fue él quien impulsó la reforma política que volvió a legalizar al Partido Comunista español. Mi paso por España me significó aprender todo aquello. Por eso, cuando volví a Chile,

llegué más convencido que nunca de la necesidad imperiosa de generar instancias para una efectiva integración política entre las fuerzas opositoras. Nadie podía quedar afuera, ni siquiera el PC, que aún se debatía en ambiguas posturas; prefería tenerlo sentado en la mesa que debajo, pegándome en las canillas. En España, este importante lineamiento se mantuvo con la misma fuerza durante el mandato de Felipe González, quien asumió la Presidencia de España en 1982.

Ahora bien, retomando el relato, nuestra búsqueda de apoyo a nivel internacional se mantuvo hasta el final. En 1987, Ricardo Lagos, Sergio Molina y yo llevamos a cabo una extensa gira por el extranjero, explicando en qué consistiría el plebiscito y qué garantías requeríamos, enfatizando en la necesidad de una solidaridad real para con Chile. Fuimos recibidos por Helmut Kohl, canciller de Alemania; por Felipe González, entonces Presidente español, y por Giulio Andreotti, canciller italiano, entre otros. A esas alturas, ya no se trataba tanto de la donación de recursos, sino que de asegurarnos que la opinión pública internacional estuviera atenta al proceso chileno. Estábamos convencidos, incluso hasta la misma noche del plebiscito, de que el gobierno podía perpetrar un fraude o de que Pinochet se las podía arreglar para no reconocer una eventual derrota. Estas aprensiones, sin embargo, nos impedían ver lo que realmente se estaba gestando en la oposición: la acumulación de más y más fuerza, tanto interna como externa, un caudal imparable, poderoso y de tal potencia, que nada ni nadie podía ya detener.

La visita del Papa Juan Pablo II a Chile, en abril de 1987, fue el hito más simbólico de esta simpatía internacional. La gente se volcó a las calles para recibirlo en forma masiva. Su presencia pareció devolver a los chilenos la valentía. Hay imágenes potentes que dan fe de ello, como las de la pobladora de La Bandera, Luisa Riveros, quien se atrevió a subir al escenario en pleno Parque O'Higgins, frente a una multitud, para denunciar, ante la mirada atenta de Juan Pablo II, el sufrimiento de sus compatriotas. Todos pudimos apreciar el dolor y la impotencia en el rostro del Papa en ese momento. No debe haber sido fácil para él, puesto que tampoco podía intervenir directamente.

El Papa recorrió varias poblaciones, donde la dictadura aún se ensañaba con la gente que protestaba. Visitó también Punta Arenas, Puerto Montt, Concepción, Temuco, Coquimbo y Antofagasta. Estuvo en contacto con la gente y fue testigo de sus vivencias. Los incidentes ocurridos durante la ceremonia del 3 de abril, en el Parque O'Higgins, no dejaron espacio a la duda. Él lo vio, lo vivió. Se suponía

que iba a ser una misa para celebrar la beatificación de Teresa de los Andes, pero terminó con protestas de los manifestantes. Entre el numeroso público se infiltraron provocadores, seguramente agentes de la CNI, que instigaron graves disturbios. La policía intervino con carros lanzaguas, mientras los asistentes intentaban ponerse a resguardo, todo frente a los ojos del Sumo Pontífice, quien observaba los hechos desde el escenario.

Estábamos ahí con Inés, al lado de los sacerdotes Mariano Puga, Cristián Precht y otros curas que intentaban, desesperados, hacer algo. Entonces tuvo lugar esa icónica imagen en que se vio al Papa con ambas manos en la cabeza y los ojos congelados en el público. Allí exclamó, con un desgarrador grito: “¡El amor es más fuerte!”.

Evidentemente, y tal como se lo había advertido años antes, en nuestro encuentro en Castelgandolfo, Pinochet trató de sacar partido de su visita. Imposible olvidar esa escena en que el dictador lo engañó, invitándolo a asomarse al balcón para saludar junto a él, como si fueran grandes amigos, a la multitud que se agolpaba frente a La Moneda. Su incomodidad fue manifiesta.

Pese a todos los esfuerzos del gobierno por proyectar una buena imagen, creo que el Papa abandonó el país convencido, más que nunca, de la dramática situación que se vivía en Chile. Su estadía debe haberlo impactado, fundamentalmente por las similitudes entre el caso nuestro y el de Polonia. Ambos países vivían dictaduras atroces; una de extrema derecha, la otra comunista, donde no había lugar para la paz y la esperanza. ¡La realidad era insoslayable! Al despedirse de los chilenos, en su último mensaje, afirmó: “Mi oración se dirige a Dios con misericordia, para que corrobore en cada uno de vosotros el firme deseo de afrontar los problemas que os aquejan con ánimo sereno y positivo, con voluntad de encontrar soluciones por el camino del diálogo, de la concordia, de la solidaridad, de la justicia, de la reconciliación y el perdón”. Nadie lo había engañado...

8. Como la gota que golpea la piedra

Mientras Pinochet apretaba su puño represivo una última vez, y nosotros continuábamos tratando de responder por la vía no violenta, el Partido Comunista mantuvo una doble estrategia. Por un lado, participaba en algunas de las acciones convocadas por la oposición, y, por otro, apoyaba a grupos armados que creían, fehacientemente, que aquel era el único camino para derrotar a la dictadura.

Tal como mencionáramos anteriormente, el 6 de agosto de 1986, agentes de la CNI descubrieron en la localidad de Carrizal Bajo, región de Atacama, un enorme arsenal de armamento y municiones que miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con respaldo del Partido Comunista, intentaron ingresar al país. El material bélico, supuestamente, había sido importado con la ayuda logística de Cuba y de la Unión Soviética. Esto sirvió como excusa perfecta al gobierno para justificar una nueva ola represiva. A nosotros, a su vez, nos puso en una situación muy complicada: era imposible desmentir lo que estaba sucediendo.

Un mes después, el 7 de septiembre, tuvo lugar el atentado a Augusto Pinochet, denominado “Operación Siglo XX”, a manos de militantes del FPMR, en la cuesta Las Achupallas, camino al Cajón de Maipo. Esta acción, claramente, fue una respuesta desesperada ante la abrumadora contingencia. Los frentistas tenían conciencia de que la guerrilla era una opción cada vez más inviable; habían descubierto sus armas un mes antes y sus planes se desmoronaban. Debían actuar con premura. De lo contrario, no habría ya tiempo para más intentos.

Pinochet se salvó no por un milagro de la Virgen, como manifestara en su primera declaración tras el atentado, sino que por el hecho de que el lanzacohetes que impactó su vehículo no alcanzó a estallar, ello sumado a la pericia del conductor, que sacó el auto del alcance de otros proyectiles, y al hecho de que varios de sus guardaespaldas murieron intentando protegerlo.

Lo que siguió fue una razia terrible contra los rebeldes. Al día siguiente, cuatro dirigentes opositores fueron asesinados, entre ellos, José Carrasco, periodista de

la revista Análisis y militante del Partido Comunista. Un mes más tarde, fueron detenidos la mayoría de los frentistas involucrados, quienes morirían acribillados a manos de agentes de la CNI, en junio de 1987, en la denominada “Operación Albania”.

La persecución también afectó a los opositores que intentábamos dar la batalla por la vía pacífica. Ricardo Lagos, Patricio Hales y Germán Correa fueron especialmente perseguidos durante esa época. Yo mismo fui amenazado en reiteradas ocasiones, aún siendo presidente de la IDC. Pese a todo lo sucedido y a la represión desatada, mantuvimos nuestra estrategia de vencer a Pinochet bajo sus propias reglas.

En octubre de ese año, en una entrevista en Concepción, planteé: “Si no hay capacidad de entendimiento por la vía del diálogo, el país va a ser arrastrado inexorablemente a la violencia, tal como ha quedado demostrado con el hallazgo del armamento y del atentado al Presidente Pinochet. En esto hay que ser como los chinos y seguir golpeando con la gota sobre la piedra, por muy dura que esta sea. La oposición debe insistir en estas negociaciones y buscar una salida política para evitar una confrontación”¹¹³.

Mirándolo con optimismo, todo esto sirvió para instalar la idea de que el plebiscito ya no era una utopía, sino que una alternativa viable. Algunos sectores de la derecha, cuyo respaldo al régimen se había ido disipando, así lo pensaban también. Entendían que la permanencia de Pinochet en el poder, en las condiciones en que se encontraba el país, solo podía llevar a un mal desenlace. Prolongar el régimen hasta 1997, como pretendía el dictador, era inconcebible.

En ese momento, la oposición democrática se articulaba entre el Acuerdo Nacional, la Alianza Democrática, el Grupo de los Diez y la organización multigremial Asamblea de la Civilidad. Este cuadro era un claro signo de cómo el país intentaba estructurarse en los más diversos ámbitos. La lucha contra la dictadura no puede atribuírsele a un solo sector, a un partido o a una organización. Se trató de una acumulación de esfuerzos, en la que la ciudadanía jugó un rol crucial. La participación fue creciendo progresivamente, hasta hacerse tan potente que nada ya la detendría.

Así y todo, muchas veces nos sentíamos remando contra la corriente. A ratos perdíamos la entereza. Los ánimos estaban calados de dudas, incluso en nuestro propio sector. Las Fuerzas Armadas se proyectaban cohesionadas, pese a que ya

sabíamos de sus quiebres y fisuras y de los abusos de autoridad perpetrados por Pinochet con sus propios subalternos. Hasta Patricio Aylwin, en un principio, no se mostraba demasiado convencido respecto a que el camino del plebiscito fuera realmente una salida factible. Ricardo Lagos, también al comienzo, aparecía reacio a creer en dicha posibilidad.

En medio de esta enrarecida atmósfera, en 1987, se llevaron a cabo elecciones internas en la Democracia Cristiana, las primeras convocadas durante la dictadura. El nombre de Patricio Aylwin resonaba con fuerza. El año anterior, Gabriel Valdés había considerado postular a la reelección, pero finalmente desistió. Yo también había decidido abstenerme; pronto dejaría mi cargo en la IDC, y no me pareció prudente hacer campaña desde mi posición. Por otra parte, sabía que Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuyo liderazgo político recién comenzaba a emerger, estaba interesado.

A comienzos de 1987, nos reunimos en La Esperanza con varios dirigentes, a dirimir cómo solucionar la situación. Tras conversar largamente e intercambiar ideas, por fin llegamos a un consenso: Patricio Aylwin era la mejor carta, puesto que podía unificar al partido y representaba un liderazgo pertinente para el período de transición. Él aceptó, pero nos pidió a Edgardo Boeninger, a Narciso Irureta y a mí que lo acompañáramos como vicepresidentes en una mesa integrada.

Finalmente, a efectos de elegir la nueva directiva que reemplazaría a la presidida por Gabriel Valdés, se presentaron entonces tres listas, lideradas por Ricardo Hormazábal, Arturo Frei Bolívar y Patricio Aylwin. En junio de 1987, cerca de 30 mil militantes democratacristianos eligieron a sus autoridades comunales y provinciales y, posteriormente, las juntas provinciales votaron a sus delegados en la junta nacional. En Punta de Tralca, tras dos días de debate y propuestas, Aylwin resultó electo por amplia mayoría, con 132 votos (55%). Así, la nueva mesa quedó integrada por mí en la primera vicepresidencia, Narciso Irureta en la segunda, Edgardo Boeninger en la tercera y Gutenberg Martínez como secretario general. La elección de Aylwin en el cargo constituyó un hito importante y su vocería vino a inaugurar una nueva etapa en el partido, muy en la línea de lo que estaba ocurriendo en el país.

Cabe señalar que, hasta ese momento, Patricio Aylwin aún ni siquiera se mencionaba como alternativa ante una eventual candidatura a la Presidencia de la República, pues se había mostrado escéptico respecto a las opciones que

comenzábamos a barajar como oposición. Al interior del partido, otros nombres aparecían como opciones más consolidadas; entre ellos, Alejandro Foxley, Eduardo Frei hijo, Sergio Molina, Gabriel Valdés, e incluso el mío.

Pero nuestras nuestros resquemores y la falta de certezas nos mantenían despiertos por las noches. ¿Llegaríamos realmente a competir en elecciones presidenciales justas y transparentes? Ni siquiera el plebiscito parecía contar con garantías. En marzo de 1987, el gobierno había publicado su nueva Ley de Partidos Políticos, devolviendo con ella la legalidad al accionar de los dirigentes y sus colectivos. Sin embargo, nada nos aseguraba que las mismas artimañas de siete años atrás no se repetirían. Desconfiábamos de los registros electorales, de la real posibilidad de hacer campaña y de la indispensable libertad de prensa.

La desconfianza era tanta, que había gente nuestra que hasta se oponía a la inscripción del partido en los registros electorales, sosteniendo que hacerlo era someterse a una ley establecida por la propia dictadura. Por mi parte, mantenía ciertas dudas; no obstante, consideraba propicio aprovechar los espacios que concedía el conducto legal. Inscribirnos nos permitiría, por ejemplo, nombrar apoderados de mesa, y eso era ventajoso.

Se discutió también si era conveniente inscribir un “pentapartido”, al estilo del Pentapartito italiano, la coalición de partidos políticos conformada en 1981 en un intento por agrupar a todos los detractores del régimen fascista. Personalmente, no era partidario de crear un partido colectivo propiamente tal, pero sí me interesaba impulsar una alianza que reuniera a los representantes de la oposición con una visión común: un proyecto amplio que sintetizara e integrara la identidad y proyección del humanismo laico y el humanismo cristiano, alianza de la que fui testigo y que permitió la gobernabilidad en numerosos países europeos. En realidad, se trataba de un proyecto muy en la línea de lo que más tarde sería la Concertación. Mis resguardos, sin embargo, tenían relación con la experiencia de lo que había sucedido con el Centro Democrático y Social de Suárez en España, al que habían terminado adhiriendo tanto sectores liberales y conservadores, socialdemócratas y demócratacristianos, al punto de que finalmente terminó desdibujado, perdiendo su propia identidad y capacidad de proyección.

Otros partidos se hacían preguntas similares. El PS se encontraba en pleno proceso de revisión y reestructuración interna. El sector más moderado, dirigido por Ricardo Núñez, propuso entonces crear un partido “instrumental”, que

sirviera para aglutinar a la oposición con miras al plebiscito; es decir, una especie de paraguas “sin distinción de ideología, militancia o programas”, según él mismo lo describiría. Dicho partido se denominó Partido por la Democracia, o PPD. Sus filas estaban integradas por militantes provenientes de la Izquierda Cristiana, el MAPU, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, el Partido Comunista e, incluso, algunos antiguos militantes del Partido Republicano y del Partido Nacional. Su primera directiva estuvo integrada por Ricardo Lagos, como presidente; Manuel Sanhueza y Armando Jaramillo, como vicepresidentes; Jorge Schaulsohn, como secretario general, y Rodrigo González, como tesorero.

La Democracia Cristiana optó por no integrarse a dicho colectivo, sino que proceder a su inscripción como partido con su propia identidad. La directiva encomendó a mi hermano Adolfo hacerse cargo de esa difícil misión, la que ejecutó con gran responsabilidad y eficiencia. Por cierto, el desafío no era nada de fácil, no solo por los recursos materiales que se requerían para conseguir respaldo en todo el país, sino que también por los plazos fijados, el escaso tiempo y, ante todo, el temor de la gente a firmar. ¡Fue una labor titánica! Sin embargo, Adolfo lo logró y con creces, lo que posteriormente fue fundamental para llevar adelante la campaña del plebiscito, ganarlo y, por qué no decirlo, para levantar la contienda presidencial y dar gobernabilidad al país, en una transición que sabíamos sería extremadamente compleja.

XI

LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

1. Juntas y revueltas: Elecciones libres y la Campaña por el NO

Durante todo 1987, y buena parte de 1988, las elecciones libres fueron nuestro objetivo. Toda la oposición, articulada en el Acuerdo Nacional, coincidía con esta tesis. En la junta nacional de la DC en Punta de Tralca, en agosto de ese año, emitimos una declaración en la que explicábamos su relevancia en los siguientes términos: “La realización de elecciones abiertas, libres y limpias, en las que el pueblo ejerza su soberanía, permitirá resolver la crisis política nacional sin rendición de nada y será el único medio a constituir un gobierno que sea apreciado como legítimo”.

De este esfuerzo colectivo nació la Campaña por las Elecciones Libres, la que se organizó a través del Comité por las Elecciones Libres, liderado por Sergio Molina e integrado por diversas personalidades. Esta campaña fue apoyada activamente por todos los partidos opositores, a excepción del PC y del MIR.

A ese punto, la tesis de las elecciones libres no solo era planteada por la oposición. Había gente de derecha que pensaba que ir a comicios abiertos beneficiaría más al gobierno que exponerse a perder en una contienda sin opositores. Se rumoreaba, incluso, que esto se discutía al interior de las Fuerzas Armadas, en especial en los entornos del general Matthei y del general director de Carabineros, Rodolfo Stange. De hecho, circulaban ya algunos nombres para eventuales candidaturas, como el de Francisco Bulnes y del exministro Sergio Onofre Jarpa, quien en abril de 1987 fue uno de los fundadores de Renovación Nacional.

Aunque la mayoría de los chilenos estaba a favor de las elecciones libres — 85,6%, según un estudio del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), a comienzos de 1987¹¹⁴—, no había que ser un adivino para anticipar que Augusto Pinochet no cedería espacio a otros para competir contra él tan fácilmente. En julio de 1987, nombró ministro del Interior a Sergio Fernández, quien había estado a cargo del plebiscito de 1980. Esta nominación fue una clara señal de su reticencia a cambiar la fórmula de los comicios: la votación de un candidato único propuesto por la Junta de Gobierno, mediante un plebiscito en el que la ciudadanía debía pronunciarse por “SÍ” o por “NO”.

Además, ya existían denuncias de los primeros fraudes por parte del gobierno. Así lo afirmaba, por ejemplo, Carmen Frei, entonces consejera nacional del PDC, en enero de 1987: “(...) el gobierno ya inició su fraude. Y este no es un juicio antojadizo. Basta leer la Ley de Registros Electorales, la Ley de Partidos Políticos. El fraude ya empezó. Todos sabemos que, si el gobierno quisiera realmente, los Registros Electorales podrían estar listos en 48 horas si se usa el sistema computacional. Pero ellos van a utilizar el sistema de inscripción manual. Además, van a abrir las oficinas electorales donde quieran y con quienes quieran. Entonces, ¿elecciones libres cuando no hay personas especializadas de todos los partidos políticos en el control de la inscripción electoral y después de las urnas?”¹¹⁵.

Asumimos, así, la lucha en todos los frentes. Seguiríamos exigiendo la realización de elecciones libres, pero también nos organizaríamos y lucharíamos para que, de mantenerse el plebiscito original, ganara el “NO”. Nos preparábamos así para dar la pelea en la cancha impuesta por la propia dictadura. Entendíamos los riesgos de esto, así como la importancia de crear un órgano fiscalizador que supervisara el proceso y la entrega de los resultados electorales. “Tenemos tres opciones: conseguir la realización de elecciones libres, como en Corea del Sur; acudir a un plebiscito si se dan las garantías suficientes, y ganarlo, como en Uruguay, o ejercer una presión nacional e internacional en contra del fraude, como en Filipinas. Estamos preparados para las tres posibilidades”¹¹⁶, declaré, en octubre de ese año.

En enero de 1988, se organiza el Comando Nacional por el NO, y al mes siguiente, el 2 de febrero, se crea la Concertación de Partidos por el NO, coalición integrada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista Histórico —presidido por Ricardo Núñez—, el Partido Socialista Sector Mandujano, la Unión Socialista Popular, el Partido Radical de Chile, el Partido Radical Socialdemócrata, el Partido Socialdemócrata, el Partido Democrático Nacional, el MAPU, el MAPU-OC, la Izquierda Cristiana, el Partido Humanista, la Unión Liberal Republicana, el Partido por la Democracia y la Alianza Humanista Verde. El Partido Socialista presidido por Clodomiro Almeyda y el Partido Comunista se restaron, incorporándose posteriormente, recién en el mes de agosto.

La Campaña del NO y el Movimiento por las Elecciones Libres no eran mutuamente excluyentes. Por el contrario, nuestro objetivo era no solo que coexistieran, sino que también se retroalimentaran. Desde ambos lados se

convocaba a la gente a inscribirse para ir a votar. Se sumaron, también, las organizaciones de la Asamblea de la Civilidad, al igual que diversos colegios profesionales, artistas y gente vinculada al mundo de la cultura. Así, fueron confluyendo diversos actores y vertientes en un cauce que avanzaba en una sola dirección, y a pocos meses del plebiscito se había levantado una gran campaña que trascendía ideologías, credos políticos o partidarios.

Es cierto, algunos tenían más fe que otros. Hubo discrepancias, e incluso competencias por determinados liderazgos. A veces, por ejemplo, se producían discusiones respecto a quién iba a dirigir tal o cual concentración o quién sería el orador principal en un determinado acto. En los últimos años, nuevas figuras políticas habían comenzado a emerger. Una de ellas fue la de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Hasta entonces, si bien siempre se había mostrado crítico a la dictadura, Frei Ruiz-Tagle nunca había aparecido demasiado involucrado al mundo de la política. No era parte del entorno de dirigentes del Acuerdo Nacional. De joven, había sido dirigente universitario, pero posteriormente se había dedicado a la actividad privada. Solo tras la muerte de su padre, se lo había empezado a ver más involucrado en las acciones de la Democracia Cristiana. Su imagen en el funeral en la Catedral, en representación de la familia, había sido muy potente. Asimismo, intervino en el homenaje que le hicimos a Frei Montalva, en 1983, en el Teatro Caupolicán. Progresivamente, fue conformándose un círculo a su alrededor —integrado por gente como Genaro Arriagada, Edmundo Pérez Yoma, Carlos Figueroa, Francisco Frei y Pedro Goic, entre otros— que buscaba posicionarlo como líder, algo que se acentuó aún más con la cercanía del plebiscito. Se trataba de militantes que habían sido cercanos al gobierno de Frei Montalva. El fallecimiento de este había dejado un gran vacío, y muchas personas, especialmente de sectores rurales, creían ver en su hijo la continuación de su figura. En 1988, Frei Ruiz-Tagle estaría entre los impulsores del Comité por las Elecciones Libres, lo que ayudaría a afianzar su liderazgo político aún más.

Para entonces ya había quienes querían promoverlo como eventual candidato presidencial. Esto me lo planteó Genaro Arriagada, a poco de mi vuelta a Chile. Le dije que Eduardo quizás tenía potencial, pero que ahora estábamos peleando por otra cosa, y que ya habría tiempo de dilucidar ese tema más adelante. Me parecía oportuno e importante centrarnos en una tarea a la vez, y ahora debíamos concentrarnos en un solo objetivo: derrotar a la dictadura. Ese era nuestro

desafío. Si lo lográbamos, ya llegaría el momento para decidir quién nos representaría. Sin embargo, comenzaba ya a gestarse el liderazgo de quien sería el segundo Presidente chileno en ser electo tras el retorno a la democracia.

2. Adiós al miedo

Inmediatamente tras la creación del Comando del NO, la Democracia Cristiana me encomendó organizar la campaña y formar un equipo coordinador. Desde los socialistas renovados, se designó a Ricardo Lagos, y desde el mundo radical socialdemócrata, fue escogido Enrique Silva Cimma. Entre los tres conformamos una suerte de triunvirato. Invité a Genaro Arriagada, quien había participado en la campaña para el plebiscito de 1980, a incorporarse como secretario ejecutivo. Poco después, se sumó Luis Maira, en representación del Movimiento Democrático Popular (MDP) —integrado por el Partido Socialista dirigido por Clodomiro Almeyda, el Partido Comunista, la Izquierda Cristiana, el MIR y otros movimientos menores— y José Tomás Sáenz, en representación del Partido Humanista Verde, quien posteriormente fue reemplazado por Tomás Hirsch.

Así, el panorama de la oposición organizada para enfrentar el plebiscito de 1988 quedó estructurado en tres organismos: el Comité para las Elecciones Libres — con Sergio Molina a la cabeza, e integrado por Mónica Jiménez, Eduardo Frei y Fernando Léniz, entre otros—; la Concertación de Partidos por el NO, cuyo consejo de presidentes se ocupaba de las decisiones políticas del movimiento y de exigir las condiciones democráticas necesarias al régimen, y el Comando del NO, desde donde se estructuró la campaña para enfrentar el plebiscito.

Al comienzo, los partidos rechazaban la idea de que se levantara un liderazgo individual como parte de la campaña. Ya se estaban sopesando posibles candidaturas con miras a las elecciones presidenciales, y era obvio que el que fuera designado vocero del “NO” correría con ventaja. Se armó toda una discusión al respecto. Finalmente, se llegó al acuerdo que Patricio Aylwin sería el primus inter pares y el vocero del consejo político, debido a que la Democracia Cristiana era, de entre todos, el partido con mayor presencia y mejor organización. El resto aún estaba reestructurándose, tras la persecución sufrida los años anteriores, y también como resultado de los procesos políticos de renovación.

Como comando, nos enfrentamos a tres grandes desafíos. Primero, casi no

teníamos recursos económicos para financiarnos, a diferencia de la campaña del Sí que contaba con fondos millonarios, por no decir ilimitados. Segundo, la gente tenía muchísimo miedo, producto de la represión. Y, tercero, debíamos encontrar una manera de llegar a todo Chile, en especial a los pueblos más remotos.

Me reuní con Enrique Silva y Ricardo Lagos para ver cómo conseguir financiamiento. “Lo primero es encontrar una sede”, les dije. Estaba convencido de que era muy importante tener un lugar propio, donde nos articuláramos como equipo y, a la vez, podernos mostrar como una coalición organizada. Pero volvíamos al problema inicial: no teníamos dinero. Además, nadie se iba a atrever a arrendarnos un lugar para hacer campaña contra el gobierno en esas circunstancias.

Recuerdo que, al día siguiente, temprano, salimos con Inés a recorrer las calles, en busca de oficinas en arriendo. Preguntábamos por aquí y por allá, a ver quién podía prestarnos algo. Caminando por la Alameda, frente a la Universidad Católica, pasamos frente a un local de compraventa de automóviles, ubicado en la Alameda esquina de Villavicencio, que pertenecía a Marcos Alvo, a quien había conocido cuando era ministro de Hacienda. Arriba de la tienda, se veían unos pisos desocupados, así que decidí visitarlo y probar suerte. No sé si lo pillé desprevenido, pero me respondió: “¡Hagámoslo!”.

Posteriormente, se lo planteé al consejo político y me dijeron que estaba loco. “¡Cómo se te ocurre que vas a armar el comando a media cuadra del centro de operaciones de la Junta Militar! Vas a tener a la Dina y a la CNI encima todo el tiempo”, exclamaron. Tenían razón, pero mi argumento era que no importaba adónde fuésemos, los organismos de seguridad iban a estar pendientes de nosotros de todas formas. Finalmente, la decisión la tomamos con Enrique Silva y Ricardo Lagos. Firmé las letras a nombre mío y le di un cheque a Marcos Alvo, y el trato quedó cerrado. Al principio no teníamos muebles, con suerte había suficientes sillas para reunirnos los cuatro, pero de a poco el asunto empezó a tomar cuerpo. Contar con una sede fue, sin duda, un aporte a la moral.

Lo siguiente fue trabajar en el eslogan de la campaña y definir algún símbolo que nos identificara. Ese día, nos habíamos reunido en mi casa. Estábamos sentados en la mesa del comedor, cuando el equipo de publicistas, encabezado por José Manuel Salcedo, propuso el arcoíris. Fue curioso, pues semanas antes había tenido que viajar a Europa, a una reunión en Bruselas, y me había traído

un afiche que me había impresionado mucho. En él aparecía un pájaro fuera de una jaula junto a un arcoíris. Fue una extraña coincidencia.

A todos nos encantó la propuesta. Era audaz y provocativa. El arcoíris representaba la diversidad de este gran equipo que quería ganarle a la dictadura, y sus colores simbolizaban el espectro de todos los partidos que integrábamos la Concertación. Era el Chile real, luchando por la libertad, confiando en que después de la tormenta brillaría el sol y se dibujaría el arcoíris. Luego, se creó el himno “Chile, la alegría ya viene”, que resultó genial. Fue compuesto por Jaime de Aguirre y escrito por Sergio Bravo. La música pegaba, era fácil de tararear y transmitía alegría, esperanza, romper con el miedo, hacer cambios, llamar a la gente a sumarse, proyectando que lo que se venía era algo bueno y esperanzador. Porque digan lo que digan, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuándo ya de abusos, es el tiempo de cambiar. Porque basta de miserias, voy a decir que no..., decía la canción, algo que representaba anhelos muy profundos y sentidos por muchos chilenos.

En el equipo creativo participaron muchos voluntarios. Entre ellos, recuerdo, por supuesto, a José Manuel Salcedo, Juan Gabriel Valdés, Jaime Celedón, Patricio Silva Echenique, Eduardo Palma y numerosas personas vinculadas a la cultura y a las artes. Todos querían aportar, proponer y sumarse voluntariamente a la campaña, en una verdadera épica que estuvo exenta de protagonismos e individualismos.

Así, progresivamente, fue construyéndose el espíritu de la campaña. No éramos solo los dirigentes los que aportábamos, sino que también la gente misma. Muchos diseñadores nos hacían llegar sus creaciones (afiches, calendarios, banderas) de manera gratuita. Lo mismo sucedía con los actores y músicos, quienes se sumaban a nuestras giras voluntariamente. El entusiasmo era inmenso y la campaña fue ganando así una fuerza y mística impresionantes. Todos querían participar. La gente hacía fila para ayudar; fueron miles y miles los que se incorporaron. Recuerdo los castings repletos de voluntarios ofreciéndose para ser filmados, con la esperanza de aparecer en alguna imagen de la franja.

Asimismo, fueron sumándose ciudades, localidades y pueblitos muy apartados a lo largo de todo Chile. Muy pronto, debimos nombrar encargados provinciales y comunales, con los que manteníamos permanente comunicación.

A medida que avanzaban los meses, se sumó otro desafío: Pinochet quiso

mantener en una incógnita la fecha del plebiscito casi hasta el final. Esto nos ponía en una posición riesgosa. Temíamos que el anuncio nos sorprendiera de un día para otro, con la gente aún sin inscribirse. Por lo mismo, nos enfocamos en desplegar una gran campaña para que la ciudadanía se inscribiera en los registros electorales. Ocupamos el espacio que ofrecía la Ley de Partidos Políticos de Pinochet como un instrumento a nuestro beneficio, y formamos cerca de 150 mil voluntarios para que fueran apoderados de mesa. Hicimos giras por todo el país, y a cada lugar donde llegábamos, nos encontrábamos con personas motivadas, listas para sumarse a hacer campaña con muy pocos recursos, pero sí con mucha creatividad. Recorrimos el país palmo a palmo, de extremo a extremo. Llegado un momento, decidimos realizar un estudio estadístico para diseñar una estrategia y no perder tiempo y recursos en comunas en que ya sabíamos que teníamos poco alcance electoral. Definimos entonces 70 comunas prioritarias, sin perjuicio de que seguimos haciendo campaña por todo Chile.

En los barrios populares, la gente organizó sus propios comandos del NO. Hacían ollas comunes y, tras compartir y comer, salían en caravanas o a pie a recorrer la comuna. Caminabas por el Paseo Ahumada y te encontrabas a los vendedores ambulantes ofreciendo chapitas y llaveros con el logo del arcoíris. Nuestros afiches y carteles se imprimían en la misma imprenta del Fortín Mapocho. En provincias, operábamos con imprentas clandestinas.

Ahora bien, la franja del NO fue resultado de un extraordinario equipo creativo, pero también, hay que reconocerlo, del esfuerzo del mundo político por conseguir que el gobierno nos habilitara un espacio televisivo, algo a lo que al principio se negaban. En un acuerdo insólito, logramos que el Tribunal Constitucional nos garantizara 15 minutos en la televisión durante los últimos 28 días de campaña, y esto fue determinante en nuestro triunfo. Toda la producción y las grabaciones fueron hechas con voluntarios. Así, la franja se construyó en la misma línea de nuestro himno, con personajes empáticos, escenas cercanas y cotidianas, en espacios llenos de luz, donde el humor y la positividad eran la tónica. El contraste con la franja de nuestros contendores era total. La campaña del SÍ era negativa, oscura, amenazante, con jinetes enmascarados y, si la memoria no me falla, en alguna escena aparecía la figura de la muerte con una guadaña. Era el contrapunto perfecto de lo que proponíamos.

El apoyo y las redes internacionales fueron también claves en esta campaña. Buena parte de los recursos que recibimos del extranjero nos sirvieron para financiar la logística. La Democracia Cristiana italiana, por ejemplo, organizó

una campaña que convocaba a apoyar a la oposición chilena, la que bautizaron algo así como “Un par para la democracia”, y que consistía en que cada persona donaba dos dólares a nuestra causa. No fue un aporte abismante, pero sirvió como ayuda, además de representar un valioso gesto solidario. Hasta la fundación del Partido Demócrata estadounidense envió una donación, la que fue aceptada por el comité ejecutivo de la campaña bajo la condición explícita de que se transparentara públicamente, lo que posteriormente hizo Genaro Arriagada.

También en Chile hubo un pequeño sector del mundo empresarial que se atrevió a apoyarnos. No eran aportes directos, pero sí facilitaban recursos para mantener, por ejemplo, las revistas de la oposición. Esto no era menor, considerando que gran parte de los empresarios simpatizaban con la dictadura.

Nunca supe cuánto costó la campaña del NO. Sería imposible hacer el cálculo. Nadie trabajaba con sueldos. Cada ciudad, cada comuna financiaba su propia campaña. Ni siquiera los publicistas cobraban, tampoco los encargados del área informática que desarrollaron el sistema para el seguimiento y conteo de votos. Todos los artistas se pusieron a nuestra disposición de forma espontánea y gratuita, tanto así que era una verdadera odisea decidir a quién elegir. Ese fue el gran sentido de nuestra campaña: la mística, el entusiasmo, la gratuidad, el trabajo conjunto, la gente. Todos hicimos muchísimo, pero lo más importante fue que logramos darle una estructura, así como una acertada conducción.

El Partido Comunista, que seguía jugando a dos bandas, solo se sumó dos o tres meses antes de la realización del plebiscito. Nunca se les vio muy entusiastas, pero finalmente adhirieron. Votaron, y también llamaron a votar, pero no participaron en la organización.

La campaña del NO fue, ante todo, la movilización de la gente desde sus propias bases, sus casas, sus barrios, sus propias organizaciones. De los colegios profesionales, los sindicatos, las juntas de vecinos. Nos jugamos el todo por el todo, con todas nuestras fuerzas, pues estábamos convencidos de que era una causa vital; si perdíamos, o no alcanzábamos el resultado esperado, al menos nos quedaríamos con la satisfacción de haber hecho todo lo que estaba en nuestras manos, y de haber dado la batalla con garra hasta el último instante.

3. Nervios de último minuto

En agosto de 1988, la Junta Militar hizo oficial la candidatura única de Augusto Pinochet. Ese día, numerosas personas salieron a manifestarse a la calle, produciéndose enfrentamientos entre los partidarios del “SÍ” y del “NO”. Al menos cien personas fueron detenidas por Carabineros. El comercio del centro de Santiago bajó sus cortinas.

Con el anuncio, empezamos a prepararnos internamente para lo que vendría después, en el eventual caso de que ganara el NO: las elecciones presidenciales. Desde la Democracia Cristiana, planteamos que la coalición debía elegir, desde ya, un candidato único para asumir la transición, tesis de la que yo también era partidario.

En el intertanto, mientras la fuerza del NO seguía expandiéndose por todo Chile, la derecha empezó a ponerse nerviosa. Su propia campaña, oscura y plagada de temores, no les convencía ni siquiera a ellos mismos. La nuestra, en cambio, llamaba a la gente a salir de sus casas, a renovar los ánimos, a reunirse, a hablar de alegría, cambio y esperanza. Había mucho temor entonces, después de largos años de represión, abusos y amenazas, de estado de sitio, toque de queda y de no poder expresarse libremente. Todo eso estaba fuertemente arraigado, especialmente en los sectores populares.

La necesidad de hacer campaña por el SÍ obligó a la dictadura a mostrarse, a abrir las puertas y a revelar lo que había adentro. No les quedaba otra, era parte de la dinámica de hacer campaña. Los diarios, incluso aquellos controlados por el oficialismo, les pedían información, declaraciones, definir posturas, y lo que resultaba de todo eso no siempre les era favorable. A la vez, como nosotros éramos la contraparte, también debían preguntarnos, cubrir nuestros eventos, ofrecernos algún tipo de espacio y eso, por supuesto, nos beneficiaba.

Hay que reconocerlo: hubo periodistas muy valientes en esa época, algunos de los cuales trabajaban en medios de tendencia oficialista, como Raquel Correa, Gloria Stanley e Igor Entrala, y otros como Patricia Verdugo, Fernando Paulsen, Juan Pablo Cárdenas, Guillermo Hormazábal, Jaime Moreno, Emilio Filippi,

Mónica González, Hernán Millas y Abraham Santibáñez, solo por nombrar a algunos. Pero la verdad es que nunca hubo verdadera libertad de prensa. Pinochet mantuvo todo bajo su control durante el tiempo que se prolongó la campaña. En abril de 1988, denunciemos estos hechos con Enrique Silva ante la Contraloría General de la República, documentando cómo el gobierno utilizaba con desfachatez los minutos en televisión, los centímetros en la prensa, e incluso el uso de recursos públicos para financiar la campaña del SÍ. Argumentaron que nuestra denuncia era imposible de comprobar, lo que una vez más era una flagrante mentira. Las municipalidades hacían campaña por el SÍ, al igual que todos los funcionarios públicos: los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, todos estaban controlados por el gobierno y, por supuesto, los jefes de plaza designados para el día del plebiscito eran militares subordinados y obedientes a Pinochet.

Hubo mucha represión y amedrentamiento para evitar que la gente se atreviera a hacer campaña por el NO. Muchas veces, cuando hacíamos puerta a puerta en los barrios populares, nos decían: “Disculpe, no puedo recibir su propaganda”, pero tú les veías las caras y entendías que te estaban apoyando. Tuvimos que luchar contra eso. Evitamos, a toda costa, cualquier acción que pudiera atemorizar a la gente. Incluso desmovilizamos las protestas, por el efecto negativo que podían tener en ese sentido.

4. El triunfo del NO: La primavera llega a Chile

Cuando llegó el 5 de octubre, estábamos listos. Era una mañana despejada, primaveral. Le habíamos pedido a la gente que, tras ir a votar, se devolvieran y se quedaran en sus casas, pues sospechábamos que, si había manifestaciones, grupos extremistas, o hasta los propios militares o carabineros podían disparar sobre la gente, dando así al gobierno pretextos para reprimir o suspender el proceso.

Estábamos seguros de que intentarían boicotearnos, por lo que instalamos sistemas informáticos de control electoral en tres lugares diferentes: la sede del Partido Demócrata Cristiano, la oficina del Comité por las Elecciones Libres y el Comando del NO. Incluso, instalamos generadores eléctricos, en caso de que el gobierno nos cortara la luz, algo que preveíamos podía ocurrir.

La prensa extranjera también estaba atenta. Más de 200 observadores internacionales monitoreaban de cerca todo lo que pasaba. Una importante delegación de líderes extranjeros, presididos por el ex Presidente del Gobierno español Adolfo Suárez y los ex Presidentes de Colombia y de Ecuador, Misael Pastrana y Osvaldo Hurtado, respectivamente, se hicieron presentes en los locales de votación, tanto en Santiago como en provincias. Los embajadores de Alemania, España y Estados Unidos estaban coordinados con nosotros. Si el gobierno decidía llevar a cabo un fraude, estábamos listos para salir a la calle a denunciarlo. Ese era el plan. No se trataba únicamente de ganar. Estábamos dispuestos a respetar un eventual triunfo del gobierno, siempre y cuando sucediera en condiciones de transparencia y libertad democrática.

Muy temprano, a primera hora, nos instalamos Ricardo Lagos, Enrique Silva, Luis Maira, Tomás Hirsch y yo en la sede del Comando del NO, junto a Genaro Arriagada, Carlos Figueroa y el resto del equipo. Nos acompañaban también los llamados “14”, quienes habían participado en todo el proceso, ayudando con el diseño político de la campaña. Sabíamos que estar ahí, en la sede del comando, a media cuadra del Edificio Diego Portales, era un riesgo. De hecho, un bus de Carabineros, con encapuchados armados que planeaban atacar el comando del NO, fue detenido mientras circulaba por la Plaza Italia. El vehículo había

desaparecido del cuartel, junto con otros buses, días antes. Esta información nos fue proporcionada por un alto oficial, en el momento que se produjeron los hechos. Finalmente, se supo que se trataba de agentes de inteligencia del gobierno.

A pesar de estos incidentes más bien aislados, los conductos internos partidarios comenzaron a informarnos, desde temprano, que el proceso parecía desarrollarse en forma normal y tranquila. Todo transcurría en calma, sin desórdenes ni actos de violencia. Al mediodía ya estaban todas las mesas del país constituidas, las que contaban no con uno, sino con dos o tres apoderados nuestros, para controlar el recuento de votos. Asimismo, muchos observadores internacionales se apostaron, haciendo acto de presencia, en diversos locales de votación de Santiago y en las principales ciudades del país, mientras los encargados de procesar los cómputos en terreno y transmitirlos a las diversas centrales de escrutinios estaban ya listos para comenzar su tarea.

La afluencia de ciudadanos que fue a votar ese día fue altísima, produciéndose grandes aglomeraciones en los recintos de votación. Nos informaban que las filas eran enormes y que avanzaban con lentitud. Ante este escenario, temíamos que se produjeran situaciones de violencia o que la gente, aburrida por la larga espera, se retirara sin emitir su voto. Pero nada de eso pasó. Los chilenos habían esperado demasiado tiempo este momento, y no lo iban a desaprovechar así nada más.

Tipo seis de la tarde comenzaron a conocerse los primeros cómputos. A eso de las ocho, el panorama se empezó a complicar. Los resultados que arrojaban nuestros sistemas computarizados no coincidían con las cifras que entregaba el gobierno: con el 0,4% contabilizado, la dictadura aparecía con 17 puntos porcentuales de ventaja. En cambio, nuestros cómputos nos daban el triunfo seguro.

Nos comunicamos con el Comité de Elecciones Libres, encabezado por Sergio Molina, y con Eric Campaña, encargado del equipo de la DC, para ponernos de acuerdo sobre cómo proceder. Se decidió hacer una conferencia de prensa. Genaro Arriagada, en su calidad de secretario ejecutivo del comando, daría cuenta del resultado y Patricio Aylwin, vocero de los partidos por la Concertación, respondería las preguntas de la prensa. Una hora más tarde, entregamos nuestras cifras: 41,3% para el “SÍ” y 58,7% para el “NO”, basado en el 20% de los votos escrutados. La información, como era de esperarse, solo fue

emitida por radios independientes y medios internacionales, mientras los canales locales silenciaron los datos. Era una situación insólita, pues, en el intertanto, el subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, daba al gobierno por ganador. El propio Pinochet salió a declarar a la prensa que, de acuerdo a sus antecedentes, el triunfo era del “Sí”, advirtiendo, de paso, que había recibido “informaciones inquietantes” respecto a la detección de personas con pasamontañas y armas, así como a la circulación de vehículos sospechosos en la zona sur de Santiago. Asimismo, nos causó mucha extrañeza notar que ningún policía resguardaba el centro de Santiago, como era habitual. Las fuerzas policiales se habían retirado misteriosamente.

A esas alturas, el panorama era preocupante. Nuestras aprensiones parecían estar tornándose realidad. Cuando tuvimos más de un millón de votos contabilizados, decidimos hacer llegar la información a los generales Matthei y Stange, miembros de la Junta de Gobierno. Máximo Pacheco fue designado el encargado de esta tarea. Era una estrategia que habíamos convenido con antelación, previendo un escenario como el que se estaba dando, de manera de evitar el fraude. Ambos generales habían mostrado cierta apertura a escucharnos y, pocos días antes, Máximo había establecido contacto con los dos.

Pasada la medianoche, Patricio Aylwin y Sergio Onofre Jarpa se saludaban en el set del programa de análisis político “De cara al país”, de Canal 13, conducido por Raquel Correa, Lucía Santa Cruz y Roberto Pulido. El exministro de Pinochet se había comunicado con el gobierno poco antes, para preguntar por el estado de los resultados. Según Aylwin, al entrar a la sala de maquillaje, Jarpa le habría saludado diciéndole: “¡Te felicito! Ganaron”. Posteriormente, frente a las cámaras, el exministro admitió que la tendencia a favor del NO era clara y pidió que no lo confundieran con el “piño” de los que no lo reconocían¹¹⁷. Solo entonces pudimos respirar más tranquilos. ¡Dicho reconocimiento anulaba cualquier posibilidad de fraude de parte del gobierno!

Aproximadamente a la una de la madrugada del 6 de octubre, el general Matthei llegó hasta La Moneda para reunirse con el resto de los miembros de la Junta Militar. “Parece que realmente ganó el NO... Al menos, para mí, yo lo tengo bastante claro ya”, dijo, abriéndose paso entre los periodistas y la prensa internacional apostada en el lugar. Esta declaración, sumada a la de Jarpa y a la que posteriormente realizaría el presidente de Renovación Nacional, Andrés Allamand, reconociendo en público el triunfo del NO, dejaban a Pinochet de manos atadas.

A las dos de la mañana, Patricio Aylwin salió a leer el último cómputo: 42,18% para el SÍ y 57,82% para el NO. Nos dábamos por ganadores. Pocos minutos después, el subsecretario Cardemil salía a entregar su versión: el SÍ tenía el 44,34% de los votos, y el NO el 53,31%. ¡El NO había triunfado! No podíamos creerlo. De pronto, alguien comenzó a entonar “Chile, la alegría ya viene”, y ahí, entre abrazos y una felicidad que lo desbordaba todo, concluimos ese memorable día. El gobierno, sin embargo, aún no reconocía nuestro triunfo. Recién a altas horas de la madrugada, el ministro del Interior, Sergio Fernández, leería por fin una declaración oficial admitiendo el desenlace, afirmando que el gobierno acataba “los resultados que el país ya conoce”.

Cerré el comando poco después, fui el último en irme. La orden era retirarnos a nuestras casas. Estaba agotado, no solo por el trabajo físico, sino que además por la tensión que habíamos vivido. ¡Sentía una alegría indescriptible! No hubo grandes festejos, según lo que habíamos acordado, pero a la mañana siguiente sucedió algo muy significativo: la gente salió a las calles espontáneamente, no a agredir, sino que a celebrar. Se vieron las banderas del NO flameando por todas partes, la alegría en los rostros, los padres con sus hijos, jóvenes y viejos celebrando. La gente se acercaba a los militares para saludarlos, hubo abrazos de civiles y carabineros, y algunos hasta se atrevieron a entregar flores a los uniformados. Días después, en plena portada, el Fortín Mapocho publicaría: “Corrió solo y llegó segundo”, refiriéndose a Pinochet. La primavera parecía haber llegado a nuestro país más esplendorosa que nunca.

5. El poder de un lápiz y un papel

A primera hora del día siguiente, me puse en contacto con Patricio Aylwin y los demás dirigentes para discutir los pasos a seguir. Creo que aún había cierta incredulidad entre algunos. Por mi parte, debo reconocer que hasta que no vi a Augusto Pinochet en el salón del Congreso Nacional sin la banda presidencial pude por fin convencerme realmente de lo que estaba sucediendo. Al igual que muchos, sabía de lo que él era capaz. No obstante, a esas alturas, era difícil que echara pie atrás. Los ojos del mundo estaban puestos en Chile, y las propias Fuerzas Armadas parecían contener diversidad de posturas.

Augusto Pinochet no se esperaba la derrota. Es probable que sus cercanos estuvieran convencidos de que podía ganar, pero creo que su entorno lo engañó, le dijeron otra cosa y trastocaron la realidad. Tal vez pensó que el resultado sería más estrecho, y que esto le daría posibilidades para maniobrar y provocar un fraude. Lo cierto es que hasta ahí, nunca se planteó la posibilidad de ceder el poder. Las conversaciones para la transición con el ministro Carlos Cáceres, quien reemplazó a Sergio Fernández en el Ministerio del Interior tras la derrota en el plebiscito, fueron extremadamente tensas. Hasta último minuto, si hubiera podido tirar del mantel, Pinochet lo hubiera hecho. Incluso, ya en democracia, con Patricio Aylwin como Presidente de la República, hubo momentos en que lo vimos muy dispuesto a golpear la mesa, sobre todo cuando las cosas se le ponían difíciles, como cuando se produjo el caso de los “Pinocheques” —en el que se vio involucrado el propio Pinochet, junto a su hijo mayor, Augusto, en un delito por fraude al fisco— o cuando se iniciaron los primeros juicios en materia de derechos humanos.

El otrora dictador nunca se conformó. Años después, como comandante en jefe del Ejército, hizo muchos corcoveos, pero finalmente la fuerza de los hechos le hizo ver que ya no contaba con la incondicionalidad de su propia gente y de las Fuerzas Armadas. Muchos habían empezado a darle vuelta la espalda, la opinión pública ya no estaba a su favor, y para qué decir el respaldo internacional. Estaba condenado.

Fueron casi siete millones y medio los chilenos que votaron ese 5 de octubre de

1988, más de la mitad de la población de la época. El triunfo del NO fue posible gracias a la valentía y al coraje de mucha gente que, en forma anónima, participó en todo tipo de acciones para recuperar la democracia. Esa lucha culminó con algo que siempre me ha parecido épico: la dictadura fue derrotada con un lápiz y un papel. Algunos hoy ponen en duda estos hechos, ironizando al respecto. A ellos me gustaría preguntarles si acaso se han imaginado cómo sería estar en el pellejo de quienes dimos esa batalla, venciendo todo tipo de temores y, como dice el dicho, “haciendo de tripas corazón”. Hay quienes, incluso, argumentan que fue mérito de Pinochet el haber aceptado su derrota. Creo que, definitivamente, este no tenía otra salida y, por desgracia para él, terminó atrapado en su propia trampa.

Cada vez que rememoro estos momentos y me refiero a la lucha por la recuperación de la democracia en Chile, intento no atribuirle el mérito a nadie, evitando dar nombres y apellidos. Y es que fue una batalla ciudadana, la cruzada de un pueblo que se rebeló contra la opresión y echó abajo una dictadura según sus propias reglas. Dar un nombre o mencionar a un partido sería faltar al reconocimiento de numerosos ciudadanos y ciudadanas que, arriesgándolo todo, y de manera anónima, aun desde los rincones más distantes de nuestra patria, supieron mantener encendida la llama de la esperanza. Hablo de miles de mujeres, de hombres, trabajadores y jóvenes que aportaron, de manera gratuita y generosa, lo mejor que tenían en ese momento: voluntad, ingenio, creatividad y, ante todo, una fuerza inusitada. Esto fue lo que permitió que Chile recuperara su libertad y democracia.

Como católico, siempre me ha impresionado mucho la frase “La fe mueve montañas”. Creo que, cuando hay mística y fe, uno es capaz de hacer lo imposible. Y esta fue una de aquellas ocasiones.

6. El germen de la Concertación

Una vez disipada la efervescencia inicial que siguió al triunfo del NO, nos sentamos a trabajar en el siguiente desafío: las elecciones presidenciales. No solo debíamos ganarlas, sino que también construir una propuesta de gobierno que proyectara gobernabilidad y credibilidad. Sabíamos que era importante mantenernos unidos, y en eso la conformación de la Concertación de Partidos por la Democracia resultaba fundamental.

Cuando, en 1970, Radomiro Tomic planteó su proyecto de la Unidad Social del Pueblo muchos pensaron que estaba desvariando. Pero lo suyo era una visión precursora, adelantada a su tiempo y, por cierto, muy incomprendida por lo mismo. Las condiciones no estaban dadas en ese entonces, pero casi veinte años después fue la unidad lo que nos permitió vencer a la dictadura y dar curso al período de transición hacia la democracia.

El germen de la Concertación de Partidos por la Democracia tuvo lugar, como lo hemos relatado previamente en capítulos anteriores, en los primeros contactos entre el humanismo cristiano y el mundo humanista no cristiano de los socialdemócratas y socialistas renovados. Hubo hitos previos, como la reunión en Colonia Tovar, Venezuela, en 1975, o el sinnúmero de encuentros y acciones realizadas por chilenos en el exilio que promovieron el diálogo, un lenguaje común y un clima de génesis. Pero el verdadero trabajo por el entendimiento comenzó con la Alianza Democrática. Siguió creciendo tras las protestas de 1983, gracias al apoyo del movimiento sindical, hasta cristalizar, entre 1985 y 1986, en el Acuerdo Nacional y la Asamblea de la Civilidad. A esas alturas, contábamos con mayores espacios de expresión política, lo que permitió que se sumaran dirigentes del mundo socialista renovado, tales como Ricardo Núñez, Jorke Arrate, Enrique Correa y Jaime Gazmuri, entre otros.

El proceso se consolidó tras la conformación de la Concertación de Partidos por el NO. Sin embargo, el paso fundamental se dio cuando logramos alinearnos y elegir un candidato presidencial único y representativo. Ese fue el momento clave. Si las cosas se hubieran dado de otra forma, si se hubiesen designado dos o tres candidatos, quizás podríamos haber ganado, pero hubiese faltado la

consistencia para sostener y proyectar ese gobierno en el tiempo. Siempre fui partidario y patrocinador de la idea de ir con un candidato único y, desde esa perspectiva, creo que la candidatura de Patricio Aylwin fue uno de los más relevantes triunfos.

Llegar a ese consenso no fue fácil, pero lograrlo fue determinante. Lo que Pinochet y sus adherentes esperaban era que la oposición no lograra ponerse de acuerdo y que termináramos divididos. Estaban atentos para aprovechar la menor muestra de flaqueza de nuestra parte y salir a recuperar terreno. No olvidemos que, pese a su derrota, Pinochet había logrado el 43% de los votos. Había varios ojos puestos sobre nosotros, esperando un paso en falso. Desde este punto de vista, la voluntad de buscar el consenso no era un tema de “gusto político”, sino que eminentemente una necesidad.

En la conformación de este nuevo proyecto, el apoyo del mundo social y sindical fue vital. Sacrificaron sus aspiraciones y postergaron las demandas de sus sectores para apoyar la paz social y un clima que permitiera al nuevo gobierno avanzar. Manuel Feliú, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y el entonces presidente de la CUT, Manuel Bustos, se sentaron a dialogar. Representaban sectores opuestos —el primero, al empresariado; el segundo, a los trabajadores— y con relaciones prácticamente quebradas. De estos acercamientos nació un acuerdo, consignado en 1990 como marco de referencia en términos políticos y sociales, en el que ambos sectores, en conjunto con el nuevo gobierno, se comprometían a trabajar colaborativamente. Sin dirigentes como Manuel Bustos, Rodolfo Seguel, Arturo Martínez, María Rozas y Hernol Flores, entre otros, la Concertación, probablemente, no habría tenido éxito.

XII

UN CHILE NUEVO

1. Negociando por la unidad

La noche del 9 de noviembre de 1989 el mundo fue testigo de algo increíble: el Muro de Berlín caía a pedazos, derribado a manos de miles de ciudadanos alemanes, sin un solo disparo y sin derramar una gota de sangre. Después de casi 30 años de división, alemanes del Este cruzaban la frontera, siendo recibidos por cientos de compatriotas en la parte occidental, entre abrazos y una euforia sin precedentes. Alemania volvía a ser una. El mundo que habíamos conocido durante las últimas cuatro décadas comenzaba a fracturarse, desmoronándose irreparablemente. El hito marcó el final de la Guerra Fría, pero también el comienzo de la desaparición del proyecto soviético comunista. Primero Polonia, luego Checoslovaquia y Rumania y, posteriormente, las distintas repúblicas que componían el bloque, todas fueron rompiendo con Moscú. Para fines de 1991, la superpoderosa Unión Soviética agonizaba de muerte. La gran Cortina de Hierro había caído, producto de las políticas reformistas introducidas por Mijaíl Gorbachov —la Perestroika y la Glasnost, impulso de una política de apertura y transparencia—, abriéndose al mundo occidental.

El binomio 1989 y 1990 fueron años fundantes de democracia en el mundo. La primera vez que viajé a Europa, después de la caída del Muro, visité algunos países de Europa Central —Bulgaria, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Croacia— y me sorprendió que muchos comunistas ya no se reconocían como tales, sino que como “socialdemócratas”. Las dictaduras comunistas habían desaparecido y lo que se constataba eran gobiernos elegidos democráticamente. El modelo económico había cambiado, pasando de economías planificadas a economías social de mercado. Fue el inicio del auge del multiculturalismo, los medios alternativos, la revolución de las nuevas tecnologías.

En Chile, un año antes, los ciudadanos también habíamos recuperado la democracia, mediante un lápiz y una papeleta electoral. Fuimos de los últimos del continente en terminar con la dictadura, pero lo hicimos con una convicción y fortaleza admirables.

Nuestro siguiente desafío consistía en elegir al candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, quien competiría en las elecciones presidenciales de

1989. Se daba más o menos por sentado que este provendría de las filas de la Democracia Cristiana, puesto que, tal como comentáramos anteriormente, el partido concentraba la mayor cantidad de electores y era uno de los mejores constituidos en ese momento. Además, nuestro presidente, Patricio Aylwin, había sido el vocero de la campaña del NO, algo que le había permitido posicionarse como una figura de amplio reconocimiento entre la ciudadanía.

En el intertanto, a fines de 1988, se realizaron elecciones internas para renovar la directiva del partido. Los candidatos que se postulaban a la presidencia eran Gabriel Valdés, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Patricio Aylwin, quien decidió ir a la reelección. Para la ocasión, se decidió celebrar una votación universal; es decir, un militante, un voto.

El ganador fue Patricio Aylwin, pero la calma duraría poco. A poco andar, en noviembre de 1988, denuncias de serias irregularidades electorales pusieron en jaque las primarias internas, advirtiendo que, previo a las elecciones, el padrón electoral había sido adulterado, aparentemente, por algunos militantes sorprendidos en las oficinas del registro electoral del partido. Este escándalo fue conocido como el “Carmengate”, pues la sede de la DC se ubicaba entonces en calle Carmen.

Las reacciones fueron inmediatas. Varios consejeros nacionales —entre ellos, Renán Fuentealba, Eduardo Cerda, Ricardo Hormazábal, Claudio Huepe, Andrés Palma, Arturo Frei, Genaro Arriagada y Felipe Sandoval— hicieron llegar una carta a Aylwin, denunciando los hechos: “Es evidente que ha habido una grave manipulación del padrón electoral considerado como un todo”¹¹⁸, señalaban. Por su parte, Valdés pidió una investigación a fondo, mientras Eduardo Frei Ruiz-Tagle exigió una auditoría administrativa, precisando que su reclamo era contra el registro electoral, el cual dependía de la secretaría general, a cargo de Gutenberg Martínez. Ambos solicitaban invalidar las elecciones internas, a lo que Aylwin respondió: “¿Por qué voy a renunciar si he ganado las elecciones?”.

Se acordó, en consecuencia, crear una comisión investigadora que resolviera el tema. Finalmente, el tribunal supremo llegó a la conclusión de que el hecho no había constituido un ilícito y que no se cuestionarían los resultados de las elecciones; supuestamente, había existido intención de cometer algún tipo de fraude, pero ello no había sido determinante en el desenlace de los comicios. El escándalo, sin embargo, no amainó tan rápido.

2. Mensajes cruzados

En circunstancias en que se empezaba a discutir quién sería el candidato presidencial de la Democracia Cristiana, la polémica entre los tres candidatos — Aylwin, Frei y Valdés— continuó tensándose, avivada, por supuesto, por la prensa oficialista, que se encargaba de añadirle carbón al fuego, con el objetivo de agravar nuestro quiebre interno. El intercambio, a través de declaraciones públicas, fue duro y descalificatorio. Aylwin dijo que Valdés no podía ser candidato presidencial, pues “generaba anticuerpos en el mundo uniformado”, a lo que Valdés, dolido, respondió: “Jamás, en mis 50 años de militancia, he visto a una autoridad del partido referirse de este modo a un camarada que lo precedió en el cargo”. Por su parte, Frei, al insistir en la necesidad de suspender las elecciones, fue rebatido por Aylwin, quien lo encaró diciendo que “sus reflexiones acusadoras son absolutamente impertinentes”¹¹⁹.

Afectado por la crisis interna provocada, y como una manera de buscar una salida al conflicto, Patricio Aylwin anunció su disposición a bajar su candidatura y a buscar una de consenso, postulando los nombres de Sergio Molina y el mío como alternativas. En paralelo, nos reunimos en privado y, en mi calidad de primer vicepresidente del partido, me reiteró su disposición a dar un paso al costado en pos de llegar a un acuerdo. Todos entendíamos que el consenso era un factor fundamental que debíamos asegurar, en el marco de la transición. Así, inicié las negociaciones y nos reunimos los tres equipos que representaban las principales posibles candidaturas: el de Gabriel Valdés —integrado por Carlos Eduardo Mena y Patricio Silva—, el de Eduardo Frei —conformado por Edmundo Pérez Yoma, Carlos Figueroa y Genaro Arriagada— y el que me representaba a mí —compuesto por Enrique Krauss, Sergio Pizarro y Patricio Rojas—.

Durante esa reunión, tras analizar los posibles escenarios, así como los pros y contras de las diversas alternativas, se acordó que mi nombre representaba el mejor consenso. La decisión se le dio a conocer a Patricio Aylwin, mediante una carta remitida por Enrique Krauss y Patricio Rojas. Poco después, me reuní con Patricio en su casa, a solas. Luego de conversar sobre algunos temas generales,

me confirmó que había recibido la carta en que se le informaba que el consenso había sido logrado y que agradecía mis gestiones; sin embargo, me comentó que parte importante de sus colaboradores consideraba que él debía reasumir su candidatura y someter su nombramiento a lo que resolviera la junta nacional del partido, a convocarse en los próximos días.

Todo esto me pareció tremendamente confuso, pero mi respuesta fue cordial y le expresé que, si tenía esa convicción, yo no sería un obstáculo para ello. Le dije que todo esto se lo haría presente por escrito con posterioridad, de manera de dar cuenta de los hechos a quienes me habían representado en las conversaciones sostenidas para tal efecto, quienes daban por entendido que el consenso sí se había logrado. Pese a mi extrañeza e incomodidad ante lo sucedido, le manifesté a Patricio que contaría con mi apoyo para su designación como candidato presidencial. Así lo hice y di por superado el tema.

No puedo negar que el extraño vuelco en las circunstancias me dejó una sensación bastante amarga; primero, porque todos los involucrados eran personas serias y a quienes yo consideraba confiables, y, segundo, por el hecho de no saber con exactitud quién o quiénes de los que habían participado en las negociaciones habían, luego, informado otra versión respecto al acuerdo alcanzado. Patricio no me dio los nombres y yo tampoco los solicité. Lo que estaba en juego era determinante: nuestra libertad y el poder transitar hacia una verdadera democracia, algo por lo que veníamos luchando hacía tantos años, y una causa por la que muchos hasta habían dado sus vidas. Lo que acontecía, en cambio, me parecían pequeñeces y triquiñuelas de poder, las que el tiempo se encargaría de dilucidar. No sería yo la piedra de tope, ni me entraparía por problemas de ego o de vanidad herida, ante el inmenso desafío que teníamos por delante. Esto siempre lo tuve claro.

El 5 de febrero de 1989, tal como estaba estipulado, se efectuó en Talagante la junta nacional del partido para elegir a nuestro candidato presidencial. Los candidatos eran Patricio Aylwin, Alejandro Foxley, Eduardo Frei, Sergio Molina, Gabriel Valdés y el suscrito.

El primer tema a despejar consistía en establecer el mecanismo a través del cual se elegiría al eventual candidato. Días antes, en entrevista con El Mercurio, el propio Aylwin había manifestado ser partidario de que este fuese electo con el 60% de los votos, de manera de ratificar que contaba con amplio respaldo y consenso. Yo apoyé esa tesis. La razón de exigir una votación mayor se

fundamentaba en la convicción de que un candidato con amplio respaldo facilitaría, más tarde, lograr el apoyo del resto de los partidos de la Concertación. Otros, en tanto, proponían la fórmula de mayoría simple. Tras una extensa discusión, finalmente primó esta segunda tesis.

Los aylwinistas tenían mayoría en la junta, en tanto los valdesistas y freístas estaban convencidos de que juntos podían ganar. Mi nombre, entonces, volvió a levantarse como candidato de consenso. Tanto Gabriel como Eduardo Frei me propusieron que, dadas estas condiciones y con el apoyo de ambos, compitiera en una votación con Patricio. Les agradecí su propuesta, pero les dije que no podía hacerlo, pues ya había tomado una decisión: mi respaldo a la candidatura de Aylwin no estaba en duda. Ante mi respuesta, primero Valdés y luego Frei solicitaron la palabra y, finalmente, le dieron también su apoyo. Patricio Aylwin resultó así proclamado candidato a la Presidencia por unanimidad del partido.

No me arrepiento de haber tomado esa decisión. Hice lo que en conciencia me parecía correcto, y lo que se ajustaba a lo que consideraba era mejor para el partido y el país. Patricio Aylwin reunía todas las condiciones para proyectarse como el mejor candidato en esos momentos. Siempre fui partidario de su candidatura, lo acompañé e impulsé desde el principio, y fui parte de su entorno más cercano. Nunca formé parte de ningún grupo o sector del partido, pese a que siempre se me identificó como uno más de los guatones. Nuestra cercanía con Patricio Aylwin era más bien personal, similar a la que tuve con Eduardo Frei Montalva.

Ahora bien, pese a las tensiones y divergencias, el hecho de que tanto Valdés como Frei entregaran su apoyo absoluto a Aylwin en esa junta fue clave para lo que sobrevendría. Quiero hacer hincapié en esto. La unidad del partido fue lo que permitió, en última instancia, la unidad de la oposición. Siempre he postulado que la democracia funciona mejor mientras mayor sea la base política que la sustente. Los gobiernos con mayorías estrechas son vulnerables y no siempre sustentables en el tiempo. En este sentido, el ideal es la máxima amplitud de respaldo.

Al respecto, incluso creo fundamental cuidar el debate interno: poner atención en cómo se hace el intercambio de ideas, sin caer en la prepotencia o en la descalificación del otro, especialmente con los partidos con que se colabora. El diálogo y una relación respetuosa enriquecen todo proyecto político, representando, en último término, la esencia de la propia democracia.

3. Una candidatura con paso firme

Una vez proclamado Patricio Aylwin como candidato presidencial de la Concertación, me correspondió reemplazarlo en su calidad de timonel del partido. Durante esa gestión, me concentré en potenciar a la Democracia Cristiana como un verdadero pilar al interior de la Concertación, de manera de establecer relaciones estrechas y fluidas con el resto de los partidos de la coalición, y continuar con un proyecto común, en el que todos nos sintiésemos identificados e incorporados.

La siguiente gran tarea era elegir a los candidatos que representarían a la Concertación en las próximas elecciones parlamentarias. Para ello, se le dio a Aylwin un “cheque en blanco”, con el objetivo de que articulara las candidaturas de la forma que le pareciera más adecuada y conformara así el mejor pacto electoral. Hubo bastantes heridos en este proceso. La Democracia Cristiana fue generosa al respecto; si hubiese querido, podría haber impuesto por lo menos cinco o seis diputados más. Se bajaron candidaturas que estaban prácticamente ganadas. Esto me significó problemas con algunos de nuestros dirigentes, puesto que no faltaron quienes se sintieron poco respaldados por el partido, lo cual era comprensible. Sin embargo, nuestra renuncia a esos cupos, para que postularan otros partidos, fue lo que permitió que la Concertación se consolidara y proyectara durante cuatro gobiernos. Más allá de los sacrificios, la transición fue un éxito, en buena medida, gracias a este tipo de gestos.

Patricio Aylwin partió la campaña presidencial con una gran ventaja: contaba con el apoyo de todos los partidos de la Concertación. En cambio, al interior de la derecha se produjo una división entre los candidatos Hernán Büchi —apoyado por la UDI, RN y el Partido Democracia Radical—, quien representaba más bien la continuidad del régimen de Pinochet, pero con cara civil, y Francisco Javier Errázuriz, el cual se postuló como independiente, con un discurso y propuestas bastante populistas. El caso de Hernán Büchi —cuyo eslogan era “Büchi es el hombre”— fue algo inusitado, pues, a poco andar, declaró sufrir una profunda “contradicción vital” y renunció a seguir en campaña. Transcurridos algunos días, afirmó haber superado sus dudas, y retomó la candidatura. Pero el daño ya

estaba hecho: esa conducta errática le provocó un grave perjuicio electoral.

La campaña de Patricio, bajo el lema “Gana la gente”, fue intensa, marcada por una actitud de esperanza y alegría, contando con la participación masiva de la dirigencia de todo el ámbito de nuestra coalición. Su triunfo estuvo estrechamente vinculado al hecho de que, conjuntamente a dicha elección, se desplegaron sólidas campañas parlamentarias a lo largo de todo Chile para elegir a los senadores y diputados que compondrían el futuro Parlamento, lo que le dio aún más fuerza a su propia nominación.

El 14 de diciembre de 1989, después de 16 largos años de dictadura, por fin los chilenos pudieron elegir democráticamente al nuevo Presidente de la República. Patricio Aylwin triunfó con mayoría absoluta (55,2% de los votos), mientras que Büchi y Errázuriz compartieron la votación de la derecha (29,4% y 15,4%, respectivamente).

4. Una reñida elección: Los reveses del binominal

En julio de 1989, con motivo de las reformas constitucionales aprobadas y pactadas con el gobierno de Pinochet, se amplió el número de circunscripciones senatoriales. Esto significó, a su vez, que la Región Metropolitana se dividiera en dos: la circunscripción Oriente y la Poniente.

Previo a que esta norma entrara en vigencia, al interior del partido se me había pedido que considerara postularme por la región del Maule. Esta opción me era atractiva, pues conocía la zona y tenía buena llegada. Eduardo Frei, en tanto, era la carta para la Región Metropolitana.

Pero el nuevo sistema complicó las cosas, haciendo necesario postular dos candidaturas concertacionistas por cada circunscripción, que fueran lo suficientemente fuertes para cerrar cualquier potencial flanco. Yo sabía esto. Por eso, cuando me preguntaron si estaba dispuesto a ir por Santiago Poniente, fue imposible decir que no.

El PPD, por su parte, había decidido nominar a Ricardo Lagos, quien también era un candidato de peso. No obstante, debíamos cerciorarnos de que, quien lo acompañase, incrementara la posibilidad de doblar. Desde la derecha, competían Jaime Guzmán, por la UDI, y Miguel Otero, por RN.

Yo apoyaba la idea de que Lagos corriera con Frei por Santiago Poniente, en lugar de hacerlo conmigo, no tanto por resquemor a que el primero me dejara fuera, sino porque me parecía que tenían claras posibilidades de doblar. El liderazgo de Eduardo ya se había instalado y las encuestas se disparaban a su favor. Por mi parte, estaba seguro de que podía ganar en Talca y, en ese escenario ideal, hubiéramos tenido tres cupos asegurados. Pero la decisión final fue otra: Frei iría por Santiago Oriente, acompañado por la socialista María Elena Carrera, y Lagos y yo correríamos juntos por el Poniente.

La campaña era difícil ya que, debido al sistema binominal impuesto, para que resultáramos electos, Ricardo y yo necesitábamos obtener al menos dos tercios de los votos; en caso contrario, la derecha con solo un tercio podía quedarse con

uno de los cupos, dejándonos fuera del Senado a alguno de los dos. Esto implicaba que la confrontación se daba también al interior de nuestro propio pacto. Era un sistema perverso, impuesto por la dictadura: con solo un tercio de los votos, por parte de la derecha, más los senadores designados por el propio Pinochet, que sumaban otros nueve, esta se aseguraba el control del Parlamento. Así y todo, con Ricardo asumimos el desafío, bajo el convencimiento de que, a través de potentes y decididas campañas, podríamos doblar nuestra votación, y derrotar así a nuestros contendores.

Fue una campaña dura, de mucha adrenalina. Mi eslogan era “Zaldívar senador, mejor para todos”. Los itinerarios eran extenuantes; participé en todas las actividades de terreno imaginables y en cada foro al que fui invitado. Partía de madrugada, muy temprano, haciendo “puerta a puerta”, la técnica que habíamos estrenado en 1973, y que había aprendido de mi amigo Raúl Barrionuevo, durante mi candidatura a senador por Atacama y Coquimbo. Con esto buscábamos trascender el modelo de campaña tradicional de superestructura y de propaganda callejera, que evidentemente no podíamos descuidar, pero que, por cierto, no bastaba. Ante todo, me interesaba el trabajo en terreno, pues ello me permitía conversar con la gente de la circunscripción, conocer a fondo su realidad y empaparme de lo que allí estaba ocurriendo. Habíamos pasado muchos años en dictadura, y la voz y el sentir de las personas eran claves para construir con asertividad nuestro nuevo proyecto. En este sentido, lo más importante de la campaña fue el trabajo desplegado por los dirigentes de base. Ellos retroalimentaron, con conocimiento y mística, nuestro mensaje, estableciendo redes, generando confianzas y abriendo nuevos espacios. Así, recorrimos, palmo a palmo, cada barrio, cada población y cada villorrio.

Ingeniamos numerosas estrategias para motivar a nuestros eventuales electores. Entre otras, montamos un camión que se convertía en escenario, al que llamamos “El pato móvil”, con equipos de alta voces y música, en el que viajaban voluntarios de la JDC a todas partes de la Región Metropolitana Poniente. Mañana, tarde y noche, incansables, recorríamos la ciudad a bordo del vehículo. La consigna era llegar con voluntarios a cada rincón de la circunscripción.

Un gran movimiento de jóvenes democratacristianos, encabezados por Andrés Lastra, desplegaron un trabajo clave. Asimismo, Inés se dedicó en alma y cuerpo a la campaña, jugando un importante rol y congregando un impresionante equipo de mujeres, que instaló su centro de operaciones en nuestra sede, una vieja casa ubicada en la calle Carmen. Todas estas personas salían a terreno, de manera

voluntaria, y me ayudaban abriéndome camino.

Por su parte, mis hermanos Rodrigo y Javier diseñaron una iniciativa que denominaron “Una por dos”. Esta consistía en que nuestros voluntarios, cuando lograban una adhesión a la campaña, solicitaban al adherente conseguir una más y, luego, enviarla junto a la suya, vía correo, a nuestro comando. Gracias a esto, llegamos a tener alrededor de 80 mil adhesiones y sumar nuevos voluntarios, lo que nos permitió tener una base sólida de apoyo.

Una de las acciones más innovadoras fue la implementación de una campaña telefónica. En una de mis visitas a Madrid, había conocido el caso de José María Ruiz-Mateos, un empresario español, candidato a eurodiputado, que había hecho campaña —¡y ganado!— mientras se encontraba prófugo de la justicia. Esto último, por cierto, no era lo que me interesaba emular, sino el sistema implementado. Empecé a investigar cómo lo había hecho. La clave había sido su campaña telefónica, usando un sistema informático. Aproveché que mi hija Francisca estaba becada en Madrid junto a su marido, Ernesto Evans, quien sabía mucho sobre este tipo de tecnologías, y le solicité que estudiara el tema para montar algo similar. Posteriormente, junto a mi hermano Rodrigo estructuraron un sistema que instalamos en nuestro comando. Consistía en una docena de líneas telefónicas que, conectadas a una central, iban marcando números de forma automática y aleatoria, lo que permitía llegar a muchos hogares. La gente contestaba y escuchaba mi voz, invitándolos a apoyarme con un mensaje positivo. Era, para ese entonces, algo muy novedoso y que tuvo una buena recepción en la gente, pues generaba cercanía. Fue tanto el alcance, que dicen que hasta el propio Pinochet recibió un llamado mío. Me imagino que el mensaje no fue del todo de su agrado.

Todas estas creativas acciones nos permitieron repuntar. Cuando empezamos, estábamos por lo menos 15 puntos por debajo de Lagos en las encuestas. Dos semanas antes de la elección, aparecíamos empatados.

Gané las elecciones por Santiago Poniente con el 31,27% de los votos, seguido de Ricardo Lagos con 30,62%, tan solo 10 mil votos más abajo. Juntos hicimos el 61,89%. La derecha, por su parte, sumó poco más del 32%: Guzmán sacó el 17,19% y Otero, el 15,31%. Estuvimos cerca de doblar, pero no lo logramos. El porcentaje que se requería era demasiado alto, un arduo desafío en una región en que la derecha solía sacar votaciones altas.

El día de las elecciones, mientras iban conociéndose los primeros cómputos, mi hermano Javier me anticipó el triunfo: “¡Saliste!”, me dijo. Así lo indicaba nuestro sistema de conteo rápido, que él coordinaba. Partí rumbo al set del programa de televisión al que me habían invitado sospechando mi victoria, pero aún sin la certeza absoluta. Ricardo Lagos también estaba ahí. Recuerdo que lo vi bastante afectado. Al concluir la grabación, volví al comando a celebrar. Al poco rato, le dije a Inés: “Vamos a ver a Ricardo”. Lo encontramos casi solo, había muy poca gente en el comando. Fue un encuentro honesto, muy humano, del que nació la relación de respeto que hemos conservado durante todos estos años. Siento un gran aprecio por él. Pese a que de jóvenes tuvimos muchas diferencias, el tiempo y las circunstancias se encargaron de acercar nuestras posiciones. Creo que su aporte al país ha sido extremadamente valioso.

Mirando hacia atrás, reflexionando sobre esa campaña, pienso que a ambos nos hizo falta enfatizar más en el hecho de que la competencia no era entre nosotros, sino en buscar fórmulas que complementaran y potenciaron las dos candidaturas. Así y todo, fue una campaña leal, independientemente de que, como siempre ocurre, los “sacristanes” fueron activos en armar conflictos. Al menos entre Lagos y yo procuramos no herirnos.

Aquel triunfo terminó de cimentar mi reputación de buen campañista. “Cuidado con Zaldívar, que tiene una capacidad de campaña que ni te imaginas”, decían después en el partido. Lo que aprendí fue que, para hacer una buena campaña, hay que estar cerca de la gente. Más tarde, ya como senador, siempre volví al terreno. No me gustaba quedarme en la oficina, y esto lo repliqué con los años en todas las regiones que representé. Mis puertas siempre estuvieron abiertas a la gente. Hice lo mismo con las sedes del partido, pues creía que era precisamente ahí donde se hacía la vida partidaria: en los debates, en las asambleas, en el intercambio de opiniones, en las acciones solidarias.

Debo reconocer que el éxito logrado en esa campaña se lo debo a cientos de dirigentes de base del partido y voluntarios independientes; a Inés, mi mujer, que supo conformar un gran equipo de mujeres, junto a Isabel Ossa, Raquel Hurtado, María Antonieta Olmedo, Carmen Nieto, Emilia Troncoso y muchas más que dejaron los pies en actividades de terreno; a Patricio Rojas Saavedra, jefe de campaña; a Patricio Silva Echenique y José Manuel Salcedo, quienes se encargaron del contenido de esta; a los equipos profesionales que me asesoraron, Carlos Huneeus y Marta Lagos, que estuvieron a cargo de los estudios de opinión pública y encuestas; a mis hijas y a mis hermanos, especialmente a

Rodrigo, que era el cerebro detrás de todo; a Javier, que formó el equipo de control electoral, así como a Felipe, que se hizo cargo del manejo financiero; Alberto, Chepa y Renato estuvieron también muy presentes. El clan familiar, encabezado por mi madre y mi padre, no dejó de hacer el aporte de trabajo que se necesitaba, lo que fue aún más meritorio teniendo en cuenta que esta entrega de esfuerzo debía duplicarse, pues nuestro hermano Adolfo también afrontaba una dura campaña a senador por la región de Atacama, la que perdió por estrecha diferencia de votos.

5. Pinochet, la espada de Damocles

Después de su triunfo, invité a Patricio Aylwin y a su familia a pasar con nosotros el Año Nuevo en el fundo La Esperanza, en San Clemente. Fueron días agradables. Él estaba conformando su gabinete y aprovechamos de conversar mucho sobre política, así como de intercambiar ideas sobre posibles nombramientos de ministros, subsecretarios y otras autoridades que había que reclutar. Y, por supuesto, nos tomamos un merecido descanso después de un período de tantas exigencias.

El 11 de marzo de 1990, en la nueva sede del Congreso Nacional en Valparaíso —aún en construcción—, Patricio Aylwin asumió como Presidente de la República, recibiendo el mando del país de manos de Augusto Pinochet, quien lo entregaba obligado por mandato popular y democrático. Fue Gabriel Valdés, quien poco antes había sido investido como presidente del Senado, el que inauguró la ceremonia. El secretario del Senado, Rafael Eyzaguirre, escoltó a Aylwin y a sus ministros al salón, y de ahí hasta la testera, donde lo esperaban Valdés, Pinochet y José Antonio Viera-Gallo, presidente de la Cámara de Diputados.

Cuando llegó el momento del juramento, y escuchamos a Patricio decir, con voz fuerte y decidida, “Sí, juro”, se produjo un momento de silencio conmovedor. El lugar estaba lleno, de bote a bote. Pinochet, entonces, se sacó la banda presidencial y se la entregó a un edecán, tras lo cual Valdés procedió a ponérsela al nuevo Presidente de Chile. Ambos se abrazaron emocionados. Luego, Aylwin saludó a Pinochet, según lo estipulaba el protocolo.

Creo que, como a todos los chilenos y chilenas que luchamos por recuperar la democracia, esos minutos quedaron grabados a fuego en lo más profundo de nuestros corazones. Cuánto sufrimiento había costado lograrlo, cuántos muertos y desaparecidos, cuántos torturados y perseguidos, cuántos exiliados y exiliadas, cuántas familias desmembradas... Era demasiado el dolor acumulado en el alma de Chile, pero lo habíamos logrado: nos reencontrábamos con nuestra historia y teníamos, por fin, la posibilidad de hacer verdad y vivir en paz y libertad. Parecía un sueño. Comenzaba un nuevo tiempo. Nuestra responsabilidad y el

gran desafío que se nos planteaba consistirían en reconstruir nuestra democracia perdida, cuidarla y defenderla a como diera lugar, para que nunca más en Chile volviéramos a una experiencia como la vivida.

Al día siguiente, después del tradicional Te Deum en la Catedral de Santiago, Aylwin encabezó un acto en el Estadio Nacional con más de 70 mil personas. El evento se llamó “Así me gusta Chile”, y en él se rindió homenaje a las víctimas de la represión dictatorial. Los organizadores le habían pedido al nuevo Presidente, junto a Leonor, su mujer, que inauguraran la ceremonia ingresando al estadio por el costado oriente y que cruzaran toda la cancha a pie. En el intertanto, entre los vítores y aplausos, comenzó a escucharse el “Canto a la libertad”, la adaptación del “Va pensiero” de la ópera de Nabucco. Fue un momento emocionante. Se extendió una gigantesca bandera chilena, que cubrió toda la cancha de fútbol. Luego, las madres y esposas de detenidos desaparecidos bailaron en solitario una cueca en homenaje y recuerdo a sus familiares. El silencio que se produjo entonces fue total. Ser testigos de todos esos gestos y símbolos, precisamente en el mismo recinto que la dictadura había utilizado como lugar de prisión y tortura de tantos chilenos, nos conmovió hasta el alma.

Desde la tribuna, acompañado de representantes de numerosos gobiernos y países, y de autoridades y dirigentes de todos los partidos de la Concertación, Aylwin presidió este impactante acto. Cuando llegó el momento, se dirigió a Chile y al mundo, con un mensaje lleno de contenido republicano y compromiso democrático: “...Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante: restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares...”, alcanzó a decir, antes de que se desatara una feroz pifiadera. Pero continuó, levantando la voz: “Sí, señores, sí, compatriotas: civiles o militares. ¡Chile es uno solo! ¡Las culpas de personas no pueden comprometer a todos! ¡Tenemos que ser capaces de reconstruir la unidad de la familia chilena!”¹²⁰.

Aquel gesto fue muy importante, pues era la manera de dar inicio a una transición que no excluía a los militares. Esto no significaba hacer borrón y cuenta nueva, sino que estructurar un cambio que fuera, a la vez, integrador. Así debía hacerse pues, si bien retomábamos nuestra democracia, Pinochet no estaba fuera del mapa. Seguiría al mando como comandante en jefe del Ejército hasta 1998. Era una situación incómoda para todos, pero lo debe haber sido

especialmente para Patricio, puesto que él, incluso antes de asumir como candidato, había sido muy enfático en el planteamiento de que Pinochet no podía seguir encabezando el Ejército.

A poco de asumir el nuevo gobierno, a mediados de diciembre, Pinochet y Aylwin se reunieron a solas. En dicha ocasión, Patricio le hizo ver al militar la necesidad de que lo dejara en libertad de acción. La respuesta de Pinochet fue la siguiente: “¿Así que usted quiere que me vaya? ¡Se equivoca, señor! Yo soy la mejor garantía para usted. No ve que mi gente está muy nerviosa. ¿Y quién puede tranquilizarla mejor que yo?”¹²¹.

En un esfuerzo por imponer su autoridad, Aylwin nombró ministro de Defensa a Patricio Rojas. Este último, ex ministro de Educación y de Interior durante el gobierno de Frei Montalva, era conocido por tener una fuerte personalidad. Su figura fue una especie de muro de contención, que mantuvo a Pinochet a raya, dentro de lo posible.

Así y todo, era un equilibrio muy delicado. El gobierno no la tenía fácil, con un marco normativo que inclinaba la balanza en nuestra contra. El Consejo de Seguridad Nacional, instaurado por la Constitución de 1980 —un organismo consultivo que el Presidente podía convocar o, en su defecto, autoconvocarse para discutir temas de seguridad y defensa nacional—, reflejaba fielmente esta situación. Además, entre sus facultades, nominaba a cuatro de los nueve senadores designados. Era presidido por el Jefe de Estado e integrado por los presidentes del Senado y de la Corte Suprema, por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y el contralor general de la República; es decir, Pinochet tenía mayoría en el Consejo, lo que significaba que contaba con una poderosa herramienta de presión que ponía al Presidente en una situación de amenaza permanente.

Cuando, en 1990, estalló el escándalo de los “Pinocheques”, Aylwin le exigió al militar que entregara su cargo. Pero el dictador respondió con un acuartelamiento. Tres años después, al reactivarse la investigación en su contra, ordenó un movimiento de tropas, las que llegaron hasta el propio Ministerio de Defensa, en un episodio conocido como “El Boinazo”.

Nadie sabía o alcanzaba a dimensionar hasta qué punto estaba dispuesto a llegar Pinochet. En la práctica, echó mano a todos los recursos que estuvieron a su alcance para intentar acorralarnos. Desde esta perspectiva, es imposible negar el

hecho de que las Fuerzas Armadas funcionaron con bastante autonomía durante buena parte del período en que Pinochet fue comandante en jefe. Gastaron los fondos asignados a discreción y como quisieron, y eso se mantuvo por muchos años, casi como una cultura interna, situación que hoy recién empieza a develarse.

El fantasma de Pinochet, indudablemente, complejizó la transición chilena. Recuerdo haber conversado este tema con varios dirigentes españoles, durante un viaje en el año 1992. El proceso que vivió España siempre me pareció un buen referente. La posibilidad de implementar algo similar a los Pactos de La Moncloa, ideados por los españoles, habría sido extraordinario, pero nuestro caso era diferente. “Ustedes hicieron la transición sin Franco. Él se murió y Dios se acordó de ustedes; en tanto nosotros, los chilenos, tenemos que llevarla a cabo con el dictador sentado en la mitad del sistema, en su calidad de comandante en jefe del Ejército”, les decía. “La verdad, Andrés, nos cuesta entender cómo lograrán hacerlo”, respondían ellos.

Había un problema de realismo sobre cómo proceder. Uno podía sostener una posición muy crítica, por ejemplo, respecto a la forma en que la dictadura había llevado a cabo las privatizaciones. ¡Claro que nos hubiera gustado intervenir con más fuerza y revisar el proceso que se había hecho! Pero existían muchos temas comprometidos, a lo que se sumaba el permanente acecho de Pinochet. A la vez, eran tiempos en que la inversión privada, tanto interna como externa, resultaba fundamental. Entendíamos que, si metíamos mucho ruido, los inversionistas desconfiarían de este nuevo Chile. Por eso, la línea del gobierno fue de no innovar. El ministro de Economía, Carlos Ominami, quien era militante socialista en ese entonces, mantuvo una actitud templada. Era el precio que había que pagar, a cambio de transitar hacia una democracia con estabilidad y con una economía que funcionara.

6. Nuestras cruzadas:

Los derechos humanos y el modelo económico

Durante el gobierno de Patricio Aylwin se hicieron importantes esfuerzos por instalar una economía social de mercado “con tanto Estado como fuere necesario y con tanta inversión privada como fuese conveniente”, como sostenía el ministro de Economía alemán, creador y gran artífice del milagro económico alemán de posguerra, Ludwig Erhard. Pero la composición del Parlamento, con senadores designados y el sistema binominal impuesto, hacía difícil avanzar, pese a que hubo gente de derecha que se mostró dispuesta a transigir, por primera vez, en algunos aspectos.

En este sentido, se buscó impulsar una línea en la que el mercado no lo fuera todo, sino que se complementase con una potente intervención estatal en el diseño e implementación de políticas públicas, orientadas a terminar con la pobreza y las inequidades. Cuando asumimos el gobierno, se hablaba de cinco millones de pobres en el país (más del 40% de pobreza). Al cierre del mandato, la cifra se había reducido a menos de la mitad. Asimismo, se controló el problema de la inflación; se ordenaron las cuentas fiscales; se incrementó la inversión pública y privada de manera sustancial, incluido el sector vivienda, y el país creció un promedio cercano al 7% anual. Todo ello se realizó bajo un manejo responsable del presupuesto de la nación. Dado el panorama y considerando las circunstancias por las que atravesábamos, me atrevo a afirmar que uno de los gobiernos más exitosos en materia económica, durante los últimos 50 años, fue el de Aylwin. El papel desempeñado por Alejandro Foxley como ministro de Hacienda, conjuntamente a Carlos Ominami, en la cartera de Economía, fueron relevantes para obtener dichos resultados tan exitosos para el país.

Pero, quizás, uno de los mayores logros de dicha gestión estuvo representado por la apertura internacional. La dictadura había mantenido a Chile encerrado, sin libre comercio, aislado del resto del mundo. Mientras Pinochet estuvo en el poder, el país no firmó ningún tratado económico. La apertura al libre comercio

solo comenzó a gestarse una vez que recuperamos la democracia. A partir de ese momento, se nos abrió una ancha puerta en materia de relaciones internacionales, la que hasta ahí había estado cerrada a machete. No por nada, el cambio de mando contó con la presencia de líderes de todo el mundo. La dictadura intervino el modelo y rebajó los aranceles a la fuerza, lo que fue una medida positiva; no obstante, hay que reconocerlo, Chile fue aceptado por la comunidad internacional únicamente cuando asumió el gobierno de Aylwin. Y a partir de ahí, nos abrimos a una economía de mercado global. Aumentamos la inversión interna, la producción y la exportación. Se trabajaron, conjuntamente con el Parlamento, los primeros planteamientos de tratados de libre comercio. Esta política siguió acentuándose, posteriormente, durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Hoy tenemos más de 50 tratados de libre comercio, pero todo ello comenzó con la transición democrática.

Otro ámbito en que el primer gobierno de la Concertación desplegó grandes esfuerzos fue en materia de derechos humanos. En este sentido, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida también como “Comisión Rettig” —pues fue presidida por el destacado jurista Raúl Rettig—, fue determinante. Creada el 25 de abril de 1990 por Decreto Supremo, tuvo como objetivo primordial contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre graves delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en nuestro país, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. La fortaleza que tuvo Aylwin, así como todos aquellos que participaron en dicha comisión, fue admirable. Francisco Cumplido, por entonces ministro de Justicia, también hizo un gran aporte a esta labor. Después de nueve meses de intenso trabajo, el 8 de febrero de 1991, la comisión entregó, en seis gruesos tomos, su informe, en los que establecía la recepción de 3.550 denuncias y la consideración de 2.296 casos de detenidos desaparecidos. ¿Cómo olvidar ese día en que Patricio Aylwin, en un acto solemne, dio a conocer una síntesis del informe, pidiendo perdón en nombre del Estado, en una emisión televisada a todo el país? “Como Presidente de la República, me atrevo a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas”¹²², dijo emocionado.

Si bien no se logró localizar la ubicación de todos los restos de detenidos desaparecidos, sí se demostró, con mucha claridad, la brutalidad con que había actuado el régimen. Pinochet se negó a reconocer los hechos y rechazó airadamente el informe de la comisión, reclamando que todo era una falsedad. Pero, en definitiva, se dejó establecida la verdad sobre lo sucedido durante la

dictadura en materia de derechos humanos. Tanto así que el propio Nelson Mandela, en su búsqueda por promover la reconciliación en Sudáfrica, al caer el régimen del apartheid, creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación inspirada en la experiencia chilena.

7. El mérito de la transición

El 7 de agosto de 1991, Aylwin declaró: “La transición ya está hecha. En Chile vivimos en democracia”. Esta afirmación le valió duras críticas. Y es que, por supuesto, aún existían importantes enclaves políticos de la dictadura y temas pendientes sin resolver, tales como la investigación de los asesinatos, desapariciones y torturas, así como los escándalos de corrupción que involucraban al propio Augusto Pinochet.

Es indiscutible que las Fuerzas Armadas hicieron todo lo posible por impedir que se profundizara en las sanciones a las violaciones a los derechos humanos. No solo eso: ocultaron y destruyeron numerosa información, ejecutaron horribles operaciones para mover los restos de numerosos detenidos desaparecidos y eliminar toda evidencia y, en definitiva, no colaboraron a esclarecer los hechos. Pese a ello, creo que, en términos comparativos, fuimos mucho más exigentes y estrictos en cuanto a hacer justicia que otros países con transiciones similares. En Chile, por ejemplo, no tuvimos amnistía y jamás aceptamos una “ley de punto final”, tal como sucedió en Argentina, Uruguay, España y tantos otros países que sufrieron dictaduras parecidas a la nuestra. Como dijo Patricio Aylwin, alcanzamos a hacer justicia “en la medida de lo posible”. No era fácil llevar adelante los juicios penales para condenar a los responsables de los graves crímenes cometidos por los agentes de la dictadura, más aún cuando se trataba de militares de alto rango, empezando por Pinochet y Manuel Contreras. En este sentido, las palabras de Aylwin respecto a la transición deben ser contextualizadas en torno a la idea de que el sistema democrático estaba funcionando en su esencia, lo que era algo irrefutable.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, iniciaban hacia esta época su propio proceso de supeditación al poder civil. Desde la transición en adelante, el compromiso de estas con el sistema democrático iría en aumento, pese al surgimiento de denuncias de enriquecimiento ilícito o diversas investigaciones en torno a la actuación de algunos de sus personeros. Antes, estos eran bastiones intocables; hoy, en buena hora, ello ha comenzado a cambiar.

Muchos critican hoy que el gobierno de Aylwin no hizo lo suficiente, que nos

conformamos, que no fuimos firmes, que teníamos miedo... Con dureza y altanería se pone en tela de juicio nuestro actuar, como si ello hubiese respondido meramente a problemas de voluntad, de transacción o de debilidad. A todos ellos, les diría que es muy diferente opinar desde el presente sobre lo que se hizo o pudo hacerse por lograr una transición pacífica a la democracia. Pinochet y una parte de la derecha fueron, por mucho tiempo, la espada de Damocles colgando sobre la transición chilena. A mi juicio —y así lo he afirmado en mi libro *La transición inconclusa*—, este fue un proceso que quedó incompleto durante ese primer gobierno de la Concertación, y es que era difícil que fuera de otra manera, mientras no pudiésemos modificar el grueso de la Constitución de 1980. Esto únicamente se vino a lograr, en parte, mediante la reforma realizada en el 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, aunque incluso entonces quedó pendiente el problema del sistema electoral binominal, que permitía que la oposición de derecha, con solo un tercio de los votos, tuviera una representación parlamentaria casi igual a la que lograba la Concertación.

El gobierno de Aylwin estuvo marcado por la prudencia. En ocasiones, nos vimos obligados a tragarnos situaciones muy incómodas, en casos que hoy, evidentemente, serían reprochados. Sin embargo, es importante contextualizar; no es lo mismo criticar desde el presente y la distancia generacional que haberlo vivido en carne propia. Lo afirmo con toda convicción, sin perjuicio de los exitosos resultados en materia económica, social e internacional: uno de los logros más importantes fue establecer sólidos y firmes cimientos para reinstalar nuestra democracia. Ello, en el tiempo, nos ha permitido como país ubicarnos entre los primeros de América Latina y ser reconocidos, a nivel mundial, como una nación que debe mirarse con atención por las metas alcanzadas.

8. La necesaria continuidad

En 1990, postulé a la reelección como presidente de la Democracia Cristiana y salí elegido. Era un momento particularmente complejo y determinante, y se requería mantener a la DC alineada tras el gobierno. Creía poder aportar en ese sentido, y así lo comuniqué en la inauguración del congreso nacional en Valparaíso, en marzo de 1990. Nuestro deber con la transición era proveer un voto de confianza y nuestro absoluto respaldo al nuevo gobierno.

Esas elecciones internas fueron muy reñidas. El otro candidato, Narciso Irureta, concitaba un amplio apoyo, llegando a configurar un bloque contrincante bastante amplio, integrado por miembros de la llamada “Generación del 80”, pero también por renovadores y colorines, como mi propio hermano Adolfo. Era un grupo que buscaba impulsar un recambio al interior del partido. Nuestro equipo, en cambio, consideraba que era necesario asegurar cierta continuidad hasta que el gobierno estuviera bien establecido.

Uno de los hitos que más valoro de esa presidencia fue el IV Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, un evento de mucha trascendencia, no solo para el partido, sino que también para la política chilena en general. Se celebró en noviembre de 1991, en el edificio Diego Portales, que había sido sede del gobierno de la dictadura; algo, por cierto, bastante simbólico. Como directiva, decidimos invitar no solo a los presidentes comunales, tal como se acostumbraba hacer para encuentros de esta naturaleza, sino que además se eligieron delegados por comunas acorde al número de militantes en cada una de estas. Asistieron alrededor de 2.500 personas.

Cerca de 32 años antes, el Papa Juan XXIII había empleado el término *aggiornamento* —“renovación” o “modernización”, en italiano— para describir el espíritu del Concilio Vaticano II. “Este será el *aggiornamento* de la Democracia Cristiana”, declaré, refiriéndome a nuestro evento. Nos preparamos durante todo un año. Bajo la convocatoria denominada “Pensando a Chile”, celebramos encuentros comunales, provinciales y regionales. Organizamos comisiones para abarcar en el congreso todas las temáticas que nos eran relevantes, desde la declaración de principios del partido, hasta nuestras posturas

en economía, reformas sociales, educación, salud, vivienda, medio ambiente y familia. En síntesis, queríamos definir exhaustivamente cómo pensaba y proyectaba la Democracia Cristiana chilena el futuro del país, a partir del momento presente y las circunstancias vividas.

Pero, además, innovamos en algo: decidimos que el encuentro sería abierto, y para ello convocamos a todos quienes quisieran participar, a la ciudadanía, a la prensa y a los partidos políticos, sin exclusión. La gente podría asistir y sumarse a los debates. Invitamos a dirigentes políticos de todos los sectores, incluso de los colectivos opositores; asistieron representantes del mundo socialista, comunista, por la derecha Jaime Guzmán y Andrés Allamand, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, del mundo de la cultura, sindicatos, pobladores y campesinos, y también de los gremios profesionales. La idea era recibir el aporte más amplio posible respecto a cómo nos veíamos y veían otros actores. Participaron delegados extranjeros, provenientes de diversos países latinoamericanos y europeos. Estos encuentros se prolongaron durante una semana, bajo la premisa “Escuchando a Chile”.

Fue un encuentro fructífero que sirvió para que la Democracia Cristiana reafirmara su convicción ideológica y valórica, así como su decisión de mantener un compromiso con la democracia chilena, los derechos humanos, las reformas sociales y la reinserción del país en el contexto político mundial. Le dio a nuestro partido una presencia en la opinión pública y nos permitió hacer una revisión completa de nuestra historia, nuestro presente y proyectarnos también hacia el futuro, definiendo parámetros claves respecto a cómo aspirábamos enfrentar los cambios y la modernidad. Además, hizo posible aunar, al menos temporalmente, las voluntades de los bloques y sectores que tradicionalmente han existido al interior de la DC.

Durante mi gestión, tuvo lugar otro hecho meritorio que me gustaría consignar aquí: logramos recuperar la sede del partido en Alameda 1460, la misma que nos había sido usurpada por la dictadura. El edificio fue bautizado con el nombre de Eduardo Frei Montalva, el que se grabó en su frontis. Esto fue algo muy simbólico. Así, cuando concluí mi período, tuve la alegría de entregar el mando operando desde nuestra sede original.

9. El asesinato de Jaime Guzmán

La tarde del 1 de abril de 1991, un violento hecho remeció al país: Jaime Guzmán fue asesinado a mansalva por un comando del FPMR, en las afueras del Campus Oriente de la Universidad Católica, tras terminar de impartir sus clases de Derecho Constitucional. Fue un atentado brutal, que irrumpió de golpe en el proceso de recuperación democrática que estábamos recién iniciando. Nadie se esperaba algo así. Pocos días antes, el Presidente Aylwin había dado a conocer el Informe Rettig. La fragilidad de la transición era un hecho y cualquier acción violenta o terrorista no hacía más que aportar dudas y temor en la ciudadanía, otorgando, de paso, aún más poder a Augusto Pinochet, e incluso poniendo en jaque y condicionando la propia transición.

El Partido Comunista, a esas alturas, ya se había desmarcado de este tipo de acciones protagonizadas por el Frente. Los comunistas estaban viviendo su propio proceso, tratando de encontrar su lugar en este nuevo escenario y, desde este punto de vista, el FMPR los perjudicaba, incomodándolos como una molesta piedra en el zapato. Al asumir Aylwin, nadie planteó la incorporación del PC al nuevo gobierno, pero sí había comenzado a abrirse un espacio de entendimiento para que pudiera participar.

Ahora bien, el FPMR generó bastantes problemas durante el período de transición a la democracia, particularmente a comienzos del gobierno de Patricio Aylwin. El propio asesinato de Guzmán fue un acto tan impactante, de tal potencial de desestabilización, que en algún momento hasta nos hizo plantearnos si no había sido perpetrado por el estamento militar. Nuestra gran preocupación entonces era evitar que esto provocara un revés en el proceso democrático. Como Democracia Cristiana, no lo dudamos ni un momento, y manifestamos nuestro repudio inmediato ante lo sucedido. La directiva se trasladó a la sede de la UDI ese mismo día, e incluso fui al Hospital Militar a expresar nuestra solidaridad. El día del funeral, tal como lo he relatado en páginas anteriores, llegué hasta la iglesia de la Gratitude Nacional en mi vehículo, y en la entrada fui atacado por los partidarios de Guzmán, quienes me gritaban todo tipo de improperios. La dirigencia de la UDI tuvo que protegerme.

Jaime Guzmán fue un duro adversario nuestro. En el Senado, ya durante la transición, había sido enfático en mantener su postura de no innovar respecto al legado de la Constitución de 1980. Cuando en el Congreso Pleno de 1990 votamos las primeras reformas constitucionales —con las que se buscaba modificar la definición de conductas terroristas y su penalización dictadas por el régimen militar—, el voto más fundado en contra de dicha reforma había sido el suyo. Incluso Sergio Onofre Jarpa accedió a colaborar para modificar la legislación. Guzmán, de hecho, rechazó un proyecto de reforma constitucional que permitía al Presidente de la República indultar a presos políticos de la dictadura. La norma finalmente fue aprobada, pero su intransigente postura constituyó, probablemente, una provocación para el FPMR, lo que terminó costándole la vida.

Nuestros gestos solidarios como partido no significaron desdeñarnos en nuestras críticas a su figura y herencia. Lo que queríamos era ejercer un acto de profundo sentido político y democrático, repudiando de plano el uso de la violencia y el terrorismo. Nuestro actuar iba en la línea de lo que siempre hemos sostenido: el resguardo universal al derecho a discrepar y a ser respetado. El gobierno fue claro y decidido en condenar y perseguir a los responsables, como también lo fue la expresión de todos los partidos de la Concertación.

Los responsables fueron condenados; no obstante, por desgracia, la mayoría de los frentistas involucrados como autores materiales e intelectuales del crimen lograron evadir su responsabilidad, fugándose y asilándose en países extranjeros.

Pocos meses después del atentado, el 9 de septiembre, el Frente secuestró al empresario Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards Eastman. Lo mantuvieron retenido por cinco meses, antes de liberarlo a cambio del pago de una importante suma de dinero que ascendió, según tengo entendido, a un millón de dólares —hay fuentes que aseguran que el monto fue aún más oneroso, alcanzando los cinco millones de dólares—. Al parecer, el móvil de los involucrados respondía a un tema netamente financiero: el FPMR requería solventar sus gastos para continuar operando. Este hecho, junto con el asesinato del senador Guzmán fueron los dos casos más emblemáticos de acciones terroristas realizadas por esta organización. Sin embargo, hubo mucho más, como el permanente asalto de bancos, desde donde obtenían financiamiento para sus accionar.

Ante estos hechos, el gobierno creó una unidad de inteligencia para combatir

grupos subversivos, conocida como “La Oficina”, la que dependía del Ministerio del Interior. A cargo de esta estuvo el destacado dirigente socialista Marcelo Schilling, hoy diputado. Desde ahí, conjuntamente con el ministro Enrique Krauss y el subsecretario Belisario Velasco, se desplegó una importante labor en materia de rastreo e identificación de este tipo de movimientos y su modus operandi, lo que contribuyó a facilitar la difícil transición a la democracia.

10. Canibalismo político

La noche del 23 de agosto de 1992, en el set del programa de Megavisión “A eso de...”, el empresario y dueño de dicho canal, Ricardo Claro, dio a conocer, mediante una pequeña radio Kioto, una grabación en la que un joven Sebastián Piñera, entonces senador de RN por Santiago Oriente y precandidato presidencial, le solicitaba a un amigo, el empresario Pedro Pablo Díaz, que interviniera a su favor. La misión consistía en convencer al periodista Jorge Andrés Richards, moderador de un futuro debate presidencial, que dejara “mal parada”, como una “cabrita chica” y “despistada” a Evelyn Matthei, también precandidata por Renovación Nacional.

De inmediato salieron al paso las reacciones. El entonces timonel de RN, Andrés Allamand, acusó que la filtración se trataba de una maniobra del Ejército para atacar a la derecha liberal. En efecto, poco después, en una entrevista de Santiago Pavlovic a un agente de inteligencia anónimo, este reveló que la institución acostumbraba interceptar conversaciones de los dirigentes políticos de la época. Finalmente, Evelyn Matthei saldría a declarar que ella misma había filtrado la grabación, la cual había llegado a sus manos por medio de un capitán del Ejército. En una conferencia de prensa en noviembre, tras reconocer su responsabilidad, bajó su candidatura. Poco después, renunciaría al partido.

El “Piñeragate” fue un hito, sobre todo para la derecha, que dejó al descubierto cómo, aún transcurridos ya un par de años desde que dejaran el poder, los militares chilenos seguían fuertemente involucrados en la vida política del país. La transición no los había encerrado en sus cuarteles. Sus redes llegaban incluso hasta Renovación Nacional, donde había un grupo de militantes muy cercanos a la UDI, Matthei entre ellos.

Ricardo Claro, por su parte, era un hombre que había tenido una relación complicada con la dictadura. Había sido asesor económico del gobierno militar durante los primeros años después del golpe, y su desempeño había sido bien valorado, pero había tenido diferencias de opinión con los Chicago boys y sus políticas económicas. Estas las expresó, con dureza, a principios de los 80, a través de una columna que mantenía en La Tercera. Dicen que el objetivo de su

filtración fue dañar a Sebastián Piñera, motivado por sus desencuentros en materia de negocios.

En mi opinión, Piñera siempre fue mirado con recelo y como un extraño por la derecha. Provenía de una familia democratacristiana y de un mundo más bien cercano al nuestro. No olvidemos que intentó ir como candidato a senador por la DC, pero luego que ello fracasara se pasó a la derecha, nada más y nada menos, como generalísimo de campaña de Hernán Büchi, en las presidenciales de 1989. Era bastante independiente. Nunca tuvo, por cierto, una vida política muy definida; más bien, se dedicó de lleno a sus negocios. Jamás, durante la dictadura, lo vimos aparecer en primera plana en una actitud crítica, si bien estuvo presente en el acto que convocamos para rechazar la Constitución de Pinochet en el Teatro Caupolicán de 1980, y también participó en la Campaña del NO. Cuando volví del exilio, tuve la oportunidad de conversar en varias oportunidades con él sobre política y respecto a cómo podíamos recuperar la democracia. Me parecía un hombre interesado en el tema, al que le preocupaba realmente lo que estaba ocurriendo en Chile. Sin embargo, su pragmatismo lo llevó a optar por un camino probablemente más despejado y viable: el de la derecha. No sé qué tan cómodo se habrá sentido ahí, pero insisto: él siempre tuvo una doble alma, algo que lo tironeaba en direcciones opuestas.

A Piñera, en su propio partido, lo veían como una especie de oveja negra. La relación de odiosidad que existía entre él y Sergio Onofre Jarpa trascendía las fronteras de Renovación Nacional. En el Senado, esto era algo que se sabía. De hecho, en esa época, había senadores que decían: “¡Sobre nuestro cadáver! Jamás le daremos la pasada a este gallo...”. Posteriormente, muchos de ellos ocuparían altos cargos de confianza en sus gobiernos.

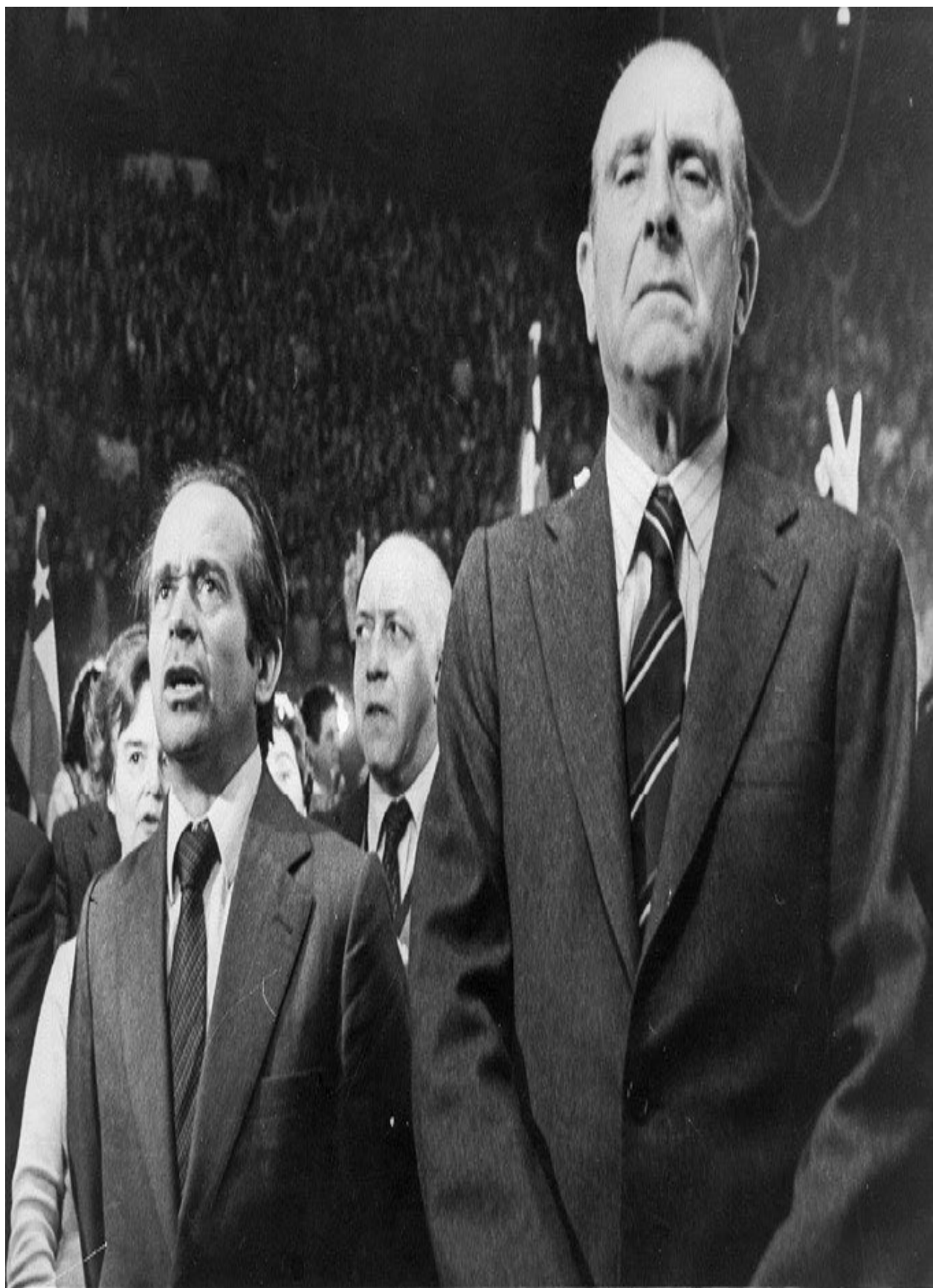
El Piñeragate fue una de las peleas más sórdidas que he presenciado en mi vida política. La filtración, la conversación misma de Piñera dando instrucciones, la radio Kioto... Todo fue muy propio de un canibalismo político, agravado por la confabulación político-militar de la época. Esto era señal de lo frágil que era nuestra transición.

Hoy, Sebastián Piñera y Evelyn Matthei son buenos amigos. Se hacen reconocimientos públicos y se apoyan mutuamente. No estoy de acuerdo con esa forma de hacer política, pero tampoco soy partidario de eternizar los conflictos. Uno puede optar por dar un paso al costado y, en ocasiones, es factible también recomponer, en el tiempo, relaciones fracturadas por los motivos más diversos.



**Acto de la oposición en el Teatro Caupolicán en rechazo al Plebiscito de
1980**

(Santiago, 27 de agosto 1980).

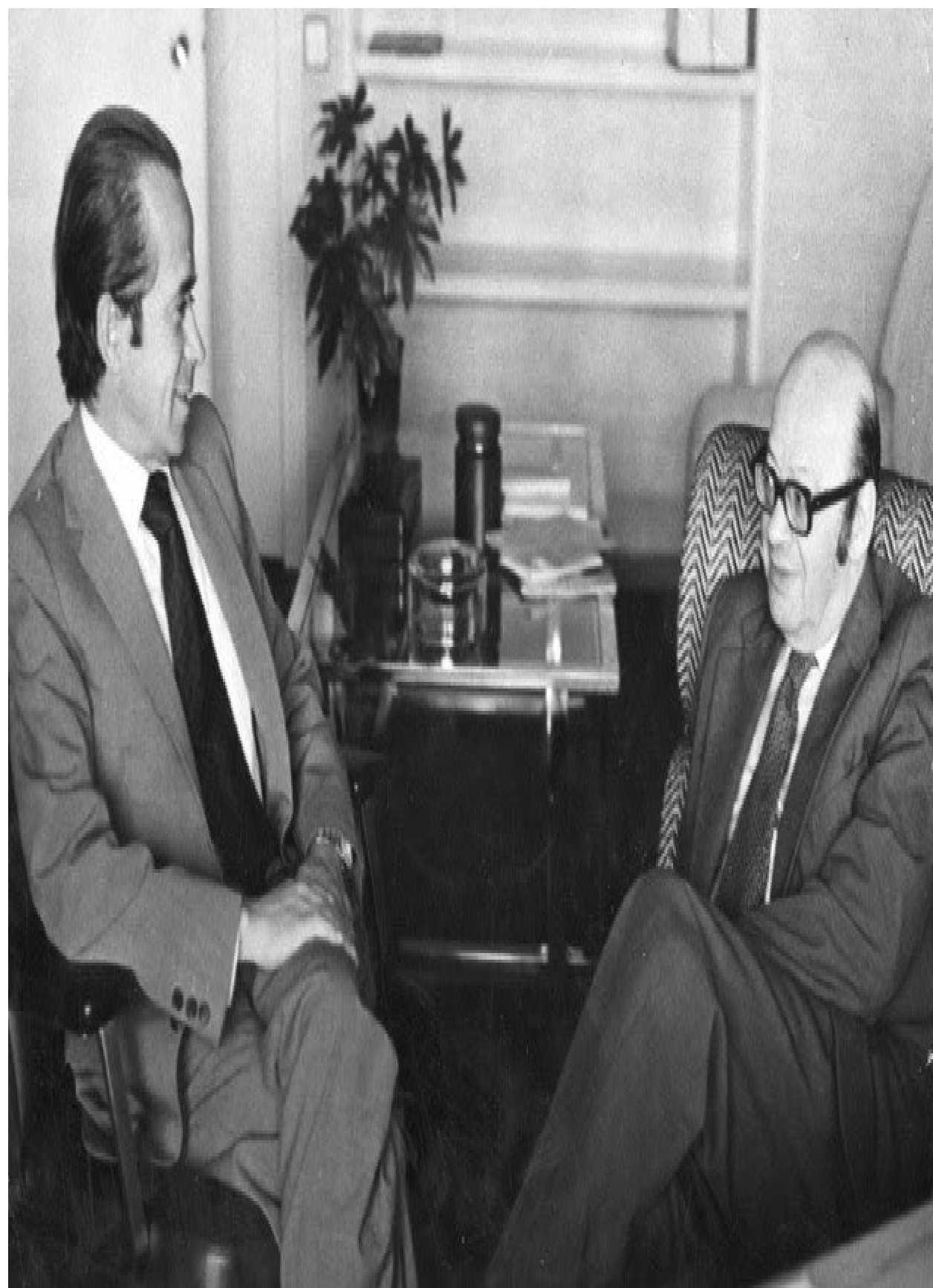


Junto a Eduardo Frei M. y Tomás Reyes en Acto del Teatro Caupolicán

(Santiago, 27 de agosto 1980).



Mi madre leyendo discurso en acto de solidaridad con motivo de mi reciente exilio, junto a Tomás Reyes, María Ruiz-Tagle de Frei y Eduardo Frei M. (Santiago, 1980).



En el exilio junto a Jaime Castillo (Madrid, 1982).



Acto por el retorno de los exiliados en Plaza Italia. Mi madre junto a Alejandro Hales, Ana González, Jorge Lavandero, Ricardo Hormazábal, Fernando Castillo y Wilna Saavedra, entre otros. (Santiago, 23 de septiembre 1982)



**Encuentro en Mendoza durante el exilio con mis padres, Inés y Carmen
Peralta**

(noviembre de 1982).



**En el exilio junto a Inés, mis hijas Paula, Patricia, Francisca y Claudia y
nuestro perro Cantalicio (Madrid, enero de 1983).**



**Visita a Chile durante el exilio, junto a mi madre, Bernardo Leighton e Inés
(Santiago, marzo de 1983).**



Recibimiento en aeropuerto de Pudahuel, al regresar del exilio

(Santiago, 3 de septiembre 1983).

Con pitos, bombos y destile recibieron a Andrés Zaldivar

(Página 5)



MILES DE PERSONAS se reunieron en la Plaza Central de Santiago para recibir al
... de la Democracia Cristiana Internacional, Andrés Zaldivar. EN LA FOTO, el dirigente le

**Recorte de prensa al regresar del exilio. Discurso en Estación Central
(Santiago, 3 de septiembre 1983).**



Cumbre con Primeros Ministros y líderes democratacristianos europeos, Roma, abril de 1984. Entre otros, de izquierda a derecha: Emilio Colombo, ministro RR.EE. Italia; Andrés Zaldívar, Presidente IDC; Leo Tindeman, ministro RR.EE. Bélgica; Wilfred Martens, Primer Ministro Bélgica; Helmut Kohl, Canciller de Alemania, Giulio Andreotti, ex Primer Ministro y Ministro RE.EE. Italia; Garret Fitzgerald, Primer Ministro Irlanda; Franz Joseph Strauss, Presidente Estado de Baviera; Francesco Cossiga, Presidente de Italia; Ruud Lubbers, Primer Ministro Holanda; Flaminio Piccoli, ex Primer de Italia; Mariano Rumor, Primer Ministro de Italia y Peter Buckman, Presidente Partido C.D.A. Holanda y Ministro del Desarrollo.



Encuentro de las Internacionales Socialista (IS), Liberal (IL) y Demócrata Cristiana (IDC) en Roma. Al centro, de izquierda a derecha, Willy Brandt, Presidente de la IS, Andrés Zaldívar, Presidente de la IDC, Giovanni Malagodi, Presidente de la IL y Angelo Bernassola, Secretario General de la IDC

(abril de 1984).



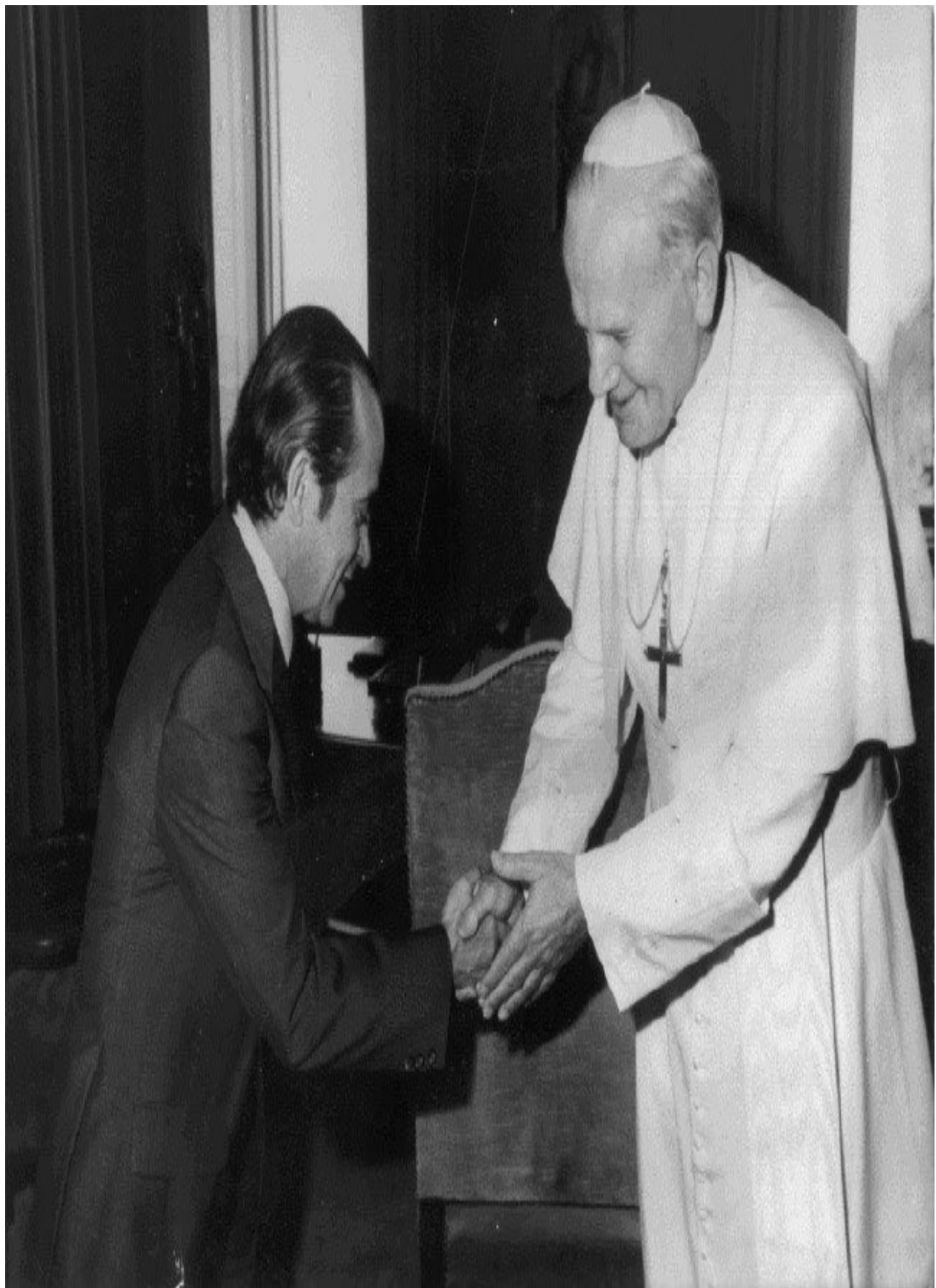
Con el Canciller de Alemania, Helmut Kohl.



Con el Primer Ministro de Italia, Giulio Andreotti.



Con el rey de España, Juan Carlos I.



Encuentro con el Papa Juan Pablo II
(Castelgandolfo, Italia, septiembre de 1985).

XIII

GOBERNANDO CON UN DICTADOR EN EL SENADO

1. La hora de los freístas

A fines de 1991, correspondía renovar la dirección nacional del Partido Demócrata Cristiano. Tomé la decisión de no postular a la reelección como presidente, pues a esas alturas mi nombre aparecía como posible carta para las próximas presidenciales —junto con el de Gabriel Valdés, Eduardo Frei y Alejandro Foxley—, y competir por la directiva habría adelantado una discusión que podía haber afectado la estabilidad del gobierno de Aylwin, que era de corta duración, un período de cuatro años. Entendí, por lo demás, que todos los posibles candidatos tendrían la misma actitud, cosa de competir después en las mismas condiciones, pero no fue así. Eduardo Frei decidió postular a la presidencia del partido y, finalmente, fue elegido por amplia mayoría. Esto lo posicionó de inmediato como eventual sucesor de Aylwin para las siguientes elecciones que se efectuarían en 1994.

En las encuestas, Frei aparecía entre los favoritos. Esto provocó en el partido un fenómeno de creciente apoyo a su figura. Otros no estábamos muy seguros de la conveniencia de su candidatura. El suyo era un liderazgo que recién comenzaba a emerger, con una fuerza inusitada, y potenciado indudablemente por la imagen de su padre. Su presencia y llegada a la gente era incuestionable, pero incluso, a pesar de la cercanía que me unía a él y a su familia, no estaba convencido de que fuera su momento. Le faltaba experiencia política, más fogueo y conocimiento de la realidad interna del propio partido. Desde este punto de vista, me parecía que había candidatos que estaban más preparados para asumir dicha candidatura, entre ellos Gabriel Valdés, e incluso yo mismo.

Tradicionalmente, el partido acostumbraba a elegir a sus candidatos presidenciales y autoridades nacionales durante la celebración de las juntas nacionales, máximas instancias de decisión política convocadas para tal efecto. Así había sucedido con las candidaturas de Eduardo Frei Montalva, Radomiro Tomic y Patricio Aylwin. Se trataba de instancias de debate y de elección indirecta, compuestas por 500 o 600 delegados, los que en su gran mayoría habían sido elegidos previamente por los militantes de base o por ocupar cargos de representación popular, además de un número representativo de militantes

pertenecientes al mundo sindical, organizaciones poblacionales y el frente de mujeres.

Dada la gran afluencia de representantes, estas juntas nacionales se prolongaban cerca de dos días. Tras abrirse el debate político a fondo y, dependiendo del curso que este tomara, los delegados iban asumiendo posiciones. En muchas ocasiones se producían situaciones muy definitorias, de acuerdo a las diversas intervenciones que allí se desplegaban, lo que hacía volcar repentinamente posiciones que parecían seguras y mayoritarias. Los delegados, por lo general, no venían mandatados, sino que resolvían de acuerdo a su propia convicción.

Recuerdo algunas juntas nacionales emblemáticas por su trascendencia, como la de Peñaflor en 1968, en la que Frei padre, siendo Presidente de la República, solicitó el respaldo del partido a su gobierno, lo que provocó el quiebre interno por la dimisión de Rafael Agustín Gumucio y su directiva, que luego conformarían el MAPU; o la de 1970, cuando se resolvió apoyar la elección de Salvador Allende como Presidente de la República en el Congreso Pleno, condicionándolo al Estatuto de Garantías Constitucionales; o la junta de Talagante, en 1989, en que se eligió como candidato presidencial a Aylwin.

Remontándonos aún más en el tiempo, famosa fue la junta de 1946, denominada “Congreso de los peluqueros”, por haberse realizado en la sede de dicho sindicato, donde se dirimió si la Falange Nacional apoyaría como candidato presidencial al radical Gabriel González Videla —tesis defendida por Frei Montalva, Jorge Rogers e Ignacio Palma, entre otros—, o al candidato conservador social cristiano Eduardo Cruz-Coke —postura planteada por Tomic, Pedro J. Rodríguez y Narciso Irureta—. La segunda fue triunfadora, por 43 a 41 votos.

Así, se acordó que en la próxima junta nacional, a efectuarse en 1993, se decidiría el mecanismo mediante el cual se elegiría a nuestro candidato presidencial. Los postulantes éramos tres: Eduardo, Gabriel y yo. Mi hermano Adolfo apoyaba al primero, algo que no me pareció raro, pues en varias oportunidades previas habíamos tenido posturas diferentes, situación que se había acentuado durante el último tiempo. Nuestras diferencias —las que por cierto consideraba legítimas, se reducían fundamentalmente a los liderazgos que considerábamos más pertinentes— se arrastraban desde la elección de Patricio Aylwin, una vez que Adolfo emergiera como líder de un grupo denominado “Los magníficos”, integrado, entre otros, por Ramón Briones, Hernán Bosselin y

Narciso Irureta.

Durante dicha junta, se levantaron dos tesis: una, respaldada por los delegados que apoyaban la candidatura de Eduardo Frei, y otra sustentada por quienes apoyaban la de Gabriel Valdés y la mía. Los freístas eran partidarios de una elección directa: es decir, un militante un voto, o, en su defecto, realizar una convención integrada por delegados mandatados que concurrirían a votar por un candidato determinado, al estilo de las convenciones realizadas en Estados Unidos por el Partido Demócrata y el Republicano. Nosotros, en cambio, postulábamos una convención en que los delegados votaran libremente, tras un debate abierto, tal como acostumbrábamos hacer en nuestras juntas nacionales.

Como de costumbre, el debate fue intenso y prolongado. La tesis de los freístas resultó triunfadora, con el 56% de los votos, mientras la nuestra logró el 44%. Acto seguido, con Gabriel propusimos que Eduardo fuese nominado por aclamación como nuestro candidato presidencial a la Concertación, y de inmediato nos incorporamos a su campaña para trabajar lealmente a su lado.

En paralelo, el Partido por la Democracia (PPD) y el PS proclamaron como su candidato a Ricardo Lagos Escobar, quien se había desempeñado como ministro de Educación del gobierno de Aylwin.

Se acordó que el candidato de la Concertación se definiría en elecciones primarias, no totalmente abiertas como hoy se realizan. Puesto que no existía legislación al respecto, se decidió efectuarlas mediante un padrón electoral conformado por aquellos militantes o ciudadanos que se inscribieran para participar en dicha elección.

De ese proceso, que podríamos denominar una primaria reglada, resultó ganador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien posteriormente, en el mes de diciembre de ese mismo año, triunfaría en las elecciones presidenciales por un amplio margen, con el 57,98%. Su más cercano contendor, el candidato de la derecha, Arturo Alessandri Besa, obtuvo el 24,41% de los votos, seguido del independiente José Piñera (6,18%), el economista y ecologista Manfred Max Neef (5,55%), el representante del Movimiento de Izquierda Democrática Allendista, Eugenio Pizarro (4,7%) y el de la Alianza Humanista Verde, Cristián Reitze (1,17%).

Casi de inmediato se conformó, en torno al nuevo Presidente, un grupo estrecho y cercano a su persona, denominado el “Círculo de hierro”, integrado por los

mismos que habían venido levantando su figura desde hacía años: Edmundo Pérez Yoma, Carlos Figueroa y Genaro Arriagada. A ellos se sumaba Eduardo Aninat, otro hombre de confianza de Frei Ruiz-Tagle. Todos fueron pieza fundamental de ese gobierno, ocupando cargos claves al interior del mismo. A la par, existió otro grupo llamado el “Círculo de titanio” (el famoso “Segundo Piso”), integrado por asesores como Cristián Tolosa, Andrés Palma, Guillermo Pickering y Pablo Halpern.

El gobierno de Frei fue continuador del proyecto iniciado por Aylwin. En el ámbito político se mantuvo la tarea de avanzar en la transición, sorteando el mismo tipo de obstáculos que debió enfrentar Patricio durante su mandato: Pinochet asentado en la Comandancia en Jefe del Ejército, y en el Parlamento los senadores designados logrando mayoría opositora conjuntamente con los senadores de la UDI y Renovación Nacional, condicionando siempre los proyectos que se tramitaban. Esta situación exigía una gran capacidad de negociación.

En materia de derechos humanos, se siguió presionando por lograr que los tribunales de justicia sancionaran a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Incluso se logró someter a juicio al general Manuel Contreras y a los más importantes cabecillas de la Dina y la CNI. Contreras fue encarcelado, al igual que diversos personeros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. En esa línea, la única excepción se produjo cuando el Consejo de Estado renunció a continuar con la investigación en el denominado Caso Pinocheques, acción que el Presidente Frei justificó por razones de Estado. ¿Cuáles fueron esos motivos? Lamentablemente nunca se precisaron, aunque es posible que tan delicada decisión tuviera que ver con el convencimiento sobre las consecuencias que ello podía traer a nuestra aún frágil democracia y a una transición todavía inconclusa.

El gobierno de Frei desplegó numerosos esfuerzos por abrir canales de comunicación con las Fuerzas Armadas, en el sentido que estas se abrieran a una colaboración activa para intentar mitigar las heridas infligidas en materia de derechos humanos por la dictadura, y poder contar con la información más completa acerca del paradero de los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos. Con ese fin, se creó la llamada “Mesa de Diálogo”, en la cual se sentaron representantes del mundo militar y de la civilidad con una representación transversal. Creo que ello fue un buen esfuerzo, aunque de magros resultados. Al igual que Aylwin, Frei tampoco aceptó ni amnistías ni puntos finales, algo destacable en todos los gobiernos de la Concertación.

El Presidente Frei exhibió la veta de un gobierno realizador, tanto en materia de obras públicas, como en concesiones, vivienda y salud. Continuó con la apertura de Chile al mundo, en la búsqueda de tratados de libre comercio, bajo un claro esfuerzo por reducir los índices de pobreza, logrando un crecimiento económico anual superior al 5%, pese a afrontar la denominada “Crisis Asiática” entre 1997 y 1999.

Entre sus mayores logros, destaco dos programas cuya trascendencia en el tiempo merece atención. El primero fue la llamada Jornada Escolar Completa, uno de los ejes de la Reforma Educacional, que permitió aumentar los tiempos pedagógicos, especialmente en los establecimientos subvencionados, así como fortalecer el currículum de aprendizaje. Ello implicó un plan de construcciones escolares de gran magnitud a lo largo de todo el país, lo que benefició la infraestructura y cobertura de matrícula bajo este sistema horario. El segundo logro fue la Reforma Judicial del Sistema Procesal Penal, en respuesta a la demanda de la ciudadanía de contar con un sistema más ágil y oportuno. Hasta entonces, muchas veces las personas permanecían privadas de libertad por largo tiempo sin ser comprobada su responsabilidad penal. Para ello hubo que realizar una importante inversión en términos de recursos humanos y construcción de edificios adecuados para albergar tanto a los nuevos centros de justicia como al Ministerio Público.

Durante este período, la prensa fue implacable, especialmente aquella que había sido cercana a la dictadura. Estos medios siempre estaban listos para magnificar cualquier diferencia entre los partidos de la coalición de gobierno, sin importar cuán legítima fuese esta. Los conflictos al interior de la Concertación comenzaron a ventilarse en público como una nefasta y progresiva práctica. Evidentemente, la existencia de desacuerdos entre los partidos era algo legítimo, pero su filtración hacia la opinión pública no hacía más que darles munición a quienes aún insistían en trabar la transición, empezando por el propio Pinochet y la derecha más dura.

Mi posición fue siempre de apoyo y guardaba mis críticas para hacerlas presente al propio Presidente o a sus ministros. Durante esos años, participé activamente en las comisiones de Hacienda, Constitución y Economía, así como también en todos los debates del Senado, defendiendo los proyectos del gobierno y buscando su aprobación, ya que no contábamos con mayoría y menos con los quórums calificados.

A la labor parlamentaria, se sumaba un intenso y permanente trabajo en terreno. Mi circunscripción —la Circunscripción Poniente de la Región Metropolitana— era muy extensa: 32 comunas, lo que equivalía a casi el 20% del electorado nacional. Esto exigía constantes visitas a terreno y contar con un sólido equipo de trabajo. Clave, en este sentido, fue la labor desarrollada en colaboración con los diputados del sector Andrés Aylwin, Ramón Elizalde, Mario Hamuy, Jaime Jiménez, Zarko Luksic, Edgardo Riveros, Cristián y Luis Pareto, así como también con los alcaldes, concejales y dirigentes en cada comuna.

Mi oficina, en la calle San Martín, era el centro de operaciones, donde contábamos con un buen equipo de jóvenes profesionales, dedicados a generar proyectos y atender los más diversos casos. Inés, junto a Isabel Ossa, Raquel Hurtado, mi hija Paula y un gran equipo de mujeres, dirigentes y jóvenes voluntarios conformaron un área de desarrollo comunitario que logró contundentes avances a la hora de contactar y canalizar diversas problemáticas, implementando valiosas experiencias y proyectos con la comunidad.

Era una tarea titánica y de mucha exigencia personal, pero me gratificaba, pues significaba un cable a tierra, que me permitía escuchar y estar cerca de la gente, conocer su realidad, necesidades y los problemas que enfrentaban, generándose un valioso feedback que nutría mi trabajo parlamentario. Muchas veces no había capacidad de dar respuesta ante tanta diversidad de demanda, pero estaba convencido de que las personas se sentían acogidas y amparadas cuando uno realmente las escuchaba y hacía lo posible por darles una mano.

2. La partida de Rodrigo: Una pérdida irreparable

En medio de esta vorágine, el 28 de octubre de 1995, después de una larga enfermedad, murió Rodrigo, mi hermano menor. Tenía 50 años. Era un hombre joven, bondadoso, empático, alegre y lleno de proyectos que supo concretar a tiempo. Siempre fuimos muy unidos, pese a tener bastantes años de diferencia. Cuando asumí como senador por Santiago Poniente, él pasó a ser mi mano derecha, apostando por mi proyección política. Admiraba en él su coraje, su perseverancia, su sentido práctico y capacidad para organizar y concretar los planes más increíbles. Pero, ante todo, siempre me impactó y conmovió su profunda vocación de servicio hacia los desvalidos.

El día de su funeral, durante la homilía, se dijo que había seguido la huella del padre Hurtado; primero, porque ambos murieron casi a la misma edad (el padre Hurtado tenía 51) y producto del mismo cáncer, pero, sobre todo, por su entrega y compromiso con los pobres. No fue una coincidencia. Rodrigo se formó en un colegio jesuita, al cual él mismo decidió cambiarse, tras abandonar el Instituto Alonso de Ercilla, donde todos sus hermanos habíamos estudiado.

Durante mi exilio, fue él, junto a mi hermano Felipe, quienes se preocuparon de cada detalle: arrendaron mi casa, me hacían llegar dinero para costearme la vida, se ocuparon de mis hijas, y mucho más. Rodrigo era el hombre de las ideas. Era muy exitoso, además de llano, bromista y hasta irónico, pero, ante todo, era un hombre comprometido con sus valores. Podría haber sido un gran político, si así lo hubiera querido. Le gustaba el tema, participaba activamente como militante en su comuna y se movía en ese entorno, pero nunca le interesó ser candidato. Llegó un momento en que decidió donar buena parte de su tiempo y dedicarse a trabajar con el voluntariado del Hogar de Cristo. Recuerdo que le pregunté si estaba seguro. “Yo ya tengo suficiente. No necesito más. Quiero entregarme a esta causa”, me explicó.

Rodrigo tenía algo que muy poca gente tiene: trascendencia. No fue ministro, ni senador, ni ocupó altos cargos, pero dejó una huella más profunda que cualquiera de nosotros. Formó una fundación —la Fundación Rostros Nuevos—, que se ha proyectado con fuerza en el tiempo. Nosotros sabíamos de su trabajo, pero nunca

imaginamos el inmenso alcance que tendría. Él siempre decía que, de entre los pobres, los más vulnerables y abandonados eran los adultos mayores que sufrían discapacidad mental, y a ellos les dedicó todo su esfuerzo, generando redes de apoyo y buscándoles una actividad que les permitiese desarrollarse y autosustentarse. Logró aumentar la cobertura de sus programas y adecuar, progresivamente, la atención a modelos de intervención psiquiátricos más innovadores, tales como la creación de hogares protegidos —los que en la actualidad están absolutamente validados, algo insospechado en ese entonces—.

Él no toleraba los hospitales psiquiátricos. “Es mandar a la gente a una cárcel de locos”, nos decía. “Hay que acoger a los que nadie recoge, a los que son abandonados incluso por sus propias familias: a los viejos pobres y con discapacidades mentales”. Su obra está hoy viva y presente en seis regiones del país, con programas de punta en materia de salud mental, dando respuesta especializada a una alta demanda de usuarios en condición de extrema pobreza y manteniendo varios hogares que acogen a aquellos “olvidados”.

Rodrigo fue el mejor de los nuestros, sin desmerecer a los demás. Todas las mañanas miro su foto en mi velador, al lado de la del padre Hurtado y la del cardenal Raúl Silva Henríquez.

3. Por primera vez a la cabeza del Senado

En 1997, decidí ir a la reelección como senador por Santiago Poniente. Creía poder seguir aportando al proyecto de la Concertación, y que aún quedaba mucho por hacer en términos de concluir el proceso de transición a una democracia plena. Los anclajes autoritarios, heredados de la dictadura y plasmados en la Constitución de 1980, seguían vigentes y Pinochet pronto se integraría como senador vitalicio al Parlamento según lo estipulado por la ley. Si bien se habían alcanzado importantes avances en términos económicos y de disminución de los índices de pobreza y desigualdad, todo ello era aún insuficiente. Había mucho trabajo por delante y el desafío era inmenso. Quería aportar de cerca.

Para esta elección parlamentaria, la plantilla quedó conformada por Gladys Marín, en representación del Partido Comunista; Jovino Novoa, por la UDI; Ángel Fantuzzi, por Renovación Nacional, y Camilo Escalona y yo por la Concertación.

Desde el partido parecían confiados. Las encuestas estaban a nuestro favor, vaticinando cifras muy débiles para la derecha. Se daba por sentado que yo solo sobrepasaría el 30% de los votos, y que con Camilo Escalona podríamos doblar. Reconozco que nunca estuve tan seguro respecto a esos pronósticos. Incluso tuve problemas con Camilo, pues en alguna oportunidad declaré que consideraba difícil el doblaje, algo que le molestó mucho y con razón. Era un juicio honesto, pero no debería haberlo expresado.

Los resultados de esas elecciones fueron inesperados. Los votos se dispersaron. Gané con el 27,7%, algo que sentí casi como una derrota, mientras la derecha rindió mejor de lo que se anticipaba, con Novoa que obtuvo 20,56%, y Fantuzzi 13,76%. Camilo Escalona, en cambio, sacó 15,98%, apenas unas décimas más que Gladys Marín. No alcanzamos a doblar y mi compañero de lista quedó fuera. Nuevamente el sistema binominal nos jugó en contra.

La injusta pérdida de Camilo privó al Parlamento de un gran político, hombre de una honestidad a toda prueba, leal a sus convicciones. Ello quedó de manifiesto

años más tarde, cuando, tras ser elegido en una elección posterior, accedió al Senado llegando a ser su presidente y dejando una huella profunda con su aporte en el debate político. Tengo un especial reconocimiento hacia su persona, por las leales relaciones que logramos construir.

Así, en marzo de 1998, se inauguró la sesión de un nuevo Parlamento. Mientras yo asumía por primera vez como presidente del Senado, Augusto Pinochet se convertía en senador vitalicio, sucediéndolo en su cargo como comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta. Pasábamos así a compartir obligadamente un espacio que era bastión de la recuperación democrática. Su arribo no era algo que pudiésemos impedir, ya que ello estaba establecido en la Constitución y debíamos respetarlo.

La sesión de instalación del Senado, con la presencia de Pinochet, estuvo llena de incidentes. Las tribunas estaban repletas de asistentes invitados por senadores de derecha y designados, y por los partidos de la Concertación. El ambiente era tenso. Muchos parlamentarios se manifestaron exhibiendo fotos de detenidos desaparecidos y lienzos con proclamas contra Pinochet. El Senado había tomado todas las medidas de seguridad para evitar cualquier acto que pudiese atentar en contra de su persona, no admitiéndose, además, la presencia de ninguna persona extraña o guardias personales, como algunos habían sugerido.

Se procedió, entonces, a la votación de presidente del Senado. Resulté elegido por 28 votos, mientras Hernán Larraín obtuvo 20. En tanto, para la vicepresidencia se presentaron el socialista Jaime Gazmuri y Mario Ríos, senador RN, quien finalmente resultó electo y me acompañaría en la testera hasta el año 2002. Jaime, lamentablemente, no alcanzó la votación requerida.

En mi caso, obtuve dos votos más de lo que estimábamos que recibiríamos. Uno de ellos fue del senador Julio Lagos, de Renovación Nacional, quien había sido mi jefe de campaña en terreno en 1971 y 1973, y con el cual mantenía una relación de amistad, pese a que de opositor a la dictadura pasó a apoyar a Pinochet a mediados de los 80. El otro voto, que hoy puedo develar, correspondió al senador Sergio Diez, también de RN; según él mismo me informó después, tomó la decisión por no estar de acuerdo con sus correligionarios. Quiero hacer esta precisión, pues en su momento algunos comentaron que uno de esos votos habría correspondido a Pinochet, lo cual no es cierto. Esta interpretación se hizo, debido a que este, al regresar a su asiento después de votar, caminó por el pasillo y, al pasar frente a mi asiento, me hizo un

gesto de saludo, según comentaron los periodistas presentes.

Al asumir el cargo, desde la testera, me dirigí a la sala agradeciendo la nominación, planteando las tareas que teníamos por delante, y comunicando mi decisión de representar al Senado como institución y no solo como representante de los senadores que me habían elegido. Aproveché también de hacer una clara defensa a la democracia conquistada y al exitoso tránsito pacífico logrado durante los gobiernos de Aylwin y Frei, con resultados pocas veces vistos en nuestra historia en materia política, económica y social.

Sabía que conducir el Senado en esas circunstancias no sería tarea fácil. La derecha seguía haciendo oídos sordos a los reclamos por justicia en materia de derechos humanos, argumentando que se trataba de inventos o exageraciones. Muchos aún profesaban un apoyo incondicional a Pinochet. De inmediato, una vez que este asumió como senador, cerraron filas tras su persona, y pasó a ser el jefe de bancada de facto de ese sector. Los parlamentarios de la UDI y de RN votaban acorde a lo que él hacía y opinaba. Tenía, además, su propia corte personal: los otros senadores designados. Se sentaban todos juntos, almorzaban a solas y, prácticamente, no se relacionaban con nadie más. Eso sí, Pinochet concurría con puntualidad a las sesiones de sala y comisión y, cuando no, acostumbraba llamar por teléfono para justificar su inasistencia. Él respondía a la disciplina militar en la que se había formado.

Como medida de precaución, se decidió ubicarlo en un asiento al fondo de la sala del Senado, inaccesible en el caso de que alguien quisiera atentar en su contra desde la tribuna. Era un tema delicado, pues su vida estaba en permanente riesgo. Pese a esto, le dije que no podía ingresar con agentes armados o vigilancia personal. “Ese asunto está a cargo del Senado. No acepto gente de la Dina, ni militares, ni uniformados. ¡Nada!”, le expresé, y él acató.

4. La derogación del “11” de septiembre:

Las artimañas del senador Pinochet

Uno de los episodios de esta tensa convivencia tuvo lugar en agosto de 1998, cuando se presentó un proyecto de ley, previamente aprobado en la Cámara de Diputados, que eliminaba el 11 de septiembre como feriado nacional —se lo conocía como el Día de la Liberación Nacional—, medida que, evidentemente, habíamos heredado de la dictadura. No era la primera vez que se intentaba algo así. El proyecto se había aprobado en la Cámara en otras oportunidades, pero cada vez que llegaba al Senado la derecha votaba en contra y, sumado el apoyo de los senadores institucionales, hasta ahí llegaba la iniciativa.

Recuerdo que el proyecto se empezó a discutir en una sesión de sala en la tarde, un martes del mes de agosto. Después de despachar otras materias, se inició el debate sobre el tema, lo que obligó a prorrogar la hora de término de la sesión. En dicha discusión, se volvió a producir el enfrentamiento de posiciones que hacía prever que la medida volvería a rechazarse.

Entonces, los senadores Sergio Bitar y Carlos Ominami, con mi respaldo, presentaron una salida alternativa, proponiendo reemplazar la fecha por el Día de la Unidad Nacional, a celebrarse el primer lunes del mes septiembre. Una vez realizada la votación, se produjo un empate, lo que obligaba a repetir el proceso y, en el caso de volver a empatarse, se tendría por rechazado el proyecto, debiéndose esperar otro año para reponerlo.

En la primera votación, se había generado una abstención de parte de Marcos Aburto, senador designado por la Corte Suprema, quien fundamentó su posición señalando que estaría dispuesto a aprobar el proyecto, siempre y cuando se suprimieran otros feriados. En esas circunstancias, opté por no arriesgarnos a un nuevo empate, y di por terminada la sesión, dejando el proyecto para ser votado en la sesión del día siguiente.

La medida sirvió para ablandar uno que otro voto de la derecha. A la mañana siguiente, recibí un llamado del senador RN Ignacio Pérez, quien me dijo: “El

general quiere hablar contigo para buscar una solución al tema”. Le respondí que no tenía problema: “Dile que vaya a mi oficina en la mañana y lo conversaremos”. En efecto, al mediodía, Pinochet ingresaba a mi oficina, ante la expectación de numerosos periodistas que, al parecer, habían sido avisados por el mismo senador.

—¿Cómo está, presidente? —me saludó. Conversamos un rato—. Quiero que solucionemos este tema del feriado nacional —dijo al fin.

—Bueno, ¿cómo lo arreglamos? —le pregunté.

—¿Por qué no lo discutimos después del 18 de septiembre mejor? Así tenemos tiempo suficiente para que, entre los dos, presentemos un proyecto de ley...

Le respondí que no lo consideraba factible. Estaba convencido de que Pinochet quería ganar tiempo para presionar a su sector, y así evitar que algunos senadores, especialmente Aburto, pudieran apoyarnos.

—Lo vamos a decidir ahora, se pierda o se gane. Y yo creo que tengo altas posibilidades de ganar —me atreví a decir.

—¿Está seguro? —me contestó.

Le dije que sí, que creía tener el apoyo; que un senador, incluso, me había propuesto cambiar el 11 por un feriado religioso. Se quedó pensando un momento.

—Está bien. Votemos por la propuesta de crear el Día de la Unidad Nacional, pero con la condición de que el cambio se aplique a partir del próximo año, no para este 11. ¿Usted responde por los votos de los suyos?

—Claro, de los nuestros por supuesto. ¿Y usted? ¿Puede responder por los suyos?

—Tiene todos mis votos —me dijo.

—Perfecto. Hagamos lo siguiente. Dejemos este acuerdo por escrito. Yo se lo llevaré a mi gente, usted se lo lleva a los suyos, y si hay apoyo unánime, lo firmamos los dos.

—Me parece —respondió.

Terminó la reunión y nos separamos. Me reuní con los parlamentarios de la Concertación y estuvieron de acuerdo, pese a que no era la salida más óptima. Redactamos el acuerdo y comenzaron a juntarse las firmas. Incluso conversé con algunos senadores de oposición; entre ellos, Sergio Fernández y Hernán Larraín.

La sesión para votar estaba citada para las tres de la tarde; una hora antes, ya teníamos todas nuestras firmas listas. No obstante, tras dar por iniciada la jornada, Pinochet no aparecía por ninguna parte.

Mandé a avisarle que se había abierto la sesión y que esperaba su presencia. Me informaron que estaba comiendo un sándwich en su oficina. Algo debía estar tramando... De repente apareció, muy casual, y se sentó en su puesto en la parte trasera de la sala. Hernán Larraín le llevó el acuerdo. Pinochet lo miró, lo firmó y se puso de pie; caminó por el costado, donde se ubicaban las bancas de los senadores socialistas y PPD, sosteniendo el documento en la mano, decidido a llegar hasta la testera y, seguramente, dispuesto a subir a ella, donde yo me encontraba presidiendo la sesión.

Efectivamente, lo vi venir. Yo estaba sentado junto al vicepresidente, Mario Ríos. “Aquí va a quedar la escoba”, me dije para mis adentros. Mi reacción fue levantarme y avanzar hacia los escalones de acceso a la testera, de tal manera de prevenir que intentara subir. Ahí me entregó el documento, pero al girarme para retornar a mi asiento, no me percaté de que venía detrás de mí. Según pude ver después en un video de la jornada, se paró detrás de mi silla, en el espacio que comúnmente ocupa el edecán del Senado. Entonces, Mario Ríos, quien mantenía una buena relación con Pinochet, se levantó de su asiento y le ofreció su puesto. Cuando me percaté de lo que estaba sucediendo, miré a Hernán Larraín con cara de “¡Sácamelo de aquí!”. Estaba la televisión grabando, era una situación muy tensa y, en cualquier momento, se podía venir todo abajo. Entonces, Hernán Larraín se le acercó y le murmuró que tenía que salir. Pinochet se quedó unos segundos más, hasta asegurarse de que la prensa había tomado las fotos necesarias. Al día siguiente, esa imagen salió en todos los diarios y canales. “¡La que me hiciste!”, le dije después a Ríos.

Así fue que, finalmente, el feriado del 11 de septiembre se suprimió y reemplazó por el primer lunes de septiembre, con el Día de la Unidad Nacional. Más tarde, en 2002, lo derogamos. Pero esa tensa jornada fue la puerta de entrada.

5. Pinochet detenido en Londres y su regreso “triunfal” a Chile

A fines de septiembre de 1998, Pinochet me avisó que pensaba viajar a Londres para operarse de un problema de columna. Le recomendé que lo pensara bien, que corría un riesgo, que podían detenerlo en algún aeropuerto. “Tengo una excelente relación con Margaret Thatcher. Todo va a estar bien, no se preocupe”, insistió, cerrando el tema.

A mí, el asunto me inquietaba, no precisamente porque lo estimara, sino porque sabía que su eventual detención podía significar un gran problema de Estado. Me limité a responderle que viajara con pasaporte diplomático ante cualquier eventualidad. Esto último fue, sin embargo, lo que desencadenó el problema. Al viajar al Reino Unido, Pinochet habría aplicado una visa diplomática, con la cual, al parecer, quiso viajar también a Francia, lo que levantó las alarmas y alertó al juez español Baltasar Garzón. Pinochet ya estaba operándose en la clínica en Londres, cuando el magistrado español pidió su extradición.

El 16 de octubre de 1998, el otrora dictador fue detenido en la capital inglesa, en respuesta a una orden de captura emanada de Garzón, quien solicitaba su extradición para juzgarlo en España por el asesinato y tortura de varios ciudadanos españoles durante la dictadura. La noticia recorrió el mundo entero como un reguero de pólvora, causando alegría y euforia, y también estupor.

En Chile, nos reunimos prontamente con el gobierno para ver cómo procedíamos. En ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores era José Miguel Insulza. La tesis que primó fue que debía respetarse el fuero diplomático de Pinochet, independiente de su figura controversial, y que debía ser devuelto a Chile para que la justicia lo juzgara en nuestro país. Desde el punto de vista judicial, Chile tenía la capacidad de hacerlo y nadie podía impedirlo.

La misma tesis fue sostenida en el Consejo de Seguridad Nacional, el cual se reunió con motivo de los hechos. La cita en esta instancia, como es de imaginar, no fue fácil. Las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa, con tal de tener de regreso a Pinochet. Recuerdo la tensión reinante durante la segunda sesión del Consejo, convocada por el Presidente Frei para tratar el caso.

No debemos olvidar que este organismo, instalado por la dictadura para poder controlar a los gobiernos democráticos, estaba compuesto en ese entonces por ocho miembros, de los cuales cuatro eran los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Los cuatro restantes eran el propio Presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema y el Contralor General de la República.

En esa ocasión, en un gesto de fuerza y deliberación pasiva, los cuatro uniformados hicieron ingreso a La Moneda en formación conjunta, mostrándose como un verdadero bloque ante la televisión y la prensa. Indiscutiblemente, era un mensaje de demostración de poder ante la ciudadanía.

La sesión comenzó en un ambiente de evidente tirantez. Ricardo Izurieta, comandante en jefe del Ejército, solicitó la palabra al inicio y pidió que lo excusaran, pero que quería dejar constancia de que, pese a estar presente, no intervendría en esta reunión, ya que al parecer se habrían filtrado hacia a la prensa algunos temas de la sesión anterior del Consejo. Estaba establecido, por norma legal, que estas reuniones eran estrictamente secretas, salvo aquellas versiones oficiales que se acordara dar a conocer por unanimidad de sus componentes. Izurieta tenía razón: la filtración reclamada era efectiva.

Varios de los presentes le expresamos que, dada la trascendencia del tema que se abordaría, su opinión resultaba imprescindible. Tras este planteamiento, el militar accedió a participar, y la sesión pudo continuar.

Transcurridos 24 años desde esa jornada, creo no estar infringiendo el deber de guardar secreto sobre los temas que se trataban en este tipo de reuniones. Solo lo menciono para dejar constancia de los hechos y visibilizar lo que significaba el proceso de transición entre el poder militar y el poder civil en esos años. Cualquier decisión o gestos de este tipo provocaban efectos de consecuencias impredecibles. El “Ejercicio de enlace” y el “Boinazo” de Pinochet; declaraciones inaceptables contra las víctimas de derechos humanos en dictadura; el encuentro en un restaurante de los comandantes en jefe, y este ingreso en bloque a La Moneda, todo muy bien cubierto por los medios de comunicación, producían intranquilidad en la ciudadanía y se prestaban para todo tipo de insinuaciones. Lo hago presente hoy, especialmente, para que las generaciones que no vivieron esos tiempos puedan calibrar cómo se fueron sorteando los obstáculos que empantanaban la propia transición, hasta lograr, de una vez por todas, establecer los cimientos de una democracia sólida y sin

peligros de retrocesos.

En el intertanto, desde la derecha me presionaban. Querían que viajara a Londres, en mi calidad de presidente del Senado, a defender el fuero de senador de Augusto Pinochet. Muchos, incluso, pedían romper relaciones diplomáticas con España y el Reino Unido. El asunto debía resolverse por la vía diplomática a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El tema era complejo. No obstante, tenía claro que, más allá de mis dilemas o consideraciones personales, debía velar porque los derechos de Pinochet como parlamentario fuesen respetados, al igual que lo hubiera hecho con cualquier otro senador. Esa era la tarea que me correspondía, aun cuando me doliera o no me gustara, y procuré cumplirla. Aparte de eso, nunca lo visité, nunca tuve un contacto más allá de lo que correspondía institucionalmente. Tampoco fui a Londres, pese a las presiones que recibí.

El gobierno me encomendó, entonces, viajar a España para sostener una entrevista con el Presidente José María Aznar. En nuestro encuentro, el mandatario se deshizo en explicaciones, manifestando que no podía hacer nada, que los tribunales españoles eran independientes. Le respondí: “¿Sabes qué? No solo es grave que ustedes intervengan e imposibiliten enjuiciar a Pinochet en Chile. Esto, además, va a transformarse en un serio problema para ustedes. Si a Pinochet lo trasladan a España, ¿dónde lo van a meter? Tiene 80 y tantos años, no está sujeto a detención en cárcel, van a tener que buscar alguna fórmula y decidir qué hacen con él acá”. Aznar me respondió que estaba de acuerdo, que me encontraba la razón, pero que estaba atado de manos.

En general, se pensaba que la extradición no iba a tener éxito, en parte por la influencia de Margaret Thatcher, y también porque se contaba con abundantes argumentos jurídicos para sustentar la tesis que sostenía el gobierno de Chile. A su vez, Pinochet había estado moviendo todos sus hilos. Contrató abogados, arrendó una casa bastante cómoda en la villa Virginia Water, uno de los sitios más exclusivos en Londres.

Luego de que los tribunales británicos decidieran extraditarlo a España, la Cancillería chilena intervino frente al ministro del Interior británico, Jack Straw, quien finalmente tuvo la última palabra. Tras el resultado de varios exámenes médicos, este declaró la imposibilidad de su extradición, resolviendo liberarlo por razones humanitarias debido a su precario estado de salud y bajo el

argumento de que Pinochet estaba demente. Dos horas más tarde, volaba rumbo a Chile.

Por mi parte, coincidía con la tesis jurídica del gobierno, pero de ahí a que la justicia chilena fuera a responder, no había ninguna certeza. Se habían juzgado ya a varios personeros de la dictadura y, desde mediados de los 90, las causas por violación a los derechos humanos habían empezado a aumentar, existiendo más de 300 procesos penales en curso. Pero había que admitirlo: el diagnóstico médico nos jugaba en contra. Si en Londres no habían podido juzgar a Pinochet por esta razón, ¿qué impediría que sucediera lo mismo en Chile?

El 3 de marzo de 2000, después de 503 días de arresto domiciliario, el ex dictador volvió a pisar tierra chilena, donde fue recibido por las Fuerzas Armadas con todos los honores. Al descender del avión, aún en su silla de ruedas, de pronto se puso de pie frente a las cámaras y levantó su bastón triunfante, como diciendo “Aquí estoy otra vez”. Fue una imagen desafiante, una verdadera burla y una situación indignante.

6. La última escaramuza del dictador y su salida del Senado

Pronto empezó a rumorearse que Augusto Pinochet planeaba volver al Senado. Esto me dejaba en una posición complicada, ya que institucionalmente no podía negárselo. Así lo declaré ante la prensa: “Si el día de mañana Pinochet retorna al Senado, no puedo negarle su ingreso ni su derecho a reincorporarse al parlamento. Esto está estipulado por la ley y la Constitución. Cuando asumí mi cargo juré hacerlo, expresando que uno debía ser demócrata hasta las últimas consecuencias, aunque ello doliera. Yo no puedo desconocer las normas. En este sentido, me moleste o no, si me preguntan si tiene derecho a volver, sí lo tiene. ¿Que si me gusta? No me gusta, pero este no es un problema de gustos, sino un problema legal”¹²³.

Pero la contradicción era enorme. Pinochet acababa de ser declarado demente por la justicia británica. Resultaba inaceptable que, en esas condiciones, continuara ejerciendo como senador. Así se lo expliqué al general Cheyre: “¿Cómo voy a recibir a un senador demente? Tiene que inhabilitarse. Usted debe ir a verlo y plantearle la situación, hablar con la familia, o buscar alguna fórmula para resolver el tema”. Pocos días después, Cheyre me llamó de vuelta.

—El general Pinochet dijo que solo estaría en condiciones de renunciar si usted fuera a hablar con él. Solo entonces presentaría su renuncia —explicó.

—¡Por ningún motivo! Soy presidente del Senado. Él es un senador. Si quiere hablar conmigo, va a tener que venir él —le respondí.

—Pero es que el general está en silla de ruedas...

—Puedo habilitar una rampa aquí para que suba con la silla de ruedas hasta mi oficina. Usted tiene que entenderme, general Cheyre. Yo no voy a ir a su casa.

A los pocos días, recibí otro llamado telefónico, esta vez del propio Pinochet. “Usted no ha querido venir a verme...”, me dijo. Le expliqué lo que ya le había dicho a Cheyre, que ir a verlo no era una opción, pero que, si quería, podía enviarle al secretario del Senado para que le entregara a él su renuncia. “Ah,

no... Déjeme pensarlo”, respondió.

Finalmente, fue Cheyre el que tuvo la idea: “¿Por qué no le pedimos al cardenal Errázuriz que vaya a buscar la renuncia?”.

Consulté con el cardenal si estaría dispuesto a ir a recibir la renuncia donde Pinochet. Aceptó hacerlo si eso resolvía el problema. Así se lo informé al general Cheyre.

—¿Y qué va a pasar con la parte económica? —preguntó Pinochet al teléfono, cuando le planteé esta nueva salida. En el fondo, quería saber si su renuncia implicaba que ya no recibiría más su dieta parlamentaria como expresidente, de acuerdo a las normas constitucionales vigentes e informes de la Contraloría.

—Ya lo consulté en Contraloría. Me dijeron que sí; va a seguir recibiendo su dieta.

—¿Y usted me lo garantiza? —insistió.

—Sí, se lo garantizo, salvo que venga otro presidente después de mí que tenga la competencia de modificarlo, o que se introduzcan cambios en la legislación.

—Muy bien. Entonces acepto. Que venga el cardenal.

Pinochet presentó su renuncia y yo cumplí mi misión de sacarlo del Senado. Con ello, dejó de ser un actor oficial en nuestra democracia y pasó a ser un ciudadano común, lidiando con varias querellas en su contra.

Murió seis años después, sin recibir ningún tipo de condena. En las interrogaciones se limitó a decir “no me acuerdo, no me acuerdo”. Nunca reconoció nada, ni siquiera el origen de los dineros en el caso del Banco Riggs, pese a que estos hechos estaban acreditados. Sin embargo, estos escándalos sí afectaron su imagen, y al final eran muy pocos los que se atrevían a defenderlo. Hasta la derecha comenzó a guardar silencio. Tuvo algunos reconocimientos después de su muerte, el día que se realizaron las exequias. Lo mismo pasó con el Ejército. Pero, finalmente, Pinochet fue condenado por la conciencia nacional. Hoy en día, nadie pone en duda que estuvo involucrado en serias violaciones a los derechos humanos, o que tuvo un comportamiento deshonesto y prácticas de enriquecimiento ilícito.

En términos judiciales, únicamente se salvó porque fue declarado demente. El Poder Judicial chileno no llegó a condenarlo como esperábamos, pero hay que reconocer, al menos, que se esforzó por enmendar su conducta indebida durante la dictadura y procedió a juzgar a varios de sus cabecillas, como Contreras, Raúl Iturriaga, Miguel Krassnoff y Osvaldo Enrique Romo (conocido como el “Guatón” Romo), entre otros. Además, se crearon los penales segregados de Punta Peuco y Cordillera, en medio de una amplia polémica, pues era necesario separar a estos procesados de los presos comunes. Si el día de mañana, alguien asesinaba o atentaba contra Manuel Contreras o alguno de sus secuaces, la responsabilidad recaería sobre el gobierno. Eso era algo que se debía evitar.

Sostengo, hasta el día de hoy, pese a todas las contradicciones que ello implica, que es necesario valorar todo lo que se hizo durante esos años por buscar justicia y verdad en materia de derechos humanos. No siempre fue lo que uno hubiese querido, pero creo que los esfuerzos desplegados llegaron a su tope máximo. Comprendo que las nuevas generaciones sean más críticas al respecto, pero si uno revisa la historia y el contexto de esos años, y se realiza un balance del proceso, resulta innegable reconocer que nuestro país hoy es otro Chile y que la democracia es una realidad. Tenemos temas pendientes, problemas que aún siguen sin resolverse y una herida siempre abierta... Lamentablemente, ello no depende de lo que eventualmente se haga o deje de hacerse, sino que, ante todo, de una verdad que nunca ha podido salir a la luz en plenitud. Y esto, en el fondo, está atado férreamente a la voluntad y a la conciencia profunda de los propios actores que vivieron dicho proceso. Muchos murieron y no hablaron, llevándose información y valiosas respuestas a la tumba, lo que significa para numerosas familias continuar con dudas que se han ido acumulando por generaciones.

Aún muchas personas se preguntan: ¿Dónde está mi padre?, ¿dónde está mi marido?, ¿dónde está mi abuela?, ¿dónde están mis hijos?, ¿dónde enterraron sus cuerpos?, ¿fueron lanzados al mar?, ¿estará en el Patio 29, en una fosa de la Cuesta Barriga, en Peldehue o en Paine?, ¿qué habrá sentido cuando lo estaban asesinando?, ¿habrá llorado?, ¿sintió frío?, ¿dejó algo escrito o algún mensaje?, ¿cuáles fueron sus últimas palabras o pensamientos? Y lo que queda solo es silencio, dolor y un profundo enigma trenzado con el sentimiento de una cruda impotencia. Nada justifica tanto daño y reparar es casi imposible. Hay quienes dicen: “El tiempo sanará las heridas”, o “Hay que reconocer que, a pesar de todo, el país logró avanzar y consolidarse en términos económicos”. Pues no, eso no es suficiente. Sería como aplaudir a Hitler por construir las carreteras alemanas o lograr ciertos progresos materiales durante su gobierno. Esta es una

herida abierta, con la que viviremos, lamentablemente, durante muchas generaciones.

Espero que la vida y la historia nos enseñen a calibrar lo sucedido, para que nunca más en Chile se repitan hechos de tanto salvajismo, indignidad y crueldad como los vividos.

7. Otras luchas como presidente del Senado

Ese primer período como presidente del Senado, que se prolongó entre 1998 y 2004 me significó experiencias muy valiosas a la cabeza de una institución que siempre he respetado y valorado profundamente.

La verdad es que no sé de dónde sacaba energías para hacerlo todo. Como parlamentario, me apoyaba bastante en mi equipo y en nuestros dirigentes políticos. Tenía agendas ocupadísimas. En el último tiempo, he vuelto a hojearlas y he quedado sorprendido. Las actividades eran diversas y numerosas: reuniones, Parlamento, estudio, terreno, audiencias y también bastantes viajes... Partía al alba y cerraba el día a altas horas de la madrugada. Lo único que mantuve, sagradamente, en términos de vida privada, fueron los almuerzos de los días domingo con mi familia.

Durante mi presidencia, hice un gran esfuerzo por trasladar el Senado desde Valparaíso hasta su antigua sede en Santiago, de donde lo había sacado la dictadura. Que el Parlamento estuviera en Valparaíso me parecía un error inmenso. El Poder Legislativo debe operar en el mismo lugar en que opera el Poder Ejecutivo. Así sucede en la mayor parte de los países del mundo, salvo en Sudáfrica —que tiene dos sedes: Pretoria y Victoria—, y en el caso del Parlamento Europeo —en Estrasburgo y Bruselas—. Su reubicación en Valparaíso había sido una decisión tomada por Pinochet, expresando con ello su desprecio al rol desempeñado por ambas Cámaras y la necesidad de mantener a los parlamentarios al margen.

Previo a su traslado, la vida política del país se había desarrollado siempre, por lo general, en el Parlamento. Los parlamentarios prácticamente vivían ahí, comían, hacían sesiones tarde por la noche. Siempre me pareció que la capacidad para convivir y buscar acuerdos se lograba, precisamente, en esos encuentros a la hora del té o durante los almuerzos, en ambientes distendidos, que ayudaban al diálogo, al entendimiento y a la camaradería. En la época en que me desempeñé como ministro de Frei Montalva, los titulares de las distintas carteras nos demorábamos cinco minutos en llegar a las comisiones, caminando a pie desde nuestras oficinas, algo que se acabó cuando la sede se instaló en Valparaíso. Uno

entraba y se sentaba a la mesa con algún senador de otro partido a conversar, pese a las diferencias que pudiésemos tener.

Durante su gestión como presidente del Senado, Gabriel Valdés había logrado avanzar en esta tarea de trasladar el Parlamento a la capital. Había conseguido la Casa Velasco para habilitar oficinas protocolares destinadas a la Presidencia, pero el espacio seguía siendo muy limitado. Por otro lado, era absurdo que el antiguo edificio del Congreso, con todo ese espacio disponible, estuviera prácticamente en desuso. Una parte la ocupaba el Ministerio de Relaciones Exteriores y la otra estaba botada, deteriorándose... Así que me puse manos a la obra, me comuniqué con el gobierno y empecé a presionar.

Cuando ingresamos por primera vez al edificio, nos encontramos con el inmueble en ruinas. Al parqué le faltaban pedazos, los vitreaux de los salones estaban tan sucios que no pasaba la luz. Los sillones del Salón de Honor estaban desvencijados y su tapiz, deshecho. El Salón de Lectura, abandonado. Todo había sido descuidado y destruido. El ingreso por calle Morandé aparecía clausurado, y habían instalado directo sobre las baldosas un entarimado con paneles divisorios para que trabajaran los funcionarios. ¡Era una cosa horrible!

Lo primero que hicimos fue instalar las oficinas de la presidencia y la secretaría del Senado. Logramos recuperar algunos muebles del subterráneo, como los sillones del Congreso Pleno y de la Sala de Sesiones de ambas cámaras, los que se mandaron a reparar. Se habían perdido muchos cuadros, pinturas y objetos. No había ningún tipo de inventario, todo lo hicimos a pulso.

Posteriormente, se recuperó el comedor de la presidencia, el Salón de Honor y también el Salón de Lectura. Incluso restauramos la Biblioteca del Congreso y ubicamos ahí el escritorio de Arturo Alessandri, su primer director. Colgamos los retratos de todos quienes habían pasado por el Senado, los que se mantienen hasta hoy, y se creó la Sala de los Presidentes, en honor a los Presidentes de la República que, a su vez, habían sido Presidentes del Senado: Domingo Santa María, Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuentes, Arturo Alessandri, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Inés junto a Raquel Hurtado buscaron los cuadros y muebles extraviados. Se contactaron con el Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo, visitaron anticuarios y colaboraron con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

Así, el 15 de abril de 1998, el Senado volvió a abrir sus puertas por calle Morandé, las mismas que habían sido cerradas en 1973 por los militares. El Salón de Honor, con sus sillones y mobiliario restaurados, representaba un lugar de mucha trascendencia histórica. Un dato al respecto: en el Salón de Honor de la sede en Valparaíso, cuando se hace el cambio de mando, el expresidente, tras entregar el cargo, sale por el pasillo central hacia la calle, entre los aplausos de sus partidarios, mientras que su sucesor debe esperar hasta el final de la sesión para abandonar el recinto por la misma vía y ante las mismas personas. En cambio, en el Salón de Honor de Santiago hay dos puertas laterales detrás de la testera, que tienen una explicación. Antigüamente, el Presidente que entregaba su mandato salía por una de estas puertas traseras hacia la calle, donde lo esperaba su propio vehículo. En el intertanto, el Presidente entrante abandonaba el lugar por la puerta principal, siendo ovacionado a la salida del Congreso por la gente que allí lo esperaba. Todo esto simbolizaba que quien se iba lo hacía sin llevarse nada. A comienzos de los 90, con Sebastián Piñera como senador, solicitamos un estudio que reveló que, si trasladábamos el Congreso a Santiago, se podía ahorrar hasta 20% del presupuesto destinado anualmente al Parlamento. Con este ahorro podría terminar de habilitarse el edificio histórico de la capital.

Hoy, todos los senadores cuentan con oficinas habilitadas, tanto en Santiago como en Valparaíso. Se reacondicionaron salas de comisiones, tanto o mejores que las que se dispone en el litoral. La Sala de Sesiones del Senado fue restaurada con sus muebles originales y en ella podría perfectamente sesionar el pleno de senadores. La idea es que, algún día, el Parlamento pueda trasladarse por entero a su sede en la capital. “¿Y qué hacemos entonces con Valparaíso?”, suelen decir las autoridades ante este planteamiento. Podría seguir usándose para sesionar cuando se convoque al Congreso Pleno o en las ocasiones que se requiriera. La placa del primer piso podría transformarse en un gran centro de convenciones, que acogiera eventos de trascendencia. En el sector de las torres, sería posible trasladar las oficinas de empresas estatales de relevancia para la zona, como Codelco, Enami u otras. Incluso podría pensarse en instalar las propias oficinas del gobierno regional. En su momento, propuse todo esto, pero siempre hubo cierta reticencia, especialmente de los parlamentarios de Valparaíso, quienes no se atrevían a apoyar la iniciativa por razones obvias.

Antes de dejar la presidencia del Senado, el año 2004, se inició el proceso de compra de un inmueble ubicado frente al Congreso, en calle Catedral, casi vecino a la sede de la Academia Diplomática. La idea era trasladar allí parte importante de la Biblioteca del Congreso. La compra se terminó de concretar

bajo la presidencia del Senado de mi hermano Adolfo. Allí está, sin ser ocupado. Si en el futuro se trasladara el Congreso definitivamente a Santiago, podría instalarse en ese edificio perfectamente la totalidad de las oficinas para todos los diputados y senadores. Espero que algún día se corrija este garrafal error de pretender que el Parlamento siga separado del Ejecutivo y del Poder Judicial.

Otra tarea relevante que me correspondió llevar adelante como presidente del Senado fue la tramitación de numerosos tratados de libre comercio, algo que se dio con fuerza en el contexto de la apertura económica de la transición, sobre todo durante los gobiernos de Eduardo Frei y de Ricardo Lagos. A lo largo de ese período, nos propusimos como tarea conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores recorrer Europa Central, para abrir nuevos espacios de negociación. En mi calidad de presidente, viajé a Hungría, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania; un mundo nuevo para nosotros y que aún no se incorporaba a la Comunidad Económica Europea. Posteriormente, en 2001, visité Japón y Corea del Sur. En este último, particularmente, había suspicacia respecto a la posibilidad de firmar un acuerdo, sobre todo desde el mundo agrícola, que se sentía amenazado por un intercambio con el exterior. No obstante, el gobierno coreano se mostraba interesado en incursionar en América Latina, y Chile era visto como un país con gran desarrollo y una fuerte tasa de crecimiento, lo que les abría un mercado interesante para la exportación de automóviles y tecnología. Me preocupé personalmente de tramitar el tratado en las dos Cámaras, pese a que acá también había resistencia de parte de las industrias locales. Los coreanos quedaron tan agradecidos que, después, cuando se reunieron con el Presidente Lagos, se acordó crear la Sociedad Chile-Corea, de la que fui nombrado presidente. Hasta el día de hoy mantengo ese cargo. Aquel fue el primer tratado que firmó Chile con el mundo asiático, lo que sentó un precedente para más tarde hacer lo mismo con Japón y China.

8. Las primarias de la Concertación: La DC, “el pato de la boda”

La campaña presidencial de 1999 se aproximaba. Como Democracia Cristiana, considerábamos legítimo postular nuestro propio candidato y proyectarnos hacia un tercer gobierno de la Concertación. Se decidió, entonces, definir nuestra carta presidencial a través de un sistema de primarias directas y vinculantes, a diferencia de las realizadas en 1993.

Al interior de la coalición, Ricardo Lagos se perfilaba como el candidato del PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical Socialdemócrata y el Partido Liberal. Reportaba en las encuestas un importante respaldo ciudadano de parte del electorado concertacionista, mientras que Joaquín Lavín era quien concitaba al electorado de la derecha.

En tanto, dentro del partido se barajaban tres opciones: Gabriel Valdés, Jaime Ravinet y yo. Para mí, lo más cómodo hubiera sido no asumir, ya que internamente, desde un principio, las cosas se dieron a contrapelo.

En la junta nacional, realizada en el Congreso en Valparaíso, algunos habían querido proclamarme como candidato sin más; no obstante, pese a tener una inmensa mayoría de delegados a mi favor, me opuse tajantemente a ello y planteé que los tres precandidatos recorriéramos el país haciendo campaña y participáramos en debates. Me parecía fundamental que fueran los propios camaradas quienes, en una primaria interna con participación de independientes, decidieran quién debía ser nuestro candidato.

Así se entendió que íbamos a proceder. Pero a los pocos días, Jaime Ravinet retiró su postulación y me dio su apoyo. Según recuerdo, Gabriel, en una entrevista concedida a la revista Hoy, manifestó que, bajo esas condiciones, descartaba competir en las elecciones internas propuestas, descalificando en duros términos la forma en que se había procedido en dicha junta nacional. Ambos precandidatos, uno con mayor fuerza que el otro, objetaron lo que había sido el desarrollo de la misma.

De esta forma, mi candidatura nació como uno de esos partos medio rasguñados,

lo que afectaría de manera irreversible, posteriormente, el proceso de la propia campaña. Pese a este esfuerzo por resolver el tema de manera unánime, ello trascendió a la opinión pública, dando una imagen de que mi candidatura habría salido casi “con fórceps”. El daño ya estaba hecho. pero mantuve la esperanza de que pudiésemos recuperarnos en el camino, ya que estimábamos que aún éramos capaces de obtener el 40% de los votos solamente con el electorado del partido.

No era usual que la directiva participara en las campañas, pero dadas las circunstancias, me parecía importante que esta se involucrara. Enrique Krauss era entonces presidente del partido.

Jaime Ravinet aceptó ser mi jefe de campaña. Sin embargo, a poco andar, terminó presentando su renuncia, debido a las discrepancias que tuvimos, recién iniciada la campaña, respecto a ciertas estrategias a seguir, tales como el dar a conocer los resultados de encuestas que no nos eran favorables y que exhibían una gran diferencia de apoyo en relación con Lagos. En esto tuve plena responsabilidad, pues consideraba que dicho proceder constituía un error garrafal.

En su reemplazo asumió Pedro Buttazzoni, mientras Pedro Goic se hizo cargo de la parte operativa de la campaña. Se conformaron diversos equipos, tales como el comité político, el comité de programa, diseño publicitario y el comité de finanzas, entre otros, y el trabajo de campaña se estructuró, fundamentalmente, en base a la organización territorial del partido

Era una campaña complicada, ya que debíamos encontrar una manera de diferenciarnos con Ricardo Lagos. En general, creo que ambos fuimos bastante cuidadosos e intentamos evitar los golpes lo más posible.

Durante todo este proceso, tuve la clara sensación de que mi candidatura no contaba con el apoyo entusiasta de todos los dirigentes del partido, en parte, debido a cómo se había resuelto mi proclamación. Si bien esta había sido unánime, era puesta en duda por algunos. En ese sentido, la discusión interna nunca amainó, tanto que nuestras propias encuestas mostraban que un alto porcentaje de electores proclives al partido tendían a inclinarse por Ricardo Lagos.

Por otra parte, percibía cierta ausencia de parte de muchos militantes que ocupaban entonces cargos en el gobierno. Había mucha formalidad de apoyo,

pero claramente no había entusiasmo ni mística, salvo en las estructuras de base partidaria donde recaía el gran peso del trabajo electoral. Como bien lo observara el periodista y comentarista político Germán Gamonal en plena campaña: “La Democracia Cristiana ‘se puso las pilas’ en las últimas semanas y lucha con ahínco por ganar las primarias, cosa que sería sencillo si toda la DC trabajara con el esfuerzo y empuje con que lo hace el candidato presidencial Andrés Zaldívar”¹²⁴.

Mi diagnóstico es que fueron tres los elementos que más nos jugaron en contra como Democracia Cristiana: primero, haber mantenido cierta sensación, durante toda la campaña, de que éramos los perdedores; segundo, la escasez de recursos, y tercero, el abandono y falta de apoyo que percibí por parte de ciertos dirigentes del partido y autoridades de gobierno, quienes parecían poco convencidos respecto a nuestras posibilidades.

Mi candidatura, además, pagó, en parte, el precio por el desgaste del gobierno de Frei, que estaba en una situación compleja, a raíz de la Crisis Asiática y de la polémica surgida tras la detención de Pinochet en Londres. El gobierno intentaba traerlo de vuelta a Chile, lo que enfurecía a quienes no creían que acá se lo iba a juzgar. También, me imagino, nos perjudicó el rol que tuve que cumplir como presidente del Senado en el mismo escenario; no faltó quien lo mal interpretara, argumentando algún tipo de complicidad para atraer el voto militar.

Tuve un momento de reflexión, junto con mi equipo más cercano, ante la realidad que afrontábamos, y no oculto que, en algún momento, pensé en tirar la toalla. Pero producto de mi compromiso, y para no generar más pesimismo entre mi propia gente, decidí guardar silencio y afrontar la misión hasta el final. En democracia, los triunfos y las derrotas son parte de la esencia de la labor política.

El 30 de mayo de 1999, Ricardo Lagos ganó las primarias de la Concertación con el 71,3% de los votos, contra el 28,7% obtenido por mí. Fue una derrota dura, por un abultado margen, mayor de lo que pensé que podía darse. Sin embargo, esa misma noche fui a la sede del partido y asumí la responsabilidad, sin rehuirla o acusar de traición a terceros, omitiendo descalificaciones, anuncios de alejamiento o desafección. Por el contrario, convoqué a nuestros camaradas y simpatizantes a apoyar y plegarse activamente a la campaña de Lagos desde ese mismo momento.

Como bien expresara la periodista Mónica González en esos días:

Si difícil es asumir la derrota, más aún lo es en estos tiempos en los que todo invita al éxito. De allí que lo más extraño sea encontrar políticos capaces de tragarse el encono y entender que en democracia los triunfos y las derrotas son parte de la esencia de esa pasión y de la misión del servicio público. Y la tarde del 30 de mayo, cuando Andrés Zaldívar supo que había sido derrotado por Ricardo Lagos y por un abultado margen, dio un ejemplo de comportamiento humano y democrático al asumir frente a todos el resultado de las primarias, invitando a los demócratacristianos a aceptar que, por primera vez, en esta transición no será uno de los suyos el hombre que luchará por el sillón en La Moneda¹²⁵.

Así como en 1989 fui yo quien triunfó en las parlamentarias y Ricardo perdió su cupo, esta vez él se alzaba como ganador. Nuestra coalición contaba con un candidato sólido y de peso. En ese momento lo importante era que prevaleciera el bien general y que la candidatura de la Concertación resultara ganadora. Teníamos un gran desafío por delante: no estaba seguro si Chile estaba preparado aún para una candidatura de tipo socialista.

La campaña presidencial fue intensa y me comprometí cien por ciento. Apoyé desde mi rol como senador por Santiago Poniente, y también recorriendo el país. El día de la elección, el 12 de diciembre, estuve junto a Ricardo Lagos en el Hotel Carrera, esperando los cómputos. Se mostró muy nervioso cuando las cifras empezaron a darle el triunfo —aunque no por mucho— a Joaquín Lavín. Esa noche, luego de conocerse las dos primeras mayorías relativas (Lagos con 47,95% y Lavín con 47,51%), y cuando ya era un hecho la segunda vuelta, salió a hablar ante los presentes y, con mucha prestancia política, afirmó: “Esta noche he escuchado a la gente...”.

De alguna manera, reconocía que su campaña no había calado en el electorado, un gesto que me pareció oportuno para el momento. Durante la campaña, había hablado más desde la cima y no abordando los verdaderos problemas que la ciudadanía requería fueran considerados.

Durante la segunda vuelta, Lagos hizo un buen trabajo, asumiendo el desafío que ello implicaba. Nombró jefa de campaña a Soledad Alvear, dirigente destacada

de la Democracia Cristiana, y con esto hizo un gesto por la unidad en la coalición. Logró así recuperar esos votos que nos correspondían y que habían migrado hacia Lavín, seguramente a raíz del enfrentamiento electoral entre Ricardo y yo durante las primarias.

Tras su triunfo, el 16 de enero de 2000, durante la ceremonia de transmisión de mando, me correspondió como presidente del Senado ponerle la banda presidencial, algo muy simbólico, puesto que habíamos sido contendores. En ese momento, le hice una broma: “¿Qué pasaría si no te la entrego?”, le murmuré, y él se rio.

La Democracia Cristiana tuvo una presencia gravitante durante en el mandato de Ricardo Lagos, lo que se reflejó en la propia conformación del equipo de gobierno. Soledad Alvear fue ministra de Relaciones Exteriores —ella, a su vez, estaba casada con Gutenberg Martínez, quien, entre 1993 y 1994, asumió como presidente del partido, permitiendo aún más coordinación con el gobierno— y Mariana Aylwin fue ministra de Educación. Hubo también varios militantes que lideraron carteras, tales como José de Gregorio, Mario Fernández, Pedro García, Francisco Huenchumilla, Claudio Huepe, Claudio Orrego Larraín, Yasna Provoste, Jaime Ravinet, y Jorge Rodríguez Grossi, por nombrar solo algunos.

XIV

UN NUEVO CICLO POLÍTICO:

ESCÁNDALOS, SENSACIONALISMO MEDIÁTICO Y UNA IMPUTACIÓN INJUSTA

1. Los políticos en la mira

Una vez que asumió Ricardo Lagos la Presidencia de la República, el mundo empresarial y la derecha entraron en pánico, argumentando que el país no iba a crecer, que viviríamos un retroceso. Los empresarios creían que se trataría de un gobierno cargado a un socialismo como el de ataño, pero no pudieron estar más equivocados. Lagos nunca tuvo una actitud condescendiente o de entrega hacia la derecha; por el contrario, al igual que Aylwin y Frei, siguió insistiendo en que se hiciera justicia por los abusos en materia de derechos humanos, pero el suyo fue un gobierno que se la jugó por el desarrollo económico sostenido y la profundización de los avances en infraestructura. Logró mantener abierto el diálogo, a la vez que mostró una indudable capacidad de gobernabilidad, siguiendo la línea de los gobiernos de la Concertación hasta ese momento. Incluso consiguió la introducción de importantes reformas constitucionales.

Con Nicolás Eyzaguirre como ministro de Hacienda, se siguió avanzado en la línea de la construcción de una economía social de mercado, a la vez que se continuó abriendo la economía chilena al exterior. Firmamos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, además de otros acuerdos con Corea y Asia que permitieron abrir un camino para los gobiernos posteriores. Asimismo, Chile se incorporó al Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (conocido por su sigla en inglés APEC) y mantuvimos una fluida relación con Europa y Estados Unidos.

Hay que destacar, también, lo ocurrido en el contexto de la guerra de Iraq durante esos años. Como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Chile sufrió grandes presiones de parte de las principales potencias. El propio Lagos me relató sus conversaciones con Tony Blair, Primer Ministro del Reino Unido, quien intentó convencerlo por todos los medios para que votáramos a favor de la intervención estadounidense en Irak. Pero el mandatario chileno se negó, solicitando para ello el respaldo de todos los sectores políticos del país, y le dijo “no” al Presidente George Bush. Fue una decisión acertada, que nos dio independencia y solidez ante la comunidad internacional.

En materia de infraestructura, se construyeron numerosas autopistas que hoy

conectan buena parte de la Región Metropolitana y el país, gracias al proceso de concesiones iniciado por Aylwin, pero consolidado por Lagos, tras su vasta experiencia como ex ministro de Obras Públicas.

Por supuesto, también se cometieron errores, algunos de los que aún se siguen pagando con altos costos como, por ejemplo, la creación del Crédito con Aval del Estado (CAE), establecido mediante la Ley N° 20.027, redactada y aprobada en dicho gobierno. Al respecto, parafraseo lo dicho por el entonces ministro de Educación, Sergio Bitar: “No podíamos hacer otra cosa. En circunstancias en que no había posibilidad de expandir las becas, y de que aún no se avanzaba en la concepción del tema de la gratuidad, el CAE fue la única manera que se tuvo para abrir una oportunidad que beneficiara a la gente de menores ingresos”. Ello, hay que reconocerlo, terminó creando una situación de grave endeudamiento que afectó a miles de familias de clase media emergente, las cuales, hasta el día de hoy cargan una pesada mochila, intentando pagar la educación profesional de sus hijos.

Ya entonces estaba claro el conflicto que se estaba produciendo con la desregulación del lucro en la educación universitaria, debido al surgimiento de universidades privadas en el marco de la legislación heredada por el régimen militar. La ley establecía que no podía haber lucro, pero en muchos casos, salvo honrosas excepciones, dicho principio se vulneraba. En la práctica, los verdaderos dueños de las casas de estudios obtenían importantes utilidades mediante inmobiliarias que les pertenecían a través de las cuales arrendaban edificios a corporaciones sin fines de lucro, las que aparecían como titulares de las universidades. Hicimos un esfuerzo por aumentar el poder regulador del Estado en esa materia, de forma de corregir los abusos tan propios de un mercado “cruel” —como el propio Patricio Aylwin lo definiera alguna vez—, pero nuestra capacidad legislativa como parlamentarios se veía muy disminuida frente a la oposición de la derecha que, además, tenía mayoría en el Senado o jugaba con la figura de los quóruns calificados. Así sucedió, por ejemplo, cuando quisimos establecer el sistema de acreditación de calidad obligatoria de la educación superior. La derecha impuso que esta solo fuera voluntaria.

Pero la mayor crisis que nos tocó enfrentar durante este gobierno fue el polémico caso denominado MOP-Gate, un episodio que puso en jaque tanto al Ejecutivo como al Poder Legislativo, y que estalló el año 2000. El origen del problema venía arrastrándose desde hacía varias décadas. En efecto, dado que antaño los sueldos de los ministros, subsecretarios y jefes de servicios públicos solían ser

muy bajos, se les suplementaban sus ingresos con participación en directorios de las empresas del Estado u otras formas de pago, por cierto, no autorizadas. Desconozco qué fue lo que se hizo al respecto durante los años de dictadura, un período de absoluta falta de control, pero al recuperarse la democracia los gobiernos tuvieron que buscar una fórmula para resolver el problema.

Lo que hizo detonar el escándalo fueron las declaraciones del biministro de Obras Públicas y de Transporte y Comunicaciones, Carlos Cruz, quien reconoció que, a fines de los años 90, en el Ministerio de Obras Públicas se utilizaba un sistema en el que se triangulaban dineros públicos girados a privados para financiar, de manera indirecta, las remuneraciones de algunos funcionarios a su cargo. En ese entonces, Cruz era jefe de la Unidad de Concesiones de Obras Públicas. La fórmula hacía que se abultaran las propuestas a licitaciones de privados para, más tarde, una vez aprobadas, redestinar el saldo extra a remuneraciones para profesionales en los cargos directivos. Esta era la única forma de poder mantener y contar con profesionales de alto nivel, y evitar que fueran capturados por el sector privado.

Se inició entonces una investigación, a cargo de la ministra de la Corte de Apelaciones Gloria Ana Chevesich, quien indagó en el detalle de estas operaciones, las que obviamente eran inaceptables. Pero el escándalo fue utilizado también políticamente, llegando incluso a cuestionarse el origen del financiamiento de la campaña presidencial del propio Ricardo Lagos. Fue una situación explosiva que, por supuesto, la derecha se encargó de llevar al extremo, de manera de ponernos en jaque, intentando provocar la caída de la Concertación y una alternancia en el poder.

Por esos días, yo estaba de vacaciones cuando recibí una llamada de un senador de Renovación Nacional, cuyo nombre no voy a dar, pero que era de mi absoluta confianza.

—Andrés, ¿estás preparado? —dijo al teléfono.

—¿Preparado para qué? —pregunté, extrañado.

—Con todo esto que está pasando... Hay gente de mi sector que piensa sacar a Ricardo Lagos, acusarlo constitucionalmente y removerlo de la Presidencia. Te lo informo para que tú, como presidente del Senado, estés prevenido —me explicó.

Me quedé para adentro.

—Discúlpame, te agradezco la confianza, pero te advierto que, terminada esta conversación, se lo haré saber de inmediato al Presidente Lagos —respondí.

Así lo hice. Me comuniqué con el ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien tras agradecerme el gesto, me dijo que ya estaban al tanto de lo que algunos personeros de derecha estaban tramando.

De esta polémica, surgió la discusión sobre la regulación del financiamiento y los aportes a las campañas electorales de los partidos políticos. Posteriormente, se logró un acuerdo con los parlamentarios de la UDI para legislar sobre la materia, el cual se denominó “Pacto Longueira-Insulza”, lográndose impulsar la llamada Agenda Pro Transparencia del gobierno. Esta venía a cerrar simbólicamente este conflictivo período que había reventado la agenda noticiosa.

El caso MOP-Gate dio inicio a un proceso de deterioro de la imagen de los parlamentarios y políticos ante la opinión pública chilena, que siguió profundizándose a raíz del destape de numerosos escándalos posteriores, ya no solo económicos, sino que también de tipo ético y moral. Uno de los ejemplos más gráficos: el famoso Caso Spiniak, en 2003, en que se denunciaba una supuesta red de pedofilia liderada por el empresario Claudio Spiniak.

La diputada de RN Pía Guzmán fue la primera en insinuar que había parlamentarios involucrados en el asunto. En mi calidad de titular del Senado, me reuní con Isabel Allende, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, para hacerle ver lo importante que era que nos hiciéramos cargo de estas denuncias. Era un golpe muy duro contra el prestigio de la institución. Decidimos citar a la diputada Guzmán, quien se deshizo en vagas explicaciones, argumentando que lo denunciado se sustentaba en rumores que había escuchado, pero, en el fondo, no pudo decir nada concreto. Pese a lo irresponsable de sus dichos, la parlamentaria nunca se desdijo.

Poco después, por la prensa, aparecieron involucrados los senadores de la UDI Carlos Bombal y Jovino Novoa. Luego emergió el testimonio de Gema Bueno, apoyada por el sacerdote José Artiagoitía, asegurando haber sido testigo de la participación de los parlamentarios en estos supuestos encuentros. Artiagoitía me visitó en mi oficina en San Martín. En esa reunión, en la que me acompañó la presidenta de la Cámara, nos habló de Gema Bueno y se refirió a las cosas que

ella decía. Yo tenía mis dudas. “¿Por qué usted cree que esto es verdad?”, le pregunté. Respondió que le había mostrado unas fotografías de los senadores a la joven y que ella había reconocido a Bombal y a Novoa. “¿Usted está seguro de que ella los conoce? ¿Le consta?”, le insistí. No supo qué decirme.

Posteriormente, hablé personalmente con Jovino Novoa y con Carlos Bombal. Ambos me aseguraron que no tenían nada que ver en el asunto. Hay que reconocer que los detalles que aparecían en los testimonios de Bueno eran escabrosos y desconcertantes, pero les creí a ambos, tanto que incluso intervine en el Senado y expresé mi parecer frente a los hechos.

Después de varios meses, por fin la verdad salió a la luz, y aunque Claudio Spiniak fue condenado, Gema Bueno reconoció haber mentido sobre Bombal y Novoa. Pese a ello, el Senado quedó manchado con esta experiencia. Esa fue la primera vez que percibí una clara animadversión de la ciudadanía hacia el Parlamento. Se trató de un proceso largo y escandaloso, lleno de morbo y cubierto permanentemente por la prensa, que causó un daño irreparable. Las dudas se instalaron después de eso.

Desde entonces, esta tensión ha ido en aumento, y hoy estamos lidiando con la situación actual: un Parlamento que es una de las instituciones menos creíbles del espectro público, lo que se refleja en la percepción que la gente tiene respecto a la política y sus protagonistas. Los escándalos por el tema del financiamiento de campañas han servido para echarle leña al fuego. Esto ha generado una crisis de confianza absoluta. Los chilenos ya no confían en sus autoridades.

2. Caso Lavanderos: Un amigo en el ojo del huracán

En enero de 2005, el programa de televisión “Contacto” de Canal 13 hizo pública una denuncia en contra de Jorge Lavandero, entonces senador por la Araucanía Sur, por supuestos abusos sexuales en contra de menores. Ello concluyó, posteriormente, con un reportaje del mismo canal, tras el cual se inició una investigación judicial de oficio. En medio de todo esto, el Tribunal Supremo del partido suspendió su militancia, Lavandero fue desaforado y se entabló una querrela en su contra de la que se hizo parte el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Para mí, estos hechos fueron en extremo dolorosos; con Jorge nos unía una gran amistad y habíamos luchado, codo a codo, contra la dictadura. Siempre lo consideré un político excepcional, valiente y consecuente. Como candidato, obtenía normalmente las primeras mayorías. La gente lo seguía por ser un líder en extremo carismático. Era audaz, inteligente y siempre estaba dispuesto a aportar.

Él siempre se declaró inocente. Un día me llamó para contarme que le estaban sugiriendo aceptar un juicio abreviado a cambio de una condena menor. Le aconsejé que continuara con el juicio hasta el final, pero al parecer sus abogados lo convencieron de que era conveniente aceptar la medida. Creo que lo decidió así, pues no quería exponerse más; el acoso que recibió de los medios de comunicación fue implacable. “Andrés. Ya no resisto más”, me dijo.

En junio de 2005, fue condenado a cinco años de presidio en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. Lo visité varias veces ahí. Con Inés le llevábamos dulce de castaña, así como libros para una biblioteca que comenzó a montar para los presos de dicho recinto. Asimismo, con un grupo de senadores, le regalamos una bicicleta estática para que hiciera ejercicio. Mi postura siempre fue que, si Jorge realmente había tenido responsabilidad en los hechos que se le imputaban, yo no iba a defenderlo, pero tampoco iba a ser su verdugo. Creo que uno siempre debe ser solidario, lo que no significa justificar lo sucedido. No obstante, yo creía en su inocencia.

Después de tres años, le concedieron libertad condicional por buena conducta. Durante todo ese tiempo, Jorge siguió alegando inocencia, incluso afirmando que las acusaciones habían tenido que ver con una pasada de cuentas por el tema del royalty minero. Creo que su caso fue utilizado por la justicia para imponer una pena ejemplarizadora a un funcionario público en una situación de esa naturaleza.

Como políticos, es fundamental cuidar nuestra compostura y decisiones, tanto en términos públicos como privados, y dar el ejemplo con nuestra conducta al resto de la comunidad. La corrección, el sentido ético, la honestidad y la coherencia son valores inalienables de todo servidor público. Siempre estaremos en la mira de la opinión pública, ello es parte de nuestro oficio, lo que significa que debemos ser extremadamente cuidadosos en no traicionar la honra y la confianza puesta por la ciudadanía al elegirnos. Hoy estamos más expuestos que nunca. Basta que alguien con un celular saque una fotografía o publique una fake new en el momento exacto, y no hay vuelta atrás. Tu honra y prestigio quedarán manchados para siempre.

Al respecto, nunca olvido una conversación que tuve con Eduardo Frei Montalva, cuando recién se me había nombrado ministro de Hacienda. Me dijo: “Mire, Andrés. Usted que está entrando en la arena política tiene que saber que, en esto, uno debe tener cuero de elefante, pues siempre van a estar tratando de pellizcarlo. A veces con razón, otras no. Pero tenga presente que, desde el momento en que uno ingresa al mundo público, se ubica en una vitrina”.

En esta nueva realidad, lo que debe primar es la transparencia. Debemos aumentar las exigencias y hacer aún más drásticas las sanciones para aquellos que no cumplan la normativa. Tal como lo expresara el biólogo y filósofo Humberto Maturana: “La democracia no es un sistema político. Es un modo escogido de convivir en la honestidad, el mutuo respeto, la ética y la colaboración. Pero escogido, porque se quiere convivir”¹²⁶.

3. Reformas constitucionales claves y las zancadillas de la derecha

En una entrevista concedida a la revista Hoy, en marzo de 1995, manifesté: “No estoy de acuerdo en la forma como se han planteado las reformas constitucionales, no estoy de acuerdo con el sistema de paquetes, porque con ello se creó la sensación de que podíamos atraer a la oposición a la aprobación de alguna reforma y creo que no nos van a dar ninguna. Soy partidario, aun cuando se pierdan, de plantear el total de las reformas que dijimos que había que hacerle a esta Constitución”. Luego agregué: “Soy un convencido de que existen en la Constitución cinco o seis enclaves que hacen que la transición siempre esté inconclusa, y que siempre viva de prestado de la buena voluntad de la derecha. El punto neurálgico para tratar de avanzar y terminar algún día la transición es hacer la reforma al sistema electoral, porque con este sistema nunca vamos a lograr tener los quórumos necesarios para modificar la Constitución, si no contamos con la voluntad de quienes la construyeron y que, además, les gusta. Ellos saben que, mediante el sistema binominal, con solo un tercio de los votos, van a tener siempre el 50%, y como para modificar la Constitución necesitamos dos tercios, cuatro quintos, cuatro séptimos, es imposible que logremos reformarla en estos términos”. Y finalicé: “Y de ahí vienen los otros temas: la inamovilidad de los comandantes en jefe, la composición del Consejo de Seguridad, los senadores institucionales y la composición del Tribunal Constitucional”¹²⁷. Ese era mi diagnóstico respecto a los principales desafíos constitucionales que enfrentábamos en esos años, ya avanzada la transición.

Estos eran problemas que venían arrastrándose desde el gobierno de Aylwin, pero que, en ningún momento, la oposición de derecha y los senadores designados dieron lugar a afrontarlo. No olvidemos cuán difícil fue la negociación el año 1989, cuando logramos las reformas mínimas, a conciencia de que era absolutamente imprescindible afrontirlas a la brevedad. Con Ricardo Lagos en el gobierno, por fin, se abrió la posibilidad de hacer un cambio sustancial.

El Presidente me pidió que liderara las negociaciones con las bancadas de senadores de la oposición y designados para conseguir las mayorías necesarias.

Era desesperante: cada vez que intentábamos hacer un cambio, había que pedirle permiso a la derecha. Cuando negociamos la deuda subordinada de los bancos, hubo un lobby brutal por impedir el tema. Lo mismo sucedió durante el gobierno de Aylwin cuando quisimos aumentar el impuesto a la renta. Se desencadenaba toda una suerte de artimañas y acciones por detrás, para evitar las modificaciones que a ellos les parecían inadecuadas. Hay que decirlo con todas sus letras: la derecha siempre impidió que avanzáramos en los cambios que debían introducirse, incluso después de que Pinochet abandonó el Parlamento.

Años después, en el 2011, con Camilo Escalona y Ricardo Lagos Weber, y varios otros senadores, presentamos un proyecto de ley para crear una comisión bicameral, compuesta por diez senadores y diez diputados, que se abocara a proponer un nuevo texto constitucional, estableciendo para ello abrir un mecanismo de participación ciudadana. Con ello se buscaba dejar atrás la vilipendiada —y una y otra vez modificada— Constitución del 80. Por supuesto, la derecha no accedió y allí quedó el mencionado proyecto durmiendo el sueño de los justos. De haberse aprobado, se habría incluso anticipado a la historia reciente.

En 2003, con Lagos a la cabeza del país, se retomaron las negociaciones para modificar la Carta Magna. En este proceso, jugó un importante rol el senador Hernán Larraín, quien era miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que yo también integraba.

Las reformas realizadas entre los años 2003 y 2005 sirvieron para eliminar algunos de estos nocivos enclaves para la estabilidad política de nuestro país. Los más importantes cambios fueron el término de la tutela militar a la que estaba sujeta nuestra democracia y la supeditación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Para ello, se debió eliminar el famoso Consejo de Seguridad y la inamovilidad de los comandantes en jefes, reponiendo su nombramiento y remoción por resolución del Presidente de la República. Se suprimieron los senadores vitalicios y designados, se reformularon las normas sobre estados de emergencia y excepción, así como también se hicieron enmiendas en relación con la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en materia de competencia constitucional, radicando en este último la jurisdicción constitucional. Incluso en el nuevo texto de la Constitución aprobada se eliminó la firma de Pinochet y se reemplazó por la de Ricardo Lagos.

Con estas reformas, se cumplió una tarea fundamental, pese a que debiésemos

haber ido aún más lejos. Por ejemplo, faltó eliminar la facultad revisora del Tribunal Constitucional durante el proceso de tramitación de los proyectos de ley. Quedó también pendiente la sustitución del sistema binominal, aunque sí conseguimos sacarlo de la Constitución y traspasarlo a la ley orgánica.

Debo admitirlo. Cuando la derecha nos negó el respaldo para eliminar el sistema electoral binominal, le propuse al Presidente Lagos que no suprimiéramos la institución de los senadores designados y vitalicios, considerando que un año más tarde, el 2006, quien fuere elegido Presidente de la República tendría que designar parte importante de esos senadores. En mis planes, a esas alturas tendríamos a Lagos y a Frei como senadores vitalicios, y con ello la mayoría suficiente para modificar el sistema electoral binominal, piedra de tope que siempre impedía a nuestros gobiernos superar los quórums calificados. Ricardo Lagos no estuvo de acuerdo, y tenía toda la razón; debíamos ser coherentes con nuestra posición. Habíamos sostenido que ese sistema electoral era injusto y arbitrario, y que hacía que la gobernabilidad del país fuera siempre afectada por la falta de representatividad de las mayorías. Mi propuesta, además, podría haber sido interpretada como oportunista y, por supuesto, no insistí en ello.

La Constitución de 1980 ha sido cuestionada permanentemente, desde su gestación hasta el día de hoy. Personalmente, sufrí el exilio, pues me negué a reconocer su legitimidad, denunciándola por haber sido impuesta mediante un plebiscito fraudulento y tramposo. Durante 31 años, se la ha parchado, introduciéndole reformas en la medida de lo posible, siempre y cuando contáramos con los votos de la derecha y después de vencer muchas dificultades. En el último tiempo, el país ha debido afrontar un proceso de movilización social como nunca antes visto, incluida la violencia de algunos sectores extremistas, para por fin abrir el camino a un proceso constituyente que esperamos pueda cristalizar en la elaboración de una Carta Fundamental con origen plenamente democrático. El objetivo último es que resulte un texto que nos represente genuinamente a todas y todos los chilenos.

4. Las leyes más difíciles

En marzo de 2004, concluí mi primer período como presidente del Senado, plazo en el que se aprobaron legislaciones de fundamental trascendencia para el país. Algunas de ellas, en mi opinión, fueron particularmente complejas.

Normalmente, las leyes más difíciles de aprobar son las valóricas. En materia laboral o tributaria, hay maneras de encontrar salidas, incluso consensos, pero nunca es fácil negociar con aquello que interpela nuestro sentido de la ética o la moral. Un desafío importante fue la tramitación de la Ley de Libertad de Culto en 1999, la cual estableció que ninguna persona podía ser discriminada en virtud de sus creencias religiosas. Desde mi cargo, convoqué al cardenal Errázuriz y a los obispos católicos para plantearles la necesidad de legislar sobre esta materia, de manera de darle mayor reconocimiento al mundo evangélico y al resto de los credos religiosos.

En ese entonces, vivíamos en un Chile que se definía predominantemente católico, incluso desde lo institucional, pese a que nuestro Estado se suponía laico. Si bien así lo había establecido la Constitución de 1925, en la práctica, la Iglesia Católica continuaba siendo una de las instituciones más hegemónicas e influyentes del país.

Me tocó lidiar con una actitud bastante dura de parte de algunos miembros de la Iglesia Católica, especialmente del cardenal Jorge Medina, quien, pese a no estar en Chile en ese momento, pues integraba una comisión en El Vaticano, manifestó su desacuerdo con nuestro proceder. A esta oposición se sumaba el hecho de que las otras iglesias, en especial las evangélicas, muchas veces operaban como grupos dispersos, lo que hacía complejo reunirse y llegar a acuerdos representativos. Para facilitar dicho proceso, se constituyó un consejo unitario denominado Coordinadora de Unidades Pastorales Evangélicas de Chile, en el que participaban pastores y obispos de dichas iglesias, destacando la presencia del obispo Francisco Anabalón, presidente de la Iglesia Pentecostal Apostólica desde 1982. Como parte de estos encuentros, nos reunimos varias veces con el obispo Anabalón y el cardenal Errázuriz. Este último, si bien se manifestaba abierto a buscar un entendimiento sobre este delicado tema, también

era crítico respecto de la nueva legislación propuesta. Se vivieron momentos muy tensos durante esas reuniones, pero finalmente se logró aprobar aquella ley, mediante la cual se estableció la libertad de culto en Chile.

Una situación similar se vivió el año 2004, cuando se planteó la idea de legislar sobre el divorcio como mecanismo para poner término al matrimonio civil, fundado en diversas causales que justificaban reconocer los quiebres matrimoniales y permitir que las personas pudieran rehacer sus vidas.

En Chile, hacía muchos años que, ante crisis matrimoniales, las partes recurrían a subterfugios para lograr la nulidad del matrimonio civil, fundamentando, mediante el testimonio de testigos falsos, que el oficial del Registro Civil ante el cual se habían casado no habría correspondido a su domicilio. Los tribunales aceptaban esta forma de proceder, sabiendo de antemano que todo era una farsa, y es que no había otra forma de resolver una realidad que se escondía con hipocresía por dogmatismo religioso. Otras personas, sencillamente, optaban por separarse físicamente e iniciaban, de hecho, otra relación de pareja.

Siendo católico, me parecía necesario reconocer el pluralismo valórico y admitir que en Chile no todos somos creyentes o adherimos al mismo credo y, por ende, no podemos imponer a otros lo que uno cree. Si soy católico no tengo la obligación de acceder al divorcio y, si alguien lo hace, debemos reconocer su derecho y respetarlo. Hubo mucha presión desde la jerarquía de la Iglesia Católica para evitar que se legislara sobre la materia, especialmente desde el sector más conservador. Recuerdo que el obispo de San Bernardo, Orozimbo Fuenzalida, me hizo llegar una carta amenazándome con la excomunión. Sin embargo, me mantuve firme y voté a favor de la aprobación de la Ley de Divorcio, la que permitió reconocer y subsanar una realidad insoslayable que afectaba a miles de personas y familias en nuestro país.

Mi postura fue similar, años después, cuando en 2010 se legisló sobre la píldora del día después. En ese caso, llegué personalmente a la convicción, tras escuchar a diversos especialistas, de que este no era un medicamento abortivo, por lo que no se ponía término a la vida. Por lo demás, siempre fui partidario de contar con una sólida política estatal de planificación familiar que resguardara el buen desarrollo de la familia chilena. Apoyé la idea de legislar, más allá de mi convicción. En estos temas valóricos, uno no puede pretender imponer su visión y principios, desechando el hecho de que otros pueden pensar o mantener distintas opciones. Creo que lo que debe regir en decisiones de esta naturaleza

es, ante todo, el bien común.

5. Ley de Pesca: Mi verdad y mi compromiso

Pero, sin duda, la ley que me generó la situación más compleja en mi historia parlamentaria, durante ese primer período como presidente del Senado, fue la llamada polémica Ley Corta de Pesca en 2002. Estábamos empezando a legislar cuando, en noviembre de ese año, en el programa “El termómetro”, de Chilevisión, el economista y entonces director de la Fundación Terram, Marcel Claude, apareció denunciando a mi hermano Adolfo y a mí por supuestos conflictos de interés en la tramitación de la normativa. Ambos, junto con otros familiares, éramos accionistas de una ínfima cantidad de acciones (el 0,01%) en Eperva S.A., una sociedad de inversiones centrada en la industria pesquera. En sus denuncias, Claude apuntaba sus dardos contra mi persona, a causa de la relación personal con Anacleto Angelini.

Pido excusas de antemano al lector por extenderme en este punto... Sin embargo, es mi deber hacerlo, pues fui víctima de una campaña artera que no solo puso en duda mi honorabilidad, sino que, además, manchó mi trayectoria política por largo tiempo, transformándose en un tema recurrente para la opinión pública y en una suerte de “posverdad”. Aun cuando son muy pocos, incluso hoy hay quienes vuelven sobre el tema preguntándome, sin fundamento alguno, quizás por haberlo escuchado o leído en alguna parte: “¿Y la Ley de Pesca?”. “¿Es dueño de una empresa pesquera?”. “¿Qué explicación nos puede dar?... Mi respuesta ha sido siempre tajante: no solo no he sido ni soy dueño de ninguna empresa pesquera, sino que jamás he sido propietario ni de un bote a remos. Algunos deben pensar que he sido un ladrón o un sinvergüenza, o que me he enriquecido ilícitamente. Gracias a Dios, he vivido una vida transparente y limpia; mi propia historia y trayectoria política dan cuenta de ello. Es todo mi aval y confío que pondrá las cosas en su lugar.

Mi relación con Anacleto Angelini se remonta a comienzos de los años 60. Lo conocí, debido a que mi hermano Felipe, recién titulado como ingeniero comercial, ingresó a trabajar en temas contables en algunas de sus empresas. Recuerdo que cuando se produjo la crisis pesquera en el norte, a fines de los años 60, Angelini incursionó en esta industria con gran éxito, fundando

posteriormente la empresa Eperva. Felipe formó parte del equipo inicial, asumiendo el cargo de gerente, en el que se desempeñó por largos años con grandes aciertos. Esto generó una relación de Anacleto con la familia. Era un italiano sencillo y agradable, al que nunca se le fueron los humos a la cabeza, a pesar de su éxito. A diferencia de otros empresarios chilenos, jamás se sintió interpretado por la dictadura y tampoco participó en las privatizaciones. Él mismo me dijo: “Nunca voy a comprar un banco que estén privatizando”. Con los años, como es de público conocimiento, se trasformó en un gran empresario, destacándose por su notable aporte al desarrollo industrial del país. En 1994, en reconocimiento a su labor, el Parlamento le otorgó la nacionalidad chilena por gracia, con una votación muy amplia a su favor.

Nunca me he avergonzado de la relación personal que tuve con él; al contrario, la valoro y estimo, pues siempre fue de mutuo respeto. Jamás me hizo una petición o insinuación indebida, ni ejerció presión alguna durante los años en que me desempeñé como senador. Tampoco puedo aceptar la insinuación de que mi hermano Felipe, por el importante cargo que desempeñaba en Eperva, haya intentado influenciarme o condicionar mi actuación legislativa a su favor o de acuerdo a sus personales intereses, porque eso jamás ocurrió. Felipe era un hombre demasiado serio e íntegro, y nunca se habría atrevido a solicitarme algo que pudiese comprometer mi labor pública o favorecer su propio quehacer. Fue un hombre muy respetado en su ámbito, así como un actor de primer nivel dentro del equipo que acompañó a Angelini. Jamás tuvo un conflicto laboral con sus trabajadores y, de hecho, cuando la empresa pesquera fue amenazada de expropiación, durante los años 70, fueron los propios trabajadores quienes la defendieron, impidiendo su toma por la autoridad de turno.

Como parte de sus imputaciones, Marcel Claude denunció que, por motivos pecuniarios y de beneficio personal y de mi familia, yo habría estado abusando de mi posición como senador, al igual que mi hermano Adolfo, en el proceso de tramitación de la normativa. Fue una acusación injusta, lo dije en la discusión del proyecto. Tras inhabilitarme voluntariamente en la votación, el proyecto fue aprobado por una importante mayoría.

Desde mis pares, recibí gestos de apoyo, al igual que desde mi partido. El Presidente Lagos me llamó para darme su respaldo, mientras varios parlamentarios cerraron filas. El ministro Insulza declaró ante la prensa: “Andrés Zaldívar tiene más de 40 años en la vida política. Todo el mundo sabe las cosas que ha hecho, todo el mundo sabe cómo vive, todo el mundo sabe el testimonio

y aporte que ha dado a la democracia chilena”. A esto agregó: “El ataque a Zaldívar nos afecta a todos, porque no solo se está atacando a las personas, sino que también a las instituciones”¹²⁸.

Pero el tema no quedó ahí, resurgiendo una década más tarde. En 2012, con la tramitación de una nueva Ley de Pesca —conocida como “Ley Longueira”—, se me volvió a acusar de conflictos de interés, increpándoseme de que no estaba en condiciones de votar. En esa oportunidad, sin embargo, no cedí y no me inhabilité. El proyecto ni siquiera era mío, y me parecía importante manifestarme al respecto. Participé en la votación general, y después me pronuncié en cada materia que me parecía importante —fomenté la idea de crear un Indap pesquero, de establecer un sistema exclusivo para la primera milla y para las cinco millas, y también apoyé la idea de implementar un control satelital para evitar la piratería—, protegiendo ante todo la verdadera pesca artesanal: la de los pequeños pescadores, y no la de aquellos que se hacían pasar como tales.

Como ya he mencionado, este tema me significó un ataque reiterado y un daño personal a mi vida pública y privada. Indudablemente, me jugó en contra en mi candidatura por la región del Maule en 2009. En una visita a Constitución, me invitaron a un encuentro con dirigentes pescadores artesanales, e ingresé al lugar bajo una lluvia de gritos e improperios. A continuación, hice una exposición sobre cuál había sido mi verdadera relación con la industria pesquera y también sobre la visión que tenía sobre el tema. Cuando terminé, se me acercó Agustín Díaz, uno de los dirigentes que se habían mostrado más críticos, y me dijo: “Tenía una versión equivocada de los hechos. Quisiera que trabajáramos juntos”. Terminó convirtiéndose en uno de mis colaboradores más cercanos en la zona.

Quiero insistir. Nunca fui dueño de ninguna empresa pesquera, ni tuve botes, arpones ni redes; tal vez sí una caña de pescar y una vieja lancha que ni para eso servía. Tampoco intervine en la Comisión de Pesca del Senado, cuidándome de ni siquiera acercarme a dicha instancia. Nunca hice indicaciones en relación con la pesca industrial, limitándome a opinar sobre la de tipo artesanal; incluso presenté una indicación para evitar la pesca de arrastre en la VII Región. Siempre respaldé todas aquellas normativas vinculadas a apoyar la institucionalidad pesquera y puedo decir que voté en conciencia. Si se revisan en las actas del Senado mis intervenciones en dicha materia, podrá constatarse que mantuve una absoluta imparcialidad al respecto. Por su parte, mi hermano Felipe, al igual que su hijo, fueron importantes colaboradores de Anacleto Angelini en su gestión empresarial, cumpliendo su tarea leal y honradamente, y

nunca osaron profitar del vínculo familiar que nos unía.

Con el tiempo, Claude terminó hundiéndose solo, mostrándose como un personaje complejo, tremendamente obsesivo y conflictivo que, ante todo y a cualquier costo, lo que ha buscado es figurar y estar en primera plana. Donde ha puesto el pie, ha salido con problemas.

6. “Adiós chico de mi barrio”:

El fin de un ciclo en Santiago Poniente

El 11 de diciembre de 2005, junto con la elección presidencial en la que corrían Michelle Bachelet —primera mujer que postulaba a la Presidencia de la República en Chile— como candidata de la Concertación, Sebastián Piñera por RN, Joaquín Lavín por la UDI y Tomás Hirsch por el Partido Humanista, se llevaron a cabo nuevas elecciones parlamentarias, incluida la circunscripción Santiago Poniente en la Región Metropolitana. Por tercera vez, decidí postular a la elección.

Por la Concertación, íbamos Guido Girardi, del PPD, y el suscrito por la Democracia Cristiana. Corrían también dos candidatos del PC: Eduardo Artés y Gonzalo Rovira. Por la derecha, postuló Jovino Novoa, acompañado, primero, de la RN Carmen Ibáñez, y más tarde, tras bajarse esta, por el independiente RN Roberto Fantuzzi.

Fue una candidatura que tardó en concretarse, en parte porque el partido insistió en intentar negociar los cupos. Se discutió si era más conveniente que yo compitiera por Santiago Oriente, cediendo mi circunscripción a Soledad Alvear, una candidata fuerte que podía, tal vez, asegurar el doblaje en la Poniente. A mí esta idea no me convencía, pues creía haber realizado un buen trabajo senatorial en mi circunscripción; de lo contrario, prefería no postular. No iba a ser candidato por cualquier senaduría solo por salir electo. Finalmente, después de toda esta maraña, se acordó que iría a la reelección.

Sabía que la carrera por Santiago Poniente iba a ser difícil. Así lo anunciaban ya las primeras encuestas, las que constataban un amplio apoyo a Girardi, quien había sido diputado por Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal con mucho respaldo. Este tenía, además, un excelente manejo frente a las cámaras. Se ponía su delantal blanco de médico y llamaba la atención, pues representaba un tema que para la gente era muy sensible: la salud. Desde el primer día, supe que había una brecha importante a su favor, pero estimaba que, si trabajábamos

conjuntamente y hacíamos una buena campaña, teníamos posibilidad de doblar.

La clave era mantener mi votación por sobre el 20%. Ello nos llevó a crear una audaz y creativa campaña en términos publicitarios. Trabajamos con un equipo de publicistas, liderado por José Miguel Arcos, e hicimos algunos focus groups para ver cómo lo abordábamos. De ahí salió la idea de usar como eslogan la frase “Chico de mi barrio”, emulando la canción de la cantautora argentina Tormenta, que causó furor en los años 70 y en el Festival de Viña del Mar. Era una forma de aprovechar una característica física mía que me hacía muy reconocible. Tomamos contacto con Tormenta y ella se mostró entusiasmada, tanto que durante la campaña vino a Chile y se sumó a algunos actos. El jingle fue un éxito, tal como lo esperábamos. Todo el mundo lo cantaba, aunque no faltaban los malintencionados que lo tomaron como mi despedida, por la parte que dice “adiós chico de mi barrio”.

Pero el sistema binominal volvió a pasarnos la cuenta. A dos o tres semanas de las elecciones, aún estábamos a cinco o seis puntos de doblar. No era mucho, pero en esas circunstancias, era una cifra difícil de revertir. El jueves previo a las elecciones, reuní a mi equipo y les informé lo que estaba sucediendo. Yo no era el único. Según las encuestas, se veía que la DC iba a perder al menos dos o tres de sus senadores.

El sábado previo a la elección, estando en mi casa, recibí un llamado de Michelle Bachelet, cuya campaña había apoyado con mucha lealtad. Me preguntó cómo veía el panorama para el día siguiente. No le iba a mentir. Le dije que creía que ella no iba a ganar en primera vuelta.

—Y puede que tenga un riesgo de no ganar en segunda tampoco —agregué.

—¿Por qué?

—Porque la Democracia Cristiana va a quedar muy herida. Va a perder Carmen Frei, va a perder Sergio Páez, voy a perder yo y, quizás, otros más. Hay que ver cómo se afronta eso.

—¿Y cómo se afronta eso? —preguntó.

—Mire, a mí lo que me interesa es que la Concertación siga gobernando. Tanto así, que me he reunido con mi equipo y tengo preparada una declaración que voy a dar a conocer muy temprano mañana por la tarde, apenas se conozcan los

resultados. Voy a hacer un llamado a que reforcemos la Concertación para que, ojalá, ganemos en segunda vuelta —le expliqué.

—Se lo agradezco —respondió ella—. Pero espero que las cosas no salgan como usted cree, que saquemos los dos cupos en la Poniente, y que Carmen y Sergio no queden fuera.

—Es mejor que actuemos con realismo —agregué, y luego cortamos.

Al día siguiente, a eso de las siete de la tarde, el panorama ya estaba claro. Era muy difícil que pudiéramos repuntar, sobre todo porque Fantuzzi se había llevado mucha votación. Di la orden en mi comando de que se convocara a la prensa y salí a reconocer mi derrota, leí mi declaración y pedí a la gente que apoyara a la Concertación y a Michelle Bachelet. Poco después, recibí un mensaje de la candidata. Quería que me fuera directo a su comando.

Al llegar al Hotel San Francisco, Bachelet me pidió que la acompañara a su lado en el estrado, desde el cual saludó a la gente que se agolpaba en la Alameda. Así lo hice. En todas las fotografías aparecimos juntos, entendiendo que así proyectábamos un mensaje de unidad de nuestra coalición para afrontar la votación en la segunda vuelta.

Perdí esas elecciones con el 23,2% de los votos, versus el 35,3% de Girardi y el 20,7% de Novoa. No voy a decir que celebré mi derrota, pero la asumí con tranquilidad, pues reconocía que la decisión de competir había sido mía y a conciencia. Podría haber hecho la “del picado” y haberme ido para mi casa, empezando una nueva etapa, pero decidí mantenerme en mi línea y apoyar la campaña presidencial. Me quedé con la sensación de haber cumplido mi tarea.

Haciendo un balance, y reconociendo mis errores, creo que me apoyé demasiado en la campaña de los diputados, en vez de liderar el asunto y llevarlos a ellos detrás de mí. Además, me hizo mucha falta mi hermano Rodrigo y sus dotes de organizador.

También advertí que un cambio profundo había comenzado a producirse en la forma en que se hacían las campañas. El asunto había empezado a mercantilizarse, a hacerse más “mercenario”, mientras el clientelismo comenzaba a hacer mella en el funcionamiento de los propios partidos. Se estaba perdiendo el valor del voluntariado. Desde fines de los 90, se había tornado una práctica común pagarles a los equipos, borrándose con ello la vieja mística y el

compromiso.

Al día siguiente de la elección, Michelle Bachelet me llamó para pedirme que asumiera como presidente del comité político que coordinaría su campaña para la segunda vuelta. En paralelo, le pidió a Sergio Bitar, quien representaba al otro sector de la Concertación, que nos constituyéramos como dupla. Era un giro insospechado de las circunstancias, sin duda. Se abría así un nuevo capítulo en mi vida política, y también uno en la historia de la Concertación.

XV

CAE EL TELÓN: LAS ESQUIRLAS DEL ÚLTIMO GOBIERNO DE LA
CONCERTACIÓN

1. Un ministro del Interior maniatado

La verdad es que conocía poco a Michelle Bachelet. Su liderazgo político era más bien reciente al interior de la Concertación; no obstante, siempre me pareció una mujer carismática, valiosa y sumamente empática. Había sido candidata a concejala por Las Condes en las elecciones municipales de 1996. El 2000, al asumir Ricardo Lagos la Presidencia de la República, fue nombrada ministra de Salud, cargo que desempeñó hasta el 2002, tras lo cual asumió la cartera de Defensa, siendo la primera mujer de Sudamérica en ocupar tal cargo. Esto constituyó todo un hito simbólico, tratándose de una mujer socialista, de reconocida trayectoria política al interior de su partido, hija de un general asesinado en dictadura, detenida y torturada en Villa Grimaldi y en Cuatro Álamos, tras lo cual debió exiliarse, radicándose en la República Democrática Alemana. Su nombramiento fue una apuesta valiente del gobierno de Lagos, considerando que aún había enclaves y sectores dentro de las Fuerzas Armadas proclives a Pinochet.

Los desafíos que nos planteaba esta segunda vuelta presidencial eran, principalmente, dos. Primero, necesitábamos recuperar a los votantes que, tras la renuncia de Soledad Alvear a las primarias presidenciales, se habían allegado al alero del candidato de la derecha, Sebastián Piñera. En segundo lugar, requeríamos encontrar una manera de consolidar y capitalizar el apoyo del Partido Comunista y de los dirigentes gremiales.

Al día siguiente de haber sido nombrados, con Sergio Bitar, encargados del comité político, nos dejamos caer en las oficinas del comando de Michelle Bachelet, listos para ponernos manos a la obra.

—Bueno, y... ¿dónde podemos instalarnos? —preguntamos.

La gente del comando se miró entre sí, medio extrañada. Dijeron que no había lugar disponible: “¿Por qué no se van a la casa del frente? Ahí hay espacio de sobra...”, nos sugirieron.

—No —respondimos, casi al unísono, con Sergio—. Nosotros tenemos que estar

en el mismo sitio que Michelle Bachelet.

—Pero, ¿dónde? Aquí no hay espacio... Allá está la oficina de la candidata, y esto de acá es una sala de reuniones —respondieron.

—Bueno, aquí... En la sala de reuniones.

—Pero no van a caber los dos. ¡Hay una sola mesa!

—Entonces, nos instalaremos cada uno a un lado de la mesa —anunciamos. Y no se dijo más.

Con Sergio, estábamos claros que nuestra presencia en el comando, así como el acceso directo a la candidata eran fundamentales para poder llevar a cabo una buena campaña. Con ello, además, buscábamos evitar una situación que, normalmente, se da cuando los candidatos operan bajo entornos muy cerrados; estos, en lugar de protegerlos, terminan aislándolos y generando deficientes prácticas en términos de campaña.

No había tiempo que perder. Teníamos 30 días por delante. A efectos de coordinación, se acordó constituir un comité ejecutivo, con representación de todos los partidos de la Concertación, el que se reuniría dos o tres veces por semana, manteniéndose la misma estructura de campaña y los equipos programático, creativo y de terreno que habían afrontado la primera vuelta. Con Sergio, además de respaldar el trabajo en terreno en todo el país, dedicamos parte importante de nuestro tiempo a establecer contactos con dirigentes de diversos gremios y organizaciones sociales. En este sentido, fue muy importante obtener el respaldo del Partido Comunista, pese a que este no formaba parte de la coalición de la Concertación ni tampoco del equipo de gobierno. La campaña culminó en Santiago con un impresionante acto en la Alameda, en el cual Michelle Bachelet dirigió su último discurso al país, antes de ser elegida como la primera mujer Presidenta de Chile.

El 15 de enero de 2006, la Concertación ganó las elecciones presidenciales con el 53,5% de los votos, contra 46,5% obtenido por la oposición. Con ello, di por terminada mi tarea. No aspiraba a ningún cargo en el gobierno. Mi plan era volver a la política y al trabajo partidario. Ese era mi lugar. Además, estábamos en pleno verano y no me parecía mala idea tomarme unas breves vacaciones. A los tres días, sin embargo, recibí un llamado de la Presidenta. “Andrés, quisiera que usted fuera mi ministro del Interior”, me dijo al teléfono.

Sus palabras me honraron, pero creo que cometí un error al aceptar. Transcurridos ya varios años, mi propia experiencia y trayectoria política me lo han confirmado. Todo ministro del Interior debe tener una relación cercana con el Presidente: de fácil llegada, con comunicación abierta y directa, y ojalá este sea de su mismo partido. No basta un buen trato o una cordial relación humana. Probablemente, le hubiese sido más útil a Bachelet como secretario general de la Presidencia, dada mi fluida relación con el Parlamento y mi amplia experiencia al respecto. Pese a calibrar en su momento algunas de estas aprensiones, finalmente las consideré improcedentes, convencido de que podía acompañarla y aportar decididamente al gobierno que se iniciaba. Me equivoqué.

En el transcurso de enero y febrero, nos reunimos frecuentemente con la Presidenta, mientras me preparaba para integrar el nuevo gobierno de la Concertación. Durante esos meses, nos enfocamos en asignar los demás cargos y decidir quién tenía las capacidades más idóneas para cumplir con cada tarea.

En mi calidad de ministro del Interior, debía proponer nombres para los cargos de gobernadores y seremis. El día de la transmisión de mando, mientras íbamos rumbo a Valparaíso, la llamé para informarle acerca de un par de situaciones complejas que se nos estaban presentando. Una se debía a la reticencia del Partido Radical a participar en el gobierno, a causa de su disconformidad con algunos nombramientos. La otra guardaba relación con la designación en la gobernación de Cautín. Desde el partido me habían recomendado dos nombres: el primero correspondía a una dirigente independiente, de tendencia derechista, que había participado como candidata independiente en la lista de la DC durante las últimas elecciones parlamentarias; el otro se trataba de un simpatizante de nuestro partido, respaldado por Francisco Huenchumilla y Eduardo Saffirio, con buena llegada en la zona.

—El asunto del Partido Radical creo que es de más fácil solución —le dije a la Mandataria al teléfono—. Después veremos cómo hacer una compensación para asegurar los equilibrios políticos. Pero el nombramiento de la gobernación de Cautín me parece más urgente...

—Por un tema de paridad, nombraremos a la mujer —decidió finalmente la Presidenta Bachelet.

—Perfecto —me limité a decir.

Esta decisión me significó las primeras críticas como ministro. Un par de días después, tanto desde la DC como del PPD objetaron dicho nombramiento, pues a la dirigente que habíamos nombrado como gobernadora provincial de Cautín se le cuestionaba su antigua militancia en la UDI y supuestos vínculos con temas de derechos humanos durante la dictadura —los que más tarde fueron desmentidos—. Dados estos antecedentes, de inmediato decidí, con anuencia de la Presidenta, no dar curso a dicho nombramiento. Asumí la responsabilidad, pero aprendí que, para evitar estas conflictivas situaciones, había que ser muy riguroso y confrontar hasta en los más mínimos detalles los antecedentes personales de los candidatos propuestos.

Luego correspondió el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales. Para ello, elaboramos unos enormes gráficos, en los que fuimos desplegando y haciendo el cruce de todos los datos e informaciones pertinentes, región por región. La idea era lograr un amplio equilibrio en términos políticos, respetando la paridad de género y nombrando a las personas más competentes e idóneas. Fue un trabajo prolijo, que demandó tiempo y mucha paciencia.

Pero sin importar cuan acucioso fuera el trabajo que hiciéramos, los nombramientos nunca dejan contento a nadie. Los partidos siempre terminan molestos o sintiéndose disminuidos, y quien pagaba ese desgaste, naturalmente, era el ministro del Interior.

En general, siempre mantuve una buena relación con la gente del gabinete; los conocía a todos, el ambiente era cordial y de un fluido trabajo. Pero, a poco andar, comencé a percibir que existía un entorno alrededor de la Presidenta que generaba tensiones. Sentía que, al menor protagonismo, la gente más cercana a ella, congregada en el Segundo Piso, reaccionaba con reticencia y distanciamiento.

El 7 de noviembre de 2005, el ex Presidente peruano Alberto Fujimori, acusado por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno, fue detenido en su paso por Chile. Las autoridades peruanas pidieron su extradición por delitos de corrupción y otros crímenes, tales como homicidio calificado y desaparición de personas. Al ingresar a Chile había realizado declaraciones en relación con la política interna en su país.

En una conferencia de prensa, de pronto, un periodista me preguntó qué opinaba al respecto, a lo que respondí que no podía impedírsele a Fujimori que hiciera

declaraciones y que debíamos asegurar que se cumplieran las normas de asilo político pertinentes. Esto, al parecer, molestó a Alejandro Foxley, ministro de Relaciones Exteriores, quien estimaba que dichas materias debían ser conducidas por su ministerio o, al menos, consultársele. Tenía razón; en realidad, debió haber sido Relaciones Exteriores el que lidiara con el asunto, y yo debí haber sido más cauteloso, procurando alinearme con Foxley. Nuestra relación debió haber sido estrecha y coordinada, pero el ajetreo diario hacía difícil atender tantos frentes.

Durante su primer gobierno, Michelle Bachelet quiso continuar con el proceso de cambios que se venían implementando desde el inicio de la transición. Algunos consideraban que esta ya había concluido, pero nosotros creíamos que aún había temas pendientes y espacio para afinar aspectos que garantizaran el tránsito hacia una democracia plena. Si bien se habían logrado reformas importantes durante la administración de Ricardo Lagos, todavía faltaba modificar el sistema electoral, así como muchos otros temas; entre ellos, el de la educación pública.

Una de las promesas de campaña más emblemáticas de Bachelet en ese primer mandato fue el “Plan 100 días, 36 compromisos”, una serie de propuestas que buscaban atender problemas de tipo económico y social. Lo he dicho antes: siempre he sido contrario a la idea de fijarnos metas cuantitativas en plazos perentorios. Allende lo hizo en su gobierno y lo perjudicó. Uno puede tener las mejores intenciones, pero, en la práctica, muchas veces resulta imposible cumplirlas. La propia contingencia se vuelve más urgente. Así sucedió en este caso. Primero fueron las protestas estudiantiles, a las que se sumaron los grandes temporales que azotaron al país durante esos días; luego vendría la caída de la tasa de crecimiento; serios conflictos internos en materia de política exterior, fundamentalmente referidos a la relación con Venezuela, y, por último, la caótica implementación del Transantiago. En general, la Presidenta estaba muy encima de cada tema, y la presión era fuerte. Todas las semanas nos reuníamos para evaluar cómo se estaba avanzando respecto al programa. Para cuando se cumplieron los cien primeros días, gran parte de las medidas se habían llevado a cabo, pero aún faltaban algunas, entre ellas la reforma al sistema electoral y la creación de un Ministerio de Seguridad Ciudadana que, difícilmente, podían concretarse en tan solo tres meses de gestión. La oposición aprovechó esto para enrostrárnoslo y difundirlo por la prensa.

El 21 de mayo de 2006, en su primera cuenta ante el Congreso, la Presidenta

dejó en claro los cuatro ejes medulares que regirían su gestión: la reforma del sistema previsional, la reforma de la educación preescolar, el fomento a la innovación y al emprendimiento, y el mejoramiento de la calidad de vida. De todos ellos, la Reforma Previsional, sin duda, era la más ambiciosa; lo que había era un sistema heredado de la dictadura que había probado ser una verdadera farsa. Producto de las bajas pensiones, la gente había comenzado a intentar postergar su jubilación el mayor tiempo posible, pese a que algunos no estaban en condiciones físicas ni siquiera para seguir trabajando. Ante esto, dictamos leyes de retiro voluntario y se crearon beneficios para incentivar la jubilación. Bachelet hizo un tremendo esfuerzo por solucionar este tema a través de la reforma implementada el 2008. Para ello se creó el Pilar Solidario y la Pensión Básica Solidaria —orientada a quienes no tenían posibilidad de ahorros—, lo que constituía un nuevo piso de seguridad social. Sin embargo, dichas medidas resultarían insuficientes, ya que no resolvían el problema en su raíz: la desigualdad.

Las reformas previsionales, en general, son muy complejas, pues el aumento en el promedio de las cotizaciones debe ser muy alto para que ello impacte en una mejora sustancial. Ni siquiera el 5% adicional basta para solventar pensiones que realmente permitan a las personas una vida digna. Al respecto, basta destacar que en Europa el promedio de las cotizaciones bordea el orden del 20%.

Este tipo de temas requiere de una cautela extrema, pues reformas de esta naturaleza no pueden significar pan para hoy y hambre para mañana. Los bonos y beneficios para la tercera edad, así como el transporte público gratuito y otro tipo de medidas constituyen buenas iniciativas, pero no resuelven el problema de base.

2. La Revolución Pingüina

El viernes 26 de mayo de 2006 estalló la mayor movilización estudiantil de los últimos 30 años en el país, irrumpiendo violentamente en la agenda política. Las primeras tomas de liceos habían comenzado en abril, pero el 7 de mayo la Asamblea de Estudiantes Secundarios convocó la primera de varias movilizaciones nacionales. En pocos días, cientos de colegios públicos, a lo largo de todo Chile, se encontraban en paro, o en “toma”. Los estudiantes, cohesionados bajo un movimiento que se denominó “La Revolución de los Pingüinos”, protestaban, ante todo, contra un sistema educacional concebido como un mero bien de consumo, que afectaba los cimientos de la calidad y equidad del mismo. Entre sus demandas, exigían un pase escolar gratuito que funcionara anualmente, la gratuidad de la PSU, la subvención por parte del Estado de un régimen de alimentación completo para los colegios públicos, mejoras en la infraestructura de los recintos y, la más profunda de las medidas, la desmunicipalización de los establecimientos educacionales, junto con la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), norma promulgada durante el último año de la dictadura para regular el sistema.

Personalmente, me parecía que varias de estas peticiones no solo eran razonables, sino que también factibles de acoger y resolver. Los dineros para ello estaban disponibles en las arcas fiscales. Sin embargo, cuando planteé esto al gabinete, no conté con el apoyo del Ministerio de Hacienda, debido al gasto que podía significar. En un momento dado, incluso consideré la posibilidad de recibir a los dirigentes estudiantiles para dialogar, pero se me mandó a decir desde el Segundo Piso que no llevara el conflicto a La Moneda.

Ante la imposibilidad de intervenir directamente, decidí solicitar al exsenador Sergio Páez, y al senador Mariano Ruiz-Esquide, quien presidía la Comisión de Educación, que se reunieran con los estudiantes. Esto molestó, al parecer, al equipo de asesores de la Presidenta, a pesar de que más tarde la propia Presidenta Bachelet me pidió usar esta misma vía para acercarnos a los estudiantes y buscar una solución al conflicto.

Ya para entonces me sentía bastante presionado y aislado por el Segundo Piso.

Carecía de la autoridad para tomar decisiones o intervenir. Me encontraba tan maniatado que, un día, cuando me llamaron Páez y Ruiz-Esquide, en plena reunión con los estudiantes, preguntándome si podían enviarme un memorándum para avanzar en una posible propuesta de acuerdos, tuve que manifestarles que me era imposible aparecer negociando el tema personalmente. Sabía que esto sería interpretado negativamente por los asesores presidenciales, quienes no querían involucrar a Bachelet en el conflicto. Al final, dicha posición varió rotundamente, trascendiendo mucho más allá de lo previsto. El conflicto llegó a manos de la Presidenta y fue ella quien lideró las negociaciones. Al respecto, es probable que sus asesores temieran que cualquier protagonismo mío en la contienda pudiese opacar el liderazgo presidencial. Quizás tenían razón, pero su proceder y actitud significaron una pérdida de tiempo y, por tanto, que el problema se profundizara aún más.

Mirado a la distancia, y con la perspectiva del presente, creo que debí haber enfrentado estas aprensiones de los asesores de forma más inmediata y cara a cara con la propia Mandataria. Tal como le escuché decir tantas veces al Presidente Eduardo Frei Montalva, cuando había que tomar decisiones difíciles: “Más vale ponerse una vez colorado que cien amarillo”. Mi razón en ese entonces para no hacerlo fue una mal entendida lealtad hacia ella.

Ante nuestra incapacidad de acoger los reclamos de los secundarios, estos convocaron a un paro nacional para el 30 de mayo que tuvo una masiva adhesión. El gobierno se equivocó al pensar que sería un conflicto fácil de manejar. Los propios estudiantes empezaron a sorprenderse y a tomar conciencia de su propio poder y capacidad de convocatoria, así como del amplio grado de adhesión que el movimiento estudiantil comenzaba a despertar en la propia ciudadanía. Este último terminaría, con los años, por hacer germinar y consolidar importantes liderazgos en la arena política, tales como el de César Valenzuela, Julio Isamit, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y el propio Gabriel Boric, entre otros.

Así, la demanda continuó profundizándose, convirtiéndose ya no solo en el reclamo por un par de medidas, sino que en una queja generalizada contra el sistema en su totalidad. Ahora lo que pedían era atacar la desigualdad y la falta de equidad en todo el sistema educacional chileno.

Se produjeron graves desórdenes públicos. Carabineros tuvo que intervenir para controlar al lumpen que aprovechaba las protestas para causar destrozos. En

ocasiones, los secundarios se dejaban arrastrar también. Varios estudiantes fueron detenidos e, incluso, agredidos por funcionarios de Fuerzas Especiales, en episodios que desde el gobierno fuimos enfáticos en repudiar. El 1 de junio, Bachelet se dirigió al país vía cadena nacional, anunciando nuevas propuestas de solución al conflicto, pero la Asamblea de Estudiantes Secundarios las rechazó y llamó a volcarse a las calles. Las tomas y ocupaciones continuaron, ya no solo en los colegios, sino que también en edificios del ministerio y otras entidades. Nuestra aprobación como gobierno cayó en 11 puntos. La derecha endureció su crítica hacia el gobierno, cuestionando el manejo del orden público. Día a día, miles de jóvenes se movilizaban en las calles, siendo infiltrados por elementos violentistas. El desafío de controlar la situación sin generar severas consecuencias era enorme, mientras las movilizaciones comenzaban a dar la sensación de que la Presidenta no lograba controlar la situación.

En uno de los operativos, una estudiante sufrió un accidente al caer de un techo en el Liceo Carmela Carvajal, que se encontraba en toma. La joven, gravemente lesionada, fue llevada al Hospital Calvo Mackenna. De inmediato me trasladé hasta allá, preocupado por su salud y de que el episodio apareciera en la prensa como resultado de la acción policial, lo que pronto fue descartado.

Poco antes, un periodista había sido duramente golpeado por funcionarios policiales durante una movilización. Me reuní con el general director de Carabineros, José Bernales, para hacerle ver que estas cosas no podían suceder; como medida, se sacó del mando de Fuerzas Especiales al coronel a su cargo. El entonces presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, concurrió al día siguiente a La Moneda a reclamar por lo acontecido. Fue recibido por la Presidenta y apareció junto a ella en una conferencia de prensa, en la que calificó a Carabineros de “lumpen uniformado”. Ante estas declaraciones, llamé a la Mandataria y le hice ver la necesidad urgente de adoptar una postura clara al respecto. De lo contrario, perderíamos toda capacidad de desplegar a los funcionarios policiales en el contexto de las movilizaciones. “¿Y qué recomendaciones hacer?”, me preguntó. Le dije que llamaría a la prensa y que emitiría una declaración respaldando a la institución. No me dijo nada, pero sospecho que mi decisión no le pareció acertada.

La verdad es que la Presidenta Bachelet nunca me dio su visto bueno para mediar en el conflicto estudiantil. Hice todo lo posible por intervenir, incluso hasta el final, cuando esta resolvió nombrar un consejo asesor presidencial, integrado por estudiantes, personeros de gobierno y miembros de la sociedad

civil, para lo cual recomendé nombres de posibles participantes. Mi rol fue cuestionado permanentemente. La derecha llegó, incluso, a barajar la opción de interpelarme, junto con el ministro de Educación, Martín Zilic, argumentando que mi presencia en el manejo de la crisis era insuficiente.

El 9 de junio, los estudiantes anunciaron el fin de las tomas y el retorno a clases, al menos temporalmente. En el intertanto, el comité asesor siguió operando, reuniendo antecedentes y redactando un informe con propuestas. Durante los meses posteriores, se convocó a un par de movilizaciones, aunque de menor impacto.

Finalmente, el gobierno accedió a algunas de las peticiones de los estudiantes. Se les concedió el pase escolar anual, así como un sistema de becas para financiar el costo de la PSU, y se resolvió que la Junaeb asumiría el costo de alimentación de todos los alumnos de escuelas municipales, no solo de aquellos más vulnerables. Además, en abril del año siguiente, el gobierno envió el proyecto de reforma a la LOCE. Lo que se concedió a los estudiantes fue lo mismo que recomendé acoger al comienzo del conflicto y que no se quiso autorizar desde el Ministerio de Hacienda.

Quedarían algunos temas pendientes, que Bachelet solo lograría atender en su segundo gobierno, tales como el problema de la equidad y la gratuidad en la educación superior. Para entonces, yo había retomado mi rol como senador, y desde ahí participé con ahínco en la discusión.

Siempre he sido partidario de potenciar la educación pública, de mejorar su infraestructura y de hacer todo lo necesario para posicionarla en un nivel de excelencia. Antaño, esta era bien valorada y una opción válida, considerada incluso por los sectores más acomodados. Hoy, en cambio, los colegios municipales son los más deteriorados. Las familias prefieren optar por colegios particulares subvencionados, ya que ven en ellos mejores niveles de educación y no exponen a sus hijos a paros por largos períodos.

En este sentido, la municipalización de la enseñanza pública fue uno de los peores errores que cometió la dictadura, pues la desmembró y socavó de cuajo, generando gran desigualdad entre escuelas y liceos. En la actualidad, nadie pone en duda el rotundo fracaso de este modelo de administración. La matrícula ha ido decreciendo progresivamente, fenómeno que continúa a la baja. Gran parte de los municipios del país, pese a sus buenas intenciones, han sido incapaces de

gestionarla en forma eficiente, pues no cuentan con los recursos técnicos ni las competencias adecuadas para mejorar la calidad de la educación. Con suerte, logran lidiar con lo contingente.

La educación pública es la madre de todas las oportunidades y garante de una mayor equidad, movilidad social y optimización en la calidad de vida del país. “Gobernar es educar”, decía con acierto el Presidente Pedro Aguirre Cerda. No por nada es que muchos afirman, sobre todo en sectores populares, que la mejor herencia que se le puede dejar a un hijo es una buena educación. No podría estar más de acuerdo con esto.

3. Mi salida de Interior, el golpe más duro de todos

Pronto se hizo evidente que con la Presidenta teníamos estilos diferentes. A ella le gustaba que le consultáramos todo. Yo, en cambio, y dada mi experiencia, consideraba que mi cargo me concedía cierta independencia para actuar.

Había, también, un problema de roles a nivel de gabinete. Nominalmente, al ministro del Interior se lo considera jefe del gabinete y colaborador directo del Presidente de la República en materias de gobierno y administración, así como en la implementación de sus políticas y decisiones. En la práctica, sin embargo, esto no ocurría. De hecho, cuando trataba de ejercer dichos atributos, muchas veces chocaba con otros ministros, especialmente con la ministra Secretaria General de la Presidencia. En más de una ocasión me tocó liderar proyectos de ley que le correspondían, en realidad, a esa cartera, tal como el proyecto que buscaba reformar el sistema binominal. No sé si esto le habrá molestado a la ministra de entonces, Paulina Veloso, pero sin duda no ayudaba al clima interno.

El 7 de junio de 2006, en plena crisis estudiantil, la Mandataria hizo un llamado de atención a sus ministros y subsecretarios frente la prensa: “El gobierno tiene suficientes problemas como para agregarles otros por errores o ineptitud”. El episodio, conocido como “el Cartillazo”, me dejó estupefacto. En toda mi vida política, jamás había vivenciado una situación de esta naturaleza. Aparte de causarme profunda extrañeza, me pareció una actitud impulsiva, poco asertiva, que, indudablemente, ponía en tela de juicio —y evidenciaba— la confianza de la propia Presidenta hacia su equipo más cercano.

Ya a mediados de julio, cuando la VII y la VIII Región fueron azotadas por fuertes temporales que provocaron graves derrumbes, sentía que mi relación con Bachelet estaba muy distanciada. Comenzaba a dudar de si ella realmente me veía como su colaborador. Estábamos lidiando con un posible paro de camioneros en la zona afectada, lo que complejizaba aún más el manejo de la crisis.

Durante la tarde del 11 de julio, nos reunimos con el Comité de Emergencia y se tomó la decisión de que yo viajaría al día siguiente a la VIII Región. Horas más

tarde, camino a mi casa, me enteré por la radio que la Presidenta estaba en las dependencias de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), pero no me había comentado nada al respecto. Al llegar a mi hogar, encendí la televisión: aparecía ella, acompañada por Ricardo Lagos Weber y Rodrigo Peñailillo, su jefe de gabinete, quien, desde hacía algún tiempo, no solo cumplía labores propias de su cargo, sino que además aparecía asumiendo funciones de otros ministros. De hecho, Peñailillo había enviado unos aviones Hércules con ayuda a la zona afectada, supuestamente por orden de la Presidenta, pero sin haberme informado antes, pese a que la Onemi dependía del Ministerio del Interior. El cuadro me pareció extraño, pero decidí no decir nada. Al día siguiente, volvimos a reunirnos en La Moneda, antes de que emprendiera mi viaje.

—Andrés, voy a ir yo al sur —me informó entonces la Mandataria.

Me sorprendió su anuncio.

—Pero Presidenta, habíamos quedado en otra cosa... No me parece conveniente que usted se exponga —le advertí.

Me respondió que así se lo habían recomendado. Y agregó:

—Te agradecería que vayas tú mañana.

—Bueno... Si usted así lo prefiere, no tengo problema.

Después de eso, partió rumbo al sur y llegó a una villa en Chiguayante, donde se había producido un grave alud. Su arribo tuvo lugar justo en el momento que los habitantes buscaban, entre los escombros, a las víctimas fatales. Arrebatados por la angustia, un grupo de familiares encaró a la Presidenta, acusándola ante los periodistas presentes de querer sacar réditos comunicacionales de su visita.

Cuando, al día siguiente, llegué a la zona, fui a visitar a los afectados. Tuve la suerte de que nadie me encaró o me gritó nada. Fui recibido respetuosamente. A la salida del velatorio de las víctimas, hice unas declaraciones a la prensa, dando mi pésame a los familiares, pero preferí no referirme a lo ocurrido con Bachelet. Esto fue interpretado por algunos como una crítica mía a la Presidenta. Los malentendidos ya eran demasiados...

A la mañana siguiente, el 14 de julio, y ya de regreso en Santiago, nos reunimos

con la Presidenta para abordar cómo seguiríamos enfrentando la situación de emergencia. Ella se mostró de acuerdo con lo planteado en nuestra conversación. “¿Nos podemos juntar nuevamente más tarde para ver en qué podemos avanzar?”, me preguntó, a lo que respondí que por supuesto. Quedamos en encontrarnos a las 17:00 horas.

A esas alturas, ya circulaban los primeros rumores acerca de un eventual cambio de gabinete. Yo estaba al tanto de que se buscaban reemplazantes para Economía y Educación.

Poco antes de las cinco de la tarde, llamé a la Presidenta para preguntarle si nos reuniríamos. “Sube”, dijo. Al llegar a su oficina, me invitó a tomar asiento. “Andrés, estoy en una situación complicada”, me comentó, un tanto perturbada. “Debido a los acontecimientos ocurridos durante el último tiempo, necesito hacer un cambio político más fuerte, algo que demuestre que estoy tomando realmente las riendas del asunto. Lo he pensado mucho, y creo que en lo único que tú me puedes ayudar es dándome libertad de acción”, agregó. Sus palabras me descolocaron, pero no las rebatí. “Está en sus facultades, Presidenta”, respondí. Después me enteraría de que, a esa hora, Bachelet ya le había propuesto a Belisario Velasco que asumiera en mi reemplazo.

Llamé a Inés informándole de lo ocurrido, y le pedí que fuera a La Moneda para ayudarme a empacar mis cosas. Casi dos horas más tarde, Lagos Weber daba a conocer el nuevo cambio de gabinete. El hito marcaba el final de una etapa en ese primer gobierno. Sobre mi salida, la Presidenta declaró ante la prensa: “Cuando finalmente cambiemos el sistema binominal y tengamos un ministerio de seguridad ciudadana, los chilenos sabrán que ello fue obra de don Andrés (Zaldívar). Su sabiduría y generosidad fue fundamental para esta primera etapa. Espero seguir contando con su cercanía y consejo”¹²⁹.

Fue un duro golpe. Abandoné mi cargo sintiéndome bastante herido, tanto que hasta dudé si asistir a la ceremonia de juramento de los nuevos ministros. No era el único que experimentaba algo así. La ministra de Economía, Ingrid Antonijevic, resolvió ausentarse, ofendida por el anuncio. Finalmente, decidí participar, en señal de mi convicción de que debía primar la unidad y no el conflicto en nuestro sector. La Concertación era el bien principal a resguardar, aun pagando el precio que debía soportar.

Dejé La Moneda con pesar, pero también con la tranquilidad de haber hecho

todo lo que estaba en mis manos por aportar en la consolidación del nuevo proyecto. La vida seguía adelante, y siempre hay nuevos desafíos esperándonos a la vuelta de la esquina. Mi intención nunca ha sido aferrarme a un cargo, pues sé que estos no nos definen como personas, ni mucho menos nuestra vocación. “Esta es una etapa más”, dije tras mi salida. “Seguiré en la política igual que siempre. Esa ha sido la razón de mi vida durante muchos años. No necesito cargos para seguir en política”.

No fue precisamente la remoción lo que me dolió, sino las circunstancias y la forma en que se hizo. La misma Presidenta me lo reconoció: su decisión no tuvo que ver con mi desempeño, sino con su necesidad de enviar una señal política. Esto, sin embargo, me convirtió en una suerte de chivo expiatorio, pese a mi lealtad y compromiso. Me sentí excluido de un gobierno que yo mismo había contribuido a instalar.

Durante todo el período en que fui ministro, Bachelet jamás me hizo presente algún reparo respecto a mi gestión. Si estaba descontenta, debió habérmelo comunicado directamente: “Andrés, no estoy de acuerdo con esto que dijiste” o “no me parece la decisión que piensas tomar”... En cambio, muchas veces me enteré, a través de terceros, de su disconformidad. La propia Soledad Alvear, timonel de la DC en ese momento, me aseguró posteriormente que desde el gobierno nadie le había adelantado que yo sería removido de mi cargo.

Pocos días después de mi salida, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en ese entonces presidente del Senado, convocó un almuerzo en mi honor, al que invitó a dirigentes del partido y a miembros de nuestra bancada. En dicha instancia, aprovechó de emitir una dura crítica, responsabilizándolos de lo sucedido: “Hablemos las cosas como son. Hay varios camaradas que son responsables de la salida de Andrés del gabinete”¹³⁰, manifestó. Al día siguiente, diputados de todos los partidos de la Concertación me invitaron para agradecer el trabajo que en conjunto habíamos realizado. De igual forma, varios salieron a desmentir los dichos de Camilo Escalona, quien, en medio del conflicto, me había atribuido la responsabilidad por la crisis desatada.

Si tuviera que emitir una crítica a la forma de gobernar de la Presidenta Bachelet hasta ese momento, diría que un grave problema fue no permitir que emergieran liderazgos al interior de su gabinete y su entorno. No soy el único que así lo percibió. Patricio Navia fue muy duro en sus dichos, previendo el recambio de ministros. “El primer gabinete de Bachelet no funcionó porque ninguno de los

ministros que podían convertirse en articuladores del poder político de la popular Presidenta logró hacerlo. Pero la responsabilidad también es de Bachelet, que tampoco facilitó ni permitió el surgimiento de liderazgos fuertes en el gabinete”. Continuó: “Ahora que la Presidenta debe empezar a considerar una reorganización de su equipo, debe tener presente que la única forma de que los ministros adquieran poder es dejándolos competir por el poder. Si La Moneda insiste en evitar que los ministros hablen y lideren, los futuros gabinetes de Bachelet tropezarán con la misma piedra”¹³¹, diagnosticó.

Efectivamente, Belisario Velasco, quien asumió en mi reemplazo, vivenciaría situaciones similares más tarde, tal como lo relata en sus propias memorias: “(...) lo que nunca ocurrió en los primeros gobiernos de la Concertación, se convirtió en una práctica cotidiana a partir de 2006. La Presidenta tenía una forma de dar instrucciones que, en ocasiones, terminaba haciendo que sus ministros se enfrentasen. No me ocurrió una, sino muchas veces. Ella me pedía que me hiciera cargo de temas que eran, en realidad, responsabilidad o atribuciones de otros ministros, lo que generaba descoordinaciones. A la vez, se tejían diferentes tipos de complicidades entre algunos gabinetes ministeriales...”¹³².

Este fenómeno de proteger a ultranza el protagonismo excluyente del Presidente, de efectos bastante nefastos, es consecuencia del propio sistema presidencialista. Y es algo que sucede recurrentemente en el caso chileno. A Michelle Bachelet le ocurrió, al igual que a Sebastián Piñera y también a Ricardo Lagos. Los Presidentes suelen rodearse de un grupo de asesores que, comandados por el jefe de gabinete presidencial, constituyen el denominado Segundo Piso, el que, en muchas oportunidades, aparece sobrepasando en autoridad a los propios ministros. En el caso de ella, esto se retrató muy bien en la figura de Rodrigo Peñailillo, quien asistía a los comités políticos, se inmiscuía en materias de seguridad, impartía instrucciones o tomaba decisiones sin consultar a los titulares de las carteras involucradas. Esta situación, además, se veía acentuada por la personalidad de la Mandataria, quien parecía sentirse más a gusto en círculos pequeños e íntimos, integrados y resguardados por sus cercanos.

El liderazgo de la figura del Presidente de la República debe ser como el de un director de orquesta, capaz de conducir y coordinar a los músicos en su conjunto, de manera que estos ejecuten la sinfonía de la forma más armoniosa y adecuada. Ese es el rol de un Jefe de Estado, mientras cada ministro debe responder y velar por el papel que le corresponde.

4. La muerte de Pinochet

El 10 de diciembre de 2006 murió Augusto Pinochet, tras ser internado durante una semana en el Hospital Militar. Su deceso se debió a un infarto agudo al miocardio. Tenía 91 años y, hasta ese momento, cumplía arresto domiciliario por los casos Caravana de la Muerte y Operación Colombo. Enfrentaba, además, 300 cargos en su contra por violación a los derechos humanos y causas por corrupción, fraude al fisco y enriquecimiento ilícito.

Habían pasado ya 16 años desde el término de la dictadura y el retorno de la democracia en Chile, pero aún se mantenía latente la lealtad del Ejército para con el anciano dictador. En las calles hubo festejos y llantos. El gobierno de Michelle Bachelet descartó un duelo oficial, así como el hecho de que se le rindieran honores de Estado. El funeral y los rituales quedaron a cargo del Ejército. Controversial hasta el último minuto, sus restos fueron velados en la Escuela Militar, recibiendo honores en calidad de general de Ejército, pero no como ex Presidente de la República. Como un gesto de reconocimiento casi obligado, asistió la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, en representación del gobierno.

La muerte de Pinochet acentuó el surgimiento de nuevas instancias y espacios para llevar adelante juicios y sanciones por violaciones a los derechos humanos. En este sentido, fue meritorio el trabajo que hicieron ministros y jueces en esta cruzada por sacar a la luz la verdad, aun cuando fuese tardía. Producto de esa labor, hoy en día son muy pocos los que se atreven a desconocer los abusos y atrocidades cometidas durante la dictadura, o a defender la conducta del dictador. Pese a ello, aún se mantiene abierta la herida en el alma de Chile, lo que perdurará hasta cuando se haga verdad y justicia a quienes fueron víctimas de la represión, o al menos a aquellos que sufrieron la pérdida de sus seres queridos.

5. El Transantiago: Una política pública necesaria, pero mal diseñada

En febrero de 2007, el gobierno inauguró el Transantiago, un nuevo plan de transporte público que colapsaría toda la agenda política.

Desde hacía muchos años, en Santiago venía operando un sistema de locomoción colectiva, gestionado por empresarios privados y sobrecargado de micros —las famosas “micros amarillas”— de lento desplazamiento y de eternos recorridos que atravesaban la ciudad de un extremo a otro. Por todo esto, ese sistema resultaba caótico, altamente contaminante —se le adjudicaba buena parte del esmog capitalino— y generador de serios problemas de congestión vehicular. Pese a ello, lograba cubrir territorialmente la capital.

Por su parte, el Metro de Santiago, empresa estatal y uno de los sistemas más modernos de Latinoamérica, operaba hasta entonces en forma limitada con dos líneas: una de Oriente a Poniente (Línea 1) y otra de Norte a Sur (Línea 2), a lo que se adicionaban algunos tramos de las Líneas 5 y 4.

Dado estos antecedentes, el gobierno de Ricardo Lagos inició un estudio para la modificación de dicho sistema, proyectando mantener la gestión en manos de privados. Para su diseño, se constituyó en el Ministerio de Transportes un equipo técnico que trabajó coordinadamente con las carteras de Obras Públicas y de Hacienda, además de otras entidades.

El informe final determinó la factibilidad de un plan de modernización del transporte público en Santiago, denominado Transantiago, que contemplaba la unificación de tarifas, un sistema integrado entre buses y el Metro, y la automatización en el cobro de los boletos, garantizando un transporte de mejor calidad y sin mayor costo para el Estado; es decir, autofinanciado.

Mientras ejercí como ministro del Interior, siempre hubo discusión sobre las bondades que aseguraba la aplicación de esta nueva política de transporte público. Evidentemente, los empresarios de las llamadas micros amarillas —tanto los dueños de importantes flotas, como aquellos que tenían dos o tres buses— presionaban en contra del cambio y, por supuesto, defendiendo sus personales

intereses. Al final, algo de razón tenían, no tanto respecto a la calidad del servicio, sino que a la real posibilidad de que el sistema diseñado operara eficientemente.

Tras asumir Belisario Velasco como ministro del Interior en mi reemplazo, el gobierno de la Presidenta Bachelet tomó la decisión de implementar el Transantiago a contar del mes septiembre. De acuerdo con la información que trascendía en los medios de comunicación, tanto numerosos expertos, como los ministros de Transporte, Obras Públicas y, especialmente, de Hacienda aseguraban que el sistema sería tan eficiente que no sería necesario subsidiar su operación. Bastaba una flota de 4.500 buses licitados a diez empresas concesionarias y una plataforma informática contratada a Sonda, empresa especializada, para garantizar su puesta en marcha.

Tras varias postergaciones, el gobierno por fin anunció su inauguración para el 10 de febrero de 2007. Pese a ser pleno verano, la puesta en marcha resultó todo un fracaso. El sistema colapsó debido a la baja frecuencia y a la falta de recorridos. Las personas se agolpaban en los paraderos en largas filas y durante horas, sin poder desplazarse.

Su implementación, de tipo Big Bang —es decir, de un día para otro—, debió haberse realizado en forma gradual y por etapas. El ministro de Transportes, Sergio Espejo, desplegó todos sus esfuerzos por reparar el daño, pero el fracaso conllevó serias dificultades para el gobierno de la época y también para todos los gobiernos que lo han sucedido hasta el día de hoy. No solo no logró autofinanciarse, sino que además ha demandado recursos considerables a través de leyes especiales, así como también de la Ley de Presupuestos. El gobierno debió afrontar duras críticas, y la popularidad de la Presidenta Bachelet bajó al 40% de aceptación. Pero la pesadilla no terminaría ahí. René Cortázar, quien reemplazó a Sergio Espejo en el Ministerio de Transportes, tuvo que emprender una búsqueda desesperada por conseguir recursos para seguir financiando el proyecto y hacerlo operar. Fue un duro trabajo, constituyendo hasta el día de hoy un dolor de cabeza y una de las principales preocupaciones del ministro de turno.

En la Democracia Cristiana, la situación tensó los ánimos, en especial cuando mi hermano Adolfo advirtió que votaría en contra del proyecto de ley que buscaba conceder recursos extras al financiamiento de la fracasada iniciativa. “Voto en contra, pues no estoy dispuesto a pasarle un peso más al Transantiago, ya que en cuatro meses más estarán pidiendo más plata”, afirmó. Esta decisión

desencadenó una crisis al interior del partido, que derivó injustamente en su posterior expulsión. Su salida generó, en paralelo, una importante fuga de militantes, incluidos varios diputados que solidarizaron con Adolfo.

Fueron tiempos complejos. El horizonte al que queríamos avanzar como conglomerado, de pronto, pareció comenzar a desdibujarse. Nos sumergimos en una especie de nube, en la que no lográbamos entendernos. Así lo declaré públicamente en julio de 2007: “Veo a la Concertación desconcertada. Está dando una muy mala imagen. Estamos brutalmente desordenados, cada uno por su lado. Se está perdiendo el espíritu de la Concertación, que nació para construir un proyecto de país”. Luego agregué: “Hoy, cada uno tiene su proyecto personal. Cada uno hace lo que quiere. Estamos cometiendo errores. Estamos perdiendo la capacidad de buscar acuerdos dentro de los partidos y con la oposición. El gran éxito que ha tenido el país es la gobernabilidad. Es lo que permitió tener éxito económico, social y político. Hoy lo veo en riesgo. Vamos de conflicto en conflicto”¹³³.

La tarea, claramente, no se estaba haciendo bien. Para legislar, de acuerdo a las mayorías existentes, resultaba fundamental escuchar a la ciudadanía, consultar y profundizar en la búsqueda de acuerdos, reforzar el diálogo entre Parlamento, Concertación y gobierno. Lo mismo respecto a la relación gobierno y oposición. La Presidenta requería un equipo de respaldo de mayor peso, pero sus ministros no parecían empoderados. Muchas veces, la Mandataria tomaba decisiones que ni siquiera consultaba o informaba a su propio gabinete. La combinación entre los propios ministros políticos, todos brillantes y experimentados, parecía empantanada. José Antonio Viera-Gallo, Belisario Velasco y Ricardo Lagos Weber iban al Parlamento, argumentaban y los resultados no se daban. Algo estaba fallando.

El Transantiago le salió caro al gobierno de Michelle Bachelet, le restó apoyo ciudadano y, a mi juicio, lo perjudicó aún más que el conflicto estudiantil. Hay que reconocerlo: fuimos responsables de una de las políticas públicas peor diseñadas e implementadas en la historia de los gobiernos de la Concertación, con repercusiones que siguen impactando hasta el día de hoy. Financieramente, continúa siendo una gran carga para el Estado chileno, con un déficit que, a 2019, alcanzó los \$800 millones de dólares y evasiones de más del 34% en ciertos períodos.

6. Una renuncia que afectó a todo el clan Zaldívar

Los roces entre mi hermano Adolfo y la directiva de la Democracia Cristiana, encabezada en ese momento por Soledad Alvear, venían arrastrándose desde antes del conflicto por el Transantiago. Estos habían sido generados, en buena medida, por el creciente enfrentamiento entre colorines —otrotra magníficos— y un sector del mundo aylwinista denominado los guatones.

La directiva respondió a la reticencia de mi hermano, inculpándolo de haberse aliado con la derecha y solicitando al tribunal supremo del partido su expulsión. Personalmente, nunca he sido partidario de este tipo de medidas, primero porque el disenso me parece legítimo y enriquecedor al interior de toda colectividad y, segundo, porque considero que estas prácticas no son efectivas ni constructivas.

Al enterarme de la situación, traté de intervenir, no porque el afectado fuera mi hermano, sino porque me parecía que lo único que justificaba la expulsión de un militante era que este hubiese cometido una acción delictiva, o algo que implicara una traición al partido. Las diferencias de opiniones, a mi juicio, no sustentaban esa drástica sanción. Hablé con miembros del tribunal supremo, haciéndoles ver la necesidad de buscar una fórmula para evitar el quiebre que se iba a provocar. Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Marcelo Trivelli hicieron lo propio, reuniéndose con dirigentes e intercediendo en favor de Adolfo. Hasta conversé con Soledad Alvear, en un intento por amansar las aguas. Pero lo cierto es que mi hermano tampoco quería ceder. “Andrés, no pierdas el tiempo. Adolfo está decidido a enfrentar su expulsión”, me había advertido su amigo y consejero Hernán Bosselin.

A fines de noviembre, Adolfo mismo declaró a la prensa: “Me podrán quitar el cargo, me podrán sancionar y expulsar del partido, pero no van a lograr tener mi conciencia ni menos mi libertad, ni tampoco mi condición de democratacristiano”¹³⁴.

Su expulsión suscitó un conflicto que causó mucho daño a la Democracia Cristiana, pero también a la Concertación. Tras su salida, un sector de dirigentes y cinco diputados “colorines” renunciaron a nuestras filas como reproche a la

decisión de la directiva, adhiriendo al Partido Regionalista Independiente (PRI), al que Adolfo se integró en su calidad de senador. Ello provocó un fuerte desequilibrio en la Cámara: 54 diputados de la Concertación versus 54 de la Alianza. Posteriormente, el 12 de marzo de 2008, Adolfo asumiría la presidencia del Senado, resultando electo con los votos de la UDI, RN y senadores independientes.

El quiebre trascendería, también, hacia nuestra propia familia. Siendo un grupo familiar activamente político, y en el que gran parte de sus miembros militaba en la Democracia Cristiana, era difícil que esto no sucediera. El 27 de enero de 2008, me enteré, a través del diario El Mercurio, que mis hermanos Alberto, Javier, Felipe y Renato, junto con mi hermana Josefina, habían decidido renunciar al partido mediante una carta pública. El artículo en el diario venía acompañado de fotos familiares, generando la sensación de que el anuncio correspondía a una decisión de toda la familia.

El hecho me tomó por sorpresa. ¿Por qué mis hermanos no me habían informado antes y personalmente respecto a esta decisión? Nos habíamos visto hacía pocos días, en nuestro habitual almuerzo familiar de los días miércoles, pero nadie había comentado nada. No era que tuvieran la obligación de informarme, estaban en todo su derecho de renunciar, pero creo que eso hubiese sido lo más sensato. Los llamé a cada uno por teléfono y me dieron sus explicaciones. Dijeron que le habían encomendado a Javier que me informara, pero algo había sucedido y el mensaje no me había llegado. Lo que me pareció más grave fue que la medida apareciera como una decisión familiar, algo que no era efectivo, puesto que yo no había renunciado al partido y tampoco pretendía hacerlo.

Fue una situación dolorosa, uno de los golpes más duros que he recibido durante mi trayectoria política. Mi tío Pablo Larraín y mis padres habían fundado el partido, y los Zaldívar, de alguna manera, formábamos parte de esa historia. La renuncia de mis hermanos me dejó aislado, solo, de cara frente a un complejo dilema en el que parecían trenzarse lealtades encontradas. En mi vida, siempre habían sido la familia y la política los pilares más importantes.

El hecho me llevó a entender que debía aprender a mantener mi independencia y a actuar acorde a mis propios valores. En realidad, no era la primera vez que se me presentaba una situación de este tipo. Me había casado con una mujer que venía del mundo conservador tradicionalista, y mi suegro había sido diputado y representante de ese entorno. Sin embargo, nada de esto había sido un

impedimento para que Inés y yo congeniáramos y construyéramos una vida política común enriquecedora. Con mi suegro, don Fernando Hurtado, llegué a tener una relación de mucho afecto y lealtad, recibiendo de su parte y de mi suegra, la señora Jesús, las mayores muestras de cariño, pese a no pensar de la misma forma. Ha sido, precisamente, esta exposición a corrientes distintas lo que me ha llevado a valorar el pluralismo y la confrontación de ideas. Cuando entendí todo esto, me sentí conforme y en paz con mi decisión de permanecer en la DC y desmarcarme de la acción de mis hermanos.

Muchas veces me he preguntado si acaso debí haber hecho algo más por evitar la expulsión de Adolfo. Creo que me faltó insistir, presionar con más dureza o, quizás, haber expresado mi desacuerdo de manera pública.

Con Adolfo, siempre tuvimos personalidades diferentes. De niños, habíamos sido cercanos, puesto que como hermano mayor lo había cuidado y, durante muchos años, tuve la responsabilidad de llevarlo al colegio. En nuestra familia había un gran lazo de unión y cariño entre todos y nuestras discrepancias no pasaban más allá de reconocer nuestros disensos y respetarlos. Fue ya de adultos que nuestras diferencias comenzaron a marcarse. Él era más impulsivo y apasionado, fiel a sus convicciones, dueño de un carácter que podía llevarlo a ganarse grandes amigos, pero también enemigos. Yo, en cambio, tal vez por mi propia experiencia de vida, siempre fui más tranquilo, cauteloso y dado a los entendimientos. Adolfo tenía gran capacidad para articular frentes, mientras yo jamás pertenecí a ningún grupo, algo que mis cercanos a veces me criticaban. Hubo quienes trataron de hacer creer que nuestras diferencias provenían de una competencia de liderazgos, pero ello no es verdad. Simplemente teníamos maneras distintas de ver y hacer política, lo que era válido. No porque fuésemos hermanos debíamos estar alineados y de acuerdo en todo, particularmente si nuestras convicciones en determinadas materias no coincidían. Cuando, en 2009, Adolfo proclamó su candidatura presidencial por el PRI, reconocí su derecho a hacerlo, pero también le advertí que no estaba de acuerdo y que no contaría con mi apoyo.

Después de nuestro distanciamiento, provocado tras su salida de la Democracia Cristiana, y dada su permanencia durante un lapso de dos años como embajador en Argentina, volvimos a reencontrarnos en 2012, cuando se le diagnosticó un cáncer de páncreas. Nunca hablamos de lo ocurrido en el 2007, pero sí sostuvimos conversaciones muy cercanas y profundas; creo que ambos dábamos por superado el pasado, haciendo primar el cariño y la hermandad que, en el

fondo, era lo más importante. Su muerte fue una pérdida muy dolorosa para mí. Pese a cualquier diferencia, hoy debo dejar constancia de que su desempeño como representante de Chile en Argentina fue un importante aporte para nuestro país y un orgullo para nuestra familia. Hasta el día de hoy se lo recuerda por la dedicación que desplegó en el desempeño de dicho cargo, pese a la grave enfermedad que tuvo que enfrentar. Y para nuestra familia en particular tuvo mucha importancia el hecho de que fuese embajador en ese país hermano, pues nuestra abuela materna, Manuela Tejada, era argentina, oriunda de la provincia de Salta.

7. Un supuesto “veterano” conquista el Maule Norte

Tras mi salida del gobierno de Bachelet, resolví abocarme a mis asuntos. Hice lo que pude por sacudirme la amarga experiencia, aunque debo confesar que no fue nada fácil. Por largos meses, me sentí estigmatizado, como un carro de ferrocarril que habían empujado fuera del riel y dejado abandonado en el ramal.

Me fui a La Esperanza a pasar unos días, a descansar y a reflexionar. Había recibido muchos gestos de apoyo y cariño, los que me habían ayudado a recomponer un poco los ánimos. Volví a ejercer como abogado en el ámbito privado, mientras seguí vinculado al trabajo partidario. Asumí, además, como presidente de la Sociedad Chile-Corea, y como cónsul general honorario de ese país. También tuve el honor de incorporarme como vicepresidente a la Fundación Rostros Nuevos, la cual, como comentara anteriormente, había creado mi hermano Rodrigo. Pero una de las tareas más inesperadas fue mi nombramiento como presidente de la junta directiva de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), siendo designado por unanimidad de sus académicos. Fue una experiencia gratificante, ya que hasta entonces no había podido adentrarme en el mundo académico y universitario, algo que siempre me atrajo y que sentía como una deuda pendiente. Hicimos cosas interesantes que beneficiaron el acceso a la educación universitaria para estudiantes de menores recursos, la mayoría provenientes de colegios municipales. Contribuimos con ello a potenciar un sistema educativo no discriminatorio, abierto a dar acogida a todos los chilenos. La Usach, por primera vez, fue acreditada durante seis años por el Consejo de Acreditación de Educación Superior, con la participación de todos los estamentos y con la aprobación por plebiscito del estatuto de la Universidad. Toda esta tarea fue liderada por el rector Juan Manuel Zolezzi, lo que le valió, con justicia, permanecer en dicho cargo por casi 16 años.

Además, por primera vez en dos décadas, tuve tiempo para dedicarme a la lectura y adentrarme en el estudio de un amplio ámbito de materias que siempre me interesaron. A la par, pude dedicarme a la carpintería, un hobby que aprendí durante el exilio y del que siempre he disfrutado mucho. La verdad es que fue un período en que pude distenderme y hacer cosas que, por mi actividad política y

numerosas responsabilidades, siempre había postergado. Iba a seminarios, dictaba charlas. Me invitaron a participar en los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense de Madrid, que se realizaban en la ciudad de Santander, en el norte de España, y aproveché de aceptar invitaciones del Partido Demócrata Cristiano catalán y del Partido Nacionalista Vasco. Así, de a poco, empecé a enrielarme otra vez. Asumí nuevas tareas en el partido en Chile; entre ellas, la organización del próximo congreso que tendría lugar en un momento clave.

Entonces, se abrió una nueva posibilidad: competir por el cargo de senador en el Maule Norte. Debido a mi cercanía con la región, mi relación con su gente era estrecha. Mantenía contacto permanente con muchas personas, así como con parlamentarios y alcaldes de la región. Fueron ellos los primeros en hacerme la propuesta.

Tal como relatara anteriormente, muchos años antes, en 1972, mi nombre había salido a colación en el partido como carta parlamentaria por esa región. El entonces senador José Foncea había anunciado que no iría a la reelección, ofreciéndome su cupo, pero las cosas tomaron otro rumbo y, finalmente, terminé siendo electo senador por Atacama y Coquimbo. Más tarde, en 1989, para las elecciones del primer Senado después de derrotada la dictadura, dirigentes del Maule volvieron a plantearme la posibilidad de que me postulara por esa zona, pero la directiva me pidió que corriera por Santiago Poniente y otra vez tuve que pasar. Tras mi salida del gobierno, la oportunidad volvió a aparecer en el horizonte.

Ese mismo año (2009), se habían llevado a cabo las primarias presidenciales de la Concertación, en las que Eduardo Frei Ruiz-Tagle le había ganado, con 64,91% contra 35,09%, al candidato del PPD, PS y PRSD, José Antonio Gómez. Aunque en el consejo de la DC mi candidatura ya había sido proclamada, desde los otros partidos pidieron nuestro cupo para dárselo al expresidenciable como una forma de compensación. Pero la Democracia Cristiana se puso firme y declaró no estar dispuesta a pagar ese precio, sobre todo tratándose de una región en la que siempre habíamos tenido una contundente presencia. No por nada había sido en el Maule Norte donde Patricio Aylwin había ejercido por dos períodos como senador.

Confirmada mi candidatura, decidí asumir el desafío con todas mis energías. Nadie daba un peso por ella. En ese entonces, yo tenía 73 años, y mis muchos

detractores me tildaban de “veterano”, argumentando por ello la imposibilidad de un eventual triunfo. El PS había resuelto llevar a Jaime Gazmuri, quien cumplía tres períodos como senador y se estaba postulando a un cuarto, con muy buena aprobación de la gente. Las encuestas me dejaban muy debajo de él. A la vez, el Maule era una región donde la derecha solía tener buenos resultados. Con Juan Antonio Coloma como candidato, se dificultaba bastante nuestra posibilidad de doblar. Estaba lejos de plantearse como una campaña regalada y, tras mi abrupta salida del Ministerio del Interior, la derrota podía significar la sepultura de mi carrera política.

Contra todo pronóstico, la campaña comenzó a cobrar una fuerza y mística inusitadas. Nos concentramos especialmente en las zonas rurales, llegando a lugares apartadísimos, donde nunca ningún candidato había alcanzado. Contamos con un gran apoyo ciudadano, suscitado en buena parte por el legado y alcance que había tenido la Reforma Agraria de Frei Montalva en esa zona. Me ayudó, también, el obispo de Talca, Carlos González, un líder de mucha ascendencia moral y ética, de la misma camada de monseñor Manuel Larraín y el cardenal Raúl Silva Henríquez.

Todos los días participaba en diez o quince reuniones, con grupos de hasta 30 personas. Era extenuante, pero me sentía a mis anchas. El mundo rural, en particular, nos resultaba un escenario grato y cercano, ya que en él aún se palpaba la presencia de la figura de Eduardo Frei Montalva. Adonde llegábamos, incluso en los lugares más recónditos, los campesinos nos contaban cómo habían sido beneficiados por la Reforma Agraria, relatando cómo sus hijos habían tenido la posibilidad de estudiar y transformarse en profesionales gracias a ello. Había muchos dirigentes sociales apoyándome de manera voluntaria, abriéndome espacios. Se percibía un clima de unidad y cohesión, con miras a un proyecto común. Todo esto hizo que el triunfo se diera en la forma en que se dio.

Un par de semanas antes de la elección, vimos que remontábamos en las encuestas. Empezábamos a pisarle los talones a Jaime Gazmuri. Pero fue solo pocos días antes de los comicios que sentí que realmente teníamos la posibilidad de ganar. El 11 de diciembre, el candidato de la derecha obtuvo la mayor votación, con 35,22%, seguido por mí con 31,37%. Jaime sacó el 24,52%, quedando lamentablemente fuera de la contienda. Fue una sorpresa para todos, pero sobre todo para él, en cuyo comando lo daban por ganador casi desde un comienzo.

Tras darse a conocer los resultados, empezó a llegar gente a mi comando en Talca, la prensa incluida. Destapamos botellas de champaña y repartimos empanadas, en una celebración modesta e improvisada. Al poco rato, hizo su entrada a nuestro comando Jaime Gazmuri, acompañado de su mujer, Paulina Elissetche. Venían a felicitar-me, en un gesto que valoré mucho, pues no debió haber sido un momento fácil para él. Luego, partimos a Curicó con Inés, donde saludé a nuestros electores en una concentración pública en la plaza. Cerramos la noche en una estación de servicio Copec, comiéndonos un hot-dog. Era medianoche; estábamos solos con Inés, mi nieto Manuel Andrés y mi conductor, Marcelo González, quien me había acompañado durante toda la campaña. Rodeado de esa intimidad, sentí la emoción de la épica que habíamos vivido.

Al día siguiente, ya estaba listo para enfrentar mi nuevo desafío como senador por el Maule Norte. Había mucho por hacer. Lo primero era mejorar la situación habitacional, sobre todo de las familias campesinas. Queríamos garantizar el acceso al agua potable, mejorar las postas y centros clínicos rurales, y asegurarnos de que los subsidios habitacionales también llegaran a esas familias. Además, me interesaba indemnizar a los dirigentes sindicales que habían sido perseguidos por la dictadura. Muchos habían perdido el acceso a sus tierras por el solo hecho de haber sido beneficiarios de la Reforma Agraria. Otros se habían visto obligados a vender sus parcelas a precios muy bajos, producto de la crisis económica.

Otra importante prioridad era incentivar el desarrollo productivo de la región, a través de la finalización de las obras del Paso del Pehuenche, de manera de posibilitar la integración del Maule con el territorio argentino. Mi esperanza era que se convirtiera en una alternativa real al Paso Libertadores, algo que podía traerle a la región réditos más allá de su carácter como potencia agro-alimentaria local. Esto, sin embargo, hasta la fecha aún no se ha logrado, pues es un proyecto que aún requiere de mayor inversión.

Durante todos esos años fui testigo de cómo el mundo campesino chileno empezó a acceder a recursos y bienes que antes jamás hubieran podido adquirir, como camionetas, vehículos e instrumentos de trabajo. Quiero recalcar que todo esto se dio a partir de los gobiernos de la Concertación y su gestión. La gente salió de la postración en que los había sumido la dictadura; sus hijos lograron acceder a formación técnico-profesional, incluso a educación universitaria. Fue un cambio que presencié con mucha satisfacción, cerrando así un ciclo que implicó profundas transformaciones.

8. La derecha al poder y el fin de una era

En efecto, desde muchos puntos de vista, la década del 2000 fue un período próspero para nuestro país, aunque también extremadamente complejo. Por un lado, vivimos una de las transformaciones tecnológicas más importante del siglo, con nuevas tecnologías, teléfonos celulares que de pronto estuvieron al alcance de todos y la masificación del acceso a internet, incluso para los sectores más modestos. Esto cambió nuestra forma de relacionarnos, impactando determinadamente en nuestra propia cosmovisión, cultura e integración. La globalización comenzó a permearnos en forma directa con sus efectos de inmediatez, interconexión e interdependencia.

Por otro lado, para Chile esta década cerraría con el triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales de fines de 2009, y el retorno de la derecha chilena al poder por la vía democrática, tras 20 años de gobiernos concertacionistas. En paralelo, a nivel continental, nuevamente comenzaban a instalarse gobiernos de izquierda, como el de Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, o el populismo kirchnerista en Argentina. En 2006, Evo Morales se convirtió en el primer Presidente indígena de Bolivia, proyectándose como un liderazgo en el largo plazo, al igual que Rafael Correa en Ecuador. En tanto, en México, después de 70 años gobernando, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejó el poder, siendo reemplazado por el conservador Partido de Acción Nacional (PAN).

El primer mandato de Michelle Bachelet, pese a sortear obstáculos que afectaron decididamente su popularidad, en especial a raíz de los errores cometidos en la puesta en marcha del Transantiago, se tradujo en un gobierno de continuidad, que profundizó los proyectos y transformaciones de sus antecesores, especialmente respecto a la consolidación de un sistema económico con alto contenido social. Así y todo, su capacidad de implementar cambios estructurales resultó limitada, salvo por el sistema previsional. Ordenada y carismática, en una apuesta bastante alejada de los propios partidos políticos de su coalición, Bachelet supo mantener la economía nacional a raya, incluso en plena crisis de 2008, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, logrando

cerrar su período con un 70% de aprobación. Gracias a su administración, Chile continuaría abriéndose hacia el mundo.

Ahora bien, una lectura crítica de los acontecimientos permite interpretar el posterior triunfo de Sebastián Piñera como un evidente fracaso político de nuestro sector. Ante aquellas nuevas elecciones, seríamos incapaces de levantar un liderazgo de peso, que sucediera y capitalizara la popularidad de la saliente Presidenta, lo que fue resultado de una profunda crisis de identidad en nuestra coalición. En los próximos años, dicho fenómeno se acentuaría progresivamente, en un proceso que dejaría a la Concertación cada vez más “desconcertada”, empujándola hacia su reconfiguración. El resultado de la elección presidencial fue una muestra de ello. El último Presidente de derecha electo democráticamente en Chile había sido Jorge Alessandri, en 1958. Así, después de 52 años, la centroderecha, ahora denominada “Coalición por el Cambio”, ratificaba la alternancia en el poder, a lo que se sumaba el hecho de que, por primera vez desde el retorno a la democracia, el conglomerado derechista obtenía mayoría en la Cámara de Diputados (58 escaños versus 57 de la Concertación), consolidando, de paso, a la UDI como la mayor bancada de ese organismo.

El gobierno de Piñera abriría paso a una nueva etapa, la que derivaría en una expresión renovada para nosotros, conocida como la “Nueva Mayoría”. Esta no estaría exenta de desafíos, partiendo por la incorporación del Partido Comunista y la búsqueda de nuevos liderazgos, así como también la capacidad de enfrentar un escenario lleno de incógnitas: el nuevo Chile que había empezado a gestarse.

XVI

EL FINAL DE UNA ERA: AMANECER Y OCASO DE LA NUEVA MAYORÍA

1. Un enroque entre la Alianza y la Concertación

El escenario para las elecciones presidenciales de 2009 era bastante peculiar. Oficialmente competían cuatro candidatos: Sebastián Piñera —por la Coalición por el Cambio—, Eduardo Frei —por la Concertación—, Jorge Arrate —por el pacto Juntos Podemos Más— y Marco Enríquez-Ominami —por el Partido Humanista, el Partido Ecologista y el Movimiento Amplio Social (MAS)—. Dado que estos dos últimos provenían del mundo de la Concertación, concretamente del Partido Socialista —de hecho, Arrate presidió el PS entre 1990 y 1992—, nos encontramos, de pronto, sumidos en un escenario amargo: los mismos partidos que habíamos luchado codo a codo por la transición a la democracia nos presentábamos ahora, por primera vez, divididos. La fragmentación de nuestros adherentes era un problema y se instalaba en la coalición una falta de animus societatis casi generalizada.

El 13 de diciembre de 2009, en la primera vuelta, el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, triunfó con el 44,06%, mientras que Eduardo Frei logró un magro 29,6%; Enríquez-Ominami, 20,14%, y Jorge Arrate consiguió el 6,21%. Si bien en la segunda vuelta del 17 de enero de 2010 la brecha entre los dos finalistas disminuyó considerablemente, Piñera resultó elegido Presidente de la República con el 51,61% de los votos, la mayor cantidad de sufragios obtenidos por la derecha hasta la fecha. Ello significaba que la Concertación había perdido más de 350 mil votos respecto a la elección de Michelle Bachelet, mientras la derecha había logrado incrementar su votación en 87 mil votos en relación con 1999, durante la primera vuelta de Joaquín Lavín. En las parlamentarias, también tuvimos una importante caída. De ahí que muchos argumentaran que, más que un triunfo de la derecha, lo que quedaba en evidencia era la derrota de la Concertación.

Fue un bombazo para muchos. Apenas un año antes de las presidenciales, la Concertación parecía tener asegurado un quinto mandato. Las propias encuestas de opinión auguraban su triunfo. Nadie se imaginaba un viraje de otro tipo. Sin embargo, durante el 2008, se cometieron graves errores, entre ellos la decisión de competir en las elecciones a concejales con dos listas separadas. Creo que el

hecho no tuvo mayores consecuencias en términos de resultados electorales, pero el costo sí se pagó en términos políticos, pues comenzaron a evidenciarse quiebres y pugnas internas que rompían con nuestra tradicional postura de potenciarnos como un solo bloque. La opinión pública recogería estos hechos negativamente. Lo mismo sucedería con la elección de alcaldes; pese a que la Concertación obtuvo 147 ediles y la Alianza 144, esta nos superó en más de dos puntos de votación.

El episodio de las dos listas representaba una clara lección. La Presidenta Bachelet lo había advertido en su momento, pero se hizo caso omiso ante los hechos y así enfrentamos las elecciones de 2009. El proceso de primarias de la Concertación y su fragmentado resultado evidenció aún más nuestras fracturas internas, así como la imposibilidad de alcanzar acuerdos para la elección de un candidato de consenso. Era como si una gran nebulosa se hubiera instalado sobre la coalición, impidiéndonos ver el escenario político que se avecinaba. Los egos se habían desatado y cada sector remaba hacia donde creía conveniente, descuidando con ello los intereses de nuestros propios militantes y la voz de la ciudadanía. Nuestro común horizonte parecía desdibujarse... La situación comenzó a tornarse en una verdadera Torre de Babel, dificultando la posibilidad de trazar un proyecto claro, renovado y genuino, que representase a cabalidad nuestra identidad como coalición.

Así, aunque la suma de votos de los tres candidatos ligados a la Concertación superó con creces el 50%, la segunda vuelta dejó al descubierto el malestar y la desafección de nuestro electorado. Eduardo Frei no contó con el apoyo necesario, perdiendo por un estrecho margen de 3,22%. Su derrota, en buena parte, se debió al desgaste propio de cuatro gobiernos sucesivos de la Concertación, así como al hecho de haber competido en tres frentes distintos, sin lograr aunar posiciones como coalición. A ello se sumó, indiscutiblemente, el trabajo desplegado por la derecha durante esos años, logrando penetrar en sectores populares —en ello la UDI fue clave— y captar también el voto centrista que, desde el retorno a la democracia, había adherido a la Concertación.

Sebastián Piñera se consagraba así como el primer Presidente de derecha después de la dictadura, aunque siempre prefirió que se lo reconociera más bien como integrante de la “centro-derecha”. Esto era muy propio de aquella derecha liberal, integrada en buena parte por gente de Renovación Nacional, a la que le incomodaba verse identificada con el gobierno militar y sus adherentes.

Para ser honestos, es cierto, tampoco se puede decir que Piñera proviniera de ese mundo. En los años 80, probablemente por influencia de sus propios padres — ambos militantes de la DC—, se había mostrado cercano al pensamiento demócratacristiano. Más tarde, en el plebiscito de 1989, votó NO. Sin embargo, su fuerte presencia en el mundo de los negocios y, por ende, de la derecha empresarial lo convirtió pronto en una figura contradictoria que siempre pareció debatirse entre dos almas. Incluso se rumoreó, después del plebiscito de 1989, que habría expresado su disposición a ser candidato a senador por la Concertación en las parlamentarias de ese año; sin embargo, a poco andar, apareció, nada más y nada menos, como generalísimo de campaña del presidenciable de la derecha, Hernán Büchi, y como carta senatorial de RN por Santiago Oriente. Nunca supe qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión tan repentinamente. Durante los años siguientes, nos tocó compartir en el Senado, y me consta que muchas veces apoyó y facilitó la búsqueda de entendimiento con nuestro gobierno. Esto, a su vez, le significó la enemistad con algunos de sus pares al interior de su propio partido, como los senadores Francisco Prat, Sergio Romero y Sergio Onofre Jarpa, quienes no confiaban en él ni lo estimaban parte de su redil. La UDI, por su parte, tampoco lo consideraba un leal aliado. En esos años, era más bien visto como un “solitario”.

Con el correr de los años, Sebastián Piñera fue transformándose en una figura política que, acorde a su visión del poder, hizo uso de este para materializar sus ideas y proyectos, al más puro estilo de la centroderecha liberal. Al mismo tiempo, junto con declarar su admiración por personas como Patricio Aylwin, siempre intentó contemporizar con la derecha más dura —como la UDI— y eso lo compromete. De ahí que hasta el día de hoy siga debatiéndose entre estas “dos almas”.

2. 27F: Del remezón a la unidad

La madrugada del 27 de febrero de 2010, a tan solo 12 días antes del cambio de mando en que Piñera debía asumir su nuevo gobierno, uno de los terremotos más grande de la historia azotó al país, seguido por un devastador tsunami. Fue el segundo terremoto más fuerte ocurrido en Chile y el octavo a nivel mundial. El epicentro fue en el mar, en la región de Ñuble, a la altura de Cobquecura, con una magnitud de 8,8 en la escala de Richter.

Eran alrededor de las 3:30 de la mañana y con Inés nos encontrábamos durmiendo en nuestra casa de La Esperanza, en la comuna de San Clemente. Yo aún no asumía como senador por el Maule Norte. La sacudida fue larga y brutal. Sin luz, y sintiendo que todo se venía abajo, me levanté de un salto. Nos vestimos y rápidamente nos trasladamos a Talca. En el camino, impresionados, fuimos presenciando el alcance de los daños. El panorama era desolador. Gran parte de las antiguas casas, de adobe y tejas, se encontraban en el suelo. Por doquier había puentes y postes derrumbados, animales sueltos y algunos tramos de la carretera cortados por profundos socavones. Era una imagen dantesca.

Al llegar a la Plaza de Armas de Talca, lo primero que pudimos observar fue el edificio de la intendencia derrumbado. La ciudad estaba devastada. Además de unos pocos soldados que circulaban nerviosos por aquí y por allá, no se veía ningún alma. Nos comunicaron que las autoridades se habían trasladado al Regimiento de Talca, adonde nos dirigimos de inmediato. Allí nos encontramos con el intendente Fernando Coloma, quien se encontraba ya reunido con otras autoridades militares, empezando a planear cómo enfrentar la emergencia. Deben haber sido alrededor de las cinco de la madrugada.

Todo era un caos y no se sabía por dónde comenzar. No había electricidad ni para cargar los celulares. Alrededor de tres horas después, llegó la Presidenta Bachelet. Era la primera vez que nos encontrábamos desde que había dejado mi cargo como ministro. Hasta ese momento, ella no manejaba ninguna información sobre el tsunami que, pocos después del terremoto, había golpeado la costa. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), organismo encargado de monitorear y detonar la alarma en caso de requerirse

una evacuación, había desestimado erróneamente la emergencia, pese a que desde el Pacific Tsunami Warning Center, en Hawái, habían llamado para informar sobre la alerta.

A grandes rasgos, lo que ocurrió fue que nuestro sistema de comunicación para informar sobre la evacuación era muy rudimentario, generándose también fallidas interpretaciones y graves errores de parte de autoridades civiles y navales. Años más tarde, en un viaje como senador, presencié cómo operaba el sistema de los japoneses y quedé maravillado: al producirse la emergencia, todos los televisores del país se encendían con un flash, alertando a la población. De haber contado con algo así, muchas vidas de compatriotas se hubiesen salvado. Este déficit se agravaba, además, por el hecho de que la Onemi operaba de manera muy focalizada en Santiago. Si desde las regiones se requerían insumos, todo debía enviarse desde la capital, lo que lentificaba de sobremanera el proceso ante cualquier emergencia.

Dos días después, me trasladé hasta Constitución, una de las ciudades más golpeadas por el maremoto. El mar había entrado por la desembocadura del río Maule, y más de cien personas habían muerto. Muchas más desaparecieron. La ciudad fue arrasada por completo. Durante la última semana de febrero, como era tradicional, se celebraba la Semana Maulina, y en la isla Orrego, ubicada frente a Constitución, acampaban numerosos veraneantes. No se sabe el número exacto, pero allí murieron prácticamente todos. Muy pocas personas lograron sobrevivir.

Tan solo un par de semanas antes, había estado en la zona visitando a Agustín Díaz, el dirigente que me había increpado en un evento de campaña por las acusaciones en mi contra con motivo de la Ley de Pesca, pero quien, tras escuchar mi versión de los hechos, se había acercado a ofrecerme su colaboración. Me había invitado a conocer su casa, ubicada justo sobre la boca del río Maule, así como sus embarcaciones y el frigorífico artesanal que él mismo había construido. Cuando llegamos a Constitución con Inés, lo primero que hicimos fue dirigirnos hacia su domicilio. Me encontré con uno de los panoramas más desoladores que he presenciado en mi vida. Ahí estaba Agustín, sentado sobre un tronco, y a su alrededor no quedaba nada, ni casa, ni frigorífico, ni un solo bote. “Estaba en mi cama, y de repente sentí tronar el mar. Uno sabe cuándo el mar está enojado... Salí tal cual, con mi señora, y arrancamos. Gracias a Dios, porque si no, no estaría aquí hablándole”, me dijo.

Recorrí la zona de Curicó y el borde costero que comprende Duao, La Pesca, Iloca y Llico. Todos los muelles e instalaciones de los pescadores habían desaparecido. ¡No quedaba nada! En Vichuquén, las tradicionales casas de adobe se cayeron a pedazos. En Talca, lo que no se vino abajo terminó demolido. Hubo edificios e iglesias patrimoniales que debieron derribarse, pues no había cómo reconstruirlas. Generaba una impotencia enorme ver a tanta gente cuyas vidas habían sido arrasadas. Habían perdido sus casas, sus fuentes de trabajo y todo lo que tenían... A cada momento, uno se preguntaba: “¿Cómo salimos de esto?”.

El desastre dejó también en evidencia la precariedad de la red hospitalaria. En la Región del Maule, los hospitales de Linares, Cauquenes y Constitución quedaron gravemente afectados, y lo poco que permaneció en pie, o que se pudo improvisar para cubrir la emergencia, no tardó en colapsar. La gente figuraba amontonada en los pasillos, esperando recibir algún tipo de atención médica. En ese sentido, la solidaridad fue clave. Desde Argentina, por ejemplo, mandaron a Curicó un hospital de campaña que fue de gran ayuda. En Talca, en las afueras del camino a San Clemente, en un sitio facilitado por el dueño de Cencosud, Horst Paulmann, se construyó aceleradamente un hospital provisorio denominado Hospital Italiano, ya que contó con la colaboración de ese país.

Durante las dos semanas que siguieron, la Presidenta Bachelet hizo lo que pudo por enfrentar los efectos de la catástrofe, pero dado que estábamos en pleno cambio de gobierno, la capacidad de respuesta inmediata se veía muy limitada. Con el paso de los días, comenzó una verdadera caza de brujas para dar con los responsables de los errores cometidos en el funcionamiento del SHOA y la Onemi. Desde la derecha, intentaron inculpar a Bachelet. Personalmente, creo que dichas acusaciones no tenían asidero alguno. Por desgracia, no se pudo contar con los elementos pertinentes ni con el personal adecuado para diagnosticar y responder a tiempo ante la emergencia, pero de ahí a responsabilizar a la Presidenta me parecía injustificado. Si bien se había avanzado en los sistemas de comunicaciones, nuestro territorio y geografía planteaban un desafío no menor, y no existían suficientes teléfonos satelitales para conectar todas las regiones y coordinar a los responsables de seguridad en situaciones de emergencia. En conclusión, Chile no estaba preparado para un desastre de esa magnitud. Se hizo lo que se pudo, con lo que se tenía a mano en ese momento.

El 11 de marzo, según lo estipulado, se realizó el cambio de mando presidencial en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso. Veinte minutos

antes de que empezara la ceremonia y Sebastián Piñera hiciera su entrada, tuvo lugar la réplica más fuerte, aquella sobre la que los expertos habían alertado y que todos estábamos esperando. En el lugar se encontraban muchas autoridades, incluidos los Presidentes vecinos Alan García, Cristina Fernández y Evo Morales, y el príncipe Felipe de Asturias, hoy rey de España. Desde mi lugar en la primera fila, vi sus caras de espanto al darse cuenta de lo que sucedía. Del techo colgaban unos objetos de acrílico que se mecían, causando una feroz sonajera. Por suerte, nadie arrancó y todos mantuvieron la calma.

Al concluir la ceremonia, el Presidente nos pidió a un grupo de parlamentarios que lo acompañáramos a recorrer las zonas más afectadas, y me envió un mensaje solicitándome que abordara el mismo helicóptero que él. En el trayecto, lo escuché conversar con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sobre cómo enfrentar el desafío. No pude evitar interrumpir. “Léanse la Ley de Emergencias N° 16.282. Les dará facultades para confiscar bienes y comercios, rebajar impuestos, utilizar vehículos, usar generadores y reembolsar todo después. Todo está ahí, escrito en la ley”, les informé. Sabía bien de lo que estaba hablando, pues yo mismo había estado a cargo de la tramitación de esa normativa muchos años antes, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuando ocurrió el terremoto de La Ligua, en marzo de 1965.

Fue en ese contexto de plena emergencia que Sebastián Piñera debió instalar su gobierno. Una ardua tarea, sin duda. Durante su campaña, había prometido mejorar las realizaciones de sus antecesores; sin embargo, debió abocarse durante mucho tiempo a enfrentar el cúmulo de demandas derivadas del terremoto y el tsunami. A ello se sumaría, en agosto de 2010, el accidente y posterior rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José, en la Región de Atacama, que tuvo expectante al país y al mundo entero por casi 70 días.

Durante el primer año de gobierno de Piñera, los senadores demócratacristianos me nombraron jefe de comité. Los comités, básicamente, son instancias que corresponden a cada partido o independientes, y que, junto a la presidencia del Senado, organizan el trabajo legislativo y todos los temas administrativos relativos a la corporación. En la práctica, los jefes de comité son quienes representan a su grupo parlamentario ante las autoridades del Ejecutivo.

El equipo de senadores demócratacristianos lo conformábamos Soledad Alvear, Ximena Rincón, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide, Hosain Sabag, Patricio Walker, Ignacio Walker y el suscrito. Era un grupo

diverso, el cual, pese a sus diferencias, logró trabajar con mucha cohesión, en parte, gracias a que acordamos votar en bloque en la mayoría de los casos, salvo que alguno estimara que la decisión iba en contra de sus convicciones y, entonces, podía informarlo y quedar en libertad de acción. Ese acuerdo nos dio un marco de convivencia muy positivo.

Desde mi rol en el comité, acompañé a los senadores de la Comisión de Hacienda en las negociaciones para la nueva Ley de Presupuestos que hubo que modificar y adaptar con el fin de solventar los desafíos financieros que trajo el terremoto, así como las normativas para asignar recursos a la reconstrucción. Pasé a ser una especie de coordinador entre el gobierno y la oposición, rol que ejercí estrechamente vinculado a los senadores Camilo Escalona, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Weber. Desde la Democracia Cristiana, elaboramos interesantes y positivas propuestas e incluso ayudamos a corregir la dirección en que el gobierno pretendía avanzar respecto a proyectos de ley que no se sustentaban económicamente. Entre ellas, destacó el incremento del impuesto a la renta y la ley que modificó el royalty minero, estableciendo una mayor participación del Estado en el resultado de las utilidades, principalmente de la minería del cobre. Respecto al royalty, había que sortear el compromiso adquirido por el Estado de invariabilidad de la tributación pactada de acuerdo con el Estatuto de Inversiones Extranjeras. Logramos que todas las empresas afectadas renunciaran, para estos efectos, a la invariabilidad tributaria que las protegía. En ese tiempo, este mayor tributo aportó a las arcas fiscales una suma adicional cercana a los 600 millones de dólares.

Creo que, a partir de la dura experiencia del terremoto, se sacaron conclusiones que sirvieron para mejorar. Ciudades como Constitución y Talca tuvieron un verdadero renacer. Al respecto, cabe destacar el importante rol que jugaron la sociedad civil y el sector privado en materia de reconstrucción. La solidaridad, una vez más, se hizo carne en nuestro país. Nadie quedó indiferente ante el desastre.

Obviamente, aún quedan deudas pendientes. La reposición de la red hospitalaria ha costado bastante. Las obras del Hospital de Talca se terminaron gracias a que su construcción se había iniciado previamente a la catástrofe y ya contaba con financiamiento asignado. En cambio, la reconstrucción del Hospital Juan de Dios de Curicó estuvo llena de obstáculos. Durante dos o tres años se debatió si construirlo por concesión o con fondos públicos, luego de una larga polémica acerca del lugar dónde podía levantarse. En 2016, se iniciaron las obras, pero el

proceso aún está en desarrollo, con miras a terminarse en 2022. A la fecha en que escribo estas líneas, sin embargo, este compromiso aún no se materializa. Solo cuando así sea, tras 12 años de espera, los habitantes de Curicó podrán ser atendidos en un nuevo hospital con una cobertura de atención mayor y modernas instalaciones, subsanando así tantas falencias.

En 2014, me integré a la Comisión de Hacienda del Senado —ya formaba parte de la de Economía, entre otras—, la que pasé a presidir al año siguiente. Algunos bromeaban y decían que había resucitado, igual que un ave fénix. Era un negociador duro, pero flexible, y el gobierno me respetaba, pues probablemente me veía como un puente para lograr acuerdos y sacar adelante proyectos.

Como oposición, nunca le negamos al gobierno “la sal y el agua” —como otros lo hicieron con nosotros en el pasado—, y quisimos aprovechar nuestra mayoría para trabajar y mejorar numerosos proyectos de ley. Entre estos, estuvieron el prenatal y posnatal, y el fin de la obligatoriedad de los pensionados de cotizar el 7% para salud. En materia educacional, me tocó participar en la negociación con el ministro Felipe Bulnes, con el objetivo de avanzar en la otorgación de recursos a la educación superior y el financiamiento de becas y fondos concursables para la educación profesional y técnica. Se hizo un gran trabajo, en buena medida, gracias a la capacidad que tuvimos de aunar esfuerzos y enfocarnos en lo que realmente importaba: mejorar Chile.

Nuestro nuevo rol como oposición, con renovadas capacidades de llegar a acuerdos y evidentes réditos que aportaban a consolidar al sector, fue como una bocanada de aire fresco que rejuveneció a nuestra coalición. Ello nos permitió, como hacía tiempo no sucedía, volver a proyectarnos. No solo eso: retornaríamos, renovados, también a La Moneda.

3. Una Nueva Mayoría

En marzo de 2013, Michelle Bachelet, quien meses después de su salida del gobierno había sido nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres, y desde entonces residía en Estados Unidos, oficializó su candidatura presidencial por el PS y el PPD. “Yo no voy a proponer un programa elaborado entre cuatro paredes. Voy a trabajar para conducir el próximo gobierno, el primer gobierno de una nueva mayoría social que nos permita luchar contra la desigualdad”, aseguró. Esa fue la primera vez que se utilizó el término “Nueva Mayoría”.

El cambio de nombre no fue un capricho. La Nueva Mayoría emergía en un nuevo escenario, distinto al que había visto nacer y evolucionar a la Concertación, y esto era algo que nos interesaba enfatizar. Muchos se mostraron críticos, asegurando que se trataba más de lo mismo: un producto reciclado que pretendía vender lo viejo como algo novedoso. Estaban profundamente equivocados. Esta no era la antigua Concertación, sino que una nueva alianza del mundo de izquierda y centroizquierda que abarcaba un espectro más amplio, partiendo por los comunistas, pasando por sectores como el PS y el PPD, y que incluía a grupos más moderados como nosotros y los radicales. Por primera vez, el Partido Comunista se integraba formalmente a la coalición —aunque antes, en determinados momentos, había existido una decidida colaboración—.

El domingo 30 de junio, se llevaron a cabo las primarias presidenciales para elegir a nuestro candidato presidencial. Los partidos suscritos a esta “nueva vieja” alianza eran la DC, el Partido Radical Socialdemócrata, el PPD, el PS, el Movimiento Amplio Social, la Izquierda Ciudadana y el Partido Comunista. Bachelet se enfrentó a Claudio Orrego —por la Democracia Cristiana—, José Antonio Gómez —por el PRSD— y Andrés Velasco como independiente. La candidata arrasó, con más del 73% de los votos.

4. Gobierno nuevo, problemas viejos:

La crisis del financiamiento de la política

La primera vuelta de las presidenciales se realizó el 17 de noviembre de 2013. Fue la segunda instancia electoral, después de las municipales de 2012, en que corrió la inscripción automática y el voto voluntario, aprobados durante el primer gobierno de Bachelet. Los comicios estuvieron marcados por una gran dispersión y multiplicidad de candidatos, sobre todo en la oposición. Además de Bachelet compitiendo por la Nueva Mayoría, y Evelyn Matthei por la Alianza, se midieron en las urnas Marco Enríquez-Ominami —por el PRO, el Partido Liberal y otros movimientos—, Marcel Claude —por el Partido Humanista—, Alfredo Sfeir —por los ecologistas—, Roxana Miranda —por el Partido Igualdad—, Ricardo Israel —por el PRI—, Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt —ambos como independientes—. Michelle Bachelet ganó con el 46,7%. Luego, en la segunda vuelta, triunfó con el 62,17%, en tanto, su contendora, Evelyn Matthei, obtuvo el 37,83%. Esta fue una de las derrotas más aplastantes para la derecha desde el retorno a la democracia.

Por primera vez desde el término de la dictadura, el Partido Comunista pasó a formar parte del gobierno entrante e integró su gabinete con Claudia Pascual como ministra directora del entonces Servicio Nacional de la Mujer y, posteriormente, con Marcos Barraza como ministro de Desarrollo Social. Su incorporación trajo desafíos, sobre todo para la Democracia Cristiana. Existía, entre ellos y nosotros, una distancia a raíz de nuestras propias trayectorias, ideologías y opciones políticas, sin perjuicio de que —hay que reconocerlo— ya no estábamos hablando del Partido Comunista de la Guerra Fría que imponía sus posturas con puño de hierro.

Mientras algunos sectores como el PPD y el PS se mostraron más abiertos a negociar con los comunistas, nosotros fuimos quedando marginados de ese proceso. Así, se fue configurando un bloque “progresista” del que no formábamos parte, algo incomprensible, pues siempre nos habíamos caracterizado por ser un partido innovador y reformista por esencia.

El Partido Comunista objetó ciertos proyectos de ley del gobierno —fueron particularmente exigentes en relación con las reformas laborales y al tema de la educación—, pero también respaldó otros. Sin embargo, mediáticamente hablando, con frecuencia aparecían presionando más allá de lo que se podía hacer y provocando discrepancias en la coalición. Según declaraciones de algunos de sus propios dirigentes, el PC participaba en el gobierno con “un pie en La Moneda y otro pie en la calle”, representando las presiones sociales de los sectores más extremos de la izquierda. Era una fórmula bastante cómoda de participación en las responsabilidades de gobierno, lo que, a su vez, provocaba situaciones de tensión al interior del resto de los partidos de la Nueva Mayoría, especialmente entre nosotros, los demócratacristianos. Por su parte, la prensa y la oposición procuraron utilizar hitos como la visita de Bachelet a Cuba, en enero de 2018, para magnificar la supuesta influencia que los comunistas tenían en el gobierno.

Tampoco ayudó la actitud de algunos miembros de la Nueva Mayoría, quienes se mostraban críticos o autoflagelantes respecto a decisiones y medidas tomadas por la Concertación en el pasado. “Nosotros no vamos a pasar una aplanadora. Vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura”, diría, en marzo de 2014, el senador PPD, mi amigo Jaime Quintana. Fueron palabras desafortunadas que no coincidían, por cierto, con la apuesta de la Concertación durante sus últimos gobiernos, caracterizada más bien por una transformación progresiva del modelo económico. Los dichos de Quintana daban la sensación de que hacíamos nuestra entrada estrenando una política de confrontación. Esto era falso. En la práctica, nunca hubo aplanadoras ni retroexcavadoras.

En pleno proceso de instalación del nuevo gobierno, mientras las autoridades comenzaban a asumir recién sus cargos, el Caso Caval nos golpeó por sorpresa. El escándalo, que explotó en febrero de 2015, puso en el ojo del huracán a la Presidenta, a su hijo, Sebastián Dávalos, y a su nuera, Natalia Compagnon.

Todo había empezado en 2012, cuando el Concejo Municipal de Machalí, en la Región de O’Higgins, aprobó la modificación del uso de suelo —de rural a urbano— de unos terrenos que la empresa Caval, de la que Dávalos, Compagnon y su socio, Mauricio Valero, eran dueños. En noviembre de 2013, la compañía recibió un importante crédito del Banco de Chile para financiar la compra de los predios. La modificación municipal, por supuesto, hizo que se disparara su valor, y en febrero siguiente Caval los vendió por \$9.500 millones, ganando \$3 mil

millones con la operación. El hijo de Bachelet fue acusado de tráfico de influencias, entre otros delitos, dejando un flanco abierto para la Presidenta, que se transformó en un verdadero talón de Aquiles.

El gobierno no supo manejar la situación. Si bien, al principio, lo trató como un tema “entre privados”, terminó involucrada y cuestionada la propia Bachelet. Ante el mar de críticas, Dávalos, quien ejercía como director del Área Sociocultural de la Presidencia —entidad que, normalmente, está en manos de la Primera Dama—, presentó su renuncia. Pero esto no aplacó la ira de la oposición, que aprovechó hasta el extremo la polémica para golpear al gobierno. Incluso llegó a conformarse una comisión investigadora especial en la Cámara de Diputados, con el objetivo de indagar lo ocurrido. Lo que todos realmente se preguntaban era si la Mandataria había estado al tanto, o no, de los negocios de su hijo.

5. Otro bombazo: El Caso SQM

En medio de toda esta polémica, a principios de 2015, se dejó caer otro bombazo, el Caso SQM, el que llegó a amenazar la estabilidad e institucionalidad del gobierno, así como a toda la clase política, sin distingos de sector.

El hecho se gatilló con la denuncia del Servicio de Impuestos Internos, que solicitó investigar a 172 contribuyentes sospechosos de emitir boletas falsas — práctica habitual en la política chilena, pero que nadie condenaba—, las que habrían sido pagadas por la empresa minera Soquimich, controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet. La nómina involucraba tanto a personeros de partidos de derecha como de la Nueva Mayoría. Los dardos apuntaron también al gobierno, al informarse que, entre los investigados, figuraba la empresa Asesorías y Negocias (AyN) de Giorgio Martelli, hombre clave en la recaudación y administración de fondos destinados a las campañas de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009, y de Michelle Bachelet para su segunda campaña presidencial. Entre las boletas para AyN figuraban documentos firmados por Rodrigo Peñailillo, entonces ministro del Interior, con pagos que aparecían financiados por SQM en 2012, cuando este había sido generalísimo de la precampaña de Bachelet. Más tarde se revelaría que SQM entregó \$338 millones a la precampaña de la Mandataria.

Los antecedentes y nuevas boletas continuaron filtrándose. Pronto, senadores y diputados de la DC, UDI, RN, PS y PPD aparecerían involucrados. Desde La Moneda, se echó a andar un plan para evitar que las redes de financiamiento quedaran expuestas, con Peñailillo a la cabeza de la operación. Lo cierto es que era un conflicto transversal, que afectaba a todos.

El 6 de mayo, Michelle Bachelet apareció en el programa de Canal 13 “Qué le pasa a Chile”, anunciando que acababa de pedirle la renuncia a todo su gabinete. Poco después, comunicó que retiraba de su cargo al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, al igual que a su par en Hacienda, Alberto Arenas. Sé que al menos este último no se lo esperaba.

En el Servicio de Impuestos Internos el caso también desató una tormenta. La institución se vio presionada desde distintos frentes para abandonar las investigaciones; pedían que se aplicara una especie de ley de amnistía y se dejara en paz a quienes ya habían quedado expuestos. El director del SII, Michel Jorratt, también apareció salpicado, con boletas emitidas a AyN por la elaboración de un estudio sobre el FUT en la época de precampaña de Bachelet, que sería utilizado para su posterior Reforma Tributaria. Aunque la Presidenta lo ratificó en su cargo, Jorratt decidió inhabilitarse para investigar a AyN. En paralelo, llamó a las empresas a “sincerarse” y a declarar voluntariamente sobre las boletas emitidas, de manera de regularizar su situación tributaria mediante el pago de los impuestos y multas que correspondían. Pero Cristián Vargas, subdirector jurídico de Impuestos Internos, quería seguir avanzando con las querellas, y entre ambos empezó a generarse una tensión progresiva. Vargas encaró a Jorratt, increpándole que, si no lo facultaba para ingresar las querellas, la responsabilidad por una dilación recaería en él, según reveló el medio Ciper. Pero el director del SII no dio su brazo a torcer y decidió retrasar las acciones legales.

Días más tarde, después del cambio de gabinete, y tras el nombramiento del nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, Michel Jorratt finalmente envió la querella al Octavo Juzgado de Garantía y a la semana fue aceptada la renuncia de su cargo.

Al caso SQM lo siguió el caso Penta, así como nuevos coletazos del primero. También se dio a conocer el listado de numerosas otras empresas que habían participado en el financiamiento de campañas políticas. Muchas de estas se habían ya autodenunciado, con motivo del llamado realizado por el director del SII a regularizar su situación.

El segundo gobierno de la Presidenta Bachelet terminó cruzado por esta polémica de las boletas falsas y el financiamiento de las campañas políticas, quedando de manifiesto la urgente necesidad de legislar nuevas y adecuadas normativas al respecto, así como el hecho de que la creación de los denominados “aportes reservados”, durante el gobierno de Ricardo Lagos, no había dado los resultados esperados.

Estos casos desataron una verdadera caza de brujas que se prolongó durante varios años. Los fiscales filtraban datos a la prensa y, antes de que se corroborara si las acusaciones eran ciertas o no, la gente ya estaba condenando a los

parlamentarios, sin importar sus antecedentes o la propia veracidad de los hechos. Bastaba con que apareciera un nombre vinculado para que quedara fichado como supuesto responsable.

El caso SQM y sus derivados se asemejan mucho al proceso fiscalizador que vivió Italia en los años 90, denominado “judicialización de la política”. Gatillado por el arresto del parlamentario socialista Mario Chiesa, y que encontraría su punto más álgido en la imputación del ex Primer Ministro Bettino Craxi, este proceso italiano buscó perseguir, apresar y penalizar a políticos involucrados en una red de corrupción, extorsión y financiamiento ilegal de partidos, en un contexto en el que la permisividad de este tipo de delitos había alcanzado niveles alarmantes. El proceso alcanzó tal magnitud que los propios fiscales —varios de los cuales se postularon posteriormente como candidatos a parlamentarios— llegaron a desarticular al estamento político italiano.

En Chile, tradicionalmente, el Poder Judicial se caracterizaba por mantenerse al margen o ser extremadamente cauto en materia de exposición pública. Hoy, en cambio, se acostumbra ver a diario a fiscales participando en matinales o dando a conocer antecedentes de investigaciones aún en curso. En numerosos casos, se han producido filtraciones a los medios de comunicación que jamás se han aclarado en lo sumarios ordenados por el Fiscal Nacional. La Fiscalía debería asumir con mayor responsabilidad y rigurosidad estos procesos, así como sus consecuencias para la política nacional. No tengo nada en contra de los fiscales, por el contrario; sin embargo, considero fundamental que realicen su trabajo con pulcritud y en silencio, sin tanto aspaviento mediático. Esto no atenta contra la transparencia, sino que más bien garantiza mejores resultados y, por cierto, una alta credibilidad de su quehacer para la ciudadanía.

6. Una acusación infundada: La Fiscalía arremete contra el Senado

En 2017, mientras era presidente del Senado, el Ministerio Público emitió un requerimiento, pidiendo que se le entregaran todos los informes y contratos de asesorías externas solicitadas por los parlamentarios, con el objetivo de iniciar una investigación. Sin embargo, no se fundamentaron las razones ni se indicó en contra de qué senador o senadora se dirigía aquella. Este procedimiento del Ministerio Público causó mucha molestia en el Senado, pues se consideró una acción arbitraria e imprudente, dado que lo que pretendía, al no indicarse en forma nominativa a los senadores sobre los cuales recaían las sospechas —tal como lo exige la ley respecto a esta materia—, era someter a juicio a toda la institución. Más aún, considerando que este intento de acusación al voleo se realizaba en pleno proceso de elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, e incluso con un senador —Alejandro Guillier— compitiendo como candidato a la Presidencia de la República. Ello, indiscutiblemente, podía influir negativamente en el electorado al momento de emitir su voto.

Tras plantear el hecho y analizarlo con los diversos comités de senadores, se decidió enviar el requerimiento ante la Comisión de Constitución, la que dictaminó que la petición era improcedente y no se ajustaba a la ley. Lo lógico era que se indicara a qué parlamentarios se quería investigar y por qué, en lugar de poner en tela juicio al colectivo completo. No era que se quisiera ocultar algo, sino que evitar que aparecieran parlamentarios involucrados en investigaciones sin fundamento, de forma innecesaria, en un contexto en que la campaña de desprestigio se había tornado feroz.

El Ministerio Público insistió e incluso amenazó con ir a la Corte de Apelaciones, pero finalmente desistió, probablemente porque sabían que no iban a lograr un fallo favorable. Había informes, tanto del departamento jurídico del Senado como de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de prestigiosos abogados penalistas, que avalaban nuestra posición.

Fue una situación incómoda. Como presidente del Senado, pagué un alto precio ante la opinión pública por defender, como me correspondía, a la corporación.

De hecho, estoy convencido de que afectó mi candidatura a la reelección por la Región del Maule, pues provocó en el electorado un efecto negativo. Todas las encuestas, días previos a la denuncia del Ministerio Público, daban altas posibilidades de que resultaría electo. Sin embargo, esto varió a partir de los hechos relatados y terminé perdiendo la elección por un estrecho margen.

Al momento en que escribo estas líneas, transcurridos ya casi cinco años de iniciada la investigación al Senado por el ex fiscal regional Manuel Guerra, no se conoce ningún resultado que pueda abrir espacio a denuncia alguna sobre posibles ilícitos por los contratos de asesoría de algún senador, así como tampoco se ha mencionado, ni siquiera por filtración o rumor, la posible formalización de algún presunto responsable. Lo que sí resulta evidente es que esta acción del Ministerio Público contribuyó a proyectar sobre el Parlamento un manto de dudas y suspicacias y, con ello, el desprestigio de la política y los políticos. El fiscal Guerra dejó su cargo en julio de 2021, tras haber cumplido su período, y hoy está en el mundo privado. Aún se mantiene pendiente el proceso que inició con gran escándalo en contra del Senado y, por supuesto, nadie ha respondido por el grave daño que se provocó. Tampoco se ha escuchado a la Fiscalía, la que debiera pedir el sobreseimiento definitivo y dar una explicación pública sobre lo sucedido. Un gran manto de mutismo pareciera haber cubierto el caso.

Por cierto, no estuve exento de verme involucrado injustamente en la polémica por las boletas ideológicamente falsas. Ello comenzó con una filtración en 2015, en el marco de una investigación que la Fiscalía estaba realizando a Aguas Andinas para dilucidar si los pagos hechos al entonces director ejecutivo de Chilevisión, Jaime de Aguirre, habían sido destinados a la campaña presidencial de Sebastián Piñera. A mediados de mayo, el diario electrónico El Mostrador publicó un reportaje con antecedentes sobre boletas emitidas por mí, cuando había dejado de ser senador, a raíz de servicios prestados como abogado a la empresa, entre octubre de 2006 y el 6 de marzo de 2010.

Cuando el periodista me llamó para consultarme, le expliqué que, tras mi salida del Ministerio del Interior, meses después, había celebrado un contrato con Aguas Andinas como asesor legislativo, lo que implicaba la redacción de un informe mensual sobre proyectos de leyes de interés para la empresa. Afirmé que disponía de todos los documentos para respaldar mis dichos y que se habían pagado los impuestos que correspondían. Esa misma noche, llegué a mi casa y reuní todos los informes que había redactado para Aguas Andinas, instruyendo a

mi secretaria para que los expusiera en la mesa de la sala de reuniones de mi oficina al día siguiente. A continuación, convoqué a la prensa. “Aquí están”, les dije a los periodistas. Había cerca de 40 informes mensuales y su correspondiente documentación anexa, material que cubría la amplia mesa de reuniones. Esa fue mi manera de poner el pecho a las balas y de aclararlo todo de una vez, sin más preámbulos. Jamás fui o he sido imputado o formalizado, ni siquiera citado como testigo, por haber recibido pagos indebidos en los períodos que me desempeñé como senador, ni en ningún otro momento.

Michelle Bachelet enfrentó la crisis de financiamiento de campañas convocando a un Consejo Asesor Presidencial contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, también conocido como “Comisión Engel” por el nombre de su titular, el economista Eduardo Engel. En el Parlamento se aprobaron leyes, casi todas por unanimidad, con el objetivo de mejorar la transparencia en el financiamiento de campañas y partidos políticos. El Servel, en tanto, adoptó nuevas atribuciones para reglamentar los gastos de campañas. En abril de 2016, el gobierno promulgó la nueva Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, la que vino a regular los recursos de las campañas políticas, el gasto electoral y las sanciones a los infractores. En resumen, se han tomado medidas positivas, pero creo que aún quedan flancos abiertos que cubrir con acciones más concretas y efectivas.

No será fácil recuperarnos de esta crisis, pero tengo el convencimiento de que estos remezones sirven para que se siga profundizando en ejercer mayor control y exigir absoluta transparencia en el uso de los recursos públicos, así como una estricta ética en relación con los negocios privados. La confianza en nuestras instituciones depende, en buena parte, de ello.

7. Reformas claves y algunas deudas pendientes

El segundo gobierno de Michelle Bachelet sacó adelante reformas estructurales muy relevantes para el futuro del país: la Reforma Educacional, la Reforma Tributaria, la Reforma Laboral y la Reforma Previsional. Quisiera detenerme y comentar, en particular, algunas de estas, dado el grado de transformación y trascendencia que tuvieron para nuestro país.

*

REFORMA A LA EDUCACIÓN: EL PROBLEMA DEL LUCRO

El reconocido economista estadounidense John Kenneth Galbraith sostenía que, tanto la educación como la migración representaban elementos claves para el desarrollo equitativo, eficiente y con contenido social de los países. De forma similar, entre las propuestas de la Revolución en Libertad elaborada para la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva, uno de los proyectos que más me motivaron fue luchar contra la marginación de quienes no podían acceder a la educación, situación que afectaba especialmente al mundo rural.

Nuestra meta era que todos los niños de Chile tuvieran la posibilidad de ir a la escuela. Más tarde, al instalarse la dictadura, tal como mencionara en capítulos anteriores, se vivió un importante retroceso a raíz de la municipalización de la educación. Una vez recuperada la democracia, la Concertación retomó el tema como una de sus principales prioridades: durante el gobierno de Aylwin, se creó el Estatuto Docente y se realizaron importantes inversiones en educación preescolar; en el de Frei Ruiz-Tagle, se instauró la Jornada Escolar Completa, y en los gobiernos de Lagos y Bachelet, se profundizaron estas políticas públicas por una mejor y equitativa educación. Pese a todos estos esfuerzos, la municipalización siguió frenando el alcance de las reformas. Sabíamos que era la principal piedra de tope e intentamos muchas veces revertirla, pero se requería

de un quórum calificado imposible de alcanzar, sobre todo ante la reticencia de la derecha.

En paralelo, y de forma paulatina, con el regreso de la democracia, los chilenos y chilenas empezaron a tener mayor acceso a la educación, incluida la educación técnico-profesional y la universitaria. El aumento en términos de cobertura y acceso trajo desafíos, sobre todo de financiamiento. Aunque se trató de crear soluciones —como el CAE y el Crédito Corfo, entre otros—, a muchos padres o apoderados no les quedó otra posibilidad que endeudarse para que sus hijos pudieran ir a la universidad. Este fue el gran dilema que enfrentó el segundo gobierno de Michelle Bachelet: ¿cómo avanzar en la gratuidad de la educación superior?

Desde nuestra bancada —y en esto coincidían también parlamentarios socialistas y del PPD, como Carlos Montes y Ricardo Lagos Weber, respectivamente— éramos partidarios de afrontar, primero, las deficiencias de la educación pública en todos sus niveles, desde el preescolar hasta el superior. Creíamos que desde ahí era más factible avanzar, posteriormente, hacia los demás desafíos. Proponíamos llevar a cabo la desmunicipalización, mejorar las remuneraciones de los profesores, optimizar los currículos pedagógicos, así como la calidad e infraestructura de los establecimientos públicos, de manera de recuperar y atraer el interés de los estudiantes y de los apoderados. Pero el gobierno se obsesionó con solucionar primero el problema del lucro en la educación subvencionada particular. A partir de esto, se creó una situación confusa y errática, en la que faltó abordar los temas con capacidad de diálogo y reflexión. Incluso se pretendió que el Estado comprara todos los establecimientos particulares subvencionados a sus proveedores, lo que habría requerido de una inversión cuantiosa. Por suerte, esta idea no prosperó.

El gobierno logró algunos avances en la dirección correcta, como la Ley de Inclusión Escolar, la Nueva Carrera Docente y la Ley de Educación Superior, que estableció, entre otros aspectos, la gratuidad para los alumnos de los seis primeros deciles que optaran por ingresar a las instituciones adscritas al convenio. Otros esfuerzos, sin embargo, quedaron inconclusos, tales como normar que solo las instituciones de derecho privado sin fines de lucro pudiesen controlar centros de educación universitaria. Esta legislación, aprobada en marzo de 2018, finalmente fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, aduciendo al principio de igualdad ante la ley y la libertad de enseñanza.

* REFORMA TRIBUTARIA: “LA COCINA DE

Z

ALDÍVAR”

Por aquel entonces, la Comisión de Hacienda era presidida por el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), y la integrábamos José García Ruminot (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Carlos Montes (PS) y yo. El proyecto de Reforma Tributaria había sido despachado casi sin discusión por la Cámara de Diputados, y cuando llegó al Senado decidimos abocarnos a él con profundidad y extremada acuciosidad.

Era un proyecto clave y medular para el país. Queríamos proponer algo que ayudara a terminar efectivamente con el problema de la evasión tributaria, así que decidimos abrir la discusión, e invitamos a una gran cantidad de expertos para que opinaran y presentaran propuestas acerca del tema. Para ello, se convocó a todos los ex ministros de Hacienda, desde el año 1990 hasta la fecha, a los ex presidentes del Banco Central, a representantes de oficinas de auditoría tributaria, al Servicio de Impuestos Internos, a académicos y universidades, a dirigentes de la CUT, de la CPC, de la Cámara de Comercio, y a cualquiera que quisiera asistir. En casi todos los análisis y exposiciones, la conclusión resultó ser la misma: el sistema tributario actual era complejo en demasía. Así nos dimos cuenta de que la elusión tenía más que ver con vacíos legales o con la malinterpretación de la ley. En esa línea, quedó claro que debíamos eliminar el Fondo de Utilidad Tributario, conocido como el “FUT”.

El FUT era un libro de control que debían llevar los contribuyentes que declaraban rentas efectivas en primera categoría, demostradas a través de contabilidad completa y balance general, y en el que se dejaba constancia de la historia de las utilidades tributables y no tributables generadas por la empresa y percibidas por las sociedades participantes. Ello les permitía a las empresas pagar impuestos sobre las utilidades percibidas, y no sobre las devengadas; es decir, si un contribuyente no distribuía la totalidad de las utilidades y, en cambio, las invertía, pagaba solamente el impuesto de lo distribuido. No obstante, aunque

algunos destinaban estas al desarrollo de la propia empresa, otros realizaban inversiones especulativas o bursátiles, no cumpliéndose así el objetivo inicial de fomentar la inversión, lo que se prestaba, además, para evadir. Como herramienta en sí, el FUT no era una mala idea, si hubiésemos tenido mayor capacidad de fiscalización.

Entre los expertos que se presentaron ante la comisión, estuvo el ex ministro de Economía de Piñera Juan Andrés Fontaine, quien planteó la posibilidad de crear un sistema tributario semiintegrado, junto con un sistema de renta atribuida. Esta alternativa mantenía el objetivo de la reforma del gobierno, con algunas modificaciones al proyecto. Yo, personalmente, era partidario de ir incluso más allá e implementar un sistema totalmente desintegrado, como el de Estados Unidos, donde las empresas pagan una tasa tributaria y las personas pagan otra acorde a sus ingresos. En ese contexto, también planteé que, para el caso de las pequeñas y medianas empresas, estos valores se aplicaran a una escala equivalente.

Tras recabar y elaborar todos los antecedentes e informes, presentamos una contrapropuesta al proyecto de ley del gobierno, lo que fue interpretado como una oposición a la reforma. Esto, sin embargo, distaba de ser cierto. De hecho, cuando el ministro Arenas nos comunicó que estaba llegando a un acuerdo con la bancada de RN, le dijimos que, de lograrse, no íbamos a oponernos.

Finalmente, en septiembre de 2014, se llegó a un acuerdo, en base a la propuesta del exministro Fontaine, en el que participaron todas las partes. Hay una foto en la que aparecemos todos: el gobierno y los parlamentarios de la Nueva Mayoría y de la Alianza. La reforma se aprobó y se despachó, sin desmedro de que, al poco tiempo, cuando Arenas fue removido como ministro y en su reemplazo asumió Rodrigo Valdés, este último no tardó en darse cuenta de que la norma requería modificaciones.

El problema de la legislación tributaria actual es que resulta altamente compleja; nadie la entiende, ni siquiera los propios especialistas. Aún hay aspectos que subsanar y, a medida que siga pasando el tiempo, surgirán nuevos temas a raíz de los cambios tecnológicos que estamos viviendo. Lo importante es que contemos con un sistema tributario en el que los chilenos paguen sus impuestos de acuerdo a sus ingresos. En algunos países, se ha optado por medidas tales como el impuesto al gasto, de manera que tú pagas por lo que gastas, y con eso también regulas el gasto. En otros, existe el sistema dual, donde cada quien paga por los

ingresos que recibe, con una tasa de impuestos progresiva. En Dinamarca o Suecia, en tanto, la tasa de impuesto personal es muy alta, pero esto se justifica debido a que la educación y la salud son gratuitas y existe mayor acceso a la vivienda. En Chile, aún hay que analizar si estas medidas son factibles. Sea cual sea la respuesta, lo importante es contar con un sistema que los contribuyentes entiendan. Actualmente, la plataforma online del Servicio de Impuestos Internos hace la declaración casi automáticamente, y eso facilita mucho el trámite, pero no significa que la gente comprenda cuánto está pagando y por qué.

Por otra parte, quisiera destacar la forma en que se dio la discusión de aquella reforma en la Comisión de Hacienda, uno de los procesos con mayor participación ciudadana que he presenciado en mi vida. Se abrieron las tribunas y se permitió la transmisión por televisión para que participaran no solo las personas y organizaciones interesadas en el tema, sino que también aquellos que se habían visto afectados por sus deficiencias.

En julio de 2014, en medio de las conversaciones, utilicé por primera vez la analogía de “la cocina” para explicar cómo funcionaban estos procesos de consulta y participación: “(...) en estas cosas, no todo el mundo puede estar en la cocina. Ahí muchas veces está el cocinero con algunos ayudantes, pero no pueden estar todos, es algo imposible”, dije. A esto agregué: “Los acuerdos muchas veces, en este tipo de soluciones, requieren una manera de hacer las cosas que no pueden hacerse de cara a la opinión pública”¹³⁵.

Mis declaraciones desataron amplias críticas y se me catalogó como “Master Chef”. Algunos lo interpretaron como que estábamos haciendo los acuerdos a puertas cerradas, tras bambalinas y a espaldas de la ciudadanía. Nada podía estar más lejos de la realidad. Lo que quería transmitir era que, para negociar y lograr buenos acuerdos, se debía escuchar primero a todas las partes —tal como lo hicimos en esa oportunidad—, pero, una vez concluido el proceso de participación ciudadana, el tema debía resolverse en la instancia parlamentaria correspondiente. Esto porque, cuando las negociaciones se hacen públicas, es casi imposible controlar el curso del diálogo o conciliar las diferencias, lo que entrampa toda posibilidad de llegar a acuerdos.

Durante esa época ya había comenzado a demonizarse y a ponerse en tela de juicio la “política de consensos”, algo que se asociaba a los gobiernos de la Concertación y, particularmente, a mi persona. Siempre me han dicho que una de mis fortalezas como político ha sido mi buena capacidad como negociador y

articulador, y en esto una de las llaves maestras para lograr acuerdos es la privacidad, no por falta de transparencia, sino que para asegurar su éxito. Únicamente es posible darlos a conocer una vez que se han concretado. Más allá de toda crítica, siempre he valorado los acuerdos, el diálogo, el consenso y la tolerancia; sin estos ingredientes, la política y la gobernanza serían un caos. En tiempos de democracia, es bueno ceder con tal de alcanzar mayorías más amplias. Resulta imposible pensar que, por el solo hecho de contar con mayoría, puedes aprobar lo que se te ocurra.

Confrontar, dialogar y ceder no significa renunciar ni humillarse. Intentar buscar acuerdos no implica traicionar los principios que se sustentan. Todo lo contrario. Quien tiene capacidad de consensuar, dialogar, empatizar y comprender una determinada situación, por encima de las posiciones o criterios personales, es una persona que está no renunciando a sus principios, sino que reafirmandolos. Reivindicaré hasta el último día esta posición, por muy cuestionada que sea.

* LA TRÍADA: REFORMA LABORAL, PREVISIONAL Y UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Durante el último año del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, cumpliendo con el programa prometido, se presentaron ante el Parlamento tres importantes iniciativas: una profunda reforma a la legislación laboral, un proyecto para modificar el sistema previsional y, por último, el texto para una nueva Carta Fundamental que pretendía reemplazar la cuestionada Constitución de 1980.

El Parlamento aprobó la Reforma Laboral propuesta, pese a su difícil tramitación debido a la complejidad del proyecto. No obstante, en definitiva, se dio el visto bueno en todas aquellas materias que requerían corrección, especialmente en lo referente a la negociación colectiva, otorgando a los trabajadores un mayor poder de negociación y eliminando disposiciones que debilitaban el derecho a huelga de los obreros sindicalizados, como la que permitía contratar trabajadores en reemplazo de los huelguistas. Una de las materias más discutidas fue la relacionada con la forma de negociación colectiva; es decir, si se reglaba la negociación por empresa o por rama de actividad. La CUT, claramente, estaba

por esta última alternativa, pero entre los partidos de la Nueva Mayoría existían discrepancias. Estas tenían que ver, sobre todo, con la posición de las organizaciones de pequeños y medianos empresarios, los que sostenían que una negociación por rama de actividad podía llevarlos a tener que asumir costos que eran factibles para las grandes empresas, pero no para las de menor tamaño.

El proyecto despachado por el Parlamento fue un gran avance en materia laboral, aunque hay que reconocer que existen aún numerosos temas que deben actualizarse. Algunos tienen que ver con los recientes cambios tecnológicos introducidos respecto a la modalidad de prestación de servicios, y con el cumplimiento de las jornadas laborales, trabajos telemáticos y fijación de horarios, entre otros.

El segundo proyecto que intentó impulsar el gobierno buscaba introducir importantes modificaciones al sistema previsional tan cuestionado y administrado por las llamadas AFP, el cual fue impuesto por la dictadura de Pinochet y que, indiscutiblemente, tiene insatisfecha a la inmensa mayoría de los chilenos. Su creador, el entonces ministro José Piñera, lo comparó en su momento con un Mercedes Benz... Toda una ironía, ya que ha resultado más bien un verdadero “cacharro”.

Cuando este se promocionó, se aseguró que, con la cotización del 10% de sus salarios, los ahorrantes lograrían a la fecha de su jubilación una pensión cercana a su renta de actividad. No fue, ni jamás ha sido así. En la práctica, las pensiones son muy inferiores, muchas veces del orden del 30 al 40% del ingreso que recibían los trabajadores en actividad. La gente se siente engañada. La baja pensión obtenida no es fruto de que los ahorros hayan tenido poca rentabilidad, sino de que el sistema fue mal diseñado. Era imposible que, con una cotización de 10% sobre el sueldo, se otorgara una pensión digna. En Europa, la cotización sobre el salario alcanza el 20%, costo que asume el empleador y en el que también participa el trabajador, y al que además se agrega un aporte solidario del Estado. De ahí que se paguen pensiones razonables, a lo que se suma una permanente preocupación por mantener al sistema financiado y en correcto funcionamiento.

Junto con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y un equipo —en el marco de un informe elaborado por la llamada “Comisión Bravo”—, trabajamos en un proyecto que proponía transformar el sistema previsional en un sistema de seguridad social mixto de pensiones, en base a un ahorro individual y a un pilar

solidario. Esto se pretendía lograr manteniendo el ahorro individual con el aporte de 10% sobre el salario aportado por el trabajador, y con un aporte del empleador de 5% adicional. Se contemplaba que, de este aporte adicional, el 3% se destinaría a una solidaridad intergeneracional —es decir, de los más jóvenes a los más viejos— y en favor de las mujeres, que resultan siempre discriminadas con una pensión menor en comparación con los hombres, bajo el fundamento de su mayor expectativa de vida.

La tramitación del proyecto quedó pendiente en el Senado y la Presidenta Bachelet no pudo dar cumplimiento a una reforma tan urgente y necesaria. La oposición de derecha no le dio respaldo, insistiendo en que el ahorro por el mayor aporte de parte el empleador (el 5%) debía ir por entero a las cuentas individuales administradas por las AFP. Con el tiempo, como veremos más adelante, este sería uno de los problemas medulares que gatillaría el estallido social y sus posteriores consecuencias.

El 5 de marzo del año 2018, la Presidenta Bachelet presentó un proyecto al Parlamento que proponía el texto para una nueva Constitución que reemplazara la heredada de la dictadura, la que había sido corregida, en buena medida, por los distintos gobiernos de la Concertación. Sin embargo, ante su pecado de origen, había una creciente demanda por reemplazarla por una que emanara de una determinante participación ciudadana.

Previo a las elecciones parlamentarias de 2017, había comenzado a gestarse un importante movimiento que postulaba la elección de una asamblea constituyente para dichos efectos. Con el objetivo de cumplir con esta demanda ciudadana, el año anterior el gobierno había convocado a un proceso de cabildos participativos, tanto a nivel local como de organizaciones sociales, de manera de abrir espacios al diálogo, la discusión y el planteamiento de propuestas de contenido para una nueva Carta Fundamental. Con este objetivo, se pidió la colaboración a un consejo coordinador, el cual fue presidido por Patricio Zapata, prestigioso académico y abogado constitucionalista. Una vez concluidos los cabildos, y tras recoger y sistematizar las propuestas ciudadanas, dicho consejo elaboró una propuesta de texto para la Carta Magna, el que fue presentado por la Presidenta al Parlamento. El documento pretendía no solo cumplir con un planteamiento programático, sino que además representaba una propuesta seria y fundamentada para abrir camino, en respuesta a la demanda ciudadana, tal como se había hecho antes en relación con el proyecto de reforma previsional. No obstante, el gobierno que sucedería al de Bachelet, presidido por Sebastián

Piñera, haría tabla rasa de toda esta labor, no considerando ninguna de estas reformas. Una lástima, considerando que representaban demandas muy sentidas por la ciudadanía. Tuvo que provocarse el estallido social de octubre de 2019 para que el gobierno de Sebastián Piñera recién se abriera a considerar y a escuchar la voz de la gente.

8. Ley de Aborto, un difícil debate

Quisiera aprovechar este espacio de reflexión para abordar también uno de los proyectos de ley más controvertidos y complejos que nos tocó enfrentar en esos años. Se trató de la propuesta del gobierno de la Presidenta Bachelet de despenalizar el aborto en el caso que concurriera alguna de las siguientes tres causales: 1.- la interrupción del embarazo en el caso que estuviere en riesgo la vida de la madre; 2.- aborto que se practicare ante la inviabilidad del feto, y 3.- aborto en el caso de violación. Fue una larga y desgastadora discusión en el Parlamento que tuvo lugar en julio de 2017. Participé en esta activamente, primero como senador, y luego, además, como presidente del Senado.

Quiero dejar constancia de que se trató de un diálogo serio y responsable por parte de partidarios y detractores, y que estuvo exento de posiciones descalificadoras entre los discrepantes. Al contrario de lo que sucede en otros casos, el debate no se dio en el tono de “los que están por la vida” y “los que están por la muerte”, posturas muchas veces tan rígidas que imposibilitan alcanzar consensos y reales aportes a la legislación.

A raíz de mis convicciones religiosas, soy de los que creen fehacientemente en la necesidad de defender la vida de un ser humano desde el momento mismo en que es concebido. Sin embargo, lograba comprender por qué las tres causales propuestas por el gobierno planteaban situaciones necesarias de legislar e incluso despenalizar.

Sobre la primera causal, en particular, consideraba que la despenalización no era necesaria, dado que la acción por salvar la vida de la madre con resultado en la muerte del feto era legítima y no ilícita. Así se había consignado, en 1931, en el artículo 119° del Código Sanitario, y reiterado nuevamente, en 1969, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Sin embargo, días antes de que Augusto Pinochet entregara el mando, el almirante Merino había logrado que la Junta de Gobierno acogiera una propuesta de Jaime Guzmán que modificaba el mencionado artículo y prohibía el aborto en toda circunstancia. Para subsanarlo, me parecía que bastaba con reponerlo en el Código Sanitario, y así lo manifesté, por medio de una indicación, en medio de la discusión del proyecto de ley. Esta

se votó y dividió a la Sala, postergando el debate temporalmente.

Finalmente, mi indicación fue rechazada, después de un largo y controvertido debate en que la mayoría estuvo por mantener la primera causal como se había planteado originalmente. Esto debido a que, según algunos pensaban, de aprobarse mi indicación, se caería el resto del articulado. Ello, sin embargo, no era efectivo, sino algo que correspondía asegurar a la secretaría del Senado al momento de redactar y adecuar el proyecto a lo aprobado, haciendo la precisión requerida en la misma forma en que se procede normalmente con estos casos.

Quisiera insistir y precisar que nunca estuve en contra de la primera causal, pese a que algunos así lo interpretaron. Por el contrario, mi convicción era —y lo sigue siendo— que, en caso de existir riesgo de muerte para la madre, el aborto no constituye un delito, por lo que sería innecesario despenalizarlo, recurriendo en lugar de ello a la misma tesis establecida en 1931 en el Código Sanitario. Si ya existían las herramientas jurídicas para abordar el tema, ¿por qué no utilizarlas?

Para el caso de la segunda causal —frente a la inviabilidad del feto—, apoyé su despenalización, dado mi convencimiento de que con esto no se daba término a una vida humana, puesto que en dichas condiciones no había posibilidad para ese ser humano de sobrevivir en absoluto.

Por último, frente a la tercera causal —en el caso de violación—, voté en contra, convencido de que no me sentía facultado para quitarle la posibilidad de vivir a un niño en gestación. No obstante, y entendiendo la complejidad de la situación de la madre, sostuve que debía eximirse de responsabilidad penal a los partícipes del aborto, aplicándoseles la eximente contemplada en el artículo 10° del Código Penal, dada que la acción era provocada por “una fuerza irresistible”. Tuve presente, especialmente, los casos de embarazos de niñas menores que han sido violadas en sus propios hogares por personas de su entorno familiar y que no se atreven a denunciar los hechos, resultando obligadas a asumir el rol de madres solteras con posible daño psicológico y emocional de por vida.

Finalmente, se aprobaron las tres causales, y en septiembre de 2017 el proyecto fue promulgado. Con ello pasó a legitimarse la intervención para provocar un aborto en los casos ya señalados.

9. Una enfermedad imprevista

Toda mi vida gocé de una excelente salud. Hasta mis 80 años, nunca tuve un problema. A veces incluso decía: “Pucha, ojalá me diera un resfrío para tomarme un día en cama y poder descansar”.

En septiembre de 2016, experimenté los primeros síntomas. Un año antes, me habían hecho una intervención quirúrgica sencilla por un cálculo en la vejiga, pero había tenido una buena recuperación y pronto me sentí bien. Sin embargo, un día, estando en mi oficina, sentí cierto malestar que me preocupó. Fui al médico, me hicieron una ecografía y me diagnosticaron un tumor. “Andrés, tenemos que intervenir lo antes posible”, sugirió el doctor. Tenía que viajar la semana próxima a Azerbaiyán, en una visita oficial, pero el médico fue enfático y me sugirió cancelar todas mis actividades.

En momentos tales, uno se hace mil preguntas, sobre todo respecto a la familia y a cómo hacer para no causarles problemas. Decidí que quería dejar todo preparado, pues nunca se sabe qué puede suceder. Tomé todas las medidas pertinentes, en el caso de que el cáncer se complicara. Le conté a mi familia más cercana, y ellos me apoyaron cien por ciento, con cariño, pero también con mucho respeto y cautela. Fuera de ese círculo más íntimo, decidí manejar el tema con la mayor privacidad posible, pues no me parecía conveniente que algo así se filtrara.

Por esos días, me encontraba desempeñando un rol bastante preponderante entre los parlamentarios de nuestra coalición. Se venían desafíos importantes, como la discusión de la Ley de Presupuestos, y desde el partido me habían planteado que postulara a la reelección. Sobre esto último aún no tomaba una decisión, pero la noticia de mi enfermedad complicó el panorama aún más. Tenía serias dudas sobre si sería capaz de enfrentar una campaña mientras batallaba contra el cáncer. Y, como si todo eso fuese poco, además me habían nominado para asumir como presidente del Senado en marzo próximo. Estaba claro que debía tomar una decisión: debía sincerarme frente a mis pares y, a la vez, asumir y dimensionar personalmente lo que me estaba pasando.

La operación fue bastante invasiva, pero por suerte todo salió bien y no quedó rastro del tumor. La recuperación, sin embargo, tardó más de lo previsto. Estuve casi un mes en reposo y no pude estar presente en la discusión de la Ley de Presupuestos. En plena sesión, el ministro Valdés, con quien habíamos llegado a construir una relación de trabajo cercana y de mucha cooperación, escribió en una hoja de cuaderno, de puño y letra, un mensaje que decía: “Senador Andrés Zaldívar: Recupérese, lo queremos pronto de vuelta con nosotros”. Me entregaron el mensaje cuando aún me encontraba en un estado bastante crítico, y el gesto me emocionó en lo más profundo. Aunque nadie me preguntaba expresamente por mi condición de salud, ya que mantuve estricta reserva, recibí muchas manifestaciones de cariño y aprecio, sobre todo desde miembros de nuestro sector.

Coincidió, además, que ese mes fue uno de los más complejos para el gobierno de Bachelet. Falló la tramitación de la Ley Electoral exprés, nos derrotaron en las elecciones municipales, se rechazó el reajuste para el sector público... Desde mi cama en el hospital, tratando de guardar descanso, presencié por televisión estos eventos, invadido por la frustración al ver cómo en la coalición parecía imperar un desgobierno y desorden absolutos. Cada quien hacía lo que quería. Terminé acortando mi licencia médica y volví al Senado antes de lo indicado, pues creía fundamental cumplir con nuestros objetivos y plazos, sobre todo en materia de presupuesto y educación.

Retomé mi trabajo parlamentario, enfocado en no abandonar mis compromisos políticos. Había perdido peso y me cansaba con mayor facilidad, pero me sentía de regreso en mi lugar. En mi primera sesión, Lagos Weber, quien presidía el Senado, dio un discurso muy emotivo en que me dio la bienvenida. “Ojalá nos siga iluminando”, concluyó. Me sentí muy emocionado y valorado. Al comenzar la sesión, pedí la palabra: “Nada más que para agradecerles a usted presidente, a todos mis camaradas y compañeros senadores. Pasé un tiempo delicado, pero ya estoy aquí, bien, y seguiré trabajando en el Senado, con la fuerza que me dé Dios”. En marzo siguiente, asumí la presidencia del Senado.

Después de vivir algo así, uno dimensiona qué tan efímera es la vida y lo frágil que somos. Todo puede cambiar de un día para otro. Cada día que pasa es un día menos, y eso es una realidad, no solo para la gente que sufre enfermedades. Antes del cáncer, no reflexionaba al respecto. Me sentía joven, ilimitado. Fue un golpe de realidad que me hizo pensar que debía empezar a prepararme, pues mi partida podía ocurrir en cualquier momento.

No me arrepiento de las decisiones que he tomado, aunque creo que podría haber disfrutado un poco más mi vida personal. A la vez, entiendo que todo es consecuencia de las opciones que uno toma, y yo elegí a sabiendas. No desandaría ni un solo paso. No creo que la enfermedad me haya cambiado, pero sí salí fortalecido en mi convencimiento de seguir trabajando por lo que creo y, por supuesto, muy agradecido de la vida.

10. Falta de voluntad común: El fin de la Nueva Mayoría

A comienzos de 2017, la directiva del Partido Socialista acordó que definirían a su candidato presidencial a través de una primaria abierta, o “consulta ciudadana”, en la que tanto militantes como votantes podrían participar. En ella competirían los socialistas Fernando Atria y José Miguel Insulza, el independiente Alejandro Guillier y el expresidente Ricardo Lagos. Sin embargo, a mitad de camino, el comité central cambió de opinión, anunciando la suspensión de la consulta pública e informando que la votación se haría de manera interna y secreta para dirimir entre Lagos y Guillier. Los demás candidatos reaccionaron con evidente molestia. En la votación interna, Guillier obtuvo 67 votos, versus los 36 del exmandatario. Hubo, además, cuatro votos nulos. Al día siguiente, Lagos anunció que se retiraba de la contienda.

Fue un grave error el que cometió el PS al cancelar y descalificar estas primarias abiertas, las que, por lo demás, ya estaban en proceso. Todos los candidatos eran viables, y la consulta le habría dado legitimidad a cualquiera que resultara electo. En una jugada incomprensible, proclamaron a una persona muy respetable, pero que ni siquiera pertenecía a sus filas. No tengo nada contra Alejandro Guillier — al contrario, es una persona a la que le tengo gran respeto y aprecio—, pero fue una decisión sin sentido, y creo que él mismo salió debilitado, pues bien podría haberse presentado a las primarias y haber ganado, potenciando así aún más su liderazgo. Mi hipótesis es que lo que se hizo, finalmente, tuvo como única intención sacar a Ricardo Lagos del juego. Era obvio que, después de una situación así, el candidato presentaría su renuncia. ¿Y cómo no? Si había sido despreciado por su propio partido, y más aún en medio de una votación secreta.

Nosotros también salimos afectados con todo esto. Hasta entonces, la DC había estado dispuesta a participar en primarias, pero a medida que empezaron a adherir a la candidatura presidencial de Guillier los otros partidos —el Partido Radical y el PPD—, fuimos quedando acorralados y nos vimos obligados a lanzar nuestra propia candidatura. Así fue que apareció la senadora Carolina Goic como una opción.

Ella estaba decidida. No quería ir a primarias, y esa era su condición. No

podíamos obligarla a lo contrario. Lo dijo públicamente y nosotros la apoyamos, pero sabíamos que estábamos en desventaja.

El 11 de marzo de 2017, se convocó la junta nacional de la DC para proclamar a Carolina Goic, entonces presidenta del partido y senadora, como nuestra candidata a la Presidencia de la República. La decisión se tomó por acuerdo unánime. Sin embargo, cuando ella pidió a la junta que no se le permitiera a Ricardo Rincón ser candidato a diputado, producto de la denuncia que lo afectaba por violencia intrafamiliar en 2003, el asunto se llevó a votación y el partido no acogió su requerimiento.

Para Carolina, esto fue una quitada de piso muy fuerte. La afectó tanto que estuvo a punto de renunciar a su candidatura. Se retiró molesta de la junta y se dirigió a su oficina, no sin antes pedirme que la siguiera para conversar en privado. Creo que ella siempre se había sentido apoyada por mí. Y es que incluso en la votación, si bien yo no era partidario de dejar a Rincón fuera, había apoyado su moción, puesto que me parecía importante hacer un gesto de respeto a su autoridad. Entendía por qué estaba dolida: aquel había sido el primer acto de fe que le había pedido a su partido y le habían dado vuelta la espalda. ¿Cómo iba a levantar una candidatura sobre esa base?

Nos reunimos, y hoy puedo reconocer que cometí un error. Debí haber sido honesto en ese momento, y haberle planteado que creía que su candidatura partía con una debilidad insalvable. Debí haberle dicho que aún estábamos a tiempo de llamar a Ricardo Lagos y proclamarlo a él. Estaba seguro de que otros partidos nos apoyarían. En cambio, por respeto a su persona, guardé silencio, de lo cual me arrepiento hasta el día de hoy. No le dije nada, y Carolina Goic, en forma heroica, siguió adelante con su campaña.

Desde la DC, hicimos un último esfuerzo por salvar las elecciones para la Nueva Mayoría. En mi oficina de la presidencia del Senado nos reunimos con Álvaro Elizalde, timonel del Partido Socialista, y con la directiva del PPD, del PR y del Partido Comunista. Ante el hecho ya consumado de la proclamación de dos candidatos a la presidencia (Guillier y Goic), era necesario presentar una sola lista parlamentaria, ya que, de acuerdo con la nueva Ley Electoral, ir en dos listas derivaría en la elección de menos parlamentarios en comparación con la derecha, que iba en una sola lista. Además, era necesario considerar que el naciente Frente Amplio nos restaría votación por el flanco de la izquierda.

Este acuerdo electoral debía ir acompañado, a su vez, con el compromiso de que el candidato que pasara a segunda vuelta recibiría el apoyo de su contendor. Lo llamé “un acuerdo del desacuerdo”. Pero la tesis fue descartada, y el PS, el PPD, el PR y el PC siguieron adelante con su candidatura y con una lista parlamentaria propia, excluyendo a la Democracia Cristiana. Mi lectura, hoy, es que el PS quiso acorralarnos. El hecho de ir con dos candidatos no era especialmente dramático, siempre y cuando contáramos con una lista parlamentaria única. Pero la DC, como ya habíamos vaticinado, corrió sola.

Ese año hizo su entrada el Frente Amplio, nuevo actor en el espectro de la izquierda nacional. Planteado como una alternativa al proyecto de la ex Concertación —ahora Nueva Mayoría—, era liderado por el fundador de Revolución Democrática, el diputado Giorgio Jackson, y el entonces líder de la Izquierda Autónoma, Gabriel Boric, ambos ex dirigentes estudiantiles que habían empezado a posicionarse como figuras públicas durante el movimiento estudiantil de 2011. Para aquellas elecciones, dicha coalición presentó a la periodista Beatriz Sánchez como candidata presidencial, un liderazgo inesperado pero fuerte, que terminaría restándole buena cantidad de votos a la Nueva Mayoría y pisándole los talones a Guillier en la primera vuelta.

La Nueva Mayoría apareció así tensionada internamente, algo que los votantes percibieron y juzgaron. A esto hay que sumarle los escándalos políticos que venían produciéndose en el curso de los últimos años, lo que debilitó al gobierno de Bachelet, cerrando con una baja notable de respaldo. Frente a esto, mucha gente de centro prefirió votar por Sebastián Piñera en lugar de Alejandro Guillier, especialmente en la segunda vuelta. El 19 de noviembre de 2017, el candidato de la Alianza quedó primero con el 36,64%, seguido del abanderado del bloque PS-PPD-PC-PR, quien obtuvo el 22,70%. Un poco más atrás, Beatriz Sánchez recibió el 20,27% de los votos, mientras que Carolina Goic logró el 5,88%. Al mes siguiente, Piñera fue electo Presidente de Chile por segunda vez, con el 54,58%; nueve puntos más arriba que Guillier, quien logró el 45,42%.

Un dato no menor: el 53,8% de los chilenos se abstuvo de votar en esas elecciones. Ello daba cuenta de la desafección y falta de confianza de la ciudadanía respecto de la política. Ya entonces se podía palpar el inicio de la crisis que se levantaría en octubre de 2019, en la forma de una revuelta social.

En las elecciones parlamentarias, no nos fue mucho mejor. La lista del PS, PPD, PRSD y PC, denominada “Fuerza de la Mayoría”, obtuvo 43 diputados y siete

senadores. La DC, en nómina conjunta con el MAS y la Izquierda Ciudadana, sacó 14 diputados y tres senadores; un contraste preocupante en comparación con el Frente Amplio, que logró 20 cupos en la Cámara y uno en el Senado. A nivel de coalición, los resultados también fueron decisivos. La Nueva Mayoría perdió el 14% de su representación parlamentaria. Yo mismo estuve entre los derrotados, ya que no conseguí mi repostulación senatorial por el Maule.

Se pueden realizar múltiples lecturas acerca de los factores que influyeron en este resultado. El desorden y la crisis interna tuvieron que ver, pero creo que también el efecto del nuevo sistema electoral que entró a operar en esas parlamentarias fue determinante: uno de tipo proporcional, que venía a reemplazar al antiguo y cuestionado binominal. La Ley N° 20.840, promulgada en 2015, sustituyó el antiguo sistema por uno basado en el método D'Hondt, que asigna los escaños a las listas electorales de manera proporcional al número de votos obtenidos. Promovida por el gobierno de Bachelet, esta reforma buscaba fortalecer la representatividad en el Congreso, aumentando el número de diputados (de 120 a 155) y de senadores (de 38 a 50), y reduciendo el número de distritos (de 60 a 28) y de circunscripciones senatoriales (de 19 a 15). Además, incluía una ley de cuotas para asegurar la participación igualitaria entre candidatos hombres y mujeres, así como mecanismos de financiamiento que apoyaban esto último.

Como resultado de estos cambios, por ejemplo, en la Región del Maule terminaron compitiendo tal cantidad de candidatos a senadores (28 en total) que, aunque la mayoría obtuvo pequeños porcentajes, candidaturas como las de Alfredo Sfeir y Andrés Velasco nos restaron considerable votación. En mi caso, debo reconocer que no vimos venir la derrota.

En el Maule, la derecha sacó la mayor cantidad de votos: el UDI Juan Antonio Coloma logró 15,85%, seguido de Castro con el 14,73% y el RN Rodrigo Galilea, con 7,63%. En tanto, desde la Nueva Mayoría, salieron electos Ximena Rincón (DC) con 10,48%, y Álvaro Elizalde (PS) con 8,36%. Menos de tres décimas más abajo quedé yo, con el 8,01%. Fue un revés doloroso, sobre todo en una región donde veníamos ganando con mayorías abrumadoras desde la transición. Reconozco, también, que fue un error mío haberme postulado a la reelección. Tardé más de la cuenta en tomar la decisión, pues estaba lidiando con el cáncer, pero debí haber buscado un reemplazo a tiempo.

A raíz del nuevo sistema electoral, un número importante de candidatos —para

ser más precisos, 33 parlamentarios— resultaron electos con votaciones inferiores a la obtenida por sus contrincantes de listas diferentes. El sistema de “arrastre” los favoreció. Tal fue el caso de los actuales senadores Carmen Gloria Aravena (Evópoli), quien obtuvo el 1,24% de los votos; Kenneth Pugh (Chile Vamos), quien sacó 2,15%, y Juan Ignacio Latorre (RD), que obtuvo 4,60%, entre otros. Respecto a los diputados, es posible mencionar el caso de Natalia Castillo (RD) electa con el 1,02%; Gonzalo Winter (MA), con el 1,20%; Boris Barrera (PC), con el 1,29%; Amaro Labra (PC), con el 1,82%; Karin Luck (RN), con el 1,82%; Sebastián Álvarez (Evópoli), con el 2,37%, o Raúl Alarcón, más conocido como “Florcita Motuda” (PH), elegido con el 2,67% de votos.

Ahora bien, la forma en que se articuló la izquierda —con el PS imponiendo a su candidato y descartando ir en una lista conjunta, la DC corriendo sola y el Frente Amplio arrastrando parte del apoyo de la Nueva Mayoría— fue fiel reflejo del animus reinante en nuestra coalición: la imposibilidad de aunar esfuerzos y proyectar una voluntad común. Algunos empezaron a hablar, de pronto, de la necesidad de llegar a entendimientos con el Frente Amplio, una discusión que se mantiene hasta hoy.

En síntesis, creo que la directiva del PS cometió un gran error y, en buena parte, fue responsable de que el gobierno pasara a manos de la derecha. Sacaron de la contienda a Ricardo Lagos, quien poseía un liderazgo que perfectamente podría haber encauzado y continuado el legado de Michelle Bachelet, incluido el proyecto de la nueva Constitución. Estoy convencido de que, si se hubieran realizado las primarias, y Lagos hubiese estado en la papeleta, los demócratacristianos lo hubiéramos apoyado y este habría sido electo candidato del sector, con posibilidades irrefutables de ganar las presidenciales. El PS desperdició un capital político muy importante.

11. La reconfiguración de las fuerzas políticas de la ex Concertación

Todo esto conduciría a la Nueva Mayoría a su descomposición. La Democracia Cristiana, en paralelo, estaba viviendo su propio proceso de reconfiguración, salpicada por el rearme de las fuerzas en la coalición. A comienzos de 2018, un grupo de 30 militantes, encabezados por Mariana Aylwin, presentó su renuncia al partido a través de una carta dirigida al entonces secretario nacional del partido, Gonzalo Duarte. En ella manifestaban su preocupación ante la eventual reanudación de “una alianza, no solo con los partidos de la izquierda tradicional y el Partido Comunista, sino que también con el Frente Amplio”, así como ante la radicalización de las posturas de la Nueva Mayoría. El grupo, autodenominado “Progresismo con Progreso”, planteaba en la misma misiva una abierta crítica tanto a la coalición como a sectores de la DC y a la propia directiva. “Nos mueve el haber llegado a la dolorosa conclusión de que la Democracia Cristiana ha tomado un rumbo que —a nuestro juicio— se aleja de la visión propia de sociedad, desdibujando su identidad. La Nueva Mayoría dejó de ser una alianza de centroizquierda, al estar bajo una clara hegemonía de una izquierda refundacional, renegando del patrimonio de la transición y los gobiernos de la Concertación y abandonando a un vasto sector de la sociedad que no se sintió interpretado por el espíritu rupturista y de confrontación que la caracterizó”¹³⁶, señalaban.

Meses más tarde, y por separado, Soledad Alvear presentaba su renuncia al partido, seguida de Gutenberg Martínez. También acusaban una falta de identidad en la Democracia Cristiana, y decían querer salir en busca de un camino propio. Así les oí decir a ambos, a lo que respondí que “me parecía más lógico dar la pelea desde adentro, tal y como siempre lo habíamos hecho en el partido, donde muchas tendencias habían logrado coexistir. Esto, en el fondo, más que problemas, representa una tremenda fortaleza política. Si el barco se estaba yendo a la deriva, lo más prudente era no abandonarlo, sino tomar la conducción y corregir su rumbo. Esa siempre ha sido mi postura ante momentos de crisis”.

Todas estas salidas y críticas abiertas de dirigentes me parecieron un error.

Fueron gestos y declaraciones que no hicieron más que dañar al partido. Varios de estos dirigentes ni siquiera fueron capaces de sacar adelante un proyecto alternativo relevante. Podrían haber aportado mucho más si se hubieran quedado y peleado desde adentro. Siempre he pensado que el espacio para hacer planteamientos es la institucionalidad. De lo contrario, si todos empezamos a renunciar, o a quienes tienen una opinión distinta —como mi hermano Adolfo— se les termina expulsando, al final no quedará nadie que reme hacia ningún lado y el bote dejará de moverse.

Hay que ser honestos: Piñera no ganó las elecciones presidenciales de 2017 porque sí. La gente que votó por él respondió al hecho de que nuestro gobierno no había cumplido con las expectativas. Varias de nuestras reformas resultaron contradictorias. En materia educacional, por ejemplo, terminamos peleándonos con todos los actores de la educación particular subvencionada, situación que podría haberse evitado. La clase media se sintió desatendida. No veía en lo que hacíamos beneficios para ella. Asimismo, la gente ya estaba desilusionada del sistema de pensiones, pese a los intentos de mejoras de Bachelet.

Así fue que llegamos a un punto en que la Nueva Mayoría dejó de existir como colectivo. Nadie hoy habla de la “Nueva Mayoría”. El espectro político se ha reconfigurado en tres bloques: la derecha, por una parte; los partidos de la ex Concertación, que podríamos denominar “alianza de centroizquierda”, y el Frente Amplio, respaldado por el Partido Comunista.

Estamos en una etapa de desintegración y rearticulación de la centroizquierda y la izquierda chilena, y el nuevo desafío es ver cómo nos encarrilamos de nuevo y le damos un sentido a este proceso. ¿Cómo refundamos el sector en el contexto actual? Está claro que no es la primera vez que sucede algo así. Son procesos naturales de recomposición, de los que siempre terminan emergiendo nuevos liderazgos.

12. Una causa sin causa

No habían pasado ni siquiera cuatro días desde mi derrota por la reelección en el Maule, cuando el 22 de noviembre de 2017 el diario La Tercera publicó en primera página: “Fiscalía investiga al Presidente del Senado por casos de cohecho”. En un extenso reportaje, titulado con letras destacadas, se leía: “Andrés Zaldívar es indagado como imputado por tráfico de migrantes y cohecho”. Quedé estupefacto. Era algo insólito y no lograba entender qué había ocurrido. El artículo relataba cómo la Fiscalía Centro Norte no solo había tenido acceso a mis conversaciones telefónicas, sino que además solicitaba al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la extensión de dicha facultad, argumentando una supuesta indagatoria por tráfico de migrantes y cohecho. El fiscal a cargo de la investigación era Marcelo Carrasco. Toda la información del diario se fundaba en una investigación bajo secreto, filtrada desde la Fiscalía. Estaba claro que se trataba de una infamia y un verdadero intento de fusilamiento político comunicacional. ¿Quién fue el autor? Nunca lo sabré.

Ahora bien, las acusaciones por tráfico de migrantes surgían de mis vínculos con el empresario Álvaro Jofré Cabezas, mientras las de cohecho se debían a llamados telefónicos que había sostenido con el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, y con el director general de la PDI. Según decía el medio, al primero yo le habría consultado por una supuesta “terna de jueces” para el Tribunal Oral de Talca, y al segundo le había preguntado por un funcionario sumariado y el traslado de un gendarme.

Mientras leía el insólito artículo, que relataba cómo habían llegado a mí a partir de las escuchas telefónicas a Jofré, me llené de rabia. No podía entender cómo tamaña acusación podía sustentarse en tan débil evidencia. Decidí no esperar a que empezaran los coletazos, sino que abordar el tema de frente y de inmediato, tal como lo había hecho con la polémica por las boletas de Aguas Andinas. Convoqué a una conferencia de prensa, a la que llegaron muchos periodistas, durante la cual expliqué lo que había sucedido realmente. Sobre las acusaciones por cohecho, relaté que, en efecto, había conversado con el subsecretario Mena y con el director de la PDI, pero que jamás había intentado usar mis influencias

para crear o forzar ninguna situación respecto de otros funcionarios. Habían sido conversaciones como las que habitualmente se sostenían —y que eran muy propias de mi cargo— sobre el resultado de algún proceso de selección, o la situación de algún funcionario en particular. Respecto a Álvaro Jofré, conté que lo había conocido durante mi última campaña, cuando me contactó para ofrecerme insumos de propaganda electoral, los que importaba. Además, el empresario me había comentado que se dedicaba a asesorar y traer a Chile inversionistas chinos para que conocieran la industria frutícola y vinícola local, con miras a posibles negocios. En una ocasión, me había llamado a mi oficina para informarme sobre la llegada de los materiales de campaña importados desde China y, de paso, me comentó que tenía problemas con la tramitación de las visas de unos ejecutivos a quienes había invitado al país. Precisó que, pese a intentar por la vía del trámite de Transparencia conocer cuáles eran los reparos, no había logrado conseguir respuesta. Le respondí que contactaría a alguien en el Ministerio de Relaciones Exteriores para consultar por la demora. Tal vez mi voluntad de colaborar fue un error. Poco después, desde el ministerio me hicieron llegar un informe, en el que se indicaban las causas por las que no era posible conceder dichas visas, el que reenvié a Jofré a través de mi jefe de gabinete... Hasta ahí llegó el asunto, o al menos eso creía yo. No tenía cómo saber que a Jofré lo venían investigando por ingresar a Chile a migrantes chinos con visas de turista.

El Fiscal Nacional informó que se realizaría un sumario interno por estas filtraciones, a cargo de la fiscal Ximena Chong. No obstante, nunca más se supo de ese sumario o qué resultado se obtuvo. Por su parte, el propio presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, al imponerse de los hechos, declaró: “Esto es muy grave y tendrá que saberse por qué se investiga y se interviene con relativa facilidad el teléfono del presidente del Senado. Eso lo encuentro de una importancia y delicadeza grande”¹³⁷, tras lo cual se ordenó una investigación, pero tampoco se obtuvieron resultados. Finalmente, la Fiscalía Nacional explicó que el fiscal Carrasco descargó los antecedentes desde el computador de la jueza Cheryl Fernández mediante un pendrive, en el sistema digital del tribunal, equivocándose al no indicar que era información reservada. Es decir, todo quedó en meras explicaciones y nadie asumió la responsabilidad de los hechos.

La fiscal Ximena Chong me pidió que prestara declaración. Presenté todos los antecedentes a través de mi abogado Jorge Bofill. El caso estalló en los medios y en las redes sociales, pese a que nunca fui formalizado. Así lo reconocieron desde la Fiscalía públicamente. También admitieron que no había verdaderos

antecedentes para aprobar la interceptación de mis llamados telefónicos. De hecho, cuando el fiscal Carrasco solicitó a la jueza Cheryl Fernández la extensión de la medida, ella lo descartó tajantemente, aduciendo falta de fundamentos. Todo esto evidenció una profunda falta de acuciosidad de parte de los fiscales involucrados.

La tarde en que estalló el escándalo, al inicio de la sesión en el Senado, varios senadores solicitaron voluntariamente la palabra para expresar su respaldo a mi persona, en respuesta a la denuncia publicada por La Tercera. Sorprendido, decidí dejar mi lugar en la testera como presidente, y ubicarme en el asiento que me correspondía como senador. Intervinieron senadores de todos los partidos, quienes me manifestaron su apoyo y expresaron su rechazo a las imputaciones que se me pretendían atribuir. Jamás podré olvidar ese gesto de parte de mis colegas senadores. A esas alturas, había comenzado a preguntarme si acaso debía presentar mi renuncia al cargo de presidente del Senado y quedar en libertad para defenderme de tan grave injuria, sin exponer al resto de la institución en el proceso. El explícito apoyo de mis pares, sin embargo, me hizo sentir que tenía la capacidad para mantener la representación de estos y que contaba con el apoyo moral para ello. Concluidas las intervenciones, desde mi banco y como simple senador, agradecí el respaldo que gratuitamente me entregaban y reiteré mi reclamo de inocencia ante la injusta e infundada acusación. Estaba seguro de que se aclararían los hechos denunciados y que la Fiscalía así tendría que reconocerlo.

Pero una vez desechada la investigación en mi contra ante la falta de fundamentos, la Fiscalía nunca salió a comunicar este hecho ante la opinión pública. Han pasado varios años de esto, y nadie ha dicho nada. Tampoco se comunicó que se había desistido de continuar la investigación por no existir fundamento para ello, ni que el tribunal había decretado el sobreseimiento definitivo, declarando que no había ningún cargo que me afectara. Desde el Ministerio Público se limitaron a indicar escuetamente: “No vamos a perseverar”. La Tercera, el diario que provocó el escándalo y que filtró los primeros antecedentes, tampoco publicó nada al respecto. Con suerte, aparecieron unas pocas líneas en El Mercurio. Es decir, se me expuso injustamente a través de la prensa, acusándome de cargos muy graves, y ningún fiscal recibió sanción alguna.

Hasta el día de hoy tampoco he tenido información sobre el resultado del sumario interno que ordenó el Fiscal Nacional, y si dicho proceso se llevó a cabo

realmente o fue una simple declaración para salir del paso.

El 9 de enero de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago comunicó, en la parte resolutive de su fallo, lo siguiente: “En consecuencia, se sobresee parcial y definitivamente en la causa referida en lo que se refiere a todos los delitos investigados por el Ministerio Público en dicho procedimiento respecto de don José Andrés Rafael Zaldívar Larraín”.

En numerosas oportunidades me han preguntado si pienso tomar medidas al respecto. Podría interponer una querrela contra el Estado o pedir una indemnización, pero no lo haré. Sé que proceder de esa forma solo llevaría a los odiosos a decir que estoy buscando algún beneficio. En las redes sociales, hay gente que me ha apoyado, pero algunos también han expresado sin ningún tapujo que debería “desaparecer”. Con todo esto, llega un momento en que uno se cansa y se pregunta: “¿Para qué seguir?”. Por eso es que hoy son contados los políticos que salen a defenderse o sacan la voz. Muchos prefieren guardar silencio y pasar desapercibidos.

13. La salida del Senado: “Voy y vuelvo”

El 21 de marzo de 2017 asumí, por última vez, la presidencia del Senado. Durante 25 años formé parte de él, siendo este el lugar donde ejercí por mayor tiempo mi quehacer político. Llegué a sentirlo como mi propia casa. Desde ahí, pude observar y vivir en carne propia lo que es la política. Fue una escuela extraordinaria y un espacio de retroalimentación que me permitió mantener un permanente contacto con la realidad y la gente de mi país. Conocí y compartí en terreno con valiosas y sencillas personas, con destacados líderes y dirigentes, con parlamentarios y ministros, y también me dio la posibilidad de viajar y relacionarme con autoridades internacionales, tales como Helmut Kohl, Bill Clinton, José María Aznar, Felipe González, Jacques Chirac y el exemperador Hirohito. Conocí al rey de España y al de Marruecos, a la reina de Holanda, al Dalai Lama, a Deng Xiaoping y a mandatarios de diversos países.

Mi paso por el Senado, y en especial mis períodos como presidente del mismo, constituyeron una experiencia enriquecedora y completa. Fue un cargo al que dediqué todas mis energías, capacidades y conocimientos, a la vez que aprendí muchísimo de los acuerdos, discusiones y debates que ahí presencié y dirigí. A medida que me tocó “parlamentar” con mis pares, entendí que aquella era la democracia en su expresión más profunda, y decidí hacer de esto una norma en el ejercicio de mi cargo. Fui presidente del Senado no solo de unos pocos o de la mayoría que me había votado, sino que de todos los senadores que representaba, haciendo valer el respeto y la tolerancia. Ello, en ocasiones, tuvo altos costos y me significó duros enfrentamientos, algunos relatados en el presente capítulo. Tal fue también el caso respecto a mi relación con Augusto Pinochet, cuando asumió como senador vitalicio. Hice respetar sus derechos, pese a que él no había respetado los míos durante la dictadura, pero era mi obligación. Lo mismo hice con el resto de los senadores designados, incluso con Sergio Fernández, quien me exilió. Siempre mantuve un trato respetuoso e intenté incluirlos en la búsqueda de entendimientos, al igual que a parlamentarios de la UDI, como Jaime Guzmán, con quienes no teníamos nada en común. Esta actitud, creo, me llevó a ganarme el respeto de mis colegas, incluso de aquellos que defendían una postura diametralmente opuesta a la mía. De hecho, durante dos años

consecutivos (en 1996 y 1997) resulté elegido por mis pares como el mejor senador de la República.

Dejé mi cargo en el Senado el 11 de marzo de 2018, en las circunstancias ya previstas. Sabía que había que dejar espacio para los nuevos parlamentarios electos. Fue doloroso, no voy a negarlo, pero siempre hay que saber retirarse con dignidad y agradecimiento. Todo cargo, desde un comienzo, debe considerarse temporal.

El día de mi salida, en mi discurso de despedida, cité al antipoeta chileno Nicanor Parra con una frase muy decidora: “Voy y vuelvo”. Sabía que ello causaría estupor y risas; algunos pensarían que estaba planeando, una vez más, ir por la reelección, pero no era así. A mis 81 años, ser reelecto ya no estaba entre mis planes. Había cumplido una etapa en mi vida. Lo que quería decir, al aludir la expresión del poeta, era que, por vocación, siempre sería un hombre interesado en la cosa pública, sin importar el cargo que ocupase. Mi corazón seguiría allí arraigado, dispuesto siempre a colaborar y a aportar.

14. Consejo de Asignaciones Parlamentarias:

En vela por la transparencia y la probidad

Tras mi partida, me tomé unos días para ordenar mis asuntos y empezar a trabajar en otras cosas. Entonces, me contactó un grupo de parlamentarios para proponerme postular como integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del Senado, argumentando que mi experiencia en la administración de recursos podía ser provechosa. Por cierto, jamás estuvo entre mis planes ni busqué esa nominación, pero todos los partidos, transversalmente, apoyaban mi nombre, y en esas circunstancias fue que acepté. “Si hay unanimidad y puedo ser útil, no me niego”, les dije.

En la comisión bicameral, se aprobó mi nominación por unanimidad. Sin embargo, cuando se votó la nómina final en la Cámara de Diputados, se levantaron algunas voces que pusieron en tela de juicio mi candidatura —René Saffirio, entre otros—, argumentando que mi hora ya había pasado. En ese momento, me puse firme y dije que no iba a retirar mi nominación a raíz de críticas injuriosas e inaceptables. Finalmente, salí electo, y además fui nombrado presidente.

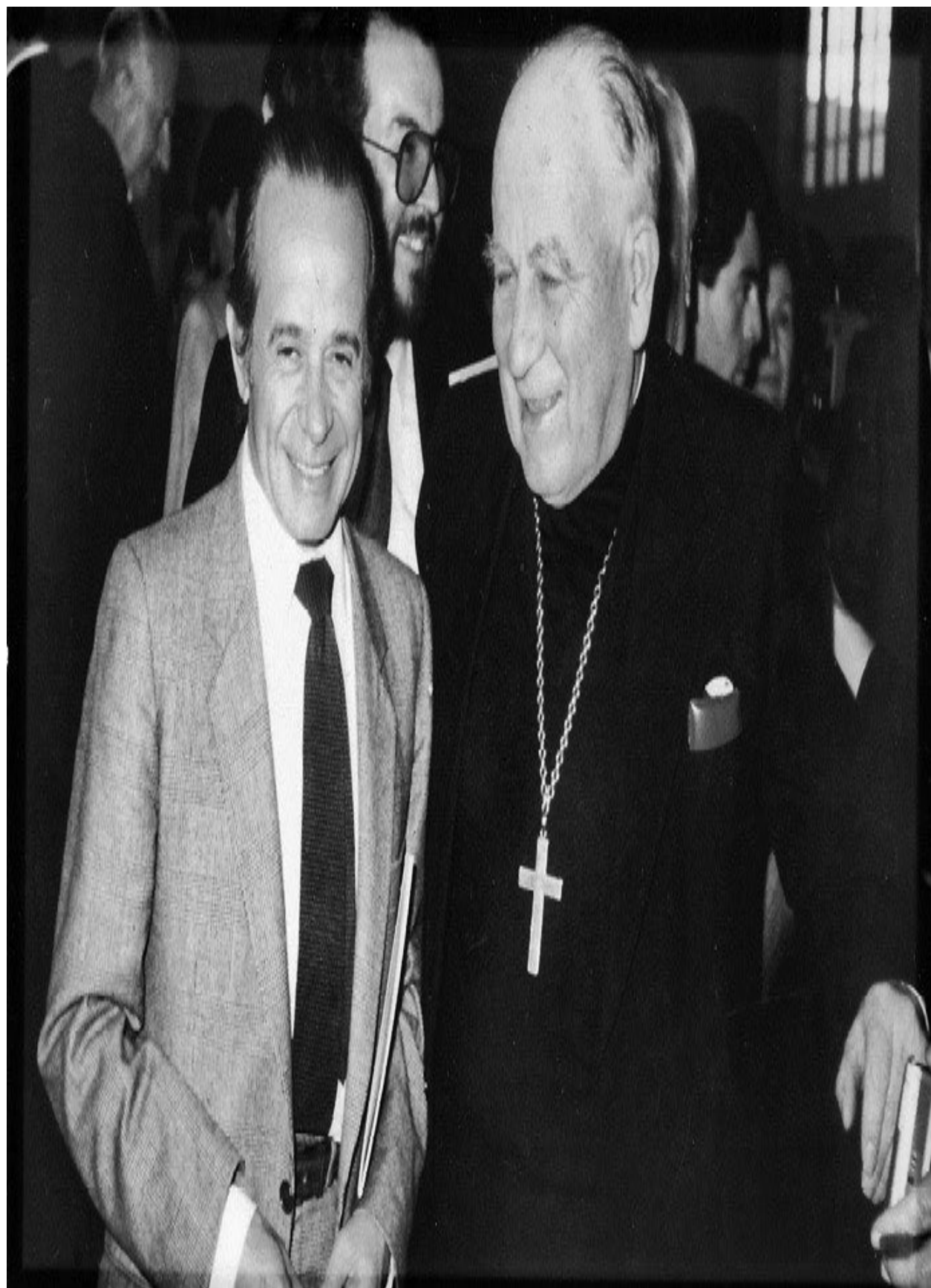
En las redes sociales, se desplegó una gran campaña en mi contra, en la que se decía que me rehusaba a dar un paso al costado para abrir espacio a nuevos y más jóvenes dirigentes. Me sentí herido por estas acusaciones. Otra vez algunos se aprovechaban de la situación para hacerme daño y descargar su odio, sin siquiera conocerme. Respondí con dureza a estas infamias, aclarando que el cupo no lo había buscado y que los partidos transversalmente me lo habían planteado. En una entrevista al diario La Tercera señalé: “Algunos dicen ‘¿por qué este señor sigue metido en la política, por qué no se va para su casa?’, pero en ese caso les digo algo muy claro: no me voy a ir a un monasterio, no me voy a encerrar en un convento ni me voy a ir al desierto al anonimato, voy a seguir siendo parte de este país y voy a seguir entregando mi actividad a la política desde fuera del Parlamento”¹³⁸.

Probablemente, hubiera sido más fácil no haber aceptado la nominación y haberme evitado la batahola de críticas. Sin embargo, decidí jugármela, pues sentía que desde ahí podía colaborar, especialmente en un tema tan complicado como las asignaciones parlamentarias. Vi en ello una oportunidad para ayudar a recuperar la imagen de los diputados y senadores chilenos.

Efectivamente, creo que la labor cumplida en el Consejo de Asignaciones Parlamentarias nos permitió introducir importantes avances en materia de transparencia, así como comenzar a cimentar una mayor confianza de la propia ciudadanía en el Parlamento, pese a que aún deben concretarse diversas mejoras y cambios. Al respecto, basta señalar que, al menos, durante los dos últimos años no se recibió ninguna denuncia en relación con el cumplimiento en la rendición de los gastos autorizados de diputados y senadores, lo que espero se prolongue por largo tiempo.



Detención frente a la Catedral Metropolitana
(Santiago, 1984).



Con el Cardenal Raúl Silva Henríquez.



Conferencia de prensa del Comando del NO al iniciar la campaña. De derecha a izquierda, entre otros: Enrique Silva Cimma, Luis Maira, Ricardo Lagos, Andrés Zaldívar y Carlos Figueroa, Secretario Adjunto.

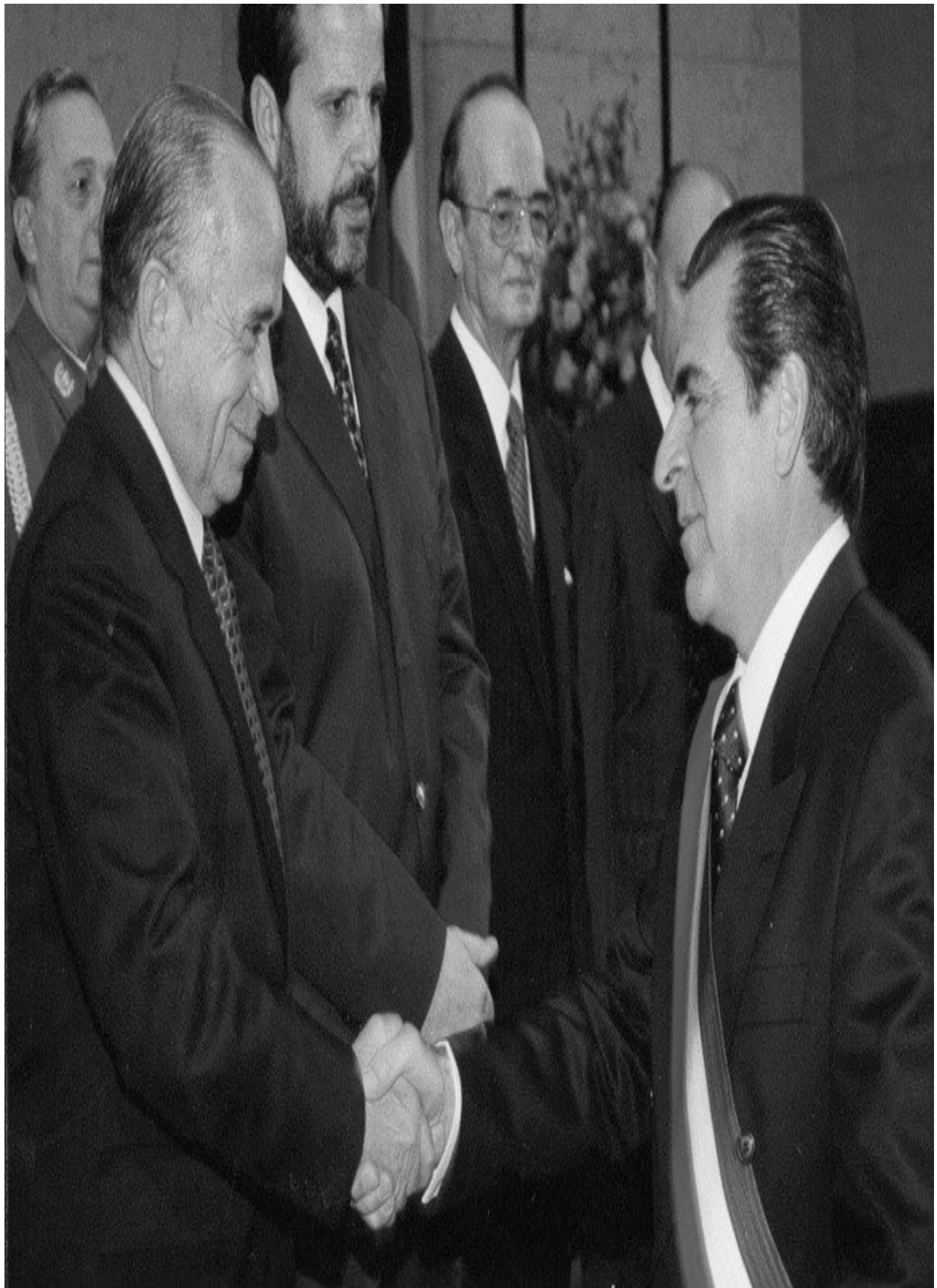


Felicitando a Patricio Aylwin, nuevo Presidente de Chile
(marzo de 1990).

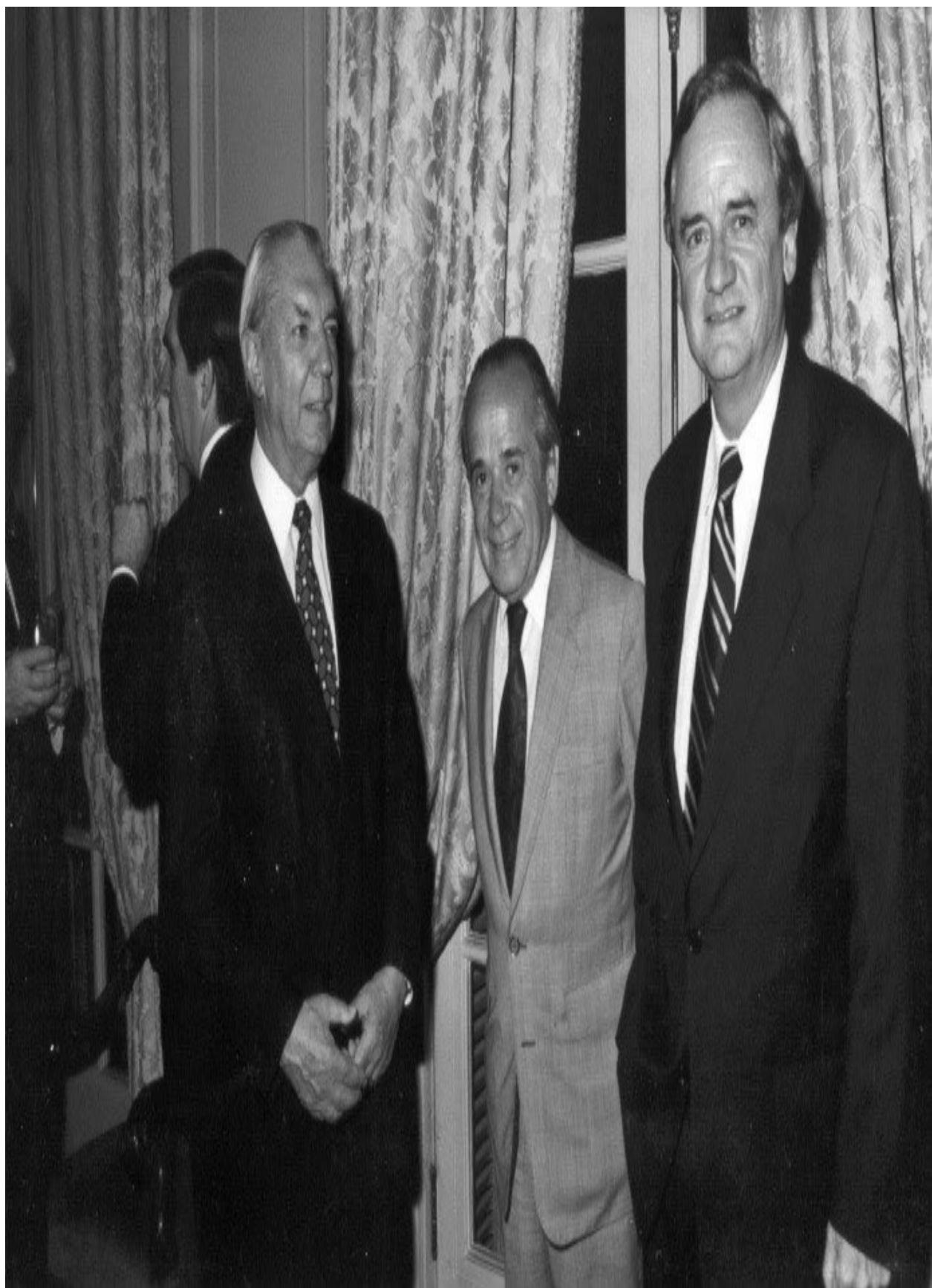


Asunción al mando de Ricardo Lagos

(Valparaíso, 11 de marzo 2000).



**Saludando como Presidente del Senado al nuevo Presidente de la República,
Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Valparaíso, 11 de marzo 1994).**



Junto a los ex ministros de Hacienda, Sergio Molina y Alejandro Foxley.



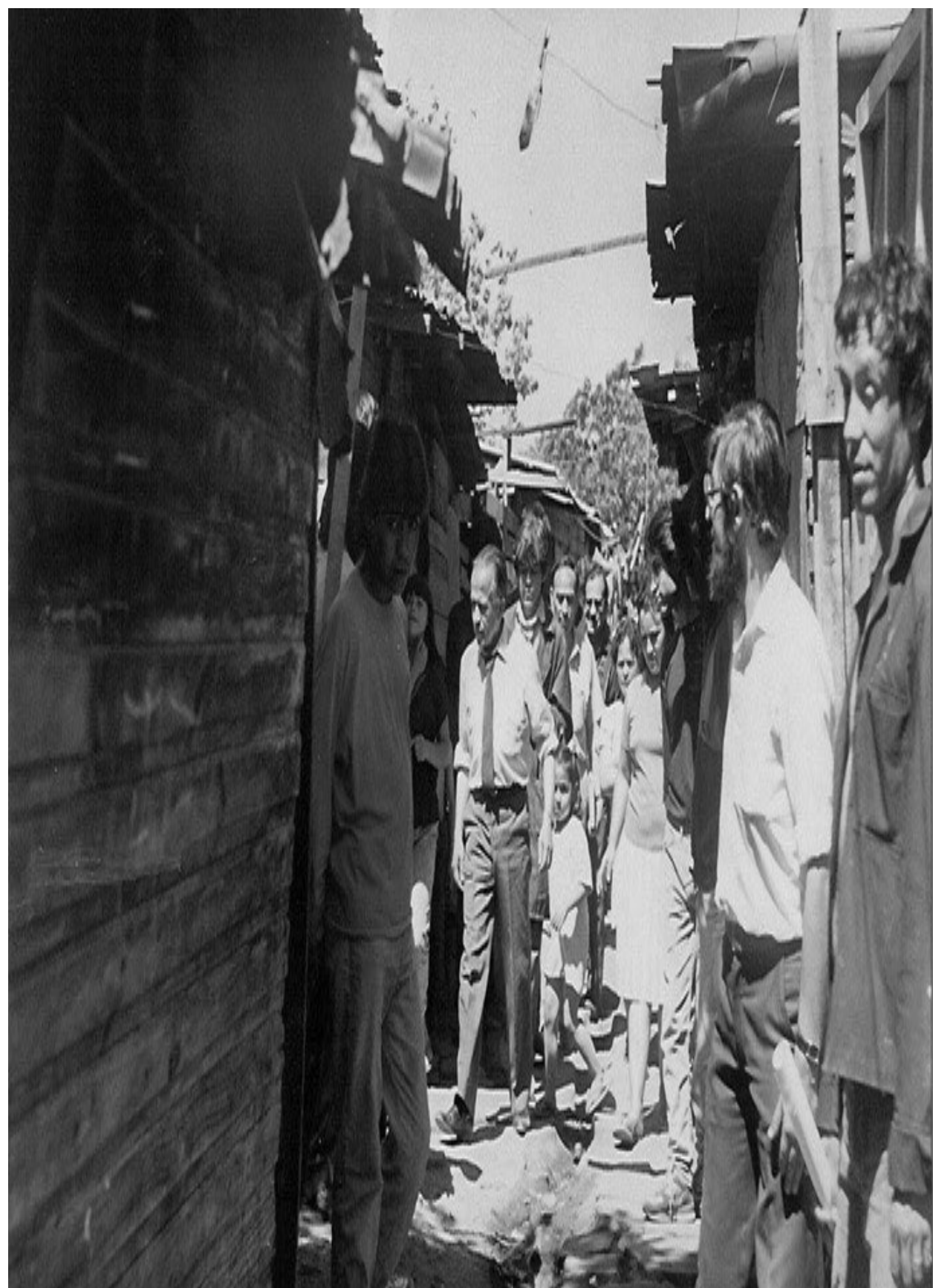
Con Inés y Michelle Bachelet, primera mujer elegida como Presidenta de la República de Chile (marzo de 2006).



En la testera, presidiendo el Senado.



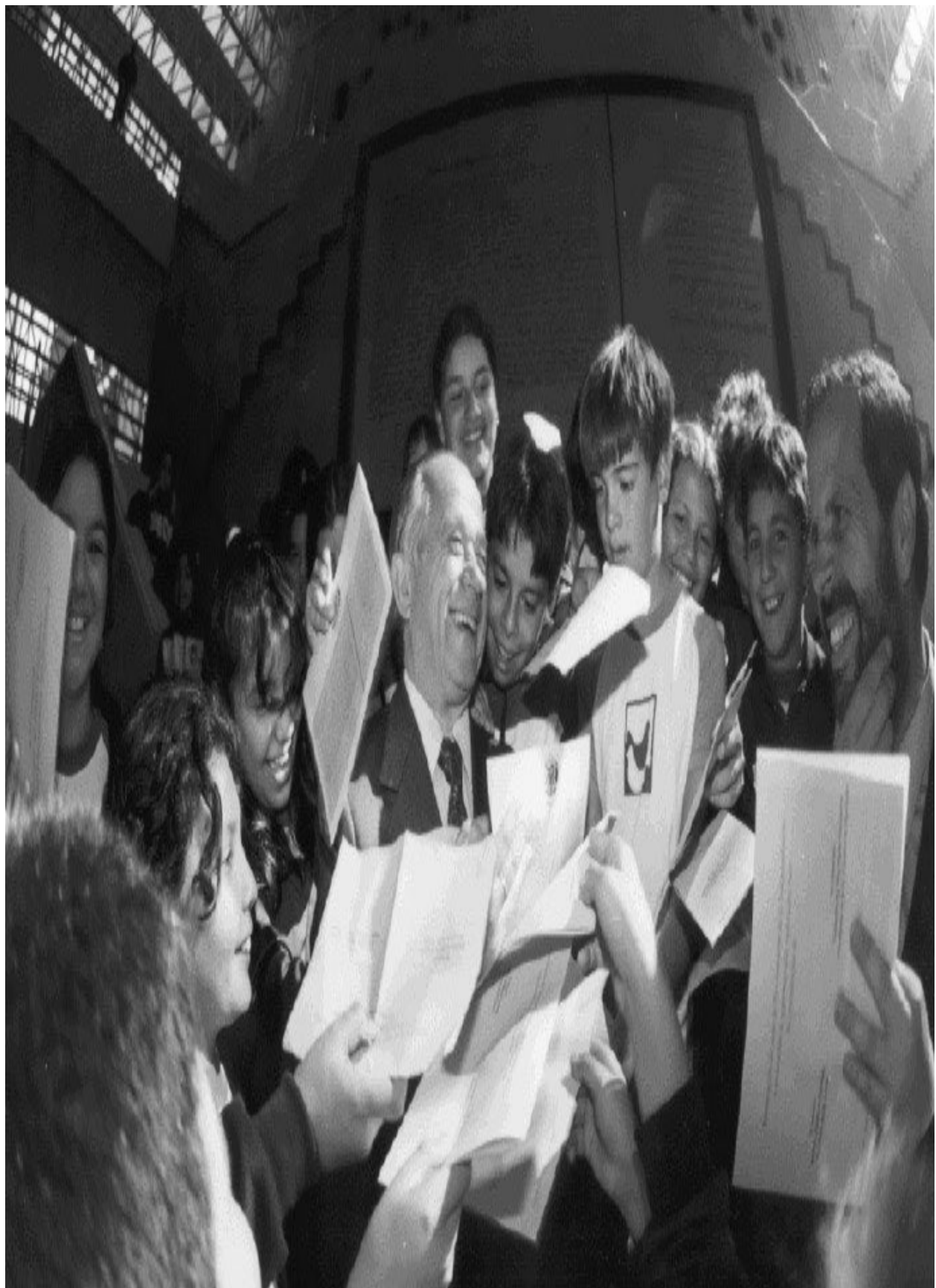
Con adherentes durante la primera campaña senatorial por Santiago Poniente (1989).



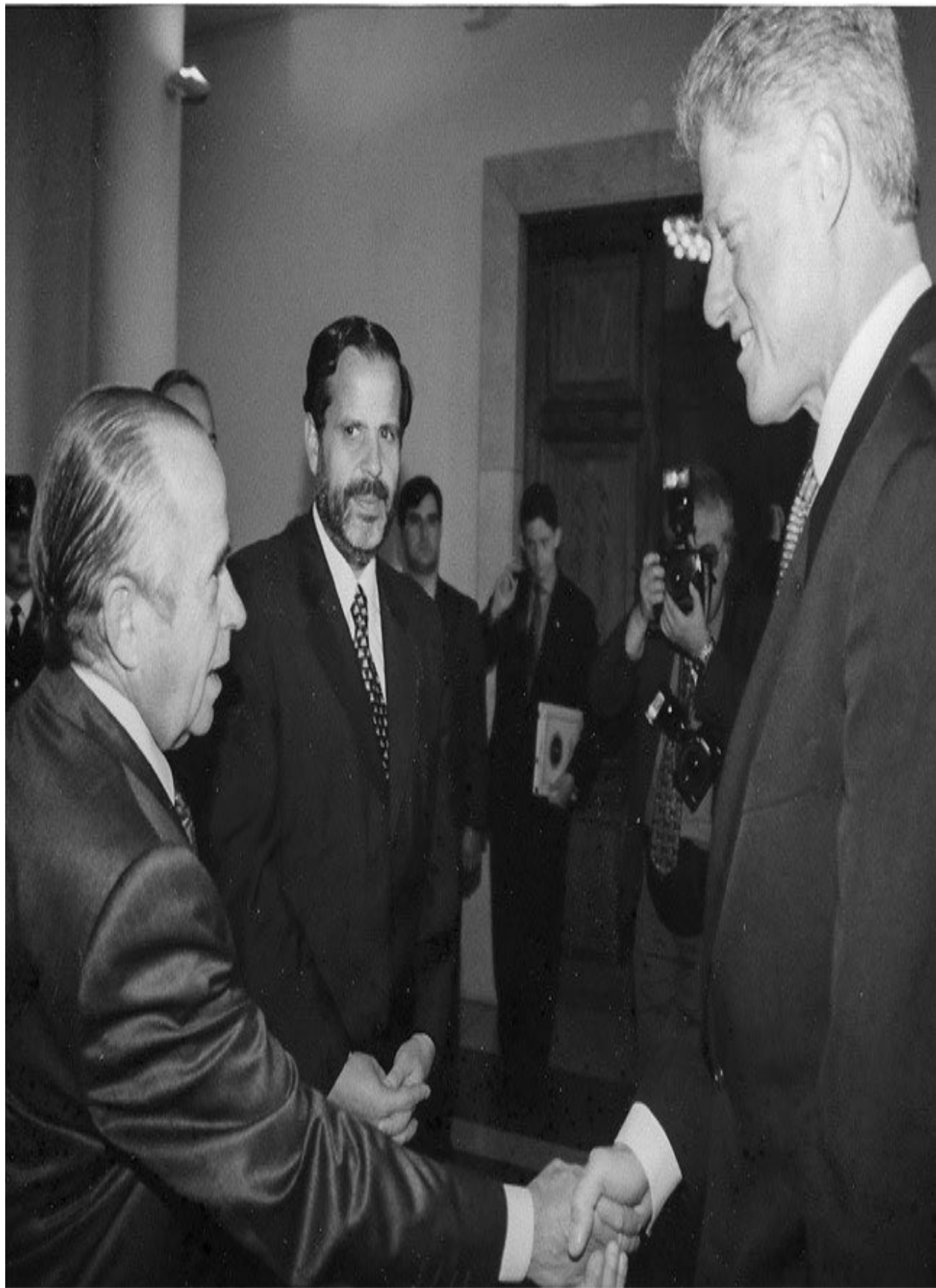
Recorriendo un campamento en Santiago Poniente.



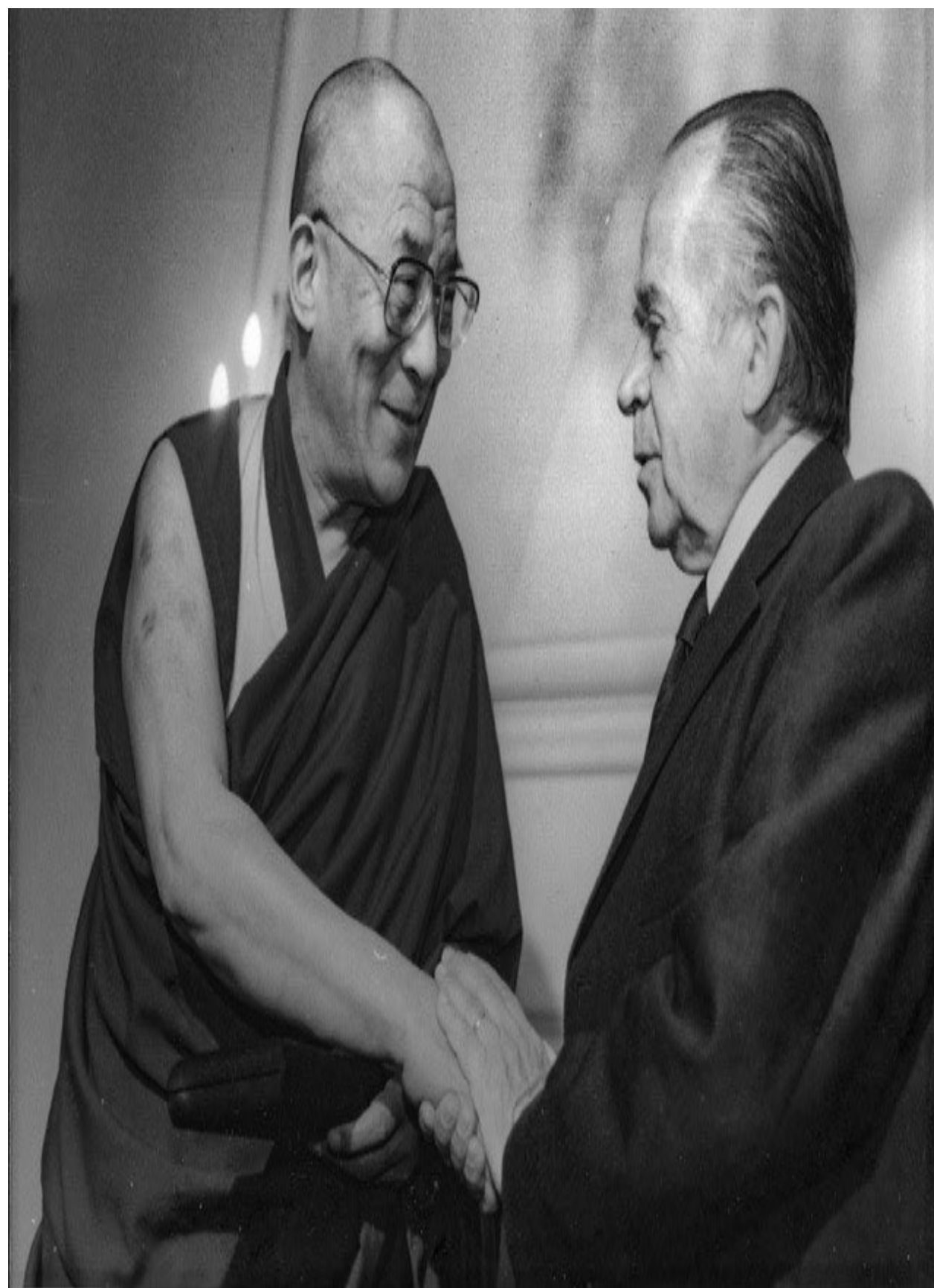
**En la testera, como Presidente del Senado, junto a Michelle Bachelet,
ministra de Defensa del Presidente Ricardo Lagos.**



Con estudiantes en el Senado.



**Recibiendo al Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en el Senado,
junto a Gutenberg Martínez, Presidente de la Cámara de Diputados (abril
de 1998).**



Recibiendo al Dalai Lama en el Senado (Santiago, abril de 1999).



Encuentro con el Presidente de China, Jiang Zemin (Pekín, 26 de abril 2001).



**Visita protocolar como Presidente del Senado al Emperador de Japón,
Akihito**

(Tokio, septiembre de 2002).



**Con Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas, e Isabel Allende,
Presidenta de la Cámara de Diputados, en la sede del Congreso Nacional en
Santiago**

(noviembre de 2003).



Encuentro con el Rey de Marruecos, Mohamed VI (diciembre de 2007).



Visita protocolar al Presidente de Palestina, Mahmud Abbas (Ramala, abril de 2012).

XVII

LA TORMENTA PERFECTA: EL GOBIERNO DE PIÑERA, EL ESTALLIDO Y UNA PANDEMIA GLOBAL

1. Un gobierno en picada

El triunfo de Sebastián Piñera en el 2017 se debió, en buena parte, a la esperanza o a la creencia de mucha gente, que antes había votado por la Concertación o por la Nueva Mayoría, de que Chile necesitaba un recambio. Estas personas confiaban en que, con él a la cabeza, el país retomaría el camino de una mejor economía, lo que permitiría dar respuesta a las demandas, sobre todo de la clase media. Dicho respaldo, tal como mencionáramos anteriormente, también se debió a que, en términos políticos, se observaba que el gobierno saliente de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría mostraba un desgaste creciente, a causa de sus divisiones internas. Sumado a todo esto, parecía que no existían otras fuerzas alternativas para su reemplazo. El Frente Amplio, si bien había tenido un buen resultado electoral, era un proyecto reciente que aún no estaba en condiciones de alzarse como alternativa de gobierno.

A pocos meses del término de aquel segundo período del Presidente Piñera —y con un nuevo gobierno a la cabeza del país: el de Gabriel Boric—, es posible realizar cierto balance acerca de esa gestión, pese a que hay secuelas que, dada la gravedad de los recientes procesos, tardarán meses y hasta años en evidenciarse. Desde mi punto de vista, fue una gestión que tuvo aspectos deficientes. No olvidemos que, al comienzo de su primer mandato, Piñera hasta llegó a afirmar que en 20 días avanzarían “más que otros en 20 años”, haciendo clara alusión a nuestro legado y asegurando que el país volvería a crecer económicamente en comparación con el crecimiento mediocre del gobierno anterior. Acto seguido, se centró en deshacer y negar lo que nosotros habíamos levantado, casi sin importar si se trataba de medidas exitosas o no. Por ejemplo, no dio espacio al proyecto de pensiones que se estaba tramitando en el Senado por el solo hecho de no ser de su autoría, e hizo caso omiso a todo el proceso de participación ciudadana que había precedido al proyecto de una nueva Constitución presentado por la Presidenta Bachelet al final de su período.

En materia de seguridad ciudadana, el Presidente Piñera prometió poner coto a la delincuencia y al desorden público, ambos elementos que hoy constituyen el principal motivo de reclamo de la ciudadanía. Asimismo, el grave problema en

La Araucanía, el cual debía abordarse con soluciones reales y eficientes, se le fue de las manos y escapó de su control. “Vamos a terminar con las listas de espera”, prometían en relación con el sistema de salud, y en materia internacional se proyectaba que Chile asumiera un liderazgo decidido a nivel continental, sin éxito alguno.

En resumen, creyendo poder afirmarse en la votación que lo había elegido, el gobierno desarticuló y desechó lo avanzado, confiado en que, bajo el nuevo mandato, y con una apuesta del todo renovada, el país recuperaría el tiempo perdido.

Desde donde se analice, los resultados solo muestran un fracaso. La crisis política se agudizó y la desconfianza en las instituciones continuó profundizándose en la opinión pública, agravándose aún más cuando el propio Sebastián Piñera perdió parte importante del apoyo ciudadano, quedando con un bajo porcentaje de credibilidad. Progresivamente, y cada vez con mayor recurrencia, su liderazgo fue puesto en tela de juicio a causa de sus conflictos en materia de intereses personales. Su figura era cuestionada con sorna e ironía en los medios y en los propios muros de las ciudades, despertando una abierta odiosidad. Si bien entregó la administración de sus negocios a un fideicomiso ciego, la gente dudaba de su palabra. Como si esto fuera poco, en dos ocasiones estuvo a punto de ser acusado constitucionalmente.

Todo lo sucedido durante su gestión —la que, en dos oportunidades durante 2021, vio caer su respaldo ciudadano al 9%— confirma que, cuando se confunde la política con los negocios, el resultado no es otro que la pérdida de credibilidad y confianza de la gente. De hecho, el gobierno de Sebastián Piñera cerró su mandato con 71% de desaprobación.

En Chile, los hombres públicos que se han desempeñado históricamente en el cargo de Presidente de la República dieron siempre muestras de austeridad y moderación. Jamás confundieron sus legítimos intereses pecuniarios con su actuación pública. Muchas veces vivieron en la estrechez, como fue el caso del Presidente Aníbal Pinto, quien condujo el país en tiempos de la Guerra del Pacífico y murió pobre. Para qué mencionar los últimos mandatarios ya fallecidos, tales como Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende y Patricio Aylwin. Ninguno fue criticado o cuestionado por conflicto de intereses. En el caso de Sebastián

Piñera, en cambio, este fue un hecho recurrente. El suyo es un karma que lo perseguirá siempre, aun cuando trate de evitarlo.

Durante su administración, los cambios de gabinete fueron frecuentes: en total, 16 ajustes o modificaciones, dando la sensación de una evidente falta de liderazgo. Sus parlamentarios no lo acompañaron en votaciones decisivas, tales como los proyectos que autorizaban el retiro de los fondos previsionales. El Presidente, además, tomaba decisiones erráticas: anunció que recurriría al Tribunal Constitucional por el primer retiro de fondos de ahorro previsional, y luego presentó proyectos que otorgaban beneficios con el objeto de que se rechazaran las iniciativas parlamentarias. Sin embargo, fueron sus propios parlamentarios los que lo derrotaron e hicieron crítica abierta a su gestión.

En materia económica, los resultados no solo fueron mediocres, sino que también contradijeron de lleno las promesas desplegadas durante su campaña presidencial, contrastando con su dura crítica a los gobiernos opositores.

El país sentía que el gobierno no abría espacios para realizar los cambios que se precisaban y responder a las demandas sociales. Parecía una instancia ciega, sorda y balbuceante, incapaz de recoger y determinar un rumbo certero. Cada vez que se proponía un proyecto para intentar avanzar, como sucedió con la Reforma Previsional, se topaba con una mayoría opositora que dudaba de sus propuestas. Se le pidió crear un sistema mixto de pensiones, con un fuerte componente de solidaridad y a cargo de las cotizaciones hechas por los empleadores, que mantuviese el ahorro individual con los aportes de los trabajadores... Pero Piñera no aceptó, forcejeó y todo quedó ahí, estático y congelado. Nunca entendió que, cuando se es un gobierno sin mayoría para gobernar, hay que buscar acuerdos con quien se la pueda dar.

Asimismo, pese a ser una persona inteligente y preparada, al exmandatario le pesó su personalidad: quería estar presente en todo, y su egocentrismo lo llevaba a tomar protagonismo aun en temas secundarios. Eso lo hacía incurrir en errores e infortunios que se prestaban para ironizar acerca de sus actuaciones. La gente lo veía más preocupado de aparecer haciendo anuncios que de gobernar.

Su personalismo pasará a la historia, no solamente por caracterizar su figura y legado, sino que también por los efectos que tendrá en el largo plazo en el régimen político chileno. El abogado y académico Carlos Peña lo explicaba acertadamente en una entrevista: “Estamos asistiendo a un cambio de régimen

político. Teníamos un régimen presidencial donde la iniciativa del sistema político estaba en manos del Ejecutivo y hoy día lo que yo veo, al menos, es que se traspasó toda la iniciativa gubernamental, incluso transgrediendo constitucionales reglas explícitas, al Congreso. Entonces, el Presidente ha consentido una gigantesca pérdida de poder, trasladando la iniciativa y el centro del régimen político al Congreso”¹³⁹.

Sin desmedro de todo lo expresado, hay que reconocer que parte de su fracaso, sin duda, estuvo marcado por dos causas importantes: primero, el ya mencionado estallido social y, posteriormente, la pandemia que, a partir de marzo de 2020, azotó a Chile —al igual que al mundo entero— sin contemplaciones.

2. Octubre de 2019: El Estallido Social

A mediados de octubre de 2019, el estallido social se apoderó de las calles de la Santiago. La chispa que lo desató todo fue la protesta de numerosos estudiantes, quienes comenzaron a evadir el pago del metro, luego que el gobierno anunciara el alza del pasaje en 30 pesos. En menos de una semana, el movimiento escaló a través de manifestaciones pacíficas acompañadas de protestas descontroladas por parte de grupos violentistas. El gobierno decretó, entonces, estado de emergencia y, posteriormente, toque de queda en diferentes ciudades del país.

El 25 de octubre se llevó a cabo una multitudinaria concentración en Plaza Italia, a la que se autoconvocaron, con afanes pacíficos, más de un millón de chilenas y chilenos. La instancia se replicó en muchas ciudades del país. Era la expresión viva de la demanda en su conjunto, por temas acuciantes en materias tales como pensiones dignas, salud, vivienda, seguridad ciudadana, endeudamiento familiar y el manifiesto de un reclamo por la desigualdad, el oprobio, los abusos y la exclusión que afectaba a la sociedad chilena. Se sentía —y se siente aún— que, si bien el país había progresado y vivíamos en democracia, unos pocos habían recibido demasiado y muchos esperaban aún respuesta a la necesidad de cambios que garantizaran una vida digna. Se reclamaba avanzar en un “nuevo pacto social” que naciera, a su vez, de una nueva Constitución escrita con participación ciudadana.

Aquella manifestación ciudadana del 25 de octubre fue ejemplar, hay que decirlo. No lo fueron, sin embargo, las acciones a cargo de minorías violentistas que aprovecharon el descontento para cometer ese día —y también en los días y semanas posteriores— actos delictuales de violencia inusitada jamás vista; destrucción e incendios de iglesias, de inmuebles patrimoniales, del Museo Violeta Parra y de infraestructura pública; saqueos al pequeño y gran comercio; asaltos a comisarías e intentos de ataques a instalaciones militares. En total, 115 de las 136 estaciones del Metro de Santiago fueron vandalizadas raudamente. Las violentas protestas callejeras se sucedieron por semanas. En muchas de ellas predominó el lumpen, la delincuencia y, probablemente, el narcotráfico. Se puso en jaque la institucionalidad del país. Algunos, incluso, pensaron que ello podría

derivar en un vacío de poder.

En medio de este tenso clima, ¿qué hizo el gobierno? Le echó más leña a la hoguera con actitudes y decisiones incomprensibles. En una transmisión televisada a todo el país, el Presidente Piñera, acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Javier Iturriaga —hoy comandante en jefe del Ejército—, declaró que estábamos “en guerra”. Hasta el general Iturriaga, de pie frente a las cámaras, se desmarcó de estas declaraciones, asegurando que él no estaba en guerra con nadie. En otra oportunidad, recién declarada la pandemia tras el brote de coronavirus, cuando todos nos encontrábamos aislados en nuestros hogares, en un intento por aplanar la curva de contagios, hizo detener su vehículo en plena Plaza Italia y se fotografió a los pies del monumento a Baquedano, como enrostrándose al movimiento social que había encontrado ahí su “zona cero”. ¿Qué sentido tenía hacer dicho gesto para quien tenía la máxima autoridad del país, más aún en un momento álgido y de profunda incertidumbre para todo el país?

La gente más modesta, los sectores populares, así como los pequeños y medianos comerciantes y empresarios fueron quienes sufrieron las peores consecuencias del levantamiento callejero. De todo esto emergió un ambiente de inseguridad y vulnerabilidad, que subsiste hasta hoy. Como contrapartida, la necesaria confrontación y represión de estas protestas llevó a funcionarios de Carabineros a una actuación indebida y reprochable en reiterados casos, provocando a muchos manifestantes graves e irreparables lesiones, con abierta infracción a los derechos humanos. Asimismo —y esto resulta innegable—, Carabineros también sufrió ataques inaceptables, resultando numerosos de sus miembros víctimas de graves lesiones.

Este ambiente de violencia y falta de vigencia del orden público nos mostró algo que el país y sus autoridades no habíamos sido capaces de prever: la disconformidad de la gente ante la incapacidad de dar respuesta oportuna a esta presión acumulada de demandas sociales que venían acumulándose por largo tiempo.

Fue un proceso doloroso. Sobre todo en los peores y más violentos momentos, a uno le hacía meterse hacia adentro y preguntarse por qué. No creo que lo sucedido sea consecuencia de la falta de esfuerzos, el descuido o la dejación de la élite política, como dicen algunos. En este país, en los últimos 30 años de recuperación democrática, se había hecho mucho. La frase “No son 30 pesos,

son 30 años” es una expresión injusta, un eslogan cliché. Efectivamente, muchas reformas estructurales aún están pendientes, pero no se puede decir que no hemos avanzado o que no ha existido voluntad para llevarlas a cabo. El problema radica en que las instituciones gobernantes le dieron a la gente esperanzas que hoy están frustradas. De ahí nacen las demandas por los derechos sociales tan discutidos hoy en día, garantía para el desarrollo integral de la persona humana: el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, al ingreso y a una pensión digna. En síntesis, a vivir en condiciones de seguridad y dignidad.

A ello se suma el gran conflicto que genera el endeudamiento familiar. En un intento por satisfacer la necesidad de equidad, de sentirse igual al otro, la gente se compra un televisor plasma. Otros adquieren un vehículo, aunque sea usado. Si tú vas a las grandes tiendas y a los centros comerciales, por todos lados ves carteles que dicen “¡Oferta!” o “Compre 2x1”, y en la caja, cuando vas a pagar, te ofrecen más y más tarjetas. Uno puede llegar a tener, sin ningún problema, cinco, seis, siete tarjetas de crédito. Y como en Chile la educación cívica y financiera no son obligatorias en la escuela, las personas no entienden cómo operan estos sistemas, y van cayendo en una bicicleta financiera que termina en una situación de mucha angustia: el endeudamiento desorbitado de miles de familias chilenas que, motivadas por la publicidad y la facilitación del consumo, confían que con ello tendrán oportunidad de ascender socialmente.

Está pendiente abordar el problema de la desintegración social. No es solo que falte asegurar la integración, sino que además hemos experimentado un proceso creciente de desigualdad en todos los ámbitos antes mencionados. No puede ser que haya gente que viva en un país con desarrollo de primer nivel, mientras otros, que viven a menos de 20 kilómetros de distancia, tengan que sobrevivir en un país tercermundista. No puede ser que haya más carabineros per cápita en una comuna con mayores recursos, que en una con menos. No puede ser que haya chilenos que tengan que llegar a las cinco o seis de la mañana a un centro médico para ser atendidos —con suerte— después de varias horas, o que en la espera de una cirugía se les vaya la vida.

Este remezón, o mejor dicho “terremoto social”, hizo a Chile comprender que era necesario escuchar a la gente y afrontar las demandas emergidas con la misma presión y fuerza que la lava arrojada por un volcán. El tiempo se había agotado.

3. El Parlamento escucha: Un acuerdo por la paz

El 15 de noviembre de 2019, una vez más por iniciativa del Parlamento, y no del Ejecutivo o su intervención, los partidos políticos allí representados —a excepción del Partido Comunista— lograron la firma y el compromiso del llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. La medida planteaba la convocatoria a un plebiscito ciudadano para decidir la redacción de una nueva Constitución para Chile, así como el tipo de órgano —Convención Constitucional o Convención Mixta Constitucional— que la redactaría en caso de aprobarse la propuesta.

Casi un año más tarde, el 26 de octubre de 2020, y mientras el país apenas comenzaba a salir de la crisis sanitaria provocada por la primera ola del Covid-19, triunfó el “Apruebo” sobre el “Rechazo” en las urnas (con el 78,27% sobre el 21,73%), aprobándose, además, la creación de una Convención Constitucional para la redacción de una nueva Carta Magna.

Con ello, la discusión del nuevo texto ya no quedó en manos del Parlamento, el cual, en mi opinión, era no solo el órgano capacitado, sino que también más adecuado para trabajar en su redacción. Pero este resultado, como ya he mencionado, no fue gratuito: se debió a la pérdida de confianza de la ciudadanía en su Parlamento, al igual que en otras instituciones del Estado.

La realización y deliberación entregada por el plebiscito de octubre de 2020 trajo a la ciudadanía un poco de tranquilidad y relativa confianza sobre el futuro, bajando la presión y disminuyendo con ello las manifestaciones callejeras. La llegada de las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano devolvieron una relativa calma al país, a excepción de la región de La Araucanía, donde siguieron incrementándose los actos de violencia, atentados, incendios, robos de madera y camiones, entre otros ilícitos. En estas acciones violentas, tanto civiles como funcionarios policiales han sufrido graves lesiones, llegando incluso algunos a perder la vida. A la fecha, el conflicto sigue su curso en una escalada creciente. Es urgente que el país resuelva cómo dar cauce a las demandas del pueblo mapuche para traer la paz de vuelta a esa importante región. Espero que la nueva Constitución, junto con la instauración de este nuevo gobierno, nos abra el

camino para lograrlo.

4. Coronavirus: La controvertida pero exitosa estrategia del gobierno

En el mes de diciembre de 2019, el mundo fue informado de una pandemia global, iniciada en China y provocada por el brote de Covid-19, un virus de alta peligrosidad por sus alarmantes niveles de propagación, gravedad e inacción para la salud y vida de la población. En Chile, el primer caso fue detectado a inicios de marzo.

Meses más tarde, Inés y yo, al igual que millones de personas, también nos contagiamos con coronavirus. Eran tiempos durísimos. Las noticias resultaban estremecedoras y las estadísticas de fallecidos bordeaban lo increíble. Yo tuve suerte, lo sentí como un resfrío pesado, con dolor de cabeza y una leve fiebre. Inés, en cambio, lo pasó bastante peor. Gracias a Dios, ambos logramos salir adelante y recuperarnos, aunque las secuelas y el cansancio se extendieron por un largo tiempo.

El gobierno respondió a esta nueva crisis organizando el sistema de salud para afrontar la batalla. Puede criticarse la forma en que se implementaron las medidas sanitarias, pero hay que ser serios a la hora de emitir cualquier juicio ante tamaño desafío. Poco o nada se sabía, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, de este famoso y mortal virus, al que había que dar respuesta a medida que caminábamos en la nebulosa.

Si bien la figura del ex ministro de Salud Jaime Mañalich fue controversial —en parte, por su impetuosa personalidad, lo que lo llevó a entablar discusiones con otras autoridades, especialmente con algunos alcaldes—, creo que el gobierno, conjuntamente con el sistema de salud, llevó a cabo acciones que fueron muy decisivas, aun cuando pudieron haberse cometido errores, lo que era previsible. Se centralizó e instauró un mecanismo que emitía diariamente la información pertinente, decretándose los estados de emergencia que correspondían, así como cuarentenas en diferentes grados. Se diseñó y aplicó el plan “Paso a paso”. Se unificaron los sistemas de salud pública y privada para asegurar la adecuada atención hospitalaria de los contagiados, y se dotó de camas UCI en un número que evitara que algún afectado quedara al margen. Hubo una campaña para obtener los ventiladores mecánicos que pudieran requerirse a tiempo y, algo muy

importante, el gobierno fue exitoso en su cruzada por adquirir las dosis de vacunas para atender a la población y, ante el mundo, ubicarse entre los primeros países en llegar a una vacunación casi universal.

Quisiera hacer un reconocimiento especial a todo el personal de atención de los servicios de salud, tanto públicos como privados, que han expuesto incluso sus vidas por atender a todas las personas que lo han requerido, y, por qué no decirlo, al expresidente Piñera; a los ex ministros de Salud Jaime Mañalich y Enrique Paris y a la exsubsecretaria Paula Daza, quienes encabezaron esas tareas.

A la fecha, seguimos inmersos en la evolución de esta pandemia, la que, por el momento, al parecer está bajo control. No obstante, muchos compatriotas han sufrido sus embates y decenas de miles perdieron la vida. Durante casi dos años, nos vimos obligados a vivir encerrados en nuestras casas, sin posibilidad de movernos con libertad y permanentemente preocupados de no ser víctimas del maldito virus. Tan solo hace algunos meses comenzamos a movilizarnos con cierta normalidad.

La pandemia ha provocado al país, además, un retroceso profundo en su economía, especialmente en el aumento del desempleo. Cerca de dos millones de personas perdieron su trabajo. Y creo que, así como hay que reconocer que la respuesta sanitaria del gobierno de Sebastián Piñera fue exitosa, esto no fue igual en la forma de dar respuesta a la necesidad de ayuda social por parte de los más afectados. En un comienzo, se aplicaron planes y medidas menores selectivas — como el bono y el IFE Covid— que, si bien llegaron a algunos, claramente no beneficiaron a todos, en parte debido a que el sistema burocrático no logró dar respuesta.

Sobre todo al comienzo, daba la impresión de que el gobierno improvisaba y reaccionaba tardíamente, y solo ante la presión parlamentaria y de los propios alcaldes. En mi opinión, el problema fue que no dimensionaron la profundidad de la crisis que se estaba gestando. De hecho, fue la entonces presidenta del Senado, la senadora Yasna Provoste, quien emplazó, en abril de 2021, al gobierno a buscar lo que se llamó “mínimos comunes”. Este llamado permitió aprobar, en mayo, un paquete de medidas acordes a las necesidades de la gente afectada.

Para entonces, sin embargo, ya era tarde. La poca diligencia del gobierno y el

monto insuficiente de las ayudas llevaron a los parlamentarios a utilizar un resquicio constitucional para aprobar, una y otra vez, reformas que permitieron entregar a los imponentes de las AFP porcentajes de sus ahorros previsionales. A la fecha, y de forma indiscriminada, se ha transferido el 30 % de los fondos de pensiones (aproximadamente 34 mil millones de dólares) a los imponentes, provocando un fuerte incremento del poder de consumo y, por supuesto, una transitoria mayor actividad económica, pero también se preveía que ello repercutiría, tarde o temprano, en una fuerte presión inflacionaria. Gran parte de los especialistas y expertos en la materia advirtieron en su momento que el retiro del 10% era pan para hoy y hambre para mañana.

Con el incremento del dinero circulante, ha crecido también la deuda pública, tanto interna como externa. Se ha echado mano de los ahorros no solo previsionales, sino que también de los fondos soberanos, que constituían los recursos acumulados en los tiempos de bonanza. Ello provocó que, desde el Banco Central y en opinión transversal de los propios economistas, se haya desatado la alerta roja.

Hoy todos reconocen que esta fue una mala política pública que, si bien ha tenido efectos positivos en lo inmediato, cobrará la cuenta el día de mañana. Recién comenzamos a calibrar las consecuencias, y está por verse cómo pagaremos los costos de esta medida. Desde ya es posible advertir que enfrentamos una inflación que supera los dos dígitos, una economía estancada con bajísimo crecimiento, un aumento de la tasa de cesantía, y el paso de Chile de ser un país acreedor a una nación con una alta deuda pública. Como siempre, las consecuencias terminan pagándolas los sectores más vulnerables. Los más afectados son y serán los más pobres, los que viven de su salario, quienes ven disminuir dramática e inexorablemente sus ingresos.

5. Un balance negativo

Tal como afirmara en párrafos anteriores, sin perjuicio de reconocer que a Sebastián Piñera le tocó afrontar dos problemas de proporciones —el estallido social y la pandemia—, su gestión fue poco prolija, lo que alimentó aún más la sensación de que carecía de un verdadero liderazgo. Sus promesas de un gobierno innovador y prolífico se esfumaron en el tiempo, como pompas de jabón, y los escasos avances que pudieron exhibirse se perdieron en la polvareda, imperando el sentimiento de un evidente descontrol en materia de seguridad y orden público. Las cifras relativas al déficit de viviendas se han incrementado; según el último catastro realizado por Techo Chile —organización otrora conocida como “Un techo para Chile”—, son 81.643 las familias que hoy viven en campamentos, la cifra más alta registrada desde 1996. A la par, se ha desbordado la crisis migratoria, la que el gobierno de Piñera afrontó recurriendo más a la amenaza que al uso de la razón. Se nos aparece el fantasma de la inflación, mientras la perspectiva del crecimiento económico se torna cada vez más incierto. El clima político y social en La Araucanía sigue deteriorándose, a la vez que se profundiza la desconfianza en las autoridades e instituciones, partiendo por las gubernamentales.

Por supuesto, todo esto no fue solo responsabilidad de la gestión de Sebastián Piñera. Ya hemos mencionado la existencia de otros factores en juego. Pero, innegablemente, el balance de su gobierno resulta negativo y no respondió a las expectativas que tuvo la ciudadanía cuando lo eligió como Presidente de la República.

XVIII

ROMPIENDO EL SILENCIO: MI DEFENSA DE LA CONCERTACIÓN

1. “No son 30 pesos, son 30 años”

Cuando, en octubre del 2019 se produjo el estallido social, una de las consignas más difundidas por algunos, justificando el reclamo ciudadano, fue: “No son 30 pesos, son 30 años”. En efecto, mucha gente salió a la calle manifestándose en respuesta a la decisión del gobierno de subir la tarifa del metro en 30 pesos. Indiscutiblemente, esa fue la gota que rebasó el vaso, haciendo estallar el descontento y la presión acumulados por las demandas sociales insatisfechas, los abusos, la colusión, los privilegios indebidos, el descrédito y la crisis de las instituciones y las autoridades, el desprestigio de los políticos y la política, las denuncias de fraudes en entidades tales como Carabineros y el Ejército, las bajas pensiones y el rechazo a las AFP.

En un primer momento, casi como una sacudida de conciencia, nadie desconoció la legitimidad de dichas demandas. Sin embargo, a poco andar, los acontecimientos comenzaron a dividir las opiniones. Entre el 18 y el 19 de octubre, 25 estaciones del metro fueron quemadas... Para algunos, era el caos y una estampida; para otros, una liberación llena de esperanza. Los muros de las ciudades se llenaron de mensajes: “Chile despertó”, “Un nuevo Pacto Social”, “Dignidad para el pueblo”, “Evade”, “Muerte al Estado”, “Queremos una nueva Constitución”... En medio de todo esto, la performance del colectivo feminista LasTesis, junto a la canción “Un violador en tu camino”, se transformó en un fenómeno que dio la vuelta al mundo. “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eres tú. Son los pacos. Los jueces. El Estado. El Presidente. El Estado opresor es un macho violador...”, coreaban miles de mujeres. En paralelo, la canción de Víctor Jara “El derecho de vivir en paz” se transformó en el himno de las movilizaciones, mientras la Plaza Italia era rebautizada como “Plaza Dignidad”, y la Primera Línea, compuesta en su mayoría por jóvenes que disputaban el poder y enfrentaban la represión de carabineros en la zona cero, parecían alzarse como los héroes de la revuelta social. Alrededor de 30 personas fallecieron, y miles resultaron lesionadas durante los enfrentamientos, constatándose más de 400 víctimas con trauma ocular tras recibir perdigones o bombas lacrimógenas en el rostro. Muchos carabineros fueron también heridos.

Esos 30 pesos fueron la chispa que encendió la mecha, provocando una tremenda explosión que, como un reguero, pronto se expandió por todo el país, llevándonos a vivir, durante los dos últimos años, en un ambiente de violencia y desorden público que deterioró nuestra convivencia ciudadana. Pero quiero ser claro en lo que diré a continuación: ello no fue consecuencia de los 30 años de gobiernos democráticos.

Con este escenario como trasfondo, quiero dejar mi testimonio respecto a lo que ha sido y fue el legado de la Concertación, a mi juicio, una de las alianzas políticas más sólidas y exitosas en la gobernanza del país. Salgo hoy en su defensa, en momentos que se la denuesta y satiriza, cuando muchos ya abandonaron el barco y son contados los que se atreven a levantar la voz. Algunos podrán discrepar, o tener una opinión distinta, lo que respeto, pero mi convicción es la que sostengo en estas líneas.

Ante todo, cabe recordar que la Concertación fue la coalición que derrotó a una férrea dictadura militar por la vía pacífica, logrando consolidar una verdadera transición a la democracia, tras sortear miles de obstáculos. Lo hicimos como correspondía hacerlo, con prudencia e inteligencia política, entendiendo que la política no se funda en el voluntarismo de creer que todo lo que se logra es insuficiente y que, en cambio, debemos ofrecer a la ciudadanía, una y otra vez, lo imposible. En esa línea, rescato el planteamiento del Presidente Patricio Aylwin respecto a que, para avanzar, hay que estar dispuesto a actuar “en la medida de lo posible”, lo que no significa renunciar a seguir trabajando por el objetivo mayor. Para llegar lejos, muchas veces es necesario avanzar con cautela y gradualmente, evaluar los escenarios que se enfrentan con pragmatismo, escuchar al adversario, ceder y también tener sagacidad para negociar incluso lo adverso. Hay que tener sangre fría; la impulsividad, la soberbia y el afán de imponer la propia verdad nunca llevan a buen puerto, menos cuando lo que está en juego son causas trascendentes. Y así debimos hacerlo para, precisamente, recuperar y consolidar la democracia en nuestro país. Soy un convencido de que, para intentar implementar sólidas y profundas transformaciones en ámbitos de desarrollo social, siempre resulta más conveniente introducir cambios graduales y no destruirlo todo para comenzar de nuevo. La historia está llena de ejemplos al respecto. De hecho, en nuestro caso, solo a través de los instrumentos que la democracia nos proporciona es que hemos podido ir perfeccionándola, de manera tal que responda a las demandas ciudadanas requeridas en cada momento.

Llamo a reflexionar a las nuevas generaciones —quienes no vivieron aquellos tiempos de lucha por recuperar la democracia— para que, cuando sometan a juicio ese período histórico, lo hagan situándose en el contexto en que se vivía, con las limitaciones y obstáculos que se debían sortear para lograr los objetivos que nos habíamos propuesto. Nadie quería que Augusto Pinochet se mantuviera como comandante en jefe del Ejército y senador vitalicio, pero ahí estaba. Nadie quería la Constitución impuesta por la dictadura, una Constitución mal parida desde sus orígenes, pero ahí estaba. Sabíamos que había que reformarla, pero no teníamos mayoría, y avanzar paso a paso era la única manera de impedir retrocesos. Por supuesto que queríamos verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura —que eran, por lo demás, de los nuestros—; no obstante, tuvimos que trabajar con paciencia y tenacidad para que el Poder Judicial enjuiciara a los responsables. ¡No tranzamos ni aceptamos amnistías ni tampoco punto final! Finalmente, después de muchos años de lucha, y cuando aún circulaban impunes y libremente, un importante contingente de agentes del aparato represor fue encarcelado, incluido el máximo responsable, el general Manuel Contreras. Es verdad, queríamos y tratamos de avanzar más, pero no siempre fue posible. Sin embargo, jamás retrocedimos ni claudicamos en nuestras convicciones y reivindicaciones.

Hoy aspiramos a más, y debemos hacerlo, precisamente, porque nos hemos ganado la democracia, y esta, otra vez, nos da los instrumentos para seguir avanzando.

Ya lo he dicho: en lo político, Chile es un país que vive en democracia... ¿Perfectible? Sí, pero democracia sin ninguna duda. Somos una nación inserta en el mundo, mirada con respeto y reconocimiento por la comunidad internacional. Asimismo, en materia económica y social, los últimos 30 años no representan un período del que debiésemos avergonzarnos o autoflagelarnos. Al contrario, sin soberbia, más bien con toda la modestia que ello requiere, debemos exigir que hoy se reconozcan los logros alcanzados en nuestro país, y es que, aunque algunos no quieran verlos y los desechen como trastos inservibles, en la actualidad son destacados por numerosos organismos especializados a nivel internacional. De hecho, en 2011, fuimos la primera nación de América Latina en ser admitida en el importante grupo de afiliados a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), precisamente como un reconocimiento internacional a casi dos décadas de reformas democráticas y a nuestras sólidas políticas económicas y sociales.

A nivel nacional, existe un juicio generalizado que reconoce el éxito de estos 30 años, y de todos los gobiernos de la Concertación, incluido el interregno de cuatro años del primer gobierno de Sebastián Piñera. Esto, sin embargo, no puede llevarnos a la soberbia o a contentarnos en la complacencia de que nada falta por realizar. Al contrario, como lo requiere la vida de toda nación, hay que enmendar y corregir los errores u omisiones para intentar continuar progresando. La historia no es estática y Chile tiene por delante un largo camino para superar sus dificultades y déficits, hasta convertirse en un país desarrollado integralmente.

Con el objetivo de abordar algunos de estos logros, cito las cifras publicadas por Axel Kaiser, destacado abogado, académico y politólogo de la derecha liberal —quien no ha sido precisamente partidario de la Concertación—, en una columna titulada “Chile: de la depresión al suicidio”¹⁴⁰. Esta se inicia con la siguiente afirmación: “Cuando los historiadores del futuro analicen lo que ha ocurrido en Chile en los años finales de la segunda década de este siglo, se preguntarán perplejos cómo fue posible que el país más exitoso de la historia de América Latina decidiera, por una abrumadora mayoría, destruir la institucionalidad que le había permitido convertirse en referente regional”.

Refiriéndose a los 30 años, Kaiser afirma: “En el caso de Chile la evidencia de superación es irrefutable. La inflación crónica, que había alcanzado un peak de más del 500% en 1973, cayó por debajo del 10% en la década de los 90 y por debajo del 5% en los años 2000. Entre 1975 y 2015, el ingreso per cápita en Chile se cuadruplicó hasta alcanzar los 23.000 dólares, el más alto de América Latina. Como resultado, desde principios de la década de 1980 hasta 2014, la pobreza se redujo del 45% al 8%”.

Y continúa: “Varios indicadores muestran que este ‘milagro económico’ benefició a la mayor parte de la población. Por ejemplo, en 1982 solo el 27 % de los chilenos tenía un televisor. En 2014, el 97% lo tenía. Lo mismo ocurre con los refrigeradores (del 49% al 96%), lavadoras (del 35% al 93%), los automóviles (del 18% al 48%), y otros artículos. Todavía más importante, es que la esperanza de vida aumentó de 69 a 79 años en el mismo período y el hacinamiento en las viviendas se redujo del 56% al 17%. La clase media, según la definición del Banco Mundial, aumentó de 23,7% en 1990 a 64,3% en 2015 y la pobreza extrema se redujo del 34,5% al 2,5%”. Luego agrega: “En promedio, el acceso a la educación superior se multiplicó por cinco en el mismo período, beneficiando principalmente al quintil más bajo, que vio su acceso a la

educación superior multiplicado por ocho. (...) Si bien entre 1990 y 2015 los ingresos del 10% más rico crecieron un total de 30%, los ingresos del 10% más pobre experimentaron un aumento del 145%”.

Hay otros datos reveladores, como que el índice de Gini —que mide la desigualdad salarial o de ingresos— “cayó de 52,1 en 1990 a 47,6 en 2015”, o que “un informe de la OCDE de 2017 mostró que Chile tenía mayor movilidad social que todos los demás países de la OCDE. Chile también ocupaba la posición más alta entre las naciones latinoamericanas en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas”.

Cito a este académico de derecha, y no a uno de los nuestros —que son muchos y de probada trayectoria—, pues podría argumentarse que dichas opiniones resultan sesgadas o poco imparciales. Las cifras entregadas por Kaiser, de hecho, son indesmentibles y coinciden con la de numerosos organismos nacionales e internacionales. No solo han sido confirmadas por quienes fuimos parte del proyecto político de la Concertación, sino que existe un amplio reconocimiento avalado por estudios especializados y publicados en relación con esta materia.

A lo anterior, es factible añadir que, durante los gobiernos de la Concertación, el país fue administrado financieramente en forma ordenada, sin déficit presupuestario, lo que significó que Chile pasara de ser una nación deudora a una acreedora, con importantes fondos de reserva. El Fondo de Estabilización Económica y Social, constituido en marzo de 2007, durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, llegó a acumular 15 mil millones de dólares, de acuerdo al balance del primer trimestre del 2018, los que se ahorraron en tiempos de bonanza y permitieron a nuestro país, hasta el día de hoy, responder en tiempos de crisis. Se determinó, por ley, la obligación de observar las normas de responsabilidad fiscal para garantizar el balance estructural presupuestario, siendo con ello nuestro país receptor de una creciente inversión extranjera. Las agencias calificadoras de riesgo siempre evaluaron y ubicaron a Chile entre las mejores posiciones, lo que permitió, tanto al Estado como a los privados, obtener créditos externos a muy bajas tasas de interés. Por último, cabe destacar el hecho que Chile celebró más de 50 tratados de libre comercio con diversos países, lo que llevó a incrementar nuestras exportaciones de 16.115 millones de dólares a 132 mil millones de dólares.

Ahora bien, junto a lo anterior, considero necesario aclarar el hecho de que los gobiernos de la Concertación no aplicaron “un modelo neoliberal”, o que se

limitaron simplemente a administrar el modelo heredado de la dictadura, tal como afirman nuestros detractores. Es posible que no hayamos sido lo suficientemente enfáticos para rebatir este tipo de argumentos y que no nos defendimos oportunamente al momento en que comenzó a difundirse esta nefasta visión. Ello, en buena medida, ha propiciado el que hoy aparezcamos, aparentemente, como aceptando esta calificación. A ello se suma la posición autoflagelante de muchos dirigentes y partidarios de nuestra coalición, quienes, renegando y adoptando posturas críticas, la abandonaron para buscar o crear nuevos e inciertos horizontes. ¿Decepción, ambición, crisis o una necesaria evolución? Todo esto es posible... Sin embargo, hoy, cuando esta historia parece formar ya parte del pasado reciente, considero fundamental levantar la voz, rebobinar la memoria y contextualizar los hechos, refutando decididamente este tipo de planteamientos. La Concertación, una alianza establecida entre el mundo de pensamiento humanista cristiano y humanista laico, apostó por un modelo de economía social de mercado, teniendo como referente a los países europeos de la posguerra, los mismos que hoy conforman la Comunidad Económica Europea.

Insisto, sin soberbia y con modestia: me siento orgulloso de ser parte de esta experiencia que permitió a nuestro país tomar la senda para trabajar por un modelo de sociedad democrática fundada en el respeto irrestricto de la dignidad de la persona humana; en la búsqueda de la justicia social para todas y todos; en el respeto a la diversidad y el rechazo, sin condiciones, de todo tipo de discriminación, ya sea por raza, identidad sexual, religión o de cualquier naturaleza.

Respeto a quienes opinen distinto y están en su derecho de hacerlo... Pero este reconocimiento es, para mí, algo esencial y no puedo guardar silencio cómplice. Soy y he sido parte de este proyecto político, y me siento honrado de haber tenido la oportunidad de ser partícipe y protagonista de su gestión. Todos nuestros esfuerzos y luchas fueron dados en nombre de la libertad, la democracia y la dignidad de Chile y su pueblo. Probablemente cometimos errores y desaciertos, y quedaron muchos cabos sueltos. Eso es parte del gobernar, y hay que tener la humildad de reconocerlo. Espero que el tiempo y la historia sepan juzgar con ecuanimidad las decisiones y los caminos que intentamos despejar y abrir para nuestra patria.

XIX

LOS EXTREMOS EN BÚSQUEDA DEL CENTRO

1. Presidenciales 2021

El 21 de noviembre de 2021 compitieron, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los candidatos Sebastián Sichel, independiente en representación del pacto “Chile Podemos Más” (UDI y RN); José Antonio Kast, apoyado por el Partido Republicano y el Frente Social Cristiano; Yasna Provoste, por el “Nuevo Pacto Social” (DC, PS, PPD, Partido Radical y Partido Liberal); Gabriel Boric, por el pacto “Apruebo Dignidad” (Frente Amplio y Partido Comunista); Franco Parisi apoyado por el Partido de la Gente (PDG); Marcos Enríquez-Ominami, por el Partido Progresista (PRO), y Eduardo Artés, apoyado por el Partido Unión Patriótica.

El resultado de dicha contienda electoral dio como ganador a José Antonio Kast, quien alcanzó el 27,9% de los votos, seguido de cerca por el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, con el 25,83%, pasando ambos a segunda vuelta. Con ello, un hecho significativo se manifestó: por primera vez, desde 1990, quedaron excluidos del balotaje los candidatos presidenciales de las grandes alianzas políticas que marcaron el período del retorno de la democracia, señalándose el comienzo de una nueva etapa política para Chile.

Ambos candidatos representaban los extremos del escenario político chileno. Durante el período de campaña de la segunda vuelta, tanto Boric como Kast fueron tomando cada vez más conciencia de que, entre sus respectivos flancos, existía un amplio sector de electorado que no estaba de acuerdo ni dispuesto a adherir a sus programas de gobierno. De ahí que ambos, desde un principio, admitieran abiertamente que modificarían sus propuestas dejando de lado sus posturas más radicales, tanto hacia la derecha como la izquierda. Lo hicieron sin tapujos, apelando a conquistar los votos necesarios para ser electos. Gabriel Boric habló de moderación, de reformas progresivas, de un compromiso con una política fiscal responsable, de apertura al diálogo con todos los sectores; es decir, su oferta estuvo dirigida especialmente al mundo de la ex Concertación y a sectores moderados de centro. Tuvo éxito: incrementó su votación para la segunda vuelta, del 25,83% al 55,87%, logrando además una alta participación y adhesión ciudadana en los comicios.

Por su parte, José Antonio Kast hizo también esfuerzos por conquistar la votación del electorado de centroderecha, incluso intentó aproximarse a los votos temerosos del centro político; no obstante, su margen de crecimiento estaba más limitado. Logró un respaldo del 44,13%, correspondiente a la votación histórica de los partidos de derecha.

2. Un desafío para el Presidente, una tarea para todos

Gabriel Boric asumió como nuevo Presidente de Chile el 11 de marzo de 2022, en medio de un escenario incierto, marcado por las secuelas de la crisis económica, la incertidumbre derivada de la pandemia y un ambiente socio-político aún tensado por los procesos que echó a andar el estallido social. Durante los primeros meses de gobierno, ha reiterado en diversas oportunidades su compromiso de enfrentar los cambios en términos progresivos y con responsabilidad, especialmente en materia fiscal, así como la necesidad de abrir espacios de diálogo con todos los sectores, incluida la oposición. El nombramiento de su primer gabinete —particularmente en el área económica, con la designación de Mario Marcel, ex presidente del Banco Central, como ministro de Hacienda—, así como los cambios introducidos recientemente se aproximan a sus compromisos, ampliando su base política a través de la incorporación de ministros y subsecretarios pertenecientes al Partido Socialista, PPD, Partido Radical, liberales e independientes. Son, en general, mujeres y hombres con destacados antecedentes profesionales.

Tengo la impresión de que el Presidente Boric deberá asumir un claro y decidido liderazgo personal, con mucha entereza, ya que al interior de su gobierno se verá enfrentado a dos almas. Por una parte, la que él quiere y ha reiterado: cambios en forma gradual, con responsabilidad y de acuerdo a la real capacidad del país para dar respuesta a los mismos. En diversos debates durante la campaña afirmó que “para llegar lejos hay que caminar lento”. Y, por otra, la de aquellos sectores dentro de su alianza que están por radicalizar la política y acelerar el proceso de transformaciones. Espero que no se presente la dualidad que debió enfrentar el Presidente Allende durante su mandato —por supuesto en un escenario y contexto histórico diferentes—, a la hora de definir cómo implementar la Vía Chilena al Socialismo, el que terminó debatiéndose en posturas irreconciliables y una polarización que se profundizó cada vez más, entre su real compromiso de llevar adelante las transformaciones en el marco legal y de la Constitución, “con empanadas y vino tinto”, y aquellos que querían “avanzar sin transar”. No hubo posibilidad ni voluntad de llegar a acuerdos, y ya conocemos las consecuencias y el duro desenlace.

Creo que la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos queremos que este gobierno tenga éxito, que las reformas se concreten y que el país avance en forma significativa en términos políticos, sociales y culturales. La gente espera que Chile viva en paz y en justicia. Su fracaso sería el fracaso de todos.

Hay que colaborar para que las cosas se hagan bien, así como ser responsables y claros si observamos que el país toma el camino equivocado. Personalmente, espero que la Democracia Cristiana, pese a no formar parte de este gobierno, tenga una actitud que denominaría de “independencia constructiva”, de manera tal que, a través de sus dirigentes y equipos técnicos, tanto en el ámbito parlamentario, regional o local, pueda aportar con su esfuerzo e ideas por lograr lo que el país espera: un gobierno exitoso y un país cada vez más sólido, justo y democrático.

Hoy por hoy, una de las demandas ciudadanas más sentidas es la necesidad de restablecer el orden público y la paz social, erradicar la violencia en todas sus formas y combatir la delincuencia y el narcotráfico. A ello se suma, por supuesto, avanzar en una solución integral para la grave crisis que se vive en la Macrozona Sur, correspondiente a las regiones del Biobío y de La Araucanía. Esta es una tarea, por cierto, más que suficiente para cualquier gobierno.

La nueva autoridad tiene, además, sobre sus hombros la responsabilidad de volver a ordenar las cuentas públicas, imponer la responsabilidad fiscal, bajar la deuda pública y evitar que el país entre, nuevamente, en la vorágine inflacionaria. Esta misión implicará afrontar una gestión difícil, que requerirá de un gran esfuerzo de colaboración para llevar adelante los cambios que den respuesta a las justas demandas sociales pendientes en materias tales como salud, pensiones, educación, vivienda y desigualdad territorial. Todo este proceso transformador deberá realizarse en paralelo a la implementación de una política de gasto fiscal responsable, que permita obtener los recursos necesarios para el financiamiento equilibrado del presupuesto de la nación.

Pero la implementación de esta política de austeridad y cambio no solo corresponderá al gobierno. También se requerirá de una efectiva colaboración público-privada para reactivar la economía, con el objetivo de que el país recupere su capacidad de crecimiento económico de acuerdo a las exigencias de las transformaciones. Abrir el camino para un desarrollo pleno e integral es tarea de todas y todos los chilenos, lo que indudablemente significará una mayor exigencia para aquellos que tienen más en relación con los que tienen menos, así

como para los que tienen más poder en lugar de quienes no lo tienen. Ello demandará conciencia, responsabilidad y generosidad.

En esta nueva fase, las futuras autoridades deberán tener presente que, además de los problemas que hemos señalado, el país y el mundo necesitan asumir con seriedad y urgencia la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias que obliguen a velar, proteger y preservar el medio ambiente. Es fundamental evitar que la contaminación, la depredación y el cambio climático sigan destruyendo nuestro planeta y poniendo en riesgo nuestra existencia. Esta amenaza no puede obviarse, pues estamos en un momento límite. No es posible que el tema se trate como un divisor ideológico, o de cualquier otro tipo. Por el contrario, debería unirnos más que nunca para enfrentar con éxito este ultimátum que se cierne sobre todos, sin excepción.

Asimismo, resulta fundamental que el actual gobierno tenga presente que una de sus principales misiones será la de liderar la transición a un nuevo ciclo de convivencia ciudadana, cuyos márgenes estarán delimitados, en buena medida, por la institucionalidad que se proponga en una nueva Constitución. Esta debería responder a un proyecto de sociedad enmarcado en un “nuevo pacto social”, que se traduzca en una verdadera “casa para todos” y en un marco que nos permita convivir positiva y armoniosamente como ciudadanos.

Tal como hemos señalado anteriormente, con motivo del estallido social, todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, a excepción del Partido Comunista, acordaron lo que se denominó “Acuerdo por la Paz Social”. Por amplio consenso, se aprobaron entonces las normas constitucionales mediante las que se convocó a la ciudadanía a un plebiscito, de manera de dirimir la forma en que se procedería para dar al país una nueva Constitución. Dicho plebiscito, efectuado en octubre de 2020, aprobó por amplia mayoría (cercana al 80%) que para esos efectos debería elegirse por votación una Convención Constitucional, la que fue integrada paritariamente por 155 miembros, incluidos 17 representantes de pueblos originarios. Tras una ardua labor, dificultada por la dispersión de sus representantes y la conducta de algunos de sus partícipes, finalmente, en el mes de julio de 2022, la Convención entregó su propuesta de Nueva Constitución, la que fue plebiscitada el día 4 de septiembre. Cabe destacar que dicha propuesta contó con el apoyo del gobierno, de los partidos que lo respaldan y también de la Democracia Cristiana, no obstante, esta acordó respetar la libertad de conciencia de sus militantes.

En una campaña que se prolongó durante sesenta días, el país se debatió entre dos opciones: Apruebo o Rechazo. Sin embargo, partidarios de ambas alternativas hicieron presente que la propuesta de los convencionales adolecía de importantes observaciones y se comprometían a rectificar el texto una vez que se pronunciara la ciudadanía. El resultado fue una sorpresa para todos. Una importante mayoría (62%) se pronunció por rechazar el texto presentado por la Convención; no obstante, hay acuerdo de parte de todos los sectores respecto a la necesidad de contar con una nueva Carta Fundamental. En el momento que escribo estas líneas, el proceso se ha radicado en el Parlamento, en una mesa de diálogo conformada por todos los partidos políticos y sus parlamentarios, con el objetivo de definir la forma en que se procederá para lograr que el país cuente con una nueva Constitución.

No puedo concluir estas líneas sin dejar constancia de mi postura al respecto. La opción fue difícil. No estuve de acuerdo con la definición de mi partido, pues me parecía que la propuesta adolecía de graves problemas, de muchas indefiniciones, y que era un texto partisano, que dividía al país, que solo provocaría confrontación e, incluso, que podía poner en riesgo el funcionamiento de nuestra democracia. Ello, particularmente, en relación con temas tales como el régimen político de gobierno, las limitaciones a las atribuciones exclusivas del Presidente de la República, la supresión del Senado, el desconocimiento de la existencia del Poder Judicial y la posibilidad de diversos sistemas de justicia, la plurinacionalidad, la autonomía territorial y autogobierno para determinados pueblos originarios, el tratamiento de los derechos de agua —que afectaría principalmente a la actividad agrícola de pequeños o medianos agricultores—, por mencionar solo algunas observaciones.

Estaba y estoy convencido de que para realizar esas modificaciones era mejor rechazar, de manera de intentar un acuerdo más consensuado entre los diversos sectores políticos y lograr un texto que cumpliera con ese objetivo, similar al proyecto enviado al Congreso por la Presidenta Bachelet al término de su segundo gobierno, una Constitución que se proyectara como una “Casa para todos”. Estoy convencido de ello, dados los quórum para modificar establecidos por la propuesta de la Convención, en comparación con los 4/7 que se exigen en la norma constitucional vigente, aprobada recientemente por una amplia mayoría en el Parlamento por iniciativa de los senadores Pedro Araya, Fidel Espinoza, Iván Flores, Ximena Rincón y Matías Walker.

EPÍLOGO

1. Los tres desafíos del próximo Chile

En este complejo y crucial escenario, en el que la colaboración colectiva se hace urgente, hay tres importantes desafíos en los que me gustaría hacer hincapié, ad portas de esta travesía en la que nos embarcamos.

*

ELEGIR LA CONFIANZA

Todos, autoridades y ciudadanos, cualesquiera sean nuestras convicciones, deberemos invertir nuestras energías en recuperar la confianza. Con ello no solo me refiero a la confianza en la clase política, líderes y dirigentes, gobierno e instituciones públicas, sino que también en nuestras comunidades, vecinos y compañeros de trabajo. Esta se ha quebrado inexorablemente por múltiples razones, y no habrá progreso en la medida en que no podamos garantizar la gobernabilidad. Para ello la confianza es esencial.

Confiar significa construir una relación positiva con el otro, atreverse a apostar por algo o por alguien, deponer nuestros recelos y aprensiones y abrirnos a la posibilidad de creer y de fiarse de los demás. Esto representa un alto desafío, en medio de un mundo altamente competitivo, plagado de fake news, donde el exhibicionismo digital, el narcisismo, el hiperindividualismo y la virtualidad se valorizan, anulando nuestras antiguas fórmulas de sociabilidad. La inmediatez nos deslumbra y apabulla. Más allá de todas sus ventajas, la revolución digital ha trastocado nuestras percepciones y cosmovisión, alterando nuestra propia convivencia y erosionando el respeto y lo comunitario. Creemos estar más interconectados que nunca, pero esto no es más que un crudo espejismo: la soledad y el aislamiento son el costo y la otra cara del espejo. En las redes sociales no se escuchan voces y muy pocos se atreven a dar la cara. Es un fenómeno en el que existe cierto desmontaje de lo real, y la ilusión de lo

imaginario parece decantar en un mundo poderoso, pero también frágil y de apariencias. Ante estas vivencias, añoramos y valoramos cada vez más los encuentros de “carne y hueso”, la calidez de un abrazo o el percibir el brillo u opacidad de una mirada. La pandemia que golpeó al mundo entero, a principios de 2019, dejó más en evidencia que nunca la latencia de esta necesidad.

Se dice, y con razón, que la confianza recíproca es vital en toda relación o proyecto. Si falta, no hay posibilidad de construir o proyectar nada. En su ausencia, vivir en paz o convivir armoniosamente se vuelve también algo improbable. Asimismo, en el ámbito internacional, se quiebran las relaciones entre los países. Yendo aún más lejos, hoy en día los economistas sostienen que, para lograr una óptima productividad, un factor determinante es la confianza entre ejecutivos y trabajadores de una empresa, o entre los consumidores y productores de bienes y servicios.

La ausencia de confianza nos golpea a todos. Por lo mismo, podemos y debemos dilucidar qué grado de responsabilidad nos corresponde a cada uno en esta pérdida. Existe, sin duda, una responsabilidad colectiva, y es importante reconocerlo, pero aún más importante es buscar una solución a cómo recuperarla.

Hemos dicho que el país afronta un “nuevo ciclo”, un “nuevo tiempo”. La nueva Constitución que regirá nuestra vida ciudadana en los próximos 50 años —o más— deberá darnos, precisamente, la oportunidad para reponer la credibilidad perdida en nuestras instituciones. No habrá gobernabilidad ni paz social si no existe confianza recíproca entre la ciudadanía y quienes la representan en el ejercicio del poder.

*

RECHAZAR LA VIOLENCIA

Pero no solo basta la confianza para construir, con cimientos sólidos y gobernabilidad, la “Casa de todos y todas”. Es imperativo el convencernos de que debemos desterrar la violencia como acción de reclamo social, cultural,

político, económico y de cualquier naturaleza. Todos hemos sido testigos que la violencia, como camino, solo termina destruyéndonos, y que los objetivos con los que pretende justificársela nunca son alcanzados.

Tal como lo mencionara en capítulos anteriores, soy un admirador de Mahatma Gandhi, así como de figuras tales como Martin Luther King, el Dalai Lama, Teresa de Calcuta y Nelson Mandela, entre otros. Y también de mi amigo Jaime Castillo Velasco, y de todos aquellos líderes políticos, religiosos e intelectuales que nos han convocado a la no violencia, sin que ello implique renunciar a ponernos al servicio de la defensa de la justicia y los derechos inalienables de las personas.

Hoy, igual que ayer, sigo convencido de que, para construir un país para todas y todos es requisito básico el que nos comprometamos a erradicar la violencia, esté donde esté. A su vez, las autoridades de turno deben desechar la represión. Únicamente es posible avanzar, en la medida en que la ciudadanía se organice y reclame la paz, y los líderes de opinión asuman su tarea de convocar a la gente por la no violencia, tal como lo hizo el pueblo italiano, en mayo de 1978, frente al asesinato del dirigente político Aldo Moro, a manos de las Brigadas Rojas. Hubo un llamado a salir a las calles para exigir la paz y condenar estos actos, al que atendieron millones de ciudadanos convocados a adherir a manifestaciones pacíficas a lo largo de todo el país. Dichas acciones fueron claves, y el terrorismo político en Italia fue desterrado para siempre. Lo mismo sucedió con el movimiento terrorista ETA, que azotó brutalmente por décadas al País Vasco en España. Fue la gente la que se unió, sin distinciones, para derrotarlos e imponer la paz. Algunos dirán que todo esto es una utopía, quién sabe... Lo único que tenemos como certeza es que Gandhi y Mandela triunfaron, mientras ETA y las Brigadas Rojas fueron vencidas.

*

EXIGIR LA PROBIDAD

Reconstruir la confianza y erradicar la violencia son aspectos fundamentales en toda convivencia democrática, pero hay un fenómeno que es capaz de echar por

tierra este esfuerzo, sin importar lo fuerte o poderoso que sea un país: la falta de probidad. En palabras simples, ello significa ausencia de integridad, honradez o rectitud en el actuar de alguien que tiene autoridad y poder, quien se enriquece a costa de los recursos públicos que le corresponde administrar o disponer.

Este mal no solo corrompe al individuo que lo perpetra, sino que termina dañando a toda la sociedad en su conjunto. Basta que un político o un funcionario con un determinado cargo de poder incurra en actos indebidos, para que la opinión pública generalice en un juicio condenatorio, metiendo a todos sus pares en el mismo saco. Basta que un político participe en un acto de corrupción para que se termine tildando a todos los demás políticos como iguales. Basta que un militar o un carabinero se apropie de dineros que no le corresponden para que se produzca una condena generalizada de esas instituciones.

Lo mismo sucede en la actividad privada, cuando un empresario comete un delito o se colude para lograr beneficios con ello. No solo se condena al denunciado, sino que también afecta la imagen de todo el gremio. El comentario resultante es: “Todos son iguales”.

Tanto el soborno, la coima y el enriquecimiento ilícito, así como los delitos sexuales contra menores y personas vulnerables, y quienes abusan de su autoridad para lograr privilegios indebidos deben ser castigados con la aplicación de la máxima sanción de la ley. Solo a través de su condena se generará la conciencia de que estos actos no solamente afectan a una víctima, sino que a la sociedad en su conjunto.

Por desgracia, en el Chile actual, se ha asentado la percepción de que este mal ha carcomido, cada vez con mayor recurrencia, la actividad pública y privada. Por lo mismo, hoy es más importante que nunca que las autoridades sean exigentes y prolijas en sus conductas, tanto públicas como privadas, y que sepan que, desde el momento en que asumen posiciones de poder, están sujetas y expuestas, al igual que en una vitrina, al escrutinio público. Deberán responder, ya sea por acción o por omisión.

2. El respeto a la voluntad ciudadana

Antes de cerrar, quisiera transmitir mi inquietud y preocupación ante lo que puede ser el futuro de nuestro querido Chile, especialmente para las nuevas generaciones. Tengo fe y esperanza en que seremos capaces de impedir que los nubarrones que se observan en el horizonte se ciernan sobre nosotros y en que, de una vez por todas, como afirmara con tanta agudeza el economista chileno Aníbal Pinto Santa Cruz, Chile deje de ser “un caso de desarrollo frustrado”.

Fui testigo de lo que fue capaz de hacerse en una España fracturada tras la guerra civil y la larga dictadura de Franco, con un saldo de más de un millón de muertos. Y fue precisamente Adolfo Suárez, en su calidad de Presidente, quien, pese a haber participado activamente en el gobierno franquista, asumió, como corresponde a un verdadero líder, la conducción de la transición. Logró que las cortes de España —símil de nuestra Cámara de Diputados—, elegidas democráticamente después de la muerte de Franco, y tras la aprobación de un referéndum en 1978, dictaran una Constitución que representó a toda la sociedad, no solo políticamente, sino que también en sus expresiones regionales, culturales y lingüísticas más diversas. Hasta el día de hoy, transcurridos ya casi 50 años, esta rige los destinos de España, sobrepasando incluso conflictos autonómicos, tales como el catalán. Dicha Constitución contó con amplio respaldo ciudadano, precisamente porque no se hizo primar las mayorías coyunturales o los intereses de grupos o regiones particulares.

¿Podremos las chilenas y chilenos lograr algo similar? ¿Será posible que, así como en el plebiscito del mes de octubre del año 2020, aprobemos la propuesta de una nueva Constitución con amplio respaldo? ¿Podremos aprobar una Constitución que sea para todos y no solo para una mayoría circunstancial?

Hacer los cambios que se requieren para mejorar Chile no significa retroceder en materia de libertades o derechos. El cambio va en transformar las estructuras para que seamos una sociedad más justa. En ese sentido, lo que está sucediendo es una oportunidad. El drama de la pandemia, con sus costos y efectos, nos permite hoy replantearnos cómo podemos y queremos vivir el próximo tiempo. Y, desde ya, asumir las heridas que han quedado al desnudo y que es importante

sanar. Los problemas derivados del sistema de salud, el acceso a la educación y a la vivienda, la falta de organización territorial y descentralización, las deficiencias del sistema previsional... No son cosas que se resolverán de la noche a la mañana, pero como sucede en toda crisis, tenemos la alternativa de formular qué camino vamos a seguir para salir de todo ello.

No se trata de decir ilusamente “esto lo vamos a solucionar de tal forma”, pero ya sabemos que hay tres o cuatro temas que hay que abordar a como dé lugar. Y, también, que para abordar esos temas se van a tener que redistribuir los recursos existentes y descentralizar el poder, eliminar los privilegios y sancionar los abusos.

Y en esto soy enfático: no vamos a volver a ser el Chile de antes. No será posible decir “aquí no pasó nada”. No, aquí pasó mucho, y debemos tomar conciencia de lo sucedido. El cambio de paradigma es evidente.

Estamos en medio de un punto de inflexión. Nuevos referentes, arquetipos y percepciones han comenzado a instalarse con fuerza, y nuestra creatividad, capacidad de adaptación y resiliencia serán claves para reconvertirnos y cimentar nuevos caminos de convivencia que garanticen una vida justa y digna para todos los chilenos y chilenas. La nueva Constitución, en este escenario, será una oportunidad o un salto al precipicio, dependiendo de qué tan bien o mal lo hagamos.

Para ello resulta esencial buscar acuerdo en los aspectos básicos. Coincidimos en que hay que mejorar las pensiones, estableciendo un sistema solidario. Perfecto, ¿cómo lo hacemos? Estamos de acuerdo en que el sistema tributario debe ser equitativo, y que quienes tienen más deben pagar más. Perfecto, busquemos una manera. Acordamos que es indispensable mejorar la salud pública, y que es necesario aportar mayores recursos a los municipios más vulnerables. Lo mismo en materia educacional. ¿Cómo avanzamos desde ahí?

Asimismo, la nueva Constitución deberá considerar la sustentabilidad ecológica. El cambio climático es un fenómeno que nos afecta a todos, y hoy nadie puede sentirse facultado para hacer lo quiera con los recursos naturales y el planeta. Debe incluirse también el concepto de comunidad: a los chilenos tiene que importarnos e interesarnos el bien común, no solo el de nuestra familia, amigos o seres más cercanos, sino que debemos comprender que nuestro propio bienestar depende del bienestar del otro. Estamos todos en red, interconectados, y somos

interdependientes. Este fenómeno, ampliamente descrito por la física cuántica y adjudicable a toda sociedad humana, significa que el estado de dos o más objetos dentro de un sistema involucra al resto de los objetos del mismo, aun cuando estén separados espacialmente. Por ello, cuando me preguntan a qué tipo de economía aspiro, respondo: “Quiero una economía social de mercado, ecológica, solidaria y comunitaria”.

El régimen político también es fundamental. Tenemos que decidir, de una vez por todas, si vamos a mantener el presidencialismo o si avanzaremos a otros modelos, tales como el régimen semipresidencial o semiparlamentario, en los que se facilitan las alianzas.

La nueva Constitución requerirá considerar el deber del Estado de asegurar los derechos sociales de la forma más eficiente posible, y de acuerdo a los recursos con que el país cuente para ello. En este sentido, resulta indispensable diseñar nuevas políticas tributarias que faculden mayor participación en la economía de las personas que tienen menos. Soy partidario de implementar un nuevo sistema tributario desintegrado, en el que las empresas paguen sus impuestos de manera progresiva, y las personas lo hagan acorde a sus ingresos. A su vez, debe existir un Estado eficiente en la regulación de los abusos y que invierta sus excedentes en favor de los derechos sociales. Podemos seguir avanzando hacia lo que en Europa se conoce como Estado de Bienestar, donde la gente tiene una base: a nadie le falta la atención médica; nadie deja de estudiar por falta de acceso; nadie queda fuera del sistema previsional.

Deberá ser una Constitución que sea para todos, no solo para la mayoría circunstancial, y, por sobre todo, un texto neutro e integrador; es decir, que no esté cargado de contenido ideológico, pues su objetivo es que represente a todos los chilenos y chilenas. Nuestra Constitución debe ser una casa para todos, donde todos los ciudadanos tengan cabida. Pero, para eso, se requieren consensos más amplios que una simple mayoría.

Hay que tener en cuenta que no es posible proyectarse al futuro sin considerar el presente, o sin visualizar el pasado. La historia de los países es la consecución de una serie de hechos y vivencias que, en su conjunto, construyen un relato mayor. Aquí sucede lo mismo, y nos encontramos en medio de un proceso de transición respecto a ese relato. Casi me atrevería a decir que se trata de una segunda transición a la democracia, después de la que empezamos en 1990. Pero hay un elemento que no debemos olvidar, y es que en la esencia misma del ser humano

se encuentra arraigada la búsqueda por la dignidad. Ese es el tema que hoy se alza por sobre todo lo demás, y desde ahí debemos ir construyendo este proceso en el que estamos inmersos.

Confío en que Chile tiene condiciones para lograr este desafío. Somos un país con una tradición histórica democrática y republicana. La experiencia me ha llevado a convencerme, cada vez más, de que la nueva institucionalidad chilena debe construirse bajo esos parámetros, siguiendo el sendero de esa misma historia de democracia, una que siempre puede ser perfectible, pero jamás evitada o baipaseada.

Muchas preguntas y nuevos proyectos se despliegan en el horizonte, en un país cargado de expectativas, pero que afronta duros desafíos tras una cruda pandemia, un descarnado escenario económico y la incertidumbre de cómo resultará la nueva Constitución. Hay muchas esperanzas en la ciudadanía, pero también ha ido cobrando fuerza el peligroso juego de la polarización. El rumbo de nuestra nación es incierto. No obstante, la mayoría de las chilenas y chilenos espera dar curso a un gobierno en que primen el entendimiento, el diálogo y los mejores frutos de la democracia. Solo ello garantizará el resguardo del bien común, la equidad y el devolver la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y autoridades. Tal como señalara el propio Presidente Boric en su primer discurso como Presidente de la República ante la ciudadanía en la Plaza de la Constitución, el día 11 de marzo de 2022: “Llegamos aquí para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor la vida en nuestra patria. No partimos de cero. Chile tiene una larga historia y este día nos inserta en esa historia larga de nuestra República”.

3. Una última confesión

Hay un sabio dicho popular que dice: “El que nace chicharra, muere cantando”. Esto significa que uno nunca abandona lo que es parte de su esencia. Mi gran pasión, desde que tengo memoria, ha sido la política. Y lo que me atrajo de ella no fue precisamente la fama o el poder, sino el saber que constituía una vía posible para construir, realizar cambios y modificar la realidad, aportando en la transformación de un mundo más justo y mejor para todas y todos. No en vano muchos me han tildado, a lo largo de los años, como un verdadero “animal político”. Desde siempre, desde muy niño, supe que esa era mi vocación.

A lo largo de mi vida, tuve muchas oportunidades para optar por otros caminos. En 1971, cuando perdí mi primera campaña electoral, me llamó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo para ofrecerme el cargo de vicepresidente en Washington D.C., pero lo descarté, argumentando que mi primera obligación era con Chile. Como esa, se me presentaron numerosas alternativas, en especial durante el período del exilio. Podría haber dejado la política y haberme dedicado a mi profesión, lo que posiblemente habría redundado en una vida más tranquila y, quizás, en haber disfrutado más a mi familia y amigos. No obstante, tengo la absoluta convicción de que mi elección fue la correcta.

En todos estos años, he aprendido que en la política —al igual que en cualquier otro ámbito de la vida— la amistad, la tolerancia y la empatía facilitan las relaciones. El político, ante todo, debe tener capacidad de escuchar y voluntad para intercambiar ideas, en vez de solo descalificar. El otro no es un enemigo, es un adversario, y nadie nunca es dueño de la verdad absoluta. Por el contrario, cada quien tiene una parte de esta. Toda disputa o enfrentamiento puede transformarse en una experiencia valiosa, enriquecedora y de alto aprendizaje... El punto es cómo darle curso a la discusión y al disenso. Y en ello la capacidad de diálogo, la apertura y el respeto resultan ingredientes claves. Lo peor que le puede pasar a una persona es que nadie lo interpele o cuestione. Así no se puede avanzar ni crecer.

Sin embargo, hay temas en los que nunca voy a trazar, entre ellos el resguardo y defensa de los derechos humanos, la justicia social, la libertad y la democracia.

Puedo estar dispuesto a ceder en temas y ámbitos coyunturales, tales como materias tributarias o legislaciones particulares, pero no así respecto a los primeros, pues representan principios trascendentes y sagrados.

No se trata de lograr entendimientos porque sí, sino que con el objetivo de avanzar. En eso estoy absolutamente de acuerdo con el poeta español Antonio Machado, cuando dice: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar...”. Para abrir caminos, hay que caminar. Hay que seguir avanzando. A veces podremos detenernos, pero nunca retroceder. Los cambios que se requieren pueden lograrse, siempre que se hagan progresivamente, y de acuerdo a la realidad y a las circunstancias del momento. Muchas veces es preciso caminar lento y con cautela para no tropezar y tener que empezar desde cero.

He intentado enmarcar mi vida política en torno a tres principios fundamentales: la tolerancia, la honestidad y el respeto. Ello significa no descalificar, respetar al que piensa diferente, tener presente que toda discusión nos enriquece, ser claro y honesto sobre aquello en lo que uno cree y, ante todo, siempre decir la verdad. Tal como nos decía Renán Fuentealba, siete veces presidente de nuestro partido: “Hay que decir siempre la verdad. Si no puedes, es preferible callar. Pero jamás mentir”.

Tengo muy claro que intentaré seguir aportando a la política hasta el final. Bien podría vivir el tiempo que me resta preocupado solo de mis asuntos personales, de disfrutar y compartir íntimamente con la familia y los amigos, desentendido de lo que sucede en este Chile que tanto quiero. Esto, sin embargo, sería negar que soy dueño, de por vida, de una vocación política. Como dicen por ahí, espero morir con las botas puestas. Y, de paso, que me entierren como un demócratacristiano, porque el partido ha sido parte importante de mi vida, quizás mi segunda piel, y que nunca nadie piense que he tenido dudas al respecto. Ahí ha estado mi corazón.

Quien lea estas líneas podrá conocer mi relato, como primer testigo, de lo que ha sido mi vida pública, así como mi testimonio sobre este tiempo que me ha correspondido vivir. Esta es mi versión de los hechos. Esta es mi verdad respecto a lo visto y vivido en el curso de más de siete décadas de trayectoria política. Puede que ello contradiga a quien piense distinto, y tiene el legítimo derecho a hacerlo. Solo pido al lector su comprensión y que haga fe cuando afirmo que lo que aquí relato lo hago con la convicción de no faltar a la verdad. Tal como afirmara anteriormente, nadie es dueño de toda la verdad y, como todo ser

humano, tengo virtudes y defectos. Muchas veces me he equivocado y he faltado a mis valores y convicciones, pero también he tratado de corregir y reparar lo errado. De antemano pido excusas y aprovecho la ocasión para pedir perdón si a alguien he ofendido, o he sido injusto en mis acciones o comentarios, aun cuando pudiese ser ya tarde para reconocerlo. Cualquier error, desacierto o juicio emitido en este relato es de mi absoluta responsabilidad.

Concluyo estas páginas como un fiel testimonio de los 70 años del Chile que me ha tocado vivir como actor político, con la esperanza de que estas reflexiones sean un aporte a mi patria, a su historia y a las nuevas generaciones.

AGRADECIMIENTOS

El presente relato ha sido posible no solo gracias al esfuerzo de largos meses de trabajo y de una intensa labor entrecruzada por la introspección, la reflexión y el diálogo, sino que también al respaldo y aliento de numerosas personas. A cada una de ellas deseo expresar mi agradecimiento. En primer lugar, a mi esposa, Inés Hurtado Ruiz-Tagle, compañera de toda una vida, quien en estos setenta años ha sido partícipe de la historia y narración contenida en estas páginas, así como también han sido cómplices mis hijas Paula, Francisca, Patricia y Claudia. Mis nietas, nietos y bisnietos, como familia, no solo me han dado alegrías, sino que también han sido el refugio en los momentos difíciles. A mis padres, que me dieron la vida y supieron impregnarme, a través de su propio testimonio, los valores del compromiso cívico, la vocación política y la búsqueda de la justicia social. Sus enseñanzas me abrieron el camino para atreverme a desplegar el vuelo de la vida con confianza, amor, sencillez y humanidad.

Asimismo, agradezco a quienes hicieron posible construir este relato. A Paula, mi hija, historiadora con estudios de periodismo en la Universidad Complutense, mientras vivimos nuestro exilio en Madrid. Ella, junto a la periodista Bernardita García, mediante un trabajo valioso y aplicado, hilvanaron recuerdos, fragmentos y conversaciones, dándole cuerpo y coherencia a esta historia. Por su parte, Katty Grez transcribió con paciencia y dedicación buena parte de nuestros diálogos y entrevistas.

Todo este esfuerzo se abrió espacio con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer, coeditora de esta publicación, a la

que expreso mi reconocimiento.

Mi agradecimiento también para Arturo Infante, Director General de Editorial Catalonia, quien confió desde un comienzo en este proyecto, así como al equipo editorial y al corrector de textos Hugo Rojas Miño, quienes con profesionalismo y agudeza aportaron sugerencias y valiosas observaciones a la hora de concretar esta publicación.

Finalmente, agradezco a quienes se han dado el trabajo de leer estas páginas, esperando humildemente hayan servido para conocer mi testimonio respecto a los setenta años de vida pública que me ha correspondido vivir en este Chile que tanto quiero y al que tanto debo.

1 La Segunda. 14 de agosto de 1992.

2 Alberto Hurtado Cruchaga S.J. Humanismo social. Santiago, Editorial Los Andes, 1992, p. 102.

3 El Diario Ilustrado. 3 de septiembre de 1964, p. 3.

4 Genaro Arriagada. “Actividades de la CIA en Chile (1963-1973)”. CED, Informe N° 5 y 6, 5 de diciembre de 2000. Disponible en: http://www.archivochile.com/Imperialismo/us_contra_chile/UScontrach0004.pdf

5 Véase José Tomás Labarca. “Por los que quieren un gobierno de avanzada popular”: Nuevas prácticas políticas en la campaña presidencial de la Democracia Cristiana, Chile, 1962-1964. Publicación online Cambridge University Press, 19 de julio de 2017. Disponible en: <https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-research-review/article/por-los-que-quieren-un-gobierno-de-avanzada-popular-nuevas-practicas-politicas-en-la-campana-presidencial-de-la-democracia-cristiana-chile-19621964/E9A033E7B37997628DA2119963BFDE67>.

6 Cfr. Aníbal Pinto Santa Cruz. Chile, un caso de desarrollo frustrado. Santiago, Editorial Universitaria, 1959, pp. 155-156.

7 Octavio Avendaño Pavez. “La Reforma Agraria Chilena: entre el gradualismo y la transformación acelerada”. En: Revista Anales, Séptima serie, N° 12, 2017, pp. 40-41.

8 Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH). Módulo 4 del Sistema de Autoformación Política del Partido Demócrata Cristiano. 1996, p. 11.

9 La Tarde. 8 de septiembre de 1970. Cfr. El Mercurio y Las Últimas Noticias. 8 de septiembre de 1970.

10 Puro Chile. 26 de septiembre de 1970.

11 Ibídem.

12 El Siglo. 28 de septiembre de 1970, p. 9. Cfr. Última Hora. 28 de septiembre de 1970.

13 Puro Chile. 16 de octubre de 1970.

14 Véase Peter Kornbluh. “Extreme Option: Overthrow Allende (Opción Extrema: Derrocar a Allende)”. Artículo publicado en el Archivo de Seguridad Nacional (NSA) de The George Washington University, Estados Unidos, 15 de septiembre de 2020. Disponible en: <https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/chile/2020-09-15/extreme-option-overthrow-allende>.

15 Peter Kornbluh. “Cómo se ejecutó la orden de Nixon, Kissinger y la CIA: ‘Efectuar la remoción de Schneider’”, 22 de octubre de 2020. Disponible en: <https://www.ciperchile.cl/2020/10/22/como-se-ejecuto-la-orden-de-nixon-kissinger-y-la-cia-efectuar-la-remocion-de-schneider/>.

16 Patricia Verdugo. “Los secretos del poder”. 2 de mayo de 2006. Disponible en: <https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2006/05/02/los-secretos-del-poder/>.

17 Ascanio Cavallo. Memorias Cardenal Raúl Silva Henríquez, Tomo II. Santiago, Ediciones Copygraph, 1991, p. 244.

18 Cfr. Luis Corvalán. El gobierno de Salvador Allende, Santiago. LOM Ediciones, 2003, p. 53, y Alfredo Sepúlveda. La Unidad Popular. Los mil días de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo. Santiago, Editorial Sudamericana, 2020, p. 84.

19 Pedro Milos (Ed.) et al. Chile 1972. Desde “El Arrayán” hasta el “Paro de Octubre”. Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013, p. 72.

20 El Mercurio. 4 de febrero de 1971.

21 Cfr. José I. Cuesta et al. “La Reforma Agraria chilena. Hechos estilizados a la luz de una nueva base de datos”. En: Estudios Públicos, 146, otoño 2017, pp. 7-48.

22 Clarín. 9 de febrero de 1972.

23 Clarín. 17 de noviembre de 1971, p. 3

24 Clarín. 26 de noviembre de 1971.

25 Puro Chile. 26 de noviembre de 1971.

26 El Siglo. 9 de febrero de 1971.

27 Punto Final. 16 de febrero de 1971.

28 Ascanio Cavallo, op. cit., p. 209.

29 Patricio Aylwin. “Discurso de Patricio Aylwin con motivo del reciente asesinato de Edmundo Pérez Zujovic”. Manuscrito mecanografiado, 13 de junio de 1971, pp. 8-9. Disponible en: <http://www.archivopatricioaylwin.cl/handle/123456789/6543>.

30 Luis Corvalán. De lo vivido y lo peleado. Santiago, LOM Ediciones, 1997, p. 171.

31 El Mercurio. 3 de diciembre de 1971, p. 1.

32 Clarín. 5 de diciembre de 1971.

33 Cfr. Tomás Moulian. Democracia y socialismo en Chile. Santiago, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso, 1983, pp. 25-27, y Alain Touraine. Vida y muerte del Chile popular. México, Siglo XXI Editores, 1974, pp. 176-177.

34 “Discurso del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, pronunciado por cadena de emisoras el día 10 de abril de 1972”. En: Política y

Espíritu, Santiago, año XXVII, N° 331, abril de 1972, p. 87.

35 Carlos Prats. Memorias. Testimonio de un soldado. Santiago, Pehuén, 1985, pp. 309-310.

36 Discurso del Presidente al pueblo reunido en la Plaza de la Constitución. Disponible en: <https://piensachile.com/2021/06/29/29-de-junio-de-1973-el-tancazo-discurso-del-presidente-al-pueblo-reunido-en-la-plaza-de-la-constitucion/>.

37 Ibídem.

38 Luis Corvalán. De lo vivido, op. cit., pp. 171-172.

39 Carta que los Cordones Industriales dirigieron al Compañero Allende. 5 de septiembre de 1973. Disponible en: <http://www.archivomuseodelamemoria.cl/uploads/2/7/277179/000001.pdf>.

40 Ascanio Cavallo, op. cit., p. 183.

41 Idem, p. 260.

42 Idem, p. 252.

43 Idem, p.270.

44 Idem, p. 271.

45 Ibídem.

46 Idem, pp. 271-272.

47 Puro Chile. 7 de julio de 1973, p. 11.

48 Las Noticias de Última Hora. 31 de julio de 1973, p. 16.

49 Patricia Politzer. Altamirano, 3ª ed. Santiago, Ediciones Melquíades, 1990, p. 193.

50 Idem, p. 194.

51 Ibídem.

52 Mónica González. La Conjura: Los mil y un días del golpe, 5ª ed. Santiago, Catalonia, 2017, p. 270.

53 Discurso de Carlos Altamirano en el Teatro Caupolicán, con motivo del acto de proclamación de candidatos del Partido Socialista chileno, 10 de enero 1973. Disponible en: <http://constitucionweb.blogspot.com/2010/11/discurso-en-el-teatro-caupolican-en-el.html>.

54 Carta que los Cordones Industriales... op. cit.

55 Luis Corvalán. De lo vivido, op. cit., p. 153.

56 Patricia Verdugo. Interferencia secreta. Santiago, Editorial Sudamericana, 1998, p. 22. Cfr. revista Análisis. 3 de diciembre de 1985.

57 Mónica González, op. cit., p. 309.

58 Patricia Verdugo, Interferencia, op. cit., p. 24.

59 Mónica González, op. cit., p. 310.

60 Patricia Verdugo, Interferencia, op. cit., p. 24.

61 El Mercurio. 13 de septiembre de 1973, p. 3.

62 Véase. Mónica González, op. cit., pp. 345-357.

63 Tomás Moulian. Chile Actual. Anatomía de un mito. Santiago, LOM Ediciones, 1997, p. 158.

64 Entrevista de Otto Boye a Hortensia Bussi de Allende. En: revista Análisis, citado por Mónica González, op. cit., p. 322.

65 Alan Angell. “La mirada de un historiador inglés”. El Mercurio, 24 de agosto de 2003.

66 Archivo Gabriel Valdés. Carta de Gabriel Valdés a Patricio Aylwin, 19 de octubre de 1973. Cfr. Raffaele Nocera. Acuerdos y desacuerdos. La DC italiana y el PDC chileno: 1962-1973. Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 192-193.

67 Archivo Patricio Aylwin. Carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, 8 de noviembre de 1973. Disponible en: <http://www.archivopatricioaylwin.cl/handle/123456789/6955>.

68 Archivo Gabriel Valdés. Carta de Renán Fuentealba Moena a Mariano Rumor, 21 de noviembre de 1973.

69 Cfr. Freddy Timmermann. “Golpes tangencial y frontal. Chile, 11 de septiembre 1973”. En: Cuadernos de Historia 24, Departamento de Ciencias Históricas Universidad de Chile, marzo de 2005, pp. 123-161. Disponible en: <https://cuadernosdehistoria.uchile.cl/index.php/CDH/article/view/47113/49100>.

70 Cfr. Mario Amorós. Después de la lluvia. Chile, la memoria herida. Santiago, Cuarto Propio, 2004, pp. 64-65.

71 Patricia Verdugo, Interferencia, op. cit. p. 87.

72 Carmen Gardeweg. “El general Leigh: Pensamiento y sentimiento 48 horas después de ser destituido en 1978”. La Segunda, 30 de septiembre de 1999, p. 8.

73 Alejandra Matus. Doña Lucía. La biografía no autorizada. Santiago, Ediciones B Chile, 2016, p. 149. Cfr. <https://memoriaviva.com/nuevaweb/ejecutados-politicos/ejecutados-politicos-t/toha-gonzalez-jose/>.

74 Archivo Patricio Aylwin. Carta de Gonzalo Prieto Gándara, ministro de Justicia, a Patricio Aylwin Azócar, Presidente del Partido Demócrata Cristiano. Santiago, 25 de septiembre de 1973. Disponible en: www.archivopatricioaylwin.cl/bitstream/handle/123456789/8002/APA1770.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

75 Revista Ercilla. 13 de octubre de 1981.

76 Revista Apsi. 8 de enero de 1988.

77 Jorge Medina. Último poema de Víctor Jara: “Estadio Chile”, “Canto qué mal me sales” o “Somos cinco mil”. Disponible en: <https://magalico.com/ultimo-poema-de-victor-jara-estadio-chile-canto-que-mal-me-sales-o-somos-cinco-mil/>.

78 “El general que acusó a Pinochet”. El País, 27 de enero de 2001. Disponible en: https://elpais.com/diario/2001/01/28/internacional/980636404_850215.html.

79 Francisco Torrealba y Guillermo Turner. “Presidente Sebastián Piñera y su juicio a 40 años del Golpe: ‘Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber’”. La Tercera, 30 de agosto de 2013. Disponible en: <https://www.latercera.com/noticia/presidente-sebastian-pinera-y-su-juicio-a-40-anos-del-golpe-hubo-muchos-que-fueron-complices-pasivos-que-sabian-y-no-hicieron-nada-o-no-quisieron-saber/>.

80 El País. 25 de julio de 1976. Disponible en: https://elpais.com/diario/1978/07/25/internacional/270165614_850215.html.

81 Pamela Jiles. “El capítulo más duro de la familia Bachelet”. The Clinic, N° 147, 3 de marzo de 2005, p. 15.

82 Cfr. C.R.O. Magnon (Luis Alejandro Salinas y Paula Zaldívar). Humanos y humanoides. Santiago, Editorial Aconcagua, 1988.

83 Patricia Verdugo. “Protesta: Entre la esperanza y la represión”. En: revista Hoy, 3 al 9 de septiembre de 1984, p. 7.

84 Claudio Fuentes S. “A 40 años del plebiscito de Pinochet”. 8 de agosto de 2020. Disponible en: <https://www.ciperchile.cl/2020/08/08/a-40-anos-del-plebiscito-de-pinochet/>.

85 Ibídem.

86 Inserción “Masones y Plebiscito: ‘El poder no se encuentra ni en la punta de una espada ni en el fondo de un saco de dinero’”. La Tercera, 9 de septiembre de 1980.

87 Cfr. Discurso Eduardo Frei Montalva con motivo del Plebiscito de 1980. Disponible en: <https://www.casamuseoeduardofrei.cl/wp-content/uploads/2015/01/Discurso-con-motivo-del-Plebiscito-de-1980.pdf>

88 Javier Rebolledo. La danza de los cuervos. El “Mocito” y el destino final de los detenidos desaparecidos. Santiago, Editorial Planeta Chilena, 2021, pp. 225-226.

89 Pilar Guevara. “Plebiscito Constitución del 80: El mayor fraude de la historia”. Cambio 21, semana 20 al 26 de junio de 2012, p. 18.

90 Manuel Sanhueza C. et al. “Presentación de denuncia al H. Colegio Escrutador Nacional acerca de infracciones e irregularidades del Plebiscito de 1980”. 1980, 123 pp.

91 El Mercurio. 17 de octubre de 1980, p. A 1. Cfr. Informe Comisión Interamericana de Derechos Humanos OEA, Informe países/Chile, capítulo VI, septiembre de 1985. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/chile85sp/cap6.htm#_ftn16.

92 La Segunda. 20 de octubre 1980 y Solidaridad, 2ª quincena octubre 1980, N° 103, año 5, p. 4.

93 Revista Apsi. 4 al 7 de noviembre de 1980, p. 6.

94 Revista Hoy. 3 al 9 diciembre de 1980.

95 Cfr. La Segunda. 20 de octubre de 1980 y El Mercurio. 20 de octubre de 1980. Cfr. Solidaridad, 2ª quincena octubre de 1980, N° 103, año 5, p. 4.

96 Ignacio González Camus. “Caso Zaldívar. Preguntas de un exiliado”. En: revista Hoy, 11 de diciembre de 1980.

97 Revista Hoy. 17 diciembre de 1980, p. 12.

98 Las Últimas Noticias. 30 de diciembre de 1980, p. 2. Cfr. El Mercurio. 30 de

diciembre de 1980.

99 Ibídem.

100 Revista Hoy. 6 de junio de 1978.

101 Documento disponible en: <http://fundacionaylwin.cl/9465-2/>.

102 Internacional Demócrata Cristiana. Una presidencia peregrina. La Internacional Demócrata Cristiana bajo la conducción de Andrés Zaldívar Larraín. Madrid, Galinost-Andante, 1986, p. 85.

103 Véase revista Qué Pasa. N° 50, 30 de marzo de 1972.

104 El Mercurio. 30 de octubre de 1981. Véase también La Tercera. 30 de octubre de 1981.

105 Ibídem.

106 Cfr. El Mercurio, La Segunda y La Tercera. 18 de junio de 1983.

107 Andrés Zaldívar L. Una solución para Chile: Por la razón y no por la fuerza. Una propuesta para la transición a la democracia. Madrid, CIPIE, 1986, 41 pp.

108 Las Últimas Noticias. 13 de enero de 1982.

109 Juan Pablo Cárdenas. “Los signos del miedo”. En: revista Análisis, 27 de mayo al 2 de junio de 1986, p. 3.

110 Patricio Aylwin A. El reencuentro de los demócratas. De la dictadura a la democracia. Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2018, pp. 200-201.

111 Jorge Lavandero I. El precio de sostener un sueño, 2ª ed. Santiago, LOM Ediciones, 1997, pp. 61-66.

112 El Mercurio. 23 de mayo de 1986.

113 El Sur. Concepción, 21 de octubre de 1986.

114 María Olivia Monckeberg y María Eugenia Camus. “Encuestas: Qué opinan los chilenos”. En: revista Análisis, N° 158, 20 al 26 de enero de 1987, p. 29.

115 P.C.C. y A.O. “Elecciones Libres: Dime cómo las entiendes y te diré quién eres”. En: revista Análisis, N° 158, 20 al 26 de enero de 1987, p. 29.

116 El País. 21 de octubre de 1987.

117 Véase Patricio Aylwin, op. cit., p. 329.

118 Claudio Fuentes S. “El día después del 5 de octubre”. 2 octubre 2018. Disponible en: <https://ciperchile.cl/2018/10/02/el-dia-despues-del-5-de-octubre/>.

119 La Segunda. 9 de diciembre de 1988.

120 Patricio Aylwin, op. cit., p. 422.

121 Idem, p. 392.

122 Archivo Fundación Patricio Aylwin. Discurso de S.E. el Presidente de la República, D. Patricio Aylwin Azócar, al dar a conocer a la ciudadanía el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Santiago, 4 de marzo de 1991, p. 7. Disponible en: <http://fundacionaylwin.cl/wp-content/uploads/2021/02/1.-Discurso-Ciudadania-al-Dar-a-Conocer-Informe-Verdad-y-Reconciliacion-04-mar-91.pdf>.

123 Claudia Urzúa. “La transición no es un fracaso: Es el resultado de una realidad”. El Mostrador, 11 de marzo de 2000.

124 Germán Gamonal. “El fantasma de los tres tercios”. En: revista Ercilla, N° 3.110, 3 de mayo de 1999, p. 17.

125 Mónica González. “Entretelones de una negociación con el general (r) Pinochet”. En: revista Cosas, N° 597, 13 de agosto de 1999, p. 111.

126 Tenemos que Hablar de Chile. Entrevista a Ximena Dávila y Humberto Maturana. Disponible en:

<https://twitter.com/tqhdch/status/1279769500066304001>.

127 Entrevista María Irene Soto. “Andrés Zaldívar, senador DC: No descarto ser candidato presidencial”. En: revista Hoy, 20 al 26 de marzo de 1995, p. 26.

128 “Gobierno cierra filas en torno a Andrés Zaldívar”. Emol. 26 de noviembre de 2002. Disponible en: www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=99358.

129 Claudio Salinas. “‘Terminó instalación del gobierno’, dijo Bachelet”. El Mercurio. 15 de julio de 2006.

130 El Mercurio. 19 de julio de 2006, p. C 5.

131 Patricio Navia. “El gabinete que no funcionó”. La Tercera. 28 de mayo de 2006.

132 Belisario Velasco. Esta Historia es mi Historia. Santiago, Catalonia, 2018, p. 364.

133 Raquel Correa. “Andrés Zaldívar y los temas que le quitan el sueño: ‘La Presidenta muchas veces toma decisiones que ni siquiera consulta o informa a sus ministros’”. El Mercurio. 22 de julio de 2007, p. D 8.

134 El Mercurio. 28 de noviembre de 2007.

135 Gerson Guzmán. “Zaldívar (DC) afirma que hay acuerdos políticos que ‘no pueden hacerse de cara a la opinión pública’”. Biobiochile.cl. 14 de julio de 2014. Disponible en: <https://www.biobiochile.cl/noticias/2014/07/14/zaldivar-dc-afirma-que-hay-acuerdos-politicos-que-no-pueden-hacerse-de-cara-a-la-opinion-publica.shtml>.

136 Nicolás Guzmán y Sebastián Rivas. “La carta con que Mariana Aylwin y los miembros de ‘Progresismo con Progreso’ oficializaron su renuncia a la DC”. La Tercera. 5 de enero de 2018. Disponible en: <https://www.latercera.com/noticia/la-carta-mariana-aylwin-los-miembros-progresismo-progreso-oficializaron-renuncia-la-dc/>.

137 La Tercera. 24 de noviembre de 2017, p. 14.

138 Hernán López. “Andrés Zaldívar: ‘El Frente Amplio quiere echar a los viejos para la casa. Esa idea ha tenido éxito, pero es un error’”. www.pulso.cl, 12 de enero de 2018, p. 4. Disponible en: <https://www.latercera.com/pulso/andres-zaldivar-frente-amplio-quiere-echar-los-viejos-la-casa-esa-idea-ha-tenido-exito-error/>.

139 María José O’Shea. “Carlos Peña: ‘No creo haberme equivocado absolutamente en nada’”. La Tercera. 4 de enero de 2020. Disponible en: <https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/carlos-pena-no-creo-haberme-equivocado-absolutamente-nada/961001/>.

140 Axel Kaiser. “Chile: De la depresión al suicidio”. 26 de octubre de 2020.

Disponible en: <https://www.elliberal.com/chile-de-la-depresion-al-suicidio/>.